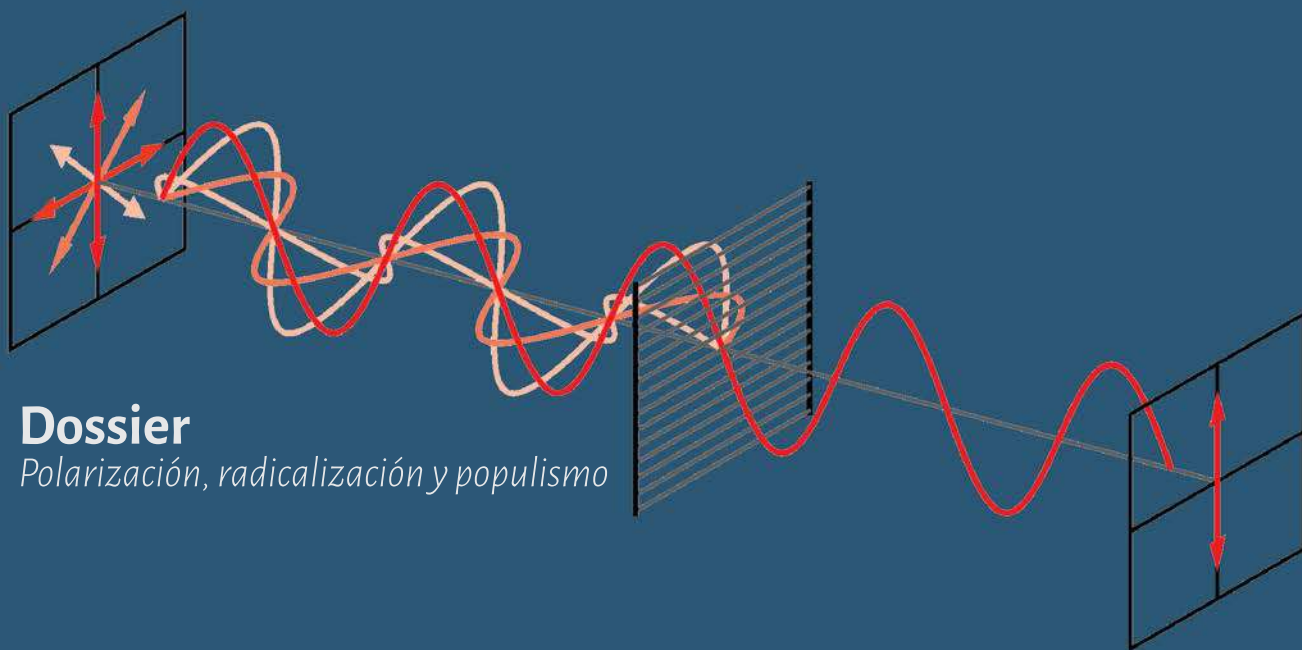


RELASP

Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y Político



Dossier

Polarización, radicalización y populismo

ISSN: 2683-7420

Año 1 | Número 1

[Julio - Noviembre] 2020

Revista Euro latinoamericana de Análisis Social y Político (RELASP)

Universidad Nacional de San Juan

ISSN: 2683-7420

Formato: Digital [PDF] [HTML]

Periodicidad: Semestral [junio-noviembre] [diciembre-mayo]

Sitio: <http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/relasp/>

e-mail: relasp@unsj-cuim.edu.ar

La **Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y Político (RELASP)** fue fundada en Roma el 28 de enero de 2019 como resultado de la cooperación entre investigadores e instituciones de América Latina y Europa. La **RELASP** tiene su sede de redacción en Argentina e Italia, y se publica en Argentina gracias a la contribución del *Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan*. Precisamente por su nacimiento en diversos continentes, la **RELASP** implica una apertura a la contribución internacional de las ciencias sociales. **RELASP** es una revista semestral y todas las contribuciones son sometidas a revisión externa por pares, con sistema de doble ciego.

Equipo editorial

Director

Juan Russo (Universidad de Guanajuato)

Comité de Redacción

Elizabeth Amador Marquez (Universidad de Zacatecas)

Gianfranco Baldini (Università di Bologna)

Francesca Casafina (Università Roma Tre)

Rosalba Chiarini (Università Roma Tre)

Valentina Delich (Flacso, Argentina)

Leonardo Dražić (Universidad Nacional de San Juan)

Eduardo Espinosa (Universidad Autónoma Metropolitana)

Alejandro Klein (Universidad de Guanajuato)

Gerardo Larreta (Universidad Nacional de San Juan)

Justino Lozano Alvarado (Universidad Autónoma de Guerrero)

Ivan Llamazares Valduvico (Universidad de Salamanca)

Vania Marin (Universidad Central de Chile)

Katya Rodriguez Gomez (Universidad de Guanajuato)

Carla da Silva Santana Castro (Universidade de Sao Paulo)

Rodolfo Sarsfield (Universidad de Querétaro)

Monica Uribe (Universidad Nacional de Colombia)

Diseño y corrección

Damián López (Universidad Nacional de San Juan)

Comité Científico

Rita Bichi	Università Cattolica di Milano
Ilan Bizberg	Colegio de México
Andrea Cadelo	Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Fernando Calderón	Universidad Nacional de San Martín
Ryan E. Carlin	Georgia State University
Manuel Castells	Open University of Catalonia, Barcelona
Marcelo Cavarozzi	Universidad Nacional de San Martín
Germán	
Fernández-Vavrik	Université Lumière Lyon 2
Alberto Filippi	Universidad Nacional de Lanús - Università di Camerino
Ana Díaz	CIDE (México)
Johannes Doll	Universidad Federal de Rio Grande do Sul
Piero Dominici	Università di Perugia
Raúl García	Universidad Nacional de San Juan
Manuel Antonio Garretón	Universidad de Chile
Julio Labastida	Universidad Nacional Autónoma de México
George Leeson	Oxford University
Carla Masi Doria	Università di Napoli Federico II
Liborio Mattina	Università di Trieste
Leonardo Morlino	Luiss “Guido Carli” (Roma)
Sabrina Moretti	Università di Urbino
Maria Ollier	Universidad de San Martín
Angelo Panebianco	Università di Bologna
Enrique Peruzzotti	Universidad Torcuato di Tella
Robert D. Putnam	Harvard University
Hugo Quiroga	Universidad Nacional del Litoral
Juliette Rennes	EHESS, CEMS, Paris
Javier Saldaña Almazán	Universidad Autónoma de Guerrero
Maria Rosaria Stabili	Università Roma Tre
Maria Herminia	
Tavares de Almeida	CEBRAP - Universidade de Sao Paulo
César Tcach	Universidad Nacional de Córdoba
Martín Unzué	Universidad de Buenos Aires

Dossier

Editores

Leonardo Morlino LUIIS Guido Carli, Roma (Italia).

Marcelo Cavarozzi Universidad Nacional de San Martín (Argentina).

Juan Russo Universidad de Guanajuato (México).

Evaluadores

Ilan Bizberg Colegio de México

Maria Carabe Universidad Autónoma de Guerrero

Rodolfo Sarsfield Universidad Autónoma de Querétaro

Alejandro Klein Universidad Autónoma de Guanajuato

Federico

Sandoval Hernandez Universidad Autónoma de Guerrero

Eduardo Espinosa Universidad Autónoma Metropolitana

Olivia Leyva Muñoz Universidad Autónoma de Guerrero

Jose Luis Estrada Universidad Benemérita de Puebla

José Luis Cisneros Universidad Autónoma Metropolitana

Rubén Ibarra Escobedo Universidad Autónoma de Zacatecas

José Luis

Hernández Suárez Universidad Autónoma de Zacatecas

Rubén de Jesús

Ibarra Reyes Universidad Autónoma de Zacatecas

Índice

Juan Russo	Editorial	9
-------------------	-----------	---

Dossier

Polarización, radicalización y populismo

Leonardo Morlino Marcelo Cavarozzi Juan Russo	Introducción	13
--	--------------	----

Leonardo Morlino Juan Russo	¿Una nueva ola autoritaria? Radicalización y neopopulismos en Europa y América Latina	17
--	--	----

Marcelo Cavarozzi	América Latina a fines de la segunda década del siglo XXI: ¿tiene salida la crisis?	35
--------------------------	--	----

Barbara Pisciotta	<i>Exit, Voice and Loyalty:</i> Europeism and Euroscepticism in Eastern and Central European Party Systems	55
--------------------------	---	----

Carlos de la Torre	¿Qué hacen los populistas? ¿Y cómo estudiarlo?	67
---------------------------	---	----

Enrique Peruzzotti	La democracia representativa frente a la estrategia populista de polarización	79
---------------------------	--	----

Fabio Fossati	Populism as the post-Marxist adaptation of leftist Manicheanism	87
----------------------	--	----

Danilo Martuccelli	Las sociedades y la polarización: de la era de las ideologías a la era de las convicciones	105
---------------------------	---	-----

Ilan Bizberg	Las raíces subjetivas y sociales de la pérdida de legitimidad de los regímenes democráticos y del surgimiento de los movimientos sociales actuales	121
---------------------	--	-----

Maria Hermínia Tavares de Almeida Fernando Henrique Guarnieri	The unlikely president: the populist captain and his voters	139
--	--	-----

Hugo Quiroga	Decisionismo democrático y emergencia permanente Consideraciones políticas sobre la Argentina actual	161
César Tcach	Antes y después del Cordobazo: en torno a la radicalización policéntrica de las prácticas políticas	177
Alicia Lissidini	Uruguay: sin déficit democrático y con giro electoral La persistente identidad partidaria	187
Stéphanie Alenda	Las ambivalencias de la derecha en la gestión de la Primavera Chilena de 2019-2020	199
Francisco Gutiérrez Sanín	Uribe Vélez ¿Demócrata, radical, extremista o todas las anteriores?	207
Eduardo Paz Gonzales	De golpes y fraudes Análisis del campo de fuerzas políticas en la Bolivia post Evo Morales	227
Rafael Archondo	¿Fue golpe? Pulsando el debate sobre la supuesta fascistización de Bolivia	245
Yuri F. Tórrez Emma Lazcano	<i>Evo, no estás solo</i> El populismo del evismo en Bolivia	261

Artículos Libres

Rafael Plancarte Escobar	Autodefensas y teoría de juegos: explicando el levantamiento en Tierra Caliente	279
---------------------------------	--	------------

Reseñas

Luis Arizmendi	<i>Democracia y opinión pública. El desafío político de la modernidad,</i> de Rubén de Jesús Ibarra Reyes y Elizabeth Amador Márquez	303
Erika Carcaño	<i>De la protesta a la propuesta. 50 años imaginando y construyendo el futuro</i> de David Barkin	307
Eduardo Luis Espinosa	<i>Rituales y ritmos. Una genealogía del significado musical en el Pacífico negro colombiano</i> de Michel Birenbaum Quintero	311

Juan Russo

Editorial

El proyecto de la **Revista Euro Latinoamericana de Ciencias Sociales** se originó en Roma en el año 2018 a partir de una extensa colaboración y aportes de colegas de Europa y América Latina. La idea que justifica a **RELASP**, es constituir y reforzar un puente entre intelectuales de ambos lados del Atlántico, a fin de estudiar, reflexionar y evaluar procesos políticos y sociales, comunes y diferenciados, entre ambas regiones. La distancia y también la proximidad, entre estudiosos y backgrounds de las comunidades de ambos continentes resultan tierras fértiles para los debates y para la producción científica, y a eso apostamos.

El puente que construimos es de doble circulación, porque las ciencias sociales de América Latina han crecido inmensamente en el siglo XX. Son muchos los científicos latinoamericanos de las ciencias sociales, hoy referentes importantes en el mundo académico global. Son muchos los nombres latinoamericanos citados en diversas disciplinas que han liderado y lideran el planteamiento de problemas y producción de categorías y estudios que hoy son parte del patrimonio universal de las ciencias sociales. El aporte sostenido de instituciones originales como la Cepal, la Flacso, el Clacso y vínculos interuniversitarios, así como los puentes informales contruidos durante décadas entre redes latino-europeas constituyen un tráfico intenso que ha permitido explorar mejor la realidad, descentrando planteamientos y conceptos. El camino aún está (y es bueno que siga estando) en construcción.

RELASP toma nota del pluralismo teórico y metodológico que domina hoy el escenario de las ciencias sociales. No existe una vía teórica o un paradigma que sea hegemónico o anule opciones alternativas, y nadie pretende ya liderar una nueva escuela o sacralizar un itinerario de pensamiento. A ello debe agregarse que las distintas matrices teóricas no son susceptibles de verificación empírica y por ello cada enfoque encuentra confirmaciones empíricas, que satisfacen sólo de manera parcial y discutible al resto de los

estudiosos. En tal sentido, los debates y las *mesas separadas* detectadas por Gabriel Almond para la ciencia política, permanecerán separadas, como ocurre desde los tiempos gnoseológicos originarios de las ciencias sociales. Por supuesto, ello no supone postular la inconmensurabilidad entre los mundos teóricos: el pluralismo es compatible con la racionalidad. Todo puede discutirse y por fortuna el conocimiento no se limita sólo a la relación entre intereses y opiniones, es decir a las ideologías. Lo valorativo es, por supuesto, central en el quehacer científico, pero el conocimiento y la pretensión de neutralidad e intersubjetividad son también valores que pueden priorizarse.

En términos generales, cada vez hay menos investigadores que adhieren *in toto* a una teoría general o a un paradigma. Por el contrario, predomina la actitud de incorporar conceptos considerados útiles para la solución del problema planteado, más allá de los contextos conceptuales y de sus fines originarios. A diferencia de décadas anteriores, nadie se esmera demasiado en *demostrar* a nadie, sobre las bondades de su enfoque, sea conceptual o metodológico. Y, también, a diferencia de otras épocas, hay una proliferación de trabajos que no consideran excluyente incorporar conceptos provenientes de tradiciones teóricas diferentes. No se fomenta el relativismo lógico ni el fútil (en el contexto de la investigación) eclecticismo. Por el contrario, lo importante es el peso absoluto de la calidad de los problemas y la vocación por resolverlos; de esforzarse por la claridad y por la discusión abierta de los resultados. Las ciencias sociales han logrado plantear problemas, definir, clasificar, describir y comparar procesos y tendencias, y esto es un logro sostenido que nos ha permitido crecer en nuestro conocimiento social y político y también saber más sobre nuestra acrecentada ignorancia. No somos gurús que descifran el futuro, más bien apostamos por ciencias sociales modestas en su alcance pero fuertes en la honestidad de su ejercicio y en la conciencia de la naturaleza de los resultados. Tampoco se piensa que el estado actual de nuestras disciplinas corresponde con una etapa de inmadurez en el desarrollo, a superar en un futuro. Por el contrario, se trata más bien de lo que podemos y valoramos de la ciencia social como medio para conocer nuestro mundo.

Es mucho lo que la disciplina creció y acumuló desde el siglo XX (inspirada muchas veces por problemas planteados en siglos anteriores) y no es poco lo que está construyendo. A pesar de los grandes cambios ocurridos, los desarrollos actuales no dan lugar a imaginar una ciencia social demasiado diferente, ni en su naturaleza ni en sus objetivos, de la imaginada y lograda por los clásicos. Es bueno recordarlo en el año centenario de la (mal llamada) muerte de Max Weber.

Por último, un enorme agradecimiento al apoyo de los prestigiosos colegas a esta iniciativa y que honran el Comité científico, así como a los colegas que forman parte del Comité de redacción y que han contribuido a la estructura y contenidos de la revista, en particular a Gerardo Larreta y a Elizabeth Amador, por el apoyo continuo al desarrollo de la revista. También agradezco a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina (mi alma mater) y en especial a Leonardo Drazic, Director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, por el apoyo y la esperanza compartida en construir con **RELASP** un espacio de interrogantes y análisis sobre el cambiante y renuente mundo político y social.

Dossier

Polarización, radicalización y populismo

Introducción

Leonardo Morlino

morlino@luiss.it

Università LUISS, Guido Carli

Italia

Marcelo Cavarozzi

cavarozzi@gmail.com

Universidad Nacional

de San Martín

Argentina

Juan Russo

juan_russo@hotmail.com

Sistema Nacional

de Investigadores, nivel III

México

En este conjunto de trabajos, con el que se inaugura la *Revista Euro Latinoamericana de estudios sociales y políticos*, se cuenta con el aporte de estudiosos de distintos países de América Latina y Europa, a fin de precisar, desde enfoques de la ciencia política, la sociología y la historia, algunos de los problemas y alternativas de desarrollo que afrontan las democracias a ambos lados del atlántico. Un dossier de investigaciones como este puede presentarse de modo individual, comentando cada trabajo, o según las familias de problemas teóricos y de subtemáticas que se abordan. Partimos de esta segunda opción a fin de mostrar los puntos de confluencia, así como para reforzar el sentido que cada trabajo aporta a la discusión colectiva sobre las democracias y la política actual.

El problema de la **representación política** (a escala nacional, local y regional), con sus déficit y sus cambios es una constante en los escritos, sea en los que prestan atención a *dimensiones institucionales* (Morlino-Russo, Pisciotto) como en los que apelan a *procesos de cambio social profundos que implican nuevos paradigmas* (Martuccelli, Bizberg) o como en los *estudios de área* (Cavarozzi, Fossati). Generalmente el populismo y las respuestas políticas radicales aparecen como una respuesta a problemas de representación (De la Torre, Peruzzotti). Los déficits de representación, expresados plenamente por Hanna F. Pitkin cuando afirma que *la representación ha suplantado a la democracia en vez de servirla* (2017, p. XLI) daría lugar al rechazo de amplios segmentos de ciudadanos a gobiernos democráticos “insuficientes” en la capacidad de respuesta a sus demandas políticas, así como al rechazo a gobiernos que se autocratizan, violentando normas y acuerdos constitucionales. Los gobiernos populistas pueden así llegar por problemas de representación, pero también caer por la misma causa. En tal sentido, es necesario atender a los cambios de la propia sociedad y al sentido y particularidad de los nuevos movimientos políticos (Martuccelli, Bizberg).

Otra línea de problemas que atraviesan estos trabajos está referido al **deterioro democrático**. Deterioro que puede traducirse en un declive de las calidades democráticas, o que puede desembocar directamente en la conversión de la democracia en régimen autoritario. Este proceso de deterioro es frecuentemente promovido explícitamente por gobiernos que rechazan limitaciones a su poder. Naturalmente, la extralimitación suele encontrar justificativo en situaciones de emergencias económicas o políticas de diversa índole.

Metodológicamente, los trabajos presentados adoptan, aún en los estudios de caso, **una impronta claramente comparativa**. Como lo es el estudio del uribismo en Colombia, centrado en la clasificación teórica del fenómeno político. En el mismo sentido, el trabajo sobre Brasil indaga hipótesis sobre los votantes de Bolsonaro, que trascienden el interés por el caso nacional, para dar respuesta a los mecanismos que hacen que “electores normales” y moderados en ciertas circunstancias puedan votar a candidatos excéntricos y radicales. Estudios de caso con impronta comparativa son también los estudios de Argentina, Chile, Uruguay, así como los artículos sobre Bolivia.

El dossier inicia con **tres estudios comparados**. El artículo de Leonardo Morlino y Juan Russo, *¿Una nueva ola autoritaria? Radicalización y neopopulismos en Europa y América Latina*, parte de la presente expansión de regímenes autoritarios y analiza en diversos contextos (Polonia, Hungría, Venezuela y Turquía) los mecanismos que conllevan al deterioro, hibridación o conversión autoritaria. En particular crecientes procesos de polarización, personalización y radicalización política afectan las calidades democráticas y en caso de estabilizarse, esos procesos producen desenlaces negativos para el orden democrático. El análisis de área de Marcelo Cavarozzi: *América Latina a fines de la segunda década del siglo XXI: ¿tiene salida la crisis?* repasa los últimos veinte años de la política y economía de países de Sudamérica y México, mostrando las dificultades económicas, políticas y sociales por las que atraviesan las democracias de la región, así como los desafíos que han afrontado. El trabajo permite situar los problemas actuales de la democracia y del Estado con pronósticos difíciles para la gran mayoría (Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador), así como las incógnitas abiertas para otros (Chile y México). El tercer estudio comparado es realizado por Barbara Pisciotta (*“Exit, Voice and Loyalty”: Europeism and Euroscepticism in Eastern and Central European Party Systems*), quien partiendo de las célebres categorías de Albert Hirschman y de las nociones de *centro periferia* propuestas por Stein Rokkan, analiza la evolución del sistema de partidos en Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania. En particular se muestran las relaciones e impacto de las dinámicas internas/externas de estos estados con la región europea. Así, los factores asociados con el crecimiento/disminución de las posiciones europeístas y euroescépticas se vincula con la ubicación de estado-miembro con carácter de centro o periferia de la región, realimentando posiciones políticas y dinámicas al interior de los sistemas de partido de cada Estado. Al mismo tiempo, la evolución del euroescepticismo informa sobre el estado (fuerza/debilidad) de la cohesión e integración de la región.

Tres trabajos atienden centralmente al fenómeno del **populismo**, y coinciden en una **evaluación negativa** respecto de su impacto sobre la democracia. El artículo de Carlos de la Torre (*¿Qué hacen los populistas, y cómo estudiarlo?*) propone prestar atención no a características esencialistas de una categoría de difícil consenso en la comunidad académica como es la de populismo, sino a la actuación de los líderes y gobiernos populistas. Después de realizar una evaluación crítica de las principales posiciones teóricas sobre el tema, muestra al populismo como reacción de porciones del electorado a tendencias de indiferenciación de la oferta política, dando lugar a propuestas alternativas que hacen la diferencia. También se analizan las condiciones previas para que los populistas pue-

dan afectar las democracias, en particular contextos de crisis de representación y con mayorías abrumadoras. Por último, se sugiere prestar seria atención a los diagnósticos populistas, pero no a las soluciones propuestas. En la misma dirección, Enrique Peruzzotti (*La democracia representativa frente a la estrategia populista de polarización*) propone al populismo como resultado del vacío dejado por ordenes totalitarios y autoritarios del siglo pasado, y como la principal amenaza a las democracias representativas actuales. Una vez en el gobierno, los populistas, tienen como eje de su acción escapar a controles que puedan limitar su poder. La representación es reemplazada por estrategias de fuerte identificación con la comunidad política, dividiéndola en campos antagónicos, entre los enemigos y aquellos sectores elegidos como dignos de representación. Las dinámicas generadas son de disputas de legitimidad entre opciones plesbicitarias a la representación y los actores excluidos por los populistas y nucleados en la oposición política. Reforzando las hipótesis anteriores, el trabajo de Fabio Fossati (*Populism as the post-Marxist adaptation of leftist Manicheanism*), analiza casos de América Latina, destacando efectos negativos del populismo sobre la democracia y las economías de la región. En su enfoque diferencia tipos populismo radical, con consecuencias de desestabilización económica y política, de tipos de populismo moderado, con un mayor control del gasto público y compatible con la gestión de la democracia política.

Hasta aquí, los estudios incluidos en el dossier estuvieron centrados en la evaluación de procesos políticos en relación con el orden democrático. Los trabajos de Danilo Martuccelli, y de Ilan Bizberg, apuntan a indagar las bases societales del cambio actual. Desde la sociología y la política se analizan transformaciones profundas en el sentido de la acción colectiva. El artículo de Martuccelli (*Las sociedades y la polarización: de la era de las ideologías a la era de las convicciones*) atiende a mostrar la naturaleza particular de la polarización actual, que no consistiría ya en polarización ideológica, sino en polarizaciones que se basan en agregados de convicciones personales. Esto otorga una alta intensidad afectiva a la política, dando lugar a confrontaciones que resisten a la negociación y al consenso. Las cuestiones sociales se vivirían como asuntos personales que disminuyen la simpatía entre personas con posiciones diferentes. Por otra parte, Ilan Bizberg en *Las raíces subjetivas y sociales de la pérdida de legitimidad de los regímenes democráticos y del surgimiento de los movimientos sociales actuales*, analiza el carácter de los nuevos movimientos sociales, surgidos en torno a cuestiones políticas como el desempleo, la igualdad de género, y el calentamiento global. Se indaga sobre el carácter original y el modo de funcionamiento a través de nuevas tecnologías. Son movimientos de efecto local, con soluciones, pero con escaso poder, por el poco impacto en las políticas públicas nacionales.

Desde distintos ángulos el conjunto de trabajos mencionados ha puesto de manifiesto “el desenganche” entre demandas colectivas y soluciones institucionales, al mismo tiempo que líderes, movimientos sociales y nuevos partidos contribuyen a una política de alta intensidad. Así, hay cambios profundos en las sociedades actuales que pueden confluir con formas de representación populista y estrategias radicales y que frecuentemente conducen a resultados de deterioros y regresiones políticas, contrarias a las propuestas originarias.

En los estudios de caso, se parte de los estudios sobre el Cono Sur de América Latina, iniciando con el artículo de Maria Hermínia Tavares de Almeida y Fernando Henrique Guarnieri sobre Brasil (*The unlikely president: the populist captain and his voters*) que analiza las bases sociales del impactante triunfo de Bolsonaro. Siguiendo una serie de sondeos (post y preelectorales) pueden precisarse las características de los votantes del presidente actual. Ello permite evidenciar el carácter prodemocrático, aunque predominantemente conservador de su base electoral, así como reflexionar teóricamente sobre los

factores que contribuyen a este peculiar acercamiento y compatibilidad entre un candidato radical y electores moderados.

El caso argentino es abordado por Hugo Quiroga (*El decisionismo democrático y la emergencia permanente. Consideraciones políticas sobre la Argentina actual*) abordando un rasgo estructural de la situación política de “emergencia permanente” que los presidentes post 1989 adoptan como base de un estilo de gobierno decisionista y que afecta severamente la división de poderes y el sistema de representación democrática. La continuidad de estos rasgos ha debilitado el estado de derecho y la rendición de cuentas. También sobre Argentina, Cesar Tcatch (*Antes y después del Cordobazo: en torno a la radicalización policéntrica de las prácticas políticas*), a partir del análisis de un momento de radicalización política como el Cordobazo, explica la dinámica del conflicto en Argentina, con juegos de suma cero, que convierten al pluralismo en faccionalismo dando lugar a una crónica inestabilidad política. En contraste y en clave comparada, Alicia Lissidini (*Uruguay: sin déficit democrático y con giro electoral. La persistente identidad partidaria*) analiza el caso uruguayo mostrando su excepcionalidad política en la región, a partir de la centralidad de las organizaciones partidarias, la participación directa de los ciudadanos en consultas populares, y en una cultura consensualista que favorece la negociación y la autolimitación en los conflictos. El análisis del Cono sur concluye con un artículo sobre Chile de Stéphanie Alenda (*Las ambivalencias de la derecha en la gestión de la Primavera Chilena de 2019-2020*) que analiza la actual coyuntura, a partir de un creciente proceso de polarización y radicalización política. Alenda pone en evidencia las novedades del proceso, así como el resurgimiento de actores y perspectivas ideológicas que se expresan en dos derechas (moderada y dura) con sensibilidades diferentes que refuerzan el conflicto y limitan las posibilidades de consensos futuros.

El trabajo de Francisco Gutiérrez Sanín (*Uribe Vélez: ¿demócrata, radical, extremista o todas las anteriores?*) analiza el fenómeno uribista, a partir de la confluencia paradójica de características políticas, en la que se conjugan aspectos de la tradición política colombiana de competición política, pesos y contrapesos y violencia incorporada en el juego político. La amplia base electoral habría permitido a Uribe el ejercicio de políticas radicales. En los últimos tiempos, la dinámica del apoyo electoral colombiano habría seguido un curso de estrechamiento y descentramiento de apoyos al uribismo, e implicaría cambios cualitativos y una nueva fase en su representación política. Por último, se analiza al uribismo en el marco de actores de derecha, mostrando la confluencia de posiciones democráticas, pero crecientemente antiliberales y radicales.

Por último, se presentan tres estudios sobre el caso boliviano, poniendo énfasis en el desempeño del gobierno de Evo Morales en relación con la democratización del país andino. Así, el trabajo de Eduardo Paz Gonzáles (*De golpes y fraudes: análisis del campo de fuerzas político en la Bolivia post Evo Morales*) analiza la dinámica de acumulación de poder del gobierno de Morales, así como su declive. Muestra que el último ciclo es resultado de decisiones que condujeron a la crisis y caída del presidente. El artículo de Rafael Archondo (*¿Fue Golpe?: pulsando el debate sobre la supuesta fascistización de Bolivia*) está centrado en el análisis de las condiciones que llevaron a la renuncia de Morales, profundizando en los últimos ochenta años de historia boliviana y comparando los casos de golpes de Estado con aquellos en los que movilizaciones populares desplazaron a los gobiernos. Por último, Yuri F. Tórrez y Emma Lazcano (*Evo no estás solo” El populismo del evismo en Bolivia*) analizan dimensiones del discurso evista, así como su constitución como sujeto político populista.

Leonardo Morlino
morlino@luiss.it
Università LUISS, Guido Carli
Italia

Juan Russo
juan_russo@hotmail.com
Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III
México

Recibido: 10/10/2019
Aprobado: 02/01/2020

¿Una nueva ola autoritaria?

Radicalización y neopopulismos en Europa y América Latina

Resumen

En este trabajo se presentan los mecanismos que llevan desde una democracia hacia el deterioro democrático, crisis, conversión en régimen híbrido, y cambio hacia el autoritarismo. Para ello, se analizan procesos vinculados con el contexto de polarización, personalización y radicalización política, que afectan las calidades de la democracia, dando lugar a regresiones autoritarias. Se analizan los casos de Polonia, Hungría, Venezuela y Turquía.

Palabras clave

Autoritarismo, radicalización, populismos.

Abstract

This paper presents the mechanisms that lead from a democracy to democratic deterioration, crisis, conversion to a hybrid regime, and change to authoritarianism. For this purpose, processes related to the context of polarization, personalization and political radicalization are analyzed, which affect the qualities of democracy, leading to authoritarian regressions. The cases of Poland, Hungary, Venezuela and Turkey are analyzed.

Keywords

Authoritarianism, radicalization, populisms.

Introducción

Así como las últimas décadas del siglo XX albergaron la tercera ola de la democracia moderna, el nuevo siglo ha traído una expansión de regímenes *iliberales* y autoritarios en el mundo. ¿Se trata de una nueva ola autoritaria? Por primera vez desde 2001, el número de países autoritarios sobrepasa al de los regímenes democráticos (V-Dem. 2020). Pero, como se verá, no se trata del quiebre democrático resultante del golpe de Estado o de partidos que proclaman abiertamente una alternativa a la democracia. Los cambios incluyen el mantenimiento de ciertas instituciones de la democracia liberal, pero vaciadas gradualmente de su sentido y función originaria.

La hipótesis que se sostiene es que cuando hay polarización/radicalización y líderes personalistas (neopopulistas) que se estabilizan en el gobierno, hay costos para la democracia. Estos costos implicarán el deterioro de las calidades democráticas, cambios hacia regímenes híbridos, crisis democrática o autoritarismo.

En este trabajo partiremos de los cambios de contexto, a fin de mostrar las características específicas de la nueva época. En segundo lugar, definiremos operativamente los procesos de polarización/radicalización y populismo y su impacto sobre las calidades democráticas. Tres componentes que suelen tratarse de modo indiferenciado y que en cambio requieren ser distinguidos. Cuando estos tres ingredientes se agregan y actúan en conjunto, habrá costos para las calidades de la democracia o incluso para la democracia misma, tal como se indica en la hipótesis precedente. En tercer lugar, se mostrará como el afectar algunas de las calidades democráticas implicará el deterioro general de la calidad democrática, en virtud del “mecanismo de convergencia mutua” que postula una fuerte relación entre las dimensiones de calidad democrática, con la excepción de la respondencia. Por último se analizarán cuatro casos, el primero, Polonia, corresponde a un proceso de deterioro democrático, el segundo, Hungría, a un proceso de crisis democrática, y los dos siguientes, Venezuela y Turquía, a procesos de cambio hacia el autoritarismo.

Cambios de contexto

Los procesos de democratización iniciados en 1974 ocurrieron en un contexto caracterizado por un fuerte avance de la globalización y el liberalismo económico, la creación y fortalecimiento de regiones comerciales, el debilitamiento de la soberanía de los Estados nación y, por ende, una disminución de la autonomía de las políticas públicas nacionales, así como un debilitamiento de los actores (los partidos, congresos, gobiernos) de cada país.

La fortaleza de la ideología liberal impulsó a los gobiernos de Bill Clinton en Estados Unidos y Tony Blair en el Reino Unido a replantear sus posiciones políticas, asumiendo una tercera vía, alternativa al socialismo y al neoliberalismo (Giddens 2001) que actualizara supuestos de izquierda tradicionales, y que al mismo tiempo mantuviera la distancia con el conservadurismo representado por los gobiernos de Reagan y Thatcher.

Por otra parte, las tecnologías de los medios de comunicación tuvieron como actor central a la televisión, que presentó los primeros debates presidenciales y mostró el efecto de la imagen por sobre el discurso. El caso paradigmático fue el debate Kennedy-Nixon, en 1960, cuando según las encuestas Nixon venció para la radio audiencia, pero Kennedy venció según los televidentes. El resultado final dio razón a la televisión.

En tercer lugar, la concepción predominante en los gobiernos de las nuevas democracias era la del constitucionalismo clásico, poniendo el énfasis en la separación de poderes y el control sobre los actos de gobierno. Ejemplos claros de esto son los gobiernos de Raúl Alfonsín en Argentina, o de Fernando Henrique Cardoso en Brasil. El proyecto

prioritario de los gobiernos era en esos años consolidar las nuevas democracias con criterios claramente republicanos de control del poder público.

En términos sociales, desde los años 50 a los 90 hubo una expansión y consolidación de las clases medias, lo que fue asociado con el surgimiento de un “un actor de primer plano del cambio y considerado la base social más típica de los órdenes de regulación de los compromisos sociales” de mediados de siglo XX (Bagnasco 2016: 13-14) o “como bisagra de la cohesión social, ahora desde la perspectiva de un nuevo contrato social que comprende, por una parte, una reforma de la estructura tributaria y, por otra, el rediseño de la protección social” (Franco, Hopenhayn y León 2010: 14).

Por último, los sistemas de partidos de la segunda posguerra hasta los años 90 se caracterizaron por una dinámica progresivamente centripeta y una competencia entre familias de partidos estables (Pappalardo y Mattina, 1999).

En América latina, los procesos de democratización ocurrieron en contextos socioeconómicos difíciles, con dificultades de crecimiento económico e inflación. Así, las décadas del 80 y del 90 suelen caracterizarse como *décadas perdidas* por el nivel bajo crecimiento económico y por el predominio de políticas neoliberales. Sin embargo, en los 80 se instauraron las democracias de un modo inédito en la región y los 90 fueron épocas de consolidación democrática, aunque al mismo tiempo aparecieran formas de *democracia delegativa* (O'Donnell 1991) como las de Carlos Menem (1989-1999) en Argentina y Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú. Las democracias en la región dejaron de ser derrocadas por golpes militares, pero mostraron déficits de calidad en términos de controles (*Accountability*) así como un creciente malestar por las desigualdades e indicadores negativos de cohesión social. La distancia entre ciudadanía y clase política creció en los años 90-2000 y terminó con los gobiernos de Fernando Collor de Mello en 1992 en Brasil; Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1993; Jorge Serrano en 1993 en Guatemala; Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005 en Ecuador; Raúl Cubas en Paraguay en 1999; Fernando de la Rúa en 2001 en Argentina; Alberto Fujimori en Perú en el 2000; Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en el 2003; y José Manuel Zelaya en Honduras en el 2009. ¿Hubo una crisis de representación? Seguramente, sobre todo cuando se vinculan estas interrupciones, que resultan de movilizaciones populares de envergadura, con las crecientes tasas de desconfianza de los ciudadanos latinoamericanos respecto de las instituciones del Estado (Justicia, Congreso, partidos políticos). Los procesos de cambio político en la tercera ola de democratización pasaron en general de modo positivo desde la instauración democrática a la consolidación, y si bien las democracias avanzaron en la conquista de derechos políticos, con el tiempo fueron dividiéndose gradualmente en casos y momentos en los que hubo *profundización* de la democracia en términos sociales (Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador) y otros momentos y casos en que la democracia comenzó momentos de deterioro de la democracia política (Venezuela post Chavez, Brasil post Dilma, Argentina última etapa Kirchner, Bolivia post reforma constitucional con reelección de Evo). La cuestión es que en algunos casos, como el de Venezuela, el deterioro inicial ha implicado la conversión a un régimen autoritario.

El nuevo contexto de la era Trump incluye el surgimiento de líderes neopopulistas con rasgos generalmente inclusivos en América Latina, con excepciones como Bolsonaro en Brasil, y rasgos predominantemente excluyentes en los países del hemisferio norte occidental, con excepciones como el de *Podemos* en España.

El nuevo contexto también implica un rechazo a las políticas proglobalización y un conjunto de rasgos excluyentes que conlleva a un deterioro de los ideales de la democracia, pues ha implicado el triunfo de una propuesta de racismo blanco, el reforzamiento de

fronteras y posiciones de conflicto con regiones democráticas como la Unión Europea, políticas de anti-inmigración, políticas de exclusión a minorías, posiciones de negacionismo ambiental, posiciones antiliberales en la economía, conflictos con los medios de comunicación, rol cada vez más fuerte de las élites económicas sobre la agenda, el crecimiento de movimientos políticos radicales y el crecimiento de partidos antiestablishment. Estos rasgos de la era Trump se han expresado de modo particular en América Latina. En este continente la nueva era ha implicado el avance de posiciones antiliberales expresadas en conflictos con los *mass media* y con el poder judicial (Tabla 1).

Tabla 1. El nuevo contexto: Un primer mapa de fallas democráticas en la época de Trump

USA y Europa	América Latina
Racismo blanco	-
Nacionalismo, antiinmigración	-
Políticas de exclusión y reacciones de excluidos	-
Negacionismo ambiental	-
Antiliberalismo en la economía	X
Conflictos con los <i>mass media</i>	X y conflictos con el poder judicial
Papel creciente de las élites económicas	X
Participación radicalizada y éxito de la protesta	X
Partidos anti establishment	X
Promesas excesivas,	X
Radicalización de las políticas,	X
Medios y otras fuentes de manipulación en la formación de opiniones,	X
Políticas irresponsables de partidos,	X
Conflictos políticos más profundos,	X
Ineficacia decisional	X

Fuente: Morlino *et al.* (2020)

La dinámica de radicalización, así como el surgimiento de actores antiestablishment profundiza la polarización política y social, dando lugar a una dinámica de promesas excesivas, radicalización de políticas públicas, en particular en áreas de seguridad (en el caso de populismos excluyentes) y en áreas sociales (en el caso de los populismos inclusivos). La bifurcación política implicará también dinámicas crecientes de manipulación de la información, especialmente en los nuevos medios de comunicación y redes, así como una mayor irresponsabilidad de los partidos y la sustitución y deterioro de la competencia por la emergencia de conflictos políticos más profundos. La situación de polarización/radicalización que imprime dinámicas de suma cero entre gobierno y oposición, tendrá como resultado la ineficacia decisional de los gobiernos.

Los factores de la era Trump

Ahora bien, entre ambas épocas, ¿cuáles son los macrofactores que han favorecido el surgimiento de la nueva época Trump? Naturalmente, el descontento de la población con el curso que siguen las políticas públicas en las democracias de Europa, Estados Unidos y América Latina. Como macrofactores deben mencionarse, en primer lugar,

tanto para Europa como para América Latina, los déficits de la representación política, expresados en un gran desconfianza hacia las estructuras legales del Estado y hacia los partidos e instituciones de representación (gobierno y parlamentos) originados en parte en la globalización, y que han implicado la disponibilidad de una masa de electores decepcionados, de la que se han nutrido las fuerzas políticas radicales. Estos resultan de procesos de globalización crecientes que implican una transferencia de la agenda y de las decisiones, de los estados nacionales a actores externos (regionales, internacionales), con la consiguiente sensación de los ciudadanos de pérdida de control sobre los representantes y de los intereses que representan las decisiones tomadas.

En segundo lugar, también para ambos contextos, se debe prestar atención a la crisis económica como factor desencadenante del descontento. Crisis en general de recesión que puede implicar un clima de ruptura y descontento extremos como los de Argentina, que movilizó a la población en el 2001 bajo el reclamo “que se vayan todos”, o Grecia. Las crisis económicas pueden calar hondo en las experiencias y percepciones de los ciudadanos, hasta el punto de reconfigurar nuevas lealtades políticas.

En tercer lugar, en los casos de Estados Unidos y Europa el mantenimiento de olas migratorias en contextos económicos de poca expansión, sumado a actos de terrorismo internacional, han reforzado actitudes de temor y rechazo a nuevos migrantes. En tal sentido las propuestas de partidos neopopulistas excluyentes que estigmatizan a los migrantes como responsables de desempleo de la población local, así como un potencial peligro por mantener lealtades políticas o culturales con estados externos, encuentran eco en la población.

En los países de América Latina, la inseguridad creciente, expresada en altas cifras de muertes y secuestros, permiten el crecimiento de opciones de mano dura y de justicia por mano propia. A ello debe agregarse la percepción de corrupción de la clase política y de un Estado puesto al servicio de grupos económicos o de bandas criminales, que refuerzan la idea de dar un giro importante en las preferencias electorales, que favorece a los *outsider* del sistema de partidos.

Tabla 2. La insatisfacción como variable interviniente y sus reacciones

Globalización	Insatisfacción	Racismo blanco, Nacionalismo, antiinmigración Políticas de exclusión y reacciones de excluidos (neopopulismos excluyentes)
Crisis económica		Políticas inclusivas y conflictos de redistribución (neopopulismos incluyentes)
Inmigración (Europa)		Negacionismo ambiental, Antiliberalismo en la economía,
Inseguridad/violencia (América Latina)		Papel creciente de las élites económicas, Participación radicalizada/éxito de la protesta, Partidos antiestablishment Promesas excesivas, Radicalización de las políticas, Medios y redes en la formación de opiniones, Políticas irresponsables de partidos, Conflictos con el poder judicial Conflictos políticos más profundos, Ineficacia decisional

Mecanismos e impactos sobre la calidad democrática

La nueva era Trump, por las características mencionadas, tiene consecuencias para las instituciones, las políticas y los valores políticos. En particular, el imperio de la ley encuentra desafíos en el resurgimiento de actitudes racistas y la política de derechos humanos se ve resentida por las políticas antimigratorias. Las políticas igualitarias son cuestionadas por los políticos radicales excluyentes. Del mismo modo, la participación política encuentra en movimientos radicales un importante canal de expresión y de demandas. También las nuevas tecnologías moldean la comunicación política, a través de las redes sociales que permiten a los líderes una participación personalizada y directa con los electores, así como el uso de tecnologías que incluyen la difamación y la propaganda negativa, y la posibilidad de comunicación política *ad hoc* a segmentos homogéneos del electorado. En los países latinoamericanos los conflictos con el poder judicial, así como con los *mass media* implican también un debilitamiento del *Accountability*. Del mismo modo, los procesos de corrupción y crecimiento de mercados ilegales implican una penetración en las instituciones y dificultades para controlar la violencia, con el consiguiente debilitamiento del *Rule of Law*. La incapacidad de asegurar la paz implica déficits del Estado de derecho pero también implica ingredientes culturales (a nivel comunitario y de élites) relacionados con la tolerancia y con formas particulares en la resolución de los conflictos.

Tabla 3. Impacto sobre las calidades democráticas

Racismo blanco, Nacionalismo, antiinmigración	Imperio de la ley
Políticas de exclusión y reacciones de excluidos (neopopulismos excluyentes)	Rendición de cuentas electoral
Políticas inclusivas y conflictos de redistribución (neopopulismos incluyentes)	Rendición de cuentas institucional
Negacionismo ambiental, Antiliberalismo en la economía,	Competencia
Papel creciente de las élites económicas, Participación radicalizada/éxito de la protesta,	Participación
Partidos anti establishment	Libertad
Promesas excesivas, Liderazgos fuertemente personalistas	Igualdad
Radicalización de las políticas, Medios y redes en la formación de opiniones,	Paz
Políticas irresponsables de partidos, Conflictos con el poder judicial y organismos de control (<i>mass media</i>)	Responsencia
Conflictos políticos más profundos, Ineficacia decisional	

Las características señaladas de la era Trump actúan con combinaciones particulares en cada caso nacional, donde la política radical se ha activado, e impactan sobre alguna o varias de las dimensiones de la calidad democrática. En cualquier caso, el resultado es sistémico, como se ha mostrado en anteriores trabajos (Morlino 2019) y pone en funcionamiento el mecanismo de convergencia mutua. Es decir, las propiedades de la calidad democrática están interconectadas de modo más o menos fuerte, y cuando se afecta a una de ellas, se impacta al conjunto de las propiedades. Así, disminuir el imperio de la ley implicará una disminución de las libertades ciudadanas y habrá incremento de la violencia, por el deterioro de la legalidad. En tal sentido, la responsencia es posiblemente la dimensión que posee relaciones más lábiles con el conjunto. La responsencia es una variable estratégica de los gobiernos populistas que tienen como objetivo el incremento de la satisfacción de las demandas de la población. La *responsiveness* puede incrementarse al mismo tiempo que disminuyen dimensiones como el *Imperio de la ley*

o la Rendición de cuentas, como se verifica en casos de gobiernos radicales latinoamericanos. Históricamente, como se mostró en el clásico trabajo de Jens Albers (1987) los derechos sociales pueden otorgarse desde el Estado (es el famoso caso de Bismarck y la exclusión de los socialistas) como estrategia política de cooptación, más que como resultado de un proceso de democratización.

Polarización, radicalización y neopopulismo ocurren en la actualidad de modo simultáneo, y por ello frecuentemente se transforman en términos intercambiables. Se trata de conceptos que describen objetos y propiedades diferentes, y es conveniente definirlos teórica y empíricamente.

La **polarización política** se refiere a la distancia entre las opciones y decisiones políticas de un conjunto de actores en un sistema político (Dalton 2008). No incluyo el aspecto ideológico como necesario, presente por ejemplo en Sartori (1980), lo que dio lugar a su caracterización de los sistemas de pluralismo polarizado: me interesa destacar que la polarización, más que un resultado de posiciones ideológicas de la población y del acomodamiento de las élites políticas hacia los extremos mayoritarios (Downs 1957), puede consistir en un constructo estratégico de los propios actores que compiten. Polarizar puede implicar ganancias de apoyo para ciertos actores, aunque la distancia ideológica entre los competidores sea vaga o escasa. Por otra parte, la polarización puede estar centrada en liderazgos más que en posiciones ideológicas. Esto ocurre en las situaciones con liderazgos neo populistas. En términos empíricos definimos polarización en base a dos dimensiones:

- ♦ la *distancia de posiciones* (centrada en posicionamientos respecto de ideologías o en relación a líderes u organizaciones),
- ♦ la *profundidad de la distancia* en esas posiciones de los actores.

La polarización no es sólo distancia, también hay diferentes profundidades en la distancia, y esto en parte depende del tipo de *issues* que separan a electores de élites.

Es decir, la polarización puede tener diferentes niveles de profundidad y en su nivel más superficial referirse a situaciones transitorias, cuando las posiciones extremas se vinculan a decisiones específicas (vg. ciertas políticas económica) o, por el contrario, puede involucrar valores identitarios (vg. la defensa de la nación, los derechos humanos). También la polarización puede ocurrir a nivel de élites (cuando hay conflictos o divisiones entre los miembros de una coalición de gobierno) o a nivel de masa. Hay *polarización de superficie* cuando se involucran fundamentalmente las élites: se trata de posicionamientos polares de coyuntura y los temas son de carácter divisivo. Por el contrario, hay *polarización profunda* cuando el proceso incluye a élites y masa, la polarización dura por lo menos un periodo de gobierno y compromete temas de valencia. En los casos de polarización profunda la distancia se convierte en *separación y división* entre los competidores, y puede llegar a *segmentación social* (Russo 2020).

Por otra parte, la **radicalización** es una situación política en la que

- ♦ predominan posiciones de confrontación y conflicto
- ♦ se emplean medios que desafían la legalidad.

La radicalización implica polarización con el agregado de propuestas o acciones extremas que excluyen la negociación. Es decir, la radicalización incluye la polarización profunda, pero además de la competencia, se agrega el conflicto y formas de solución radicales, que no excluyen la violencia. La lógica amigo/enemigo, reemplaza a la de simples competidores por el voto y se plantean situaciones que pueden conducir a situaciones

de excepcionalismo, respecto en particular con los *mass media* y con el poder judicial. El excepcionalismo encuentra justificación cuando la polarización es muy elevada y hay conductas radicales de solución. En esos casos el gobierno puede percibir amenazada la integración social y coincidir en que “soberano es quien decide sobre el estado de excepción” (Schmitt 1972, p. 33).

La polarización profunda favorece la radicalización y la cristalización de nuevas fracturas políticas. Cuando esto ocurre hay élites que se han visto beneficiadas y reforzarán con acciones la separación. De ese modo se instrumentalizan condiciones de desconfianza y posiciones de confrontación entre la élites que involucran a los partidos en competencia, a los *mass media* y a las instituciones de control que operan tradicionalmente como árbitros. Esta confrontación suele implicar realineamientos internacionales y posiciones de rechazo o distancia con la globalización.

Sobre **populismo** existe actualmente una vastísima literatura, que desde investigaciones clásicas (Germani 1956, Ionescu y Gellner 1969, Canovan 1981, Shils 1996) a otras más recientes, producidas en este siglo (De la Torre y Peruzzotti 2008, Panizza 2009, Tarchi 2015, Rovira *et al.* 2017, De la Torre 2019). El populismo es una forma de representación política centrada en la *responsiveness* y que es reacia al *accountability*. Empíricamente se trata de

- ◆ un liderazgo caracterizado por un tipo particular de relación con los ciudadanos (*directo y frecuente*)
- ◆ un tipo de discurso centrado en la denostación del adversario político y en la búsqueda del monopolio de valores compartidos como la defensa de la nación y del pueblo
- ◆ la tensión y conflictos con actores de control (*mass media*, justicia)
- ◆ la personalización del poder.

En la Figura 1 se muestran los principales rasgos de la polarización, radicalización y populismo.

Tabla 4. Polarización, radicalización y populismo, interacciones

Populismo	Polarización	Radicalización	Polarización + Radicalización	Polarización+ populismo+ radicalización
Representación centrada en la <i>responsiveness</i> , una cierta forma de la representación como mandato, <i>idem sentire</i>	Distancia y profundidad de la distancia de posiciones entre actores	Dinámica política de confrontación-desafíos a la legalidad.	Por la distancia hay deslegitimación del adversario, la competencia política se transforma en contienda cultural (fragmentación de identidades políticas).	Estabilización y profundización de la separación y división política, a través de discursos y posiciones radicales del líder.
Rechazo a los controles	Polarización: a. coyuntural, temas divisivos. b. profunda, temas de valencia, (nación). La distancia se hace separación.	Posiciones sistemáticamente divergentes, no necesariamente derecha-izquierda- ni antisistema.	Oposición rígida. Protesta violenta	Dinámicas de realimentación: Líderes de opinión, confrontación con los medios, mensajes directos del líder.

El comportamiento de un gobierno populista sigue la lógica de *adversary politics*, denostación del adversario, construcción de bipolarización, y asume los *issues* de valencia como propios (defensa de la nación, derechos humanos, salvaguarda del país) o convierte *issues* divisivos (problemas económicos o ambientales) en *issues* de valencia (la defensa de un plan económico como modo de defender la patria), y un líder populista establece comunicación directa con la gente (Russo 2008). Respecto de las relaciones líder-masa-instituciones, la personalización de la política implicará someter el *Accountability* y el Imperio de la ley a la *Responsiveness*. El gobierno populista se muestra sensible a demandas colectivas del sector previamente desarraigado (sea por desempleo, migración o extinción de su partido político) y que se propone arraigar en el nuevo contexto. Un contenido común de las políticas populistas es la reivindicación del desarrollo (e independencia) nacional.

Tabla 5. Consecuencias de proceso de Polarización/ radicalización/ neopopulismo sobre calidad de la democracia

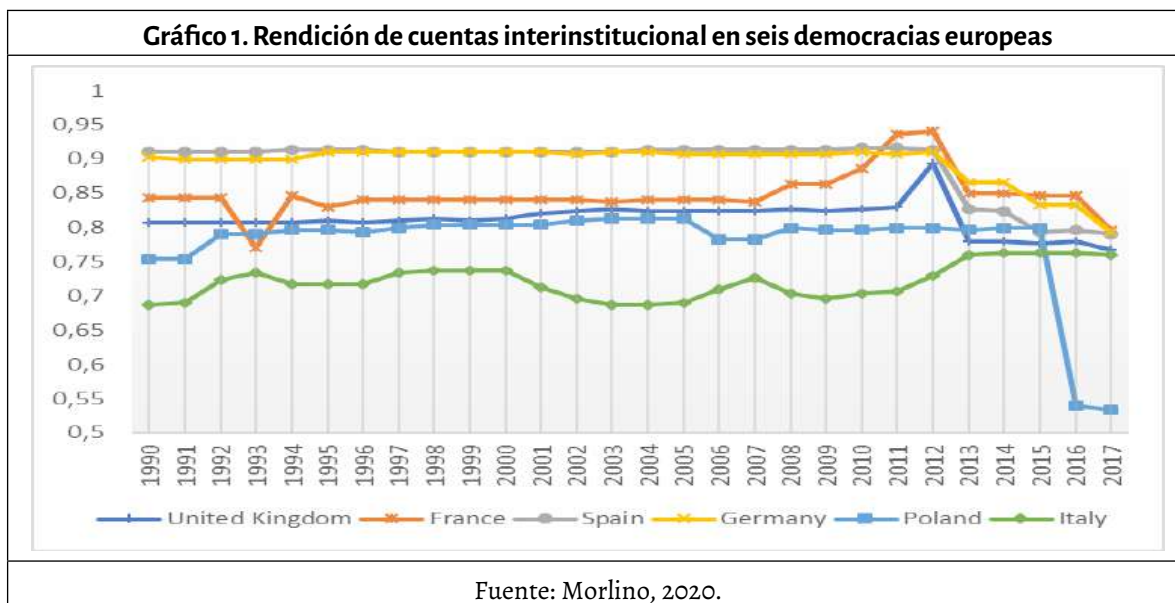
<i>Polarización+ neopopulismo+ radicalización</i>	<i>Calidad de la democracia</i>
Estabilización y profundización de la separación y división política, a través de discursos y posiciones radicales del líder.	Imperio de la ley Rendición de cuentas electoral Rendición de cuentas institucional Competencia
Dinámicas de realimentación de la polarización/radicalización: Líderes de opinión, confrontación con los medios, mensajes directos del líder.	Participación Libertad Igualdad Paz Responsencia

Los procesos de radicalización política y gobiernos que cuestionan las bases de la democracia liberal han implicado al menos tres formas regresivas de la democracia. La primera tiene que ver con el **deterioro de la democracia**, la segunda con la **crisis democrática**, y la tercera con el **cambio hacia órdenes no democráticos**. Hay deterioro democrático cuando algunas de las dimensiones de calidad democrática sufren procesos de disminución de su valor. En segundo lugar, hay crisis cuando en se producen, procesos fuertes de deslegitimación al propio orden político democrático, amenazas a la continuidad y riesgos de caída. Y por último, debe decirse que la instauración de órdenes autoritarios pasa por transiciones de hibridación traducidas en tensiones creciente con el poder judicial, con los medios de comunicación, con la tolerancia con la oposición y por último con el deterioro de las instituciones electorales. Al respecto hay procesos actuales en países europeos y de América Latina que claramente muestran estos procesos mencionados. Nos referimos en particular a los casos de Polonia (deterioro democrático); Hungría (crisis democrática) y al de Venezuela y Turquía (pasaje al autoritarismo).

Los casos

En el caso de Polonia, *Derecho y Justicia*, después de gobernar en el período 2005-2007, regresó al poder en 2015 logrando con el 37,6% de los votos la mayoría absoluta de los escaños. Si bien el partido vencedor estuvo lejos de conseguir la mayoría de los votos, en un contexto de oposición fragmentada y de una participación electoral baja, de alrededor de 50%, pudo iniciar un conjunto de reformas legislativas que afectan el estado de derecho en tanto comprometen la libertad de prensa, la libertad de asociación, la autonomía del poder judicial y la dignidad individual. Respecto de la primera, el gobierno despidió a decenas de periodistas, puso a funcionarios del partido para controlar el comporta-

miento de la prensa, y dio de baja a programas que eran distantes o críticos del nuevo gobierno. Respecto del poder judicial, se intentó limitar la independencia del Tribunal Constitucional, así como adelantar la edad de jubilación de los jueces, adoptar medidas que sancionaran a jueces que pudieran criticar o sancionar en contra de decisiones oficialistas adoptadas por el Legislativo. La restricción de libertades ocurre a través de afectar la independencia del poder judicial e interferir en la propia administración de justicia, también interviniendo en la independencia de los medios de comunicación públicos y en la libertad de expresión, en medidas antiterroristas que debilitan derechos fundamentales y de debido proceso, y que producen un clima de intolerancia y situaciones ilegales de xenofobia. En el mismo sentido se afectan derechos reproductivos de las mujeres con normas que prohibieron de modo absoluto el aborto, a pesar de ser Polonia ya uno de los países que cuenta con una de las leyes más restrictivas de Europa.



Como puede verse en la siguiente Figura, Polonia, en el período 1990/2018, retrocedió en aspectos centrales de libertad y Estado de derecho. Así, retrocedió en la eliminación de la tortura, en libertades civiles, en libertad de asociación, libertad de expresión y fuentes alternativas de información, entre otras.

Tabla 6. Libertades, algunas dimensiones elegidas

País	Libre de tortura		Libertades Civiles		Libertad de asociación		Libertad de expresión y fuentes alternativas de información		Autocensura de los media		Represión de organizaciones religiosas	
	1990	2018	1990	2018	1991	2018	1990	2018	1990	2018	1990	2018
France	2.27	2.18	0.97	0.92	0.92	0.86	0.98	0.96	2.71	2.67	1.98	1.53
Germany	3.4	2.56	0.96	0.94	0.89	0.86	0.98	0.94	2.05	1.73	1.49	1.50
Italy	2.16	2.04	0.93	0.91	0.9	0.9	0.93	0.94	1.28	0.98	1.51	1.69
Poland	2.98	1.98	0.93	0.84	0.91	0.82	0.95	0.71	2.79	0.47	1.81	1.90
Spain	1.73	2.38	0.94	0.93	0.92	0.89	0.97	0.94	2.22	2.01	2.13	2.14
UK	2.16	2.26	0.88	0.90	0.9	0.89	0.94	0.95	2.19	1.78	1.15	1.7

Fuente: Morlino et al. (2020)

¿Cómo fue posible el triunfo del PiS? Por una parte, dando voz a los ciudadanos/votantes de las regiones menos desarrolladas del país, con bajos ingresos y que no se beneficiaron

de la integración europea; por otra parte, se trata en general de votantes con una educación deficiente, temerosos de la migración ilegal y del terrorismo, a quienes atribuyen ser portadores de problemas de inseguridad y desempleo en el país. El PiS prometió un profundo cambio institucional consistente en una *Polonia renacida*. La “democracia radical” se convirtió así en la principal narrativa del PiS.

Algunos aspectos interesantes del proceso polaco: primeramente, el deterioro ocurre sin crisis económica (al igual que ocurrió con la elección de Donald Trump, después de la era Obama). Es decir, hubo un proceso de deterioro de la representación a partir de un segmento del electorado que rechaza fuertemente el *Establishment* por considerarlo corrupto y contrario a los intereses y valores de la Polonia tradicional. En segundo lugar, el deterioro empieza después la victoria de PiS (Derecho y Justicia) y no antes. Es decir, no se trata de un proceso de deterioro gradual en el que intervinieron actores políticos o gobiernos en distintos momentos: por el contrario, se trata de una acción unitaria, intencional y orientada por el gobierno. En tercer lugar, la relativa autonomía de la respondencia respecto de las otras cualidades democráticas, que muestran que aumenta la respondencia respecto de los electores de 2015 al mismo tiempo que hay menos derechos y libertades. Es decir, se configura una situación en la cual más democracia, entendida como respondencia o satisfacción de demandas, significará menos democracia, en tanto hay menos *Accountability* y libertades.

Como se ha mencionado, el deterioro implica la disminución de alguna de las calidades democráticas que impactará al conjunto e implicará una disminución general de la calidad de un orden político. Cuando el deterioro se mantiene y avanza puede conducir a una crisis, que además de la disminución de todas las calidades, implicará un distanciamiento progresivo entre los ciudadanos y las instituciones políticas, y el surgimiento de políticas y actores (movimientos y partidos) antisistema, que serán acompañados de un contexto de desestabilización electoral, cambio de líderes políticos y cambios en los patrones de competencia. La crisis democrática puede profundizarse dando lugar a una transformación del orden político hacia una democracia iliberal, es decir un régimen híbrido caracterizado por rendición de cuentas interinstitucional muy limitada y violación/manipulación recurrente de los derechos civiles y políticos. El cambio por transformación de un orden político democrático en democracia iliberal puede seguir al menos tres modalidades. La primera modalidad es a través de un *debilitamiento de la rendición de cuentas*, que implican un deterioro (disminución o pérdida) de la independencia del Tribunal Constitucional/Corte Suprema, la presión gubernamental, pérdida de capacidades y gradual control sobre los *mass media*, control del gobierno sobre internet, así como control sobre los tribunales electorales.

La segunda modalidad es a través de *fuertes campañas de deslegitimación* del orden democrático, que implicará deslegitimar de modo sistemático a los opositores, intimidar a los empresarios con la finalidad de favorecer grupos de amigos, y someter/cooptar grupos de la sociedad civil (intelectuales, asociaciones humanitarias y asociaciones de la sociedad civil).

La tercera vía de hibridación de un orden político democrático es a través de la *manipulación* de la *rule of law*, controlando policías y servicios de seguridad, condicionando elecciones y corrompiendo actores del Estado y de la sociedad civil.

Es interesante prestar atención ahora al caso de Hungría, primer caso de un miembro de la Unión Europea que deviene país no democrático, mediante la transformación en un régimen híbrido. El **Fidesz/Unión Cívica Húngara** obtuvo un apoyo claramente mayoritario (52,77%) en 2010, y aunque disminuyó el caudal electoral en 2014 (44%), se consolidó como fuerza mayoritaria obteniendo en el 2014, el 44%, en el 2018 el 49% y en las europeas de 2019, el 53%.

Después de la debacle electoral del Partido Socialista Húngaro (hasta entonces en el gobierno con menos de un 20% de los votos) y el ascenso del partido de extrema derecha **Movimiento por una Hungría** con el 16%, el gobierno de Viktor Orbán obtuvo dos tercios del legislativo, lo que le permitió modificar la Constitución, llevando a cabo cambios constitucionales y legales con la finalidad de controlar instituciones independientes. La propuesta explícita de construir una democracia iliberal fue definida por el mismo Orbán como un régimen político caracterizado por la primacía de los valores cristianos y de la comunidad nacional cuyos intereses son superiores a los individuos, con políticas euroescépticas y contra la inmigración. Como lo muestra la siguiente Tabla, los indicadores del estado de la democracia desde 2005 al 2015 (post reforma constitucional) han retrocedido.

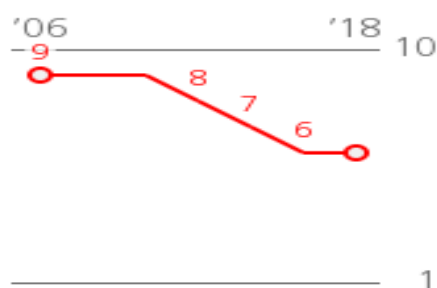
Tabla 7. Hungría, estado de la democracia (índices)				
Indicadores	1985	1995	2005	2015
Gobierno representativo Índice	0.24	0.78	0.78	0.74
Derechos fundamentales Índice	0.44	0.77	0.76	0.70
Control sobre Gobierno Índice	0.28	0.67	0.69	0.61
Administración imparcial Índice	0.52	0.72	0.70	0.60
Participación de la sociedad civil. Índice	0.25	0.59	0.57	0.56
Participación electoral Índice		0.69	0.72	0.63
Elaboración propia en base a datos de IDEA: https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map				

La democracia iliberal tiene como base la subordinación del Tribunal Constitucional al gobierno y, en general, una disminución de la independencia del poder judicial (Gráfico 1), en vez de funcionar como contrapeso, y entre otras consecuencias, ha implicado un aumento de la corrupción hasta convertirse en un problema relevante.

También el abuso de poder del partido de gobierno deteriora la competencia política, desfavoreciendo a la oposición por el desigual acceso y trato no equitativo por parte de estos, en consonancia con la regulación politizada de los *media*, así como por el abuso de recursos públicos del partido de gobierno. También deben contabilizarse las modificaciones de planes de estudio y politización de la enseñanza de materias humanistas, realizadas como forma de propaganda oficialista. Por último, y contrario a las disposiciones de la Unión Europea, el gobierno de Orbán ha aumentado los controles sobre las actividades de organizaciones no gubernativas y establecido barreras férreas contra la inmigración, violando derechos comunitarios sobre los refugiados.

El pasado 30 de marzo en Hungría, el Parlamento otorgó por tiempo indefinido a Orbán (en razón de la pandemia Covid-19) el poder de gobernar por decreto sin control de ningún tipo. Complementariamente en la misma sesión, el parlamento aprobó sanciones de hasta cinco años de prisión para los periodistas que “informen de modo incorrecto” sobre las acciones del Gobierno con relación a la pandemia del Coronavirus. Estos últimos hechos han tensionado de modo extremo las relaciones de Hungría con la Unión Europea, conmocionada en la actualidad por una grave emergencia sanitaria.

Gráfico 2. Disminución independencia del poder judicial (2006-18)



Elaboración propia con datos de IDEA: <https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map>

Del régimen híbrido a un orden autoritario hay un paso corto, que puede ser decidido por los propios líderes en el gobierno. En los casos contemporáneos en que ocurren estas conversiones de régimen, un camino usual es el de una transformación gradual desde un régimen híbrido hacia un régimen autoritario, con una progresiva disminución de la rendición de cuentas interinstitucional, la limitación de la independencia del poder judicial, y límites, violación, y manipulación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

El desmontaje gradual de las instituciones de contrapeso al gobierno, así como del propio estado de derecho, no implican la supresión de las elecciones políticas, con lo que surge lo que Andreas Schedler (2016) ha llamado *autoritarismo electoral*, es decir, un régimen autoritario en el que las elecciones son “formalmente incluyentes (se celebran por sufragio universal), mínimamente pluralistas (pueden competir partidos de oposición), mínimamente competitivas (partidos y candidatos externos a la coalición gobernante, aunque se les niega el triunfo, pueden ganar votos y escaños) y mínimamente abiertas (la disidencia no se reprime de manera masiva, aunque con frecuencia sí de manera selectiva e intermitente)” (2016, p. 17) . Sin embargo, hay instrumentos de gobierno autoritario, por cuanto hay infracciones de los derechos políticos y las libertades civiles, restricción del acceso de los candidatos a los medios de comunicación y a las finanzas de campaña; se imponen restricciones formales o informales sobre quienes votan por la oposición, o simplemente se distribuyen votos y escaños a través del fraude electoral. Venezuela es claramente un caso que atravesó la secuencia de democracia mínima a régimen híbrido (hasta 2016) y posteriormente de régimen híbrido a autoritarismo (desde 2017). Implementó programas sociales importantes para los sectores sociales más postergados. Sin embargo, este aumento de *responsiveness* se llevó a cabo con déficits crecientes de *accountability* y de *Rule of Law*. Venezuela se convirtió en un caso de autoritarismo electoral, con elecciones manipuladas, intimidación de votantes y control de candidatos, un Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno, acciones de violencia e intimidación contra los líderes de la oposición, un creciente rol político de los militares en procesos de *decision making*, en altos puestos en el Gobierno, niveles altos de corrupción y limitaciones a la libertad de prensa, libertades individuales, de asamblea y de asociación.

Tabla 8. Estado de la democracia en Venezuela (índices)

Indicadores/índices	1985	1995	2005	2015
Gobierno representativo, índice	0.75	0.76	0.60	0.49
Derechos fundamentales, índice	0.61	0.60	0.48	0.43
Control sobre el gobierno, índice	0.65	0.67	0.33	0.26
Administración imparcial, índice	0.49	0.49	0.30	0.19
Participación sociedad civil, índice	0.69	0.65	0.55	0.60
Participación electoral, índice	0.77	0.49	0.24	0.74

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEA: <https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map>

Por último, el caso de Turquía, es un caso próximo a una democracia mínima en el 2004, y con tendencia a convertirse en un régimen híbrido. Las políticas adoptadas han estado orientadas a fortalecer el poder de Erdogan, debilitar la oposición, controlar a los militares, debilitar al Tribunal Supremo, seguir una política de persecución contra las minorías kurdas, sostener un proceso de re-legitimación a través de una revalorización de la religión musulmana.

Tabla 9. Turquía, el estado de la democracia (índices)

Indicadores/índices	1985	1995	2005	2015
Gobierno representativo, Índice	0.54	0.68	0.70	0.56
Derechos fundamentales, índice	0.42	0.48	0.56	0.41
Control sobre el gobierno, índice	0.54	0.56	0.58	0.43
Administración imparcial, índice	0.39	0.52	0.57	0.38
Participación sociedad civil, índice	0.49	0.64	0.79	0.54
Participación electoral, índice	0.76	0.79	0.76	0.84

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEA: <https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map>

El punto de inflexión en Turquía ocurre después de julio de 2017, con las nuevas reglas constitucionales, en el que se pasa a un sistema presidencialista con mucho poder al presidente y sin contrapesos, puede nominar a ministros y jueces, con falta de independencia del poder judicial. Además de esto, hay purgas de personal en el Estado que el gobierno considera críticos y represión de la oposición, limitación de derechos civiles, control de la prensa, y elecciones no libres y competitivas, con altos niveles de corrupción del gobierno.

Para concluir

Como se ha visto, la conjunción de procesos de polarización/radicalización y personalización de la política conduce fácilmente al deterioro de la democracia, cuando no directamente a la regresión autoritaria, en particular cuando hay una búsqueda de irresponsabilidad política por parte del líder, manipulando las instituciones de control. Esto ocasiona un crecimiento y normalización de la corrupción en los actores del Estado, que implicarán manipulación de los derechos individuales y control del poder judicial. Esta conjunción pone fácilmente en marcha el mecanismo que han seguido los casos analizados (Polonia, Hungría, Venezuela y Turquía) expresado en un inicial deterioro de alguna

dimensión de la calidad democrática, en particular la *Accountability*, que incide en un deterioro del *Rule of law*, y que impactará negativamente sobre el conjunto de las calidades democráticas. Cuando ello ocurre el deterioro de la democracia es un hecho y una puerta abierta para regresiones que pueden avanzar gradualmente hacia el establecimiento de un orden híbrido o hacia un tipo de autoritarismo electoral. ¿Por qué no derivan en autoritarismos al descubierto y se mantiene la fachada electoral? La respuesta quizás radica por una parte en la legitimidad internacional que aún posee la democracia como orden político, y por otra en la legitimización que implica el voto popular. En regímenes neopopulistas como los que hemos visto, la “voz del pueblo” es la perfecta excusa para la manipulación de instituciones de control, así como para violentar el sistema legal. ¿Estamos ante una nueva ola autoritaria? Es todavía difícil sostener esta afirmación, y seguramente los próximos tiempos permitirán evaluar la fuerza de la tendencia y tener una respuesta mas clara. El rol de Estados Unidos y la suerte futura de su alianza con Europa es hoy un dato crucial para el reforzamiento de la ideología liberal democrática. Del mismo modo en América Latina, la suerte de Brasil (hoy en plena regresión democrática) será fundamental para la orientación de las democracias latinoamericana. Al mismo tiempo, se acercan tiempos de desafíos para los líderes democráticos de quienes se espera compatibilizar resultados eficaces y contundentes que hagan la diferencia, con la responsabilidad y convicción en los valores de un poder limitado y controlado por las instituciones.

Referencias bibliográficas

- Alber, J. (1987). *Dalla carità allo stato sociale*. Bologna, Il Mulino.
- Bagnasco, A. (2016). *La questione del ceto medio: un racconto del cambiamento sociale*. Bologna, Il mulino.
- Calise, M. (2011). *Il partito personale: I due corpi del leader*. Gius. Laterza & Figli Spa.
- Canovan, M. (1981). *Populism*, New York and London, Harcoun Bracejovanovich.
- (2005). *The people*. Polity.
- Cartocci, R. (1996). "L'Italia unita dal populismo". *Rassegna italiana di sociologia*, 37, 287-295.
- Chiapponi, F. (2012). *Il populismo nella prospettiva della scienza politica*. Bologna, Il Mulino.
- Dalton, R. J. (2008). "The quantity and the quality of party systems: Party system polarization, its measurement, and its consequences". *Comparative Political Studies*, 41(7), 899-920.
- Downs, A. (1957). "An economic theory of political action in a democracy". *Journal of political economy*, 65(2), 135-150.
- De la Torre, C. (2010). *Populist Seduction in Latin America*. Ohio University Press.
- De La Torre, C. y Peruzzotti, E. (2008). *El retorno del pueblo: populismo y nuevas democracias en América Latina*. Flacso-Sede Ecuador.
- Franco, R., Hopenhayn, M. y León, A. (2010). "Las clases medias en América Latina: historias cruzadas y miradas diversas. Franco, Hopenhayn y León.
- Germani, G. (1956). "La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo", *Cursos y Conferencias*, N° 272, Buenos Aires.
- Germani, G. (1962). *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós.
- (1973). "El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos", *Desarrollo Económico*, XIII, 51, octubre-diciembre.
- (1978). "Democracia y autoritarismo", en C. Mera y J. Rebón, *Gino Germani, la sociedad en cuestión*, Buenos Aires, Clacso.
- Giddens, A. Ionescu, G. y Gellner, E. (ed.) (2001 [1969]). *Populism: its meaning and national characteristics*. MacMillan.
- Mac Rae, D. (1969). "El populismo como ideología", en Giddens, A. Ionescu, G. y Gellner, E. (ed.) (comp.) *Populismo. Sus significados y características nacionales*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Meny, I. (2109). *Poppolo ma non troppo*, Bologna, Il Mulino.
- Morlino, L. et al (2020). *Equality, Freedom and Democracy. Europe After the Great Recession*, Oxford: Oxford University Press.
- Mudde C. y Kaltwasser C.R. (2011). *Voices of the peoples: Populism in Europe and Latin America compared*, working paper N° 378, julio.
- Mudde C. y Kaltwasser C.R. (2017, trad. Esp. 2019) *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- O'Donnell, G. (1991). "Democracia delegativa". *Novos estudos*, N° 92, pp. 25-40.
- Panizza y Arditi (2009) *El populismo como espejo de la democracia*, México, FCE.
- Pappalardo y Mattina (1999) *Democrazie e decisioni*, Roma, Carocci.
- Pombeni, P. (2004). *Il populismo nel contesto del costituzionalismo europeo. Ricerche di storia politica*, N° 3, pp. 367-388.
- Rokkan, S. y Flora, P. (2002). *Stato, nazione e democrazia in Europa*. Bologna, Il Mulino.
- Russo, J. (2008). "Argentina, un sistema con vulnerabilidad asimétrica". *Revista mexicana de estudios electorales*, pp. 13-43.

- (2020). "Polarization, radicalization and populism, definitions and hypotheses", *Paper*.
- Schmitt, C. (1972). *Le categorie del "politico"*, Bologna, Il Mulino.
- Shils, E. (1996). *The Torment of Secrecy: The Background and Consequences of American Security Policies*, Chicago, Ivan R. Dee.
- Stewart, J., Horsfield, B., Mazzoleni, G. y Blumler, J. G. (2003). *The media and neo-populism: A contemporary comparative analysis*. Greenwood Publishing Group.
- Taguieff, P. A. (2003). *L'illusione populista*. Pearson Italia Spa.
- Tarchi, M. (2015). *Italia populista: dal qualunquismo a Beppe Grillo*. Bologna, Il Mulino.
- V-Dem, 2015-2020, <https://www.v-dem.net/>.
- Wiles, P. (1969). "A syndrome, not a doctrine: Some elementary theses on populism". *Populism: Its meaning and national characteristics*.

Marcelo Cavarozzi
cavarozzi@gmail.com
Universidad Nacional
de San Martín
Argentina

Recibido: 24/11/2019
Aprobado: 19/02/2020

América Latina

a fines de la segunda década del siglo XXI: ¿tiene salida la crisis?

Resumen Este artículo analiza la doble transición que México y los países de Sudamérica atravesaron durante la coyuntura 1998-2005: la crisis de la “media década perdida”, descrita por José Antonio Ocampo, y los cambios de régimen político. También propone una comparación estilizada de las rutas políticas que dichos países siguieron durante las dos primeras décadas del presente siglo.

Palabras clave **Media década perdida, doble transición, México y Sudamérica, rutas políticas del Siglo XXI.**

Abstract This article analyzes the dual transition Mexico and South American countries underwent during the 1998-2005 years: the five-year economic crisis described by José Antonio Ocampo, and the regime changes. It also attempts to offer a stylized comparison of the political routes those countries followed during the first two decades of the 21st Century.

Keywords **The lost half decade, dual transition. Mexico and South America, political routes of the early 21st Century.**

1. De acuerdo a José A. Ocampo, en el período 1998-2002 el producto bruto interno cayó en todos los países de América Latina, excepto en Chile y República Dominicana, aunque en estos dos últimos casos también se registró una sensible reducción de los índices de crecimiento. *La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX*; El Trimestre Económico 2004, LXXI.

2. Los otros casos donde también se

produjeron importantes transformaciones políticas fueron: Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. De todos modos, se debe reparar que la inclusión de México y Colombia dentro de este síndrome sugiere que no se trató meramente de un “giro a la izquierda” como muchos analistas postularon.³ Brasil es, según el Banco Mundial,

1 En los albores del Siglo XXI se produjo un punto de inflexión en la economía y la política en prácticamente toda América Latina. Por un lado, a partir de 1997, la crisis económica iniciada en Asia repercutió en la región, inicialmente en Brasil y Argentina, para más tarde extenderse al resto de los países con la parcial excepción de Chile.¹ Los fuertes efectos recesivos del fenómeno llevaron a que José Antonio Ocampo calificara al período 1998-2002 como “la media década perdida”. La crisis no tuvo sólo efectos materiales, sino también simbólicos. La expansión de los años previos (1991-94 y 1995-97) se había apoyado en el masivo ingreso de capitales atraídos por la implementación de las reformas estructurales recomendadas por el Consenso de Washington, es decir las políticas de privatización, desregulación y apertura de la economía que constituían, ya desde la década previa, el núcleo del programa neoliberal. No es sorprendente, por ende, que las bruscas y sostenidas caídas en el empleo y los ingresos personales, agravadas por el prolongado deterioro de los servicios públicos, contribuyeran significativamente al descrédito del ideario neoliberal. En cierto modo, un hecho totalmente ajeno a las cuestiones económicas, esto es el atentado de las Torres Gemelas y la reacción del gobierno de George W. Bush disponiendo la invasión a Irak, potenció aún más el rechazo a las políticas pro-mercado, excepto en Chile, Colombia y Perú. Esta tendencia se extendió por América Latina independientemente del itinerario que adoptó cada gobierno, pues sólo algunos intentaron revertir el curso de los programas económicos implementados durante la década final del siglo pasado. Los programas neoliberales, la influencia del Fondo Monetario Internacional y las aventuras belicistas del gobierno norteamericano fueron vistas como ingredientes de un paquete promovido por el imperialismo para favorecer los intereses de la *haute finance* capitalista en desmedro de las mayorías en América Latina, es decir los sectores medios y populares que estaban sufriendo los efectos de la crisis económica.

Por otro lado, entre 1999 y 2005, en muchos países de América del Sur y México tuvieron lugar metamorfosis políticas de enorme magnitud que fueron más allá de producir meras alternancias partidarias en el gobierno -como las que habían ocurrido hacia fines de la década de 1980 en Argentina, Perú y Brasil- y constituyeron, además, verdaderos cambios de régimen de una u otra índole.² La excepción fue nuevamente Chile, donde, por el contrario, se confirmó la continuidad, ya que en 2000 se impuso por tercera vez en la elección presidencial la **Concertación de Partidos por la Democracia** sobre la alianza de derecha; el único matiz consistió en que esa fue la primera ocasión en que el candidato de la coalición de centroizquierda, Ricardo Lagos, provino del **Partido Socialista**. En otros dos casos, los de México y Brasil, no se produjeron interrupciones institucionales y se respetó plenamente la normativa electoral democrática; en ese sentido las derrotas de los candidatos presidenciales de los partidos en el gobierno, el **PRI** en México y el **PSDB** en Brasil fueron ejemplos de alternancias democráticas de libro de texto. Pero, como ya señalamos, los cambios fueron más que alternancias. En México, el triunfo en 2000 del candidato del tradicional partido de derecha, Vicente Fox del **PAN**, puso fin a más de setenta años del sistema de partido/Estado. El formato de partido hegemónico había atravesado en su postrera docena de años un intento fallido de reforma económica manteniendo lo esencial de la arquitectura autoritaria (Carlos Salinas, 1988-1994) para derrumbarse como un castillo de naipes durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) desembocando en lo que pareció ser la inauguración de un sistema tripartidario relativamente equilibrado que, además del **PAN**, incluyó también a la agrupación de izquierda, el **PRD**. Por el contrario, en Brasil el triunfo de Lula y el **PT** no representó una mutación significativa del juego partidario bi-coalicional que se había instaurado desde las elecciones de 1994 bajo el formato de presidencialismo de coalición (1988, p. 31). Si, en cambio, el acceso de Lula a la

el país más desigual de América Latina y también uno de los diez más desiguales del mundo. Ciertamente una condición que es, en parte, el resultado de la importancia que tuvo la esclavitud en su historia y lo tardío de su abolición a fines del siglo XIX. Sérgio Buarque de Holanda hace alusión en su clásico ensayo *O Homem Cordial* a los esclavos como “el pedestal inerte” de la sociedad brasileña.

4. *Pelego* es la denominación que recibían en Brasil los sindicalistas que dirigían los gremios de trabajadores bajo la normativa de la legislación del Estado Novo varguista. Los gremialistas de la generación de Lula, quienes finalmente desplazaron a la mayoría de los viejos dirigentes en las décadas de 1970 y 1980, los criticaban por sus tendencias pro-patronales y su permanente subordinación a los funcionarios del Ministerio de Trabajo.

5. Para no ser injusto en el cotejo entre Lula y Serra, se debe anotar que este último no provenía de una familia de la elite paulista, como si era el caso de Fernando Henrique Cardoso, sino que sus padres eran inmigrantes italianos relativamente pobres provenientes de Calabria. Después del golpe militar, Serra, estuvo catorce años exiliado en Francia, Estados Unidos y Chile (en este último país llegó a estar preso en el Estadio Nacional al instalarse la dictadura de Pinochet).

más elevada posición sacudió los cimientos simbólicos de la política brasileña, es decir su naturaleza elitista y su enraizamiento en una sociedad extremadamente desigual.³ Nacido en una familia de extrema pobreza del estado de Pernambuco en el nordeste, cuando su madre emigró a Sao Paulo tras haber sido abandonada por su padre, Lula trabajó desde los doce años en la calle como lustrabotas y vendedor ambulante y no pudo completar su escuela primaria, para luego convertirse en trabajador metalúrgico y dirigente sindical anti-*pelego*.⁴ Dedicado durante más de tres décadas a la actividad sindical y política (fue uno de los fundadores del PT en 1979-80) llegó a la presidencia derrotando al tucano Jose Serra, Ph.D. en Economía de la Universidad de Cornell.⁵ En Perú y Argentina, el cambio de siglo estuvo signado por la caída de los respectivos gobiernos, en el primer caso poniendo fin a un régimen autoritario cívico-militar y en el otro, a través de un golpe de estado “blando” que desembocó en la instauración de un régimen de partido dominante bajo la conducción de Néstor y Cristina Kirchner que no suspendió el funcionamiento de la democracia electoral, si bien se torcieron y manipularon las reglas a fin de favorecer objetivos coyunturales. En ambos casos, entonces, la transición fue institucionalmente traumática aunque por diferentes razones, y algo parecido se puede sostener en relación a los desenlaces. En Perú, la caída de Fujimori y de su socio militar Vladimiro Montesinos fue quizás el primer capítulo de una práctica que se ha convertido en un ingrediente permanente del juego político: las operaciones de inteligencia, a menudo extralegales, que se procesan a través de la difusión de videos y conversaciones telefónicas manejadas por políticos, militares, empresarios, policías y funcionarios judiciales que procuran desplazar, humillar e incluso enviar a la cárcel a otros actores; este fenómeno alcanzó su punto culminante cuando en 2019 uno de los ex presidentes más involucrado en causas de corrupción de todo tipo, Alan García, se suicidó. En un plano más estructural, el abrupto final del fujimorato frustró la consolidación de una matriz neoliberal asociada a una fórmula política estable apoyada en el cesarismo presidencial y la utilización sistemática de mecanismos de un Estado de excepción. En cambio, en Argentina, el gobierno de la Alianza formada por la **UCR** y el **FREPASO** (1999-2001) nunca hizo pie; nació prácticamente muerto como resultado de la extrema fragmentación de la coalición de gobierno y la incapacidad del presidente Fernando de la Rúa. El breve interregno de la Rúa -un político tradicional de la maquinaria radical sin ideas ni carisma- no fue, entonces, más que una coda de la década menemista proveyendo, *malgré lui*, el trampolín para que el peronismo, en una nueva pirueta política, liquidara una de sus versiones y resucitara con otra. Porque efectivamente, el PJ fue un protagonista central del dramático desenlace del gobierno aliancista. A diferencia de Menem en 1989, que había asistido con relativa mesura a la clausura adelantada del gobierno de Alfonsín, el peronismo, conducido por el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y derrotado candidato presidencial en 1999, Eduardo Duhalde, jugó como una oposición desleal durante los últimos meses de 2001. Promovió la pueblada de diciembre de ese año motorizando cacerolazos, manifestaciones callejeras violentas, tomas de sedes subnacionales de gobierno no controladas por el peronismo y saqueos a comercios y transportes de carga. Obviamente no fue el único factor en el proceso, ya que muchas de las protestas fueron de carácter espontáneo y otras organizadas por grupos de la izquierda radical. Si bien los eventos violentos se desencadenaron en muchas ciudades del interior, los epicentros fueron el Gran Buenos Aires, Rosario y el centro mismo de la ciudad de Buenos Aires. En la capital se concentró la represión: en total fueron asesinados alrededor de cuarenta manifestantes por la Policía Federal y las policías provinciales desatando una violencia desmedida que fue un síntoma más de un gobierno extraordinariamente débil encabezado por funcionarios que no controlaban ni la moneda ni la fuerza.

En otros casos (Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia y Uruguay) también se produjeron transformaciones políticas de gran magnitud durante el cambio de siglo. En los cuatro primeros, los cambios involucraron fuertes turbulencias y la emergencia de liderazgos carismáticos que expresaron, de un modo u otro, la grave crisis de los respectivos sistemas partidarios. Cabe anotar que esa crisis ya llevaba desplegándose por dos décadas en el caso ecuatoriano y por una en Venezuela.

En ese sentido, las transformaciones en Colombia y Bolivia tuvieron un carácter especial pues involucraron la extinción de un esquema partidario que databa del siglo XIX (el de liberales y conservadores) y la desarticulación de uno de las escasas configuraciones de partidos que habían emergido como resultado de las transiciones de la década de 1980. Efectivamente, en Colombia, el fracaso de dos presidencias liberales y una conservadora -Gaviria (1990), Samper (1994) y Pastrana (1998)- en sus intentos de lograr acuerdos de paz con la guerrilla pavimentaron el terreno para que un político antioqueño del partido Liberal, Álvaro Uribe, lograra triunfar en las elecciones de 2002 sobre la base de proponer la liquidación militar de las FARC a través del fortalecimiento de las escuálidas fuerzas armadas colombianas y la política que ya había utilizado en Antioquia: involucrar a civiles en la represión y persecución de los guerrilleros y sus presuntos simpatizantes (grupos a los que bautizó **Convivir**). Desde la presidencia, Uribe creó un nuevo partido de tono personalista, el **Partido de la U**, reformó la constitución permitiendo la reelección presidencial inmediata y profundizó el ocaso de los partidos tradicionales. Incluso, a pesar de la frustración de su propósito en lograr una segunda reelección en 2010, Uribe se transformó en el eje de la política colombiana del siglo XXI. Cuando su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo sucedió ese año y cambió radicalmente la política hacia las FARC promoviendo un acuerdo de paz, logró frustrar la plena legitimación del acuerdo al oponerse exitosamente al plebiscito de 2016 e impuso al candidato que resultó victorioso en las subsiguientes elecciones presidenciales de 2018: Iván Duque.

En cambio, en 2003-2005, en Bolivia, el eclipse del sistema partidario con eje en el **Movimiento Nacionalista Revolucionario** puso fin a un régimen político de origen más reciente, en el marco de la transición de 1982-1985, en el cual el papel central lo jugó el MNR durante prácticamente dos décadas. El sistema partidario estaba integrado también por **Acción Democrática Nacionalista (ADN)** fundado por el ex dictador militar, Hugo Banzer, que mantuvo una coalición tirante con el MNR durante todo el período, una inestable coalición de izquierda y un par de partidos populistas creados por un locutor de radio y un empresario cervecero. El MNR, antiguo partido de cuño nacionalista y estatista que había protagonizado la revolución antioligárquica de 1952, todavía bajo la conducción de Victor Paz Estenssoro, retornó a la presidencia en 1985 al derrumbarse el gobierno de Hernán Siles Suazo y su coalición de izquierda. El viejo líder le imprimió un giro radical a la política económica: de hecho, Bolivia se transformó en el primer país en América Latina en implementar un programa neoliberal en democracia. El giro lo impulsó el ministro de economía, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien más tarde ocuparía la presidencia de Bolivia en dos ocasiones. Y fue precisamente en su segundo mandato, iniciado en 2002, en el contexto de una severa crisis económica y el rechazo a las exportaciones de gas a Chile, cuando numerosas protestas populares estallaron y tras una severa represión que causó casi una centena de muertes, Sánchez de Lozada se vio forzado a presentar la renuncia a la presidencia. Durante su salida y en la posterior y turbulenta transición de un largo par de años, Evo Morales, el líder de los cocaleros del valle del Chapare de Cochabamba, se transformó a través del **Movimiento al Socialismo (MAS)** en la principal figura de la política boliviana, proceso coronado por su ascenso a la presidencia en 2007.

La novedad más dramática, de todas maneras, se produjo en Venezuela, donde Hugo Chávez, después de protagonizar dos *pustchs* fallidos en 1992, aprovechó el vacío dejado por la autolicuación de los dos principales partidos, **Acción Democrática** y **COPEI**, para triunfar en las elecciones presidenciales de 1999. No fue ajeno a la decadencia de los partidos que habían manejado el período democrático inaugurado en 1958 el hecho que dejaran de lado a los dos políticos que los habían conducido por varias décadas, al propiciar el juicio político a Carlos Andrés Pérez en el caso de AD y tratar de frustrar la candidatura presidencial de Rafael Caldera por parte de COPEI. De todas maneras, Caldera logró ser elegido presidente en 1994 en unos comicios cuestionados por su falta de transparencia pero no pudo implementar políticas sustentables durante su mandato. La profundización de la crisis económica favoreció todavía más la creciente popularidad de Chávez quien al acceder a la presidencia encarnó centralmente el fenómeno de retorno de la política que en los primeros años del Siglo XXI iba a servir de inspiración a los otros tres políticos, Evo Morales, Néstor Kirchner y Rafael Correa, que compartieron con el militar venezolano los rasgos de lo que he definido como la **Doble Negación**. Los cuatro presidentes se pusieron en la vereda opuesta del neoliberalismo que había predominado en la región durante la década de 1990, independientemente de que en ningún otro caso se llegó a implementar de un manera tan plena como en Chile. Esta fue la *primera negación*, que implicó volver a abrazar postulados nacionalistas, incluso antiimperialistas, y estatistas con un sesgo distributivista en oposición a las banderas de apertura económica, privatización y desregulación que constituyen el núcleo del dogma neoliberal. Empero los cuatro presidentes no se limitaron a retornar al cauce del estatismo desarrollista de la **MEC**, cruzada que en el caso de Chávez adquirió un tono anticapitalista. También se erigieron en los críticos a la democracia de partidos que, según ellos, había servido de plataforma para la implementación de las políticas del neoliberalismo; esta *segunda negación*, que se expresó como una condena de la “politiquería” tradicional, fue facilitada por la circunstancia que todos ellos, excepto Kirchner, eran *outsiders* en relación al juego político convencional. En ese sentido, no resultó accidental que la crítica al juego partidario se extendiera a los mecanismos parlamentarios que tendieron a ser soslayados y en el caso del chavismo fueron finalmente subvertidos. Como resultado obvio de esa propensión, los cuatros presidentes que protagonizaron la Doble Negación reforzaron los rasgos presidencialistas del sistema político ejerciendo liderazgos de tipo carismático y mesiánico.

La excepción más notable a las tendencias de desinstitucionalización total o parcial del sistema político que operaron a principios del Siglo XXI fue la uruguaya. Quizás se constituyó en el único ejemplo en América Latina donde, si bien se produjo asimismo un cambio trascendente en 2005 con el acceso de la coalición de izquierda creada en 1971 -el **Frente Amplio** -a la presidencia, el hecho reforzó la gobernabilidad democrática. Efectivamente, la victoria del candidato de la coalición, Tabaré Vázquez, permitió superar la amenaza de quiebre político causada por el comportamiento de los dos partidos tradicionales, los Nacionales (Blancos) y los Colorados en la elección previa, en el año 2000, quienes habían manipulado tramposamente la legislación electoral. Hasta ese año el presidente era elegido como resultado de obtener la mayoría simple -es decir aplicando la regla del *First Past the Post*; ante el seguro triunfo de Vázquez, quien aventajaba claramente a los otros candidatos en las encuestas, los partidos tradicionales impusieron una modificación introduciendo la obligatoriedad de una segunda vuelta, lo que les permitió sumar sus votos logrando que Jorge Batlle, un tradicional político Colorado, finalmente se impusiera. La argucia, sin embargo, sólo logró una postergación del acceso del Frente Amplio a la presidencia que se materializó cinco años después. De ese modo se quebró

el duopolio que los partidos tradicionales habían mantenido desde el Siglo XIX permitiendo el primer acceso de la izquierda al poder en una coalición que incluía al partido político creado por los ex guerrilleros **Tupamaros**.

El otro sistema partidario que sobrevivió incólume el cambio de siglo fue el paraguayo. Sin embargo, Paraguay se ha ubicado en las antípodas de Uruguay; el sistema funcionó con un “partido eje” como ancla desde mediados del Siglo XX, la **Asociación Nacional Republicana (ANR)**, conocido como los *Colorados*, que se imbricó compleja y no democráticamente con la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989) y continuó hegemonizando la política nacional desde entonces. La ANR ha manejado ambiguamente las reglas republicanas y arrinconó a las oposiciones, amén de resolver sus disputas internas de manera violenta en varias ocasiones. En ese sentido la estabilidad del sistema partidario paraguayo tiene un atributo que se vincula tenuemente con la democracia política.

- 2** La *media década perdida* de 1998-2002 fue un punto de inflexión para la mayoría de los países sudamericanos y México. Cabe interrogarse, a partir de esa constatación, cuáles fueron los itinerarios seguidos desde entonces y las tendencias predominantes en la actualidad. En principio se pueden distinguir **varias rutas alternativas**. En la *primera*, seguida por Chile, Colombia y Perú, el pasado estado-céntrico ha quedado atrás y prevalece la tendencia en dirección a la estructuración de sociedades cuya dinámica económica, social y cultural es preponderantemente moldeada por la lógica de mercado y la creciente integración al mercado mundial.

Sin embargo, entre Chile, por un lado, y Perú y Colombia por el otro, hay una diferencia fundamental. En **Chile**, las últimas tres décadas se han caracterizado por el peso significativo del Estado -en la esfera productiva, represiva y como vehículo, no excluyente, en la vinculación entre la economía nacional y el mercado mundial- y por el funcionamiento sostenido del sistema de representación basado en los partidos. Ambos mecanismos proveían lo que parecía constituir, hasta mediados de 2019, un sólido pilar para el funcionamiento de un capitalismo de mercado que permitió reducir significativamente la pobreza, aunque no la desigualdad.

Por el contrario, en **Perú** y en **Colombia** ni el Estado ni el sistema de representación alcanzan el peso y la densidad capaces de contrarrestar o regular, siquiera mínimamente, la violencia ilegal y los impulsos desorganizadores/destructores de toda sociedad de mercado que coexisten con las pulsiones dinámicas vinculadas a la iniciativa privada. En el caso peruano, ambas facetas se manifiestan claramente: es una de las economías sudamericanas (junto a las de Paraguay y Bolivia) que más ha crecido en la segunda década del siglo actual. De todos modos, el dinamismo se basó, en buena medida, en la expansión de la economía informal y la extendida corrupción público-privada. A su vez, las debilidades se expresan en la incapacidad de las instituciones públicas para controlar las conductas ilegales, la operación de mafias de variados tipos en todos los estratos sociales y la violencia ejercida por actores públicos y privados en vastas zonas de frontera y en la desaparición práctica de los partidos políticos. En Colombia, el dato fundamental han sido las idas y vueltas con respecto al acuerdo con las FARC y, más en general, la capacidad para controlar la violencia en su territorio. En conclusión, en Chile es razonable postular que la matriz neoliberal democrática funcionó durante prácticamente tres décadas, después del fin de la dictadura, para ingresar en la actualidad en un *cul-de-sac* tortuoso y turbulento en el cual el sistema político-institucional muestra baja capacidad

para procesar los cuestionamientos al modelo económico. En Perú, después del fracaso fujimorista en instaurar una matriz neoliberal de sesgo autoritario, no se puede sostener que prevalezca un principio central que organice la imbricación entre el Estado, la sociedad y el sistema de representación. Y Colombia ha sido dominado durante el siglo XXI por un personaje con relaciones contradictorias con los temas de la democracia y el Estado de derecho: Álvaro Uribe. El último episodio de la saga colombiana ha sido precisamente la habilidad de Uribe para imponer la candidatura presidencial de Iván Duque, triunfante en las elecciones de 2018.

En una *segunda ruta*, que es la que transitan **Brasil, México y Argentina**, resulta más complicado precisar los atributos del formato matricial que predomina en la actualidad. En ninguno de los tres países los intentos de articular una matriz neoliberal se sostuvieron a lo largo de tanto tiempo, y a diferencia de Chile, Colombia y Perú, dichos intentos han estado plagados de ambigüedades. Además, como veremos, en cierto sentido subsiste residualmente la **MEC** (Matriz Estado-Céntrica) de Brasil, México y Argentina. Esta antigua matriz estaba apoyada en un Estado imbricado densamente con los grandes empresarios a través de mecanismos legales e ilegales. Esto facilita un fenómeno de colonización del Estado por actores privados, muchos de ellos con orientación rentística y corporativa. El Estado fue, además, el eje de complejos mecanismos de *regulación de la ciudadanía* de los sectores populares que asumieron diferentes formatos políticos.⁶

A lo largo del Siglo XXI en los tres países se han combinado:

- ◆ los jirones dejados por la prolongada descomposición de la MEC, proceso que todavía no ha culminado
- ◆ los espasmos programáticos de corte neoliberal promovidos por diferentes presidentes y que han reaparecido recientemente en Brasil
- ◆ los altibajos que sufrieron las economías de los tres países sometidos a los embates asociados a los comportamientos erráticos de los fondos de inversión, la evolución de los precios de los *commodities* exportables y, en el caso mexicano, a la sinuosa trayectoria del TLC inaugurado en 1994.

De todas maneras, en esta segunda ruta también cabe distinguir dos patrones diferenciados, que no dejan de estar vinculados, en cierta medida, a cómo se desplegó la MEC en cada caso. En **Brasil y México**, el proceso se caracterizó por un rasgo que no se dio en la Argentina: en la subruta brasileño-mexicana, la respectiva fórmula política atravesó un extenso período de relativa estabilidad que permitió que los mecanismos de tutela estatal sobre los sectores populares, y en menor medida sobre los empresarios, adquirieran bastante solidez. Eso resulta obvio para el caso de México, donde el rol estratégico que tuvo el PRI (por los menos hasta el mandato de Salinas) estructuró, a través de mecanismos represivos y de cooptación, los comportamientos materiales y simbólicos de los distintos actores sociales. El mito revolucionario sirvió de cemento del régimen político: también el soporte de una cultura oficial que impregnó la vida cotidiana de los mexicanos hasta las postrimerías del siglo XX. En Brasil, a su vez, la periódica intervención de las fuerzas armadas en la vida política, sobre todo en las cuatro décadas posteriores a 1945, introdujo una cuota de inestabilidad en la superficie; sin embargo, los militares también actuaron como un “poder moderador”, como bien apuntó Alfred Stepan, al constituirse como un factor de última instancia que equilibraba la influencia de otros actores políticos, pero balanceando sus respectivos pesos sin llegar a eliminarlos (1971). Esta suerte de “gobierno múltiple” combinaba, no sin problemas, variadas redes de poder entre las que se destacaban, además de las controladas por los militares, la

6. Presenté originariamente el concepto de **Matriz Estado Céntrica (MEC)** en “Más allá de las transiciones a la democracia” publicado en *Estudios Políticos*. Wanderley Guilherme dos Santos, por su parte, ha desarrollado el concepto de “ciudadanía regulada” en *Cidadania e Justica*; (1979). Cabe anotar que los mecanismos de regulación, o tutela, operaron a través de la ley y la constitución en Brasil (varios de ellos pervivieron hasta la reforma constitucional de 1988) mientras que en México funcionaron como engranajes del partido/Estado y en Argentina como fenómenos asociados a los liderazgos carismáticos de Perón y sus sucesores.

de los presidentes apoyados por el sufragio popular, la corporativa empresarial/sindical y la de los gobernadores estatales de base territorial clientelística (1993, p.80). Como apunta correctamente dos Santos, uno de los correlatos de este patrón de soberanías concurrentes ha sido que los “individuos aislados, no poliárquicos, pobres en lazos de reconciliación social, prefieren negar el conflicto a admitir ser víctima de él” (1993, p.80). Una de las causas de la baja conflictividad que predominó hasta fines del siglo XX fue el aislamiento de aquellos brasileños, en especial los más pobres, que sólo experimentaban la faceta represiva de la tutela estatal.

El itinerario argentino fue radicalmente diferente del México y Brasil. A partir de 1955, la fórmula política de la MEC fue decididamente inestable por dos razones que estaban asociadas a un par de actores clave de la política nacional: los militares y el peronismo. Las múltiples intervenciones de las fuerzas armadas a partir de 1951, cuando estalló la primera (y fracasada) insurrección contra un gobierno constitucional (el de Juan Perón) socavaron sistemáticamente las instituciones asociadas al voto popular sin generar otras alternativas. Los golpes y planteos militares incluso afectaron a los propios gobiernos comandados por los generales desde aquel año hasta 1981, además de desencadenar la caída de cuatro gobiernos electos en 1955, 1962, 1966 y 1976.⁷ Por su parte, el peronismo se caracterizó por una diferencia fundamental con el partido hegemónico mexicano y con el varguismo. Mientras que el **PRI** se mantuvo en el poder hasta 2000 para regresar a él temporariamente entre 2012 y 2018, y por su parte el varguismo sólo sobrevivió diez años a la muerte de su conductor, el peronismo, si se deja de lado el turbulento interregno de 1973/1976 -durante el cual trasladó su guerra interna al Estado y tuvo que metabolizar la desaparición de Perón cuando había retornado a la presidencia- sobrevivió más de treinta años en el llano, es decir, no se extinguió a pesar de haber estado alejado del poder desde 1955 hasta 1987/1989.⁸ La supervivencia del peronismo expresó tortuosamente la autonomía de la sociedad civil argentina, es decir, su capacidad de resistir los avatares de la política, como así también de sobrevivir los altibajos que la economía argentina comenzó a experimentar especialmente a partir de 1975/1976. Esta resistencia se manifestó a menudo como exigencias de reparación, es decir como demandas a la restitución de las bondades de “edades de oro”, a menudo opuestas entre sí, a las que ubicaba en diferentes épocas del pasado. La principal consecuencia del inevitable fracaso de los sucesivos gobiernos que se sucedieron a partir de la transición a la democracia de 1983 en restituir la mítica situación de bienestar fue que dichos gobiernos experimentaron, tarde o temprano, situaciones en las cuales el retiro mayoritario del apoyo ciudadano tornó crecientemente difícil la gobernabilidad de la Argentina; un corolario económico de este patrón fue la repetición, a partir del último cuarto del siglo pasado, de ciclos del tipo *crash and go*, en los cuales cada espasmo expansivo llevaba inevitablemente a un colapso de gran magnitud.

En resumen, tras un largo proceso de crisis y parcial extinción, que aún no está plenamente agotado, el legado de la MEC en Brasil, México y Argentina ha pesado de modo dispar durante el Siglo XXI en los cinco casos hasta aquí descriptos. En los dos primeros, el principal efecto del proceso de desorganización y extinción parcial de la Matriz Estado-Céntrica ha sido el *pronunciado debilitamiento* de algunos de sus atributos que favorecían la estabilidad social y política. Esa estabilidad, que en México incluso apareció aludida por la designación que se le impuso a los programas económicos de los gobiernos de la época de oro del PRI, fue la base sobre la que se asentó el dinamismo que ambas economías mantuvieron hasta la década de 1980.⁹ La estabilidad social (es decir, la ausencia de cuestionamientos colectivos significativos a una estructura social jerárquica controlada desde arriba) se extendió a los programas gubernamentales retroalimentando, de tal modo, sus

7. No sólo Juan Perón: Arturo Frondizi, Arturo Illia y María Estela Martínez de Perón fueron desalojados de sus cargos de presidente por los altos mandos de las fuerzas armadas argentinas. Parecido destino sufrieron cinco presidentes de facto -los generales Lonardi, Onganía, Levingston, Viola y Galtieri- como así también media docena de comandantes en jefe del ejército que ejercieron poderes de hecho en varias presidencias civiles y militares.

8. La dictadura militar instalada en 1964 en Brasil no sólo depuso sin oposición alguna al heredero de Vargas, Joao Goulart, sino que no encontró obstáculos, ni en la sociedad civil ni en la clase política, para abolir los dos partidos creados por Vargas en 1945, el PTB y el PSD, y al resto de los partidos políticos.

9. El período durante el cual Arturo Ortiz Mena, como Secretario de Hacienda y Crédito Público, fue el funcionario clave en el diseño e implementación de las políticas económicas bajo los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz (1958-1970) fue conocido como el del *Desarrollo estabilizador*. Con anterioridad, Ortiz Mena había desempeñado el importante cargo de director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

logros, principalmente la sinergia entre el Estado y las empresas privadas y la capacidad de controlar los comportamientos potencialmente conflictivos de actores clave, especialmente de los trabajadores organizados y los campesinos, tanto de aquellos integrados plenamente a la economía de mercado como de los que no lo estaban. En ambos casos -en Brasil, especialmente en los estados del sur y del centro sur- también pesó significativamente durante medio siglo (1930/1980) el crecimiento de una vasta clase media, enclavada tanto en el sector público como en el privado, que recibía subsidios directos e indirectos del Estado, sobre todo en materia de educación, salud y seguridad social. Los beneficios también favorecían el acceso a la vivienda y al consumo de bienes de uso duradero, como los automotores. En Brasil, estos beneficios no eran percibidos como privilegios sino como una retribución natural vinculada a la superioridad cultural que los sectores medios sentían con respecto a los pobres. Uno de los principales atributos de los gobiernos del PT a partir de 2003, sobre todo durante las presidencias de Lula hasta 2010, cuando los índices relativamente elevados de crecimiento del producto interno lo favorecieron, fue la parcial erosión de esa distancia social.

Contrariamente, en la Argentina, el principal legado de la MEC fue un grado significativo de *persistencia residual*. El esfuerzo más sistemático por erradicarla se hizo durante la década menemista (1989/1999) cuando se avanzó persistentemente en tres áreas: la privatización de empresas públicas y de la seguridad social, la transferencia de los servicios de educación y salud a los gobiernos provinciales (que se tradujo en su deterioro) y el desmantelamiento de prácticamente todos los ramales de larga distancia de la extensa red ferroviaria.¹⁰ En relación a los otros dos capítulos del recetario del Consenso de Washington, es decir la desregulación y la apertura de la economía, los avances fueron parciales y erráticos. En particular, la apertura de la economía fue restringida y además estuvo apoyada en pies de barro, es decir en la sobrevaluación de la moneda asociada a la convertibilidad peso/dólar. Esta política generó inevitablemente crecientes déficits en la balanza comercial que sólo pudieron ser financiados a través del crecimiento de la deuda externa. Después del “aviso” de la *crisis del Tequila* en 1995, el derrumbe de la convertibilidad, que arrastró a todo el sistema bancario y llevó a Argentina a declarar el *default* de la deuda externa más voluminoso de la historia mundial, se produjo entre 1999 y 2001.

El talón de Aquiles del programa menemista, empero, no fue sólo económico. Como analizaremos en el próximo punto, también tuvo que ver con la reconfiguración del funcionamiento político electoral del peronismo, fenómeno que se reiteraría bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

10. Las empresas privatizadas más importantes fueron **Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Teléfonos del Estado, Obras Sanitarias, Agua y Energía Eléctrica** (más bien desmantelada), **Aerolíneas Argentinas** y numerosas empresas de servicios de propiedad provincial.

- 3 En esta última sección me concentro en algunos de los casos analizados en las secciones generales para destacar ciertos rasgos particulares que han influido sobre la configuración actual de la política nacional en esos países.

Perú

La abortada consolidación de la experiencia autoritaria liderada por Alberto Fujimori en 2000 abrió una puerta para el retorno de los partidos al centro de la escena política peruana. En las dos décadas que siguieron los partidos confirmaron que la declinación iniciada en la década de 1980 no se había interrumpido; al contrario se profundizó. Prácticamente todos los partidos se han convertido en meras etiquetas (algunas de ellas portando siglas

11. Varios analistas han destacado que la causa principal de las disputas entre los dos hermanos es que Keiko buscó, sin éxito finalmente, que su padre no termine en prisión, pero que, al mismo tiempo, procuró evitar que ejerza influencia en la política nacional. En cambio Kenji, más cercano a su padre, se movió en la dirección contraria con resultados igualmente desfavorables para toda la familia.

12. Keiko presentó su candidatura a la presidencia en 2011 y 2016 y en ambas ocasiones llegó a la segunda vuelta siendo derrotada por escasos votos por Ollanta Humala y PPK. Sobre todo en el segundo caso, su derrota se debió a que prácticamente todas las fuerzas opositoras se unieron para impedir que accediera a la presidencia. De todos modos, Keiko había quedado al frente de la mayoría en el congreso que cesó en sus funciones en 2019, pues su partido, Fuerza Popular, controlaba 73 de los 130 escaños.

13. También el *aprisimo* mantuvo una presencia, mucho más residual que el fujimorismo.

14. Cfr. "Un Suicidio, muchas muertes" en Nueva Sociedad; Mayo 2019. *Todos los ex presidentes del último ciclo democrático se encuentran hoy investigados básicamente por dos temas: financiamiento ilegal de campañas políticas y recepción de pagos ilegales por parte de Odebrecht y otras grandes constructoras. Frente a este panorama, los caminos de los políticos han sido diversos. El suicidio de Alan García es ciertamente el episodio más dramático de toda esta saga pero no es ni remotamente el único. El ex presidente Alejandro Toledo se fugó a Estados Unidos -donde hoy se tramita un pedido de extradición- frente a las pruebas cada vez más contundentes que lo involucrarían en la recepción de sobornos. Por otra parte, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasaron casi diez meses en prisión preventiva. Hace unos días el fiscal a cargo del caso ha solicitado para ellos 20 y 26 años de prisión respectivamente. Por último, Pedro Pablo Kuczynski, no solo vio allanado su domicilio tan sólo 24 horas después de haber dejado de ser una de las personas más poderosas de Perú, sino que ha debido enfrentar una prisión preliminar primero y luego una domiciliaria."*

extravagantes que incluso pueden ser compradas en un peculiar mercado de habilitaciones electorales) que no tienen arraigo alguno en la ciudadanía peruana ni concitan mínimas lealtades por parte de los políticos que no vacilan en mudarse de una a otra.

Tras el breve interregno de Valentín Paniagua se sucedieron en la presidencia Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Este último renunció en 2018 cuando enfrentaba a su inminente destitución por parte del Congreso, siendo sustituido por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Ninguno de los ocupantes de la presidencia logró consolidarse siquiera mínimamente: todos transitaron sus mandatos con bajísimos índices de aprobación y los tres primeros los concluyeron sin tener posibilidad de influir en la carrera sucesoria (ni siquiera pudieron llegar a promover un eventual *delfín*). En ese sentido, los presidentes fueron la otra cara de la moneda en relación a los partidos políticos: ni unos ni otros pudieron constituirse en articuladores de un sistema político de por sí extremadamente débil. El corolario es que durante el siglo XXI Perú no alcanzó a consolidar una autocracia personalista ni a armar una democracia de partidos. De todas maneras, se debe reconocer que hubo al menos un intento de armar un híbrido de ambos tipos de régimen que estuvo a cargo no de Alberto Fujimori -quien transitó casi veinte años entre exilios y estadías en prisión- sino de su hija Keiko, quien se convirtió en la dirigente con más peso dentro del fujimorismo, incluso protagonizando abiertos enfrentamientos con su hermano Kenji (que al igual que ella, ocupó una banca en el congreso unicameral peruano durante buena parte del siglo XXI) hasta terminar ella también en prisión.¹¹ En verdad, una paradoja de la política peruana de la última década y media ha sido que ella se ha movido, en buena medida, al ritmo de las iniciativas y las fechorías del fujimorismo en su búsqueda de retorno al poder, pero el resultado ha sido su repetido fracaso en capturar nuevamente la presidencia.¹² El fujimorismo, de hecho, es prácticamente el único partido de existencia real en el país; incluso cuenta con algunos apoyos sociales en los sectores informales, tanto empresariales como trabajadores.¹³ Sin embargo, se enfrenta en la actualidad con dos serios problemas; el primero es que aparece como el epítome de todos los defectos que se le adjudican a la clase política peruana que atraviesa un período de todavía mayor desprestigio que el que sufre habitualmente. De acuerdo al *Latinobarómetro*, durante la segunda década del siglo los peruanos han sido los políticos más desprestigiados de América del Sur. El segundo problema es más grave aún; tanto Alberto como Keiko están en prisión; el padre fue condenado por las matanzas y otras violaciones a los derechos humanos producidos durante su presidencia; la hija está en prisión preventiva de 36 meses como acusada de lavado de dinero recibido corruptamente de la firma brasileña Odebrecht en ocasión de su campaña presidencial de 2011.

Los Fujimori, empero, no están solos en esa incómoda posición. A propósito del suicidio de Alan García acaecido en Mayo 2019, Carlos Adrianzen describe una apabullante realidad, que como él señala se extiende a numerosos políticos a nivel nacional y subnacional y también a muchos integrantes del poder judicial.¹⁴ Esta situación fue advertida por el inesperado heredero de la presidencia, Martín Vizcarra, un ignoto pero astuto ex gobernador departamental que comenzó a jugar una pulseada con el desprestigiado congreso procurando reformas que recortaran el poder de los parlamentarios y, de paso, limitaran el espacio para continuar las prácticas corruptas: hasta ahora ha tenido éxito en la mayoría de los casos. De los dos principales obstáculos a su intento, uno, Alan García secundado por los restos del viejo aprismo, ha literalmente muerto y otro, el fujimorismo, se bate en retirada. El interrogante que se plantea hacia el futuro es cómo se movilizarán los actores clave de la economía peruana, es decir las familias de la oligarquía comercial y financiera con base en Lima y las empresas del sector minero, en relación al proyecto

de limpieza de la política encarado por Vizcarra. En las últimas dos décadas, los grupos capitalistas más poderosos se han beneficiado con la postración del Estado y no parece probable que les interese que se fortalezca ningún actor político que pueda plantear verosíblemente la posibilidad de revertir esa situación. Quizás el único fenómeno que va contra la corriente del creciente debilitamiento del estado y la sociedad civil es la influencia un complejo universo de ONG, asociaciones gremiales y movimientos indígenas. Los procedimientos de **Presupuesto por Resultados (PpR)** y **Incluir para Crecer** muestran una capacidad para innovar, romper enclaves en la burocracia nacional, y aceptar *stakeholder engagement* para representar a los sectores interesados, que van más allá del sector privado. El país formuló el *Plan Bicentenario 2021* con metas para la erradicación de la pobreza, y la mejora del sistema educacional, de salud y de infraestructura.

Chile

Los últimos años de la MEC se desplegaron durante los sociales y económicos gobiernos demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva y socialista de Salvador Allende (1964 hasta 1973), cuando el país registró avances significativos en favor de las clases populares, especialmente en el campo. Con el golpe militar en 1973, Chile experimentó el quiebre más dramático de la matriz estado-céntrica. Con los llamados *Chicago Boys*, la dictadura del General Augusto Pinochet (1973 a 1990) cerró la época de la MEC e implementó una serie de medidas neoliberales. El gobierno militar procuró instalar un modelo económico basado en un mercado fundamentalmente desregulado, las privatizaciones de empresas estatales, y un Estado con menor presencia en la sociedad, todo ello en un marco de crímenes, represión y violación de derechos humanos. Uno de los resultados fue el surgimiento de un sector capitalista favorecido por la legislación impuesta, que se benefició de políticas antisindicales y la desregulación para crecer, y extraer extraordinarios dividendos, que le han permitido a estos empresarios protagonizar un proceso de acumulación no desdeñable que ha facilitado que firmas chilenas se hayan expandido por el resto de Sudamérica. El intento de consolidar una matriz neoliberal avanzó significativamente quedando el campo sembrado para el poder de la iniciativa privada en los gobiernos democráticos siguientes. El resultado del plebiscito de 1988, que significó la derrota de Pinochet y la subsiguiente elección presidencial, en la cual el candidato de la dictadura fue claramente derrotado, representó un rechazo al autoritarismo del gobierno militar pero no llevó al abandono de sus políticas económicas.

Los gobiernos de la **Coalición de la Concertación** (Patricio Aylwin, Eduardo Frei Torres Tagle, Ricardo Lagos, y Michelle Bachelet (1990 hasta 2010) mantuvieron en gran parte las reformas económicas de la dictadura. El gobierno de Aylwin se concentró en la implementación de programas para recuperar una cierta capacidad del Estado, sin modificar las privatizaciones instrumentadas durante el gobierno militar ni los mecanismos principales de acumulación y concentración que fortalecieron a unos pocos grupos económicos. Durante el gobierno de Frei, el Estado mejoró el sistema educacional y de salud, aumentó el salario mínimo, obteniendo una reducción en los niveles de pobreza, sin eliminar, empero, la mayoría de las reformas económicas y financieras implementadas por la dictadura pinochetista. La presidencia de Lagos siguió un camino intermedio entre el predominio estatal y la iniciativa privada, incluso con la firma de siete tratados de libre comercio que incluyeron a los Estados Unidos y China. En el sector social se aumentó el número de años de educación pública obligatoria a doce, se inauguraron programas de salud para atender a grupos de bajos ingresos y se dispusieron resarci-

mientos a las víctimas de tortura bajo la dictadura. En su primer mandato Bachelet, a su vez, enfatizó los programas sociales y educacionales para proteger a las mujeres, los niños, y los pobres, además de instalar un nuevo sistema de transporte para Santiago. Estos programas tuvieron el efecto de aumentar el presupuesto de gastos pero los presidentes socialistas, es decir Lagos y Bachelet, se resistieron a utilizar el superávit de los ingresos de cobre (creados por el *boom* de precios de *commodities*) en políticas de redistribución inmediata. En su segunda elección (a partir de 2014) Bachelet se fijó como meta una serie de reformas en materia de educación, sistema tributario, el laboral y el de previsión, además de promover la despenalización parcial del aborto y del cultivo de marihuana. También se propuso sancionar una nueva Constitución para eliminar los últimos residuos de los enclaves autoritarios de la Constitución del gobierno militar de 1980. La mayoría de estas propuestas no lograron avances significativos.

En un principio, el sector privado no se opuso a las políticas de la Concertación, que dejaron espacio suficiente para manejar sus negocios al lado de un Estado bastante eficiente. Durante la presidencia de Sebastián Piñera (2010-2014), un empresario exitoso del bloque opositor a la Concertación y militante del partido **Renovación Nacional**, el gobierno se inclinó aún más hacia la derecha, dando más oportunidades a los intereses económicos y financieros privados. Su gobierno enfrentó una serie de contratiempos (terremotos, incendios forestales) pero sobre todo, protestas masivas, especialmente de estudiantes, los cuales pusieron límites a sus intentos de enfatizar los aspectos neoliberales de la sociedad chilena. Por otro lado, el predominio de la visión empresarial por sobre el carácter público de las instituciones debilitó fuertemente la institucionalidad estatal.

A partir de la segunda década de 2000 se produce un auge de protestas y movilizaciones, especial aunque no exclusivamente, indígenas, medioambientales y estudiantiles. Desde mediados de los 2000, los ciudadanos y las ONG utilizando las redes sociales buscaron competir con los mecanismos tradicionales que utilizaban los medios de comunicación concentrados por los grupos económicos y en ausencia de medios realmente orientados por el interés público. Las movilizaciones de 2011 y la escasa participación electoral en el momento en que la candidatura de Bachelet proponía profundas reformas dan cuenta de la ruptura entre la institucionalidad política y los partidos y la sociedad, rasgo que fue el fundamental de la matriz chilena en todo el siglo XX. Con la alternancia de poder producida con la segunda elección de Bachelet y la Concertación -rebautizada como la **Nueva Mayoría** a raíz de la incorporación del partido Comunista- Chile buscó superar el camino de neoliberalismo modificado y progresismo limitado seguido hasta entonces, aunque sin los resultados esperados. Pero el segundo mandato de Bachelet evidenció las dificultades para crear mecanismos que redujeran efectivamente las brechas sociales, fortalecieran el Estado, evitaran la fragmentación social, y movilizaran a la sociedad para generar acciones conjuntas. Como resultado, apareció una imagen que sugería la debilidad de la dirección política. La iniciativa para reformar la Constitución generó posiciones duras de parte de la oposición en algunos aspectos, poniendo en riesgo la viabilidad de reemplazar totalmente el documento legado por la dictadura. Varios casos de corrupción vieron la luz, implicando tanto al sector público como al privado, y también a figuras importantes del gobierno. El debilitamiento de la identidad de la población con los partidos políticos redujo significativamente su capacidad de representación, confirmando la ruptura mencionada entre política y sociedad. La creciente deslegitimación de las instituciones del modelo económico neoliberal (previsión, relaciones laborales, salud, educación) y de la institucionalidad política para superarlo, no encuentra aún nuevos actores sociales y políticos para encauzar su transformación. Cabe preguntarse

qué relación tiene este fenómeno con la nueva victoria de la coalición de derechas en la elección presidencial de 2018, que ha llevado al retorno de Piñera al máximo cargo, resultado facilitado por el desmembramiento de la centro izquierda -ya que la **Democracia Cristiana** presentó una candidata propia- y con la creación de una nueva coalición de izquierdas crítica de los gobiernos de la Concertación, el **Frente Amplio**, que estuvo a punto de ingresar en la segunda vuelta de la elección desplazando a la **Nueva Mayoría**.

México

El itinerario político, económico y social de México desde fines del siglo pasado ha estado marcado por la desarticulación de la MEC centrada en el PRI, incluido el último proyecto serio de reorganizarla sobre la base de la preservación de su esencia autoritaria y la integración a la economía norteamericana, es decir el encarnado por Carlos Salinas de Gortari. Quizás se transformó en una metáfora sugestiva para el fin de una saga que había comenzado con una revolución que se extendió durante casi una década (1910/1920) prolongándose en la *Guerra Cristera* (1926-1929). La revolución y el exterminio de los católicos (casi todos campesinos) había causado centenares de miles de muertes y exiliados y acabó como comenzó, es decir, a los tiros: los que dispararon los primeros días de 1994 los fusiles de los integrantes del **EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)** en Chiapas -encabezando una fracasada aventura política que fue un éxito simbólico y cultural- y el que terminó con la vida del candidato priista a la presidencia, y seguro ganador de las elecciones de ese año, Luis Donaldo Colosio. La debacle del PRI, materializada durante el sexenio del inesperado heredero del asesinato de Colosio, es decir Ernesto Zedillo (1994-2000), llevó a que el siglo XXI se abriera con un espejismo: parecía que una nueva fórmula política se estaba instalando en México, el **Partido Acción Nacional (PAN)** ganó dos elecciones presidenciales consecutivas y el cuadro electoral esbozaba un formato tripartidario prolijamente ordenado de derecha a izquierda. Si bien el PRI experimentó claros retrocesos en dichas elecciones -terminó como un lejano tercero en las elecciones de 2006 en las que el candidato del PRD de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador, posiblemente fue despojado del triunfo- el viejo partido hegemónico mantuvo una respetable bancada parlamentaria y, sobre todo, retuvo el control de numerosas gobernaciones, incluida la del decisivo estado de México.¹⁵ Sin embargo, las dos presidencias panistas, las de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) no consiguieron mejorar las tasas de crecimiento precedentes -en realidad se redujeron a la mitad en relación a las ya mediocres de la década previa- y además fueron inermes testigos del dramático deterioro de la capacidad del Estado mexicano para controlar la violencia desatada por los carteles de la droga y otras mafias criminales dedicadas a los secuestros y la trata de personas, a menudo en complicidad con los cuerpos policiales. El problema empeoró durante el sexenio de Calderón, pues su decisión de involucrar al Ejército en las tareas represivas no hizo más que expandir las complicidades de las diferentes fuerzas armadas públicas con el crimen organizado (y también con el desorganizado) y tuvo como resultado que México se convirtiera en uno de los países de más alta tasa de asesinatos en el mundo.¹⁶ Una de las consecuencias adicionales del fin de la pretensión de que el Estado monopolizaba el ejercicio de la violencia fue el uso de la justicia por mano propia y la aparición de numerosos casos de milicias privadas que llegaron a ejercer el control en pueblos y comarcas campesinas enteras. Algunos de los ejemplos que comenzaron como un intento de actores de la sociedad civil de paliar la ausencia de policías mínimamente competentes y honestas, como en Michoacán, pronto degeneraron en bandas que no se diferenciaban en mucho de los grupos criminales.

15. El estado de México, que prácticamente rodea al Distrito Federal, es el más poblado del país y contribuye con 10% del PBI. Peña Nieto fue en parte factura de un grupo informal de prominentes dirigentes del PRI, el de Atlacomulco, que ya desde la década de 1950 había influido en la selección de altos funcionarios nacionales y estatales, incluso presidentes, y que provenía originariamente de esa pequeña ciudad mexicana.

16. Una de los efectos más negativos de la involucración del ejército mexicano en la represión de los carteles de la droga fue que al lograr descabezar a algunos de los más notorios como el de Sinaloa, fue que los grupos criminales se fragmentaron en múltiples organizaciones mucho más difíciles de controlar y que en sus sangrientas batallas para derrotar a bandas rivales han extendido la violencia a prácticamente todo el territorio nacional, incluidos resorts turísticos previamente respetados.

17. El efecto más visible del aumento del precio de combustibles ha sido la aparición de una nueva actividad ilícita: el robo de los mismos “ordeñando” los oleoductos. Los *huachicoleros*, o sea los ladrones de combustible, se han multiplicado por todo el territorio y en varias ocasiones ya han causado terribles accidentes, como en enero de 2019 en Hidalgo, donde 93 personas perecieron en un incendio generado en un robo en curso en el cual la Policía, que era testigo del hecho, eligió no intervenir.

18. El número de homicidios dolosos durante los dos últimos años de Peña Nieto alcanzó niveles nunca registrados (34.000) superando los peores años de la anterior presidencia. Además, en septiembre de 2014 se produjo el asesinato en Iguala (Guerrero) de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa siendo sus cadáveres incinerados. En el suceso parece innegable que estuvieron involucrados la Policía del Estado, grupos criminales y el mismo Ejército. El gobierno de Peña Nieto no hizo prácticamente nada en los siguientes cuatro años. Recientemente, las Naciones Unidas señalaron, a través de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que lamentaba que el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios de 2015 por la Procuraduría General de la República como la “verdad histórica”. La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture.

El fracaso del **PAN** ha abierto la puerta a una alternativa que podría parecer sorprendente y que resultó posible porque el colapso de la matriz priista no trajo el fin del PRI. A partir del triunfo del ex gobernador de ese partido del estado de México, Enrique Peña Nieto, en las elecciones presidenciales de 2012, en realidad, se asistió al retorno del antiguo partido generado por la revolución mexicana, pero esta vez, de modo tortuoso, como protagonista de una extraña voltereta de dos episodios. El primer episodio fue protagonizado por la maquinaria tradicional del PRI: Peña Nieto y el elenco que lo acompañó en su gestión constituían el núcleo duro del ala neoliberal y autoritaria del PRI que históricamente había controlado máquinas electorales en todo el país, imbatibles en varios estados importantes como México, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, entre otros. Peña Nieto triunfó claramente en las elecciones del 2012 y pareció inicialmente tener la fuerza para revertir, aunque fuera parcialmente, el imperio de la violencia ilegal e implementar reformas pro mercado que el mismo PRI había obstaculizado durante las dos presidencias del PAN, en especial una reforma energética que incluyera la apertura de la explotación del petróleo a la iniciativa privada y la liberación del precio de los combustibles.¹⁷ Empero, al cabo de un par de años el gobierno de Peña Nieto se convirtió en una repetición agravada del período panista: el crecimiento económico continuó siendo anémico y a la evidencia del fracaso en revertir el síndrome de violencia, se agregó la visibilización de la corrupción generalizada que permeaba al régimen, comenzando por el propio presidente y su familia.¹⁸ El desprestigio afectó por igual a los tres grandes partidos: a la corrupción innegable de muchos de los funcionarios del PRI se sumó la percepción que el PAN le prestaba apoyo a las ineficaces políticas gubernamentales -algunos críticos bautizaron irónicamente la confluencia como el PRIAN- mientras que el PRD se pulverizó en grupúsculos visiblemente corruptos en particular en distritos donde había llegado a ocupar el gobierno, como el Distrito Federal, Morelos y Guerrero. En ese clima, el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) quien había sido regente del DF y dos veces candidato a presidente por el PRD, renunció al partido en 2015 y dio inicio a un fenómeno que se puede considerar como el segundo episodio de retorno del PRI. AMLO había completado el *cursus honorum* de todo político progresista en México: después de militar casi veinte años en el PRI había adherido a la **Corriente Democrática** en 1988, precursora del PRD y vehículo de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de ese año. Sin embargo, AMLO percibió el agotamiento de los partidos políticos tradicionales y creó un nuevo movimiento al que bautizó como **MORENA (Movimiento Regeneración Nacional)** que utilizó exitosamente como su plataforma para la candidatura presidencial en 2018. El triunfo de López Obrador fue arrasador: no sólo superó ampliamente la suma de votos de todos los otros candidatos -algo que no ocurría desde 1988 cuando se había manipulado la votación para que Salinas apareciera con algo más del 50% de los votos- sino que fue votado por más de 30 millones de mexicanos, lo que le permitió alcanzar la mayoría absoluta en ambas cámaras del congreso. ¿En qué sentido se podría sostener la hipótesis que AMLO es, a pesar de sus críticas al sistema partidario predominante, un nuevo episodio de retorno del PRI? López Obrador, por un lado, rescató la cara del PRI que había quedado sumergida desde la década de 1980, es decir los postulados desarrollistas y nacionalistas vigentes hasta la presidencia de José López Portillo (1976-1982). Resulta revelador, en ese sentido, que en uno de sus discursos inaugurales el nuevo presidente elogiara la figura de Ortiz Mena, quien fue, como ya apuntamos, el inspirador y ejecutor de las políticas económicas y sociales de México durante casi dos décadas. Al menos simbólicamente, al menos, AMLO se instaló en la vereda contraria del sesgo neoliberal impreso a las políticas económicas desde la década de 1980. El interrogante que surge

inmediatamente es si se podría retomar el sendero del desarrollismo mercado-internista habiéndose México incorporado al NAFTA y teniendo en cuenta los efectos que dicha estrategia ha tenido tanto sobre la industria -con la plena integración de las plantas automotrices y otros sectores a las cadenas de producción norteamericanas- como sobre la agricultura -con la crisis del México maicero tradicional y la masiva importación de alimentos desde Estados Unidos-. Por otra parte, en este punto surge otro interrogante aún más crucial: ¿en qué medida el soplo republicano que López Obrador ha insuflado en la política mexicana se combina con tradiciones priístas muy arraigadas, algunas de las cuales él mismo porta? Es indudable que AMLO ha tenido una trayectoria de honestidad en su vida política que lo sitúa muy por encima de los estándares mexicanos y que él también expresa una preocupación por mejorar la transparencia de la gestión pública. Sin embargo, al mismo tiempo, no se aparta de patrones de conducta del viejo estilo e incluso los acentúa, tales como el personalismo y la tendencia a centralizar la gestión, presentándose, en la práctica, como el “salvador de la nación”. Asimismo, debe lidiar con personal político y cuadros de funcionarios de la nueva administración proveniente de los viejos partidos, incluso los encargados de la seguridad pública y de las policías estatales, en otro (1996, p.91).¹⁹

19. El estilo presidencial priísta, al cual ciertamente López Obrador no es ajeno, es crudamente analizado por Sergio Zermeno en *La Sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo*. México: Siglo XXI, 1996. Zermeno subraya precisamente la modalidad del presidente (*de actuar*) en forma casi personal y sin mediaciones organizativas (p. 91) como uno de los rasgos típicos de dicho estilo.

Finalmente, desde el primer día de su mandato, López Obrador ha tenido que lidiar con un grave problema con nombre y apellido: Donald Trump. Como es sabido, ya desde el comienzo de su campaña en 2016 el nuevo presidente de Estados Unidos ha utilizado a México como principal blanco de su táctica de culpar a los latinoamericanos por el incremento de la criminalidad en su país y por el ingreso de drogas ilegales: en la inauguración de la campaña para la próxima elección, la de 2020, está reiterando, incluso en una versión más beligerante, la hostilidad hacia México y la humillación de sus gobernantes. La amenaza que representa Trump es doble: en primer lugar, en términos materiales porque a través de sus políticas migratorias y arancelarias puede chantajear a un gobierno cuyas fortunas están atadas al funcionamiento de una economía y una sociedad profundamente integradas, de modo asimétrico, a los Estados Unidos. En segundo lugar, en términos simbólicos, en especial porque López Obrador ha levantado como una de sus banderas el rescate de la soberanía mexicana en contraste con las políticas de sus predecesores, que presuntamente se habían doblegado frente a los intereses extranjeros. Y enfrente el presidente mexicano tiene a un personaje que no vacila en humillar a sus víctimas planteando exigencias que nunca se sabe en qué punto las considerará respondidas satisfactoriamente.

Argentina

Los quince años recientes han sido marcados por la persistencia residual de dos rasgos de la MEC que entró en crisis durante el último cuarto del siglo pasado:

- ◆ la sobrevivencia del peronismo como actor central de la política por medio de una capacidad para redefinirse permanentemente adecuándose a los cambios sociales y culturales en función de sus aptitudes para conquistar y reconquistar el poder
- ◆ la resistencia de los actores que se habían generado y crecido dentro del marco de la MEC a permitir que los derechos y prerrogativas asociados a la vieja matriz fueran sustancialmente alterados en un proceso de transición a una matriz alternativa, neo-liberal o no.²⁰

20. Juan Carlos Torre denomina irónicamente al peronismo como *el partido de todas las estaciones*.

21. De acuerdo al INDEC, los datos de evolución del PBI argentino para los últimos años son: 2015, 2,7%; 2016, -2,1%, 2017, 2,9% y 2018, -2,3% lo que confirma un absoluto estancamiento de la economía.

Claro está que muchos de esos derechos se han erosionado, en buena medida como resultado del deterioro estatal. Como consecuencia de este peculiar patrón, el Estado continúa en el centro de la política y la economía argentina, pero habiendo devenido en un Estado rehén de los actores y, por ende, adversario de sí mismo; como consecuencia, se ha transformado progresivamente en un *Estado paralizado*.

La economía y la política argentinas han mostrado durante las últimas décadas un comportamiento peculiarmente pendular; en particular nos interesa subrayar el patrón que ha prevalecido en los tres últimos ciclos económicos que se extienden al quinquenio finalizado en 2018/2019, en el cual los datos de evolución del producto bruto confirman la profundización de la crisis iniciada en 2012.²¹ El patrón es similar: el ciclo comienza con una rápida y significativa expansión inicial, le sigue una desaceleración que es influida por una crisis externa; a continuación se produce una breve recuperación para desembocar finalmente en una nueva fase recesiva más pronunciada que la anterior. Lo notable es que los tres últimos ciclos han evolucionado de modo diferente por múltiples causas e interrelaciones en el marco de contextos externos disímiles, el predominio de visiones antagónicas sobre el rol del Estado y la implementación de esquemas divergentes de política macroeconómica. Pero, a pesar de ello, los resultados han sido llamativamente parecidos: los cuellos de botella reaparecen y la crisis se repiten. El corolario es la persistencia del *statu quo*, pero en versiones cada vez más degradadas. Y en los últimos treinta años el vehículo y, al mismo tiempo, el constructor de ese *statu quo* repetitivo ha sido el peronismo. El PJ satisface simultánea, aunque temporariamente, todos sus compromisos con los diferentes actores sociales cuyos intereses a menudo son opuestos: así cubre la defensa de privilegios, las demandas de reparación y la promesa de tiempos mejores. Para que se pueda concretar este prodigioso fenómeno, si bien el peronismo ha ocupado la presidencia durante casi veinticinco de aquellos años aprovechando bonanzas transitorias que le permitieron favorecer coyunturalmente el crecimiento del consumo, la ha perdido en dos ocasiones coincidiendo con momentos clave de los respectivos ciclos en los cuales se tornaba inevitable afrontar los costos incurridos en la bonanza previa que se acumulan con los déficits que se arrastran de los ciclos anteriores. Antes de la operación de este peculiar mecanismo, ya el gobierno de Alfonsín había tenido que enfrentar el derrumbe económico asociado con la crisis de la deuda y el estallido hiperinflacionario de 1988/1989; el corolario es que los tres gobiernos no peronistas desde la transición a la democracia, incluido el de la coalición liderada por el **PRO** de Mauricio Macri, que incluye a la Unión Cívica Radical, han concluido transitando la fase depresiva de los respectivos ciclos.

Brasil

Un rasgo histórico que ha persistido a lo largo de la vigencia de la **MO** y la **MNEP** fue evitar soluciones extremas de carácter autoritario o popular/democrático. La última manifestación de ese síndrome fue en el contexto de la crisis de 1988-1992, que aparentemente se había convertido en una encrucijada sin salida:

- ◆ un presidente, Fernando Collor de Mello, pasó en pocos meses de ser electo holgadamente gozando de elevados índices de popularidad a ser expulsado de su cargo por el congreso
- ◆ un estallido hiperinflacionario.

Sin embargo, en esa coyuntura la política brasileña tuvo la capacidad de crear dos mecanismos que parecieron constituirse en los soportes de una matriz política estable y dinámica. Nos referimos, por un lado, a la **Constitución de 1988**, que consagró una serie de derechos sociales que apuntaban a revertir el carácter jerárquico y elitista de la sociedad brasileña, y por el otro, al **presidencialismo de coalición** que desembocó a partir de la elección presidencial de 1994 en la formación de dos grandes coaliciones de partidos, una liderada por el **PSDB** y otra por el **PT**, de las cuales provendrían los próximos seis titulares del Poder Ejecutivo federal. Después de las dos presidencias de Fernando Henrique Cardoso, concluidas en 2002, la elección de Lula da Silva sugirió la consolidación del presidencialismo de coalición, reiterando la posición de árbitro que jugaba el PMDB al continuar controlando bancadas parlamentarias decisivas para la aprobación de leyes. Asimismo, la llegada del líder del PT a la presidencia auguraba la posibilidad de que las promesas constitucionales comenzaran a tornarse realidad. Por último, el compromiso que se vio obligado a firmar Lula durante la campaña (mantener el curso de las políticas económicas adoptadas durante la década previa bajo la guía de Cardoso) encaminaban a Brasil por la senda de la articulación de una matriz híbrida en la cual se combinara la estrategia pro mercado de este último y políticas sociales que elevaran el estatus y la renta de los estratos de la población de ingresos más bajos favoreciendo a los sectores más empobrecidos.²²

22. Ante la amenaza de los mercados que su triunfo desencadenaría una crisis económica sin precedentes, el candidato del PT se vio obligado a firmar una *Carta aos Brasileiros* que procuraba disminuir lo que el periodismo había bautizado como el *riesgo Lula*.

Durante una década, es decir hasta mediados de la primera presidencia de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, las cosas funcionaron razonablemente bien: las administraciones del PT se caracterizaron por un retorno al dirigismo que recordaba al período de la MENP, con regulaciones y programas centrales de alcance nacional, sin dejar de lado totalmente algunos elementos del neoliberalismo. Lograron una continuidad que permitió avances importantes en el desarrollo de la infraestructura y el alcance de la educación, manteniendo los éxitos que había logrado Cardoso en el control de la inflación. Durante sus mandatos, el país siguió las reglas de los mercados internacionales -obteniendo beneficios adicionales con la venta de *commodities*, y acrecentando su prestigio en el mundo, ratificado con su patrocinio de la Copa Mundial de fútbol en 2014 y las Olimpiadas en 2016-. Sin duda, el único evento preocupante de los primeros años de Lula fue el *mensalao*,²³ operación por la cual el partido gobernante entregaba pagos mensuales a diputados de la oposición para garantizar la aprobación de ciertas leyes. Entre los involucrados en los pagos figuraban varios miembros de la bancada del PMDB, que se convertiría en un aliado esencial tanto de Lula como de su sucesora. Y que, como es sabido, fue el actor decisivo en 2016 en el *impeachment* de Rousseff a través de los dos políticos claves en el proceso, el vicepresidente Temer y el presidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha.

23. La denuncia fue efectuada por la revista *Veja* en Mayo de 2005 y tuvo consecuencias coyunturales pero también a largo plazo, pues tres de los principales dirigentes del PT, Jose Dirceu, Antonio Palocci y Jose Genoino, quedaron irremediablemente involucrados con la acusación de corrupción. Dirceu, incluso, era mencionado como posible sucesor de Lula.

Si bien Dilma Rousseff triunfó claramente en las elecciones de 2010, en un par de años comenzó a ser evidente que el desempeño de la economía empeoraba: al dato de tasas de crecimiento cada vez más mediocres se agregaba la caída de la inversión y el creciente déficit fiscal, todo ello en el marco de una agudizada dependencia en la exportación de bienes primarios. Una medida ciertamente de escasa relevancia, un pequeño incremento del costo de transporte público en varias ciudades, entre ellas Rio de Janeiro y San Pablo, fue el disparador de un fenómeno que se convirtió en una divisoria de aguas decisiva para la suerte del PT y, por extensión, de la política nacional: la reacción de la calle.²⁴ La medida se implementó a principios de junio de 2013 y desató masivas protestas, inicialmente en San Pablo y Porto Alegre, rápidamente también en Rio de Janeiro y luego en la mayoría de las grandes ciudades del país. Especialmente en el caso de San Pablo, la brutal represión policial operó como un *boomerang* ya que tuvo el efecto de fortalecer las

24. El alza de las tarifas que dispuso Fernando Haddad, alcalde de San Pablo, fue de 3 Reales a 3.20.

protestas y a pesar que el aumento de tarifas se anuló rápidamente, dichas protestas no cesaron y su principal impacto en el corto plazo fue que la popularidad de la presidenta, como así también del conjunto de la clase política, se desplomó irreversiblemente en pocos meses: en el caso de Dilma pasó del 77% de aprobación al 30%.

Las protestas de 2013, asimismo, marcaron la apertura de una profunda grieta social que se reflejó en el hecho de que fueron los sectores medios los que se movilizaron consistentemente en contra del gobierno, incluyendo a aquellas familias cuya incorporación a esos estratos había sido el resultado de las políticas sociales de los gobiernos del PT. En ese sentido las protestas, que en el siguiente par de años se focalizaron en las figuras de Lula y la presidenta Rousseff, tuvieron una doble dimensión. En primer lugar, alimentaron decisivamente el clima político que permitió justificar el *impeachment* de Dilma y la posterior condena a prisión de Lula, que impidió que este se pudiera presentar a las elecciones presidenciales de 2018 cuando estaba primero en las encuestas de preferencias. No se debe ignorar, asimismo, que el **PSDB**, el partido de Cardoso y Jose Serra, hizo una contribución esencial a la generación del clima de intolerancia que imperó a partir de 2013-2014. Los *tucanos* -como se conoce a los miembros del PSDB- y su candidato, Aécio Neves, estaban convencidos de que triunfarían en las elecciones presidenciales de 2014 y su derrota por escaso margen los encaminó en la funesta dirección de convertirse en una oposición desleal al sabotear el segundo gobierno de Dilma Rousseff desde su mismo inicio. La confluencia entre el PSDB y el PMDB selló la suerte de la primera mandataria.²⁵ En segundo lugar, las protestas callejeras sugirieron que la coalición electoral que había permitido el ascenso en popularidad de Lula desde fines del siglo pasado y los cuatro triunfos del PT a principios del siglo XXI, es decir la sumatoria de sectores populares y medios, se sostenía en bases extremadamente frágiles.

En otras palabras, la pérdida de apoyos del PT expresaba un fenómeno socio-cultural más profundo; la combinación matricial que implicaba su proyecto de país -es decir una liberalización parcial de la economía y promoción del consumo de los sectores medios ampliando simultáneamente la protección de los sectores más empobrecidos- no sobrevivió al fin de la coyuntura favorable de los precios de los *commodities* exportados por Brasil. Las políticas económicas y sociales implementadas a partir de 2003 pretendieron no desandar el camino hacia la articulación de una MNL algo diluida que había iniciado Fernando Henrique Cardoso y, al mismo tiempo, recrear una versión *aggiornata* de la matriz previa, la Matriz Estado-Céntrica creada por el varguismo. Lo que sucedió, en cambio, fue que se debilitaron seriamente los mecanismos de control social y político que habían sido contruidos durante la era varguista (1930-1964); dichos mecanismos no habían cuestionado los sesgos racistas, patriarcales y elitistas de la sociedad pero proveyeron el principal cemento de la cohesión social en Brasil; su crisis abrió un espacio potencial para la construcción de lazos sociales alternativos, pero éstos no llegaron a articularse. En ese clima social de *malaise* no resulta sorprendente que florecieran en todos los estratos sociales, pero sobre todo en los medios y altos, demandas de orden y de restitución de las jerarquías, incluso recurriendo a la justicia por mano propia y favoreciendo la represión policial ilegal. Lula fue condenado legal y socialmente como corrupto, cuando, como resultó abrumadoramente evidente, la corrupción era, y es, un fenómeno generalizado de la cual se han beneficiado especialmente grupos empresariales como Odebrecht y frigoríficos exportadores -como así también los funcionarios y políticos asociados a Petrobras-- y los sectores más tradicionales de la clase política como los del PMDB.²⁶ Un corolario adicional del rumbo que ha tomado la sociedad brasileña a partir de comienzos de la década de 2010 ha sido el incremento del poder de los grupos

25. El poder judicial ha jugado, por su parte, un rol ambivalente en el proceso político desde 2012, puesto que varios miembros del Tribunal Superior de Justicia han mostrado mucho más celo en perseguir la corrupción en otros poderes que en su propio seno. La figura judicial más importante de Brasil, el juez federal Sergio Moro, quien impulsó la investigación del caso Lava Jato que llevó a prisión a Lula, además de otros políticos y empresarios, aceptó incorporarse al gabinete de Bolsonaro como ministro de Justicia, con lo cual su imparcialidad quedó, al menos, en duda. Además, la divulgación de una serie de escuchas telefónicas ha permitido comprobar la conducta, ciertamente cuestionable, de Moro al acordar en secreto con los fiscales a cargo del caso las medidas que se tomaron en contra del ex presidente.

26. Los frigoríficos que pertenecen a las firmas JBS y BRF que, según se comprobó en 2017, están entre los veintiuno que adulteraron los envíos de carne, tanto bovina como de pollo, son los dos principales exportadores de esos productos. Brasil, por su parte, es el primer exportador mundial de carne.

27. Mientras que en las ciudades del centro sur como San Pablo la proporción de la población que reside en favelas oscila entre el 10 y el 15%, ese porcentaje alcanza el 25% en ciudades del nordeste como Recife y Salvador y a casi la mitad de los habitantes en Bélem, en el estado norteno de Pará.

criminales en las favelas, en otros barrios pobres y en las prisiones.²⁶ El fracaso del Estado en producir una transformación sustantiva en esos espacios ha generado, por una parte, un fenómeno de aún mayor aislamiento de las franjas más pobres de la sociedad con el consiguiente estrechamiento de los bienes públicos a los que tienen acceso, tanto en las ciudades como en las zonas de frontera y, por la otra, la expansión de credos religiosos de carácter conservador y particularista, tanto política como culturalmente, y la búsqueda de un salvador de la patria más allá de los partidos y de las instituciones parlamentarias.

El *fenómeno Bolsonaro* expresa, entonces, la encrucijada en la que se encuentra Brasil. La fragmentación del parlamento se ha acentuado -30 partidos ocupan bancas, mientras que tanto el PMDB como el PSDB, cuyos candidatos presidenciales obtuvieron votaciones mínimas, han visto sus bancadas de diputados reducidas a la mitad. El PT, por su parte, ha perdido casi una tercera parte de su representación parlamentaria. Bolsonaro, cuya popularidad ha caído más vertiginosamente que la de ningún otro presidente desde la transición a la democracia, se enfrenta con el desafío de lograr aprobar una reforma previsional integral -tarea en la que han fracasado todos los presidentes desde Cardoso en adelante- teniendo que lidiar con un parlamento que parece poco dispuesto a perjudicar aún más su ya dañada imagen en la opinión pública.

Referencias bibliográficas

- Abranches, S. (1988). "Presidencialismo de coalizao: o dilema institucional brasileiro", *Dados*.
- Dos Santos, W.G. (1993). *Razoes da desorden*. Rio de Janeiro, Rocco.
- The Military in Politics (1971). *Changing Patterns in Brazil*, Princeton, Princeton University
- Zermeno, S. (1996). *La Sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo*. México, Siglo XXI.

Barbara Pisciotta
Barbara.pisciotta@uniroma3.it
Università di Roma 3
Italia

Recibido: 02/10/2019
Aprobado: 08/01/2020

Exit, Voice and Loyalty:

Europeism and Euroscepticism in Eastern and Central European Party Systems

Resumen

Este artículo examina la evolución de los sistemas de partidos de Europa Oriental y Central hacia la división emergente entre las fuerzas pro-UE y euroescépticas y presenta una visión revisada de la división tradicional de centro-periferia en seis países: Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania. La primera parte discute el enfoque espacial de Rokkan, la segunda desarrolla una visión revisada de la escisión centro-periferia en relación con el espacio a nivel regional, y la tercera analiza la competencia de los partidos en términos de europeísmo y euroescepticismo en los sistemas de partidos de Europa Central y Oriental.

Palabras clave

Sistema de partidos, europeísmo, euroescepticismo.

Abstract

The paper examines the evolution of Eastern and Central European party systems to the emergent division between pro-EU and Eurosceptic forces and puts forward a revised view of the traditional centre-periphery cleavage in six countries: Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania. The first part discusses the Rokkan spatial approach, the second develops a revised view of centre-periphery cleavage in relation to space at the regional level, and the third analyzes party competition in terms of Europeism and Euroscepticism in Eastern and Central European party systems.

Keywords

Party system, europeanism, euroscepticism.

Introduction

Fifty years ago, Albert O. Hirschman identified, with the term's *exit, voice and loyalty*, three possible strategies that citizens could undertake regarding their membership of an organization, whether it was a company, a political party or a state (Hirschman, 1970). More recently, the term "Brexit" has brought to mind the concrete possibility that this relationship of belonging, between citizen and a supranational political organization, can be concluded through an "exit".

Although the English case is still an extraordinary event today, it is true that the growth of European integration has given rise to contestation and opposition. The European project has generated novel institutions, complex processes and a whole realm of regulatory policy while generating debate, discourse and division. While it has created its own domestic policies, these have not been created in a vacuum. As Taggart and Szczerbiak (2001) pointed out:

The associational politics of parties and party systems, and the processes connected with them, force the issue into certain configurations and have the effect of patterning conflict. Looking at the nature of Euroscepticism therefore means looking at how domestic politics structure one part of the process of European integration. But it also means that we can use the European issue to illuminate deeper lines of division within the party system, between the core and periphery, between the embattled centre and the alienated outer rim. In short, studying Euroscepticism tells us something about European integration and tells us much about party politics (pp. 5-6).

The presence of Europeism/Euroscepticism cleavage in the context of national party systems is confirmed by the results of the last two European Parliamentary elections (2014-2019), which showed three strictly related phenomena:

- ◆ a broad electoral abstentionism, that involved all the EU's member states and strengthened the public opinion's alienation from the European institutions
- ◆ a growth of Euro-sceptical parties also in the Western and Southern European countries (i.e. *Front National* in France; *UK Independence Party* in the United Kingdom; *AFD* in Germany; *Syriza* and *Golden Dawn* in Greece; *League* and *Five Stars Movement* in Italy; *Podemos* and *Vox* in Spain)
- ◆ a widespread national requirement to renegotiate the terms of the Treaty on the functioning of the European Union.

The third point, in particular, threatens to cross the division line between smaller and larger European member state, involving a deeper conflict between the German centre of European economic power, on one hand, and the rest of Europe on the other.

In this perspective, any satisfactory empirical analysis of the impact of the Europeism/Euroscepticism cleavage within the East and Central Europe party system involves the solution of three closely related problems, namely the question of 'space', the theoretical background of cleavage in comparative analysis and a revised conception of the centre-periphery cleavage in line with the post-communist political context. The core concept here is a definition of space in terms of territorial and cultural boundaries.

This paper considers six countries (Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania) and explains the evolution of the Eastern and Central European party systems to the emergent division between pro-EU and Eurosceptic forces on the basis of a revised view of traditional centre-periphery cleavage. All the countries examined are former Soviet Union satellites, democracies that emerged after the fall of the Berlin Wall and current EU member states. The study is divided into three parts.

The first introduces the Stein Rokkan spatial approach, the second suggests a broader conception of the centre-periphery cleavage in relation to regional space and the third analyzes Eastern and Central European party competition in terms of Europeism/Euroscepticism.

The notion of *space*

As is known, Rokkan argues that there is a connection between major cleavages and national and industrial revolutions. Lipset and Rokkan (1967) suggest that three conditions must be met if a cleavage is to become politically salient. First, the cleavage must distinguish people on at least one potentially important characteristic. Second, individuals must know which group to identify with on any characteristic. Third and most importantly, political parties must organise support and competition around the cleavage, thus giving it institutional expression.

In this regard, Rokkan's (1970) concept of cleavage -understood as a long-term structural conflict capable of creating organised and opposing political alignments (Bartolini and Mair, 1990; Allardt and Pesonen, 1967; Rae and Taylor, 1970; Lawson, Römmele and Karasimeonov, 1999; Bartolini, 2000; McAllister and White, 2007)- highlights the process of political, economic and cultural differentiation whereby it is possible to divide the members of a community into groups. The nature and intensity of the mechanisms of cohesion and solidarity that are established among those who claim a common identity, which can pertain to race, ethnicity, religious creed or social status, stimulate a process of mobilisation of the forces belonging to each group, which are channelled into the creation of organisations with formal structures, like political parties.

More specifically, in defining the centre-periphery cleavage, Rokkan gives importance to 'space' in terms of geographical space (location) and membership space (social and political dimensions: community, identity, cultural values). As he argues, it is very easy to cross geographical borders but not so easy to cross the membership line, which entails abandoning one's original cultural identity, adopting another and being accepted by the new group. Space is related in his analysis to the formation of territorial units in Europe and the consequent establishment of state boundaries. In a broader analytical sense, a boundary is a line of demarcation between territorial or membership groups. In this perspective, the term is used to indicate the focal point for delimiting a territory or group and identifying both territorial groups and membership groups. As Bartolini (2005) points out, an economic boundary defines an area of free market transactions (economic rights, property rights, a common currency and the mobility of factors of production); a cultural boundary defines a space characterised by the traits of the membership group (nation, race, language, ethnic features); a politico-administrative boundary delimits the territory on the basis of regulatory regimes (social and political rights, education, labour market); and a military boundary delimits the territory on the basis of extraction-coercion agency and capacity.

While the building of boundaries sets the costs of barriers for various types of transactions across local communities, membership groups and territorial entities, exit (Hirschman, 1970) is the act of crossing a boundary. This means that the ability to control the crossing of boundaries corresponds to the formation of a centre. Bartolini (2005) emphasises the striking correspondence between Rokkan's macro-level link between external boundary control and internal political structuring and Hirschman's micro-level relationship between exit options and propensity to voice. On this view, conflicts over the demarcation of boundaries reflect clashes of interests among the social groups

controlling different resources within each territory. The centre-formation process provides two basic lines of conflict: dominant cultural groups versus ethnically, linguistically or religiously distinct subject populations and the attempt by the centre to standardise and mobilise remote peripheral territories.

In terms of political power, centre and periphery can be defined by their spatial positions and political interests. The centre is identified as the core location of military, economic and cultural power, the place of political decisions and policy-making process and the seat of the ruling class, whereas the periphery is the territory subordinate to the military, economic and cultural power of the centre, the place at a distance from the policy-making process, and where the population is dependent on political decisions. As we shall see, the spatial approach inherent in the centre-periphery cleavage provides the starting point for analysis of this cleavage in a broader sense.

A new conception of centre-periphery cleavage

Centre-periphery cleavage will be used here to describe an asymmetrical relation between two different entities (Zarycki, 2002; Blahó, 2012) that can assume different forms, such as North and South at the global level, western and eastern at the regional, and the ethnic minority and majority division at the national. In other words, centre and periphery denote the different places of two subjects in connection with their own spatial position at the national, regional and global level. This means that the power of the centre is not only the power of a national government imposing a dominant culture in order to standardise the national language or control the media but is also reflected in unequal interactions between different places in the world in terms of cultural, political and economic position. The centre-periphery cleavage can therefore be interpreted in terms of three different dimensions, the first being the classic conflict between the central culture of the modern nation state and its peripheries, the second the economic and political dominance of the Soviet Union over its satellite countries during the bipolar international system, and the third the asymmetrical relations between the European Union, regarded as the centre, and the peripheral Eastern European member states. All three of these dimensions of the centre-periphery cleavage have influenced the evolution and consolidation of the Eastern European party systems.

The availability of exit and voice to support cultural identity or political and economic power against the centre structures the channels of the periphery's political participation and organisation. Political parties are therefore a critical element in the translation of social cleavages into political divisions and examination of their role will tell us a great deal about the trajectory of these emerging conflicts.

The following analysis suggests a revised view of the centre-periphery cleavage in terms of organised conflict originating from the EU and East European member states (regional level). The regional sphere can postulate a clear divide between *internal* and *external* and hence between *state* and *supranational organization*. This level refers to the institutional influence -understood in procedural and organisational terms- that the European Union has been capable of exercising *on its member states*. As we will see, the conditions of access and the standards imposed for continuing membership have helped to modify the positions of some parties and their interaction in terms of pro-Europeanism vs. Euroscepticism.

Given the above premises, the aim of this study is to explain the evolution of the Eastern European party systems in terms of the impact of Europeism/Euroscepticism cleavage on party alignments. To this end, the area-based comparison commences with the empirical

verification of the possible presence of centre-periphery cleavage by ascertaining the simultaneous existence of three conditions: the development of conflict arising from pressures exerted by the centre to bring the periphery into line; awareness on the part of the periphery of its diversity and of the existence of political, economic and cultural interests incompatible with those of the centre; and the periphery's ability to mobilise and organise itself so as to compete with the centre. More specifically, the EU accession process highlights the differing interests of larger and smaller member states, thus leading many Eastern European parties to move from loyalty to voice and/or exit strategy.

The regional level

The asymmetrical relations between the European Union and Eastern European member states can be understood in terms of the timing of accession, economical and political reforms (conditionality) and the defence of national interests and national sovereignty (Mayhew, 2000; Bardi *et al.*, 2002). Many Eastern European leaders, including Klaus, Orban and the Kaczynski brothers, have claimed that the accession process and policy-making in accordance with the Copenhagen criteria are aimed at protecting the economic interests of the larger states (Germany and France). After the Soviet experience, many Eastern European countries are afraid of being absorbed by the EU machine and various segments of society therefore feel largely extraneous to the European project (Hix and Lord, 1997; Marks and Hooghe, 1999; Henderson, 1999; Lubbers and Scheepers, 2007).

By integrating the classification of Taggart and Szczerbiak (*hard* or *soft* Euroscepticism) (Taggart and Szczerbiak, 2001; Taggart and Szczerbiak, 2008) with Hirschman's strategies, it is possible to place East European parties in three categories. The first corresponds to the *exit*, coincides with hard Euroscepticism and implies the rejection of the entire project. In most cases, the parties that choose this strategy support the request for a referendum to verify their country's public opinion on whether to stay or leave the EU. The second strategy, namely *voice*, represents the soft Eurosceptic position and involves contingent or qualified opposition to specific European issues and policies. The objectives of this strategy aim to reform the structure and rules of the EU through a wide range of voices, ranging from the refusal to apply certain community directives to the attempt to radical reform in an intergovernmental sense of certain policies (think immigration). Finally, the third is expressed by *loyalty* and coincides with a markedly European propensity, founded on the conviction that the solution to the challenges posed to the EU cannot ignore the search for a common position.

Other studies put forward a binary classification based on whether the parties support or oppose the integration process and identify three recurrent dimensions as regards the stance of each unit on the issue of for or against the EU (Hooghe *et al.*, 2002). The first is socio-economic and regards the presence of a strong link between position on the left or right and support for or opposition to the EU, where fiscal policy in particular tends to simplify the lines of division and strengthen the competition between social democrats, who advocate the European model of regulated capitalism, and neo-liberalists, who are closer to the model of intergovernmental deregulation. The second regards the emergence of new political issues concerned with lifestyle, the environment, cultural diversity, nationalism and immigration. In this perspective, clear-cut opposition to the process of supranational integration, perceived as an alienating, liberalist mechanism, is expressed not only by extreme left-wing parties, communists, environmentalists and social libertarians but also by populist, nationalist and xenophobic formations of the far right. It should be noted, however, that in recent years the strengthening of new right-wing

parties in both the East and the West has been the result of an increased perception of challenges that threaten the national community, such as immigration, foreign cultural influences, the tendency to fall in with the dominant Anglo-Saxon model (in terms of language, for example) and the influence of international organisations. The European Union is seen by these parties not only as encapsulating all these threats but also as working to undermine state sovereignty and slash the power of national governments.

The third dimension introduces a distinction between parties in government and opposition, suggesting a programmatic strategy aimed at maximising support and addressing specific issues for and against the EU only when the contingent situation permits. In general terms, a tendency is assumed to adopt moderate policies and/or support the EU when in government and the opposite when in opposition (Rohrschneider and White, 2007; Rohrschneider and White, 2015).

The data of the **Chapel Hill Expert Survey** of 2017, applied to the last elections, make it possible to present an overall picture of the positions adopted by the various Eastern European parties in relation to whether they are Eurosceptic or pro-European, right-wing or left-wing and in government or the opposition (table 1).¹ As regards the last point, the parties that have never been part of a coalition government are indicated in bold.

1. See the appendix at the end of the paper.

Table 1: Euroscepticism in East and Central Europe party systems

Country	Hard euroscepticism	Soft euroscepticism	Europeanism	% Last elections (soft and hard eurosceptics, total)
Bulgaria left right	UP VOLYA		BSP DPS GERB	13.6
Czech Republic left right	KSCM SPD	ODS ANO	CSSD Pirate KDU-CSL TOPo9	59.3
Hungary left right	JOBBIK	FIDESZ	MSZP LMP DK	68.4
Poland left right	KWN	PIS	SLD PSL KO	50.4
Romania left right			PSD UDMR PNL USR ALDE PMP	-
Slovakia left right	SNS L'SNS	SAS OL SME-RO	SMER-SD MH SIET	46.5

Data revised by the author

Empirical analysis confirms the rise of Euroscepticism in the post-communist area on the left-right spectrum. In particular, many of the most important Eastern European right parties, including the Civic Democratic Party, FIDESZ and Law and Justice, have adopted a Eurosceptic position. On the contrary, nearly all the reformed former-communist parties have continued to support the EU (with the exception of the SMER, which has sometimes adopted a more critical stance).

The data bear out the initial hypothesis of Hooghe and colleagues as regards:

- ◆ the soft Euroscepticism of the parties that are more openly neo-liberalist (ODS), conservative and/or populist (FIDESZ, PIS, SME-RO, SAS, OL)
- ◆ the hard Euroscepticism of the far right (UP, SPD, JOBBIK, KWN, SNS, L'SNS) and the far left (KSCM).

To sum up, the hard Euroscepticism column is occupied exclusively by extremist parties, a trend seen both in the stabilization of some far-right groups (JOBBIK, SNS) and extreme left (KSCM), and by the creation of new entities with strongly nationalist and xenophobic propensities throughout the area (UP, SPD, KWN and L 'SNS). The pro-Europeanism column is instead occupied by parties of a primarily social democratic or moderate parties (BSP, CSSD, MSZP, LMP, DK, SLD, PSD, SMER-SD), with the addition of some liberal/conservative (GERB, PNL, KO, USR, ALDE, MP, SIET), Christian democratic (KDU-CSL, PSL, PMP) and ethnic (DPS, UDMR, MH) formations.

Confirmation of the hypothesis of a more pro-European attitude on the part of parties in government instead appears less obvious, as the column of soft Euroscepticism proves to contain *all* the parties that have led or been part of government coalitions for longer or shorter periods of time with only two exceptions. It is also true, on the contrary, that nearly all the pro-European formations have been in government. The Eurosceptic strategy, at least in its hard version, does appear, however, to be nearly always adopted by parties that know they have no chance of taking power and therefore not only have nothing to lose in electoral terms but can even hope to gain votes in extraordinary situations of economic crisis, migratory pressures and threats to the sovereignty of the state. This trend was confirmed by the opposition from the most extremist groups, except for brief periods of external support for governments for coalitional reasons (KSCM, JOBBIK, SNS, UP).

In Poland, Slovakia and the Czech Republic for example, but also in Greece, Spain and Italy (Verney and Bosco, 2013) the dynamics of party competition shows an increase of Euroscepticism in relation to the economic consequences of EU integration (Szczerbiak, 2008; Hanley, 2008; Markowski and Tucker, 2010). While the adoption in the Czech Republic of Eurosceptic and pro-European stances, respectively by liberal and social democrat parties, is something grafted onto the party alignments without altering them, the situation appears more complex in Poland and Slovakia, where the economic factor of Euroscepticism does not produce bipolar competition between pro-European social democrats and Eurosceptic liberal-conservatives. Although the last Polish parliamentary elections (October 2019) helped to partially realign the pro-European/Eurosceptic competition on the right/left axis, thanks to the return of the SLD with 12.5%, it must be emphasized that it is the SLD, the only group on the left in Poland, from 2005 to 2011 fluctuated between 13.15% and 8.24% and in 2015 failed to get any seats at the Sejm. As a result, the Eurosceptic and pro-European division in Poland is found mainly among right-wing groups. In Slovakia, if we consider that the SMER maintains a more critical position towards the EU than its eastern European counterparts, only the Hungarian minority, the Christian democrat and moderate parties are openly pro-EU (see the new SIET - Network). This means that in both countries the pro/anti-EU cleavage not only cuts across left/right alignments but also strengthens the competition between secular-liberal and Catholic-populist forces in Poland. It alters relationships between social democrats, nationalists and ethnic parties in Slovakia, where these forces in the past have been part of and are still members of the same coalition government.

Hungary is an exception (Batory, 2008), as the consolidation of the Hungarian national identity and state sovereignty is perceived in marked contrast to a supranational institution such as the European Union. At the same time, the economic consequences of EU integration have fostered the spread of conservative (FIDESZ) and/or xenophobic (JOBBIK) views. In the case of Hungary, however, as in the Czech Republic, the pro/anti-EU cleavage is consolidated within the sphere of the left/right division.

Bulgaria and Romania constitute two different cases in that none of the moderate right-wing parties has adopted a Eurosceptic stance. In both countries competition of an ethnic character does not appear to have given way to competition for and against the EU for three reasons:

- ◆ the national issue is still important (Bulgaria)
- ◆ the major parties of the right and the left are seeking further legitimisation at the national and international levels through support for European values, while it is the more extremist parties that have opted for opposition to EU (UP, VOLYA)
- ◆ general scepticism on the part of citizens as to the ability of national institutions to cope with emergency situations, not least because they have requested direct intervention on the part of the European Commission.

This happened, for example, in Romania during the institutional crisis of 2012, and has influenced support for the more pro-European parties.²

On the whole, therefore, the evidence of Eastern and Central European support for Euroscepticism among both opposition and government parties confirms the presence of some powerful strategic incentives to express domestic party competition in terms of a pro-EU/anti-EU divide. This involves the question of *national interests* as against supranational European power but also the perception that EU rhetoric masks the economic interests of its core.

2. It should be noted that the voting turnout in Romania is one of the lowest in Europe, with only 39.2% at the general election in 2008 and 41.6% in 2012.

Conclusions

In East and Central Europe there is a line of continuity connecting the present-day forms of Euroscepticism with the need felt to secure independence; first from Moscow and now from Brussels. Today the centre-periphery cleavage is the most concrete manifestation of the succession of asymmetric relations that has seen the *state* in Eastern Europe fight for independence from the Soviet empire, defend the national territory against claims at the sub-state level and defend national sovereignty against the imposition of European parameters.

In this context, the move between exit and voice has fueled the creation of new barriers in two opposite but closely connected directions. The first barrier, which goes from the bottom upwards, is represented by the attempts of Member States to tilt EU policies in their favor and openly challenge the interests of the strongest countries. The second, from top to bottom, has manifested as the need to close national borders to immigration. This double closure to the outside world has had a disruptive impact on party alignments in all European countries and has brought into focus the centrality of the division caused by the presence of irreconcilable national interests - economic, political and strategic - all in a European 'space' that should be shared.

In conclusion, it is suggested here that the power relationship between two different entities is determined by the position each can occupy in its national, regional or global space, and the political struggle between who holds the 'centre' and who remains on

the *periphery* of the system influences political competition and characterises the party system. This probably means today that examination of the pro-EU/Eurosceptic divide could shed a great deal of light on the political divisions within party systems not only in the post-communist area but also in Western and Southern Europe, as shown by the cases of the United Kingdom, France, Germany, Spain, Greece and Italy.

Bibliographic references

- Allardt, E. and Pesonen, P. (1967). "Cleavages in Finnish Politics", in Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan (ed.) *Party Systems and Voters Alignments: a Cross-National Perspective*, New York: The Free Press.
- Bardi, L. Rhodes, M. and Senior, S. (2002). "Enlarging the European Union: Facing Political, Institutional and Economic Challenges", *International Political Science Review*, N° 23, pp. 227-233.
- Bartolini, S. (2000). *The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980. The Class Cleavage*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (2005) *Restructuring Europe. Centre Formation, System Building, and Political Structuring Between the Nation State and the European Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Bartolini, S. and Mair, P. (1990) *Identity, Competition and Electoral Availability: the Stabilisation of European Electorates 1885-1985*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Batory, A. (2008). "Eurocepticism in the Hungarian Party System: Voice from the Wilderness?" in Taggart, P. and Szczerbiak, A. (ed.) *Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Blahó, A. (2012). "Centre-Periphery Tensions Regarding Central and Eastern Europe", in Attila, F. (ed.) *A Peaceful World is Possible: in Honour of Judith Balász*. Sopron: University of West Hungary.
- Hanley (2008). "Embracing Europe, Opposing EU-rope? The Party-Based Euroscepticism in the Czech Republic", in Taggart, P. and Szczerbiak, A. (ed.) *Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Henderson, K. (1999). "Slovakia and the Democratic Criteria for EU Accession" in Henderson, K. (ed.) *Back to Europe: Central and Eastern Europe and the European Union*, London: UCL Press.
- Hirshman, A.O. (1970). *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hix, S. and Lord, C. (1997). *Political Parties in the European Union*, Basingstoke: Macmillan.
- Hooghe, L. et al. (2002). "Does Left/Right Structure Party Positions on European Integration?", *Comparative Politics*, N° 35, pp. 965-989.
- Lawson, K., Römmele, A. and Karasimeonov, G. (ed.) (1999). *Cleavages, Parties, and Voters: A Study from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania*, Westport: Praeger Publishers.
- Lubbers, M. and Scheepers, P. (2007). "Explanations of Political Euroscepticism at the Individual, Regional and National Level", *European Societies*, N° 9, pp. 643-669.
- Markowski R. and Tucker J.A. (2010) "Euroscepticism and the Emergence of Political Parties in Poland", *Party Politics*, N° 16, pp. 523-548.
- Marks, G. and Hooghe, L. (1999). "National Parties and the Contestation of Europe" in Banchoff, T. and Smith, M. P. (ed.), *Legitimacy and the European Union*, London: Routledge.
- Mayhew A. (2000). *Enlargement of the European Union: An Analysis of the Negotiations with the Central and Eastern Europe Candidate Countries*, Sussex European Institute, Working Paper N° 39.
- McAllister, I. and White, S. (2007) "Political Parties and Democratic Consolidation in Postcommunist Societies", *Party Politics*, N° 13, pp. 197-216.
- Pisciotta, B. (2016). "The center-periphery Cleavage Revisited: East and Central Europe from Postcommunism to Euroscepticism", *Nationalism and Ethnic Politics*, N° 22, pp. 193-219.
- Rae, D.W. and Taylor, M. (1970). *The Analysis of Political Cleavages*. New Haven-London: Yale University Press.

- Rohrschneider, R. and White, S. (2007). "Representation in New Democracies: Party Stances on European Integration in Post-Communist Eastern Europe", *The Journal of Politics*, N° 69, pp. 1133-1146.
- Rohrschneider, R. White, S. (2015) "The Salience of European Integration to Party Competition: Western and Eastern Europe Compared", *East European Politics and Societies* N° 29, pp. 12-39.
- Rokkan, S. (1970). *Citizens, Elections, Parties*. New York: McKay.
- Lipset, S. M. and Rokkan, S. (ed.) (1967). *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. New York: The Free Press.
- Szczerbiak, A. (2008) "Opposing Europe or Problematizing Europe? Euroscepticism and 'Eurorealism' in the Polish Party System" in Taggart, P. and Szczerbiak, A. (ed.) *Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Taggart, P. and Szczerbiak, A. (2001). *Parties, Positions and Europe: Euroscepticism in the EU Candidate States of Central and Eastern Europe*, Sussex European Institute, Working paper N° 46.
- Taggart, P. and Szczerbiak, A. (ed.) (2008). *Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Verney, S. and Bosco, A. (2013). "Living Parallel Lives: Italy and Greece in an Age of Austerity", *South European Society and Politics*, N° 18, pp. 397-426.
- Zarycki, T. (2002). "Four dimensions of Centre-Periphery Conflict in the Polish Electoral Geography", in Klonowicz, T. and Wieczorkowska, G. (ed.) *Social Change. Adaptation and Resistance*, Warsaw: Warsaw University.

Carlos de la Torre
delatorre.carlos@latam.ufl.edu
University of Florida
Estados Unidos

¿Qué hacen los populistas?

¿Y cómo estudiarlo?

Resumen El objetivo de este artículo es discutir críticamente los alcances y problemas de las aproximaciones al populismo y proponer que en lugar de obsesionarnos en qué es el populismo, nos enfoquemos en qué hacen los populistas cuando cuestionan el poder de las élites y cuando llegan al poder. El trabajo además distingue entre populismos.

Palabras clave Populismo, Élite, Poder.

Abstract The object of this article is to critically discuss existing concepts of populism and to argue that instead of searching for the right definition, scholars should focus on what populists do when challenging power and in office. The paper also differentiates populisms.

Keywords: Populism, Elites, Power.

Introducción

En la primera publicación sobre populismo global, Ghita Ionescu y Ernest Gellner (1969) anotaron *en el presente nadie duda la importancia del populismo, pero nadie está muy seguro de qué mismo es*. Peter Wiles (1969) en el mismo volumen anotó, *a cada quién con su definición de populismo, de acuerdo con su orientación académica*. Por casi cincuenta años se han dado debates conceptuales. Cuatro aproximaciones son las más prominentes: los enfoques basados en teorías de la modernización y sociedad de masas, los trabajos sobre el populismo como una serie de ideas, una estrategia política, y una lógica política. Es interesante que pase a que los impulsores de estos conceptos sostengas que su aproximación es la mejor, quienes trabajan en el populismo combinan conceptos o desarrollan su definición propia. Pocos de los autores de tres compilaciones recientes sobre populismo a nivel global usan una sola definición (Heinisch y Mazzoleni 2017; Rovira Kaltwasser, Taggart, Ochoa Espejo y Ostiguy, 2017; de la Torre, 2019). El objetivo de este artículo es resumir los alcances y problemas de las aproximaciones al populismo y proponer que en lugar de obsesionarnos en qué es el populismo, nos irá mejor analizando qué hacen los populistas cuando cuestionan el poder de las élites y cuando llegan al poder. La primera sección resume lo que diferentes autores consideran que es el populismo. La segunda compara diferentes estrategias conceptuales. La siguiente sigue la sugerencia de Nadia Urbinati (2019) de enfocarnos en lo qué hacen los populistas.

Buscando el concepto adecuado

Los primeros trabajos sobre el populismo estuvieron fuertemente marcados por las experiencias traumáticas del fascismo. Talcott Parsons combinó la teoría de racionalización de Weber con la teoría de anomia de Durkheim y sostuvo: *una generalización bien establecida en las ciencias sociales es que ni los individuos ni las sociedades pueden pasar por momentos de cambios estructurales profundos sin que se produzcan comportamientos irracionales*. Sociólogos e historiadores usaron las teorías de la modernización y de la sociedad de masas para estudiar al populismo como una fase en la historia de la modernización. Gino Germani (1979) interpretó al peronismo como una forma autoritaria de incorporación de los excluidos a la comunidad política. Al igual que el fascismo, el peronismo se basó en el contacto personal y directo y en la identificación de las masas con el líder. Estos movimientos dieron la sensación de participación política en movimientos controlados por líderes autoritarios. La diferencia entre el fascismo y el populismo radica en sus bases de apoyo. La base del fascismo fueron las clases medias pauperizadas y la del peronismo la clase obrera de formación reciente y que por lo tanto no tenía experiencias sindicales y fue maniobrada por Perón.

Germani conceptualizó al populismo como una etapa en el proceso de transición de una sociedad tradicional, agraria y autocrática a una sociedad moderna, urbana, industrial y democrática. Argumentó que procesos de modernización rápidos y abruptos como la urbanización y la industrialización produjeron masas en estado de anomia. Sectores rurales que migraron a las ciudades no tuvieron experiencias sindicales ni la cultura política obrera, más bien trasladaron valores y costumbres rurales a contextos urbanos. Este choque entre formas de comportamiento rural que no ayudan a la integración en las ciudades y las fábricas los llevó a actuar de manera irracional y emocional apoyando a un caudillo autoritario.

El historiador Richard Hofstadter (1955) reinterpreto el populismo americano de finales del siglo 19 como un fenómeno incluyente y a la vez autoritario. Al igual que Germani entendió el populismo como una fase en la transición a la modernidad y cómo la expresión de un momento de crisis del capitalismo rural. La base de apoyo del Partido Populista

fueron sectores con niveles bajos de educación, con poco acceso a la información, que se sintieron completamente marginados de los centros de poder y sujetos a la manipulación total de quienes lo detentaban. Este movimiento se basó en visiones maniqueas que atribuyeron atributos demoniacos a sus enemigos, en convicciones morales que transformaron al odio en una especie de credo político y en busca de restablecer una edad de oro perdida.

Las interpretaciones sobre el populismo de las teorías de la modernización tienen una serie de problemas empíricos y teóricos. Según estos autores el populismo es un fenómeno pasajero, transitorio y excepcional ligado a la crisis que provoca la transición a la modernidad. Resuelta la crisis se regresará a la política “normal”, esto es a la política no populista. Es así que el populismo es visto como una fase que eventualmente desaparecerá. Sin embargo, el populismo se negó a desaparecer con la modernización y la democratización de la sociedad y en lugar de ser una fase pasajera ha sido una presencia constante. Los críticos de la teoría de la modernización han cuestionado los modelos binarios que dividieron a la política y a la acción colectiva entre lo normal y lo patológico. En estas construcciones el teórico prescribe normativamente lo que considera normal y relega lo supuestamente patológico a la condena moral o lo explica como una desviación de un patrón de desarrollo arbitrariamente construido como universal.

Las teorías de la sociedad de masas asociaron a los seguidores populistas con las emociones y la sin razón para satanizarlos. Condenar el populismo como una respuesta irracional de los más pobres, menos informado y más incultos no ayuda a comprenderlo. Para empezar, estos argumentos no se basan en la evidencia histórica. Se ha demostrado que la base social del peronismo, por ejemplo, no se redujo a los obreros recién llegados del campo sino que la clase obrera en su conjunto apoyó a Perón de manera racional por ser quien, como secretario del Trabajo, aumentó sus salarios, mejoró sus condiciones laborales y les dio acceso a la seguridad social. Los seguidores del Partido Populista, señalan los críticos de Hofstadter, no fueron irracionales y premodernos, sino que defendieron racionalmente sus intereses de clase (Postel 2016: 119). Además, la política, sea populista o no, se basa en pasiones y en argumentos racionales, en emociones y acciones estratégicas.

Las teorías de la modernización asumen que el populismo es un reflejo de procesos de cambios estructurales bruscos y profundos como la crisis de las sociedades agrarias, la industrialización y la urbanización. Sin embargo, el populismo y la política en general no se explican como un simple reflejo de fuerzas estructurales, lo que no significa que la política tenga una autonomía absoluta de los procesos económicos y sociales. Como se argumentará en este trabajo, lecturas político estratégicas y discursivas ofrecen mejores pistas para comprender por qué el populismo aparece en diferentes momentos históricos y no está únicamente ligado a momentos de crisis y transición entre diferentes modelos de acumulación.

Contradiendo las predicciones de los teóricos de la modernización, el populismo resurgió en América Latina en los años 80 y 90 junto con el retorno a la democracia. Algunos, como Alberto Fujimori en Perú, vieron en el neoliberalismo la receta para solucionar la crisis económica y la hiperinflación, otros como Chávez se rebelaron en contra de las exclusiones del neoliberalismo. En los Estados Unidos se dieron varios movimientos populistas como el del exgobernador segregacionista y racista de Alabama George Wallace que corrió tres veces a la presidencia en los años sesenta y setenta. Luego surgieron Ross Perot en los años 90, el *Tea Party* en el 2010 y Donald Trump que ganó las elecciones del 2016.

Para explicar el resurgimiento del populismo, Kurt Weyland (2001) lo definió como una estrategia política para llegar o ejercer el poder en que líderes buscan el apoyo directo

no mediado ni institucionalizado de un gran número de seguidores. El populismo no está necesariamente asociado a modelos de acumulación específicos, ni a una etapa en la modernización de la sociedad. El populismo puede favorecer políticas neoliberales o fortalecer el estado para promover políticas nacionalistas y redistributivas. A diferencia de otros movimientos políticos los populistas no están atados a ideologías pues su objetivo principal es llegar al poder y mantenerse en el gobierno. El líder populista es central en estas definiciones pues es quien articula las estrategias para llegar al poder y gobernar. Sin líderes, los populismos no son efectivos y quedan relegados a los márgenes del sistema político.

Las teorías del populismo como estrategia política se usaron para diferenciar tres olas populistas en América Latina. El *populismo clásico* de Juan Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil y José María Velasco Ibarra en Ecuador. Esta ola populista duró desde los años treinta del siglo pasado hasta las rupturas de la democracia en los años setenta. El populismo regresó con las transiciones a la democracia y aceptó el neoliberalismo. Los casos paradigmáticos del *populismo neoliberal* fueron Alberro Fujimori en Perú, Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil y Abdalá Bucaram en Ecuador. Con Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Néstor y Cristina Kichner se inauguró *otra ola populista* que esta vez se enfrentó al neoliberalismo y al imperialismo. Se usó el estado como el eje de políticas nacionalistas de desarrollo que buscaron reducir la pobreza y la inequidad.

Las teorías del populismo como estrategia política tienen la ventaja de no reducir el populismo a meros reflejos de procesos socioeconómicos y de estudiar los mecanismos que utilizan para llegar al poder y gobernar. Al basarse en los criterios normativos de la democracia liberal, estos autores pueden diferenciar entre inclusión populista y democracia y explicar cómo y por qué en condiciones de instituciones débiles el populismo decanta en autoritarismo. Sin embargo, los modelos liberales de democracia no siempre son los mejores para tomar en serio las críticas populistas a democracias con déficits de representación y de participación. Las críticas populistas a las democracias realmente existentes apuntan a una serie de fallos y déficits que deben corregirse con más democracia. El liberalismo no es un fin, es más bien un requisito para poder democratizar la sociedad. Sin garantías institucionales para el pluralismo y los derechos civiles es muy difícil que los movimientos sociales, por ejemplo, articulen sus propuestas. Sin una esfera pública plural es muy difícil cuestionar la dominación. Si bien la diagnosis populista está en lo cierto al señalar que las democracias realmente existentes rempazan la participación ciudadana por los dogmas de los tecnócratas y reducen a los ciudadanos a consumidores, sus soluciones atentan contra lo mismo que buscan: democracias más participativas y deliberativas. Si bien los populistas tienen una fe ciega en el poder constituyente del populismo para crear nuevos regímenes supuestamente más participativos, no consideran todos los riesgos de romper con todas las instituciones del poder constituido. Los liberales, en su recelo al autoritarismo populista, idealizan las instituciones del poder constituido.

Cas Mudde (2004) definió al populismo como una serie de ideas sobre la política, esto es, una ideología de núcleo poroso que considera que la sociedad está dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos (el pueblo puro frente a la élite corrupta) y que sostiene que la política debería ser una expresión de la voluntad general del pueblo. Ya que el populismo es una ideología sin la fuerza de ideologías duras como el liberalismo o el socialismo siempre aparece junto a otras ideologías. Y, a diferencia de las teorías políticas que consideran que sin un líder no hay populismo, para estos autores el líder no es central en su definición del populismo.

La teoría de Mudde estudia la *demanda* y la *oferta* populista. Las *demandas* se enfocan en factores estructurales que influyen en las preferencias, actitudes y creencias de las masas: la liberalización de la economía europea, la crisis del estado benefactor, la desindustrialización y la inmigración musulmana, por ejemplo, han transformado los valores y creencias de los electores. Las explicaciones que se concentran en la demanda señalan que se ha dado un espacio para el populismo, pero no explican las condiciones para que se de este fenómeno. La *oferta*, por su parte, se enfoca en la agencia de los partidos y actores políticos. En contextos en que los partidos europeos migraron al centro desradicalizando sus demandas, los partidos populistas ofrecen alternativas: los de derecha, como el Frente Nacional, cuestionan la inmigración y la pérdida de soberanía nacional; los de izquierda, como PODEMOS, politizan las inequidades producidas por el neoliberalismo sin estigmatizar a los inmigrantes.

Quienes ven al populismo como ideología tienen una visión muy amplia de este concepto: una serie de ideas políticas. Al no tener textos fundacionales y un conjunto de ideas y preceptos aceptados por todos, el populismo es una ideología porosa y débil que necesariamente va junto a ideologías fuertes. Es así que incluyen en su definición a todos quienes ven la política como una lucha moral entre el pueblo y las élites asentándose en la noción de soberanía popular. El problema es que esta definición es demasiado amplia e incluye demasiados casos. Si el populismo fuera una ideología abarcaría a movimientos de protesta como los indignados, a políticos como el norteamericano Bernie Sanders (que contraponen el 99% contra el 1%, pero usó un partido político establecido) y a Chávez, que emergió en contra de la partidocracia. Además, se asume que el populismo es una categoría estática (se es populista o no) y se decide quién es populista midiendo sus ideas. Este empiricismo llevó a Kirk Hawkins a sostener que George W. Bush era un populista cuando este se refería en sus discursos a un enemigo externo muy diferente de los enemigos de Chávez, por ejemplo.

Las teorías ideológicas dicen no usar criterios normativos y aseguran que el populismo puede ser a la vez un riesgo y un correctivo para la democracia. Anotan que los populistas son antiliberales y que no respetan el pluralismo, pero que no son antidemocráticos. Estos autores deberían diferenciar los procesos de inclusión material, política y simbólica de la democracia. Sin libertades básicas y sin pluralismo las democracias devienen en autoritarismos. Además, una teoría del populismo necesita criterios normativos para diferenciar populismos y explicar por qué ciertos populismos son un riesgo o un correctivo para la democracia. Hay populismos como el de Trump y Rodrigo Duterte en las Filipinas que son autoritarios y que prometieron mano dura contra el crimen y restringir libertades y derechos. Es necesario tener una teoría normativa para analizar por qué Chávez o Correa, que prometieron democracias reales y verdaderamente participativas, empujaron democracias débiles y en crisis al autoritarismo.

Ernesto Laclau (2005) desarrolló una teoría formal del populismo. No es una ideología, política económica o expresión de una clase social: es una lógica que produce identidades populares, necesaria para dar fin a sistemas administrativos excluyentes y construir órdenes alternativos. Laclau distingue las *lógicas de la diferencia* y *de la equivalencia*. La primera supone que las demandas se satisfagan administrativamente de manera individual. Sin embargo, hay demandas que no se pueden resolver institucional o administrativamente y se agregan en cadenas de equivalencia. El populismo es una forma de articulación discursiva anti institucional, basada en la construcción de un enemigo y en una lógica de la equivalencia que puede llevar a la ruptura del sistema. El líder es central, pues se transforma en un significativo vacío en el que se pueden proyectar diferentes propuestas y aspiraciones.

La ruptura populista fue para Laclau la alternativa a la negación de lo político por la administración. Sin embargo, al basarse en la teoría de lo político de Carl Schmitt su teoría puede justificar autoritarismos populistas. Si lo político se concibe como la lucha entre amigo y enemigo, es difícil imaginarse rivales con espacios institucionales o normativos legítimos. Los populistas desde Perón a Chávez manufacturaron enemigos en el sentido existencial que los caracterizó Schmitt, enemigos que tenían que ser contenidos. Perón por ejemplo dijo que cuando un adversario político se transforma en un enemigo de la nación, *ya no son caballeros con los que uno debe luchar siguiendo las reglas, sino que serpientes a las que uno tiene que matar de cualquier manera* (Finchelstein, 2013: 86).

Ejemplos recientes de rupturas populistas en América Latina fueron el chavismo, el correísmo y el evismo que dieron fin al neoliberalismo y convocaron asambleas constituyentes para crear nuevas instituciones políticas. Otros líderes populistas, como los Kirchners o Tsipras en Grecia, no pudieron o quisieron llevar a rupturas populistas en el sentido que les da Laclau. La sociedad civil, instituciones políticas nacionales y aún supranacionales frenaron las rupturas populistas.

Estrategias conceptuales

Los historiadores y científicos sociales interpretativos parten de la premisa de que el populismo es un fenómeno complejo que no puede ser reducido a un atributo principal o a una definición universal y genérica. Por lo tanto, usan estrategias conceptuales acumulativas o desarrollan tipos ideales. Jean Cohen (2019: 13-14) por ejemplo, enumera 10 criterios para identificar a un partido, movimiento o líder como populista.

- ◆ Apela a los significantes vacíos el pueblo y la soberanía popular.
- ◆ Utiliza una lógica del *pars pro toto* que extrae al pueblo auténtico del resto de la población a partir de la lógica de la equivalencia en que una serie de demandas son construidas como la identidad substancial que sustituye al todo.
- ◆ Ejerce un discurso “del pueblo en contra de las élites”.
- ◆ Construye una frontera de antagonismo (a la manera de Schmitt) de lo político como el antagonismo amigo-enemigo.
- ◆ Unifica todo, por lo general, en la figura de un líder, que busca encarnar las voces auténticas del pueblo.
- ◆ Se enfoca en los factores simbólicos de la representación política.
- ◆ Estilo de liderazgo performativo que reproduce el habitus (forma de hablar, vestirse y comportarse) del pueblo auténtico.
- ◆ Despliega una retórica dramática y argumentos para hacer que la nación sea grande otra vez, para restaurar el honor, la centralidad y la influencia política del pueblo auténtico.
- ◆ Se enfoca en supuestas crisis, la decadencia nacional y las dimensiones extraordinarias de la política.
- ◆ Depende de una ideología fuerte para tener sustento moral y teórico.

Los positivistas argumentan que los conceptos acumulativos no permiten la acumulación del conocimiento. Argumentan que al enumerar atributos del populismo se ponen juntas características de partidos disimilares (Pappas, 2019: 29). Además, se sienten incómodos con gradaciones del populismo y proponen que más bien hay que diferenciar el populismo con lo que no es, con su opuesto. Su objetivo es producir definiciones genéricas que puedan viajar en el tiempo y en el espacio. Por esto definen **cuál es el campo**

del populismo. Para Weyland es **la política**, entendida como luchas estratégicas por el poder. Takis Pappas (2019: 33-35) señala que el campo del populismo es **la política democrática** y define el populismo como *iliberalismo democrático*. Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser (2012) argumentan que su dominio es la **moral** y que el populismo es una forma de política maniquea. Mientras que para Weyland y Pappas **el líder** es central en la definición de populismo, Mudde argumenta que el líder no es un rasgo definitorio y expande el campo de estudio a **movimientos y actitudes ciudadanas**.

El concepto de populismo se usa para referirse a una ideología vaga, a estrategias para llegar al poder y gobernar, a una lógica que construye identidades políticas populares. Se refiere simultáneamente a un tipo ideal o a un concepto mínimo. Debido a las profundas diferencias epistemológicas de quienes usan este concepto, regularmente aparecen voces que piden se abandone su uso y se “retire” del vocabulario de las ciencias sociales. El historiador Enzo Traverso (2019: 16) señala que el concepto de populismo es *una cáscara vacía que puede ser rellena con los contenidos más disparatados*. Sin embargo, pese a sus declaraciones abolicionistas, usa este concepto cuando se refiere a Trump como un político populista (2019: 20).

En lugar de abandonar el concepto sugiero aceptar que el populismo es un concepto irremplazable e inescapable de nuestro vocabulario sociopolítico. El populismo es un concepto básico usado en controversias políticas (Ritcher, 2005: 227). No tiene un sentido único e indisputable, sino una variedad de significados conceptuales en la que varios grupos luchan por hacer que su definición sea la que tiene autoridad y peso (Baehr, 2008: 12).

¿Qué hacen los populistas?

Nadia Urbinati argumenta que en lugar de buscar la definición perfecta en la que nunca nos pondremos de acuerdo es más fructífero analizar qué hacen los populistas. Independientemente de cómo lo definamos, hay una serie de discursos, acciones y *performances* en las que vemos al populismo en acción.

Creando y manufacturando enemigos

Los populistas no enfrentan a rivales políticos a los cuales pretenden convencer con argumentos: confrontan y manufacturan enemigos existenciales. Sin embargo, a diferencia de los fascistas, que buscan eliminar físicamente al enemigo, los populistas lo aniquilan simbólicamente como el *otro peligroso*. Cuando retan el poder de las élites, los enemigos son las élites políticas, económicas y culturales. Una vez en el poder, concentran su lucha en contra de enemigos particulares: los medios, el imperialismo, el *estado profundo* de Trump.

No todos luchan en contra del mismo enemigo. Los populistas de derecha en Europa y los Estados Unidos por lo general enfrentan a dos enemigos: élites cosmopolitas que están en el poder y dependientes de color que ocupan el lugar más bajo de la sociedad porque no tienen una ética del trabajo y viven de la beneficencia que les dan las élites. Por ejemplo, los enemigos de Donald Trump son las élites globalizantes y multiculturales y los dependientes de color que no trabajan y viven de la beneficencia que es pagada con los impuestos del verdadero pueblo trabajador. Muchas veces se usan argumentos racistas sobre el otro para satanizarlo como culturalmente inferior y diferente y que, por lo tanto, no podrá ni querrá asimilarse. El otro es visto como una plaga, un virus, una enfermedad que contaminará la pureza del pueblo. Su cultura, religión y costumbres no

son sólo diferentes, sino que la antítesis de la cultura del grupo étnico dominante. Los populistas de derecha deshumanizan al otro politizando emociones de miedo a lo diferente y por lo tanto desconocido y peligroso. En Europa los inmigrantes musulmanes son vistos como agentes infecciosos (Traverso, 2019: 75), mientras que en lo EEUU los mejicanos ilegales, término que se aplica a las personas de origen latinoamericano, son el otro contrario a la verdadera americanidad.

Los enemigos de los populistas de izquierda, por otra parte, son las élites políticas y económicas, la casta, la oligarquía. Politizan la rabia provocada por las indignidades de las desigualdades estructurales del clasismo y el racismo. La rabia, la indignación y la envidia se usan para la movilización.

La lógica y el liderazgo populista

Los populistas no buscan empoderar a toda la población ni apelan a la voluntad popular o la voluntad de todos. Más bien buscan devolver el poder a una parte de la población, al verdadero pueblo humillado y destituido por las élites. El resto, o son parte de las élites, o no cuentan en estas visiones del pueblo, que son, por último, decididas por el líder. Cuando las exclusiones son étnicas, hay posibilidades de que el populismo se convierta en fascismo. Sin embargo, se podría argumentar que en condiciones de desigualdad estructural profundas no es tan grave excluir a los ricos, la oligarquía o al 1%. La experiencia histórica de los populismos redistributivos (que ampliaron la participación popular) demuestra que es el líder quien en última instancia decide quién es parte del pueblo. Cuando las organizaciones plebeyas tienen proyectos diferentes a los del líder son estigmatizadas como “manipuladas por el imperialismo y la derecha” y como “amenazas al proyecto nacional popular”.

Para que el populismo sea exitoso se necesita un líder. La representación populista se basa en la fe que tienen los seguidores en su líder. Éste tiene la misión de redimir a su pueblo, por lo que enfrenta enemigos poderosos. Quienes dudan de la bondad y sabiduría del salvador y redentor pueden ser caracterizados como enemigos del líder, del pueblo y de la patria.

Los populismos buscando el poder, en el poder y como regímenes

Cuando los populismos retan el poder presentan sus facetas incluyentes y sus promesas democratizadoras. Politizan temas que eran vistos como técnicos (como las políticas neoliberales). Motivan que gente excluida o marginada de la política participe. Desafían modelos de democracia que limitan la democracia al voto y transforman a los ciudadanos en consumidores. Provocan un renacer de la política y fueron vividos históricamente como momentos excepcionales en los que el pueblo buscó reapropiarse del poder secuestrado por las oligarquías.

El análisis de sus prácticas en el gobierno es más sombrío. Si bien los populismos latinoamericanos desde Perón a Chávez incluyeron a los pobres y a los desposeídos, sus prácticas en el poder han sido autoritarias. Atentaron en contra del pluralismo, restringieron los derechos a la comunicación y a la asociación libre y trataron de manufacturar al pueblo a imagen y semejanza de como se lo imaginó el líder. Cuando surgen en contextos de instituciones sólidas, los populismos por lo general desfiguran la democracia transformando su complejidad en la lucha entre dos campos antagónicos. Si emergen en contextos de crisis de representatividad política y en sistemas políticos con institucionales frágiles, los populismos pueden llevar al autoritarismo de dos maneras. La pri-

mera es cerrando espacios institucionales a la oposición, que busca librarse de los populistas de cualquier manera, incluso con golpes de Estado. Cuando no provocan golpes, los ataques sistemáticos de los gobiernos populistas a la libertad de expresión, la tutela estatal de la sociedad civil, la clausura de espacios institucionales para la rendición de cuentas y el uso instrumental del sistema legal para castigar a los críticos provocan la muerte lenta de la democracia.

Si bien los populismos, por lo general, ya no terminan en golpes de Estado, una vez en el poder minan la democracia desde adentro. Levitsky y Loxton (2019) señalan que **el populismo lleva a que democracias débiles decanten en regímenes competitivos autoritarios por tres razones**. La **primera** es que los populistas son *outsiders* sin ninguna experiencia en la política parlamentaria del pacto y de los compromisos. La **segunda**: fueron electos con promesas de refundar todas las instituciones políticas y en específico el marco institucional de las democracias liberales. La **tercera**: los populistas se enfrentaron al Congreso, al Poder Judicial y a otras instituciones controladas por los partidos. Para ganar elecciones usaron fondos públicos, silenciaron a los medios críticos, usaron los medios estatales a su favor, en algunos casos intimidaron a sectores de la oposición, controlaron los organismos electorales, el poder judicial y las instituciones de control social y rendición de cuentas. Si bien el momento de votar fue libre, el proceso electoral descaradamente les favoreció y les dio ventajas, transformando a la democracia en regímenes legitimados en la lógica electoral, pero que no garantizan que las elecciones se den en canchas equilibradas y con instituciones imparciales.

Sin embargo, los populismos no siempre decantan en el autoritarismo competitivo. Las instituciones de la democracia también pueden limitar los impulsos autocráticos de los políticos. Por ejemplo, las Cortes de Justicia argentinas no permitieron la reelección de Cristina Kichner. Los sistemas parlamentarios en Europa han inducido a que los partidos entren en pactos, negocien sus propuestas y desradicalicen algunas de sus demandas. Por ejemplo, PODEMOS dejó de hablar sobre la necesidad de convocar a una asamblea constituyente y desde que entró a un gobierno de coalición con el PSOE devino un partido de izquierda normal. Sólo en contextos de crisis de representación profundos y cuando lograron mayorías absolutas pudieron los populistas atacar a sus enemigos y concentrar el poder. Cuando los populistas logran usar leyes para controlar la esfera pública, la sociedad civil y las universidades, se transforman en *regímenes*.

Los regímenes populistas se basan en la lógica electoral y democrática como la única fuente de legitimidad y simultáneamente en las ideas autocráticas del *pueblo como uno* y del “líder redentor”. La lógica populista transforma a los rivales en enemigos (en el sentido existencial en que los caracterizó Carl Schmitt) e imagina al *pueblo como uno*. Esto es, como un ente homogéneo que no tiene divisiones internas. La imagen del *pueblo como uno*, como argumentó Claude Lefort (1986), puede llevar al autoritarismo.

Lefort señaló que las revoluciones del siglo XVIII abrieron el espacio político-religioso ocupado por la figura del rey. En su libro *Los Dos Cuerpos del Rey*, Kantarowicz analizó cómo el rey, al igual que Dios, era omnipresente, porque constituía el cuerpo de la política sobre el que gobernaba. Igual que el hijo de Dios, que fue enviado para redimir el mundo, era hombre y Dios, tenía un cuerpo natural y divino, y ambos eran inseparables. La democracia, señala Lefort, transformó el espacio antes ocupado por el rey en un espacio vacío que los mortales sólo pueden ocupar temporalmente.

Las revoluciones del siglo XVIII, argumentó Lefort, a su vez generaron un principio que podía poner en peligro el espacio vacío de la democracia. La soberanía popular entendida como un sujeto encarnado en un grupo, un estrato o una persona podría clausurar el espacio vacío a través de la idea del *Pueblo como Uno*. El totalitarismo, argumenta Lefort,

es un intento forzado de llenar y aun de saturar el espacio vacío de la democracia. Simbólicamente, se abandona la noción democrática del pueblo como heterogéneo, múltiple y en conflicto, donde el poder no pertenece a nadie, con la imagen del *Pueblo como Uno*, que niega que la división es constitutiva de la sociedad. La división, señala Lefort, se da entre el pueblo, que tiene una identidad, y una voluntad única y sus enemigos externos, que tienen que ser eliminados para mantener la salud del cuerpo del pueblo. Lefort no analizó cómo y cuándo los proyectos totalitarios no devienen en regímenes de este tipo debido a la resistencia de las instituciones democráticas o de la sociedad civil. Tampoco consideró la posibilidad de que existan regímenes que no sean plenamente totalitarios o democráticos. Isidoro Cheresky (2015) utiliza la noción de *poder semiencarnado* para analizar los populismos. El poder se identifica en un proyecto o un principio encarnado en una persona que es casi (pero no totalmente) insustituible, pues la encarnación del proyecto puede desplazarse hacia otro líder debido a que las elecciones son el mecanismo que legitima el poder. El momento fundacional del populismo, como señala Enrique Peruzzotti (2013), fue y es ganar elecciones, consideradas como el único canal para expresar la voluntad popular. Los populistas clásicos lucharon en contra del fraude electoral y expandieron el número de electores. Los populistas refundadores latinoamericanos utilizaron elecciones para crear nuevos bloques hegemónicos y desplazar a los partidos políticos tradicionales. Gobernaron a través de campañas y elecciones permanentes. Las elecciones fueron representadas por los populistas de antaño o de ahora como momentos fundacionales en los que se juegan los destinos de sus naciones. Los populismos utilizan **tres estrategias** para compaginar el precepto democrático de legitimar su poder ganando elecciones y el principio autoritario de asumir al pueblo-como-uno cuya voluntad política se encarna en un redentor. La primera es **utilizar instrumentalmente las leyes y las instituciones de la democracia** para crear canchas electorales desiguales. Si bien el momento electoral es limpio, las campañas descaradamente favorecen las coaliciones populistas que buscan perpetuarse en el poder. La segunda estrategia es **utilizar el poder como una posesión personal del líder** que distribuye recursos y favores con el objetivo de ganar votos. El poder se ejerce como una posesión del líder benefactor y se transforma a los ciudadanos en masas agradecidas. Quienes aceptan el liderazgo del *Mesías Benefactor* son premiados con su amor y con prebendas, quienes resisten o lo cuestionan son tachados de enemigos del líder, del pueblo y de la patria. La tercera estrategia es **silenciar las voces críticas regulando la esfera pública y la sociedad civil** con el objetivo de educar al pueblo en la verdad del líder. El populismo, anota Andrew Arato (2015) es una pedagogía que pretende extraer al pueblo auténtico, tal y como es imaginado por el líder, del pueblo realmente existente.

Diferenciando populismos

Los populismos no son iguales. Los *populismos de derecha*, como el de Trump o Bolsonaro, no buscan profundizar o mejorar la democracia. Son nostálgicos y pretenden reconstruir un pasado imaginado como un momento de armonía y prosperidad. Los *populistas de izquierda* apuntan al futuro, prometen mejorar la democracia y construyen utopías. Los populismos se diferencian en torno a los ejes izquierda/derecha, a su politización de la economía política y sus construcciones del pueblo como *etnos* o plebes. También hay que distinguir entre populismos *light* y populismos *fuertes*. En las democracias de audiencia, los políticos se relacionan directamente con sus seguidores usando los medios y los expertos en comunicación mediática han remplazado a los militantes del partido. La política es cada vez más personalista y las lógicas de los medios y de la política están entrelazadas (Manin, 1997).

Sin embargo, y pese que ocasionalmente usen estrategias o retóricas populistas, no todos los políticos en las democracias de audiencia son populistas. Los líderes populistas tienen misiones redentoras. Debido a que su vocación es la liberación del pueblo, no se sienten atados por normativas e instituciones. Enfrentan enemigos y transforman a la política en luchas *schmittianas* entre la rendición y la opresión.

Conclusiones

Este artículo argumenta que en lugar de buscar el concepto preciso de populismo es mejor enfocarse en lo que hacen los populistas. No se encontrará un consenso sobre qué es el populismo porque los debates sobre el populismo son debates sobre la democracia. Académicos, políticos y periodistas disputan los sentidos del populismo y, sobre todo, qué efectos tiene este sobre la democracia. Para Laclau, el populismo de izquierda es la solución a la administración, la despolitización, la tecnocracia y a los populismos xenófobos de derecha. Para quienes se apoyan en visiones normativas de la democracia liberal, el populismo es un riesgo, pues decanta en autoritarismos. Si bien Laclau idealiza las rupturas populistas sin analizar cómo los populismos de izquierda decantaron en autoritarismos, los liberales idealizan las democracias realmente existentes.

Es necesario diferenciar las promesas de los populistas cuando retan a las élites de sus prácticas en el poder. Cuando los populistas logran cambios constitucionales e institucionales, someten a las cortes de justicia, quitan poder al parlamento, disminuyen el peso de las instituciones de rendición de cuentas crean regímenes populistas. Estos combinan la lógica democrática de asentar su legitimidad en las elecciones con la lógica autoritaria del pueblo como uno y del líder redentor.

Cuando Ionescu y Gellner editaron su volumen, el populismo estaba ausente de Europa. Al momento de escribir estas líneas, los populistas están en coaliciones o gobiernan en varios países europeos y en los Estados Unidos. El populismo está acá para quedarse. Hay que tomar en serio sus críticas al poder constituido, pero no aceptar sus soluciones pues las experiencias de los populismos exitosos, desde Perón hasta a Chávez y de Orbán a Trump, han llevado a procesos de retroceso democrático y en el caso de Venezuela, con Maduro, a un gobierno autocrático.

Referencias bibliográficas

- Arato, A. (2015). "Political Theology and Populism", en Carlos de la Torre (ed.) *The Promise and Perils of Populism*. Lexington: Kentucky University Press.
- Baehr, P. (2008). *Caesarism, Charisma and Fate. Historical Sources and Modern Resonances in the Work of Max Weber*. New Brunswick: Transaction Press.
- Cheresky, I. (2015) *El nuevo rostro de la democracia*, Buenos Aires: FCE.
- Cohen, J.L. (2019) "Populism and the Politics of Resentment", *Jus Cogens* N° 1, pp. 5-39.
- De la Torre, C. (ed.) (2019). *The Routledge International Handbook of Global Populism*. New York: Routledge.
- Finchelstein, F. (2014). *The Ideological Origins of the Dirty War*. Oxford: University Press.
- Germani, G. (1978). *Authoritarianism, Fascism, and National Populism*. New Brunswick: Transaction Books.
- Hawkins, K. (2010). *Venezuela's Chavism and Populism in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Henisch, H. y Mazzoleni, O. (2017). *Political Populism. A Handbook*. Baden-Baden: Nomos.
- Hofstadter, R. (1955). *The Age of Reform*. New York: Alfred A. Knopf.
- Ionescu, G. y Gellner, E. (1969). "Introduction", en *Populism. Its Meanings and National Characteristics*. Londres: The Macmillan Press.
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. Londres: Verso.
- Lefort, C. (1986). *The Political Forms of Modern Society. Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism*. Cambridge: MIT Press.
- Levitsky, S. y Loxton, J. (2019). "Populism and competitive authoritarianism in Latin America", en de la Torre, C. (ed.) *The Routledge International Handbook of Global Populism*. New York: Routledge.
- Manin, B. (1997). *The Principles of Representative Government*. Cambridge: University Press.
- Mudde, C. (2004). "The Populist Zeitgeist". *Government and Opposition*, Vol. 39, N° 4, pp. 541-563.
- (2012). *Populism in Europe and the Americas*. Cambridge: University Press.
- Pappas, T. (2019) *Populism and Liberal Democracy. A Comparative and Theoretical Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Parsons, T. (1955). "Social Strains in America", en Bell, D. (ed.) *The New American Right*. New York: Criterion Books.
- Peruzzotti, E. (2013). "Populism in Democratic Times: Populism, Representative Democracy, and the Debate on Democratic Deepening", en de la Torre, C. y Arnson, C. J. (ed.) *Latin American Populism in the Twenty-First Century*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Postel, C. (2016). "The American Populist and Anti-Populist Legacy", en Abromeit, J. y Cherston, G. (ed.) *Transformations of Populism in Europe and the Americas History and Recent Tendencies*. Londres: Bloomsbury Press.
- Ritcher, M. (2005). "A Family of Political Concepts Tyranny, Despotism, Bonapartism, Caesarism, Dictatorship, 1750-1917". *European Journal of Political Theory*, Vol. 4, N° 3, pp. 221-248.
- Rovira Kaltwasser, C., Taggart, P., Ochoa, P. y Ostiguy, P. (2017). *The Oxford Handbook of Populism*. Oxford: Oxford University Press.
- Traverso, E. (2019) *The New Faces of Fascism. Populism and the Far Right*. Londres: Verso.
- Urbinati, N. (2019). *Me the People. How Populism Transforms Democracy*. Cambridge, Harvard University Press.
- Weyland, K. (2001). "Clarifying a Contested Concept". *Comparative Politics*, Vol. 34, N° 1, pp. 1-22.
- Wiles, P. (1969) "A Syndrome not a Doctrine" in *Populism. Its Meanings and National Characteristics*, Londres: The Macmillan Press.

Enrique Peruzzotti
peruzzot@utdt.edu
Universidad Torcuato Di Tella
Argentina

La democracia representativa

frente a la estrategia populista de polarización

Resumen

El artículo analiza las causas que han llevado al populismo a establecerse como la principal amenaza a las democracias representativas realmente existentes. La irrupción de los populismos contemporáneos supuso el fin del consenso democrático que se había consolidado a lo largo de la tercera ola de democratización. Dicho consenso estaba predicado en cierta concepción de la democracia: la liberal-representativa. En un período en que las formas abiertamente dictatoriales han perdido legitimidad, el populismo adquiere protagonismo como narrativa democrática alternativa. Sin embargo, su estrategia política de polarización genera mas riesgos que soluciones a la crisis de representación actual.

Palabras clave

Polarización, Populismo, Democracia, Representación.

Abstract

The article analyzes the causes that have led populism to establish itself as the main threat to truly affected representative democracies. The irruption of contemporary populisms marked the end of the democratic consensus that had been consolidated throughout the third wave of democratization. This consensus was predicated on a certain conception of democracy: the liberal-representative one. In a period when overtly dictatorial forms have lost legitimacy, populism takes center stage as an alternative democratic narrative. However, its political polarization strategy generates more risks than solutions to the current representation crisis.

Keywords

Polarization, Populism, Democracy, Representation.

La era del populismo

En las últimas tres décadas, el mundo democrático pasó de la ilusión de un consenso en torno al ideal poliárquico a la polarización. En años recientes, numerosos trabajos han resaltado con preocupación cómo la vida política de las democracias está siendo socavada por la polarización política. Los partidos moderados que habían dominado la escena pública en muchas democracias están siendo asediados y desplazados por discursos e ideologías extremas que terminan estructurando una oferta política altamente polarizada (Hetherington, 2009). La polarización afecta indistintamente a viejas y nuevas democracias, debilitando la institucionalidad democrática y las normas de convivencia política, al punto de poner en riesgo la supervivencia de los regímenes democráticos (Levitsky y Ziblatt, 2018: 9).

Es en este contexto de crisis política que las expresiones contemporáneas de populismo han logrado acaparar la escena política de las democracias contemporáneas, posicionándose como el principal adversario de la democracia liberal. La crisis contemporánea de la democracia liberal, sin embargo, difiere de anteriores crisis. Es común las referencias a los vaivenes experimentados por las democracias europeas en el período de entreguerras, en las que la legitimidad de esos regímenes era abiertamente cuestionada por ideologías totalitarias. Hoy dicha amenaza ha desaparecido. La derrota de los fascismos y la crisis más recientes de los estados burocrático-autoritarios y del régimen soviético, supuso la eliminación de históricos rivales de la democracia liberal representativa. La globalización del ideal populista está ligada a la crisis de los totalitarismos y autoritarismos: desaparecidos sus principales enemigos, el populismo se consolida como el principal contendiente al modelo de democracia imperante.

Desde sus orígenes, el populismo moderno ha buscado posicionarse como una alternativa a la democracia liberal como a la dictadura totalitaria. Como régimen político nace a partir de la derrota del fascismo, en un doble movimiento de condena moral a la democracia liberal y de rechazo a la violencia y la dictadura. En el contexto de la posguerra, el populismo moderno ocupa el lugar que había dejado vacante los fascismos derrotados, presentándose como una alternativa (democrática) al liberalismo y al comunismo (Finchelstein, 2017: 15). La crisis del régimen comunista soviético reavivó la llama populista, al punto de posicionarse como principal contra-narrativa democrática al liberalismo político, con el aditamento de que, esta ocasión, no enfrentaba competencia por parte de fórmulas de legitimidad abiertamente autoritarias. Es esto último lo que explica, en parte, la notoria globalización que ha experimentado el modelo populista en un contexto de crisis de las democracias realmente existentes. No es casualidad que dicho fenómeno adquiriera una dimensión continental en las dos regiones del mundo que habían exitosamente transitado el pasaje del autoritarismo a la democracia: Europa y las Américas.

El artículo se divide en dos secciones. La primera analiza el contexto en que surgen y expanden las formas contemporáneas de populismo y la teoría democrática que los respalda. La segunda sección describe la estrategia de identificación populista de manera de analizar los rasgos diferenciales que distinguen a los procesos de polarización promovidos por el populismo, así como sus consecuencias sobre el entramado democrático.

El populismo contemporáneo como alternativa al canon poliárquico

Con la caída de la Unión Soviética se cerró un largo ciclo de conflicto (que consumió buena parte del siglo XX) entre ideales democráticos y totalitarios. Si bien la democracia liberal había logrado un significativo triunfo a mediados del siglo pasado frente a las dictaduras fascistas, dicha victoria fue compartida con el régimen soviético, por lo tanto, la derrota del fascismo no supuso la clausura definitiva de las alternativas totalitarias. La vigencia

de la que gozó el comunismo en las décadas posteriores a la posguerra, su atracción ideológica y el posicionamiento de la Unión Soviética como una potencia que desafiaba al mundo libre eran claro indicadores de los desafíos que enfrentaba la democracia liberal. A lo anterior se le sumaba la aparición de nuevas formas de autoritarismo militar que se postulaba como una vía modernizadora alternativa (Huntington, 2014, O'Donnell, 2011). Es recién con la crisis de los regímenes burocrático-autoritarios y el desmoronamiento de las sociedades de tipo soviético que el triunfo de la democracia liberal fue percibido como definitivo, al punto que dicho episodio fue interpretado como la aurora de una era post-ideológica (Fukuyama, 2016).

1. En realidad, el triunfo de la democracia también afectó al autoritarismo, produciendo una ola paralela desde el autoritarismo cerrado al autoritarismo competitivo o electoral (Levitsky y Way, 2002).

La nueva era, se suponía, inauguraba una etapa donde la cuestión del régimen político quedaba saldada: la democracia liberal se erigía en el horizonte a alcanzar tanto por las nuevas democracias surgidas de la tercera ola como por aquellos países y regiones que aún no habían sido alcanzados por los vientos de la democratización¹. En un escenario donde el conflicto ideológico había sido saldado en favor de la democracia representativa, la política quedaba acotada a la tarea de perfectibilidad de dicho régimen. La perspectiva sobre la calidad de la democracia es quizá el mas claro ejemplo de dicha concepción de la política democrática, donde la práctica política está pensada en clave de perfectibilidad de un orden cuyos fundamentos quedan fuera de todo cuestionamiento (Morlino, 2014, Iazzetta *et al.*, 2003, Levine, 2011).

Suprimido el conflicto ideológico, las energías políticas debían centrarse en el mejoramiento de las *democracias realmente existentes* de manera de acercar las dinámicas políticas de las nuevas democracias a las de las viejas democracias. En términos de Guillermo O'Donnell, se hacía necesaria una *segunda transición* de un subtipo de democracia (poliarquía delegativa) a otra (poliarquía representativa) (O'Donnell, 1994). Aquellas regiones del planeta que aún no habían experimentado procesos de democratización, quedaban a la espera de futuras oleadas democratizadoras que les permitiría eventualmente incorporarse al concierto de naciones democráticas. En síntesis, en ese nuevo escenario, la política parecía acotarse a dos opciones:

2. Los eventos en el mundo árabe crearon la expectativa de una inminente cuarta ola de democratización que iba a transformar dicha parte del globo. Ver Abushouk (2016).

- ◆ el perfeccionamiento de las democracias realmente existentes o bien
- ◆ la expansión geográfica de dichos ideales a países o regiones aún no democratizados.²

No se preveía en este marco interpretativo la reaparición de una forma de conflicto ideológico que pusiera en cuestión el consenso alcanzado: la poliarquía representativa como modelo democrático a emular.

La irrupción de las diversas expresiones del populismo contemporáneo representó el quiebre del consenso político de la tercera ola y la inauguración de una nueva y distintiva etapa de conflicto en el mundo democratizado. Lo distintivo de la actual coyuntura política es la forma que adoptan los conflictos, diferenciada de las formas que las disputas ideológicas habían asumido en el siglo XX. La principal novedad es el corrimiento del eje de conflicto político, el cual ya no está estructurado alrededor de una confrontación democracia/totalitarismo, sino que se organiza en torno a una disputa definicional acerca de la naturaleza misma de la democracia (Peruzzotti, 2017a).

En un contexto en que la democracia se constituye como *the only game in town*, las disputas devienen conflictos interpretativos acerca de cómo entender la democracia. El ideal democrático se mantiene como principio irreducible de legitimidad, lo que está abierto a discusión es cómo el mismo es traducido en términos de régimen político. El populismo postula una interpretación alternativa al canon liberal de la poliarquía representativa. La teoría democrática del populismo considera que el principal obstáculo que

3. El término *accountability* adquirió centralidad en la agenda de los estudios sobre calidad democrática. La noción de *accountability democrática* se reducía fundamentalmente a la de gobierno limitado, es decir, a fortalecer aquellos mecanismos que permiten el control legal y constitucional del poder político. Dicho control se desplegaba en tres direcciones: en primer lugar, prevención de usurpaciones ilegítimas del Ejecutivo sobre la jurisdicción de los poderes legislativo, judicial y otros organismos estatales cuyo funcionamiento es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema horizontal de controles interestatales, en segundo lugar, protección de los derechos civiles individuales y de la autonomía de la sociedad civil, en tercer lugar, evitar la captura y colonización de agencias estatales por parte de grupos inescrupulosos o funcionarios públicos.

la democracia confronta es el principio liberal de gobierno limitado. En esta visión, la apropiación liberal del ideal democrático vacía a la democracia de sentido, cristalizando un régimen político preocupado en proteger los intereses de las minorías que en realizar las demandas mayoritarias. El populismo viene al rescate del principio de la soberanía popular entendida en clave plesbicitaria: aspira a la instauración de un régimen político que libere a la voluntad popular expresada en las autoridades electas, de las restricciones constitucionales que impone la poliarquía representativa. La teoría política del populismo conceptualiza a la relación democracia/liberalismo como de suma cero, es por ello que su propuesta de democratización de las democracias realmente existentes puede sintetizarse mediante la fórmula **+ democracia - liberalismo** (Schmitter, 2019).

La crítica populista apela a la transformación de la democracia por vías democrático electorales. Su fórmula supone desandar el camino indicado por la agenda de mejoramiento democrático: en este caso (y en oposición al postulado de O'Donnell) aspira reemplazar un subtipo de democracia (la *poliarquía representativa*) por un subtipo *populista*. Dicha transición supone el desmantelamiento de las instituciones de *accountability legal* y la centralización del poder en la figura del ejecutivo electo.

El blanco del populismo es el principio de gobierno limitado que había estructurado la agenda de trabajo de los estudios sobre democratización y mejoramiento institucional (O'Donnell, 2003). En dicha literatura, el concepto de *accountability legal* aparecía como el principio estructurador del régimen democrático. La agenda de perfectibilidad democrática que postulaba³ suponía que el mejoramiento democrático estaba directamente atado al fortalecimiento de las instituciones de control legal e institucional (de *accountability horizontal*, según el término acuñado por Guillermo O'Donnell) de manera de prevenir abusos de poder por parte de los gobiernos de turno y fortalecer los derechos civiles de los ciudadanos (O'Donnell, 2003, Mendez, O'Donnell y Pinheiro, 1999, Peruzzotti y Smulovitz, 2006).

El populismo contemporáneo denuncia dicha agenda como conservadora y propone un giro político-institucional de 180 grados: en su concepción, el derecho no debe limitar sino expresar la voluntad de la autoridad mayoritaria. Se pasa así del ideal del gobierno limitado al de *gobierno elegido ilimitado*, en el que se busca imponer al resto de la sociedad lo que se considera es la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Lo anterior inevitablemente genera altos niveles de conflictividad y polarización política y la escisión de la sociedad en dos campos que, si bien apelan a la democracia, se muestran irreductibles en sus respectivas interpretaciones de la misma: de un lado se ubican los defensores de del modelo liberal de democracia y del otro los partidarios del modelo populista.

Los vientos populistas azotan en una coyuntura donde nuevas y viejas democracias confrontan crisis socioeconómicas y de representatividad en sociedades donde la legitimidad dictatorial no aparece como una alternativa viable. En este sentido, la tesis de Francis Fukuyama se ve realizada, no como triunfo de un modelo particular de democracia sino solamente como aceptación de la legitimidad democrática. Lo distintivo es que los conflictos interpretativos acerca de cómo traducir dichos principios en un régimen institucional van a marcar el compás de los desarrollos políticos contemporáneos y generar un nuevo tipo de amenaza a la democracia que es generada endógenamente por sus propias dinámicas.

El germen de la actual crisis de las democracias puede rastrearse en varios lugares: en primer lugar, en las significativas mutaciones socioeconómicas que se han experimentado a partir de mediados de los setenta y que han producido un escenario marcado por profundas asimetrías sociales y geográficas que generan inseguridad material en significativos sectores del electorado (Gidron y Hall, 2017); en segundo lugar, por un desen-

cantamiento con las formas heredadas de las *democracias realmente existentes*, percibidas como incapaces de dar adecuada respuesta a los desafíos contemporáneos (Schmitter, 2019). Así como en su momento el fascismo y el comunismo proveyeron contranarrativas a la gran transformación que las sociedades industriales estaban experimentando, los populismos contemporáneos de izquierda y derecha articulan reclamos legítimos en una retórica antipluralista y polarizadora, que de acceder al gobierno se traduce en una lógica antagónica de ejercicio del poder que pone en jaque elementos constitutivos de la democracia liberal (Cohen, 2019, Peruzzotti, 2019).

La estrategia de identificación populista: riesgos y limitaciones

Existe una afinidad electiva entre polarización y populismo puesto que este último representa una estrategia de identificación política que descansa exclusivamente en la efectividad que su retórica obtenga en dividir a la sociedad en dos campos antagónicos. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la polarización política promovida por el populismo? ¿En qué se diferencia de otras estrategias de polarización? Ciertamente, el populismo no es la única estrategia política que apela a la polarización. Tanto el fascismo como el comunismo supusieron procesos de construcción política antagónica donde la clase o la raza proveyeron criterios de demarcación y sobre los que se promovieron políticas orientadas a la eliminación literal de quienes consideraban sus enemigos. No es este el caso del populismo moderno, que se distingue de los fascismos y del comunismo por su rechazo de una opción abiertamente autoritaria. En este sentido, la polarización política populista puede ser entendida como un subtipo de polarización democrática.

La *polarización democrática* fue definida por Giovanni Sartori (1976) como la distancia ideológica entre candidatos, partidos y/o votantes de un sistema de partidos. Lo anterior supone el debilitamiento de las estrategias de atrapa todo y el corrimiento de los partidos hacia posiciones más ideologizadas. La *polarización populista* representa un subtipo de polarización democrática que difiere en varios aspectos de la polarización partidaria. Primero, es una polarización promovida generalmente por un *outsider* del sistema político, proceso marcado por la personalización, es decir, por la emergencia de un liderazgo que cuestiona no solamente a los partidos existentes sino también a otras instituciones del gobierno representativo, como el poder judicial o los medios. Segundo, no se estructura necesariamente alrededor de los clivajes ideológicos sobre los que se organiza el sistema de partidos, sino que busca generar un clivaje novedoso y alternativo. Tercero, más allá de las diferencias que puedan existir entre populismos de derecha e izquierda, el populismo como ejercicio antagónico del poder inevitablemente supone cambios en el régimen democrático que, si bien no necesariamente generan una completa ruptura del mismo, promueven una forma iliberal de democracia.

¿Qué caracteriza a la polarización populista? El populismo representa una estrategia particular de construcción de identidades políticas cuya efectividad se mide por su capacidad de partir a la sociedad en dos campos irreconciliables. Para ser efectiva, la polarización populista requiere de la presencia de ciertas **precondiciones**.

En primer lugar, una **crisis del orden político**. El populismo es un fantasma o sombra que acecha a la democracia representativa e irrumpe en contextos de profunda crisis de esta última exponiendo sus defectos (Arditi, 2005, Panizza, 2007) y postulando una estrategia superadora de las limitaciones de esta última. La existencia de una crisis de representación es el *sine qua non* del populismo: el sistema institucional tiene que estar quebrado para que una estrategia populista sea viable. Esta última puede ser efectiva en contextos marcados por la quiebra de las estructuras de intermediación del gobierno

4. En este aspecto, se diferencia de la *polarización partidaria* marcada por el corrimiento ideológico de las plataformas y discursos partidarios hacia los extremos. Los *outsiders* populistas se presentan por fuera de los partidos tradicionales y polarizan contra la totalidad de la sociedad política.

5. Este es un aspecto fundamental de toda estrategia populista y, por lo tanto, el populismo sólo puede desarrollarse plenamente si dicha línea divisoria logra efectivamente partir a la sociedad en dos campos irreconciliables. De lo contrario, el populismo como estrategia falla. Este era uno de los temores de Ernesto Laclau con respecto al kirchnerismo: en su visión, este último no había sido capaz de establecer una divisoria política de aguas similar a la que previamente había generado Juan Domingo Perón y calificaba al primero como un *populismo a medias*. Es por ello que, en reiteradas ocasiones, Laclau exhortó a los Kirchner a asumir a abrazar más decididamente una retórica populista de manera que alcanzase el status de un populismo pleno. Para un análisis de la visión de Laclau sobre el kirchnerismo ver Peruzzotti, 2017b.

6. De ahí la centralidad y la prioridad que adquiere la construcción de un enemigo en esta particular estrategia de identificación política.

7. En este aspecto, el populismo retoma el paradigma simbólico de representación por el *Führer* característico del fascismo, aunque en una forma menos extrema, pues como argumentáramos en la sección anterior, lo que convierte al populismo en un postfascismo es su aceptación de la legitimidad democrática y, por ende, de la lógica electoral. Las elecciones, y fundamentalmente el triunfo electoral, cumplen un doble papel: en primer lugar, certificar el éxito de un proceso de identificación, en segundo lugar, continuar demostrando, a través de subsecuentes victorias electorales, que efectivamente el líder encarna la voluntad del pueblo (Peruzzotti, 2009).

representativo. La incapacidad del régimen político de proveer respuestas genera una experiencia de privación que es el punto de partida del proceso de identificación populista. Si no existe un cúmulo de demandas insatisfechas, no hay posibilidad de activación de la lógica equivalencial del populismo que se rebela contra el *status quo* existente (Laclau, 2007: 127)

En segundo lugar, la **construcción de un enemigo**. La noción de pueblo se construye alrededor de un acto de no reconocimiento de una parte de la comunidad política: aquellos que han sido rotulados como enemigos. Dichos enemigos son los defensores del *status quo* por lo que es necesario promover una ruptura del orden institucional establecido. El populismo expresa una estrategia de outsiders que prescinde de los mecanismos de mediación habituales de la política representativa puesto que su objetivo es movilizar a aquellos sectores que están fuera (*disenfranchised*) o enojados con el sistema político⁴. Ese universo de demandas individuales insatisfechas es inevitablemente diverso y heterogéneo: lo único que comparten en común es un sentimiento de exclusión. Unificar tan contradictorio universo requiere de una operación retórica específica, capaz de agregar una pluralidad dislocada de demandas individuales en un discurso que carece de coherencia o racionalidad. La construcción simbólica de un enemigo común es un paso esencial del proceso de identificación populista pues es lo que le permite trazar la línea divisoria sobre la cual construye simbólicamente la noción de pueblo como su contracara. En este aspecto, el significante *enemigo* (sea el régimen, la casta política, la oligarquía, el imperialismo, etc.) cumple una función articuladora crucial dada la vaguedad que por definición caracteriza al significante vacío *pueblo* (Laclau, 2007: 87). En síntesis, y parafraseando a Laclau, el destino del populismo está atado a la efectividad que adquiera su retórica polarizante: si el discurso populista es incapaz establecer dicha frontera interna con nitidez, el populismo como estrategia resulta inviable⁵ (Laclau, 2007: 89).

En tercer lugar, la **construcción del significante vacío “pueblo”**. El pueblo, nos dice Laclau, es una parte que se concibe como el todo. Es en este sentido que la construcción simbólica del pueblo depende de la efectiva construcción de un enemigo. La noción populista de pueblo se basa en un acto original de exclusión de aquellos considerados enemigos: el pueblo, nos dice Laclau, es una parte que se considera como el todo. El todo pueblo aspira a agregar un conjunto heterogéneo y contradictorio de demandas, por lo que dicha construcción supone la postulación de un significante marcado por la ambigüedad de contenidos. La vaguedad ideológica es compensada por la intensidad del antagonismo⁶ (Arato, 2015: 45).

En cuarto lugar, la **encarnación del pueblo en el líder**. Dada la naturaleza contradictoria y ambigua del significante pueblo, su unificación simbólica solo puede alcanzarse a través de la personalización (Laclau, 2007, p. 100). El líder provee el punto focal de identificación: su figura simboliza al pueblo⁷. Los lazos afectivos, en particular el amor al líder, compensa la ausencia de una identidad basada en una plataforma partidaria o una ideología “fuerte”. (Arato, 2015: 45, Laclau, 2007: 82-83).

La democracia representativa frente a la estrategia de polarización populista

La *polarización política* representa un desafío a las dinámicas políticas democráticas puesto que tiende a socavar las instituciones informales que permiten el desarrollo de procesos de negociación y compromiso político. Estos desafíos se incrementan exponencialmente frente al grado extremo de polarización que propone la estrategia populista. La teoría democrática de la poliarquía se apoyaba no solamente en el diseño de las instituciones formales sino también en un conjunto de instituciones informales que expresaban la existencia de una cultura política pluralista predicada en el mutuo reconocimiento de los miembros de una comunidad política. El populismo reemplaza a la representación por la identificación, proceso que demanda una dramática simplificación del escenario institucional y político. De esta manera, el populismo apunta a resolver la crisis de representación eliminando la función de intermediación de las diversas instancias de la poliarquía, reemplazándola por un escenario dicotómico donde la tarea de representar se acota exclusivamente a aquellos considerados *pueblo*. Así, se acota la *función representativa* a aquellos que el populismo considera dignos de ser representados. En este escenario, pierde sentido entonces la función de agregación e intermediación que cumple el parlamento, el espacio público y el principio de división de poderes. La *relación representativa* queda reducida a la constitución y preservación del vínculo de identificación entre el líder y sus seguidores. Las instancias de formación de opinión pública formales e informales son desplazadas por el vínculo plesbicitario líder/pueblo y formas de comunicación que socavan principios fundamentales de la comunicación democrática (Waisbord, 2018).

Los anteriormente mencionados riesgos pueden no llegar a materializarse. En primer lugar, porque en ciertos casos, el proceso de identificación populista es empleado como estrategia de acceso al poder en la competencia electoral pero abandonado una vez que se llega al poder. Hay numerosos casos que ejemplifican dicha estrategia, donde la retórica polarizante sirve a un candidato a ganar una elección y descartada una vez que ha llegado al gobierno. Los casos de Carlos Menem en Argentina, de Syriza en Grecia o de Podemos en España son ejemplos del uso instrumental de dicha retórica como estrategia electoral. El problema surge cuando dicha retórica se expresa en una práctica gubernamental antagonista, es decir, es una lógica populista de ejercicio de poder. Es en estos casos donde la democracia representativa enfrenta su mayor desafío, que generalmente se traduce en intentos de refundación constitucional, en el desmantelamiento de los mecanismos de accountability horizontal, y en el vaciamiento de la función deliberativa y crítica de la esfera pública, a través del hostigamiento de medios y organizaciones de la sociedad civil opositora y de su contaminación por una lógica antagónica.

Existen sin embargo diversos factores que pueden contrarrestar la lógica populista de ejercicio de poder. En primer lugar, existe una debilidad intrínseca a la estrategia de identificación antagonista: el hecho que su efectividad se demuestre a partir de la creación de un enemigo. La polarización sirve para dotar de coherencia a un conjunto contradictorio de demandas individuales pero al mismo tiempo crea su contraparte: un agregado de sectores que activamente rechazan el proyecto populista. En este aspecto, los esfuerzos fundacionales del populismo y su objetivo de transformación del régimen siempre deberán lidiar con un significativo déficit de legitimación y con la resistencia activa de sus opositores. Si a lo anterior agregamos que en ciertos escenarios, esas resistencias se localizan en diversos lugares del sistema político, las iniciativas gubernamentales pueden ser bloqueadas, demoradas o aminoradas por el accionar del poder judicial, agencias de control, medios independientes, la movilización de la sociedad civil o, en última instancia, por el electorado. La apuesta por la democracia del populismo moderno lo condena a un escenario que, a pesar de sus denodados esfuerzos por mantenerse en el poder, no puede completamente liberarse de la incertidumbre electoral sin convertirse en dictadura.

Referencias bibliográficas

- Abushouk, A.I. (2016). "The Arab Spring: A Fourth Wave of Democratization?". *Digest of Middle Eastern Studies*, N° 25, pp. 52-69.
- Arato, A. (2015). "Political Theology and Populism", en De la Torre, C. (ed.) *The Promise and Perils of Populism*. Lexington: University of Kentucky Press.
- Arditi, B. (2005). "Populism as an internal periphery of democratic politics" en Panizza, F. (ed.) *Populism and the Mirror of Democracy*, New York - Londres: Verso.
- Cohen, J. L. (2019). "Populism and the Politics of Resentment", *Jus Cogens*, N° 1, pp. 5-29.
- Finchelstein, F. (2017). *From Fascism to Populism in History*. Berkeley: University of California Press.
- Fukuyama, F. (2006). *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Gidron, N. y Peter A. H. (2017). "The Politics of Social Status: Economic and Cultural Roots of the Populist Right". *The British Journal of Sociology*, N° 68.
- Hetherington, M.J. (2009). "Review Article: Putting Polarization in Perspective" *British Journal of Political Sociology*, N° 39, pp. 413-448.
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press.
- (2014). *El Orden Político en Sociedades de Cambio*. Buenos Aires: Paidós.
- Iazzetta, O. et al. (ed.) (2003). *Democracia, desarrollo humano y ciudadanía: Reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina*. Rosario: Homo Sapiens-PNUD.
- Laclau, E. (2007). *On Populist Reason*. New York - Londres: Verso.
- Levine, D. H. y Medina J. E. (ed.) (2011). *The Quality of Democracy in Latin America*. Boulder: Lynne Rienner.
- Levistky, S. y Way L. (2002) "The rise of competitive authoritarianism". *Journal of Democracy*, N° 13.
- (2018). *How Democracies Die*. New York: Crown.
- Mendez, J.E., O'Donnell, G. y Pinheiro, P.G. (ed.) (1999). *The (Un)rule of law and the underprivileged in Latin America*. Notre Dame: Notre Dame University Press.
- Morlino, L. (2014). *La Calidad de las Democracias en América Latina*. Informe para IDEA Internacional. San José: IDEA-LUISS.
- O'Donnell, G. (1994) "Delegative Democracy", *Journal of Democracy*, N° 5.
- (2003) "Horizontal Accountability. The Legal Institutionalization of Mistrust", en Mainwaring, S. y Welna, C. (ed.) *Democratic Accountability in Latin America*. Cambridge: University Press.
- (2011). *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Prometeo.
- Panizza, F. (2005). "Introduction: Populism and the Mirror of Democracy", en Panizza, F. (ed.) *Populism and the Mirror of Democracy*. New York - Londres: Verso.
- Peruzzotti, E. (2009) "Populismo y Representación Democrática", en De la Torre, C. y Peruzzotti, E. (ed.) *El Retorno del Pueblo. Populismo y Democracias en América Latina*. Quito: Flacso Ecuador.
- (2017a) "Populism as Democratization's Nemesis: The politics of regime hybridization", *Chinese Political Science Review*, N° 2, pp. 314-327.
- (2017b) "Conceptualizing Kirchnerismo" en *Partecipazione e Conflitto. The Open Journal of Sociopolitical Studies*, N° 10, pp. 47-64.
- Peruzzotti, E. y Smulovitz, C. (ed.) (2006) *Enforcing the Rule of Law. Social Accountability in Latin America*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
- Waisbord, S. (2018). "Why Populism is Troubling for Democratic Communication", *Communication Culture & Critique*, N° 11, pp. 21-34.

Fabio Fossati
fabio.fossati@dispes.units.it
Università degli studi di Trieste
Italia

Recibido: 11/10/2019
Aprobado: 03/01/2020

Populism

as the post-Marxist adaptation of leftist Manicheanism

Resumen

Antes de definir el populismo, es importante identificar las principales culturas políticas en las democracias contemporáneas occidentales. Las culturas políticas pueden definirse como conjuntos coherentes de ideologías, que están “un tanto” (es decir, de una manera diferente) vinculadas a la promoción de ciertos intereses. La forma concreta en que se vinculan las ideas y los intereses depende de la cultura política particular y no puede seleccionarse de manera abstracta para todos ellos (ver más abajo). ¿Cuáles son las principales culturas políticas occidentales contemporáneas? Hay dos enfoques para responder esta pregunta. El enfoque de los divisores es elaborar una clasificación (o tipología) de las ideologías de los partidos. La lista será larga, porque estos instrumentos analíticos deben ser exhaustivos. En cambio, el enfoque de los *lumpers* es el de idear modelos, es decir, los tipos ideales de Weber; la lista será mucho más corta, porque esas categorías no son exhaustivas e identifican solo aquellos comportamientos que obedecen a condiciones de simplicidad y coherencia. Los modelos se han utilizado con mayor frecuencia en la fase “moderna” de las ciencias humanas (1950 y 1960), y fueron aplicados especialmente por la escuela italiana de ciencias políticas.

Palabras clave

Populismo, Patrimonialismo, América Latina, Régimen Híbrido, Democracia Iliberal.

Abstract

Populism can be defined as the post-Marxist adaptation of leftist Manicheanism. In Western Europe, this process materialized after 1989, while in Latin America populism was applied before 1989. Populism is based on: a Manichean ideology with a binary cosmology of the world; the expansion of the public expenditure with damaging effects (high inflation rates) on the economy; charismatic leaders making plebiscitary appeals

to the population, with a limited role of intermediate actors (interests groups or parties) and institutions; a high mobilization process from above leading to a *movimientismo* of the lower sectors of the population. The four cases of orthodox macro-economic populism were: Peron in Argentina, Allende in Chile, Garcia in Peru, and Chavez/Maduro in Venezuela. In partial populism, there is plebiscitarianism, but the increase of the public expenditure and of the inflation rate remains under control (Syriza, Movimiento 5 Stelle, Correa, Morales, and Cristina Kirchner). Orthodox populism has always had negative consequences in politics, leading to authoritarian regimes, increased conflict and military coups; instead, partial populism has never endangered democracy and is usually coupled with hybrid/illiberal regimes. The political cultures of the right are not populist, because there is not the increase of public expenditure, but there is plebiscitarianism.

Keywords Populism, Patrimonialism, Latin America, Hybrid Regime, Illiberal Democracy.

Introduction This article is going to analyze the populist political culture, first by a theoretical point of view; then through an empirical analysis of the different populisms in Latin America. This task will be accomplished after the presentation of the main political cultures in contemporary democracies. In the first chapter, a political culture will be defined as a mix of interests and/or ideologies. Then, the main contemporary political cultures will be identified: first, the four (the conservative, the liberal, the constructivist/social-democrat and the Manichean/socialist) “models”; then, the “hybrids” (like the xenophobic and the neo-communist). In the second chapter, populism will be defined as the post-Marxist adaptation of leftist Manicheanism, that was the “next best thing” of socialism. Thus, the definitions applying the label of populism to (conservative, liberal or xenophobic) “plebiscitarian” rightist parties will be criticized. Then, the evolution of Latin American (radical and moderate) leftist populist governments will be presented, focusing on leaders such as Peron in Argentina, Allende in Chile, Garcia in Peru, Chavez and Maduro in Venezuela; Morales in Bolivia, Correa in Ecuador, Nestor and Cristina Kirchner in Argentina. In the conclusions, the different radical (orthodox) or moderate (partial) Latin American populist governments will be classified within a typology on (right and left) plebiscitarian regimes.

The main political cultures in Western democracies

Before defining populism, it is important to identify the main political cultures in Western contemporary democracies. Political cultures may be defined as coherent sets of ideologies, that are “somewhat” (i.e. in a different way) linked to the promotion of certain interests. The concrete way in which ideas and interests are linked depends on the particular political culture and cannot be selected in an abstract way for all of them (see below). What are the main contemporary Western political cultures? There are two approaches to answering this question. The splitters’ approach is to draw up a classification (or typology) of party ideologies. The list will be a long one, because these analytical instruments must be exhaustive. Instead, the lumpers’ approach is that of devising models, that is to say Weber’s ideal-types; the list will be much shorter, because those categories are not exhaustive, and identify only those behaviors that obey conditions of simplicity and coherence. Models have been more often used in the “modern” phase of human sciences (the 1950 and 1960’s), and were applied especially by the Italian school of political science

Four models of political cultures of Western democracies’ diplomacies have been identified by Fossati (2017): the **conservative**, the **liberal**, the **social-democrat**, and the **socialist**. Nazi/fascism and communism were not democratic political cultures and are not followed anymore in contemporary politics. Each model shows how these political cultures would work at the analytic level. Then, the empirical analysis will show if either behaviors rigidly follow one of the models (like the primary colors: white, yellow, red, blue, black) or if they disobey them, being flexible, volatile, incoherent, and so on; thus, political cultures would turn into (green, orange, violet) hybrids (like the xenophobic or the neo-communist).

Conservatism has been influenced by the realist philosophical tradition; it must not be confused with the defense of the *status quo* (“past-ism”: in French, *passéisme*). At the beginning of the 1900’s, conservatism was the political culture of those parties, that had two main interests; they were against universal suffrage and defended the interests of rural producers. When universal suffrage was introduced, and industrial modernization was consolidated, conservatism focused on two main interests: the defense of security of its citizens and the application of moderate *laissez faire* economic institutions. In fact, conservators have always been in favor of capitalism, but they tried to defend national producers (with moderate trade and investments’ protectionism) and to oppose blind privatizations, that would increase investments of foreign firms. Security has been applied to both the fight against criminal individuals or organizations and the strengthening of citizens’ national identity. Thus, conservators have tried to limit immigration flows of people with different national identities, according to the *ius sanguinis* principle of citizenship; as a consequence, they are against the *ius soli* principle. Then, they have always defended the values of the mainstream heterosexual family, being against gays’ weddings (and children’s adoptions), and they have rejected the values of post-modern feminism, being in favor of divorce, but against abortion. In sum, in conservatism interests are more relevant, and subsequently favor the consolidation of a nationalist ideology, which differs from Nazi-fascism, because nationalism is “defensive”, but is not imperialist in foreign policy and it is not racist.

At the beginning of 1900’s, Liberalism was in conflict with conservatism because on one hand liberals wanted universal suffrage, and on the other hand they defended urban and industrial interests. Then, the liberal parties focused on the defense of certain values, such as human rights, democracy, free market, and national self/determination. Liberals promoted both civil and political rights in Western democracies. Then, liberal parties have always supported the free movements of goods and people, and have objected to limits to migration flows. However, they have always promoted a symmetric

integration of immigrants that must respect the laws of the guest country; then, foreign countries should apply reciprocity to the legislation on immigrants coming from the West. In economy, liberals have always promoted radical *laissez faire* reforms, by supporting privatizations and foreign investments. Liberals have also promoted cultural pluralism, being in favor of federalism, and/or secessions, if some minorities with different cultural identities promote national self-determination through referenda. In fact, liberals have usually been in favor of single-nations states, as cultural pluralism is preferred to state interests. In sum, liberalism starts with the defense of some values (democracy, radical *laissez faire*, federalism), and then consolidates the interests of actors like business groups, pro-human rights non-governmental organizations (NGOs), national self-determination movements. However, liberalism in the West has mostly reached its objectives in the promotion of civil and political rights, while in economy it has been strong from the 1980's until the 2008 economic crisis; since then, it has been weakened. The leftist moderate political culture has consolidated *constructivist* values. These have usually been the strategies of Social-democrat parties, that have always promoted solidarity among classes, to be defended (especially since 1945) through the welfare state. As those reforms have been consolidated in Europe (but not in the USA and Australia), after 1989 the main value of the moderate left has become multi-culturalism, that has been applied to decisions concerning both Third World migration flows towards the West, and armed conflict resolution processes outside Western Europe. Constructivists have promoted free immigration flows, through an *asymmetric* integration process with immigrants, that are not requested to respect the laws of the guest country; then, reciprocity is not asked to foreign governments when they must defend the rights of Western immigrants in the Third World. Then, multi-culturalism has been applied to conflict resolution processes, by neglecting national self-determination and referenda outside the West, and promoting pluri-national states, based more on consensus pacts than on federalism. The ideology of the moderate left has been called *political correctness*, that is a post-modern attitude of leftist intellectuals based on the perception that rational Western people can no longer manage reality. Political correctness aims at making equal what is different and at not criticizing under-privileged actors (underdogs) through language or politics. In economy, the constructivist left has accepted free market, even if it should be corrected by a strong state governance: welfare state in domestic politics and foreign aid in world politics. Thus, also this political culture starts from values (solidarity through welfare state and multi-culturalism) and then consolidates interests: of unions, of NGOs for immigration or foreign aid.

The leftist neo-Marxist philosophy (without the violent inclination of communism), based on third-worldism and passive non-violence, has led to a Manichean ideology. Pre-1989 Manicheism has consolidated a socialist political culture, whose parties were in favor of democracy (instead of violent communists), but against capitalism and wanted to nationalize the private property. In fact, these objectives have never been reached within Western democracies, and if socialist parties won the elections, they turned into social-democrats. Fully Socialist institutions have been applied only by communist regimes. In Latin America, democratic governments (like Peron in Argentina or Allende in Chile) have partially applied socialism (for example in the energy or the agriculture sector) before 1989, and coupled it with both trade protectionism (the Import Substitution Industrialization) and populism, that was based both on a strong increase of public expenditure and deep redistributive policies. Both socialists and populists have Manichean cosmologies, because reality is interpreted under two rigid dichotomous categories (of white-good, black-evil). However, after 1989 the main problem became that

1. Olson (2018) emphasized that socialism has a class identity, while populism privileges people's identity.

2. Germani (1978) linked Latin American populism to a phase of the modernization process, when the industrialization process had been launched by late (or third) comers (Latin American countries) after first (Great Britain, USA and France), and second (Germany, Italy and Japan) comers. Oxhorn (1998) linked populism to the high social inequalities and the economic asymmetries in Latin America, that has produced a much more heterogeneous class structure than Western Europe.

3. *Neo-conservatism* represents a hybrid between conservatism and liberalism. The *Greens* are a hybrid between the social-democrat and the Manichean political cultures. *Social-Christian parties* are a hybrid between conservatism and social-democracy. The *Radicals* are a hybrid between liberals and social-democrats. *Anarchism* is a hybrid between liberalism and Manicheanism or communism.

4. Communism was based on Marxism, with the use of violence in both the conquest of power (through revolutions, *coups d'état*, or terrorism) and in its maintenance (through communist regimes). Instead, Nazi-fascism was based on radical nationalism, leading to both imperialism (with the promotion of wars against other nations) and racism (in their relations with people of other civilizations). Weyland (2018) has emphasized that the fascist ideology was very dogmatic, while populism is much more flexible and pragmatic. According to Roberts (2018), not all radical right parties are populist, that is to say *plebiscitarian*, especially those with a strong organization structure like the **Front National** in France.

there was still the black and the evil (the USA, the West, "*neo-liberalismo*"), but the white and the good were absent: both communism and socialism had failed. In Western advanced countries, that void was filled by populism¹. That's the reason why populism can be defined as the post-Marxist adaptation of leftist Manicheanism. In Western Europe, this process materialized after 1989, while in Latin America populism was applied after the 1929 economic crisis and the Second World War. That continent was under the hegemony of the United States, that would have never accepted full socialism within a democracy; thus, post-Marxism in Latin America had a strong international constraint and its conversion into populism² has materialized before 1989; only Cuba and Nicaragua were communist authoritarian regimes that applied socialist economic institutions. Marxism wanted to favor socio-economic equality through nationalizations and the elimination of private property, but socialism has always led to the total failure of the economy. Thus, populism has been the "next best thing" of socialism, becoming a "post"-Marxist political culture that does not reject free market anymore, but uses the expansion of the public expenditure as a tax imposed to the middle and the high classes to defend the poorest sectors of the society -which in the past was the ultimate objective of socialism-. Thus, all Manichean actors start from ideas and then consolidate interests, that may be defended by socialist parties or populist leaders, or by even more rigid (no global, third-worldist, ecologist, feminist, pacifist, animal rights) Manichean movements.

Other political cultures may be identified, by emphasizing the hybrids between two models³. In contemporary politics, two relevant hybrids have materialized through the combination with two non-democratic political cultures (Nazi-fascism and communism). *Neo-communism* promoted a "post-modern" synthesis between non-violent socialism and revolutionary (or terrorist) communism. In fact, neo-communists are not directly violent, but appreciate the 'violence of the others' (the underdogs): Castro, Chavez, Chiapas rebels. *Neo-communism* has been stronger in the Cold War but persisted in the 1990's, and always strongly criticized the use of violence by Western countries; its outcome was a "false pacifism", that was promoted by the **Italian Communist Party (PCI)** in the Cold War or by **Rifondazione Comunista (RC)** with its mobilizations against Nato's wars in former Yugoslavia in the 1990's. However, if also post-1989 no global groups are sympathizers with the use of violence, they become neo-communist. At the same time, a hybrid between conservatism and Nazi-Fascism⁴ has also materialized in recent decades. The so-called Xenophobic radical right has emerged in many European countries. It is also called the Alt-Right, that is deeply anti-political correctness. They are against immigration flows, especially from Islamic countries. This political culture was strengthened after the terrorist attacks of Al Qaeda and Isis since 2001. In the USA it is also called *white supremacist* extreme right, and its supporters are against immigration flows also from Mexico and Latin America. Like neo-communists, xenophobic groups of the extreme right are not directly violent, but their discourse is very ambiguous and deeply intolerant. The application of their values may lead to the *violence of the others* (their most radical sympathizers), that is never criticized.

The definition of populism

5. Also Mudde (2004) emphasized the Manichean worldview of populism. Laclau (2005) has been the Argentinian political philosopher who inspired post-1989 populism, especially that of Nestor and Cristina Kirchner. He theorized the radical left strategy of opposing technocratic elites, austerity, the International Monetary Fund (IMF), and *neo-liberalismo*.

6. Di Tella (1990) defined *populism* as a political movement with a high mass support from urban (and rural) workers, a mobilization process from above, the central role of (personal or charismatic) leaders (coming from the middle class), a nationalistic economic ideology and an anti/status quo program. On populism and nationalism, see De Cleen (2017).

7. Kaufman and Stallings (1991) emphasized that pre-1989 radical (leftist) populism obtained a strong backing from domestically oriented (especially industrial) business sectors, while it isolated rural agro-exporters and foreign multi-national enterprises.

8. *Movimientismo* is characterized by: charismatic leadership, vertical and horizontal solidarity, antagonism towards the political enemy (Alberti, 1996). According to Aslanidis (2017), populist movements may be new, or may be coopted by pre-existing parties. Jansen (2011) linked populism to a political project aimed at mobilizing marginalized social sectors.

The populist political culture has the following features:

- ◆ Populists have a Manichean vision of the world (Hawkins, 2018), that is to say a cosmology with a dichotomous, binary, antagonistic division between us and them, the good and the evil, the white and the black, the people and the elite, the masses and the establishment, the pure and the corrupted⁵. Leftist Manichean political movements are anti-market, anti-USA, anti-NATO, and anti-West.
- ◆ Populist governments aim at expanding public expenditure to defend those citizens that are being excluded by formal work: the unemployed citizens in the West or the marginal people in Latin America (Fossati, 1997). Populist parties have never been worried of the inflation effects of the expansion of the public expenditure, that in Latin America often reached the three-digit level, pushing into deep economic crisis all the countries that applied populism. Macro-economic populism has been defined by Dornbusch and Edwards (1989) as that economic approach that emphasizes growth and income distribution and deemphasizes the risk of inflation and deficit finance, external constraints and the reaction of economic agents to aggressive non-market policies. *Economic populism* has been coupled with trade and investments' protectionism, influenced by *economic nationalism*⁶, but nationalism has affected not only populism, but also the conservative right's ideology. Kaufman and Stallings (1991) emphasized three features of economic populism: budget deficits, price controls and nominal wage increase, controlled or appreciated exchange rate. The common outcome of pre-1989 macro-economic populism has been the ultimate collapse of the economy, with a frightening cost to the popular groups who were supposed to be favored, with violent real wage cuts that ended in massive political instability. For its evolution in Latin America, see the following sections.
- ◆ The political feature of populism is *plebiscitarianism*, that is to say the direct appeal of charismatic leaders to the masses, without any strong intermediate actors (parties or interest groups), and with many *unorganized* followers (Roberts, 2017; Weyland, 2017). Peron, Allende, Garcia, were charismatic leaders that made plebiscitarian (Geddes, 1994) appeals to their electorate, while the middle class usually voted for moderate left or right parties. Charismatic leaders may form populist parties, but they are usually weak, and do not represent the core of the populist strategy, that is strongly linked to leaders and movements. Populism usually relies upon some grassroots organizations, with a low organizational structure. There may be business associations⁷ and (for example, Peronist) unions, but these interest groups mostly depend on the populist leader; also parties or institutions (parliaments and governments) have a limited role and usually ratify decisions of the populist leader.
- ◆ This political relation leads to a strong mobilization process (mostly from above) of the masses, within the so-called *movimientismo*⁸ (Alberti, 1996), that is the *interface concept* of populism. Those who mobilize themselves have a precise socio-cultural origin, that Ostiguy (2017) has defined as the "low" of the society, and have a sociological (people excluded from formal work and urban centers), an economic (the poorest sectors of the population) and a cultural (all those with a low level of instruction) dimension. On the low, people use a politically incorrect, raw, coarse, inhibited language, based on *anti-politics*, and they fight against the "high": moderate right or left parties. Among the low, there are also poor immigrants; populists are inclusive and not xenophobic (Mudde and Kaltwasser, 2013, De La Torre 2016, Garcia Augustin and Briziarelli, 2018). Among the high, there are those foreigners who reject the expansion of public expenditure: the supporters of market reforms, the promoters

of austerity (the IMF or the European Union), and the trans-national finance. This mobilization process also needs a strict control of the media to disseminate populist values (De la Torre, 2018); populism usually leads to limit the freedom of the press.

In sum, populism is based on: a Manichean ideology with a binary cosmology of the world; the expansion of the public expenditure with damaging effects (very high inflation rates) on the economy; charismatic leaders making plebiscitary appeals to the population, with a limited role of intermediate actors (interests groups or parties) and institutions (parliaments or governments); a high mobilization process from above leading to a strong *movimiento* of the lower sectors of the population.

If the populist political culture is fully applied in all its features, the political consequence is a high threat to liberal (and representative) democracy (Pasquino, 2005), and political conflict may lead to either a deep political crisis, or a transition to a hybrid or authoritarian regime, together with anti-populist reactions such as military coups or even wars: the *populist political cycle* (Sachs, 1989). In Latin America, populism was usually applied by illiberal (or limited) democracies during the Cold War, because populist parties were often winning democratic elections, with a strong support by the “low” of the population: marginal urban (more than rural) sectors and informal workers. The political effects of populism in Latin America will be analyzed in the conclusions of this article.

Which is the main theoretical (and empirical) problem of populism? In the literature (Weyland, 2017) the economic feature of populism has been *erased*⁹. Many radical rightist parties have been defined as populist (Pappas, 2019). It often happens that: first, also rightist xenophobic parties have charismatic leaders; second, they have plebiscitarian relations with the masses; third, those who mobilize in favor of xenophobic parties are the “low” of the society (Ostiguy, 2017). On one hand, xenophobic parties do not expand public expenditure, that is a typical leftist economic politics. On the other hand, leftist populist governments are not xenophobic, even if they divide the world into us and them, low and high; but excluded immigrants are within “the low” and pertain to the electoral base of populist parties. Populists are against those pro-globalization foreigners that are part of “the high” of society, are in favor of austerity, and are against the expansion of the public expenditure¹⁰.

One of the main assumptions of those scholars who theorize the existence of both rightist and leftist populist parties is that populism is above the right-left cleavage. That is analytically incorrect - it is a form of conceptual stretching - and empirically false. Leftist populist parties aim at expanding public expenditure and are not xenophobic. Rightist parties are xenophobic and not want to expand public expenditure. But it is sure that low sectors of society usually vote either for the populist left or for the xenophobic right. Thus, even if the right-left cleavage is still alive, it may happen that populist parties are voted by both radical right and radical left electors. That is a big change, because in the past radical right electors had always been against socialist parties, that were influenced by Marxism (even if they were not violent like the communists). The right has always defended capitalism; liberals were in favor of radical, while conservators (like Trump or Berlusconi) of moderate *laissez faire*.

Roberts (1995, 2007) and Weyland (1996, 1999, 2001) theorized the existence also of neo-liberal populism, like those of Menem in Argentina or Fujimori in Peru, but that is conceptual stretching. According to Kaltwasser (2019), also conservative leaders like Berlusconi or Trump are populist. Menem and Fujimori made plebiscitary appeals to the population to apply market reforms (Geddes 1994), which were obstructed by parliaments, but they were the contrary of populism. Menem and Fujimori can be labeled as

9. Weyland (2017) wrote about *the decline of notions of economic populism*, or of the *deficiency of counter-arguments* (Weyland, 2003). Other political scientists (Knight, 1998, Cammack 2000, Demmers, Fernandez Jilberto, Hogenboom, 2001; Ellner, 2003) neglected economic factors. Zanatta (2013) and De La Torre (2017) clarified the evolution from left to right populism, but accepted both definitions. In fact, leftist scholars cannot accept that a negative label like populism may be applied only to the left. According to Zuquete (2018), as populism is often perceived as a negative label, there must be a *good (leftist) populism* and a *bad (rightist) populism*. Then, definitions linking populism to the expansion of public expenditure are considered *old fashion*, i.e. positivistic, that contradict the values of post-modernism.

10. Rodrik (2018) emphasized how (leftist) populist actors are against globalization. Rightist conservative or xenophobic parties are critical of globalization, but their cosmologies are not Manichean. The right supports a moderate *laissez faire*, with some trade and investments' protectionism and with limited privatizations to defend national producers, as national governments should maintain their control on global and regional organizations.

11. Drake (1982) emphasized that populism is characterized by these features: a personalistic leadership, high political mobilization of followers with a multi-class origin, and nationalistic economic policies.

12. *People's Party* of the 1890's was an agrarian, more than populist, party. Huey Long, Louisiana's governor of the 1930's, has probably been the American leader with the closest political program to populism, but his political career has been too short, as he was killed in 1935. All the other rightist American leaders (Wallace, Buchanan, Trump...) have never been populist, but were radical conservative or xenophobic politicians. The Tea party has always been against the increase of public expenditure. For examples of American populist leaders or parties, see Lowndes (2017, 2018), Savage (2018).

plebiscitarian liberal leaders, as they favored those technocratic governments and *laissez faire* reforms, which have always been rejected by populist leaders. Instead, other scholars made a clear distinction between liberalism and populism (Edwards, 2019); Drake¹¹ (1982) linked the definition of populism to economic nationalism, like Kaufman and Stallings (1991), Conniff (1999) argued that neo-liberalism and neo-populism remained antithetical to each other also in the 1990's.

In the United States, no *fully populist* (with all the four above-mentioned features) political party or leader has ever existed, even if some of them have been labeled as populist. The emphasis on the expansion of public expenditure has never been formulated, even if some radical leaders of the Democratic Party (like Jesse Jackson) pressed for more effective redistributive policies: probably, to compensate the weak American welfare state¹². The Italian case shows that governments may be the outcome of an alliance of the “two low” (rightist xenophobic Lega and leftist populist Movimento 5 Stelle) against the “two high” (moderate left Partito Democratico and moderate right Forza Italia): see the typology of Ostiguy (2017). Conte's coalition in 2018/19 was based on an exchange; the populist party accepted some anti-immigration measures; the xenophobic party accepted some increase of the public expenditure (Chiarini, 2020). It was probably the first coalition among the two “low” in a Western country. However, that coalition was dissolved in August 2019.

Socio-Cultural Origin	Political Ideology	
	Left	Right
High	Social-democrat parties	Conservative or Liberal parties
Low	Populist parties	Xenophobic parties

In sum, the main assumption of this essay is that leftist Manicheanism at first took the (neo-Marxist) form of socialism, and then it turned into (post-Marxist) populism. This process materialized first in Latin America during the Cold War, through a mix among partial socialism, trade protectionism and populism (with Peron in Argentina and Allende in Chile), and then (after 1989 and especially after the 2008 economic crisis) in Europe: with economic populism only and without any socialism. Rodrik (2018) linked the recent episodes of populism, like Podemos in Spain and Syriza in Greece, to the post-1989 *hyper-globalization*. The only post-1989 exception is Venezuela, where Chavez and Maduro applied the same mix of partial socialism, protectionism and populism of Allende and Peron during the cold war, and Venezuela turned into an authoritarian regime (see the conclusions).

Populism in Latin America

Macro-economic populism has been coupled with **Import-Substitution Industrialization (ISI)**, launched in Latin America after the 1929 economic crisis and the Second World War (1940/45). Industrial imports from advanced countries had decreased in that period, and Latin American populist governments (mostly within illiberal democracies) applied ISI policies, that were based on two instruments: high tariff barriers against industrial imports from the advanced countries and public subsidies to the local industry. At the same time, for example in Argentina with Peron (1946/55), agriculture exports were taxed. The *first phase* of ISI lasted from 1929/45 to mid-1950's; ISI policies were coupled with **macro-economic populism** (strong public expenditure increase) and

also with *partial socialism*, that is to say with some nationalizations aiming at damaging multi-national firms. Those economic policies were launched especially thanks to the intellectual support of **CEPAL (Comision Economica para America Latina)** economists, of the United Nations in Santiago de Chile; their neo-Marxist ideology was based on the hypothesis that dependence from advanced countries had to be removed, through macro-economic populism, ISI and economic nationalism. Before 1929, post-colonial Latin American economies were more integrated with those of the USA and their former European empires, with the typical neo-colonial division of labor: imports of industrial goods from the empires and export of (agriculture and mineral) primary goods from the colonies (Fossati, 1997).

The first phase of ISI led to an economic crisis, with high rates of inflation. Thus, some middle-class (*desarrollistas*) parties won the elections against populist leaders; Kubitschek (1956/61) and Goulart (1961/64) were elected in Brazil; Frondizi (1958/62) and Illia (1963/66) in Argentina. They applied the second phase of ISI, that lasted from mid-50s to the beginning of the 1970's. *Desarrollismo* maintained protectionist ISI policies, but tried to stop economic populism and partial socialism. *Desarrollistas* parties tried to attract multi-national corporations, but without supporting exports (like Asian tigers); they tried to appeal them to sell their goods in the Latin American protected markets. Those democratic experiments also failed, under the pressure of the mobilizations of the lower sectors of the population. In mid-60s in both Brazil (1964-85) and Argentina (1966-73) there were military coups of the so-called *dictablandas*, to continue with the above-mentioned second phase of ISI. However, renewed popular mobilizations pushed also those military leaders to abandon power (in Argentina but not in Brazil), and there was a wave of *neo-populism*. Allende won the elections in Chile (in 1970), and Peron in Argentina (in 1973). The second phase of ISI had ended, and there was a return to both macro-economic populism and partial socialism, together with the radicalization of some terrorist communist groups: especially in *Cono Sur* countries (Argentina, Chile and Uruguay), but also in Colombia (FARC) and Peru (Sendero Luminoso). In Peru, the radical left-wing armed forces applied a sort of *rural socialism*, coupling populism with the nationalization of private property in the agriculture sector, whose lands were organized in cooperatives under Velasco Alvarado (1968-75); instead, the (private) industrial firms were still favored by the protectionist ISI policies (Cavarozzi, 1992).

Then, there was a new wave of military coups (in Chile in 1973, in Uruguay in 1975 and in Argentina in 1976) of highly repressive anti-communist -supported by the US republican president Nixon- military regimes (*dictaduras*); populism and partial socialism were stopped, but ISI policies were abandoned only in Chile. Pinochet implemented radical *laissez-faire* reforms: not from the beginning (in 1973), but only from 1976 to 1981 with the government of the so-called **Chicago boys**. From 1982 to 1989, Buchi's government applied moderate *laissez-faire* policies in Chile. Instead, Argentina and Uruguay coupled ISI with austerity programs, but did not implement privatizations and trade or financial opening. The same happened to most of democratic governments of the 1980's. Austerity, negotiated with the IMF after the foreign debt crisis of 1982, and trade (and investments') protectionism led to a deep economic recession in the so-called *década perdida*. In those years, Peruvian Garcia's government returned to macro-economic populism and to high public expenditure, declaring a *moratorium* to creditor banks and refusing an agreement with the IMF, with devastating effects on the economy. Instead, Argentinian Alfonsín's government made a compromise between austerity and populism, with both **Plan Austral** (1985) and **Plan Primavera** (1988), and the outcome was another deep economic crisis (Fossati, 1997).

Only after 1989, *laissez-faire* reforms were launched by all Latin American governments, with privatizations, trade and financial opening. ISI policies, populism and partial socialism were abandoned and Latin America experienced a decade of growth, also favored by the 1989 Brady Plan that introduced a discount (of 20/30%) of the foreign debt that had to be paid to creditor banks (Fossati, 1997). Many countries were governed by the left (Aylwin, Frei, Lagos and Bachelet in Chile or Lula in Brazil), but their decision making process was more institutionalized and thus not populist (Schamis, 2006). Some rightist presidents (like Menem in Argentina or Fujimori in Peru) applied market reforms, but kept using the same plebiscitarian decision-making style of leftist populism of the past. Venezuela returned to populism, protectionism and partial socialism with Chavez' hybrid regime (1999-2013) and with Maduro's (since 2013) authoritarian government. Ecuador, Bolivia, and Argentina (with Nestor and Cristina Kirchner) applied more moderate populism than Venezuela.

Populism before 1989: Argentina (Peron), Chile (Allende), Peru (Garcia)

Peron became president in June 1946 and launched an economic policy with a deep increase of both public expenditure (at the federal and the provinces levels) and money creation (by the nationalized Central Bank), with a strong redistribution program, managed by Evita, together with high increases in wages. There was a big nationalizations' campaign: for example, in energy (oil, gas, nuclear plants, water, electricity), iron metal-lurgy, tele-communications and (railways, ports, ships and airplanes) transports. Peron implemented a sort of *partial socialism*. In 1949, the inflation rate reached 34%, and in the early 1950's there was a deep economic crisis. In 1955, a military *coup* pushed Peron to go into exile. In 1973, Peron won again the presidential elections. Populist economic policies (with wage increases, price and exchange rate controls) and a strong ISI program were re-launched by Peron in 1973, and were continued by his second wife Isabel after his death in July 1974. The mismanagement of the economy and the increase of violence in the society, led to the highest peak of the inflation rate with 430% in 1976; the budget deficit in 1975 had reached 16%. In June 1975, a devaluation of the exchange rate was decided, but it had no relevant economic effect. In 1976, the real wages level had decreased of 50% since 1973 (Sturzenegger, 1991).

Allende started his mandate in 1970 and formed the **Unidad Popular** government with the support of both communists and socialists. Public expenditure (within a deep redistribution project) and real wages increased, prices and the exchange rate were controlled, and a nationalization program in the copper industry and in the agrarian sector, according to the socialist ideology, was launched. Thus, Allende probably implemented the deepest form of *partial socialism*. Inflation rate reached 35% in 1970 and 1971, then 200% in 1972 and 600% in 1973. The rate of deficit over GDP started with 3% in 1970, then increased to 11% in 1971, 13% in 1972 and 25% in 1973. In 1972, a devaluation of the exchange rate was decided, but it did not produce any relevant economic effect. Thus, Allende lost the support of the middle class, and there was a strong increase of violence in the society. In 1973, real wages were 70% of those of 1970 (Dornbusch and Edwards, 1989).

Garcia became president of Peru in August 1985, as the leader of **APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana)**, the Peruvian leftist populist party. During the left wing military regime of Velasco Alvarado, the land (but not the industry) was nationalized; also Peru had a memory of *partial socialism*. Garcia's economic program was based on a high increase of public expenditure and of real wages, a strong money creation program of the central bank, controls on prices, interest rate and exchange rate. He declared a

moratorium on foreign debt and refused to make an agreement with the IMF. In July 1987, Garcia tried to implement a partial socialist project, aiming at nationalizing the banking system, but the parliament rejected his proposal. The economic effects of his policies were devastating. Inflation grew at 1722% in 1988, 2775% in 1989, and 7600% in 1990. The budget deficit increased from 2,4% in 1985, to 4,9% in 1986, 6,5% in 1987, and 5,3% in 1988. In 1989, real wages values had decreased of 50% since 1985 (Dornbusch and Edwards, 1989).

Populism after 1989: Venezuela (Chávez, Maduro), Ecuador, Bolivia, Argentina

13. This did not happen because of popular dissatisfaction with market reforms or of social inequality, but because of a *success paradox*; market reforms improved economic conditions; thus many electors returned to the old (anti-American) populism, also because post-1989 external constraints were absent in the 2000's (Remmer, 2012). Panizza (2005) emphasized that after 1989 many leftist parties implemented moderate market reforms. On the various lefts, see Roberts (2006), Levitsky and Roberts (2011), and Weyland (2009, 2013).

After 1989, most of Latin American governments (except Cuba) applied *laissez faire* reforms, and ISI has been abandoned, together with populism and partial socialism (Fossati, 1997). Then, Chavez tried to stop liberal reforms: first with his attempted coup in 1992; then after his election in 1998. He relaunched economic populism, protectionism and partial socialism, trying to push other countries (Ecuador, Bolivia, Nicaragua and neo-Peronist Argentina from 2003 to 2015) to imitate his reforms (Edwards, 2019)¹³.

In Venezuela, Chávez first staged a military *coup* in 1992 (with nearly 250 deaths), pushing president Perez to fire the **IESA boys**, that were implementing successful *laissez-faire* reforms since 1990 (Fossati, 1997). Then, he won the presidential elections in 1998 and changed the constitution in 1999; Chávez was a very charismatic leader, making repeated plebiscitary appeals to the population; he also strongly relied upon decrees. Thanks to oil exports revenues, he increased public expenditure, money supply, and financed social policies, aiming at benefiting the lower sectors of the population, within the so-called *petro socialism*, which was another form of *partial socialism*; also prices and the exchange rate were controlled. Chávez strongly limited democracy, and Venezuela became a hybrid regime; from 1999 to 2008 **Freedom House's** (FH, 2019) performances were around 3 or 4. The lower sectors of the population represented his electorate, while the middle class voted for the opposition parties. In 2002, there was an attempt of electoral revolution, leaded by Carmona (head of the main industrial business association), and diplomatically supported by the USA, but it failed. Chavez increased again his presidential powers after the constitutional referendum of December 2007; he also put the armed forces under the direct rule of the chief of state, and limited the freedom of the media; Venezuela became a case of *hyper-presidentialism* (Hawkins 2010). In February 2009, the terms' limits for his re-elections were removed by another referendum. FH's performances reached the level of 5 from 2009 to 2013. In 2008, the inflation rate was 27,5% (Hidalgo, 2009). Budget deficit was around 5% in 2010, and reached 15% in 2012. Chávez died of cancer in 2013.

His successor, Maduro, did not have his charisma, and Venezuela became an authoritarian regime, with a performance of 5,5% in 2016/7 and of 6,5% in 2018, according to the FH. Inflation rate was 56,2% in 2013; 275% in 2015, 800% in 2016, 4000% in 2017, then since 2018 the government is not publishing inflation rates anymore. Budget deficit was around 20% in 2015/6, and 30% in 2017/8. Since 2013 also the oil prices started to decrease. Real wages have declined of 75% after 2013. The middle class started to mobilize again (since 2014), especially against the new constitutional referendum of July 2017, and against the presidential elections of May 2018, that were considered unfair because of many electoral irregularities. In January 2019, the president of the parliament Guaidò leaded another wave of protests and proclaimed himself president of Venezuela, but the regime reacted with repression; there have been nearly 300 deaths since 2014. There has also been a strong increase of violence, and four million people (13% of the population) left Venezuela.

In the 2000's a new wave of *rentier populism* (Mazzuca, 2013) started; rents were guaranteed by oil (in Venezuela and Ecuador) and by gas (in Bolivia), and permitted the expansion of public expenditure and the launching of vast social policies. Morales won the Bolivian presidential elections in 2005, and in 2006 he nationalized the gas industry that had been privatized in the 1990's; his government, with his party **Movimiento al Socialismo (MAS)**, became a case of *etno-populism* (Madrid 2008). In autumn 2019, after his election for a fourth term and many popular pretests against him, Morales resigned and went into exile in Mexico; in May 2020 there will be new presidential elections. Bolivian FH (2019) political performance has always been 3 since 2003, but worsened to 3.5 only in 2014 and 2015. The main economic indicators remained under control; the inflation rate reached 14% in 2008, 10% in 2011, and then it decreased at 5%. The ratio of public debt over Gross Domestic Product (GDP) started with 80% in 2005, then it decreased at 38% in 2010, and increased again at 50% in 2017. Correa won the Ecuadorian presidential elections in 2006, and implemented *macro-economic populism*, but he limited democratic performances, changing the constitution. Ecuador became a case of *hyper-presidentialism*; both the power of the judiciary and the freedom of the media were limited (De la Torre and Lemos 2016). Another more moderate leader (Moreno) of his party **Alianza PAIS (Patria Altiva I Soberana)** won the 2017 presidential elections. In July 2018, a judge ordered Correa's arrest, but he went into exile in Belgium and did not return to Ecuador. Correa's FH (2019) political indicators were 3 since 2000, then worsened to 3,5 in 2014, but with Moreno they improved to 3 in 2018. The main economic indicators remained under control; inflation rate started with 3% in 2006, reached 8% in 2008, was maintained at around 5%, then in 2017 reached 0,4%. The ratio of public debt over GDP was 38% in 2006, 23% in 2010, 33% in 2015, and 45% in 2017.

In Argentina, after the 2002 economic crisis with the president (of the Radical party) De la Rúa, the Peronist party won the following presidential elections with Nestor Kirchner -who governed from 2003 to 2007- and his wife Cristina Kirchner -who governed from 2007 to 2015-. Argentina had no energy rents; the only solution to get the resources to increase public expenditure was to raise export taxes to rural producers. They had been reduced at 5-10% in the 1990s; after 2002, they were raised at 20%; Nestor increased them at around 25% and Cristina at around 35% in 2008; this decision led to a deep conflict with the agro-exporters. The inflation rate remained at 10% with Nestor, and reached 20,5% with Cristina; the ratio of public debt over GDP was 150% in 2002, reached 60% in 2005 and remained at 40/5% in the 2010s. Kirchner's Argentine political performances have been good (2/2) (FH 2019). Argentine economic performances have been more consistent with Nestor Kirchner, whose export-led economic policies were defined *neo-desarrollistas*, coupled to moderate social policies and neo-corporatist relations with interest groups. Cristina returned to orthodox populism, with radical social policies and plebiscitarian relations with interest groups; Central Bank's independence was weakened, and oil company YPF was re-nationalized in 2012 (Grugel and Ruggirozzi, 2007, Levitsky and Murillo, 2008, Wylde 2011, 2016, Lupu 2016). In October 2019, Fernandez of the Peronist party became the new president. He raised again taxes to agro-exporters and increased public expenditure, but in the first months of his mandate, he implemented a moderate left economic policy, like Nestor Kirchner.

The cases of Morales, Correa, Nestor and Cristina Kirchner show that Latin American populists have learned something, as the main economic indicators (like inflation rate) remained under control, even if there has been an increase of public expenditure and budget deficit (Edwards, 2019). This moderate populism has not had negative effects on politics; Argentina is still a liberal democracy. Bolivia and Ecuador remained hybrid re-

gimes, because Correa and Morales went into exile and there was not any authoritarian transition; however, both countries had had similar political performances even before *ethno-populism*. Instead, Venezuela's radical populism has had devastating effects on the economy, and Venezuela became a hybrid regime with Chavez and an authoritarian one with Maduro (Mazzuca, 2013).

Conclusions on populism and plebiscitarianism

The four cases of Latin American mainstream populism (Peron in Argentina, Allende in Chile, Garcia in Peru, and Chávez/Maduro in Venezuela) show these features. First, populist economic policies bring to the expansion of public expenditure, money supply and redistributive policies, then to partial socialism with some targeted nationalizations, and to trade and financial protectionism. Second, populist leaders make plebiscitary appeals to the lower sectors of the population, leading to a deep conflict with the high/middle classes. Third, the economic outcome is a devastating economic crisis. Fourth, the political effect of populism were hybrid regimes (with Peron) in the Cold War, and an authoritarian one after 1989 in Venezuela (with Maduro). Fifth, there was an increase of violent conflict in the society, with: the extreme right vs (communist) extreme left cleavage before 1989 in Chile, Argentina and Uruguay; the diffusion of *estallidos sociales* in Peru in 1989-90 after Garcia's economic chaos (Fossati, 1997); the 2010s popular protests against Maduro in Venezuela.

How did mainstream populist experiments end? Peron's and Allende's governments finished with military *golpes*, supported by the USA, that applied the diplomacy of the "lesser evil"; when there was the danger of a communism, *real-politik* pushed the USA to support military *golpes* (Fossati, 2017). Garcia's populism ended thanks to 1989 and to the presidential elections of 1990. The current economic and political conflict in Venezuela has not been resolved. After Chavez' death in 2013, there were many protests, which were repressed by Maduro; Venezuela became a case of competitive authoritarianism (Levitsky and Loxton 2018). The outcome of post-1989 mainstream populism is a *post-communist* authoritarian regime. The paradox is that Venezuela never had a communist regime in the past, like Cuba, but the economic policies and the political performances of these two regimes are similar right now (FH, 2019), with limits to both economic and political freedoms (Fossati 2017). The USA and the European governments have abandoned *real-politik*, and only reacted with (soft) diplomatic pressure, that has not produced relevant outcomes.

The other cases of populism, with Correa in Ecuador, Morales in Bolivia, Cristina (but not Nestor) Kirchner -whose political experience, even if public expenditure increased, was closer to neo-corporatism (Wylde, 2011)- in Argentina, showed that the main economic indicators (especially inflation rate) have remained under control. Even if there was an increase of public expenditure and budget deficits, the effects of populism on the economy were not devastating. Thus, if populist presidents implement moderate economic policies, the effects on politics are not negative. For example, Correa and Morales did not push their countries towards authoritarianism, like Chavez and Maduro in Venezuela; thus, Ecuador and Bolivia are still hybrid regimes. Argentinian Peronists were defeated in 2015 by Macri, and then they won again with Fernandez in 2019; thus, democracy resisted. In sum, Latin American populism usually leads to either illiberal democracies or hybrid regimes, because of: plebiscitarianism and low powers of parties or interest groups; high personalization and low institutionalization of politics; limits to the freedom of the media and to the access to internet. However, negative consequen-

ces in politics have also been produced by non-populist governments in Latin America. The devastating effects of populism on democracy have been produced only by leftist Manichean macro-economic populism, that has been denied by most of political scientists (Roberts, 1995; Weyland, 2001). If public expenditure is strongly expanded, together with partial socialism, the outcome is a deep economic crisis with high inflation rates, and a threat to democracy. Instead, if populist presidents turn moderate when they govern, the outcome is a form of (softened) “partial” populism. At the same time, partial populism did not bring to authoritarian regimes, instead of orthodox populism, with Chavez and Maduro in Venezuela. Thus, Argentina has always remained a democracy, while Bolivia and Ecuador are still “hybrid regimes”, even if political conflict has increased with two illiberal presidents like Correa and Morales.

Here is a typology, that summarizes the different cases of plebiscitarianism:

<i>Ideology</i>	<i>Political culture</i>	
	Right	Left
Radical	Xenophobic Plebiscitarianism	Orthodox Populism
Moderate	Conservative or Liberal Plebiscitarianism	Partial Populism

In *orthodox* (macro-economic) *populism*, there is both plebiscitarianism and the increase of the public expenditure and of the inflation rate (with Peron, Allende, Garcia, Chavez and Maduro). In *partial populism*, there is plebiscitarianism, but the increase of the public expenditure and of the inflation rate remains under control, and macro-economic populism is softened (with **Syriza** in Greece, **Movimento 5 Stelle** in Italy, Correa, Morales, and Cristina Kirchner). The political cultures of the right are not strictly populist, because there is not the increase of public expenditure, but there is still plebiscitarianism: the *moderate Conservative* (Trump and Berlusconi), the *moderate Liberal* (Menem and Fujimori), and the *radical Xenophobic* (Salvini’s Lega in Italy and Orban in Hungary).

Bibliographic references

- Alberti, G. (1996). "Movimientismo and democracy. An analytical framework and the Peruvian case study", in Diniz, E., *O desafio da democracia na America Latina: repensando a relacoes estado/sociedade*. Rio de Janeiro: Ipuja.
- Aslanidis, P. (2017). "Populism and social movements", in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*. Oxford: Oxford University Press.
- Cammack, P. (2000). "The resurgence of populism in Latin America", *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 19, N° 2, pp. 149-161.
- Cavarozzi, M. (1992). "Beyond transitions to democracy in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 24, N° 3, pp. 665-85.
- Chiarini R. (2020). *Caso italiano e radicalizzazione politica: il ritorno della polarizzazione?*, paper presented at the XXVIth Congress of the IPSA (International Political Science Association), Lisboa, 25-29th July.
- Conniff, M. (1999). *Populism in Latin America*. Tuscalosa - London: University of Alabama Press.
- De Cleen, B. (2017). "Populism and nationalism", in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*. Oxford: Oxford University Press.
- De la Torre, C. (2016) "Populism and the politics of the extraordinary in Latin America", *Journal of Political Ideologies*, Vol. 21, N° 2, pp. 121-39.
- (2017) *Populism in Latin America*, in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*. Oxford: Oxford University Press.
- (ed.) (2018). *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.
- De la Torre, C. and Lemon, A. O. (2016) "Populist democratization and the slow death of democracy in Latin America", *Democratization*, Vol. 23, N° 2, pp. 221-41.
- Demmers, J., Fernandez Jilberto, A. E. and Hogenboom, B. (2001) *Miraculous metamorphoses. The neo-liberalization of Latin American populism*. London - New York: Zed Books, Palgrave.
- Di Tella, T. (1990) *Latin American politics: a theoretical framework*. Austin: University of Texas Press.
- Dornbusch, R. and Edwards, S. (1989). "Macroeconomic populism in Latin America", *NBER Working Paper*, N° 2986. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Drake, P. (1982). *Conclusion. Requiem for populism?*, in Conniff, L. M. (ed.) *Latin American populism in comparative perspective*, Albuquerque, University of New Mexico Press.
- Edwards, S. (2019). "On Latin American populism and its echoes around the world", *Journal of Latin American Perspectives*, Vol. 33, N° 4, pp. 76-99.
- Ellner, S. (2003). *The contrasting variants of populism of Alberto Fujimori and Hugo Chavez*, "Journal of Latin American Studies", Vol. 35, N° 1, pp. 139-162.
- Freedom House (2019). *Freedom in the world*. Recuperado de <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat>.
- Geddes, B. (1994). *Politicians' dilemma: building state capacity in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Germani, G. (1978). *Authoritarianism, fascism and national populism*. London: Routledge.
- Fossati, F. (1997). *Mercato e democrazia in America Latina*. Milan: Franco Angeli.
- (2017). *Interests and stability or ideologies and order in contemporary world politics*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Garcia Augustin, O. and Briziarelli M. (2018) *Podemos and the new political cycle. Left wing populism and anti-establishment politics*. Cham: Palgrave-MacMillan.

- Grugel, J. and Riggirozzi, M. (2007). "The return of the state in Argentina". *International Affairs*, Vol. 83, N° 1, pp. 87-107.
- Hawkins, K. A. (2010). *Venezuela's Chavismo and populism in comparative perspective*. New York: Cambridge University Press.
- (2018). "The ideational approach", in De la Torre, C. (ed.) *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.
- Hidalgo, M. (2009). "Hugo Chavez's petro-socialism", *Journal of Democracy*, Vol. 20, N° 2, pp. 78-92.
- Jansen, R. S. (2011) "Populist mobilization: a new theoretical approach to populism", *Sociological Theory*, Vol. 29, N° 2, pp. 75-96.
- Kaltwasser, C. R. (2019) "Dealing with populism on Latin America. Lessons for Donald Trump's populist presidency in the United States", in Weyland, K. and Madrid, R. (ed.) *Dealing with populists in government: a framework for analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaufman, R. R. and Stallings, B. (1991). "The political economy of Latin American populism", in Dornbusch, R. and Edwards, R. (ed.) *The macro-economic of populism in Latin America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Knight, A. (1998). "Populism and neo-populism in Latin America, especially Mexico", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 30, N° 2, pp. 223-48.
- Laclau, E. (2005). *On populist reason*. New York: Verso.
- Levitsky, S. and Loxton, S. (2018). "Populism and competitive authoritarianism in Latin America", in De la Torre, C. (ed.) *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.
- Levitsky, S. and Murillo, M. V. (2008) "Argentina: from Kirchner to Kirchner", *Journal of Democracy*, Vol. 19, N° 2, pp. 16-30.
- Levitsky, S. and Roberts, K. M. (2011). *The resurgence of Latin American left*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lowndes, J. (2017). *Populism in the United States*, pp.232-47, in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*. Oxford: Oxford University Press.
- (2018). "Populism and race in the United States from George Wallace to Donald Trump", in De la Torre, C. (ed.) *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.
- Lupu, N. (2016). "The end of the Kirchner era", *Journal of Democracy*, Vol. 27, N° 2, pp. 35-49.
- Madrid, R.L. (2008). "The rise of ethno-populism in Latin America", *World Politics*, Vol. 60, N° 3, pp. 475-508.
- Mazzuca, S. L. (2013). "Lessons from Latin America: the rise of rentier populism", *Journal of Democracy*, Vol. 24, N° 2, pp. 108-122.
- Mudde, C. (2004). "The populist zeitgeist", *Government and Opposition*, Vol. 39, N° 4, pp. 541-563.
- Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2013). "Exclusionary vs inclusionary populism: comparing contemporary Europe and Latin America", *Government and Opposition*, Vol. 48, N° 2, pp. 147-174.
- Olson, K. (2017). "Populism in the socialist imagination", in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*, Oxford, Oxford University Press.
- Ostiguy, P. (2017) "Populism. A socio-cultural approach", in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*, Oxford, Oxford University Press.

- Oxhorn, P. (1998) "The social foundation of Latin American recurrent populism: problems of popular sectors class formation and collective action", *Journal of Historical Sociology*, Vol. 11, N° 2, pp. 212-246.
- Panizza, F. (2005). "Unarmed utopia revisited: the resurgence of left-of-the-center politics in Latin America", *Political Studies*, Vol. 53, pp. 713-734.
- Pappas, T. S. (2019). "Populists in power", *Journal of Democracy*, Vol. 30, N° 2, pp. 70-84.
- Pasquino, G. (2005). "Populism and democracy", *The Johns Hopkins University Special Lecture Series*, N° 3 (April).
- Remmer, K. (2012). "The rise of leftist populist governance in Latin America: the roots of electoral change", *Comparative Political Studies*, Vol. 45, N° 8, pp. 947-972.
- Roberts, K.M. (1995). "Neo-liberalism and the transformation of populism in Latin America: the Peruvian case", *World Politics*, Vol. 48, N° 1, pp. 82-116.
- (2006) *Populism, political conflict and grass-root organization in Latin America*, Vol. 38, N° 2, pp. 127-148.
- (2007). "Latin America's populist revival", *SAIS Review*, Vol. 27, N° 1, pp. 3-15.
- (2017). "Populism and political parties", in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*. Oxford: Oxford University Press.
- (2018). "Left, right, and the populist structuring of political competition", in De la Torre, C. (ed.) *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.
- Rodrik, D. (2018). "Populism and the economics of globalization", *Journal of International Business Policy*, Vol. 1, N° 1-2, pp. 12-23.
- Sachs, J.D. (1989). "Social conflict and populist policies in Latin America", *NBER Working Paper*, N° 2897. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Savage, R. (2018). "Populism in the US", in De la Torre, C. (ed.) *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.
- Schamis, H. E. (2006). "A 'left turn' in Latin America? Populism, socialism and democratic institutions", *Journal of Democracy*, Vol. 17, N° 4, pp. 20-34.
- Sturzenegger, F.A. (1991). "Description of a populist experience: Argentina 1973-1976", in Dornbusch, R. and Edwards, S. (ed.) *The macro-economic of populism in Latin America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Weyland, K. (1996). "Neo-populism and neo-liberalism in Latin America: unexpected affinities", *Studies in Comparative International Development*, Vol. 31, N° 3, pp. 3-31.
- (1999). "Neo-liberal populism in Latin America and Eastern Europe", *Comparative Politics*, Vol. 31, N° 4, pp. 379-401.
- (2001). "Clarifying a contested concept: populism in the study of Latin American politics", *Comparative Politics*, Vol. 34, N° 1, pp. 1-22.
- (2003). "Neo-populism and neo-liberalism in Latin America: how much affinity?", *Third World Quarterly*, Vol. 24, N° 6, pp. 1095-1115.
- (2009). "The rise of Latin America's two lefts. Insights from rentier state theory", *Comparative Politics*, Vol. 41, N° 2, pp. 145-164.
- (2013). "The threat from the populist left", *Journal of Democracy*, Vol. 24, N° 3, pp. 18-32.
- (2017) "Populism: a political-strategic approach", in Kaltwasser, C.R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. and Ostiguy, P. (ed.) *The Oxford handbook of populism*. Oxford: Oxford University Press.
- (2018) "Populism and authoritarianism", in De la Torre, C. (ed.) *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.

- Wylde, C. (2011). "State, society and markets in Argentina. The political economy of neo-desarrollismo under Néstor Kirchner, 2003-2007", *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 30, N° 4, pp. 436-452.
- (2016). "Post neo-liberal development regimes in Latin America: Argentina under Cristina Fernandez de Kirchner", *New Political Economy*, Vol. 21, N° 3, pp. 322-341.
- Zanatta, L. (2013). *Il populismo*. Roma: Carocci.
- Zuquete, J.P. (2018). "From left to right and beyond: the defense of populism", in De la Torre, C. (ed.) *Routledge handbook of global populism*. London: Routledge.

Danilo Martuccelli
danilo.martuccelli@parisdescartes.fr
Université de Paris
Francia

Recibido: 04/12/2019
Aprobado: 03/02/2020

Las sociedades y la polarización: de la era de las ideologías a la era de las convicciones

Resumen El artículo defiende la tesis del advenimiento progresivo de un nuevo momento de las polarizaciones sociales. Propone el debilitamiento de la importancia de las polarizaciones ideológicas a favor del fortalecimiento y expansión de polarizaciones basadas en convicciones personales. Para argumentarlo, primero evoca algunos de los grandes procesos de polarización propiamente ideológica que se dieron en el pasado (o que se dan en la actualidad) con el fin de diferenciarlos del otro tipo de polarizaciones propuesto. En su segunda parte, centrándose en el período actual, el artículo explora la naturaleza específica de las polarizaciones contemporáneas en torno a las convicciones, explicitando sus orígenes estructurales, así como sus principales manifestaciones y consecuencias.

Palabras clave Sociedad, Polarización, Ideología.

Abstract The article defends the thesis of the progressive advent of a new moment of societal polarizations. It proposes the weakening of the importance of ideological polarizations in favor of strengthening and expanding polarizations based on personal convictions. To argue, it first evokes some of the great processes of proper ideological polarization that occurred in the past (or that currently occur) to differentiate them from the other type of polarization proposed. In its second part, focusing on the current period, the article explores the specific nature of contemporary polarizations around convictions, explaining their structural origins, as well as their main manifestations and consequences.

Keywords Society, Polarization, Ideology.

Introducción

1. Este trabajo se benefició del apoyo financiero de la **Iniciativa Científica Milenio** del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile adjudicado al Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder. También fue apoyado por el proyecto Fondecyt N° 1.180.338 *Problematizaciones del Individualismo en América del Sur*.

Aunque la afirmación se ha vuelto usual, no es seguro que sea necesariamente cierta¹. Las sociedades contemporáneas ¿asisten realmente a procesos de polarización política más fuertes o inquietantes que en el pasado? La respuesta no es evidente. Más allá de la dificultad para precisar sobre qué criterios se establece el juicio comparativo entre “ayer” y “hoy”, surge inmediatamente la cuestión de la naturaleza de las polarizaciones que se evalúan.

Para tratar de aportar algunos elementos a la reflexión, en este artículo procederemos en dos grandes movimientos. En el primero, regresaremos rápidamente sobre algunos de los procesos de polarización en el pasado caracterizándolos desde sus contenidos ideológicos con el fin de diferenciarlos de lo que acaece en el período actual. En el segundo, desarrollaremos lo que será el corazón del artículo. Buscaremos precisar y definir la naturaleza específica de las polarizaciones contemporáneas en torno a las convicciones explicitando sus orígenes, sus manifestaciones y sus consecuencias.

La era de las ideologías y sus polarizaciones

Pocas cosas son tan características de la modernidad en su dimensión propiamente política como el advenimiento de la era de las ideologías. El término tuvo mala prensa desde su nacimiento y no ha cesado desde entonces de ser objeto de polémica, pero en su núcleo duro designó el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de visiones diferentes y antagónicas dentro de una sociedad. Que este reconocimiento se interprete como una consecuencia del cambio de la cosmovisión cristiana a la cosmovisión moderna (bajo la impronta científica), como un efecto de la consolidación progresiva del espacio público o como resultado de un creciente antagonismo de clases en el seno de las nacientes sociedades industriales, lo cierto es que el mundo dejó de ser pensado desde la evidencia de una representación única. Se impuso la evidencia de encontrarse frente a una era de conflictos de opiniones, creencias, intereses.

La pugnacidad de las luchas ideológicas

En la era de las ideologías, lo político, o sea la articulación de lo social y de su representación, se pensó como una arena irreductiblemente dividida (Gouldner, 1978, Lefort, 1981). Aquello que Maquiavelo, tal vez el primero en los tiempos modernos, teorizó como la existencia de un conflicto insuperable en toda sociedad, recibió nuevas y diversas interpretaciones. La sociedad se representó como inevitablemente dividida y la democracia se pensó, con más o menos fortuna, como el régimen que debía en un solo y mismo movimiento dar expresión política a esta diversidad y resolverla institucionalmente. Simplificando las cosas, éste fue el zócalo del universo de representación de los dos siglos pasados en Occidente, pero también y de manera señera en América Latina desde la independencia. Para gestionar esta división se impusieron progresivamente los procesos de selección electoral de las élites, partidos o agrupaciones políticas que competían en elecciones más o menos regulares para ejercer el poder (Manin, 2012); representaciones de tipo proporcional en los Parlamentos; una prensa que daba cuenta, expresión y publicidad a la diversidad de las opiniones; una sociedad civil y un conjunto de sindicatos que estructuraron la oposición de intereses.

En este universo se impuso la doble evidencia de la *división social* y de la *pugna ideológica*. Para algunos, digamos los partidarios de la filosofía del conflicto, la expresión de esta división era en sí misma un ideal. Para otros, partidarios de una cierta concepción valora-

tiva de la integración, un mal que, incluso si resiliente, debía ser absorbido estableciendo consensos. En los hechos, muchas veces, la historia se jugó por medio de una posición intermedia: un conjunto de treguas o compromisos, más o menos durables e institucionalizados, en torno a los cuales, incluso sin resolver necesariamente el fondo de los problemas, se lograron *modus vivendi* entre distintos grupos sociales. Estos compromisos rara vez fueron equidistantes de los diversos intereses, pero, dadas las relaciones de fuerza en juego, tendieron a ser aceptados por unos y otros.

Hemos recordado muy rápidamente lo anterior porque en este universo de representación política, si la polarización pudo por momentos ser percibida como excesiva, su realidad nunca suscitó grandes asombros: a fin de cuentas, los conflictos formaban parte de manera irreductible de lo propio de la vida social.

Todo lo anterior no impidió la expresión de versiones que intentaron superar la división social en nombre de la unidad nacional, pero, sin sorpresa, estos llamados fueron ellos mismos objeto de pugnas ideológicas. Así las cosas, las luchas político-ideológicas y conflictos sociales fueron vigorosos durante el siglo XIX entre conservadores, liberales y socialistas y más tarde, ya en el siglo XX y en la estela de la crisis del liberalismo decimonónico clásico, estas se dieron en torno a polarizaciones ideológicas incluso más agudas: nacionalismo, fascismo, comunismo. A este muy esquemático recordatorio aún sería necesario añadirle, tras la Segunda guerra mundial, y a pesar de ciertos antecedentes, la consolidación en el marco de la Guerra Fría de una enérgica oposición entre dos modelos altamente ideologizados de industrialización, el capitalismo y el comunismo, y el desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX en varias regiones del mundo de conflictos armados de baja intensidad pero de alto antagonismo ideológico.

En todas estas décadas la polarización ideológica fue frecuente. Pocas cosas lo expresaron de manera más transparente que los avatares de tantos y disímiles partidos comunistas que tuvieron que enfrentarse radicalmente a los presupuestos de las sociedades en las que operaban dando formas a diversos tipos de compromisos institucionales, pero también a reductos de sociabilidad cerrados sobre sí mismos y cuasi paralelos a la sociedad mainstream (una secesión sostenida por una prensa, lugares de residencia o esparcimientos propios, redes de sociabilidad específicas y con pocos contactos con personas pertenecientes a otros grupos, etc.). Una realidad de este tipo fue extrema en ciertos países europeos, pero menos atípica de lo que se piensa. En todas estas décadas, dada la fuerza de las identidades partidarias, los individuos tuvieron visiones políticas y expresiones electorales muy distintas entre sí. Si en el siglo XIX el Primer Ministro británico Disraeli pudo hablar de las *dos naciones*, durante lo esencial del siglo XX, en muchos países europeos (sobre todo los países latinos) hubo *dos sociedades* fuertemente opuestas entre sí (franquistas y republicanos, demócratas-cristianos y comunistas, gaudistas y socialistas). Los acuerdos en torno a las grandes orientaciones económicas o en política extranjera entre Republicanos y Demócratas en los Estados Unidos no debe, por eso, en absoluto, llevar a minimizar el vigor de las polémicas y diferendos ideológicos entre partidarios de uno u otro bando en todas estas décadas.

Si la mirada se desplaza hacia América Latina, las polarizaciones ideológicas no fueron menos fuertes. El caso argentino es tal vez el más extremo: la división entre peronistas y antiperonistas, y antes entre radicales y opositores, no solo se inscribió en una representación particularmente dicotómica del país desde mediados del siglo XIX (Svampa, 1994), sino que cada uno de estos movimientos estuvo animado por representaciones unanimistas y altamente polarizadoras de la sociedad. Los radicales se concibieron, sin más, como la expresión auténtica de la Constitución; los peronistas interpretaron el conflicto social desde la oposición *Pueblo/Anti-Pueblo*. Sin embargo, aunque esta expe-

riencia fue extrema, no fue el único caso. Fuertes polarizaciones (e intolerancias) ideológicas también se dieron en muchos otros países (piénsese entre otros en la violencia de la oposición entre liberales y conservadores en Colombia o en el anti-aprismo en el Perú). Estos aspectos fueron cíclicamente agudizados por diversos golpes de Estado, hasta llegar al paroxismo de las dictaduras de la década de 1970. En breve y en simple, el siglo XX fue el teatro de muy sólidas y largas polarizaciones ideológicas.

De la breve ilusión de las aguas calmas a las nuevas polarizaciones políticas

El corte no fue abrupto, pero desde fines del siglo XX se asistió, en el lapso de unas décadas, por un lado, a una nueva gran versión del *fin de las ideologías* y, por otro, a una renovación de las formas de la polarización política.

[1] Para comprender la ilusión de una cierta calma ideológica hay que remontarse a las tres primeras décadas tras la Segunda Guerra Mundial, marcadas, a pesar del vigor de la Guerra Fría, por ciertos consensos en torno a los modelos de desarrollo: el keynesianismo y el fordismo se impusieron en los países occidentales, como lo hizo, a su manera, el modelo de sustitución de importaciones en América Latina. Este consenso factual fue, empero, oscurecido por la fuerza, históricamente inusitada, de los conflictos socioculturales o valóricos que surgieron en la década de 1960 y que, desde entonces, no han decrecido en intensidad (feminismo, estudiantes, minorías étnicas o genéricas, ecología, etc.).

Tanto o más importante, como contra-tendencia a la polarización, fue la evolución de la URSS, primero bajo el mandato de Brézhnev (y la distensión ideológica *de facto* que impuso en la Guerra Fría), luego con Gorbachov así como, también, la evolución del Partido Comunista Chino desde las reformas de Teng Siao Ping. Estas transformaciones coincidieron, en Occidente y en América Latina, con el progresivo ingreso en la denominada *era neoliberal*. La crisis, y en varios países la desaparición de los Partidos Comunistas, la adaptación de los partidos de izquierda a las nuevas exigencias económicas impuestas por el Consenso Neoliberal (visible en el giro social-liberal -la *Tercera Vía*- de varios partidos socialistas en Europa), parecieron dar forma a un nuevo período de *fin de las ideologías*. Si los nombres fueron distintos (por ejemplo, el *fin de la historia*), el fenómeno aludido fue similar. En este contexto, no es irrelevante que a inicios de 1990 una de las más importantes redefiniciones del conflicto se haya dada a nivel geopolítico (y no dentro de las fronteras nacionales) en torno al choque de las civilizaciones (Huntington, 2005). Si es cierto que rara vez se lo teorizó en estos términos, también lo es que, retrospectivamente, puede decirse que estas décadas (las que groseramente pueden extenderse entre 1980 y 2010) estuvieron marcadas por importantes consensos hegemónicos. En el ámbito económico, el neoliberalismo (a veces) y el capitalismo (casi siempre) se convirtieron en el régimen insuperable de la época. En el ámbito sociocultural, no sin resistencias, el liberalismo cultural se impuso en los hechos en muchas sociedades, llevando a un mejor y progresivo reconocimiento de los derechos de las minorías, pero también a la obtención de derechos que muchos actores juzgaron como inequívocamente progresistas. Incluso enfrentando resistencias, el neoliberalismo económico y el liberalismo cultural signaron la hegemonía dominante del período. El conflicto ideológico, en sus grandes manifestaciones *mainstream*, pareció ser un asunto de grado y ya no de naturaleza.

[2] Es teniendo en cuenta este telón de fondo como deben leerse algunas interpretaciones recientes acerca de la polarización. Sin pretender exhaustividad presentemos rápidamente algunas de ellas.

Según un primer conjunto de análisis estaríamos asistiendo a una **nueva y peligrosa polarización ideológica** que cuestiona los principios de tolerancia sobre los que se asentó tradicionalmente la democracia en Occidente. Ésta es de alguna manera la tesis defendida en el libro de Levitsky y Ziblatt (2018) *Cómo mueren las democracias*, en donde los autores, después de recordar que la polarización es consustancial e incluso positiva en la democracia, indican un umbral de riesgo a partir del cual la polarización se vuelve contra-productiva, cuando *los partidos se asimilan a concepciones del mundo incompatibles* (Levitsky y Ziblatt, 2018: 137), un desliz que llevaría, a medida que las rivalidades priman sobre la tolerancia, a poner en peligro a la democracia.

En un primer nivel de análisis, estas actitudes pueden ser puestas al activo de los movimientos denominados *populistas* y sobre todo al de los movimientos *nativistas autoritarios*, los que, incluso si participan en las elecciones, cuestionan sus presupuestos mínimos de convivencia:

- ◆ negación de la diversidad cultural
- ◆ tesis complotistas acerca de grupos sociales maléficos y perversos
- ◆ una concepción de la política que excluye la negociación con los enemigos
- ◆ una cultura antiparlamentaria y unanimista, a pesar de su presencia en los parlamentos
- ◆ visiones híper-nacionalistas que entronizan no tanto el primado del interés nacional sino *una* concepción del interés nacional altamente marinada de egoísmo y obtusa a toda inteligencia interdependiente de los problemas sociales, etc.

La afirmación es por decir lo menos, discutible. En vista de la rápida historia de la democracia que hemos evocado en el apartado anterior (y que los autores citados conocen muy bien) sostener una mayor incompatibilidad entre concepciones del mundo en las sociedades contemporáneas que en el pasado está lejos de ser evidente. En el caso de América Latina, es cierto, desde inicios del siglo XXI se dio una fuerte polarización entre regímenes denominados progresistas y neoliberales o conservadores, y dentro de muchos países la polarización entre partidarios y opositores de los gobiernos de turno (en Venezuela, Bolivia, Argentina) fue muy acentuada. Pero, por un lado, estas polarizaciones no se limitaron a *concepciones del mundo incompatibles* (a pesar de lo agudo de estas polarizaciones, éstas no se asentaron en visiones radicalmente opuestas), y por el otro lado, tampoco es seguro que hayan sido más álgidas que en el pasado.

Por eso, tal vez con mayores visos de plausibilidad, algunos sostienen que el origen de la polarización actual se encuentra en el desconocimiento de la voluntad electoral por parte de muchos gobiernos que han tendido en las últimas décadas a no respetar el resultado de las urnas. Como lo expresa Cas Muddle, el populismo actual sería *una respuesta democrática no liberal a décadas de políticas liberales antidemocráticas* (citado en Spitz, 2019: 80). Esta reacción no liberal (visible en lo que a veces se denominan los regímenes iliberales) sería una respuesta popular a los excesos de un liberalismo económico y cultural individualista. Pero ¿es tan cierto que los derechos individuales crecieron al punto de cuestionar la soberanía colectiva? En realidad, lo que se dio fue más bien una reducción del espacio de **lo** político y de la decisión colectiva por la acción del capital, la consolidación de políticas públicas orientadas esencialmente a preservar el buen juego del mercado y la competencia (el ordoliberalismo muy activo en la UE) y la consolidación de la idea central del *Consumidor soberano*, como lo denomina Niklas Olsen (2019) en detrimento del *Ciudadano Soberano*.

Todos estos cambios son importantes, pero no dan cuenta explícitamente ni de la talla ni de la naturaleza de la polarización en curso. Ciertamente, es posible que esto haya engendrado rabias o resentimientos en una parte del electorado, oponiendo a los *anywhere* a los *somewhere*, las élites y el pueblo (Guilluy, 2014, Goodhart, 2019), dando forma a distintas manifestaciones de lo que se denomina el populismo, pero la polarización a la que se asiste es, como lo veremos en la segunda parte, más generalizada y en verdad de otra índole.

Por último, aunque en apariencia más acotada en los hechos, algunos politólogos también observan una acentuación de las polarizaciones partidarias dentro de muchos congresos nacionales. Recordemos que como mecanismo institucional las elecciones no solo representaban la división social, sino que también participaban en la formación de los consensos. Curiosamente, la fuerza de los clivajes ideológicos durante buena parte del siglo XX habría obstruido menos la producción de los consensos que lo que se observa en un período más reciente.

El obstruccionismo parlamentario con respecto a las decisiones del ejecutivo -que no es en absoluto una novedad- toma, en efecto, expresiones vigorosas y frecuentes. En realidad, en este punto, las experiencias nacionales son muy distintas y la generalización a partir del solo caso estadounidense (lo que cierta politología mainstream tiende a hacer) es discutible. Pero para el caso de este país, los hechos van en efecto en esta dirección: la tradicional práctica de compromisos entre representantes de los dos grandes partidos en el Congreso ha dado lugar desde inicios del siglo XXI (e incluso ya bajo la administración Clinton) a una muy fuerte polarización obstruccionista. En esta evolución, el principal responsable, al menos en su inicio, fue el Partido Republicano. Sin embargo, este obstruccionismo parlamentario debe ser matizado y puesto en relación con otras experiencias nacionales como, por ejemplo, el caso alemán y las grandes coaliciones partidarias que ha conocido este país en las últimas décadas.

Notemos desde ya, aunque regresaremos sobre esto, que este obstruccionismo parlamentario se produce en medio de situaciones en las que muchas veces las identificaciones partidarias positivas tienden a decrecer entre muchos electores. Aunque en apariencia paradójico, se trata de un mecanismo plausible de polarización. Bien analizadas las cosas, es la creciente debilidad de las identidades partidarias la que da cuenta de la polarización. Como la sociología del conflicto lo ha mostrado tantas veces, la oposición a un grupo externo permite federar un grupo evacuando la realidad de sus divisiones internas y produciendo/reforzando su identidad. En términos simples: en oposición a la primera interpretación que hemos evocado, la polarización contemporánea no estaría producida por el antagonismo entre distintas concepciones del mundo, sino que, al contrario, sería la debilidad de las identidades e ideologías políticas lo que lleva a la necesaria polarización partidaria. En el contexto de América Latina, el caso peruano es tal vez una de las mejores expresiones de esta tesis (Meléndez, 2019).

Estas tres interpretaciones, a las que se podrían añadir otras, poseen, a pesar de sus diferencias, algo común: todas ellas continúan estableciendo el origen de la polarización a nivel del sistema político. Desde este marco compartido de interpretación, y en la medida en que parten de esta premisa, cada una de ellas se ve obligada a proponer interpretaciones diferentes, más o menos *ad hoc*, para dar cuenta de la diversidad de los procesos de polarización política en el mundo contemporáneo.

En resumen, la polarización ideológica no ha desaparecido en las sociedades actuales, pero esta permanencia e incluso renovación se da en el marco de sociedades en las que, como tantos estudios lo muestran, muchos individuos expresan una profunda desafección hacia el sistema político. Si la polarización ideológica describe por eso, sin duda, muchas conductas actuales, es legítimo preguntarse por otros orígenes y manifestaciones de la polarización. Es lo que haremos en el apartado siguiente.

La era de las convicciones y sus polarizaciones

¿Dónde está la novedad? En el desplazamiento del origen y la naturaleza de la polarización en las sociedades contemporáneas. Ésta no es más esencialmente de índole ideológica. Las polarizaciones se vuelven, sobre todo, un asunto de convicciones personales, una actitud que desde nuevas bases y más allá de las ideologías cierra la posibilidad de muchas conversaciones.

La afectividad implicativa: una nueva experiencia de la vida social

La polarización contemporánea es distinta de la polarización ideológica de las décadas precedentes. Para comprenderlo, el eje del análisis tiene que ser invertido: *es la experiencia de la vida social la que comanda las expresiones de la polarización política y no a la inversa.*

Polarizaciones sociales y culturales, independientemente de lo político, existieron por supuesto en el pasado (baste recordar la potencia de tantas querellas culturales entre antiguos o modernos) y ellas siguen existiendo en la actualidad en torno, por ejemplo, a identidades deportivas o barras bravas. Pero estas continuidades no deben llevar a desconocer lo nuevo: por razones estructurales los individuos se sienten *concernidos* de una manera inédita por lo que acaece en la sociedad, en **su** sociedad. Este sentimiento tuvo antecedentes y ya fue activamente incentivado por el nacionalismo, pero su expresión actual es distinta, menos institucionalizada y más experiencial. Los individuos tienen la más clara conciencia de formar parte, en verdad de estar “presos” en un colectivo. Lo quieran o no, saben que serán afectados por lo que en éste se produce. Se trata de una experiencia multiforme que en las últimas décadas ha sido denominada, incluso de manera sesgada, a través de varios términos: vulnerabilidad, sufrimiento, compasión, etc., expresiones que se volvieron cada vez más importantes a medida que la cuestión social fue abordada a través de nociones como reconocimiento, menosprecio, *care*, solicitud.

Se asiste a una nueva experiencia estructural de la vida social en torno a una *afectividad implicativa* (Martuccelli, 2017), la que resulta de la profunda toma de conciencia de todo lo que la vida personal le debe a la sociedad en su conjunto; al hecho de que las sociedades modernas son sociedades de fuerte movilización generalizada en todos los ámbitos de la vida social, incluidos los ámbitos más íntimos de la existencia. Todo ello acentúa una muy fuerte e inédita imbricación entre el yo y la sociedad que da cuenta de la nueva función de las emociones. Por eso, la consolidación de la afectividad implicativa invita a repensar la vida en sociedad desde el pathos, el padecer, el sentir. Las personas se sienten afectadas, voluntaria o involuntariamente, por las cuestiones sociales.

En un primer nivel, es importante insistir en la novedad moderna, y no solo contemporánea, de esta experiencia. En efecto, se trata de un aspecto muy bien subrayado por los clásicos de la sociología desde fines del siglo XIX, el que, después de un cierto período de eclipse analítico, ha sido otra vez puesto en el tapete por los análisis sobre la globalización en donde se han destacado los costos emocionales de este proceso (Giddens, 1991, Bauman, 1999, Elliott y Lemert, 2006). Si estos análisis tuvieron el mérito de reabrir un tema que las ciencias sociales cerraron demasiado rápidamente en el siglo XX, desafortunadamente lo hicieron limitándolo a una serie de malestares puntuales. Lo que debe analizarse es de todo otro calibre: la generalización de una afectividad implicativa que, casi sin mediación, digamos “carnalmente”, nos conecta con los acontecimientos de la vida social.

Afectividad carnal: la fórmula describe una experiencia particular de interpenetración entre el individuo y la sociedad. El individuo sin necesariamente ser un actor en el sentido fuerte del término se siente expuesto y concernido por la vida social. En las

ciencias sociales, la larga hegemonía del sujeto-actor ha minimizado durante mucho tiempo los aspectos propiamente experienciales y pasivos del *individuo-que-siente*. Frente a esto, se hace necesario proponer una interpretación más equilibrada en la que la apertura experiencial de los actores hacia el mundo sea mejor tomada en cuenta (Cruz Sánchez, 2013: 60-61).

La **afectividad implicativa** genera una relación altamente personalizada, vivida en primera persona, con los asuntos sociales. *Todos* los problemas sociales (desde la globalización al Estado, desde el empleo a cuestiones internacionales, desde las empresas hasta las identidades, desde la familia hasta lo privado, desde la nación hasta la ecología) se viven a través de una relación *inmediata* y *personalizada* entre experiencias subjetivas y estructuras sociales. Los eventos sociales se experimentan, así, en el sentido más fuerte del término, con una fuerte carga emocional. Se acentúa una forma altamente personalizada de participación afectiva en la vida social que no es del orden ni de la participación ni del compromiso aun cuando pueda por momentos tomar estas formas. Independientemente de toda acción, las personas se sienten involucradas porque se perciben y se reconocen afectadas en y por la vida social; se sienten “tocados” por la sociedad. Notemos que esta experiencia de implicación afectiva es tanto más intensa e inquietante cuanto que, a menudo, muchos individuos no se sienten parte de ningún proyecto colectivo.

En breve, la afectividad implicativa designa la experiencia ordinaria y contemporánea de ser afectado por la sociedad. Por supuesto, a cierto nivel existencial y antropológico, los actores no pueden no ser afectados por los otros y por el mundo. Sin embargo, y aquí está el cambio, este aspecto ha adquirido una dimensión histórica particular en la sociedad actual ya que los individuos, en el curso *ordinario* de sus vidas, son conmovidos por transformaciones que, más allá o fuera de su control, los afectan en profundidad (¿quién y cuándo votó por internet?). La intensidad de la *societalización* de los individuos ha sido uno de los grandes cambios del siglo XX. Progresivamente en *todos* los ámbitos de la vida social se hizo explícita la experiencia de vivir en sociedad. Lo que en el pasado fue una experiencia más o menos excepcional de movilización o control (guerras, totalitarismo, la sociedad de masas) se ha convertido en una experiencia generalizada y ordinaria de la vida en sociedad. La visibilidad de la presencia de la *sociedad* en las vidas personales no cesa de acentuarse: en el ámbito sexual, reproducción, alimentación, consumo, etc.

Se trata de una dimensión fuertemente acentuada por las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). La conexión ha cambiado nuestra experiencia de los colectivos: lo importante de ahora en adelante es estar efectiva y constantemente afectado por el mundo. Gracias a las TIC, y particularmente al teléfono celular conectado a internet, cada individuo tiene la experiencia, sin precedentes, de estar siempre conectado con los demás y, más generalmente, con la misma sociedad. El teléfono celular permite aprehender el *Dios-sociedad* de Durkheim. Esta experiencia es tan intensa que algunas personas incluso desarrollan un nuevo temor particular en caso de desconexión: sin acceso a una red digital, sienten que están fuera de la sociedad, que los eventos del mundo ya no los afectan (Jauréguiberry, 2014). Estas actitudes, menos anecdóticas de lo que parecen, reflejan un cambio importante en nuestra experiencia de la vida social bajo la consolidación de una expectativa constante de conexión. En este sentido, la conexión, sin abolir el tema de la exclusión (la inseguridad salarial, la pobreza, los derechos) transforma profundamente la cuestión de la inclusión. En la medida en que busca estar siempre conectado, el individuo adquiere una nueva experiencia de saturación por y en la vida social. Lo esencial: siempre se siente y se representa -y en mucho se desea- estando continuamente afectado por lo social. Las personas dejan así constantemente abiertos sus canales de comunicación, se orientan sistemáticamente en función de las demandas laborales, de las alertas informa-

tivas, de los requerimientos de otros, un conjunto de solicitudes a las que siempre son receptivos incluso en detrimento de quienes les rodean; una manera de experimentar una exposición constante a **la** sociedad (Couldry, 2012: 126-127). A lo anterior, también habría que añadirle el hecho que es cada vez más difícil ser inmune e insensible en sociedades en las que las imágenes, continuamente, nos confrontan con el sufrimiento a distancia (Boltanski, 1993) y en donde constantemente se nos solicita por nuestros gustos a través de una profusión de *I like* y *smiles*. A su manera, las redes sociales participan y refuerzan la polarización de las convicciones, tanto más que en ellas las expresiones de malestar se entremezclan con invectivas o ataques personalizados. En breve, la afectividad implicativa es la tonalidad general de una experiencia social histórica particular.

Lo social es personal

Volvamos con esta base interpretativa al tema de la polarización. Notemos, en primer lugar, que ésta se produce, como las encuestas en tanto países dan testimonio, en sociedades marcadas por una fuerte disociación o desafección entre el sistema político y los actores sociales. Sin embargo, a pesar de esta disociación, los individuos se sienten fuertemente concernidos por la vida social y son altamente sensibles a la defensa de sus convicciones.

En este contexto, se hace necesario ampliar una de las más famosas pautas de emancipación del siglo XX: no solamente lo personal es político, sino que cada vez más *lo social es personal*. La afectividad implicativa no desdibuja la frontera entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo íntimo, sino que designa el hecho de que *las cuestiones sociales se viven como asuntos personales*.

Por supuesto, el carácter personal de los eventos se materializa de muy diferentes maneras. Pero se trata de un verdadero punto de inflexión: en este registro, las afirmaciones sobre la privatización de los individuos o las críticas al narcisismo contemporáneo se revelan particularmente incapaces de identificar el principal cambio en curso. En contra de estos diagnósticos, lo que llama la atención es la forma en que cada vez más distintos problemas sociales se perciben como asuntos personales -ya sea la ecología, el desempleo, la globalización, la nación, las identidades, la corrupción, el género, el matrimonio igualitario, el aborto, la inmigración, la eutanasia, etc-.

Esta situación invita a ampliar la fórmula canónica del feminismo (*lo personal es político*). Mediante esta fórmula, el feminismo extendió el campo de la política a la vida cotidiana, conceptualizándolo como un terreno asimétrico de las relaciones de poder entre mujeres y hombres (trabajo, tiempo libre, relación con el cuerpo), el que requería de nuevas formas de protesta. Un reconocimiento de la extensión de la dominación social que, sin embargo, en el fondo, siguió siendo prisionero del esquema tradicional de la emancipación en lazo con las luchas sociales. Un modelo que exige una fuerte articulación entre la acción colectiva extraordinaria y la experiencia individual ordinaria.

La afectividad implicativa opera en otra dirección. Las cuestiones sociales son percibidas como asuntos personales sin suscitar necesariamente participación en acciones colectivas.

Llegamos al corazón de la tensión específica de la afectividad implicativa contemporánea y de sus consecuencias a nivel de la polarización de las convicciones. Por un lado, el individuo *siente* cada vez más los colectivos de los que forma parte como una extensión de sí mismo, pero, por el otro, solo participa (cuando lo hace) en un número muy reducido de acciones colectivas. O sea, si siempre existe, en principio, la posibili-

dad de pasar desde esta experiencia de implicación afectiva hacia una explícita participación política, ésta es solo una posibilidad entre otras y está muy lejos de ser la más frecuente. En la mayoría de los casos, los individuos se limitan a una experiencia afectiva altamente personalizada sin paso por la acción colectiva. Si la afectividad implicativa da lugar a diversos sentimientos de indignación, humillación, presión, asfixia, rara vez o solo puntualmente (y casi exclusivamente en ciertos individuos) da lugar a compromisos políticos. Hay -siempre hubo- una secuencia “subterránea” en la sociedad. Pero hoy, esto es lo nuevo, esta escena enterrada es susceptible de aflorar rápidamente. Es lo que sucedió durante los mandatos de Obama en Estados Unidos: mientras se alababa el advenimiento oficial de un país post-racial, el odio racial tomó nuevas formas y canales de expresión que se hicieron patentes y públicos unos años después.

Ni la acción colectiva ni la participación política son los termómetros correctos de la afectividad implicativa. Incluso cuando nada se “mueve” en la superficie, un torrente de sentimientos se suscita subrepticamente y fluye en silencio. La procesión va por otro lado. No es necesario comprometerse para sentirse fuertemente afectado o involucrado en la vida social. La afectividad no solo precede al compromiso y la participación, sino que también puede prescindir en gran medida de ellos. El grado y la intensidad de la afectividad puede incluso ser inversamente proporcional a la participación. Cuanto menos participa, más un individuo se puede sentir afectado, incluso contra su voluntad, por un colectivo. No se trata, por supuesto, de oponer la afectividad al compromiso. La afectividad también puede traducirse en compromiso. Pero en muchos casos y para muchas personas esto no se produce. Las dos nociones describen realidades diferentes. En el caso del compromiso y la participación, la cuestión es comprender cómo y por qué alguien pasa de la defensa de sus intereses personales a la toma en consideración del interés colectivo, lo que requiere de un lenguaje, de repertorios de acción, de arenas institucionalizadas particulares. En el caso de la afectividad, al contrario, la cuestión central es comprender la fuerte experiencia de involucración en la vida social que se esconde detrás de una relación pasiva con la política y la acción colectiva.

La importancia de la afectividad, e incluso su creciente centralidad en la sociedad actual, ha sido minimizada de manera constante por el pensamiento político y sociológico debido a la división entre la vida pública y privada y la obsesión por la cuestión del indispensable tránsito a la política. Como resultado, los sentimientos ordinarios de afectividad implicativa, pero también muchos discursos ocultos de tantos actores sociales (Scott, 1990), han recibido escasa atención. Nada lo testimonia mejor que la triada de Hirschman (1970): *exit, voice, loyalty*. En este análisis, a diferencia de las nociones de *exit* o *voice*, la *lealtad* se revela particularmente poco explorada e incapaz de dar cuenta de la complejidad de los afectos que los individuos tienen en la vida social ordinaria. Detrás de la aparente “lealtad” se esconde una profusión de sentimientos de frustración, apatía, amargura, resentimiento, etc. (o sea, un conjunto de muy diversas formas de implicación afectiva). En el mismo sentido, la idea de la existencia de ciclos de acción colectiva, de la sucesión de una fase de politización y movilización en la década de 1960 y de un período de despolitización y retiro en la vida cotidiana veinte años después (Hirschman, 1983), tampoco hace justicia a lo que se dio más o menos subterránea y transversalmente durante este período del lado de la afectividad. Es posible formular la hipótesis que durante todo este período, y paralelamente a lo que era visible a nivel de la protesta social, los individuos experimentaron un continuo aumento, por razones estructurales, de la intensidad de su afectividad implicativa en la vida social.

El yo, la sociedad y los otros

Resultado de lo discutido hasta aquí: se establece una nueva dinámica entre el yo y el nosotros. De ahora en adelante se trata de testimoniar en primera persona de las razones de la implicación en la vida social (Cardon y Granjon, 2006). Ahí donde, ayer, el trabajo militante exigía desprenderse de las emociones y experiencias personales para proponer una visión en nombre del interés general (algo indispensable para des-singularizar los problemas personales y construirlos como un problema colectivo, cf. Boltanski, Darré y Schiltz, 1984), hoy en día se hace cada vez más necesario dar cuenta en términos personales de nuestros compromisos públicos. Lo esencial no reside en la subsunción del Yo al Nosotros, sino en una experiencia de la vida colectiva que se enuncia en primera persona. No solo es cuestión de conmoverse por lo que sucede a otras personas, sino de sentir personalmente los avatares de **su** colectivo. Más allá de todo reclamo explícito, incluso de tipo identitario, los individuos se dicen concernidos porque se perciben como directa y personalmente afectados por la vida social.

Aquí está el epicentro de las polarizaciones contemporáneas. Hemos entrado en una era de experiencias altamente afectivas de la sociedad donde todo tiende a sentirse y juzgarse en primera persona. Esta transformación endurece la defensa de las creencias y convicciones personales, pero de manera diferente a como lo hizo -lo hace- la ideología. En breve: se pasa de las opiniones ideológicamente estructuradas a las convicciones subjetivamente sentidas. Es desde las convicciones íntimas, o sea, desde lo que se presenta como perteneciendo a la propia sensibilidad, como se expresan cada vez más las tomas de posición. En muchas sociedades europeas esto es visible en los debates que suscita el velo islámico o la barba sin bigote en tanto que manifestación, por ejemplo, para unos, de una convicción religiosa, para otros, de una costumbre, para terceros, de un acto de hostilidad. En todos los casos siempre se trata de algo que se practica o rechaza en términos altamente personalizados. No es un ejemplo aislado. Un gran número de temas y prácticas sociales se impregnan de afectividad: la ropa, las gorras, la minifalda, los jeans, el color del cabello, la alimentación, el tabaquismo. En cada ocasión es cuestión de lo que cada uno es, de expresar una relación personal con una creencia, de expresar en el espacio público lo que se siente en tanto que expresión de una profunda e íntima convicción personalizada. Los límites entre la vida social y la vida personal no se borran, pero se imbrican de una manera inédita. Cómo no subrayar las pasiones crecientes que suscitan en las sociedades actuales las discusiones sobre los alimentos en nombre de la salud, la belleza, la dieta, las alergias, la religión o la ecología. Son debates altamente apasionados, animados por diversas consideraciones morales o éticas, pero siempre en torno a convicciones que se perciben como personales (creencias religiosas, bio, vegetarianos, veganos, flexitarianos, gourmets, placer, salud, ecología). La polarización ordinaria y habitual que esto suscita estructura una sociedad en donde los clivajes, más allá de toda estricta polarización ideológica, signa una experiencia de la vida social marcada por una creciente personalización de los fenómenos sociales.

En muchos de estos debates, los individuos se ponen “furiosos” porque se sienten “heridos” en lo más profundo de sus convicciones personales. Progresivamente, una nueva expresión ingresa en el espacio público: ser herido. Los pechos desnudos de las militantes de **Femen** o simplemente los desnudos en la publicidad, las risas y el sarcasmo (que algunos creyentes interpretan como blasfemias), la supuesta entrada del enfoque de género en los libros de texto escolares, el Orgullo Gay, el velo islámico y aún más el burka integral, el consumo de carne o el maltrato animal, la condescendencia de las élites hacia la gente común, la intensidad de las polémicas sobre los derechos, la vida o

la muerte (el aborto, la eutanasia, la procreación subrogada, etc.): todo se carga de pasiones personalizadas. Lo que decide un colectivo o hace otro individuo es padecido como una agresión personalizada a las propias convicciones.

Notemos la profundidad del cambio. La era de las convicciones personales desafía incluso el tradicional esquema progresista: la idea de un tránsito necesario, en nombre del progreso de la libertad, hacia nuevos derechos individuales es cuestionado por los conservadores en nombre de propias e íntimas convicciones.

Nada de sorprendente: a medida que los fenómenos sociales se perciben cada vez más como cuestiones personales, se generalizan las irritaciones ordinarias. El arte contemporáneo ha entrevisto esta dimensión mucho mejor que las ciencias sociales, ya sea en la novela francesa actual (Barrère y Martuccelli, 2009) o en el cine latinoamericano (imposible no evocar *Relatos Salvajes*). A lo que se asiste es a una desregulación y a una multiplicación de enfrentamientos silenciosos entre personas basados en antipatías más o menos inmediatas o en rivalidades emotivas y sin propósito estratégico. En este universo, a veces, la polarización ideológica sólo es la punta del iceberg y no aprehende ya, necesariamente, lo que es lo más significativo en este conjunto de experiencias de polarización personalizadas. Si los conflictos sociales, como lo comprendió Marx, exigen transitar de una oposición entre personas a un antagonismo contra la lógica de un sistema, en la era de las convicciones y de la afectividad implicativa los conflictos tienen mayor dificultad en despersonalizarse. Ellos se impregnan, al contrario, de una poderosa capa de afectos personales.

La diferencia entre las radicalizaciones ideológicas y las irritaciones interactivas es mayúscula. Las primeras requieren de una organización y de una ideología (Khosrokhavar, 2014), mientras que las segundas son silenciosas y más o menos solitarias. El fastidio sentido y acumulado durante mucho tiempo puede a veces engendrar explosiones más o menos esporádicas de cólera o de rabia (un script frecuente en tantos productos actuales de la industria cultural en donde un ciudadano ordinario pierde los estribos), pero estas conductas son ajenas a todo proceso de polarización ideológico en el sentido preciso del término.

Evoquemos otra ilustración, también muy alejada de la cuestión de la polarización ideológica, para describir el movimiento subyacente al que asistimos. Hace apenas 25 años los cigarrillos y el humo estaban en todas partes. No molestaban a “nadie” y, si lo hacían, las personas tenían que acomodarse más o menos en silencio. Desde entonces, a través de una batalla plural de *imágenes-shock*, campañas de salud pública y, lo más importante, a través del argumento del tabaquismo pasivo, los cigarrillos y el humo han visto disminuir sus espacios. A medida que el espacio para fumadores se encogía, el humo se volvió cada vez más incómodo. Entendamos bien lo que este ejemplo banal ilustra sobre nuestra vida colectiva. Desde siempre las representaciones han moldeado las percepciones. Lo nuevo es la creciente intolerancia hacia las irritaciones, a los daños o desagradados que los otros nos pueden causar y el rechazo de todo esto en nombre de convicciones personales.

Repensar las polarizaciones políticas

Si la afectividad implicativa amplía el espectro de las polarizaciones en dirección de las convicciones, también tiene importantes consecuencias en las polarizaciones ideológicas propiamente dichas.

Progresivamente, sin que se le haya otorgado la atención que merece, el voto, por ejemplo, deja de ser la expresión política institucionalizada de una opinión y se convierte en algo más, en verdad en otra cosa, a saber, en un asunto íntimo para muchos ciudadanos. A primera vista, es tentador pensar que esto no es en sí mismo una novedad, a fin de cuenta el voto siempre tuvo una inequívoca dimensión identitaria. Sin embargo, ya no se trata solamente de una mera identificación con un programa o con un líder sino del sentimiento de que el voto expresa la personalidad de un individuo, sus auténticas convicciones, y, a través de ellas, su intimidad. Adolescentes (Dubet y Martuccelli, 1998) o adultos (Muxel, 2014), todos otorgan una importancia y un halo de intimidad nuevo a sus convicciones y a sus expresiones electorales. En el momento de votar y decidir su voto, los individuos otorgan cada vez más atención a sus intuiciones, a sus experiencias, a lo que saben porque lo han vivido. Se asiste así a un proceso de valorización altamente personal de las opiniones *propias*.

Entendámoslo bien: el voto permitió, y todavía permite, manifestar un interés, una adhesión o una creencia, pero también una frustración, una exasperación, una amargura, una desilusión. O sea, el voto siempre ha jugado un papel **expresivo e identitario**, más allá de su estricto papel funcional en la selección de los equipos de gobierno. Es en el marco de esta innegable continuidad cómo debe entenderse la tendencia a vivir la votación y su resultado, en primera persona. Si, como lo señala Yves Déloye (2003: 92), votar es admitir la transformación de una convicción personal en una opinión sin voz, cada vez más es la impersonalidad del voto lo que cuestionan muchos votantes. La cuestión ya no es más decidir si el voto debe o no ser obligatorio, si debe o no hacerse público o ser secreto, de lo que se trata es del significado personal, incluso íntimo, que los individuos otorgan a sus expresiones electorales (Martuccelli, 2017).

Esta nueva dimensión de la intimidad política da cuenta del hecho que muchos electores sientan vergüenza frente a ciertos resultados electorales que perciben como adversos -un rubor en primera persona por un voto colectivo-. Individuos pertenecientes a diversos colectivos han experimentado esta vergüenza dando lugar, por ejemplo, a movimientos tan distintos como **No en mi nombre** de ciudadanos musulmanes británicos para disociarse de los crímenes del denominado Estado Islámico en 2014; ciudadanos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam (**No somos una nación de asesinos**) o electores franceses que, tras la calificación del candidato de la extrema derecha a la segunda vuelta electoral en el 2002, salieron a las calles detrás de las pancartas **Tengo vergüenza de ser francés**. En cada caso, los individuos expresaron sentimientos morales altamente personalizados y en primera persona -la vergüenza- con sus colectivos.

La percepción de las opiniones políticas como convicciones íntimas y personales dificulta la formación de los consensos y envalentona la desobediencia. No es en absoluto anecdótico. En principio, la participación electoral trae aparejada la obligación que el ciudadano votante reconozca como *propias* las decisiones del colectivo en el cual participa. Ciertamente, en las democracias siempre se conservó el derecho de impugnar una decisión (Pettit, 2004: 245; Rosanvallon, 2006). Sin embargo, cuando un colectivo (vía sus representantes) votaba una ley, los ciudadanos se veían obligados a someterse a esa ley y aceptar la decisión a riesgo de ser designados como malos perdedores (Luhmann, 2001: 114).

Esto es justamente lo que tiende a expandirse en la actualidad: las actitudes de mal perdedor. La tentación o bien de rehacer las elecciones o bien de desobedecer al resultado de las elecciones se acentúa. La expansión de los fenómenos de desobediencia civil es también una buena ilustración de esto (Ogien y Laugier, 2011). Las acciones de rechazo aumentan frente a las reglas o las leyes promulgadas por un poder legítimo en la medida en que las decisiones son juzgadas como injustas o inicuas por ciertos individuos en función de sus íntimas convicciones, en nombre de las cuales se permiten desobedecerlas. Esta experiencia de los colectivos también da cuenta del desconocimiento de la voluntad electoral por parte de muchos gobiernos democráticos en las últimas décadas así como de la dificultad a la hora de producir consensos postelectorales.

El núcleo del problema está pues en que los individuos ya no aceptan que los colectivos hablen en su nombre. Por supuesto, es un problema consustancial a cualquier comunidad política. Todos los colectivos de los que los individuos forman parte hablan en nombre de ellos y, sobre todo, los comprometen en y por sus acciones. Sin embargo, sin menoscabo de lo anterior, en la era de las convicciones los individuos se sienten cada vez más personalmente autorizados a desobedecer o a rechazar *legítimas* decisiones colectivas. Si la legitimidad nunca se redujo a la legalidad, la tensión entre ambas tiende a agudizarse. Ciertamente, esto reenvía a la figura clásica de la desviación, de la revuelta y, por supuesto, de la disidencia. Pero lo que durante mucho tiempo fue una actitud militante más o menos rara o ejemplar (propia a ciertas minorías activas, cf. Moscovici, 1979), tiende progresivamente a generalizarse multiplicando las figuras ordinarias de la objeción de conciencia. Es incluso posible pensar que estamos frente a una nueva etapa del protestantismo moderno: el libre examen de conciencia ya no se limita solamente a los dogmas propuestos por las Iglesias, sino que también tiende a aplicarse progresivamente a las leyes y a los Estados. Un número cada vez más importante de ciudadanos se siente libre de deshacerse, bajo ciertas condiciones que ellos mismos definen en función de sus convicciones y examen de conciencia, de las reglas de los colectivos. En la medida en que juzgan que las organizaciones van en contra de sus más íntimas convicciones, se permiten conductas que consideran legítimas incluso si son contrarias a la legalidad en curso (algo visible en los temas ecológicos o en las libertades corporales). Es porque se sienten heridos en sus más íntimas convicciones que los individuos se permiten libertades con respecto a los colectivos.

En todos los casos, la defensa de la propia sensibilidad se vuelve central. Lo políticamente correcto es quizás la expresión más extrema y al mismo tiempo banal de este proceso. La ilustración es aquí también menos anecdótica de lo que parece. A su alero se transita de una sociedad moldeada por cuestiones de conveniencia social, cortesía, etiqueta (Sennett, 1979; Raynaud, 2013) a una sociedad marcada por la cuestión del respeto de la propia sensibilidad. La policía de las palabras desplaza a la vieja policía de las formas. La sensibilidad del otro, lo que es susceptible de lastimarlo o herirlo, se convierte en la nueva frontera de las interacciones sociales, lo que produce un repudio de las palabras, gestos o caricaturas ofensivas. En el universo de la afectividad implicativa, la sensibilidad ajena tiende a convertirse en el termómetro de un nuevo requisito de sociabilidad y en una nueva fuente de polarizaciones ordinarias.

Las polarizaciones ideológicas (¿es necesario precisarlo?) no han desaparecido en el mundo contemporáneo. Sin embargo, progresivamente se asiste al incremento de toda otra familia de polarizaciones en torno a las convicciones. La experiencia de la vida social está cada vez más marcada por una transformación de las afectividades que genera una profusión de fenómenos de polarización que toman distintas formas (vergüenza, antipatía, irritación, rechazo, creencias íntimas, molestias, acoso, presiones grupales, sofocación), independientemente de los grandes universos ideológicos.

A diferencia de los antiguos continentes ideológicos, estas polarizaciones ordinarias basadas en convicciones íntimas y personalizadas no siempre hacen sistema entre sí. La sociedad está cada vez más atravesada por polarizaciones que se producen entre individuos que no se identifican necesariamente con ideologías o que incluso cuando adhieren a ciertos universos ideológicos pueden tener muy pocos conocimientos de éstos (como muchos jóvenes adeptos al islamismo radical, cf. Khosrokhavar, 1997). Pero este desinterés o estas deficiencias ideológicas son ampliamente compensadas por convicciones íntimas en nombre de las cuales expresan su rechazo u oposición.

Con la expansión y profundización estructural de la afectividad implicativa en las sociedades contemporáneas, la manufactura de la polarización se desplaza desde el sistema político (*sin abolirlo*) hacia la vida social. La polarización ideológica es en la actualidad solamente una de las manifestaciones, entre otras, de la polarización en la vida social aun cuando el sistema político pueda ser aún, por momentos, *uno* de los grandes directores de orquesta de la polarización en la sociedad.

En la base de muchas polarizaciones actuales existe un universo social cada vez más agónico de convicciones personalizadas. Aquí reside en último análisis el vigor de las polarizaciones en las sociedades actuales. Lo que está fallando es la capacidad que tienen los individuos de ponerse en el lugar del otro; de adoptar lo que Adam Smith denominó *el lugar del espectador imparcial*. Para ello, es necesaria la simpatía como categoría moral, pero es sobre todo indispensable poder ponerse racional y *afectivamente* en el lugar del otro. En el pasado, las ideologías impidieron muchas veces este trabajo, pero también es cierto que otras veces las mismas ideologías, dada la racionalidad política que las animaba, lo permitieron a su manera. Este fue como lo hemos recordado en el inicio de este artículo el mundo de los clivajes ideológicos y el de los no menos frecuentes acuerdos partidarios. La situación actual es distinta. Las cuestiones sociales se *viven* como altamente *personales*. Y en este universo de afectividad implicativa y de convicciones íntimas, los rechazos son viscerales; las treguas, traiciones; la desobediencia, una posibilidad inextirpable. La creciente personalización de los asuntos sociales alimenta pasiones y tiende a polarizar y dividir de manera ordinaria, sobre nuevas bases, a las sociedades contemporáneas.

Referencias bibliográficas

- Barrere, A. y Martuccelli, D. (2009). *Le roman comme laboratoire*. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.
- Bauman, Z. (1998). *Le Coût humain de la mondialisation*. París: Hachette.
- Boltanski, L. (1993). *La Souffrance à distance*. París: Métailié.
- Boltanski, L. Darré, Y. y Schiltz, M.A. (1984). "La dénonciation", *Actes de la recherche en sciences sociales*, N° 51, marzo, pp. 3-40.
- Cardon, D. y Granjon, F. (2006). "Médias alternatifs et radicalisation de la critique", en Collovald, A. B. G. (ed.) *La Démocratie aux extrêmes*. París: La Dispute.
- Couldry, N. (2012). *Media, Society, World*. Cambridge, Polity Press.
- Cruz Sánchez, P. A. (2013). *Pasión y objeto político*. Barcelona: Bellaterra.
- Déloye, Y. (2003). *Sociologie historique du politique*. París: La Découverte.
- Dubet, F. y Martuccelli, D. (1998). *En la escuela*. Buenos Aires: Losada.
- Elliott, A. y Lemert, C. (2006). *The New Individualism*. Londres: Routledge.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity Press.
- Goodhart, D. (2019). *Les deux clans*. París: Les Arènes.
- Gouldner, A. W. (1978). *La dialéctica de la ideología y de la tecnología*. Madrid: Alianza.
- Guilluy, C. (2014). *La France périphérique*. París: Flammarion.
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice and loyalty*. Cambridge: Harvard University Press.
- (1983). *Bonheur privé, action publique*. París: Fayard.
- Huntington, S. P. (2005). *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Madrid: Paidós.
- Jauréguiberry, F. (2014). "La déconnexion aux technologies de la communication", *Réseaux*, N° 186, pp. 15-49.
- Khosrokhavar, F. (1997). *L'islam des jeunes*. París: Flammarion.
- (2014). *Radicalisation*. París: Editons de la MSH.
- Lefort, C. (1981). *L'invention démocratique*. París: Fayard.
- Levitsky S. y Ziblatt D. (2018). *Cómo mueren las democracias*. Barcelona: Ariel.
- Luhmann N. (2001). *La Légitimation par la procédure*. Québec-París: Presses de l'Université Laval, Cerf.
- Manin, B. (2012). *Principes du gouvernement représentatif*. París: Flammarion.
- Martuccelli, D. (2017). *La condition sociale moderne*. París: Gallimard.
- Meléndez, C. (2019). *El mal menor*. Lima: IEP.
- Moscovici, S. (1979). *Psychologie des minorités actives*. París: PUF.
- Muxel, A. (dir.) (2014). *La Vie privée des convictions*. París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Ogien, A. y Laugier, S. (2011). *Pourquoi désobéir en démocratie?*. París: La Découverte.
- Olsen, N. (2019). *The Sovereign Consumer*. Basingstoke: Palgrave-MacMillan.
- Pettit, P. (2004). *Républicanisme*. París: Gallimard.
- Raynaud, P. (2013). *La Politesse des Lumières*. París: Gallimard.
- Rosanvallon, P. (2006). *La Contre-démocratie*. París: Seuil.
- Scott, J.C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance*. New Haven-London: Yale University Press.
- Sennett, R. (1979). *Les Tyrannies de l'intimité*. París: Seuil.
- Spitz, J.F. (2019). "El capitalismo democrático: ¿el fin de la excepción histórica?", *Nueva Sociedad*, N° 282, julio-agosto, pp.69-82.
- Svampa, M. (1994). *El dilema argentino*. Buenos Aires: El Cielo por asalto.

Ilan Bizberg
ilan@colmex.mx
Colegio de México
México

Las raíces subjetivas y sociales

de la pérdida de legitimidad de los regímenes democráticos y del surgimiento de los movimientos sociales actuales

Recibido: 22/10/2019
Aprobado: 15/12/2019

Resumen

Este artículo arguye que los movimientos que inician con la *primavera árabe*, siguen con el movimiento **Los Indignados** de Madrid y **Occupy Wall Street**, y continúan con los *gilets jaunes* y con los múltiples movimientos sociales actuales: Hong Kong, Chile, Líbano, Colombia, México, tienen fuentes comunes. Se han señalado dos distintas: la gran desigualdad que se ha producido en casi todos los países del mundo por la financiarización y la crisis de legitimidad de la mayoría las democracias representativas del mundo. La primera puede explicar varios de los movimientos en algunos países, aunque no revele todo. La segunda, referida a la crisis de legitimidad de la mayoría los gobiernos actuales, no es una crisis de la democracia que da lugar, inevitablemente, al populismo, sino una crisis de la democracia representativa. Este artículo discutirá, en una primera parte, la crisis de la democracia representativa y la manera cómo los nuevos movimientos sociales actuales reivindican y, en cierta medida, viven la democracia participativa. En una segunda parte, analizaré las fuentes subjetivas del malestar social que está en el corazón de la mayoría de los movimientos sociales que están surgiendo actualmente y que abordan directamente cuestiones subjetivas y culturales. Finalmente, en una tercera sección, examinaré la manera cómo varias de estas reivindicaciones subjetivas atañen un choque de temporalidades: entre la temporalidad subjetiva y el tiempo social, el institucional y, por vez primera en la historia de la humanidad, con el tiempo geológico.

Palabras clave

Movimientos Sociales, Crisis, Democracia Representativa, Democracia Participativa, Subjetividad, Tiempo.

Abstract This article argues that the movements that initiate with the *Arab Spring*, continue with the **Indignado** movement in Madrid and **Occupy Wall Street**, and continue with the *gilets jaunes* in France and with the multiple current social movements: Hong Kong, Chile, Lebanon, Colombia, Mexico, have common sources. Two distinct ones have been pointed out: the great inequality that has emerged in almost all the countries due to financialization and the crisis of legitimacy of the majority of the representative democracies in the world. The first may explain several of the movements in some countries, although it does not reveal everything. The second one, which refers to the crisis of legitimacy of most current governments, is not a crisis of democracy that leads, inevitably, to populism, but a crisis of representative democracy. This article will discuss, in its first section, this crisis of representative democracy and the manner in which the new contemporary social movements demand, and to a certain degree, experience participative democracy. In the second section, I will analyze the subjective sources of the present social malaise that lies at the heart of the present social movements that directly address subjective and cultural issues. Finally, in the third section, I will analyze how several of these subjective claims concern a clash of temporalities: between subjective temporality and social and institutional time as well as, for the first time in the history of mankind, with geological time.

Keywords: social movements; crisis of representative democracy; participative democracy; subjectivity; time.

Introducción: Tres fenómenos que mueven al mundo

Cuando se producen, simultáneamente, movimientos sociales en tan diversas partes del mundo, como en la actualidad, es posible pensar que, a pesar de que en cada caso tiene características particulares, hay elementos comunes. De la misma manera, los distintos movimientos del 68 tenían una base común: varios analistas la han considerado *el pasaje de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial*. En la actualidad, los movimientos que inician con la *primavera árabe* siguen con el movimiento de **Los Indignados** de la Puerta del Sol de Madrid y **Occupy Wall Street**, y continúan, más recientemente, con los *gilets jaunes* y con los múltiples movimientos que se están produciendo en todos los continentes: Hong Kong, Chile, Líbano, Colombia, México, entre otros, tienen fundamentos comunes.

Los estallidos sociales actuales se han explicado de dos maneras distintas: por la gran desigualdad que se ha producido en casi todos los países del mundo y por la falta de representatividad y legitimidad de la mayoría de los sistemas políticos del mundo. La primera puede, definitivamente, explicar varios de los movimientos en algunas partes del mundo, aunque revele todo. La segunda, el hecho de que la mayoría de los gobiernos actuales carecen de legitimidad, no se explica por sí mismo, es necesario entender las razones sociales, pero también subjetivas. En general, se han ignorado las fuentes subjetivas de este *malestar social*, a pesar de que la mayoría de los movimientos sociales que están surgiendo actualmente abordan directamente este tipo de cuestiones: el derecho al aborto, al matrimonio igualitario, la denuncia del acoso, del abuso y del feminicidio, los derechos de los individuos LGTBQ, el consumo alternativo, el cuidado del medio ambiente y el derecho a una muerte digna, entre otros. Un argumento importante de este escrito va en el sentido de que varias de estas cuestiones se relacionan con un choque de temporalidades: del tiempo subjetivo con el tiempo social, institucional y, por vez primera en la historia de la humanidad, con el tiempo geológico.

La crisis de la democracia representativa

El derrumbe del comunismo tuvo como consecuencia liquidar el referente ideológico principal que definía la política desde, por lo menos, mediados del siglo XIX, el mundo se unificó sobre la base de un único modelo económico: el capitalismo. Esto, acompañado por el auge de los medios reales y virtuales de comunicación, dio lugar a la globalización, que no hubiera sido posible de persistir la división del mundo en dos regímenes económicos opuestos. El triunfo del capitalismo, sin oponente, los nuevos medios de comunicación y la globalización, derivaron no solo en un capitalismo sin barreras, sino en un capitalismo con una menor aversión al riesgo y a la financiarización. Esto último, a su vez, tuvo como consecuencia el incremento de la desigualdad, tanto en el interior de los países pobres como de los países ricos.

Esto tuvo, a su vez, consecuencias políticas significativas: por una parte, el empobrecimiento de las clases medias (preponderantes en los países desarrollados) derruyó los fundamentos sociopolíticos sobre los que se basaban las viejas democracias; por la otra, el fin del comunismo permitió que los gobiernos se liberaran de tener que conciliar el mercado con el bienestar de los trabajadores, que podían ser atraídos por ese tipo de sistema de no mejorarse sus condiciones económicas y de trabajo. Con ello declinó el poder de los sindicatos y se derruyó progresivamente el Estado de bienestar que beneficiaba a las mismas poblaciones que estaban siendo afectadas por el fenómeno de la creciente desigualdad. En los países excomunistas, todo sucedió aún más rápidamente: con el fin del comunismo se vinieron abajo las organizaciones sindicales. Y con los sindicatos, el resto de las organizaciones intermedias, las cuales eran, junto con las clases medias, la base de la democracia representativa.

Estos fenómenos socioeconómicos han estado acompañados por un extraordinario desarrollo de los medios de comunicación, tanto físicos como virtuales, lo cual ha facilitado la circulación de la información política y la intervención de los individuos directamente en el ámbito político, aunque sea sólo virtualmente: dando su opinión, circulando noticias y comentarios. Esto que puede ser un significativo apoyo a la democracia cuando es utilizado por individuos en acciones colectivas, como ofrecer información, planear acciones, generar discusiones sobre distintas cuestiones, exigir al gobierno la solución de problemas o nuevos derechos, en resumen, para reconstruir asociaciones (que, aunque sean virtuales, pueden concretizarse al movilizarse) de intermediación entre los ciudadanos y la política.

Pero, también ha facilitado la manipulación de la información. En primer lugar, ha permitido simplificar la información política, conducirla a su *grado cero*: los políticos actuales pueden basar su mensaje político ya no en proyectos o programas de gobierno, sino en imágenes y frases cortas, simplificadas al máximo. Aunque este fenómeno se daba ya con la radio y luego con la televisión, los nuevos medios de comunicación potenciaron aún más las características que Adorno y Horkheimer habían descubierto en los viejos medios: los mensajes cortos, simples, de pocas palabras y, cada vez más, de imágenes *shock* tienen un efecto muy importante sobre los ciudadanos. Este instrumento ha permitido vehicular esos mensajes no sólo de manera rápida y extensa, sino incluso selectiva, como vimos con el caso de *Cambridge Analítica*.

Con la globalización, creció no solo la circulación de mercancías, de capitales, sino la de la población (sea por necesidad o por ocio). Cualquier persona, aunque no podía viajar físicamente a otros países, lo podía hacer virtualmente. Ello implicó un incremento de la migración de los países pobres a los ricos, lo que permitió que la migración se utilice como la forma de culpar a los migrantes de todos los problemas internos, como ya se hacía en el pasado (en los años treinta), y como fue el caso del Brexit (Boyer, 2020). Para ello han ayudado enormemente los medios virtuales de comunicación, donde los argu-

mentos políticos se pueden reducir a una simple imagen: una fotografía de un grupo de migrantes que se apresta a pasar la frontera de un país es difícilmente contrarrestada por un largo y bien construido argumento acerca de la situación en los países de donde vienen o del recuerdo que todos fuimos migrantes en algún momento de nuestras vidas o las de los padres: la imagen más simple domina.

Finalmente, la política está cada vez más desajustada con respecto a los hechos que pretende controlar, conciliar, regular, dirimir, resolver, debido la aceleración del tiempo económico, social, histórico y geológico. Mientras tanto, los cambios tecnológicos, económicos, sociales, e incluso la historia y los desafíos del deterioro del medio ambiente, se precipitan. Las estructuras políticas e institucionales tienen otro ritmo, son mucho más lentas ya que dependen de la discusión, la negociación y el acuerdo, y luego la construcción y transformación de las instituciones. La política también está desfasada con respecto a los mecanismos que rigen una economía financiarizada: algoritmos que deciden el rumbo de una economía en nanosegundos y pueden llevar a un país o al mundo a una crisis (Boyer, 2013). También está desacoplada con respecto a la aceleración del tiempo histórico y del tiempo geológico que, por primera vez en la historia de la humanidad, está presente a los ojos de los seres humanos en la medida en que vivimos el fin del Antropoceno.

La consecuencia más directa de todos estos cambios ha sido el surgimiento de una forma política que la mayoría de los analistas han denominado *populista*, término que tiene su historia en el siglo XIX en Rusia y los Estados Unidos pero que se ha extendido y, en gran medida desvirtuado, al usarlo en la actualidad para describir todo tipo de expresión política, de izquierda y derecha, incluyentes y excluyentes, etc. La mayoría de los estudios se enfocan a analizar estas formas políticas de manera fenoménica, es decir por sus expresiones *externas*, relacionadas con el discurso del dirigente y su pretensión de hablar en nombre del pueblo. Estas concepciones dan la mayor importancia a la demagogia del líder, a sus discursos orientados a los sectores más desprotegidos de la sociedad en contra de los estratos privilegiados, enfatizan su visión maniquea de la realidad social, según la cual todos los males provienen de los sectores privilegiados, mientras que los desprotegidos son considerados como intrínsecamente virtuosos (Hermet, 2001: 133; De la Torre, 2013: 4). Se plantea que el discurso populista pretende abolir la distancia, las barreras, e incluso las diferencias existentes entre los gobernados y los gobernantes, entre los de arriba y los de abajo (Hermet, 2001: 49). Según esta perspectiva, el populismo es un *movimiento antipolítico* que rechaza los mecanismos políticos tradicionales que demoran la resolución de las fracturas y de las injusticias sociales, además de que niega la temporalidad de la política, exige y promueve la respuesta instantánea a los problemas y a las aspiraciones que ninguna acción gubernamental tiene la facultad de resolver (Hermet, 2001: 50).

Estas perspectivas consideran, en primer lugar, que lo que estamos viviendo actualmente la crisis de la democracia *tout court*, y no **la crisis de la democracia participativa**. Esto porque piensan que, ante la crisis de este ideal de democracia, el único que se puede reclamar de este nombre, se pasa necesariamente a un régimen no-democrático. Se concluye que la única alternativa a la democracia liberal es un régimen no democrático que delega todo el poder, que antes estaba en manos de los representantes, al dirigente. No obstante, varios autores (Coppedge, 2002, Laclau, 2005), consideran que en toda democracia hay una tensión irresoluble entre democracia formal/representativa y democracia participativa; en toda democracia existe una tensión entre la democracia liberal/representativa *a la Constant*, que pone el acento en las instituciones formales, y la concepción participativa, propuesta por Rousseau, en la cual la democracia es la expresión de la voluntad popular (Coppedge, 2002), o dicho de otra manera entre utopía y realismo

(Targuieff, 2007, p. 172). En toda democracia existe un aspecto que apela a la representación, a los representantes del pueblo y otro que apela directamente al pueblo. Frente a la crisis de la democracia representativa, derivada de su incapacidad a ofrecer soluciones a los grandes desafíos del mundo contemporáneo, ha emergido con más impulso este factor que siempre ha estado ahí, pero que estuvo subordinado o en equilibrio con la idea de la democracia como representación (Coppedge, 2002). Esto permite comprender que la crisis de la democracia representativa no sólo ha dado lugar al llamado populismo, sino que se ha afirmado con fuerza renovada la otra dimensión de la democracia, en las innumerables movilizaciones sociales que hemos estado viendo surgir por doquier desde hace diez años y que reivindican la democracia participativa.

Nuevos movimientos sociales y democracia participativa.

El título de un libro reciente, *El pueblo contra la democracia* (Mounk, 2018) refleja fielmente la incomprensión del hecho que la crisis actual de la democracia no es tal, sino que se trata de la democracia representativa, y que, en contraste de lo que puedan pensar los que defienden la tesis de que el pueblo se rebela en contra de la democracia y que esto resulta, fatalmente, en el autoritarismo, los movimientos sociales actuales están demandando una profundización de la democracia. En la discusión que sigue sobre los nuevos movimientos sociales proponemos que éstos no sólo están demandando más democracia, sino que muchos de ellos está aportando soluciones a los grandes problemas contemporáneos que están en la raíz de la crisis de la democracia representativa; pero lo hacen a nivel local. Faltaría que encontraran la forma de construir las instituciones adecuadas a estas demandas, es decir resolver la antinomia postulada por Rousseau, más que rechazar la posibilidad de conjuntar pueblo y democracia, más que considerar que el pueblo está en contra de la democracia.

La sociabilidad que construyen estos nuevos movimientos sociales es una crítica viviente de la democracia representativa, en tanto viven la democracia participativa. En las manifestaciones o en las tomas de espacios físicos, no se montan plataformas desde donde se pronuncian discursos, de hecho, ni siquiera hay discursos; hay testimonios, como los de las víctimas en el caso del **MPJD**, discusiones como en el caso de **Los Indignados** de la toma de la Puerta del Sol en Madrid, del movimiento **Nuit D  bout** en la plaza de la Rep  blica de Par  s, o el movimiento de los *gilets jaunes*. Cualquiera puede intervenir en cualquier momento en la asamblea. De hecho, es por ello que se establecen formas in  ditas de tomar la palabra y organizar los debates y que   stos no se vuelvan ca  ticos (testimonio de un participante de la Puerta del Sol).

Tratan de interactuar en una nueva forma de organizaci  n en la que predomina la democracia participativa y en cuyas asambleas se produce una democracia deliberativa. No reconocen jerarqu  as o liderazgos, rechazan la idea de representantes o voceros del movimiento. En el caso mexicano, recusaron a los medios de comunicaci  n que intentaban reconocer a algunos l  deres. El movimiento de los *gilets jaunes* en Francia critic   e incluso agred   a los participantes que se presentaban como sus representantes o a los que pretendieron presentar una lista de candidatos a las elecciones municipales de marzo de 2020 en Francia. En el caso de estos movimientos, as   como el de **Ocuppy Wall Street**, se vivi   una organizaci  n de las asambleas con base en formas de participaci  n que ejercen la democracia horizontal, sin liderazgos, sin jerarqu  as, donde todos los asuntos son susceptibles de ser discutidos (Gareber, 2012). Varios autores que han descrito estos movimientos en Espa  a, Atenas y Nueva York han acentuado que se produjo

una ruptura por su manera abierta, participativa, directamente democrática de organizarse y de funcionar [...] [mediante] procedimientos flexibles y que pueden ser modificados de un día al otro; que son autocríticos y ajustados en función de errores, de comentarios y sugerencias que emergen directamente de su puesta en práctica. [...] Rechaza toda forma de representación o de mediación, que garantiza por la circulación permanente de las posiciones revocables que atraviesan todas las estructuras y todas las funciones nacidas de este movimiento. (Giovanopoulos, 2012: 83-84)

En el caso del **MPJD**,

La participación, la deliberación es lo que permite a las víctimas devenir actores, por lo menos de sus propias vidas. La mayoría nunca había participado en un movimiento social ni pretendían hacerlo antes de la tragedia que marcó sus vidas. Pero pronto han ido viviendo un proceso de transformación radical que los ha cambiado de ser individuos caracterizados por la injusticia de la que han sido objeto para convertirse en verdaderos promotores de los derechos humanos de todas y todos en nuestro país y en luchadores sociales organizados [...] Pero esto aún no bastaba, era necesario que las propias víctimas tomaran en sus manos la dirección del Movimiento para imprimirle un nuevo ritmo, dinámica y ruta en un momento en que su caminar se percibía lento y disperso frente a la urgencia de quién mantiene como estandarte la esperanza cargando el dolor de la incertidumbre a cada segundo. (Solís, 2012)

No son movimientos estructurados, permanentes, e institucionalizados porque *suceden en la acción* (Ciudades Rebeldes, 2013: 23; Gohn, 2014: 204), continúan conectados en red, en grupos de internet, *Facebook*, *WhatsApp*, por lo que pueden resurgir en cualquier momento. Hicieron uso de los vínculos virtuales existentes para lanzar y extender su movimiento, como lo hizo el movimiento **#YoSoy132** luego de la manipulación de la información por el gobierno y por las principales cadenas televisivas y radiales sobre la visita del candidato del PRI a la presidencia de la República a la Universidad Iberoamericana, o en el inició la *primavera árabe* en Túnez, cuando se transmitió por las redes la inmolación de Mohamed Bouazizi. Por otra parte, una vez que termina la fase de mayor movilización en las calles y plazas, el movimiento subsiste de manera latente, ya que los participantes continúan conectados virtualmente y pueden reaccionar y movilizarse aún a pesar de que no exista una organización permanente/estable. En el caso mexicano, esto fue lo que explica la rapidez en la que se organizaron las tres marchas, mayoritariamente de estudiantes, para exigir el esclarecimiento de los hechos y reclamar la búsqueda y la aparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.¹

Además, estos nuevos movimientos se originan con base en redes horizontales, creadas por individuos frente a sus computadoras o celulares. Un participante en el movimiento **#YoSoy132** lo plantea muy claramente: *a través de las redes los sujetos tienen a su alcance la posibilidad de expandir deseos, placeres, descontentos, esperanzas, expectativas o pretensiones. En la red, la subjetividad se expande y la acción política se puede acrecentar* (Granados, 2013: 55). El zapatismo también usó el internet como un recurso muy significativo. Según el propio Marcos: *había un espacio nuevo, tan nuevo que nadie había imaginado que una guerrilla podría utilizarlos* (Marcos, en Le Bot, 2013: 137). Esto implica, también, que estos movimientos se caractericen por su heterogeneidad. Al crearse en un mundo virtual y no estar definidos por una categoría social, una localidad determinada, una fábrica, etc., el llamado a la acción, a la manifestación convoca a personas con diferentes identidades, formas de pensar, razones para reclamar. Esta es una de sus virtudes, pero que puede volverse en contra de ellos, ya que algunos de estos grupos pueden ser incompatibles y provocar rupturas del movimiento, como bien se ha visto con los *gilets jaunes*.

1. Una característica central de estos movimientos es su uso de los medios de comunicación virtuales como el *Facebook*, el *WhatsApp*, entre otros para informar, convocar a acciones, reclamar a autoridades, pedir apoyo, etc. Varios autores consideran que estos nuevos movimientos utilizan estos medios por estar mejor adaptados a estas formas de organización horizontal, sin liderazgos, de democracia participativa, continua. *Los dispositivos de tipo red no crean, por supuesto, los movimientos, sino que son los instrumentos adaptados a ellos porque corresponden en parte a las estructuras horizontales, reticulares y a las experimentaciones democráticas de los movimientos mismos* (Mosca, 2010). Pero también podemos postular, por lo menos como hipótesis, que estos medios que estaban ahí han ayudado a que los movimientos se organicen de manera más democrática, más horizontal, y que hay una interrelación entre el internet y la acción concreta fuera de línea en este sentido.

Finalmente, son movimientos des-territorializados, no tienen un lugar físico de encuentro, o un local permanente. El territorio es sustituido por la red, por el contacto virtual. Es a través de la red que se informan, discuten y convocan a una manifestación, donde deciden dónde reunirse, manifestar, y donde definen sus demandas. Aunque cada grupo pequeño o incluso cada individuo decide su propia demanda, la forma en que se manifestará, etc. Están desterritorializados de una manera adicional, ya que tienen contactos internacionales y llevan a cabo manifestaciones en diferentes partes del mundo. También, en tanto que reivindican temas que rebasan cualquier territorio, nación, país y se refieren a los problemas globales tales como la emergencia ecológica, el incremento de la violencia, la dominación de las finanzas sobre la producción, el sobreconsumo, la situación de los migrantes, de los indígenas, los desempleados, el poder de los medios de comunicación, entre otros (Le Bot, 2013). Así, el **EZLN**, influyó en los movimientos internacionales con su demanda de respeto a la diferencia y de la dignidad de la identidad local ante los procesos de homogeneización de la dominación cultural de lo nacional/global, para convertirse en el primer movimiento alterglobalización, reivindicado por los siguientes, en Seattle, Wall Street, Madrid, entre otros. El movimiento por la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ocurrió simultáneamente en México, Francia, Alemania, Inglaterra, etc.

No obstante, la red no sustituye el contacto cara a cara, que finalmente es lo esencial (Mosca, 2010). Lo que se hace en la red es preparar la presencia física en algún lugar específico, cuando se pasa de la latencia a la acción. Es por ello que, en algunos momentos, estos movimientos ocupan un lugar físico. Por ejemplo, el parque Gezi y la plaza Taksim para impedir que el gobierno turco destruyera el parque y construyera un centro comercial; la Puerta del Sol y la Plaza Tharir para ejercer una presión más fuerte sobre el gobierno; ciertas intersecciones de ruta (los puntos de encuentro de los chalecos amarillos). Pero, sobretodo, ocupan espacios públicos para *vivir de otra manera*, como veremos en adelante.

Los nuevos movimientos sociales y la subjetividad

No es posible entender el auge de los movimientos actuales en diferentes partes del mundo únicamente por la falta de legitimidad del sistema democrático representativo o por los excesos del neoliberalismo, aunque es bien cierto que en algunos países estas dos cuestiones están más presentes que en otros. En el caso de Argelia, en efecto, la población de jóvenes, que no vivieron la Revolución de independencia de Francia y no creen en su mito, se levantaron en contra de los viejos dirigentes surgidos de ella y de la esclerosis del régimen político. Aunque en El Líbano todo comenzó por la intención del gobierno de tasar los mensajes de *WhatsApp*, muy pronto se reorientó en contra de la corrupción e incapacidad del gobierno, obligándolo a dimitir. En Hong Kong, la lucha principal es la de preservar las libertades civiles y las limitadas libertades políticas que aún existen en esa provincia², ante la injerencia cada vez mayor del partido comunista que gobierna China continental.

En otros países, los movimientos se orientan más hacia los excesos del neoliberalismo. En varias ciudades de Brasil, en 2013, las protestas iniciaron con el aumento del pasaje del metro en Rio de Janeiro, lideradas por el movimiento **Passe Livre**, para luego dirigirse contra las carencias de los servicios públicos al tiempo que se gastaban enormes recursos para preparar la Copa Mundial y las Olimpiadas. Desde octubre de 2019, en Chile se han estado manifestando decenas de miles de jóvenes contra la desigualdad generada por el liberalismo, frente a la privatización de la educación y de las pensiones (las **AFP**).

2. Estas libertades están garantizadas por el régimen *un país, dos sistemas*, que desaparecerá cuando el gobierno de Beijing tome el control de la excolonia en 2047.

La capital, Santiago, está llena de pintas en las cuales se lee **No + AFP, Saquéame por favor, El pueblo no es mercancía, resiste!** Ante la violenta reacción de las fuerzas policíacas (los carabineros) y, durante un poco más de una semana del propio ejército, muchos de los tags se referían a las 27 muertes, cientos de cegados por los balines de goma y plomo y los miles de heridos: **Estado asesino, El gobierno nos mata, En qué momento volvimos al 73.** Muy pronto, la demanda fundamental devino política, se comenzó a exigir el cambio de la constitución que data de la época de la dictadura de Pinochet y que ningún gobierno de la transición modificó de manera significativa. En Colombia, a fines de 2019, los estudiantes exigieron un aumento de los recursos para la educación y protestaron en contra del proyecto fiscal del gobierno. En Francia, al igual que en el Ecuador, las manifestaciones comenzaron en respuesta al aumento del precio de la gasolina.

No obstante, estas acciones van más allá de la falta de legitimidad de un gobierno o la desigualdad económica. La característica fundamental de estos movimientos, que los hace ser **nuevos**, es, como lo escribió Touraine hace más de 20 años, que no se definen por un solo rasgo, sino que incluyen varias dimensiones: económica, social, política y, en ocasiones, cultural; si incluyen las cuatro, Touraine los define como *movimientos sociales totales*. Pero también son nuevos en la medida en que centran sus demandas en la aspiración, expresada de múltiples maneras, de **devenir sujetos**. En un mundo en el que los individuos están, por una parte, cada vez más aislados y, por la otra, crecientemente dominados por fuerzas que escapan de su control, el individualismo ha dejado de ser satisfactorio para un creciente número de personas que desean devenir actores de sus propias vidas: sujetos (Touraine y Khosrokhavar, 2000).

En la actualidad, la cuestión social, tal y como la definen Martuccelli y Wieviorka, ya no se ubica primordialmente en la relación capital-trabajo, sino en las *dominaciones ordinarias*, que se expresan de distintas maneras: como **exclusión, alienación y depresión**; estrechamente asociadas al **individualismo** contemporáneo. En el centro de la problemática social actual se sitúa, al individuo en su lucha por devenir sujeto. Los que protestan pretenden rebasar su situación de exclusión y alienación para devenir actores de sus propias vidas (Martuccelli, 2001 en Wieviorka, 2003: 33-35). El ejemplo más dramático, en el caso mexicano, es el de las víctimas de la violencia extrema, que luchan para pasar de la condición de **víctima**, de la alienación o depresión a la cual la violencia extrema las reduce, al despojarlos de toda relación social, en tanto *el individuo no es dueño de su destino y ni siquiera posee las categorías que podrían permitirle pensar su experiencia* (Martuccelli, 2001 en Wieviorka, 2003: 34). En este caso, los individuos son doblemente victimizados y, por tanto, *alienados*: una vez, porque han sufrido en carne propia la violencia que les ha privado de un miembro de su familia (ya sea asesinado o, aún peor, desaparecido) y en segundo lugar, por su entorno, en la medida en que tanto en el discurso oficial de la guerra contra el crimen organizado como de la reacción defensiva de la misma sociedad, la víctima es considerada como culpable, de alguna manera involucrada en actividades ilegales. Tanto en los textos de Sicilia, como en la mayoría de las expresiones de las víctimas, se habla de cómo el movimiento les ha permitido salir de la soledad de su sufrimiento para compartirlo y consolarse mutuamente; que, en lugar de quedarse a llorar en sus casas, el asistir a reuniones y a manifestaciones les ha devuelto un sentido a sus vidas. Muchos miembros del movimiento han dejado su trabajo y familia de lado, gastan sus pocos ingresos para asistir, a veces desde muy lejos, a las reuniones semanales y participar en las caravanas.³

Pascale Naveau halló en su tesis que las víctimas de la violencia que deciden integrarse a un movimiento como el de **MPJD** o migrar de Centroamérica a los Estados Unidos, pasan de ser víctimas a actores, mediante un proceso de subjetivación que los hace tran-

3. Con base en las entrevistas hechas por Ivonne G. Villalón (ITAM) y Pascale Naveau (Universidad Católica de Lovaina).

sitar de ser individuos que han sufrido la violencia extrema, a sujetos y actores de sus propias vidas. Con base en tres investigaciones de terreno, la autora llega a la conclusión de que *son sujetos que intentan vivir una experiencia diferente movilizándolo su experiencia de víctima [...] actores de su propia vida y, en ciertos casos, actores sociales, políticos y culturales* (Naveau, 2019: 13). En el caso de la depresión, *la persona singular es la única responsable de su existencia, de sus fracasos* (Wieviorka, 2003: 34), hasta que decide actuar sobre lo que determina, de manera heterónoma, su existencia. Una pinta en Santiago de Chile es bien clara al respecto: **La rabia me quitó la depre.**

La subjetivación no es un proceso que pueda definirse de una manera individualista/utilitaria, sino que devenir sujeto exige el derecho y el ejercicio de la subjetividad humana, como lo demuestra el énfasis de los movimientos actuales en los derechos subjetivos; humanos, sociales, políticos y culturales. Frente a una sociología del individualismo que ha defendido la idea de que la característica del mundo moderno es el distanciamiento de los metadiscursos, ya sean religiosos o políticos, y que mantiene cada vez más al individuo encerrado en sus intereses particulares, distanciándolo de lo común, de lo público, de lo social, tanto el pensamiento de Amartya Sen como la sociología de Alain Touraine proponen lo contrario. Defienden lo que, en palabras de Amartya Sen, distingue a un *sujeto* de un *individuo*. Sen (2003) propone que si bien el individuo (utilitario) se define por el deseo de libertad negativa, es decir perseguir sus intereses sin tener que involucrarse en el interés público (como pensó Constant cuando caracterizó la libertad de los modernos en contraste con la libertad de los antiguos), el sujeto se define con base en la *libertad positiva*, que tiene un contenido: básicamente el derecho a ejercer efectivamente la libertad con total autonomía. Contrariamente a la *libertad negativa*, que se plantea contra el Estado, la posibilidad de ejercer efectivamente la libertad individual (o personal) requiere garantías públicas; ya sea respaldadas por asociaciones u organizaciones sociales o por el propio Estado. Sen no profundiza en la forma en la que la esfera pública garantiza la posibilidad de que las personas ejerzan efectivamente su libertad, esto es lo que constituye el principal interés de la sociología del sujeto de Touraine, quien propone que la gran transformación social de la era contemporánea es la aparición de movimientos colectivos guiados por el proyecto de garantizar la plena autonomía del sujeto, que se define por la posibilidad de que los individuos decidan sobre los temas fundamentales que definen su subjetividad: la procreación, la vida en pareja, la relación con los hijos, la sexualidad, la enfermedad y la muerte (Touraine, 2013).

La lucha por devenir sujeto genera nuevos movimientos que tienen como fundamento *el proceso de autoafirmación subjetiva que los individuos persiguen para afirmar su libertad individual de las fuerzas globales que impactan sus vidas* (Farro, 2014: 16). Devenir sujeto puede expresarse de maneras distintas y por lo tanto dar lugar a distintas formas colectivas que pueden expresar alguna de las dominaciones ordinarias. Han aparecido nuevos actores colectivos que van desde el feminismo, el ecologismo, hasta los movimientos indígenas, los movimientos LGTBQ, y más recientemente los de jóvenes. Entendiblemente, uno de los propósitos fundamentales que persiguen es que el individuo *se transforme a sí mismo*. Detrás, está la idea de que para cambiar al mundo ya no se pretende tomar el poder para tratar de hacerlo **desde arriba**, sino cambiar al mundo **desde abajo**, cambiándose uno mismo: la posición de cada uno de nosotros hacia la sociedad, la pobreza, la intolerancia y el consumo. Los movimientos actuales rechazan el poder del dinero, de las finanzas, proponen otro tipo de desarrollo económico, otro tipo de consumo, otras formas de vida. Por tanto, están muy cerca de la persona, implican y requieren un compromiso personal. En este sentido son subjetivos y al mismo tiempo culturales. El movimiento **Pase Libre** menciona que su activismo deja de ser una acción de reclamo puramente

4. Estos movimientos van a tener como consecuencia que los actores sociales centrales anteriores a globalización pierdan centralidad: en América latina, al movimiento obrero, así como otros actores sociopolíticos como los campesinos y los habitantes urbanos pobres, entre otros. No obstante, esta decadencia del movimiento obrero en la sociedad postindustrial no significa que vaya a aparecer un movimiento que ocupe el lugar central en la nueva sociedad. De hecho, vemos que en la sociedad de la comunicación son varios los movimientos que ocupan el lugar central. (Wieviorka, 2003: 31).

reivindicativa de unos pocos momentos en la vida de uno (votar, ir a una manifestación, una marcha), para convertirse en **un modo de vida**, un estilo de vida, algo estrictamente personal (Viana, 2013: 99).⁴

Estas maneras de concebir el cambio social, transformando *el mundo sin tomar el poder* pretende *que sea la gente la que haga los cambios y no tanto los políticos* (activista mexicano citado por Pleyers, 2018: 71). Otro activista dice que

a pesar de que hubo una pronta y repentina desmovilización [del movimiento #YoSoy132] sabía México que contaba con un grupo de jóvenes conscientes que no volverían a ser insensibles con las causas justas de la patria, y que usando el poder mediático y una opinión que lograba llegar con facilidad la juventud, seguirían despertando conciencias y asumiendo un compromiso eterno por conseguir un país más justo. (Gaitán, 2013: 177)

Una pinta en Santiago de Chile en noviembre de 2019 decía: **Ojo X Ojo. No volveremos a ser los mismos.**

Es patente que el cambio de sí mismo no se lleva a cabo en el retraimiento individual, sino en la acción colectiva, y que el *cambio social se concibe como un proceso* colectivo. La autoafirmación de los individuos, según Farro, se produce mediante *movimientos colectivos que enfrentan la fragmentación social mediante la construcción de nuevas relaciones intersubjetivas [...] en experimentos de participación activa* (Farro, 2014: 16). *No podemos cambiar al mundo si no empezamos por cambiarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestros vecinos, a ver lo que está pasando en nuestro barrio* (entrevista citada por Pleyers, 2018: 71). De esta manera, el cambio social se va construyendo a partir de lo local, *por la multiplicación de espacios alternativos que tienen, cada uno, su especificidad* (Pleyers, 2018: 72). Cheran es un buen ejemplo de esta cuestión, al igual que las comunidades zapatistas donde se han logrado establecer zonas en las que se vive de otra manera, prefigurando un mundo sin el dominio del narco, de manera ecológica, de respeto a la naturaleza, con base en las formas de vida de las culturas originarias. De esta misma manera, Pascale Naveau, en su ya citado estudio sobre las víctimas de la violencia extrema, escribe que las víctimas han logrado convertirse en actores sociales para construir *pequeñas paces, pequeños territorios donde la paz es posible* (Naveau, 2019).

Como escribe Pleyers, los activistas construyen un nuevo mundo en el ámbito local,

por un lado, quieren defender la autonomía de su *experiencia vivida* de cara a la dominación de todos los aspectos de la vida por parte de industrias culturales globales y poderes económicos [...] por otro lado, su compromiso político es *vivido* más que calculado [...] entienden “construyendo otro mundo” desde el punto de partida de sus prácticas alternativas concretas y experiencias: consumo alternativo, organización horizontal y participativa (Pleyers, 2010: 38).

5. Bree Busk, anarquista estadounidense que vive en Santiago, Chile. Miembro de *Black Rose Anarchist Federation*.

En el caso de las manifestaciones chilenas, un participante⁵ plantea que

el tiempo fuera del trabajo y la escuela se convirtió en tiempo para construir y reforzar los lazos sociales [...] La falta de tránsito confiable significaba que muchos se veían obligados a caminar, lo que aumentaba la probabilidad de encontrarse con amigos y vecinos en el camino. La popularidad y la frecuencia de las movilizaciones también crearon un espacio para estos encuentros casuales [...] lejos de los vecindarios de élite donde la clase dominante vive una vida aparte, los vecinos continúan reuniéndose un par de veces a la semana para tomar té, compartir algunos paquetes de galletas y discutir el futuro del país.⁶

6. <https://www.aporrea.org/internacionales/a285334.html>

Un joven de Hong Kong dice algo similar con respecto a su lucha:

Quién sabe si llegará la democracia, quizá la democracia en Hong Kong depende de la democracia en China. Lo que nosotros estamos haciendo es actuar como si la democracia fuera posible. Este tipo de “hacer creer” que lo que los niños saben hacer muy bien, toman arena y hacen un castillo o una casa de sueños; eso es lo que estamos haciendo nosotros.⁷

7. Entrevista en <https://www.youtube.com/watch?v=SeALYHuKV30>

El movimiento de los *gilets jaunes* también es ilustrativo. Inicia con la protesta de los habitantes de un gran número de pequeñas ciudades de Francia, movilizados en contra del alza de la gasolina, espontáneamente, respondiendo al llamado de videos que se volvieron virales. El aumento los afectaba muy directamente, ya que los centros de esas ciudades se han estado vaciando de comercios y servicios del Estado. El origen de esta desertificación de los centros ha sido consecuencia del retraimiento del gobierno, en el contexto de sus políticas de austeridad, así como la instalación de centros comerciales a las orillas de los pueblos que concentran comercios, cines, supermercados, etc. Esto obliga a los habitantes a desplazarse en auto para llegar al trabajo, al correo, llevar a los hijos a la escuela, ir al médico, al cine, a un restaurante, a un café, de compras, etc. Muy pronto la protesta en contra del alza de la gasolina se convirtió en una reivindicación del aumento de gastos por parte del gobierno y, luego de las primeras manifestaciones en las cuales hubo actos de degradación de mobiliario urbano, de comercios y de *tags* en monumentos públicos, ante los cuales la policía reacciono violentamente y arrestando decenas de personas, la reivindicación se volvió política y se comenzó a exigir la renuncia del presidente de la República. Pronto, a esta demanda se le añadió la de la democracia participativa o directa, el llamado referéndum de iniciativa colectiva, inspirado en lo que existe en Suiza, donde mediante recolección de firmas, la población puede exigir que se proponga cierto tipo de medidas o leyes a votación popular (Noirel, 2019, Jeanpierre, 2019).

Pero lo más significativo para nosotros es que la forma de protestar y hacer conocer su movimiento fue mediante la ocupación de las glorietas en las cuales convergían las carreteras locales. Ahí se reunían personas que, antes del movimiento, apenas se conocían y que estaban aisladas. Los desempleados, jubilados, madres solteras y familias que tomaron las glorietas y construyeron albergues donde se reunían para comer, platicar, jugar. Edificaron una nueva sociabilidad, lo que a su vez permitió que ese movimiento perdurara por más de un año y que se radicalizara. Entre semana vigilaban las glorietas, paraban los autos para explicarles su acción y los fines de semana viajaban a las grandes ciudades a manifestarse. Esto hasta que el gobierno se dio cuenta del peligro para su poder que significaba este tipo de organización y envió a la fuerza pública para retomar las glorietas y expulsar a los *gilets jaunes*. (Noirel, 2019, Jeanpierre, 2019).

Últimamente, ha emergido otro movimiento, aún más extendido a nivel internacional, que está ocupando un lugar central. Es un nuevo movimiento feminista que, a la diferencia de su antecedente de los años 50/70, no está exigiendo más puestos políticos, el mismo pago para las mujeres que para los hombres, o la representación paritaria, sino que a partir del movimiento **#MeToo** está demandando algo más fundamental. Su rebelión es contra del patriarcado, de la dominación masculina que ha derivado en el acoso sexual, la violación y el feminicidio. También, a diferencia del antiguo feminismo, el movimiento actual lleva a cabo acciones más firmes, como “taguear” monumentos para hacer más visibles sus demandas, destruir esculturas de hombres en lugares (como el Paseo de la Reforma; donde no hay prácticamente ninguna escultura de mujeres) o en ocasiones destruir mobiliario urbano como respuesta a la violencia de la policía. En el movimiento chileno los carabineros han violado a varias mujeres, o han cometido abusos sexuales al arrestarlas. En ese contexto surgió el video **Un violador en tu camino** que

se volvió viral y que ha despertado en muchas partes del mundo acciones similares a las que se vienen dando en Chile y que se insertan en un movimiento global de rechazo al acoso sexual y al feminicidio que sufren diariamente las mujeres.

Nuevos movimientos sociales y tiempo

En esta última parte del artículo quisiera tratar un tema poco abordado en la literatura, pero que considero crucial para entender los nuevos movimientos sociales. En la medida en que la cuestión subjetiva es central en los movimientos actuales, es evidente que la cuestión del tiempo es fundamental, como lo reconoce espontáneamente un militante del **#YoSoy132**: *los sujetos estamos hechos de tiempo; de memoria y olvido para ser específicos. Es así que en la palabra nos reelegimos, nos proponemos un lugar en el mundo, reorganizamos nuestra historia y nos damos un sentido* (Primavera, 2013: 23).

La manera en la que se ha modificado la temporalidad en la actualidad, tiene efectos sobre la subjetividad y sobre la relación entre ésta y los movimientos sociales. En la actualidad, tanto el *tiempo social* (Rosa, 2014), como el *tiempo geológico* (determinado por el calentamiento global) amenazan la temporalidad subjetiva.

Bergson primero, y luego Heidegger, consideran que los seres humanos tienen primordialmente una relación **existencial** con tiempo, que incluye a la **epistemológica** y **perceptiva**, pero que no se agota en ella. El tiempo es la esencia misma del ser humano: no es posible concebir al ser humano más que existiendo en el tiempo. El tiempo es una experiencia, más que una estructura de nuestro entendimiento (Kant), es un *vécu*, una realidad en la que vivimos. Y vivimos el tiempo como un flujo en el cual mora el hombre, y que Bergson llamó la *durée*, la **temporalidad**. Mientras que Bergson (1960) pensaba que el vivir en la *durée*, en el flujo temporal, significaba que la temporalidad primordial del ser humano era el presente, Heidegger (1962) modifica esta visión al considerar que vivir en el presente es vivir de manera no auténtica, que la única manera auténtica es proyectarse al futuro. El vivir en el presente es una forma de ignorar el fin último e inevitable del hombre: la muerte. Al aceptar la muerte, por medio de la preocupación/ocupación,⁸ el ser humano se preocupa/ocupa del futuro, es capaz de convertirse en un ser de futuro, para orientar su vida hacia él, proyectándose hacia el futuro.

Si cada uno de nosotros vive su relación con el tiempo como un flujo continuo, sin divisiones, y límites, el tiempo social tiene otras características. El tiempo social, como toda realidad social es construida de manera intersubjetiva, como lo escribieron tanto Schütz, como Berger y Luckmann. A diferencia de la realidad natural que los seres humanos encuentran creada (aunque la modifiquen también de manera cada vez más radical), la realidad social es construida por los seres humanos de manera intersubjetiva. Y esto incluye el tiempo y el espacio; existe un tiempo y un espacio sociales construidos. Elias escribió que cada sociedad construye su temporalidad. Los seres humanos inventan e imponen un calendario, fiestas religiosas y cívicas, además de que definen la edad a la cual se puede casar, votar, comenzar a trabajar, ir a la escuela, jubilarse, etc.

Según Elias (1996),

Aquello que llamamos tiempo significa, entonces, en primer lugar un marco de referencia que un grupo humano -y luego la humanidad en su totalidad- se sirven para erigir en el medio de una serie continua de cambios, límites reconocidos por el grupo. (p. 91)

Berger y Luckmann mencionan que la interacción primordial entre la temporalidad subjetiva y el tiempo social (además del tiempo orgánico/natural de cada ser vivo) es **restrictiva**. Los distintos tipos de temporalidades, la *natural*, la *subjetiva* y la *social* nunca

8. En alemán, la palabra *sorge*, que utiliza Heidegger incluye ambas acepciones, preocupación y ocupación; igual sucede en francés, con la palabra *souci*: en español existen dos palabras.

pueden estar totalmente sincronizadas, tal y como lo indica la experiencia de **la espera**. *Tanto mi propio organismo, como la sociedad en la que vivo, me imponen a mi, y a mi tiempo interno, ciertas secuencias de eventos que involucran la espera* (Berger y Luckmann, 1967: 27). Presuponen la idea heideggeriana de que el hombre es un ser que se proyecta al futuro, para constatar que, para llevar a cabo cualquier proyecto, es necesario esperar a que se den ciertas circunstancias tanto naturales, como sociales. Por ejemplo, para participar en una carrera prepararme físicamente o, si estoy lastimado, tengo que esperar a curarme. Para ejercer la medicina, tengo que ir a la universidad y graduarme. Para ir de viaje tengo que esperar a tener vacaciones, ahorrar lo suficiente, etc. Esto último, el hecho de que la temporalidad subjetiva choque con la temporalidad social, el que ésta última obligue al ser humano a esperar, a retener su acción, a retrasar sus proyectos, no significa en absoluto que el hombre deje de actuar, de proyectarse al futuro, sino todo lo contrario: la conciencia de la muerte y la aceptación de nuestra mortalidad nos lleva a proyectarnos al futuro; de la misma manera, el hecho de que la naturaleza y la sociedad nos obliguen a esperar no implica que no actuemos, por el contrario, entraña que estemos continuamente definiendo una acción futura. Finalmente, Schütz define la estructura del proyecto: hay dos tipos de acción, la **interna**, en la que el sujeto imagina la solución, por ejemplo, a un problema matemático, y la **externa**, en la cual el sujeto tiene que ajustarse a las condiciones del mundo. Si bien algunas acciones interiorizadas pueden no ser intencionales, toda acción exteriorizada lo es (Schütz, 1998: 53-54). De esta manera, la estructura temporal del proyecto es tal que debo tener

una visión del estado de cosas a ejecutar por mi acción futura [...] tengo que tener idea de la estructura que quiero erigir antes de que pueda definir los proyectos [...] Para proyectar mi acción futura, tengo que ubicarme imaginariamente en un futuro en el cual esta acción ya habrá sido llevada a cabo, en el cual el acto ya habrá sido culminado [...] De esta manera, lo que es anticipado en el proyecto no es la acción futura, sino el acto futuro (Schütz, 1998: 55).

Esto significa que

[la] proyección se refiere siempre al stock de conocimiento disponible para el actor en el momento de proyectar, e implica su horizonte de anticipaciones vacías, la suposición de que el acto que se llevará al cabo seguirá un camino típicamente similar al de todos los actos pasados típicamente similares conocidos por él al momento de la proyección (Schütz, 1998: 59).

Hay dos experiencias a las cuales el actor se refiere al proyectar su acción y el acto futuro (realización del proyecto). La primera se refiere a las **experiencias del actor** y de sus opiniones, creencias, suposiciones, que se aplican al mundo físico y social, que son tomadas como dadas e indudables al momento de la proyección y que son incuestionables *hasta nuevo aviso* (Schütz, 1998: 61). *La segunda serie de nuestras experiencias que basan la factibilidad de las acciones futuras consiste en las experiencias determinadas biográficamente en el momento de toda proyección. Algunas cosas están bajo mi control, otras escapan de mi control* (Schütz, 1998: 64). El que sean una u otra depende de *la sedimentación de todas las experiencias subjetivas anteriores* (Schütz, 1998: 65). De manera que cuando proyectamos nuestras acciones, no actuamos en la oscuridad, esperamos el resultado con todo conocimiento de causa, tratando de ajustar nuestros proyectos con la realidad, nuestra temporalidad con el tiempo natural y social.

Ahora bien, el tiempo en el mundo contemporáneo está sufriendo transformaciones muy significativas, que afectan su relación con la *temporalidad subjetiva*. En primer lugar, **el espectacular progreso de las comunicaciones**, tanto las físicas como las electrónicas, han acortado radicalmente el tiempo de transporte y de comunicación. Es posible re-

cibir noticias instantáneamente de lo que sucede en cualquier parte del planeta, por lo que también el espacio se está achicando y es posible viajar (real o virtualmente) grandes distancias en poco tiempo. Según Rosa, esta aceleración técnica lleva a que *el tiempo es crecientemente concebido como un elemento de compresión o incluso de aniquilación del espacio* (Rosa, 2014: 19).

En el mundo económico y social, el tiempo también se ha acelerado considerablemente. Por una parte, la financiarización de la economía, acompañada de la utilización de algoritmos que responden en nanosegundos, pueden rápidamente modificar el rumbo de una economía, lo que puede tener efectos devastadores sobre la economía real y sobre la vida de los ciudadanos de un país o del mundo, como lo vimos en la crisis global de 2008/2009. Por otra parte, los cambios tecnológicos acelerados hacen que la economía real que se innove cada vez más rápidamente, que las empresas surjan y quiebren precipitadamente y que las capacidades profesionales, obreras, caduquen varias veces en el lapso de una vida humana. También se ha acelerado **la innovación social y cultural**, lo que, según Rosa, lleva a *la rápida transformación de los modos de asociación social, las formas de práctica y de sustancia del conocimiento, del saber práctico [...] es decir la aceleración del cambio social* (2014: 20). En todos los niveles (económico, social y cultural) lo que antes era válido deja de serlo muy rápidamente. El lapso en el cual lo que conocemos y se vuelve válido se acorta continuamente, tanto en lo que se refiere a nuestras capacidades laborales como nuestras normas sociales y valores culturales. *La aceleración social se define por un aumento de la velocidad del declive de la fiabilidad de las experiencias y de las expectativas* (Rosa, 2014: 22) lo que constituye las bases de lo que nos permite proyectarnos al futuro. Finalmente, hay también una aceleración del ritmo de vida, que es el *aumento del número de episodios de acción o de experiencia por unidad de tiempo*, que nos lleva a sentir que no tenemos nunca el tiempo suficiente (Rosa, 2014: 25).

Pero, con toda seguridad, el cambio más radical es que, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos conscientes del tiempo geológico y cómo afecta nuestras vidas presentes y proyectos futuros. El tiempo geológico, imperceptible en el pasado, se ha vuelto un asunto cotidiano: en las noticias, en las conversaciones, en los trabajos científicos, pero sobretudo, en las vidas de los jóvenes. La crisis ecológica que vivimos en la actualidad nos ofrece una percepción de un tiempo que ninguna otra generación de seres humanos ha tenido en el pasado: estar viviendo el fin de la humanidad tal como la conocemos. Estamos conscientes de estar viviendo el fin de un ciclo que comenzó hace millones de años, que puede no tener futuro. Aunque esto existía en forma de distopía, en la actualidad es una realidad.

Todo tiene como consecuencia que las nuevas generaciones vivan el tiempo objetivo menos como espera que como amenaza, en tanto que se mueven en un mundo cada vez más incierto. Si los proyectos que los seres humanos imaginan hacia el futuro están basados en la idea de que el mundo seguirá tal y como ha sido y sobre las experiencias de cada uno, y si lo que prevalece es que no poder estar seguros de que el mundo que se conoce seguirá así en el futuro y si las experiencias son de cambios constantes, los individuos no pueden menos que percibir su propio futuro como incierto. Aunque los movimientos sociales que vemos surgir por doquier tengan sus especificidades en los países particulares, su fuente se encuentra en este choque entre la temporalidad y los distintos tiempos objetivos, que despierta frustración y ansiedad.

La sensación que tienen muchos jóvenes de que el futuro está cerrado y que el tiempo ya no alcanza, que se les escapa entre los dedos, está bien ejemplificada en Greta Thunberg, a quien Eliane Brum, considera como una representante de la primera generación sin esperanza.⁹ Greta, organizó desde hace un año una huelga escolar, con el argumento

9. https://elpais.com/internacional/2019/03/01/america/1551470611_066535.html

de que para que vale la pena prepararse en la escuela si no hay futuro, de que *se acaba el tiempo*.

Nuestra casa está en llamas. No quiero vuestra esperanza, no quiero que tengáis esperanza. Quiero que entréis en pánico, quiero que sintáis el miedo que siento todos los días. Quiero que actuéis, que actuéis como si vuestra casa estuviera en llamas, porque lo está.

Esta chica es la imagen de una juventud que comparte muchas de sus inquietudes. Una psicóloga francesa ha visto aumentar considerablemente los casos de jóvenes que acuden a ella para expresar una profunda inquietud y angustia acerca del futuro. Otro psicólogo francés que dirige un programa que estudia la individualidad entre los jóvenes, escribe que *el clima suscita un temor inédito: es el primer asunto que adopta una dimensión planetaria*.¹⁰

10. https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2019/06/21/le-climat-suscite-une-peur-inedite-car-elle-est-planetaire_5479806_4497916.html

En las manifestaciones y en las huelgas escolares se han visto pancartas que muestran esta angustia del futuro: ***Más tarde, quiero estar vivo; Haré mis tareas cuando ustedes hagan las suyas***. En Santiago de Chile se han visto escritos en las paredes que van en el mismo sentido: ***Por un futuro sin miedo, Gritamos porque tenemos la esperanza de que podría ser de otra manera, La normalidad es el problema, No era paz, era silencio***.

En el pasado, los movimientos sociales estaban basados en la temporalidad cristiana: luchaban por un futuro mejor, basados en un relato en el cual una utopía terrenal era posible mediante la revolución. Mientras que los movimientos sociales del pasado estaban basados en la idea del progreso, de la mejoría, de un futuro mejor (de la clase obrera, de la humanidad), en la actualidad emergen de la desesperanza, de la inquietud por el futuro. Paul Mutuku, un joven activista keniano, se ubica en esta perspectiva al decir que *Los jóvenes son la única generación que ha crecido en esta era del cambio climático. No han visto lo mejor de la naturaleza que otras generaciones sí han tenido el privilegio de ver*.¹¹

11. <https://www.20minutos.es/noticia/4029723/0/cinco-jovenes-mundo-luchan-cambio-climatico/>

A partir del movimiento ecologista de los años 60/70, el relato se transformó en una temporalidad más pesimista. No obstante, los movimientos actuales son de nuevo distintos. La temporalidad de un no futuro genera tanto un movimiento como el de Greta Thurnberg, como el de los jóvenes de Hong Kong, que se enfrentan al riesgo que significa perder las libertades que tienen, y también el movimiento de los jóvenes chilenos de fines del año 2019 que

se sienten incómodos con la normalidad tal como se conoce, pues esta normalidad es la que ha colaborado en la incertidumbre de las personas y ha corroído lentamente sus posibilidades de ascenso y protección social [...] el mercado chileno creó anhelos de consumo inalcanzables. Creó gradual y constantemente una tensión entre el anhelo de consumo y la realidad de su ingreso económico.¹²

12. <https://ciperchile.cl/2019/11/10/sobre-la-violenta-normalidad-a-la-que-los-chilenos-no-quieren-volver/>

En este caso la cuestión medio ambiental también está presente *a pesar de que los problemas medioambientales no siempre encabezan la lista de preocupaciones de las organizaciones y actores sociales*. El tipo de capitalismo extractivo que se da en Chile, de *explotación incesante de recursos naturales de baja elaboración y que se destinan a la exportación a los mercados internacionales [...] ha generado altos costos medioambientales*.¹³

13. <http://cl.boell.org/es/2019/11/28/el-estallido-social-en-chile-y-sus-efectos-en-la-agenda-climatica-y-la-cop25>

Los jóvenes de Hong Kong viven la angustia de perder la libertad en la que han existido toda su vida y que cada día que pasa se diluye un poco más ante la amenaza del gobierno de China continental de terminar con el régimen *un país y dos sistemas* para implantar un sistema único. Un militante de Hong Kong, Joey Siu, afirma que *la situación de Hong Kong está cambiando a la velocidad de la luz cada día, no vemos nuestro futuro, no sabemos que pasará el día siguiente [...] tenemos un plan, necesitamos repensar sobre el futuro de HK*.¹⁴ Otro joven que pasó de ser apolítico a la delantera de los choques contra la policía dice

14. <https://www.youtube.com/watch?v=V9nNeOoyWYk>

Una vez que entiendes cómo funciona la política, puedes ver como ha cambiado Hong Kong desde la retrocesión; la manera en la que nuestras vidas se han venido restringiendo gradualmente, como nos hemos vuelto cada vez más oprimidos, como las vidas de la gente se han vuelto peores y peores [...] hay menos y menos esperanza para Hong Kong ahora. No importa lo que hagamos. No hay mucha esperanza para el futuro, lo que significa que no hay mucha esperanza para nosotros tampoco. Es por ello que tenemos que salir para resistir.¹⁵

15. <https://www.greenqueen.com.hk/lance-lau-interview-hong-kongs-student-climate-activist-i-want-my-future/>

Otro activista de Hong Kong llega a la misma conclusión : *¿Qué me lleva a levantarme y hacer algo? No estoy seguro. Puede ser que porque ahora es un mal futuro, o ningún futuro [...] quiero mi futuro. Esta es la razón por la cual lo estoy haciendo.*¹⁵

En el caso de los movimientos feministas actuales, el choque entre la subjetividad y el contexto nacional y mundial en el que viven es aún más fuerte, y su futuro está más cerrado, en la medida en que se enfrentan a un contexto social que las acecha cotidianamente. La amenaza se extiende desde la puerta de su casa o escuela hasta el fin de la humanidad por el calentamiento global.

En los casos que hemos citado encontramos la desesperanza de los jóvenes, una actitud que en vez de derrotarlos, en vez de conducirlos a la inacción, los lanza a la acción. Un *tag* chileno lo confirma: **La rabia me quitó la depre**. Esta es la ley de la vida, la que a pesar de que todos nos sabemos *seres-para-la-muerte*, seres destinados a desaparecer, nos proyectamos hacia el futuro tratando de construirlo.

Conclusiones

Todos estos movimientos no solo están implantando un tipo de democracia participativa desde la subjetividad, muchos de ellos están aportando, además, soluciones a los grandes problemas contemporáneos que están en la raíz de la crisis de la democracia representativa, de la crisis societal y ecológica, sólo que lo hacen a nivel local. De hecho, es posible poner en tela de juicio que lo logren efectivamente. Pleyers (2019) menciona varios de los obstáculos que enfrentan este tipo de movimientos:

- ◆ su desestructuración puede derivar en la desorganización
- ◆ el carisma de algunos participantes puede hacer que ellos dominen las decisiones
- ◆ la subjetividad puede llevar a los individuos a descuidar las acciones sociales y conducir al repliegue de las comunidades sobre sí mismas
- ◆ la lejanía del mundo político puede llevar a la despolitización, al alejamiento del sistema político, lo que implica el riesgo de que el poder político siga en manos de las fuerzas del mercado y de las élites políticas tradicionales.

Otra cuestión problemática es su heterogeneidad, que se debe en parte al hecho de que se encuentran en el mundo virtual y no están definidos por una identidad determinada, (una categoría social, una localidad, una empresa, etc.) sino que el llamado a la acción atrae a muchas personas con diferentes identidades, formas de pensar, razones para manifestarse, etc. Este es uno de los valores positivos de estos movimientos que, sin embargo, pueden volverse en contra de ellos, ya que algunos de estos grupos pueden ser incompatibles y provocar rupturas. El movimiento juvenil mexicano se dividió entre los radicales y los moderados, los chalecos amarillos entre izquierda y derecha, entre los que aceptaban y los que rechazaban algunos actos violentos. El movimiento también puede debilitarse si el gobierno accede a las demandas de un sector y rechaza el de otros. No todos están de acuerdo con los mismos proyectos y demandas, y se van acumulando las disputas.

Pero quizá la problemática mayor de estos movimientos es que

los conflictos entre los poderes dominantes y los movimientos colectivos no está integrado en instituciones. El sistema político, con sus diversos conjuntos de intereses y sus políticas no es el blanco de las demandas de estas iniciativas colectivas. Estos movimientos demandan, más bien, la redemocratización de las instituciones políticas (Farro, 2014: 16).

Estas iniciativas desafían las fuerzas dominantes tanto en espacios físicos e infraestructuras comunicativas. No obstante, en ningún caso, logran confrontar las fuerzas dominantes en un contexto local, nacional, regional o global. (Farro, 2014: 27)

Ninguno de estos movimientos traduce su oposición a los poderes sistémicos en un conflicto en contextos institucionales capaces de crear y forzar decisiones políticas pertinentes para controlar las tendencias de desarrollo en el escenario global. No hay por tanto integración, sino más bien separación, entre esos poderes y movimientos (Farro, 2014: 31).

Esto quiere decir que los actores que desafían al orden dominante, nacional y global, nunca se encuentran: los oponentes no están frente a frente, los opositores están en niveles distintos, por lo que la capacidad de modificar el estado de la dominación global de las fuerzas económicas y comunicacionales dominantes es mínima. Para algunos autores, estas formas de organización alternativa no son más que *la fuerza del débil*.

No obstante, estos movimientos son los únicos que están aportando soluciones, aunque sean locales, a los grandes problemas que están en la raíz de las diversas crisis del mundo contemporáneo. Se requeriría encontrar la forma de construir las instituciones adecuadas a estas demandas a un nivel más elevado, es decir resolver la antinomia postulada por Rousseau entre democracia (participativa) y sociedades numerosas y complejas.

Referencias bibliográficas

- Berger, P. L. y Luckmann, T. (1967). *The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge*. Nueva York: Anchor Books - Doubleday and Co.
- Bergson, H. (1960). *Time and Free Will*. Nueva York - Evanston: Harper and Row Publishers.
- Boyer, R. (2013). "Les crises financières comme conflit de temporalités", *Vingtième siècle. Revue d'Histoire*, N° 117.
- Coppedge, M. (2002). "Venezuela: popular sovereignty versus liberal democracy", *Working Paper*, N° 294, Universidad de Notre Dame.
- Elias, N. (1996). *Du Temps*. París: Fayard.
- Farro, A. L. (2014). "A New Era for Collective Movements: The Subjectivization of Collective Action", en Farro, A. L. y Lustiger-Thaler, H. (ed.) *Reimagining Social Movements. From Collectives to Individuals*. Surrey: Ashgate.
- Graeber, D. (2012). "Faire l'impossible. À propos de la décision au consensus", *Contre-temps* (ed.) *D'Athènes à Wall Street, #indignés! Échos d'une insurrection des consciences*. París: La Découverte.
- Gohn, M. da G. (2014). "Brazilian social movements in the Latin American context", en Farro, A. L. y Lustiger-Thaler, H. (ed.) *Reimagining Social Movements. From Collectives to Individuals*. Surrey: Ashgate.
- Heidegger, M. (1962). *Being and Time*. Nueva York - Evanston: Harper and Row Publishers.
- Hermet, G. (2001). *Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIX-XXème siècle*. París: Fayard.
- Horkheimer, M. y Adorno, T. W. (1974). *La dialectique de la Raison*. París: Gallimard.
- Jeanpierre, L. (2019). *In Girum. Les leçons politiques des rond-points*. París: La découverte.
- Laclau, E. (2005). *La razón Populista*. México: FCE.
- Le Bot, Y. (2013). "De la révolution à la mondialisation. Changement de paradigme en Amérique latine", *Socio*, N° 2, *Révolutions, contestations, indignations*. París: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
- Martuccelli, D. (2001). *Dominations ordinaires*. París: Balland.
- Naveau, P. (2019). *La construction de paix par "le bas" dans des contextes de violence structurelle. L'expérience collective et les pratiques artistiques comme piliers de la reconstruction de la société mexicaine*. Tesis de Doctorado, Universidad Libre de Lovaina.
- Noriel, G. (2019). *Les gilets jaunes à la lumière de l'histoire*. París: Le Monde/l'aube.
- Pleyers, G. (2010). *Alter-globalization. Becoming an Actor in the Global Age*. Cambridge: Polity Press.
- (2018). *Movimientos sociales en el siglo XXI*. Buenos Aires: CLACSO.
- Rosa, H. (2014). *Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive*. París: La Découverte.
- Rousseau, J. J. (1964). *Du Contrat Social*. París: Gallimard - Folio essais.
- Schütz, A. (1998). *Éléments de Sociologie Phénoménologique*. París: L'Harmattan.
- Sen, A. (2003). *L'économie est une science morale*. París: La découverte.
- Targuieff, P.A. (2007). *L'Illusion populiste*. París: Champs Flammarion.
- Touraine, A. (2013). *La Fin des Sociétés*. París: Éditions du Seuil.
- Touraine, A. y Khosrokhavar, F. (2000). *La recherche du soi*. París: Fayard.
- Wieviorka, M. (2003). "Un autre monde est possible", en *Un autre monde...contestations, dérives et surprises dans l'antimondialisation*. París: Balland.
- Mosca, L. (2010). "From the streets to the net? the Political use of the internet by social movements", *International Journal of E-Politics*, N° 1, pp. 1-21.
- Varios autores (2013). *Cidades Rebeldes. Passe livre e as manifestacoes que tomaram as ruas do Brasil*. Sao Paulo: Boitempo.

**Maria Hermínia
Tavares de Almeida**
mhbtdalm@usp.br
Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento

**Fernando Henrique
Guarnieri**
fhguarnieri@gmail.com
Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Brasil

Recibido: 04/01/2020
Aprobado: 25/02/2020

The unlikely president: the populist captain and his voters

Resumen

En este artículo utilizamos datos de encuestas para comprender el electorado de Bolsonaro y, al hacerlo, discutimos interpretaciones significativas sobre las condiciones del surgimiento de los políticos populistas. En la primera sección, presentamos y discutimos interpretaciones macro que recurren a procesos de cultura política o socioeconómica para explicar el populismo. En la segunda parte, describimos brevemente la carrera política de Jair Bolsonaro y mostramos por qué es un miembro auténtico de la familia populista. En las secciones tercera y cuarta, presentamos datos de encuestas sobre los votantes de Bolsonaro, sus características socioeconómicas y sus creencias con respecto a los regímenes políticos y las instituciones democráticas, y las cuestiones morales en conflicto. Argumentamos que los datos muestran que las bases sociales del presidente no son las que la literatura actual relaciona con los líderes populistas y que sus actitudes hacia la política y las cuestiones morales no difieren significativamente de las que se encuentran entre los partidarios de otros candidatos que se postulan para la presidencia en 2018. conclusiones, sugerimos algunas explicaciones alternativas al inesperado éxito electoral de Bolsonaro.

Palabras clave **Electorado de Bolsonaro, Cultura Política Brasileña, Populismo.**

Abstract In this paper we use surveyed data to understand Bolsonaro's electorate and, in doing so, we discuss significant interpretations about the conditions to the rise of populist politicians. In the first section, we present and discuss macro interpretations that resort either to socioeconomic or political culture processes in order to explain populism. In the second part, we describe, briefly, Jair Bolsonaro's political career and show why he is an authentic member of the populist family. In the third and fourth sections, we present survey data on Bolsonaro's voters, their socioeconomic features, and their beliefs regarding political regimes and democratic institutions, and contending moral issues. We argue that data show that the president social bases are not those the current literature relates to populist leaders and that their attitudes towards politics and moral issues do not differ significantly from those found among supporters of other candidates running for the presidency in 2018. In the conclusions, we suggest some alternative explanations to Bolsonaro's unexpected electoral success.

Keywords **Bolsonaro Electorate, Brazilian Political Culture, Populism.**

Introducción In October 2018, a majority, of the Brazilian voters have chosen Jair Messias Bolsonaro, an extreme-right populist politician, president of Brazil. The election was the culmination of five years of political turmoil. It began with massive street demonstrations, in 2013, followed by a polarized presidential election in the next year, the disclosure of corruption scandals that brought down the elected president allowing for the rise of a discredited and unpopular vice-president, in 2016, amid a deep economic crisis compromising the government fiscal capacity. The crisis has buried a long-lasting political arrangement, dating from the mid-1990s, and organized around centripetal electoral competition between center-left and center-right party coalitions. Besides bringing to power an extreme-right Messiah, the elections brought several new-comers to govern the states and produced extreme party fragmentation in Congress.

Current explanations for the rise of populism The concept of *populism* has a long story in the political studies, dating from the late XIX Century. Throughout this period, its meaning has changed following the different phenomena it was supposed to capture. Populist was the Jacksonian ordinary people's democracy. Populists were the radical intellectuals searching for the real soul of Mother Russia among poor peasants. Populists came to be labeled the Latin American modernizing leaders that promoted state-led industrialization and the political inclusion of the popular masses -such as the Mexican Lázaro Cárdenas, the Brazilian Getúlio Vargas and the Argentinian Juan Domingo Perón-. Last but not least, populist were called the economic policies that did not conform to the hegemonic liberal orthodoxy and were fiscally permissive, besides allowing for redistributive policies thought to have nefarious inflationary consequences (Dornbush & Edwards, 1991).

More recently, the term *populism* has referred to the rise of leaders and movements, either from the left or from the right, that seem to be challenging the customary workings of contemporary liberal democracies.

Different as they may be according to their political origins, trajectories, or organized support, *neo-populists* differ from other democratic politicians by their anti-establishment, anti-pluralism, anti-elite rhetorics. Challenging the *status quo*, they present themselves as the unique and authentic representatives of **the people** whose genuine aspirations and traditional values they claim to exclusively embody. *The claim to exclusive representation is not an empirical one; it is always distinctly moral* (Müller, 2017: 47). Since **the people** are understood as a unique and unified social body, its recognition entails the existence of those who do not belong to it, the **anti-people**: the elites and the foreigners of any kind (Müller, 2017, Mounk, 2018, Mudde & Kaltwasser, 2017, Filchenstein, 2019). The rise of contemporary populism would be related to political polarization and the shrinking and the weakening of the political center in different societies, either by the radicalization of existing political parties or by the emergence or strengthening of extremist parties and movements (Abramowitz, 2010, Donahue & Heck, 2019, Mann & Ornstein, 2018, Ginsburg & Huq, 2018, Levitsky & Ziblatt, 2018). According to Moffit (2016), populism is a political style whose global incidence was made possible by changes in the technologies of communication and by the increase and scope of information networks.

Political scientists and pundits agree that are tense the relations between populism and the democratic regime and see the rise of populist leaders as the sign of democracy's discontent, if not of crisis. However some argue that populism contributes to balance representative institutions' inherently elitism and class-biased (Laclau, 2005, Mouffe, 2019).

Although the definition of *populism* and its relationship to *polarization* is consensual among scholars and analysts, there is a substantial discussion regarding what favors the ascent of populist leaders and movements around the world.

Risking oversimplification, we can, for analytical purposes, classify current explanations into **three groups** that sometimes overlap.

The first, see **populism expressing the anger and fears of ordinary citizens** displaced by the economic changes brought about by globalization and the rapid technological change entailed by it (Rodrik, 2018). Support for populism would come typically from the characters similar to those of the praised documentary *American Factory*: white American blue-collar workers whose jobs have disappeared with the reallocation of firms or technological innovations. Or from their European equivalents whose jobs are coveted -and supposedly "stolen"- by non-European immigrants. Or even, from large sectors of the middle classes from the developed Western World whose income, according to Milanovic (2010) have decreased or stagnated as the result of globalization, while the conspicuous concentration of income and wealth grew remarkably. Another version of this argument emphasizes the unequal and powerful impacts of the 2008 global crisis (Judis, 2016)

The central idea in those different versions of the same script is one of the people feeling displaced by sudden economic shifts and forgotten by the political establishment (Hochschild, 2016, Donahue & Heck, 2019, Judis, 2017). Economic insecurity, fear regarding the future, rage against callous economic and political elites have been a recurrent explanation of Trump's surprising electoral success in 2016 among scholars and pundits (Vance, 2018).

The second set of explanations dwells into **cultural cleavages focusing on values, beliefs, and on attitudes** regarding race/ ethnic groups, religion or traditional moral values. Conservative reactions towards secularization, internationalization, multiculturalism

and gender politics would supposedly threaten the lifestyles of traditional national communities, elusive as they may be (Norris & Inglehart, 2019, Lilla, 2017, Siles, Tesler & Vevreck, 2017, Major, Blodorn & Major Blascovich, 2016, Green & McElwee, 2019).

The third set emphasizes **the representation gap that seems to be part and parcel of the institutionalized democratic politics** (Frank, 2016). According to those views, liberal technocracy's extensive powers and increased distance between parties and/or professional politicians and their constituencies would open space for populist leaders speaking straight to the hearts of ordinary voters. In this sense, Müller (2018: 101) correctly remarks that populism *is the permanent shadow of representative politics*.

In this paper, we acknowledge the importance of previous political polarization in Brazil, dating from at least 2013, to favor the ascent to the presidency of a backbencher that did not have either the ear or the respect of his fellows at the Congress or significant political support from voters.

On the other hand, we aim at contributing to the discussion about populism based on the case of Brazil. We will use survey data to assess the weight of socioeconomic features, political attitudes, religion, and moral values on electoral preference for Jair Bolsonaro among Brazilian voters. We will also try to describe in those terms the core group of his most faithful supporters.

We argue that explanations linking the rise of extreme right populist politicians to macro processes such as globalization effects on jobs and income, downward mobility, cultural backlash or representative democracy crisis seem not to fit the survey data we have from Brazil. They show that Bolsonaro voters were far from being economic losers and that their political opinions and values are not that different from political opinions and values of those that have chosen other candidates. Therefore, we tend to support explanations pointing to contingent factors related to voter's decisions under political and economic crises. Before that, we argue why populist is a suitable label to describe Jair Bolsonaro's political style.

An accidental populist president

In August 2018, Bolsonaro had the preference of 23% of the Brazilians, according to electoral polls, and very few people thought he could go much further. Against all the odds, two months later, he was the 38th elected President of Brazil, receiving 55,13% of the valid ballots against 44,87% of his opponent.

His was not a career leading to the presidency. Jair Messias Bolsonaro graduated, in 1977, from the Military Academy and served the Army in the artillery and paratroops units where he came to be known as an unruly officer. In 1986, he was arrested and detained for 15 days, after publishing an article at a weekly magazine criticizing the officers' low salaries. One year later, he was accused of planning to plant bombs in military units to protest once more against the military salaries. After been convicted by a military court he has been acquitted by the Brazilian Supreme Military Court in 1988 and sent to retirement with the rank of captain (Maklouf, 2019).

In the same year, he was elected to the Rio de Janeiro City Council and two years later as one of the state's representatives to the National House, to where he has been re-elected six times.

Throughout his 27 years career in Congress, he has been an obscure backbencher who never presided any of the House committees and had only one law proposal approved. At the House, he came to be known as a bizarre outspoken politician that championed for the military interests, praised the 1964 military *coup*, the ensuing authoritarian regime,

and advocated torture against the democratic opposition. He also stood up for a deeply conservative agenda, opposing same-sex marriage and gay rights, abortion, affirmative action, drug liberalization, and arms control.

During his political career, Bolsonaro changed parties six times and became the presidential candidate of a small party, the **PSL (Social Liberal Party)**, that in 2018 had only two representatives at the Congress.

In Rio de Janeiro, he and three of his sons that have followed his steps in politics are known for their close connections to private militia groups that exert control over significant portions of the poorest neighborhoods.

Friend to well-known evangelical protestant leaders, he has been married to his third wife by a minister of the largest neopentecostal denomination in Brazil -**Assembleia de Deus**- in 2013, and took baptism vows from another pastor, at the Jordan river, during a visit to Israel, in 2016.

A few months before, he had announced his decision to run for president, arousing contempt and disbelief. Eventually, he joined the **PSL** and launched his presidential campaign in 2018, having a right-wing retired military in his slate as vice-president and counting on the support of other few but prominent retired generals.

Bolsonaro presented himself not only as of the alternative to the leftist Workers Party (Partido dos Trabalhadores) but also to the “corrupt” political elite that had plunged Brazil into an economic and moral crisis. Since long a professional politician, he introduced himself as an outsider running against the elites, the political establishment, and the “rotten” party system. His motto was vaguely nationalist and strongly religious: ***Brazil above everybody, God above everything.***

Family values and security issues were at the core of his political rhetoric. Nevertheless, he also championed liberal pro-market economic policies. He picked up an ultra-liberal economist operating in the financial markets, with a PhD degree from Chicago, as his advisor and promised future Minister of Economy.

Anyway, he did not have the opportunity to detail his proposals since he was stabbed, in September, while campaigning and therefore spared from participating in any presidential debates and network interviews. A blessing, taking into account his limited intellectual and rhetorical skills.

Bolsonaro’s TV propaganda was quite uncouth. However, he used social media very effectively to convey himself as an ordinary, simple man confronting the political elites, the leftist cosmopolitan intellectuals, and, above all, the PT “communists”. It worked. By now, we should ask who were the voters that gave him the presidency.

Core voters and electoral landslide

We have used electoral polls series from the institute **Datafolha** to better understand the profile of Bolsonaro’s voters. We have focused on the surveys done in June, just before the campaign started, and one day before election day in October.

Table 1 shows the results of logistic regression of the voting intention for Bolsonaro in June 2018 and October 2018 on a series of sociodemographic and attitudinal variables. The regression coefficients allow us to examine the likelihood that different social profiles would declare their intention to cast a vote for him.

Table 1. Results of logistic regression for prediction of voting intention in Bolsonaro in the beginning of electoral campaign (june 2018) and one day before election day (first round, october 2018)

Voting intention in Bolsonaro		
	(07/06/2018)	(03/10/2018)
(Intercept)	-0.34 (-0.80, 0.11)	0.31*** (0.11, 0.50)
age 25 to 34 years old	0.13 (-0.17, 0.43)	0.21*** (0.06, 0.35)
age 35 to 44 years old	-0.57*** (-0.90, -0.25)	-0.01 (-0.16, 0.14)
age 45 to 59 years	-0.87*** (-1.20, -0.53)	-0.05 (-0.19, 0.10)
age 60 years or older	-0.87*** (-1.24, -0.51)	-0.0001 (-0.15, 0.15)
women	-0.97*** (-1.18, -0.76)	-0.57*** (-0.66, -0.49)
Income 2 to 3 minimum wages (m. w.)	0.36** (0.08, 0.64)	0.64*** (0.52, 0.76)
Income 3 to 5 m. w.	0.85*** (0.57, 1.13)	1.09*** (0.97, 1.21)
Income 5 to 10 m. w.	0.96*** (0.63, 1.29)	1.32*** (1.17, 1.46)
Income 10 to 20 m. w.	1.26*** (0.67, 1.85)	1.19*** (0.97, 1.41)
Income 20 to 50 m. w	1.67*** (0.44, 2.90)	2.09*** (1.64, 2.53)
Income more than 50 m. w.	-11.36 (-593.71, 570.98)	1.98*** (1.12, 2.84)
Black	-0.31*** (-0.54, -0.08)	-0.32*** (-0.41, -0.22)
Yellow	0.11 (-0.45, 0.67)	0.30** (0.05, 0.56)
Indigenous	-0.35 (-1.06, 0.35)	0.07 (-0.25, 0.40)
Other	-0.24 (-0.79, 0.30)	-0.44* (-0.89, 0.01)
Evangelical Pentecostal	0.13 (-0.23, 0.48)	-0.27*** (-0.42, -0.11)
Evangelical Neo Pentecostal	0.18 (-0.49, 0.85)	-0.22 (-0.53, 0.09)
Other Evangelical	0.17 (-0.54, 0.88)	-0.15 (-0.51, 0.21)
Umbanda, Candomblé or other Afro-Brazilian religions	-1.59*** (-2.75, -0.44)	-1.56*** (-1.95, -1.17)
Kardecist spiritist, spiritualist	-0.91*** (-1.58, -0.25)	-0.76*** (-1.00, -0.52)
Catholic	-0.43*** (-0.73, -0.13)	-0.77*** (-0.89, -0.65)
Jewish	0.49 (-1.19, 2.18)	-0.60 (-1.40, 0.20)
Other religion	-0.24 (-1.10, 0.63)	-0.84*** (-1.22, -0.46)
Has no religion / agnostic	-0.40* (-0.84, 0.03)	-0.91*** (-1.12, -0.71)
Atheist / doesn't believe in God	-0.74 (-1.83, 0.35)	-2.17*** (-2.75, -1.59)
South	0.10 (-0.20, 0.39)	0.22*** (0.10, 0.35)
Northeast	-0.46*** (-0.75, -0.18)	-0.66*** (-0.78, -0.55)
Midwest	0.40** (0.03, 0.77)	0.04 (-0.13, 0.20)
North	0.25 (-0.12, 0.63)	0.22*** (0.06, 0.39)
Democracy is the best form of government	-0.35*** (-0.56, -0.14)	-0.63*** (-0.72, -0.53)
Observations	2,824	10,930
Log Likelihood	-1,241.82	-6,412.63
Akaike Inf. Crit.	2,549.63	12,891.25
Note:	* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01	
Source: Datafolha		

In both moments, Bolsonaro's *core voter* -who would be more likely to choose him- was a young man (25 to 34 years old), white, with high family income between 20 and 50 minimum wages, evangelical and resident of the North, South and Midwest regions of Brazil. The likelihood that someone with this social profile declared his intention to vote for Bolsonaro was 89.5%, in June 2018, while the overall average was 19%. In October 2018, the probability rose to 95%, v.g., almost every person of that group would vote for the **PSL** candidate.

The social type least likely to vote for Bolsonaro was a woman aged 45 to 59 years old, black, with a family income under two minimum wages, *umbandista*, self-employed, living in the Northeast Brazil. In June 2018, only 1.5% of people with this profile would vote for Bolsonaro. In October, the probability had risen to 10%, an impressive increase, but still well below the average voting intention at that moment (35%). It is needless to say that both groups represented a small part of the population and the electorate.

The six characteristics we have chosen in order to model the vote for Bolsonaro (sex, age, income, religion, region and color/race) allow 24.750 combinations. Some profiles are non-existent in the real world, and others are actually found. Therefore, although we can say which profile was more or less likely to declare his/her intention to vote for Bolsonaro, we cannot say that he has won due to the support of any specific group. What the data show is that both **contextual and demographic factors** help explain Bolsonaro's victory. On one hand, since a higher income is directly related to preference for the extreme-right candidate and the Northeast region support for him was lower, we can speculate that his bad electoral performance -and a greater support for Fernando Haddad -in that region were due to **PT governments public policies aimed at poor constituencies**. On the other hand, in demographic terms, the **higher propensity of blacks and women to reject the right-wing candidate** points out to the strength of the identity agenda in these elections.

Core voters made Bolsonaro a competitive candidate but were not sufficient to secure victory. It eventually arrived as a result of the electoral competition, as voters increasingly came to prefer him to other center-to-the-right candidates.

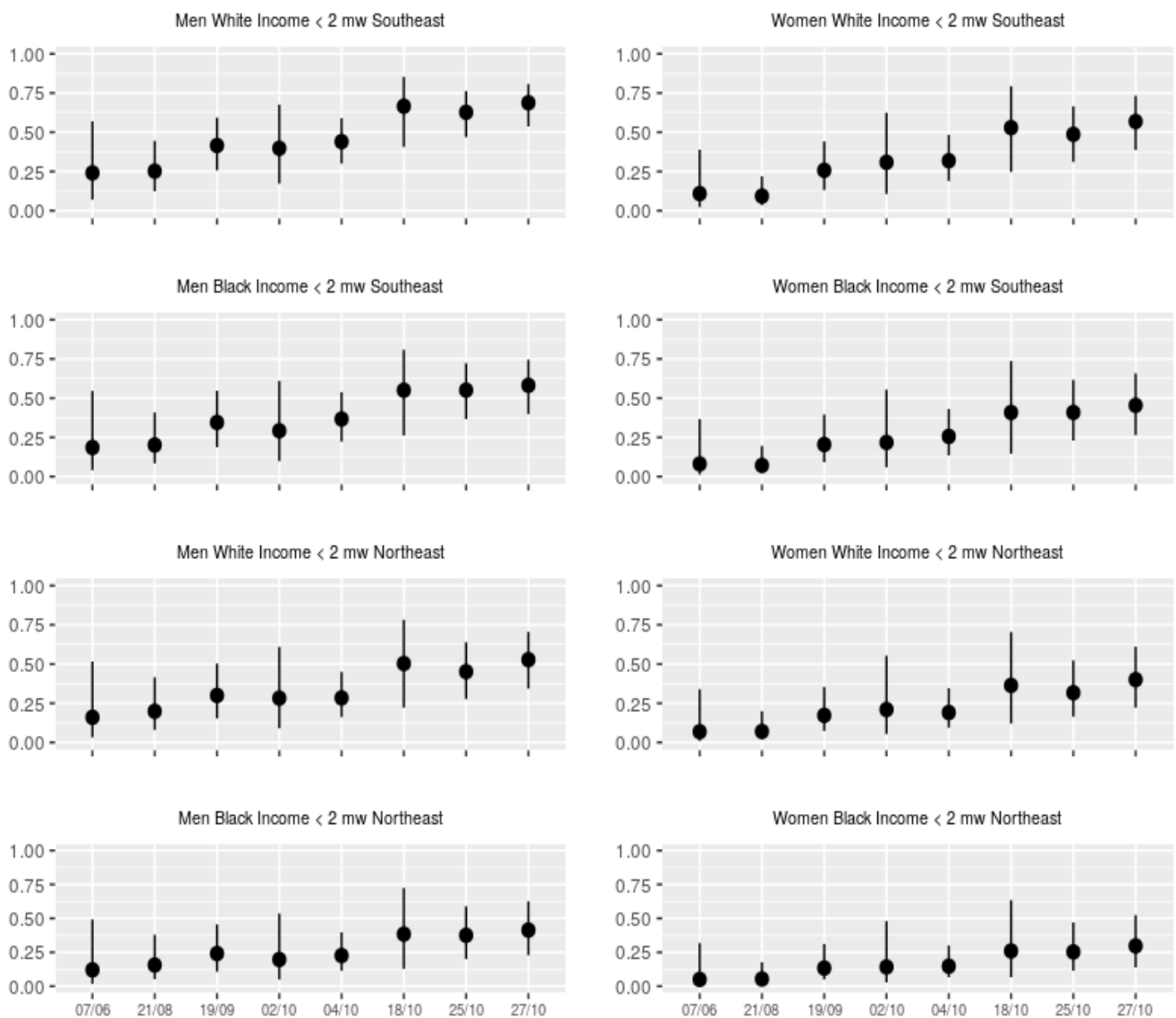
We have examined nine waves of polls, carried out by **Datafolha** before the first round, to see how different segments of voters changed their propensity to choose Bolsonaro. We have compared the coefficients of the same regression model applied to the nine waves. These coefficients correspond to categorical variables. Therefore, we will see how the categories of a particular variable behave in relation to a reference category.

Using the coefficients of the complete model we can calculate the evolution of the predicted probability of different voter profiles to choose Bolsonaro. Figure 1 shows the evolution of the probability of **Catholic voters with an income below two minimum wages** according to sex, color, and region. In all the charts, we can see a jump starting in September (after the beginning of the TV campaign and the stabbing episode) and another jump in the second ballot. The assassination attempt brought greater visibility to the **PSL** candidate, which may explain the first leap. In the second ballot, the jump can be explained by *antipetism* (Samuels and Zucco, 2018).

Between the jumps, there are no significant changes, making the graphics take on the appearance of a staircase with three steps. This shape may indicate the absence of a contagion process. The idea of contagion, dear to several Brazilian analysts, denotes that Bolsonaro's victory was due to the successful use of social networks allowing the support for Bolsonaro spread like a virus. When there is contagion, the increases are gradual and the graph shows a ramp shape. This is not what happened here.

The graphs reaffirms the differences between the Southeast and Northeast regions, between men and women, blacks and whites. It is interesting to note that color/race, gender, and region interact to make the northeast the region where Bolsonaro got his lowest support rate. Among low-income voters, almost the majority of black men in the southeast and white men in the northeast supported the extreme-right candidate. Black or Northeastern women, on the other hand, always gave little support to him.

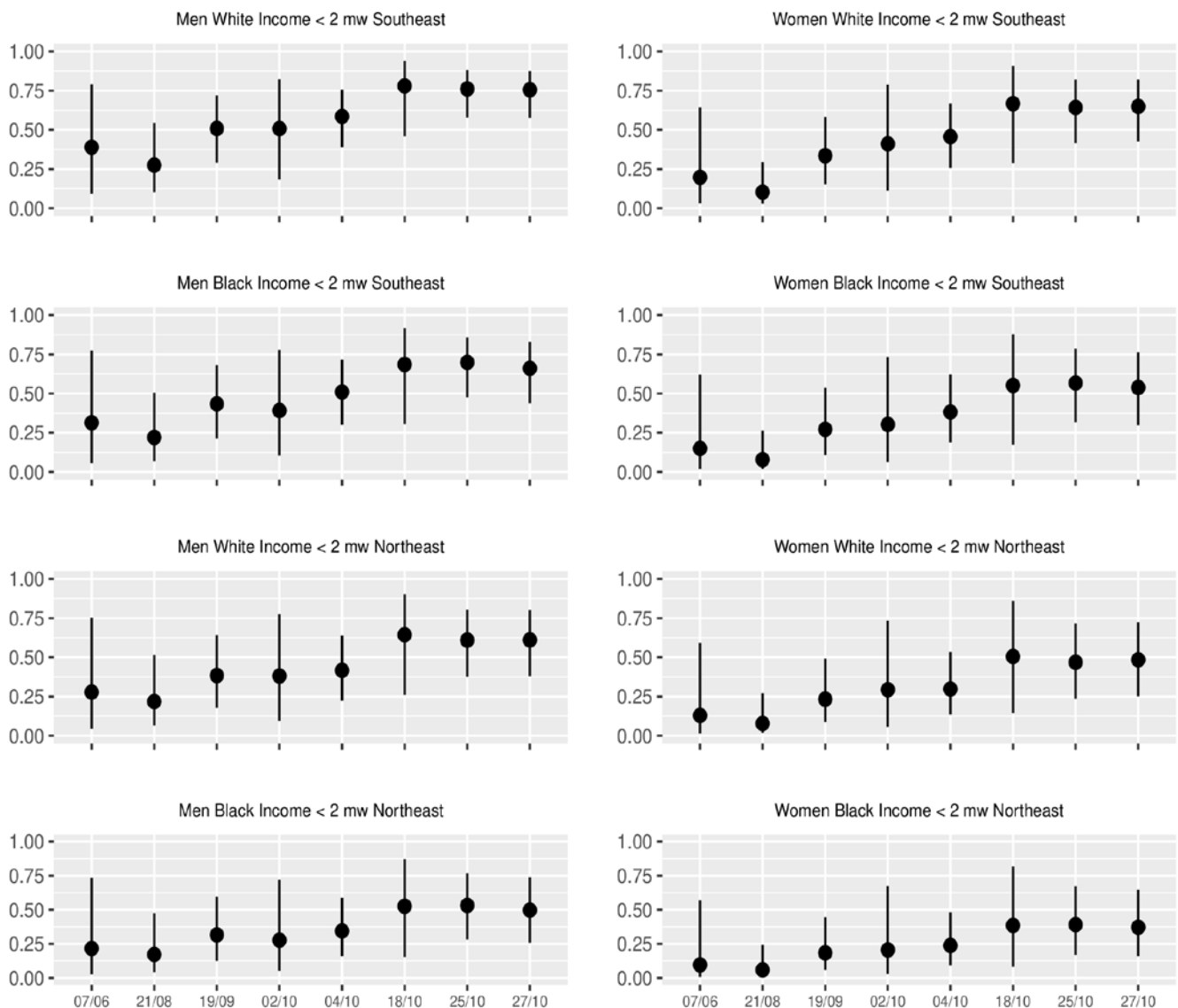
Figure 1. Evolution of predict probabilities of vote in Bolsonaro for low-income Catholic voters from a logistic regression model



Source: Logistic regression model runned in nine round of Datafolha surveys
(07/06/2018, 21/08/2018, 19/09/2018, 28/09/2018, 02/10/2018, 04/10/2018, 18/10/2018, 25/10/2018, 27/10/2018)

Figure 2 shows the predicted probability of voting for Bolsonaro among neopentecostal evangelical voters with an income below two minimum wages, according to sex, color, and region. We see that being evangelical attenuates the effect of gender and region, except for black women from the Northeast. The ladder in Figure 2 is already starting to look more like a ramp, which could indicate contagion as we will see by analyzing the profile of those earning between 20 and 50 minimum wages.

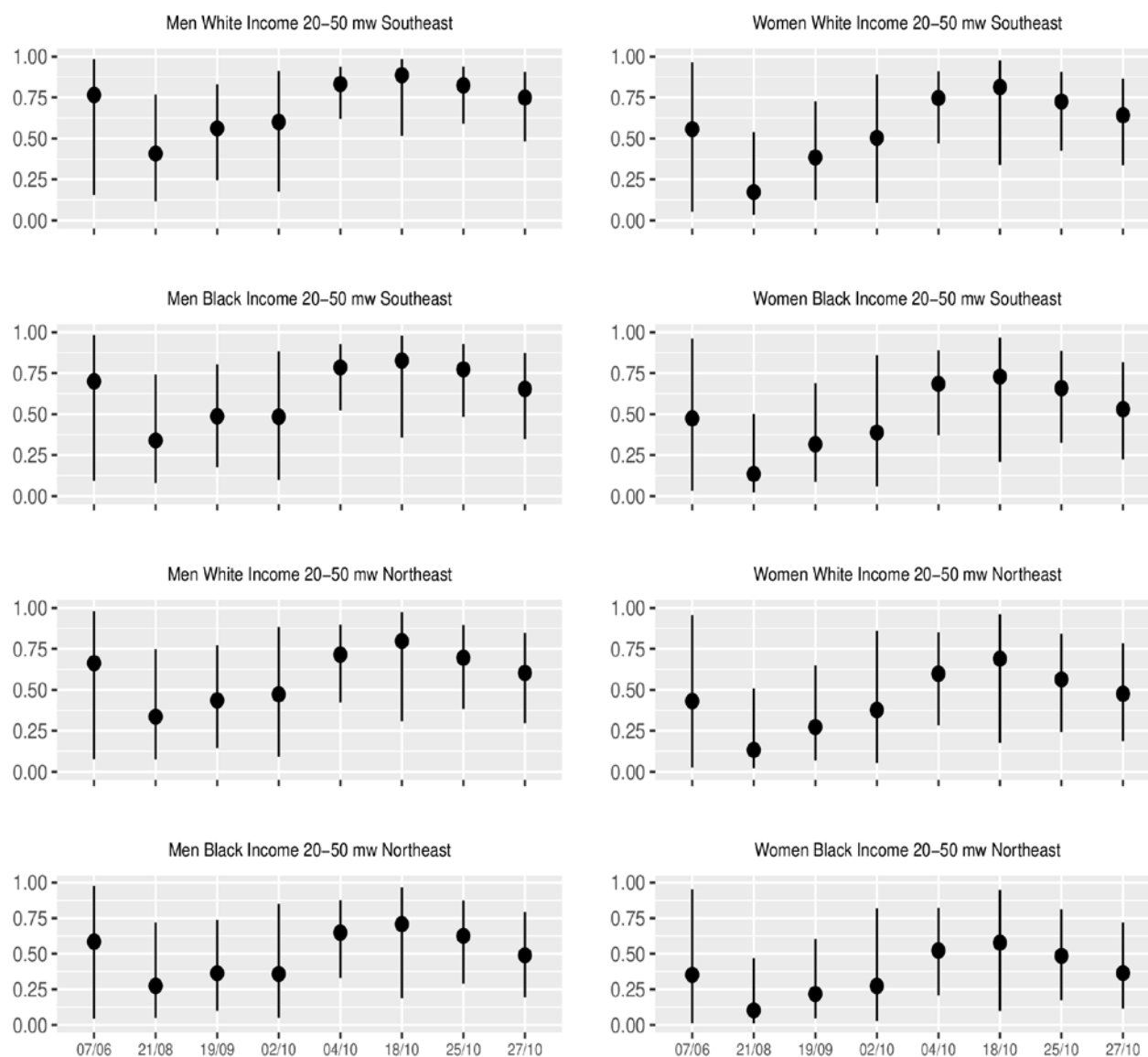
Figure 2. Evolution of predict probabilities of vote in Bolsonaro for low-income New-Penthecostal voters



Source: Logistic regression model runned in nine round of Datafolha surveys
(07/06/2018, 21/08/2018, 19/09/2018, 28/09/2018, 02/10/2018, 04/10/2018, 18/10/2018, 25/10/2018, 27/10/2018)

Figure 3 shows what happens with neopentecostal evangelical voters with high income, between 20 and 50 minimum wages. Now the ramp shape is definite, indicating contagion among the wealthiest, which can be probably explained, at least in part, by the use of social networks.

Figure 3. Evolution of predict probabilities of vote in Bolsonaro for high-income New-Penthecostal voters



Source: Logistic regression model runned in nine round of Datafolha surveys
(07/06/2018, 21/08/2018, 19/09/2018, 28/09/2018, 02/10/2018, 04/10/2018, 18/10/2018, 25/10/2018, 27/10/2018)

Interestingly, the same contagion effect appears with Catholics, challenging the interpretations that stress the importance of the evangelical church for Bolsonaro's election, at least among the wealthier. Another interesting finding is the inflection of the candidate's support curve in the second round, common to all groups analyzed here.

The data shows that an array of factors accounted for Bolsonaro's election. Identity issues related to gender and race, retrospective voting, political factors interacted to convey the candidate's support. The non-evangelical, the poor, and the lower middle class, black and northeastern women, were the bastion of resistance to Bolsonarism. High-income men and women supported him. The PT incapacity to gain the majority of poor whites in the northeast and poor blacks in the southeast, especially if they were evangelicals, may have meant the difference between victory and defeat.

In the end of the day, almost fifty-seven million eight hundred Brazilians voted for Bolsonaro in the second ballot giving him an advantage of 10.67 percentual points over the PT candidate.

How different were Bolsonaro voters' opinions from those who have chosen Haddad or other candidates in the first round?

Brazilian voters' political attitudes and moral values

In order to answer that question, we have used data from **LAPOP 2019** regarding different political and moral issues to compare attitudes of those who have declared voting for Bolsonaro and other candidates in the first election's round.

Table 2 shows that around 60% of respondents think that although democracy has problems, it is still the best form of government .

There is no significant difference between the two groups of the electorate: 61% of Bolsonaro's voters and 64% those that had other candidates value the democratic regime positively.

On the other hand, Brazilians, in general, are not very satisfied with the way democracy works in their country: around 70% say they are dissatisfied or very dissatisfied. Bolsonaro's voters show more satisfaction with democracy than others: 48% versus 36% (Table 3). This result is not surprising: since their preferred candidate won the election, the system reflects their will. Finally, 44% of the extreme-right voters agree that those who govern the country show interest in what people like them think, against 29% of those who voted for the losers.

Table 2. Proportion of respondents who believe that democracy is the best form of government among those who voted and did not vote for Bolsonaro

	<i>Democracy is the best form of government</i>		<i>I feel that the Government hear me</i>	
	Others	Bolsonaro	Others	Bolsonaro
Disagree very much	0.08	0.07	0.26	0.18
Disagree	0.03	0.03	0.13	0.08
Disagree a little	0.08	0.09	0.16	0.14
Indiferent	0.18	0.19	0.14	0.17
Agree a little	0.22	0.19	0.14	0.18
Agree	0.14	0.16	0.08	0.12
Agree very much	0.28	0.26	0.09	0.14
Total	1.00	1.00	1.00	1.00

Source: LAPOP 2019

Table 3. Proportion of respondents who are satisfied with democracy among those who voted and did not vote for Bolsonaro

	Satisfaction with Democracy	
	Others	Bolsonaro
Very satisfied	0.07	0.08
Satisfied	0.29	0.40
Unsatisfied	0.48	0.43
Very unsatisfied	0.17	0.09
Total	1.00	1.00

Source: LAPOP 2019

Although more satisfied with democracy, 46% of those voting for Bolsonaro think that too much crime justifies a coup d'état. Among those who voted for other candidates, the percentage is 31%. The difference between bolsonaristas and non-bolsonaristas is greater when it comes to corruption. 47% of those who voted for Bolsonaro, against 25% of those who did not, believe that a coup d'état is justified in the face of too much corruption. This difference of more than 20% is the same when people are asked if, in difficult times, the Supreme Court should be closed, although the difference drops to 10% when it comes to shutting down the Congress (29% vs. 19%). Table 4 and 5 show these results.

Table 4. Proportion of respondents who think a coup is justified in the case of _____ among those who voted and did not vote for Bolsonaro

	Great Violence		Much Corruption	
	Others	Bolsonaro	Others	Bolsonaro
The military would be justified to take power by a coup d'etat.	0.31	0.46	0.25	0.47
The military wouldn't be justified to take power by a coup d'etat.	0.69	0.54	0.75	0.53
Total	1.00	1.00	1.00	1.00
Source: LAPOP 2019				

Table 5 - Proportion of respondents who think it is justified to close _____ in very difficult situations, among those who voted and did not vote for Bolsonaro

	Congress		Supreme Court	
	Others	Bolsonaro	Others	Bolsonaro
It is justified	0.19	0.29	0.27	0.47
It is not justified	0.81	0.71	0.73	0.53
Total	1.00	1.00	1.00	1.00
Source: LAPOP 2019				

It is worth emphasizing that the majority of both bolsonaristas and those who voted for other candidates, although dissatisfied with democracy, still think that it is the best form of government and mostly reject a coup or the closing of the **STF** or Congress.

In addition to being more satisfied with democracy, Bolsonaro's voters, according to **LAPOP 2019**, are also more satisfied with political institutions. The majority (51%) say they respect the country's political institutions as opposed to 45% of those who preferred other candidates. Table 6 shows the distribution of respondents who, on a scale of 1 to 7, spell their degree of trust in some political institutions. We consider grades 5 to 7 on the scale as trust in institutions. Conversely, confidence degrees between 1 and 3 signal mistrust.

While approximately two-thirds of respondents (63%) who voted for other candidates do not trust Congress, less than half of the Bolsonaristas (49%) have the same position. Although few respondents trust the political parties, confidence is greater among bolsonaristas (15% against 8%).

On the other hand, Bolsonaro's voters also reveal greater confidence in security institutions such as the Armed Forces (82% vs 58%) and the Military Police (62% vs 44%).

These data indicate that, in general terms, Bolsonaro's voters do not distinguish themselves for being particularly anti-democratic or averse to free political institutions, at least while his favorite candidate is in power. There is - and there has always been - a significant portion of Brazilians that do not praise the democratic regime or are indifferent to it and a huger one that distrusts democratic institutions. Nevertheless, dissatisfaction and distrust regarding them do not distinguish Bolsonaro's electorate from those that casted their vote for other presidential candidates.

Table 6 - Proportion of respondents who trust and don't trust selected institutions among those who voted and did not vote for Bolsonaro.
(Lines don't add up to 100% since they don't include indifferent)

		Trust	Don't trust
National Congress	<i>Others</i>	0.23	0.63
	<i>Bolsonaro</i>	0.34	0.49
Political Parties	<i>Others</i>	0.08	0.82
	<i>Bolsonaro</i>	0.15	0.74
President	<i>Others</i>	0.30	0.59
	<i>Bolsonaro</i>	0.76	0.13
Supreme Court	<i>Others</i>	0.33	0.50
	<i>Bolsonaro</i>	0.54	0.30
Armed Forces	<i>Others</i>	0.58	0.29
	<i>Bolsonaro</i>	0.82	0.11
Military Police	<i>Others</i>	0.44	0.39
	<i>Bolsonaro</i>	0.62	0.24

Source: LAPOP 2019

We had shown before that Jair Bolsonaro had a group of core voters, who upheld him before the election campaign began and whose endorsement was well above average. **LAPOP 2019** results confirm that this core is formed mainly by white, young men, with upper-middle-income, neopentecostal, living in the South or Midwest regions. The table with the results of logistic regression are in the Appendix 1.

Even among these most entrenched bolsonaristas there are no vast differences in opinion and satisfaction with democracy when compared to those that have chosen other candidates. White, young men, with higher income, neopentecostal residents of the South or Midwest are neither more nor less satisfied with democracy than the other Brazilians.

Nevertheless, ideological self-identification distinguishes Bolsonaro's voters from those supporting other candidates. While close to half (49%) of the bolsonaristas say they are on the right -- ranking higher than 7 on a scale of 1 to 10, where 1 is to be on the left -- only 19% of voters of other candidates do the same as shown in Table 7.

**Table 7. Self-classification of respondents on a left - right scale
among those who voted and did not vote for Bolsonaro
(1 = left and 10 = right)**

Left (1) - Right (10) placement		
	Others	Bolsonaro
1	0.16	0.06
2	0.05	0.05
3	0.12	0.04
4	0.06	0.05
5	0.24	0.15
6	0.09	0.09
7	0.09	0.08
8	0.06	0.17
9	0.03	0.08
10	0.10	0.23
Total	1.00	1.00

Source: LAPOP 2019

Regardless of being bolsonarista or not, people with some features of the Bolsonaro's core supporters tend to identify more with the right. White men with income ranging from three to four minimum wages, evangelical and non-evangelical protestants consider themselves more to the right than people with other socioeconomic profiles, both among those who voted for Bolsonaro and those who did not. Tables with the results can be found in the Appendix 2.

Answers to questions such as whether the state should reduce inequality or spend more with the poorest and if rich people should pay more and receive less are very similar for bolsonaristas and other voters for all socioeconomic profiles with the exception, as expected, of those with higher income. In brief, being at the political right here seems to be more related to moral and behavioral issues..

In indeed, while 56% of Bolsonaro's voters disapprove of same-sex marriage (with 36% strongly disapproving), 39% of other candidates' supporters share the same opinion (Table 8). Controlling by the vote in the first round, those who most disapproved of gay marriage are the poorest, neopentecostal evangelical, living in the North and Northeast regions.

<i>Table 8. Position regarding same sex marriage among those who voted and did not vote for Bolsonaro</i>		
Same-sex people should have the right to marry (1 = Frimly disapprove. 10 = Firmly approve)		
	Others	Bolsonaro
1	0.23	0.36
2	0.06	0.04
3	0.03	0.04
4	0.02	0.03
5	0.05	0.09
6	0.04	0.04
7	0.07	0.04
8	0.06	0.04
9	0.06	0.07
10	0.39	0.25
Total	1.00	1.00
Source: LAPOP 2019		

On the other hand, there are no significant differences between bolsonaristas and other voters regarding abortion, when the mother risks dying. Nearly 80% of respondents agree that mothers can have an abortion if childbirth poses a risk to their health (Table 9). There are also no significant differences in the approval of government support for immigrants, even if Venezuelans (**LAPOP** has introduced some experiments to see the reaction to immigration when it comes to Venezuelan). 65% of respondents are in favor of governmental aid to immigrants, regardless of their vote preference.

<i>Table 9. Position regarding abortion in case of the risk of death of the mother among those who voted and did not vote for Bolsonaro</i>		
Abortion is justified in case of risk to mother health		
	Others	Bolsonaro
Disagree	0.23	0.26
Agree	0.77	0.74
Total	1.00	1.00
Source: LAPOP 2019		

If dissatisfaction with the economic situation made the European voters turn towards populism, the opposite seems to have happened here. Table 10 shows that when asked about the country's situation in the last two months, 32% of bolsonaristas think it has improved against 15% of those who voted for other candidates.

Table 10. Perception regarding country's situation in the last twelve months among those who voted and did not vote for Bolsonaro

	Economic situation of the country in the last 2 months	
	Others	Bolsonaro
Better	0.15	0.32
Same	0.48	0.43
Worst	0.38	0.26
Total	1.00	1.00

Source: LAPOP 2019

Only 30% of respondents say they have any or too much interest in politics. 23% said they sympathized with a party, 45% of those with the PT, 7% with the PSDB, and the same proportion with the MDB. These numbers are in line with research on party identification in Brazil. The surprise is that 20% of those who said to sympathize with any party has pointed out to the PSL, Bolsonaro's party, until recently an unknown and insignificant political organization.

Among those who voted for Bolsonaro, anti-PT attitudes are more robust, as expected. On a scale ranging from 1 to 10 -where 1 means does not like the party at all- the average PT score is 4 for the whole sample. Among the bolsonaristas, the score drops to 2,4. In comparison, the PSDB's average score was 3,6 and MDB's was 3,3.

Preliminary conclusions

In brief, Bolsonaro seems to have conquered a niche of conservative supporters regarding moral values, mobilizing people that identify themselves with the political right, support law and order policies, are critical to the PT but are not anti-systemic or specially disaffected towards democracy. Voters that, under different circumstances, could have chosen other conservative candidates not necessarily from the extreme-right.

In October 2018, the newspaper *Folha de S.Paulo*, using survey data from *Datafolha*, arrived at a similar conclusion:

Despite having chosen Jair Bolsonaro (PSL) as president on Sunday (28), the Brazilian population is opposed to the retired Army captain on central issues of his governmental proposals or his rhetoric: freedom for arms possession by civilians; criticism of homosexuals; and the defense of the military dictatorship. (Seto, 2018)

How to reconcile those findings with the image of a polarized political scenario? How can we explain that supporters of the current extreme-right populist president value democracy, trust institutions and identify themselves with parties as much as other voters? How can we understand that such voters have chosen a president that routinely displays anti-democratic behavior and rhetorics and jeopardizes fundamental rights? We think that the literature on populism or on the rise of the extreme right in Europe helps us little.

Conventional wisdom has pointed out to the importance of anti-system feelings, to the emotional rejection of politicians and parties leading to the choice of the candidate that presented himself as an outsider.

On the other hand, in the academic field, there are some alternative theories. One is antipetism (Samuels & Zucco, 2018): people voted against the party that ruled Brazil during 14 years. Another one rests on the literature on voting behavior and may give us some interesting hints. Both the directional theory of voting (Rabonowitz & Macdonald, 1989) and the discount theory (Grofman, 1985; Adam, Merrill and Grofman, 2001; Tomz and Van Howeling, 2008) argue that, under certain circumstances, it is rational for relatively moderate voters to support more radical candidates. In presidential regimes, in times of great conflict between the executive and the legislature, or when exogenous restrictions, such as economic crises or pressure from external agents, limit the government's range of maneuver, voters discount the Executive's ability to implement its proposals. Therefore, they will accept a radical agenda aware that it is probably unfeasible. Empirical evidence shows that this occurred in France in 1988 and Norway in 1989 (Adam, Merrill, Grofman, 2001) and, more recently, experiments confirmed that moderate or poorly politicized voters tend to discount the candidate's radical promises (Tomz & Van Howeling, 2008) .

In Brazil, between the mid-1990's and the mid-2010's, the executive and legislative cooperated to solve what was then seen as the country's most pressing problems: inflation and poverty. Therefore, the voters behaved according to the Downsian model, choosing the proposals closest to their ideal point. After the 2013 events, political polarization has increased, cooperation between the executive and the legislature deteriorated, and there has been little progress in solving problems that came to be considered severe, such as unemployment and corruption. The average voter may have started to discount candidates' ability to implement solutions and support more extreme proposals. In Bolsonaro's election, many of his voters could have put his most extreme statements into perspective.

In this article we cannot test the hypothesis suggested by those theories. However, we can ask ourselves about the consequences of this type of electoral behavior in comparison to the theory of populism. Only time will tell which of these models better explain what has happened.

Bibliographic references

- Abramowitz, A. (2010) *The disappearing center - Engaged citizens, polarization and American Democracy*, New Haven, Yale University Press.
- Donahue, K. & Heck, P. (2019) *Cycles of hatred and rage - What Right-wing Extremists in Europe and their parties tell us about the US*, Switzerland, Palgrave - Macmillan
- Dornbusch, R. & Edwards, S. (1991) "The Macroeconomics of Populism". In Dornbusch, R. & Edwards, S. (ed.) *The Macroeconomics of Populism in Latin America*, Chicago, University of Chicago Press.
- Eichengreen, B. (2018) *The populist temptation - Economic grievance and political reaction in the modern Era*, Oxford, Oxford University Press.
- Finchelstein, F. (2019) *From fascism to populism in history*, Oakland, California University Press.
- Frank, T. (2016) *Listen liberal: what happened to the party of the people?*, Australia, Scribe Publishing.
- Ginsburg, T. & Huq, A.Z. (2018) *How to save a constitutional democracy*, Chicago, University of Chicago Press.
- Green, J. & McElwee, S. (2019) "The differential effects of economic conditions and racial attitudes in the election of Donald Trump", *Perspectives in Politics*, N° 17, pp. 358-379.
- Hochschild, A.R. (2016) *Strangers in their own land: anger and mourning on the American Right*, New York, The New Press.
- Judis, J. (2016) *The populist explosion: how the great recession transformed American and European politics*, New York, Columbia Global Reports.
- Krastev, I. (2013) *Democracy disrupted*, Pennsylvania, Penn University Press.
- Laclau, E. (2005) *La Razón Populista*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018) *How democracies die*, New York, Crown Publishing.
- Lilla, M. (2017) *O progressista de ontem e o do amanhã*, São Paulo, Cia. das Letras.
- Major, B., Blodorn, A., & Blascovich, G. (2018). "The threat of increasing diversity: Why many White Americans support Trump in the 2016 presidential election", *Group Processes & Intergroup Relations*, N° 21, pp. 931-940.
- Mann, T. E. & Ornstein, N.J. (2018) *It's even worse than it looks was: How the American constitutional system collided with the new politics of extremism*, New York, Basic Books.
- Norris, P. & Inglehart, R. (2019) *Cultural Backlash - Trump, Brexit and Authoritarian Populism*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Milanovic, B. (2010) *The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality* Basic Books, New York.
- Moffit, B. (2016) *The global rise of populism: performance, political style and representation*, Stanford, Stanford University Press
- Mouffe, C. (2019) *Por un populismo de izquierda*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Mounk, Y. (2018) *The people vs democracy*, Cambridge University Press.
- Mudde, C. & Kaltvasser, C.R. (2017) *Populism: a very short introduction*, Oxford University Press, New York.
- Müller, J.W. (2017) *What is Populism?*, Penguin Books/ Random House.
- Rodrik, D. (2018) *Populism and the Economics of Globalization*, Copy at <http://j.mp/2sowhXj>.
- Samuels, David J. Zucco, C. (2018) *Partisans, antipartisans, and nonpartisans: Voting behavior in Brazil*. Cambridge University Press.
- Seto, G. (2020) "Eleitorado discorda de Bolsonaro sobre armas, ditadura e críticas a homossexuais, diz Datafolha". *Folha de São Paulo*, 2018. Available in <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/eleitorado-discorda-de-bolsonaro-sobre-armas-e-criticas-a-homossexuais-diz-datafolha.shtml>. Accessed march 31st, 2020.
- Traverso, E. (2017) *Las nuevas caras de la derecha*, Argentina: Siglo XXI.
- Vance, J. D. (2018). *Hillbilly elegy: a memoir of Family and Culture in crisis*, New York, Harper.

Anexo 1 **Vote for Bolsonaro** according to sociodemographic and economic characteristics

	Vote for Bolosnaro
Age	0.013 (0.016)
Sex (Woman)	-0.668 (0.448)
Income 2 a 3 SM	0.309 (0.662)
Income 3 a 4 SM	0.189 (0.901)
Income 4 a 5 SM	-0.114 (0.851)
Income > 5 SM	0.227 (0.948)
Indigenous	-1.057 (2.025)
Black	-0.511 (0.664)
Brown	-0.459 (0.564)
Other	0.201 (2.162)
Yellow	-0.709 (1.073)
Northeast	-0.934 (0.894)
Middle-West	-0.075 (1.112)
Southeast	-0.089 (0.858)
South	0.085 (1.032)
Protestant, Traditional Protestant or Non-Evangelical Protestant	0.469 (0.741)
Non-Christian Eastern Religions	1.039 (4.089)
None (Believe in a Higher Self but do not belong to any religion)	-0.393 (0.755)
Evangelical and Pentecostal	1.025* (0.617)
Traditional Religions	-0.929 (1.735)
Agnostic or atheist (does not believe in God)	0.447 (1.628)
Other	-0.309 (1.757)
Kardecist Spiritist	-0.590 (1.393)
Prty Id	0.022 (0.513)
Constant	0.338 (1.206)
Observations	945
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Anexo 2 Ideological self-positioning according to socioeconomic characteristics and vote

	Position on the left-right scale
Age	0.013 (0.020)
Woman	-0.529 (0.554)
Income 2 a 3 SM	0.451 (0.810)
Income 3 a 4 SM	0.722 (1.086)
Income 4 a 5 SM	0.656 (1.083)
Income > 5 SM	0.733 (1.132)
Indigenous	0.556 (2.582)
Black	-0.599 (0.822)
Brown	-0.305 (0.700)
Other	0.184 (2.574)
Yellow	-0.669 (1.351)
Northeast	-0.240 (1.121)
Middle-West	0.037 (1.396)
Southeast	0.0001 (1.072)
South	-0.532 (1.270)
Protestant, Traditional Protestant or Non-Evangelical Protestant	0.453 (0.948)
Non-Christian Eastern Religions	2.043 (5.232)
None (Believe in a Higher Self but do not belong to any religion)	-0.138 (0.941)
Evangelical and Pentecostal	0.461 (0.728)
Traditional Religions	-0.061 (2.029)
Agnostic or atheist (does not believe in God)	0.496 (1.967)
Other	1.423 (2.182)
Kardecist Spiritist	0.816 (1.847)
Vote for Bolsonaro	1.491** (0.582)
Constant	4.891*** (1.552)
Observations	894
Log Likelihood	-2,180.597
Akaike Inf. Crit.	4,411.194
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Hugo Quiroga
haquiroga@fibertel.com.ar
Universidad Nacional del Litoral
Argentina

Recibido: 07/11/2019
Aprobado: 06/02/2020

Decisionismo democrático y emergencia permanente

Consideraciones políticas sobre la Argentina actual

Resumen

Desde 1989 la democracia argentina no pudo prescindir del ejercicio de los poderes excepcionales y se alejó de aquella concepción que proclama la separación de poderes y los controles mutuos, que examina las posibles arbitrariedades de los gobiernos de turno. Cuando se refuerza al ejecutivo, el parlamento pierde poder y capacidad de control. Se trata de una verdadera práctica de gobierno denominada decisionismo democrático. En los hechos, es un medio para gobernar sin el respaldo central del Parlamento, que ya ha resignado atribuciones en determinadas materias mediante la delegación legislativa. El interrogante que conmueve y que atraviesa el contenido del artículo es saber si en la Argentina se puede gobernar sin acudir al decisionismo democrático. La prórroga ininterrumpida de la situación de emergencia la enviste de un carácter estructural, lo que refleja un cambio en la base del poder. En consecuencia, la emergencia permanente –soporte del decisionismo democrático– domina los asuntos más variados de la vida colectiva. La matriz del decisionismo democrático no se explica, entonces, sin la conexión estructural de los tres poderes del Estado. La práctica del decisionismo democrático exige una combinación del gobierno de los hombres, del gobierno atenuado del Estado de derecho y de la ausencia de poder de contralor.

Palabras clave

Democracia, decisionismo, emergencia, ejecutivo, parlamento.

Abstract Since 1989, Argentinian democracy could not forego the exercise of the exceptional powers and separated from that concept that proclaims the division between the powers and mutual controls, that examines the possible arbitrariness of the current governments. When the executive power is reinforced, the parliament loses power and the capacity to control. We are talking about a true governmental practice called democratic decisiveness. Indeed, it is a mode of government without the central support of the Parliament, as it has resigned attributions in certain matters through the legislative delegation. The question that triggers and thrills the content of the article is whether government can be exercised without democratic decisiveness. The uninterrupted extension of this emergency situation is of structural character. This reflects a change in the power basis. Thus, the permanent emergency- support to the democratic decisiveness- rules the most varied topics of collective life. The democratic decisiveness matrix is not explained, thus, the structural connection of the three powers of the State is missing. The democratic decisiveness is a combination of the Government of men, of the diminished government of the State of rights and the lack of controlling power.

Keywords Democracy, decisiveness, emergency, executive, Parliament.

Introducción En 1989, la alta inflación dejó paso a la hiperinflación en uno de los peores escenarios económicos imaginables para la Argentina contemporánea. Desde entonces se vive en *emergencia permanente*, y la idea de permanencia refuerza el oxímoron, que origina un nuevo sentido en un *continuum* que no diferencia signos políticos. Bajo el lema de la emergencia, los poderes ejecutivos adquieren facultades legislativas extraordinarias, tanto en épocas de crisis severas como en tiempos de normalidad. La emergencia y los poderes excepcionales van de la mano.

La *emergencia* es un término ambiguo, equívoco y genérico, tal como se usa en este texto, que no se restringe a la administración de gobierno durante crisis agudas o de situaciones de violencia extrema: con él se alude también a la administración de un amplio campo de asuntos múltiples en tiempos políticos normales. La emergencia resulta ser, con frecuencia, el recurso de un largo fracaso de políticas de gobierno. Aunque cambie de calado, la emergencia es siempre una situación extraordinaria, fáctica, originada por un desorden intenso o por las deficiencias en la capacidad de gobernar que resulta una amenaza, un desafío o una advertencia para la integridad de las instituciones, del orden social y de la calidad de vida de la población.

En estas circunstancias, se le confieren poderes excepcionales al ejecutivo y se le permite legislar de manera directa, a través de las llamadas *medidas de emergencia*: **Decretos De Necesidad y Urgencia, Delegación Legislativa y Veto Parcial**. El Estado de derecho no desaparece, como lo indicaría una perspectiva *decisionista* schmittiana, pero lo atenúa; y la emergencia encuentra una legislación excepcional que la regula. Naturalmente, se trata de un derecho de crisis. El poder se concentra en el ejecutivo en desmedro de las atribuciones del legislativo. La legalidad atenuada es la forma jurídico política que puede adquirir un Estado democrático en períodos de crisis.

1. La noción *decisionismo democrático* es de mi autoría y ha sido tratada en profundidad en Quiroga (2005).

2. Esta denominación atribuida a Joseph Schumpeter tiene un antecedente en Rudolf Goldscheid, quien en 1917 previó el Estado fiscal y creó el concepto de *sociología fiscal*. Schumpeter le atribuye el mérito de haber sido el primero en proponer una nueva concepción de la historia de las finanzas al afirmar que el presupuesto es el esqueleto del Estado una vez que ha sido despojado de sus ideologías tramposas.

Cuando se refuerza al ejecutivo, el parlamento pierde poder y capacidad de control. Se alude a una *matriz de pensamiento* denominada *decisionismo democrático*¹: esencialmente, **un gobierno del Ejecutivo que le incorpora poderes incontrolados al presidencialismo**. Sin embargo, la decisión es un proceso o una actividad compartida, de modo complicado y diverso, por dos sujetos institucionales: el Ejecutivo y el Parlamento. En definitiva, el *decisionismo democrático* no lo es tanto por afectar los derechos individuales (la libertad de expresión de asociación, etc.) como por restringir la deliberación pública, por dañar al parlamento como órgano de codecisión y contrapeso institucional, y por desvalorizar a la justicia. Sólo a través del Parlamento la decisión política adquiere carácter público: el derecho se atenúa cuando desaparecen la certidumbre y la previsibilidad de la deliberación pública.

El *decisionismo democrático* es un **modo no republicano de ejercicio del poder**. La voluntad del líder decisionista se antepone a las instituciones y a sus reglas, y a los contextos deliberativos. La lógica decisionista, la voluntad del Presidente, se impone sobre la lógica deliberativa. Sin debate no hay intercambio de opiniones. Un ejecutivo vertical y concentrado se vuelve autosuficiente y se encierra en sí mismo, en su propio laberinto. De ahí, sin dudas, la necesidad de revitalizar al Parlamento como espacio de deliberación pública.

La matriz decisionista abre las puertas a una verdadera *práctica de gobierno* que le rinde culto al altar de los plenos poderes. En los hechos, es un medio de **gobernar sin el respaldo primordial del Parlamento**, que ya ha resignado atribuciones en determinadas materias mediante la delegación legislativa. La práctica del *decisionismo democrático* exige una combinación del gobierno de los hombres, del gobierno atenuado del Estado de derecho y de la ausencia de poder de contralor. Este poder no solo hace referencia al control de las instituciones, sino también a la acción fiscalizadora de la ciudadanía

Por otra parte, la *emergencia*, en su interpretación más amplia, se asocia a la idea del Estado moderno definido como Estado fiscal (Schumpeter, 1984: 233)², en 1918. Esta concepción que nos instala en la sociología de las finanzas entiende que el presupuesto es el esqueleto del Estado despojado de sus *ideologías tramposas*. Son las necesidades fiscales las que dan origen al Estado moderno (Schumpeter, 1984). Así, las necesidades públicas que todo Estado debe cubrir y resguardar en su comunidad social abre paso a un sistema de imposición para satisfacerlas. Dado que Estado e Impuesto están estrechamente ligados, es legítimo preguntarse si se puede comprender la naturaleza del Estado partiendo de esa relación. Así como las exigencias financieras han hecho nacer al Estado y lo han modelado, el Estado, con posterioridad, es el que modela la vida financiera e interviene en la economía.

La democracia argentina convive con décadas de alta inflación, con una economía bi-monetaria, con elevados niveles de presión fiscal, con constantes devaluaciones, y con largos períodos de estancamiento económico. Luego de treinta y seis años de democracia, la continuidad de la emergencia permanente refleja un cambio en la base del poder del sistema político que acrecienta la incertidumbre institucional. Este es uno de los graves problemas de la democracia argentina, ¿será un síntoma estructural de su decadencia? Desde esos trazos críticos surge la pregunta que hilvana las páginas que siguen ¿es posible gobernar sin el decisionismo democrático, sin la invocación permanente a la emergencia? Seguidamente nos abocaremos a pensar el presente y sus retos.

La reforma del Estado y de la economía como resultado de la legislación de emergencia

Carlos Menem triunfó en las elecciones de 1989, frente al radical Eduardo Angeloz, con un discurso de corte populista, que inmediatamente dejó a un lado para aplicar desde el primer día de la función pública un programa de signo opuesto. La Argentina conoció así una situación inédita. Fue el liberalismo económico el que proporcionó a un gobierno justicialista el contenido de las políticas públicas orientadas a la resolución de la crisis, en una manifiesta comprensión de la necesidad de adaptación a los cambios de época, propio del histórico pragmatismo peronista.

El gobierno de Raúl Alfonsín, primer presidente de la democracia recuperada en 1984, puso en evidencia la debilidad de la autoridad presidencial para controlar las principales variables macroeconómicas, en un momento en que la economía estuvo al borde del colapso fiscal. La crisis económica encontró su más alta expresión en el estallido hiperinflacionario de 1989, que desestabilizó la sociedad entre los meses de febrero y julio, al final del mandato radical; el fenómeno volvió a repetirse en el mes de diciembre durante el gobierno del presidente Menem.

El *establishment* argentino halló en el gobierno de Menem una opción pragmática frente a la gravedad de la crisis. En tres horizontes simultáneos se proyectaron los objetivos del programa neoliberal que procuró instalar una economía de mercado:

- ♦ la liberalización de la economía (apertura comercial y libre circulación de capital)
- ♦ la reforma del Estado (privatizaciones de las empresas públicas)
- ♦ la desregulación (mínima intervención del Estado).

El diagnóstico neoliberal dominante en el mundo desde comienzo de los años 80 del siglo XX, representado por el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y la administración del presidente Reagan en Estados Unidos, adquirió diferentes manifestaciones nacionales. Sin embargo, con mayor o menor énfasis en las argumentaciones, con diferencias prácticas y conceptuales, existió un común denominador en la caracterización de la resolución de una crisis juzgada como universal: la apertura económica, las privatizaciones, las desregulaciones y la búsqueda del equilibrio fiscal.

El objetivo primordial en el corto plazo de la estrategia neoliberal ha sido la superación de la crisis fiscal. Así, la reforma del Estado apuntó a recortar actividades y servicios demandantes de recursos. En el caso argentino encontramos un buen ejemplo de una visión fiscalista de la crisis económica y, por tanto, de la reforma del Estado, que se puede remontar sin duda a la interpretación temprana de Schumpeter. Nadie podría ignorar, por cierto, la vigencia de la crisis fiscal. Schumpeter comprendió que el excesivo gasto público amenazaba con la estabilidad del Estado fiscal, razón por la que podía ser desbordado. Las “sobrecargas” en el sistema político provocaron un colapso que fue convertido en el mundo contemporáneo en un *Estado de gastos*. El Estado de bienestar clásico no sólo estaba en crisis, cuestionado por su inviabilidad fiscal como Estado de gastos, sino que fue perdiendo legitimidad en su propia base social. Se sabe que el gasto público fue motor del crecimiento en un período del siglo XX: entre 1945 y 1975. En los hoy llamados *treinta gloriosos años*, el Estado de bienestar (que más allá de todas sus críticas como realización humana todavía no ha sido superado) fue orientado mediante sus políticas sociales a compensar diferencias y a ampliar los márgenes de inclusión social, sin que ello fuera en detrimento del principio de libertad.

Con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, luego de algunos desaciertos del presidente Menem, comenzó una nueva etapa en la economía argentina, con la sanción de la **Ley de Convertibilidad N° 23.928**, en marzo de 1991. Con el régimen de Convertibilidad se estipuló un sistema monetario con una tasa de cambio fijo que es-

tablecía la paridad, uno a uno, del peso con el dólar. Se exigió igualmente que el Banco Central mantuviera reservas en divisas que totalizaran el 100% de la base monetaria interna. Al reestablecer la confianza en la moneda, la convertibilidad redujo la inflación y restauró la estabilidad macroeconómica. Una vez que la inflación fue controlada, desapareció la causa principal del desconcierto, el miedo y el desánimo de la ciudadanía, y la estabilidad de la moneda se convirtió progresivamente en el nuevo valor por respetar y defender. El éxito del plan de convertibilidad fue haber terminado (durante un cierto tiempo) con la Argentina inflacionaria. Pareciera que ese fue el sentido de la reforma estructural. Sin embargo, en 1999 los hechos demostraron que la convertibilidad ya había perdido su razón de ser.

De acuerdo con cierta literatura, las decisiones de Menem no fueron parte de un plan de estabilización más, sino una verdadera reforma estructural, como también las medidas neoliberales ya anunciadas. La meta del plan económico de Cavallo iba más allá de la reducción inflacionaria para establecer un nuevo y perdurable régimen monetario y cambiario (Gerchunoff y Torre, 1996). Los éxitos de ese plan quedaron demostrados con el paso del tiempo, y los problemas de fondo quedaron sin resolver.

En el amanecer de la década del 90, en América Latina se instaló la necesidad de reforma del Estado con una visión ortodoxa: las reformas estructurales de Menem en Argentina se instalaron bajo el signo de la *emergencia* y de *poderes excepcionales*. Como gobierno de crisis, el presidente Menem no solo exigió y usó medidas de emergencia, sino que su lógica decisionista democrática lo alentó en la concentración consciente del poder, imponiéndose sobre la lógica deliberativa. El *decisionismo democrático* no solo es un modo de tomar decisiones, es además un modo no republicano de ejercicio y funcionamiento del poder.

El Congreso de la Nación le transfirió atribuciones y competencias propias al Poder Ejecutivo para encarar las innovaciones en la economía y en la reforma del Estado. Así surgieron la **Ley de Reforma del Estado N° 23.696** (agosto de 1989) y la **Ley de Emergencia Económica N° 23.697** (septiembre de 1989). Como se adelantó, estos poderes excepcionales, que se unieron al dictado de los **Decretos De Necesidad y Urgencia (DNU)** y al veto parcial, ampliaron la esfera acción del Presidente y le otorgaron facultades legislativas directas para ejecutar las reformas propuestas. Los poderes excepcionales del Presidente fueron recién incorporados al texto constitucional con la reforma de 1994, con posterioridad a las dos leyes aludidas. En definitiva, la fuerte autoridad del presidente Menem nació de la *emergencia hiperinflacionaria* de 1989/1990.

A pesar de las oposiciones (en particular de los empleados públicos) primó un clima favorable entre los ciudadanos en el momento de la implementación de la primera etapa de la reforma del Estado. El sostén principal del proceso modernizador provino de la fortaleza de un gobierno que encontró su fuente de autoridad en la memoria de la emergencia hiperinflacionaria y en una sentida demanda de reorganización de la economía. La cultura estatista y populista de décadas empezó a resquebrajarse, abriéndose paso otra de raigambre librecambista y defensora de la iniciativa privada, más acorde con el clima de época, sin renegar totalmente del Estado.

Una vez finalizadas las principales reformas del mercado y del Estado, que clausuraron el ciclo de la economía mixta, se inauguró oficialmente a mediados de 1996 la **segunda etapa de la reforma del sector público**. La intención del gobierno era avanzar con la desregulación del mercado laboral y del sistema de salud. Nuevamente el Congreso Nacional mediante la **Ley N° 24.629** autorizó al Ejecutivo a poner en marcha los temas de fondo pendientes. El **proyecto de flexibilización laboral** provocó un quiebre en la histórica relación entre las estructuras gremiales y el Partido Justicialista.

El logro de la década de gestión de Menem fue, sin duda, la estabilidad macroeconómica, que abrió paso al control de la inflación y la estabilidad monetaria, aunque de corta duración por la anexión del peso al dólar, que restringía las políticas monetarias y financieras del gobierno nacional. Pese a la aprobación que tuvo la reforma económica en nuestro país, especialmente entre 1991 y 1994, con la apertura de la economía, las privatizaciones y las desregulaciones, las políticas públicas aplicadas no se encaminaron en la dirección de un programa de transformación productiva. La convertibilidad, aunque exitosa, no pudo garantizar por sí misma el crecimiento.

Competencia política, desorden económico y financiero

En las elecciones nacionales de 1999 triunfó la **Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia (Alianza)**, una coalición entre la **Unión Cívica Radical** y el **Frente País Solidario (FREPASO)**. Ese triunfo fue percibido por la mayoría de la ciudadanía como el punto de partida de una renovación de la política, acompañada por el notorio entusiasmo colectivo. Por primera vez el peronismo era derrotado en las urnas estando en el gobierno, por una coalición que lideraban Fernando De la Rúa y Carlos *Chacho* Álvarez.

En esa oportunidad, el candidato presidencial del justicialismo, Eduardo Duhalde, fue derrotado en las urnas, pero la sociedad no le entregó todo el poder a la Alianza. Más allá del fracaso electoral, el peronismo logró retener su caudal tradicional de votos. Conservó, por ejemplo, los dos tercios de las principales gobernaciones, a lo que hay que sumar el control del Senado y una Corte Suprema integrada por una *mayoría automática* (proveniente del menemismo). Era más que evidente el alto poder que retenía el principal partido de la oposición.

Aquí surge un tema fundamental de la democracia: la *alternancia política*. Sabemos que la democracia no es posible sin el rol de la oposición y sin la presencia activa de la ciudadanía. Hasta 1989, el sistema político argentino no conoció la alternancia política. En este contexto, Juan Russo (2003) presenta la hipótesis de la *alternancia imperfecta*, en cuanto que la rotación de los partidos en el gobierno ha funcionado sin problemas. La salida anticipada de los presidentes Alfonsín y De la Rúa es un indicador de que la alternancia no se produce de forma completa sino parcial, es decir, peronistas y no peronistas alternan en el gobierno, pero sólo los peronistas finalizan sus mandatos. La hipótesis se funda en el sustancial desequilibrio de fuerzas entre los partidos, situación que favorece al Partido Justicialista y no así a las otras fuerzas políticas.

En rigor, se podría añadir sobre la base de los hechos históricos, y es lo que se analizará más adelante, que dos presidentes peronistas, Rodríguez Saá y Duhalde, no terminaron sus mandatos, aunque en circunstancias muy diferentes de sus antecesores Alfonsín y De la Rúa. Ambos presidentes justicialistas fueron designados por la Asamblea Legislativa, no fueron elegidos por sufragio universal, sino en virtud de un procedimiento constitucional por un período determinado -finalizar el mandato de De la Rúa-, que no concluyeron por haber presentado sus renunciaciones. Para seguir con la hipótesis mencionada, el problema no está en la ciudadanía sino en los partidos políticos que no han sido capaces de concluir con sus mandatos, aunque sí los fueron para ofrecer alternativas convincentes. Los dos episodios (Rodríguez Saá y Duhalde) sumados al de Fernando De la Rúa, advierten la presencia de un *patrón de inestabilidad presidencial* (Ollier, 2004) que el presidente Duhalde logró neutralizar, sin erradicarlo. Tiempo después, en otra circunstancia histórica y con otros actores políticos, se dio la posibilidad de que el gobierno no peronista de Mauricio Macri concluyera por primera vez con su mandato constitucional en diciembre de 2019.

Los desafíos de la Alianza no fueron pocos ni fáciles de resolver. De una coalición electoral exitosa, no pudo convertirse en una coalición gobernante estable y competente. Las promesas no fueron cumplidas: se prometió resolver un conjunto de problemas que tenían que ver con la regresividad del ingreso y la búsqueda de igualdad social, con los deseos de seguridad, con la eliminación de la corrupción y con la mejora en la calidad de las instituciones públicas, especialmente las que imparten justicia. Se pretendía reemplazar a la *vieja política* por la *nueva política*, en otras palabras, moralizar la política, regenerar las instituciones públicas y ampliar la participación civil.

Dijimos que la estabilidad de la moneda se había incorporado como un valor en la sociedad con el **Plan de Convertibilidad** de Cavallo. Por esa razón, el primer ministro de economía de la Alianza, José Luis Machinea, no tuvo muchas opciones más que reafirmar las *reglas macroeconómicas básicas*, esto es, la continuidad de la convertibilidad y la búsqueda del equilibrio fiscal. Cuando la sociedad percibió que no se modificarían las reglas de la macroeconomía, en ese instante la Alianza se convirtió en verdadera opción de poder. La estabilidad de la moneda era un valor fundamental, que los argentinos no querían arriesgar con propuestas o soluciones que evocaran incertidumbre. La sociedad no sabía que la convertibilidad ya se había agotado en tanto instrumento de política económica, por ser un régimen cambiario. Los dirigentes políticos, por temor a malograr su poder y para evitar protestas, no se atrevieron a modificar ese régimen cambiario.

Dos hechos significativos revelaron tanto la crisis política como el fracaso de la propuesta económica de la Alianza:

- ◆ los sobornos en el Senado, con la consiguiente renuncia del vicepresidente Álvarez
- ◆ la incorporación al gabinete de Domingo Cavallo como ministro de Economía.

Carlos *Chacho* Álvarez renunció en octubre de 2000, diez meses después de haber asumido al cargo, debido a las denuncias de sobornos contra senadores del peronismo y del radicalismo que habrían incurrido en ese delito para aprobar la **Ley de Reforma Laboral**, enviada al Parlamento por el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique (proveniente del FREPASO), uno de los principales sospechosos de haber participado en la organización de los sobornos. Los escándalos en el Senado fueron reveladores de la necesidad de cambios fundamentales. La inacción del presidente De la Rúa fue muy clara. Pero hubo también un juego de complicidades en sectores de los dos partidos mayoritarios, peronismo y radicalismo.

En materia económica, la Alianza no lograba superar los problemas provocados por el proceso recesivo que había comenzado en 1998, mientras se decidía mantener a rajatablas la convertibilidad. El presidente De la Rúa a poco de asumir también apeló a la **Ley de Emergencia Económica Financiera N° 25.344**, de noviembre de 2000, en cuyo artículo 1 se declaraba *en emergencia la situación económico-financiera del Estado nacional* por un año, luego fue prorrogada por otro año mediante el **Decreto N° 1602/2001**. La Alianza careció de una estrategia de desarrollo coherente para mejorar la economía a largo plazo, que fuera más allá de los imperativos de estabilidad y ajuste a corto plazo. A su vez, la convertibilidad ya se había transformado en un freno para el desarrollo: la recesión transformada en depresión dificultaba la recuperación de la economía.

La llegada de Cavallo al gobierno suscitó esperanzas de una rápida reactivación, porque aún estaba muy fresca en la memoria de los argentinos la fuerte recuperación de 1991. La sociedad creyó que el prestigio internacional de Cavallo y su pericia podían volcar la voluntad de los mercados y encaminar en poco tiempo la economía. Su programa

económico, que incluyó en distintos momentos el **Plan de Competitividad**, la **Convertibilidad Ampliada**, el **Megacanje**, el **Déficit Cero**, resultó insuficiente para frenar la debacle y evitar las corridas sobre los depósitos bancarios. El destino del gobierno de la Alianza comenzaba a definirse.

A comienzos de diciembre de 2001, el gobierno nacional, mediante DNU, estableció importantes modificaciones a los movimientos de fondos y a las operaciones financieras. Había nacido la era del *corralito*, que fijó restricciones por 90 días para retirar dinero efectivo de las cuentas bancarias. Además, el plan definió un severo control para el envío de divisas al exterior. A esta altura de las circunstancias, los grandes depósitos ya se habían retirado del país, por diversas vías: sólo quedaban cautivos los pequeños y medianos ahorristas. El 19 de diciembre, Cavallo presentó su renuncia: aunque fue un alivio para casi todos, resultó demasiado tarde.

Quizás es el momento para volver la vista sobre la idea del *decisionismo democrático*. El estilo político del presidente De la Rúa no fue similar al de su antecesor: menos audaz y transgresor y más respetuoso de la ley, al mismo tiempo que moderado y vacilante. La consecuencia más notoria fue la crisis de autoridad pública en un país hiperpresidencialista.

Sin embargo, la lógica de la *emergencia permanente* funcionó de la misma manera que durante el gobierno de Menem, con el ánimo de resolver los problemas presentados por la economía. Cavallo exigió y obtuvo poderes excepcionales para el Presidente. El contexto de emergencia es siempre amplio y ambiguo. De la Rúa firmó, en los primeros cinco meses de gobierno, 19 DNU, uno más que los dictados en el mismo lapso por Carlos Menem. En 2001, el presidente De la Rúa presentó su renuncia en la mayor soledad política, acosado por la gravedad de la crisis y arrinconado por los estallidos sociales, con un amplio saldo de muertos (calculado en 28 personas) y los *cacerolazos* de la clase media. Inútil fue el intento final de convocar al peronismo a una propuesta de cogobierno.

Crisis de representación, hiperinflación y disgregación de los partidos

En 2001, el fin de la Alianza y el derrumbe de la convertibilidad componen el fundamento de un período signado por la **inestabilidad institucional** (al menos en un primer momento) y la **devaluación de la moneda nacional**. Tras la renuncia de De la Rúa el peronismo vuelve al poder en la Argentina, pero esta vez sin un liderazgo definido, fragmentado como partido, con gran poder de los gobernadores y con diferentes posiciones frente a la transición política, o mejor, frente a un *gobierno de crisis*. Quedaba claro que el partido peronista, con sus diferencias, era el sucesor natural del poder (recordemos que el vicepresidente Álvarez había renunciado) y el único protagonista en la organización de la crisis. Pero ésta fue más allá de las presidencias ocasionales. Se antepusieron los problemas propios a la resolución de un momento crítico del Estado argentino.

El senador **Ramón Puerta** fue el primer presidente provisional designado por la Asamblea Legislativa, entre el 21 y 23 de diciembre de 2001. La sucesión presidencial está regulada por la Constitución y la Ley de Acefalía. Puerta ejerció transitoriamente el poder ejecutivo hasta una nueva convocatoria a la Asamblea Legislativa. Así, el senador **Adolfo Rodríguez Saá** fue designado presidente provisional por el término de 90 días con la obligación de convocar a elecciones generales para el 3 de marzo de 2002, con segunda vuelta prevista para el 17 del mismo mes, con la finalidad de elegir al presidente que completaría el mandato de Fernando De la Rúa.

Al tomar posesión del cargo, Rodríguez Saá anunció la cesación de pagos de la deuda externa, la continuidad de la convertibilidad y las restricciones que pesaban sobre el retiro

de sueldos, la creación de una tercera moneda para reemplazar los bonos en circulación y la generación de un millón de empleos, con un discurso demagógico y un gesto triunfalista, ante una Asamblea Legislativa que se mostró exultante y se puso de pie cuando escuchó la suspensión del pago de la deuda. Algunos sectores quedaron atrapados por el encanto de las soluciones mágicas. El presidente del *default* ambicionaba quedarse por más tiempo del que había sido designado, pero sólo pudo permanecer una semana en el gobierno. Rodríguez Saá renunció el 30 de diciembre, cuando la mayoría de los gobernadores peronistas le restó su apoyo al proyecto de quedarse en el gobierno hasta el 30 de diciembre de 2003 (fecha de finalización del mandato de De la Rúa). Finalmente, el senador **Eduardo Camaño** se convirtió en el tercer presidente provisional, desde la renuncia de De la Rúa. Ocupó el cargo durante dos días, desde el 30 de diciembre hasta el 1 de enero. En el término de 12 días, entre el 20 de diciembre y el 1 de enero, se sucedieron cuatro presidentes peronistas. Ello revelaba las dificultades para constituir un gobierno de crisis y asegurar estabilidad después del colapso institucional. Asomaron sin reservas el nivel de las luchas internas y la fragmentación del peronismo.

El 2 de enero de 2002, la Asamblea Legislativa eligió a **Eduardo Duhalde** por el término de dos años hasta completar el mandato de la Alianza. Aunque tampoco pudo terminar su mandato (se retiró seis meses antes) gozó de un poder legal y legítimo: dejó un país más o menos estabilizado, convocó a elecciones y entregó el gobierno al presidente electo. Únicamente un colapso institucional, con sus circunstancias especiales, puede explicar que recién con la designación del quinto presidente se haya podido finalizar el mandato de la Alianza, que concluía en diciembre de 2003. Tengamos presente que entre el 20 de diciembre de 2001 y el 27 de abril de 2003 (elección de Néstor Kirchner) pasaron por la Casa Rosada cinco presidentes. Sin tiempo para analizarlas aquí, a partir de las elecciones de 2003 hay una reconfiguración del sistema político.

En la primera semana de enero de 2002, el Congreso aprobó la **Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario N° 25.561**, prorrogada año tras año hasta diciembre de 2017. Una ley de carácter transitorio -pensada para una situación de crisis- se extiende en el tiempo (quince años) y termina regulando un vasto universo de asuntos gubernamentales en épocas de normalidad. Recordemos el contenido del Artículo 1°:

Declárase con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76° de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente.

La norma le concedía extensas facultades al presidente: entre otras cosas, de fijar el tipo de cambio, la restructuración de las deudas con los bancos y el control de precios de insumos, bienes y servicios básicos. Con esta iniciativa, Duhalde se convertía en el presidente de la *devaluación*, acompañado por su ministro de economía Remes Lenicov. La salida de la convertibilidad se hizo a través de una fenomenal devaluación.

El gobierno de Duhalde continuó profundizando las restricciones al régimen bancario y cambiario, sin el ineludible respeto al derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional. Sin seguridad jurídica, la ciudadanía se encontró en un estado total de indefensión, lo que abrió el camino de la justicia. De tal manera, en virtud de la emergencia económica, la suerte del derecho de propiedad y la seguridad de los contratos quedó librada a la decisión de los gobernantes de turno, a pesar de que toda norma de excepción encuentra sus límites en la Constitución. Ninguna legislación de emergencia puede suprimir derechos constitucionales. El problema radicaba en el propio Estado que vulneraba la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Los argentinos sintieron

en carne propia los efectos arrasadores de un estado de cosas que prácticamente no reconocía antecedentes.

En un tiempo de conmoción profunda como el que se vivió a partir de diciembre de 2001- con señales previas y claras en las elecciones generales de octubre de ese año-, el que reaccionó con vehemencia fue el cuerpo social completo y detrás de esa reacción colectiva se encontraba agazapada la violencia. En efecto, la ira enardecía tanto a los ciudadanos que los dirigentes políticos no podían circular libremente por las calles ni asistir a lugares públicos sin temor a ser agredidos o repudiados, mientras el Congreso de la Nación permaneció vallado durante un buen tiempo. La reacción ciudadana golpeando cacerolas, la convocatoria de las asambleas vecinales y la protesta de los piqueteros en las calles fue una visible demostración del hundimiento del sistema de representación. La consigna **que se vayan todos**, coreada masivamente en las calles fue el símbolo de la indignación y la negativa a entablar una conversación, que se consideraba ya agotada, con los dirigentes tradicionales.

Con todo, la renovación política tan aclamada por la sociedad y prometida por el gobierno no se realizó, y al final del proceso **se quedaron todos**. El largo calendario electoral del año 2003 no hizo más que revalidar los títulos de aquella dirigencia política que participaba del poder entre fines de 2001 y principios de 2002.

Tengamos presente que el presidente Duhalde decidió acortar la duración del mandato otorgado por la Asamblea Legislativa para completar el período presidencial dejado vacante por De la Rúa, presionado por la represión a una marcha piquetera que causó dos víctimas en el mes de junio de 2002. La decisión, que pretendía alejar un factor de incertidumbre al adelantar el calendario electoral en el tenso clima social y político en que se vivía, trajo aparejados problemas de índole constitucional, por la rigidez de los mandatos en los sistemas presidencialistas. Las elecciones nacionales fueron convocadas para el 27 de abril de 2003 con entrega del poder el 25 de mayo.

El poder fiscal del presidente

Néstor Kirchner fue un gran arquitecto del poder durante los años de su presidencia (2003-2007). Desde la campaña presidencial de 2003, Kirchner proclamó el reemplazo de la cultura menemista neoliberal de los noventa por otra de carácter progresista, cuyos enunciados fueron los derechos humanos, la renovación de la Corte Suprema, el rol activo del Estado en el mercado interno, y la redistribución del ingreso, en el contexto de una pretendida renovación política. El poder decisionista que reviste el presidente pone de relieve la nueva etapa que se abre en la democracia argentina. El Ejecutivo funciona como una autoridad legislativa delegada, con especial énfasis entre 2003 y 2009.

La estructura jurídica del poder decisionista se asienta en un paquete de normas fundamentales, que diseña en los hechos un mapa distorsionado de los poderes públicos, alterando el equilibrio en la división de poderes. El eje de esta argumentación será la conexión entre el *decisionismo* y el *poder fiscal*. El centro del poder decisionista no se explica sin la “apropiación” del poder fiscal del gobierno federal, sin el manejo discrecional de los recursos fiscales por parte del presidente.

La actuación de un presidente decisionista en materia impositiva no puede ser arbitraria: hay un contrato constitucional que regula las competencias y atribuciones de los poderes públicos. Entre otros, hay dos principios fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes, íntimamente conectados, que pueden entrar en tensión con la

voluntad decisionista del ejecutivo, y como consecuencia de ello potenciar el conflicto entre norma y decisión. Por una parte, el **principio de la delegación legislativa** en el Ejecutivo y, por la otra, el **principio de legalidad tributaria**.

Mediante la **delegación legislativa**, el Congreso transfiere funciones legislativas al Ejecutivo, esto es, superpoderes, en determinadas circunstancias, que pueden o no designar situaciones de emergencia. Las razones de la delegación y su alcance fueron expresamente establecidas por la reforma constitucional de 1994. El Artículo 76° de la Constitución *prohíbe* la delegación de facultades legislativas en el poder legislativo (como regla general), *salvo* en materias determinadas de administración o emergencia pública. La norma autoriza esas excepciones bajo ciertas condiciones:

- ◆ que haya un plazo estipulado para su ejercicio
- ◆ dentro de las bases que el Congreso establezca.

Obviamente, vencido el plazo el Congreso recupera los poderes delegados. Ahora bien, la fórmula *materias determinadas de administración* es tan amplia y vaga que todas las materias de la administración pueden tener cabida en ella. La misma situación se presenta para el concepto *emergencia pública* que en su imprecisión puede dar lugar a los más variados abusos. Recordemos que la Ley de Emergencia Pública sancionada por Duhalde en 2002 finalizó en diciembre de 2017, con una vigencia de quince años.

El segundo principio se refiere a las **atribuciones presupuestarias del Congreso**. El Artículo 17° de la Constitución determina que sólo ese órgano puede imponer las contribuciones que se expresan en el Artículo 4°, para proveer los gastos de la Nación. En cuanto a la asignación de competencias, le corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, y establecer los derechos de importación y exportación (Artículo 75°, inciso 1). *No existe impuesto sin ley* (*no taxation without representation*) es la regla básica del derecho público, es el principio de reserva de la ley. En materia tributaria, entonces, no se puede admitir la delegación de facultades legislativas. Tampoco está autorizado el presidente a dictar DNU que regulen materia tributaria, lo prohíbe expresamente el Artículo 99°, inciso 2.

Otras de las facultades delegadas que favorecen la arquitectura del poder fiscal del presidente, en su fase de consolidación, son las que a continuación mencionamos a título ilustrativo.

Primero, la **delegación legislativa del Código Aduanero**, dictado por la dictadura militar de 1976, y aún vigente, que delega en el poder ejecutivo la facultad de establecer o modificar los derechos de exportación e importación (alícuotas), ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, entre otras atribuciones, con el objetivo de atender a las necesidades de las finanzas públicas. En base a esa delegación, el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, Martín LoustEAU, estableció a través de la **Resolución 125** las denominadas *retenciones móviles* (que originaron el conflicto con el agro durante ese gobierno nacional). En un universo tan ilegal, algunos fallos judiciales declararon la inconstitucionalidad de esa Resolución. El curso que tomó el conflicto con el campo obligó a la presidenta Kirchner a transformar dicha resolución en un proyecto de ley que fue discutido en el Congreso, que no fue aprobada merced al *voto no positivo* de Julio Cobos, vicepresidente de la Nación. Más allá del fracaso del gobierno, la sanción de una ley era el único procedimiento correcto para fijar los derechos aduaneros.

Segundo, la **creación de cargos específicos (Ley N° 26.095** de 2006), que confiere al Poder Ejecutivo la facultad de crearlos (y ajustarlos) para el desarrollo de obras de infraestructura energética que contribuyan a la expansión del sistema de generación transporte o distribución de los servicios de gas y electricidad, como aportes a los fondos

constituidos o a constituirse para el desenvolvimiento de dichas obras. Con este criterio, se crearon verdaderos tributos disimulados bajo la forma de cargos específicos. Se trata de una *asignación específica de tributos coparticipables*, que es una competencia exclusiva del Congreso, como lo determina el Artículo 75°, inciso 3, de la Constitución.

Tercero, los denominados **superpoderes**. En ese marco discrecional de la política, se sanciona en 2006 la **Ley N° 26.124**, que sustituye al Artículo 37° de la Ley de Administración Financiera. Por el nuevo texto se faculta al Jefe de Gabinete a disponer *las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades*. En suma, a través de los denominados **superpoderes**, el jefe de Gabinete puede ampliar el presupuesto (sin incluir los recursos provenientes del Tesoro Nacional: IVA, Ganancias, y Retenciones a las exportaciones), modificando su monto total, y reasignar partidas presupuestarias dentro del monto total aprobado.

En síntesis, el *decisionismo fiscal* es un legado que Néstor Kirchner deja a los futuros presidentes, y en los hechos significa fortalecer aún más a la autoridad presidencial. La primera beneficiaria de ese legado fue su propia esposa, Cristina Fernández de Kirchner, durante su desempeño presidencial (2007-2015).

Conclusión: desinstitucionalizar el decisionismo democrático

La estructura del poder decisionista se institucionaliza en la Argentina en un paquete de normas fundamentales -siempre a disposición de la voluntad presidencial -, que diseña en los hechos un mapa distorsionado de los poderes públicos. Ello pone en riesgo el equilibrio entre los principios e instituciones que garantizan la separación de poderes. Así, la matriz del *decisionismo democrático* no se explica sin la conexión estructural de los tres poderes del Estado, cuyas atribuciones y competencias han sido fijadas por la Constitución.

El terreno de la política es el terreno de la decisión. Pero la ciudadanía, una vez que votó, no puede ser un espectador imparcial de los asuntos públicos que homologa silenciosamente lo que el líder decisionista entiende como correcto. Los poderosos deben encontrar frenos internos, los contrapoderes institucionales (parlamento, justicia, órganos de control) y frenos externos, *contrapoderes sociales* (los movimientos libres de la sociedad). El *decisionismo democrático* involucra a los tres poderes públicos y a la ciudadanía. La democracia es como se hace.

Tanto en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner como en el de Mauricio Macri se utilizaron los poderes excepcionales. Ambos se valieron de la estructura de poder decisionista, con sus matices, y realidades diferentes. Macri no controló ninguna de las dos cámaras del Congreso, quizá eso explica que haya dictado más DNU que el primer gobierno de Cristina Kirchner. Por ejemplo, ambos efectuaron por DNU modificaciones presupuestarias (reforma del Artículo 37° de la Ley de Administración Pública). Sin embargo, y fue un hecho positivo, el presidente Macri no solicitó la prórroga de la Ley de Emergencia Pública de 2002, que venció en diciembre de 2017.

Con el actual gobierno de Alberto Fernández regresa la emergencia, en principio con más fuerza y amplitud que la sancionada por Duhalde. El Congreso sancionó una ley de emergencia en un trámite relámpago con la denominación **Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública**, aprobada en diciembre de 2019, **N° 27.541**. Esta medida de excepción establece en su Artículo 1°:

Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2, hasta 31 de diciembre de 2020.

3. La deuda equivale a 315.000 millones de dólares, lo que representa el 75% del PBI.

La delegación de facultades del Congreso en el Ejecutivo comprende nueve materias. Se le concede facultades excepcionales al Presidente para asegurar -entre otros fines- la sostenibilidad de la deuda pública y crear las condiciones para la sostenibilidad fiscal³. Asoma, aquí, el costado excepcional de la democracia y se opaca su costado deliberativo. Las facultades legislativas directas del presidente se amplían. Lo novedoso en esta nueva etapa política es que la emergencia no es únicamente un reclamo del orden nacional, sino que también se ha extendido al orden provincial y municipal.

En una renovada interpretación, el *Estado fiscal* se ha transformado en el mundo en un *Estado deudor* (Streeck, 2016) en la medida en que el Estado cubre una parte creciente de sus gastos a través de préstamos antes que de la recaudación de impuestos. En el caso argentino, el Estado debe financiar sus gastos a través de un abultado endeudamiento interno y externo y de una elevadísima carga tributaria.

Tras décadas de legislación de emergencia, la democracia argentina ha ido perdiendo espesor constitucional, consistencia republicana y calidad deliberativa. La emergencia no es la salida que autoriza y justifica todo, mucho menos en épocas de normalidad. Al contrario, la situación de emergencia permanente devalúa el Estado de derecho, puesto que el decisionismo democrático no respeta el reparto constitucional del poder, lo que daña al parlamento como órgano de codecisión y contrapeso institucional, y desvaloriza la justicia. Los problemas de gobernabilidad que se invocan no pueden justificar sin más la estructuración de una sociedad en permanente emergencia, como sucede con la Argentina.

Los peligros del estado de emergencia permanente están sobre la mesa, y resulta imperioso que nuestra sociedad aprenda a sobrevivir sin poderes excepcionales. El riesgo es si no se ha constituido ya una *cultura política decisionista* (como en su momento existió una cultura política pretoriana), en función de la cual se aceptan las medidas de emergencia como solución de los problemas colectivos. Como se dijo, el *decisionismo democrático* involucra también a la ciudadanía. En verdad, se necesita otro molde político-institucional y cultural, que extienda las bases de la decisión política representativa. Esas bases deben estar abiertas a los procesos de deliberación pública con participación ciudadana y a todas las instituciones que puedan, legítimamente, reclamar para sí el ejercicio del poder.

Hoy, el reclamo de emergencia se ha extendido a todos los niveles del Estado (nacional, provincial, municipal), lo que constituye una diversificación en el ámbito de los Ejecutivos. Al mismo tiempo, tanto en el discurso como en hechos, se realza más que antes la figura del Ejecutivo como el órgano capaz de encontrar las soluciones a los problemas de fondo, mientras que el poder legislativo ubica herramientas y recursos en sus manos para efectuar la faena. El *decisionismo democrático* deviene, así, en una *democracia personalista*, que sitúa a la persona del presidente en el centro de la decisión política. El vacío político que dejan las mediaciones partidarias, así como el Parlamento, acentúa la personalización del poder, lo que subraya la mayor confianza en las personas que en las instituciones. La democracia personalista es la extrema institucionalización de la personalización del poder.

Vivimos en la **era del gobierno del Ejecutivo**. En estas circunstancias, la política se ha concentrado en la esfera del poder estatal, en una sola mano, que la convierte en arbitraria y abusiva, y da cuenta del hecho vital del liderazgo personalista. Pareciera, enton-

ces, que asoma un nuevo régimen político, un *nuevo sistema de mando*, que no desliga a la democracia de las urnas, del régimen electoral, pero que encierra modalidades muy diferentes a la histórica democracia representativa.

La realidad del siglo XXI ha resignificado las condiciones de la legitimidad y la representación tradicional. El principio de representación electoral ha perdido su monopolio frente a la *informalización* (asociaciones civiles diversas, movimientos sociales) y a la *virtualización* (internet, redes sociales) de la política, situación que amplía el espacio público de la representación. En las mutaciones del presente, la noción de representación está asociada a la toma de decisiones, de ahí la conexión entre representación y decisionismo democrático. Los liderazgos decisionistas menoscaban el proceso democrático de representación, porque sus poderes excepcionales disminuyen la correspondencia entre las preferencias y los intereses de los representados y las decisiones de los representantes en el parlamento. En definitiva, el decisionismo democrático perjudica tanto a la división de poderes como al sistema de representación.

Al repensar en la crisis de los *fundamentos* de la democracia representativa, pero también acerca de su *desempeño*, advertimos en los 37 años de la democracia argentina la incapacidad de las élites para resolver los problemas macroeconómicos estructurales, la inflación de décadas, la pobreza extrema, las desigualdades múltiples y persistentes, el dólar gobernado la sociedad, el estancamiento económico. Al menos desde 1989 hasta el presente, el decisionismo democrático, que ha transformado a la emergencia permanente en una especie de régimen de gobierno, ha fracasado en sus estrategias gubernamentales y ha acentuado la decadencia de la sociedad argentina.

¿Cuál es la meta inmediata desde el punto vista institucional? Desmantelar el decisionismo democrático⁴. Ello implica que el Congreso recupere (si alguna vez lo tuvo plenamente) su rol de órgano de codecisión. Ya lo sabemos, los parlamentos debilitados son la contracara del decisionismo democrático. En este sentido, los representantes deben rehabilitar sus vínculos con el electorado. La tarea no es sencilla, especialmente, a causa de la desconfianza que los ciudadanos manifiestan hacia la política y sus instituciones. Lo cierto es que a la personalización del poder hay que oponerle la calidad deliberativa de la política, y para ello se torna imperioso articular los mecanismos clásicos con nuevas formas de participación, como el sorteo y la rotación, por ejemplo. Este es un modo de abrir las puertas a los movimientos libres en las diferentes dimensiones de una esfera pública independiente.

En todo caso, podría concluir que el desafío es gigantesco y requiere del cuidado colectivo de nuestra democracia. La democracia es un *régimen de autolimitación*, como ha sido llamada por Alain Rouquié. Es la expresión de la necesidad de una limitación mutua y de una acción cooperativa.

4. Cuatro leyes de emergencia desde 1989. La ley de 2002 tuvo una vigencia de quince años. El Poder Ejecutivo ha legislado de manera ordinaria por medios de los DNU. Según el relevamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se dictaron 804 DNU hasta febrero de 2020 (Fuente: www.saij.gob.ar/busacador/dnu). En este artículo, no se incluye al gobierno de Alfonsín en la matriz del decisionismo democrático porque sólo dictó 8 DNU y no sancionó ninguna ley de emergencia económica.

Referencias bibliográficas

- Bidart Campos, G. J. (1995) *Tratado elemental de derecho constitucional argentino. Tomo VI. La Reforma Constitucional de 1994*, Buenos Aires, Ediar.
- Bosoer, F. y Leiras, S. (2001) “Los fundamentos filosóficos-políticos del decisionismo presidencial en la Argentina. 1989-1999. ¿Una matriz ideológica para la democracia argentina?”, en Pinto, J. (comp.), *Argentina entre dos siglos. La política que viene*, Buenos Aires, Eudeba.
- Cheresky, I. (2015) *El nuevo rostro de la democracia*, Buenos Aires, FCE.
- Fabbrini, S. (2009) *El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se gobiernan las democracias*, México, FCE.
- Gerchunoff, P. y Torre, J. C. (1996) “La política de liberalización económica en la administración de Menem”, *Desarrollo Económico*, N° 143, octubre-diciembre, Buenos Aires.
- Hernández, A. M. (2002) *Las emergencias y el orden constitucional*, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores.
- Kelsen, H. (1995) *¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?* (Estudio Preliminar de Guillermo Gasió), Madrid, Tecnos.
- Llanos, M. (1998) “El presidente, el Congreso y la política de privatizaciones en el Argentina (1989-1997)”, *Desarrollo Económico*, N° 152, octubre-diciembre, Buenos Aires.
- Morlino, L. (2009) *Democracias y democratizaciones*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Negretto, G. L. (1994) *El problema de la emergencia en el sistema constitucional*, Buenos Aires, Editorial Ábaco.
- Ollier, M. M. (2004) “Hacia un patrón argentino de inestabilidad presidencial”, *Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral*, N° 27, segundo semestre, Universidad Nacional del Litoral.
- Quiroga, H. (2005), *La Argentina en emergencia permanente*, Buenos Aires, Edhasa.
- - - - - (2011) “Parecidos de familia. La democracia delegativa y el decisionismo democrático”, en O'Donnell, G., Iazzetta O. y Quiroga, H., *Democracia delegativa*, Buenos Aires, Prometeo.
- Raffaele, S. (2016) *El hada democrática. Cómo la democracia fracasa* (Prólogo de Soledad Gallego-Dáiz), Barcelona, Taurus.
- Russo, J. (2003) “La alternancia imperfecta”, *Estudios Sociales. Revista Universitaria semestral*, N° 25, segundo semestre, Universidad Nacional del Litoral.
- Schumpeter, J. (1984) “La crise de l' état fiscal”, en Schumpeter, J., *Impérialisme et classes sociales*, París, Flammarion.
- Schmitt, C. (1983) *La Defensa de la Constitución* (Prólogo de Pedro de Vega), Madrid, Tecnos.
- - - - - (2009) *Teología Política* (Epílogo de José Luis Villacañas), Madrid, Trotta.
- Streeck, W. (2016) *Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático*, Buenos Aires, Capital intelectual/Katz.

César Tcach
cesartcach@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina

Recibido: 09/11/2019
Aprobado: 03/12/2019

Antes y después del Cordobazo: en torno a la radicalización policéntrica de las prácticas políticas

Resumen El presente artículo se orienta a demostrar que la insurrección obrera y popular ocurrida en Córdoba en mayo de 1969 -conocida como el *Cordobazo*- marcó un punto de inflexión en la radicalización de las prácticas de los actores políticos y sociales en Argentina. Se sostiene, asimismo, que esa radicalización tuvo un carácter policéntrico: se manifestó en las más diversas organizaciones, en sus liderazgos y en las propias instituciones estatales. Involucró a sectores populares de los cuales emergieron potentes organizaciones armadas, pero también a las clases dominantes. El pluralismo negativo y la inestabilidad política crónica predominante en Argentina desde 1955 distaba de constituir el terreno propicio para el triunfo de formas de hacer política superadoras del dilema del prisionero.

Palabras clave Radicalización Policéntrica, Violencia Política, Inestabilidad, Espiral Autoritaria, Cordobazo.

Abstract This article is aimed at demonstrating that the workers and popular insurrection that occurred in Córdoba in May 1969 - known as the *Cordobazo* - marked a turning point in the radicalization of the practices of political and social actors in Argentina. It is also argued that this radicalization had a polycentric character: it manifested itself in the most diverse organizations, in their leadership and the state institutions themselves. It involved popular sectors from which powerful armed organizations emerged, but also the ruling classes. The negative pluralism and the chronic political instability prevalent in Argentina since 1955 were far from constituting the propitious ground for the triumph of ways of doing politics that overcame the prisoner's dilemma.

Keywords: Polycentric Radicalization, Political Violence, Instability, Authoritarian Spiral, Cordobazo.

Introducción

En este texto entendemos por *radicalización policéntrica de las prácticas políticas* al predominio de las tendencias centrífugas sobre las centrípetas en múltiples organizaciones de la sociedad civil y en las propias instituciones del Estado. En otras palabras, remite a la tendencia de los actores a orientar sus conductas en términos de confrontación global con el objeto de producir un cambio cualitativo, sea en términos de revolución o contrarrevolución. No alude necesariamente a una situación de pluralismo polarizado en los términos descriptos por la literatura politológica, donde un centro posicional debe lidiar con dos tendencias extremas (Sartori, 2012), tampoco sólo a una *crisis de dominación celular* extendida en los diversos poros de la sociedad, reflejada en comportamientos cuestionadores del orden (O'Donnell, 1982). Implica algo más: la convicción y la decisión arraigada en múltiples actores sociales y estatales de apelar a la violencia organizada para dirimir los conflictos políticos. Por lo tanto, atañe tanto a las clases dominantes como a los sectores populares.

El argumento central del presente artículo se orienta a demostrar que la insurrección obrera y popular ocurrida en Córdoba en mayo de 1969 -conocida como el **Cordobazo**- marcó un punto de inflexión en la radicalización de las prácticas de los actores políticos y sociales en Argentina. Es decir, no sólo potenció un vigoroso ciclo de protestas -en el sentido de Sidney Tarow (1997)- sino que el mismo estuvo marcado por el clivaje entre revolución y contrarrevolución (Sidicaro, 1996). Y, por consiguiente, legitimó desde diversos ángulos la mimesis entre guerra y política. Ciertamente, ese punto de inflexión se inscribió en un proceso histórico que tuvo jalones previos de orden nacional e internacional: entre ellos, el derrocamiento violento de Perón en 1955, el fracaso de la experiencia desarrollista, la revolución cubana, la expansión de las doctrinas de contrainsurgencia (francesa y norteamericana) en el contexto de la Guerra Fría.

Se sostiene, asimismo, que esa radicalización tuvo un carácter *policéntrico*, es decir, lejos de ser el patrimonio de una ideología o de un puñado de agrupaciones en el marco de una sociedad inocente y de instituciones estatales respetuosas de la ley, se manifestó en las más diversas organizaciones, en sus liderazgos y en las propias instituciones estatales. Involucró a sectores populares de los cuales emergieron potentes organizaciones armadas, pero también a las clases dominantes, que movidas por el afán de *aniquilamiento* (al decir de un decreto del presidente interino Ítalo Luder en 1975) ampararon prácticas de exterminio. Desde la **Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra** impulsada por Perón en 1948, hasta el **Plan CONINTES** aprobado por Frondizi diez años después, desde las fundación de las grandes organizaciones guerrilleras en 1970 hasta el golpe de 1976; este fenómeno fue posible porque descansaba en raíces de larga duración: la cultura política pretoriana que impregnó a la sociedad argentina al menos desde 1930, e incidió decisivamente -de acuerdo con Hugo Quiroga (1994)- en la lógica de los diversos actores. Pero también el pluralismo negativo y la lógica del dilema del prisionero que impregnó la política argentina desde los sesenta. Su corolario fue el terrorismo de Estado.

Antes del Cordobazo

La violencia como factor de evolución social fue el título de la conferencia que una semana después del golpe militar del 6 de septiembre de 1930 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen brindó el influyente sacerdote Gustavo Franceschi en el aristocrático **Jockey Club** de la ciudad de Buenos Aires (Zanatta, 1996: 40). En rigor, las campanadas de las iglesias y sus fachadas iluminadas para celebrar la caída del presidente radical, ponían blanco sobre negro la comunión entre Iglesia y Ejército, las dos instituciones que se

preciaban de ser anteriores a la nación misma. El consenso extendido entre sectores civiles, militares y eclesiásticos para suministrar legitimidad al primer golpe de Estado de la historia argentina del siglo XX, abrió un amplio torrente para afianzar en las décadas siguientes una cultura pretoriana, a saber, que identificaba a los militares como un actor político legítimo para intervenir e incluso gobernar en situaciones de crisis. No en vano, el golpe militar que lo sucedió trece años más tarde, en junio de 1943, buscó sus fuentes de legitimación en el que había derrocado a Hipólito Yrigoyen. Así, por **Decreto N° 1188** del 3 de septiembre de 1943, el gobernador de Córdoba dispuso la celebración de un funeral de honor en la catedral de esa ciudad, dado que, se argumentaba, *el día 6 de septiembre próximo se cumple un nuevo aniversario del movimiento revolucionario de 1930 y que los propósitos que inspiraron ese pronunciamiento coincide con los anhelos de restauración institucional que motivaron la revolución del 4 de junio* (Tcach, 2017: 32).

Cinco años más tarde, en agosto de 1948, el presidente Perón hizo aprobar la **Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra** que autorizaba la participación de los militares en la represión interna. Esta ley fue aplicada por primera vez a los obreros ferroviarios en la huelga de 1951. Con este antecedente, en 1958 el presidente Frondizi implementó el **Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado)** que habilitó la intervención militar y consiguiente encarcelamiento -a disposición del PEN- de millares de militantes peronistas y de izquierda. El mencionado plan puso al descubierto, tempranamente, la fragilidad de la fórmula frondicista, interesada en conciliar desarrollo capitalista y expansión industrial con el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas (Cavarozzi, 1996: 87). Ilustraba esta militarización de la política, la facultad de cada uno de los secretarios de tres armas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) de participar, en su condición de secretarios de Estado, en las reuniones del gabinete nacional. En 1960, los **Partidos Comunista y Socialista** -ambos pacíficos y de sesgo más moderado que radical- seguían dominando el escenario de la izquierda, pero en el discurso de los jefes militares, la Argentina ya era un país en guerra y quienes pretendían negar este hecho eran ignorantes o cómplices (Tcach, 2006: 136). A la proscripción de Perón en 1955, se le sumó la del Partido Comunista entre 1959 y 1964.

Coetáneamente a esta radicalización presente en el discurso militar y su creciente intervencionismo en el escenario político, la clase obrera comenzaba a dar sus primeros pasos hacia una salida de tipo disruptivo. En 1964, con motivo del **Plan de Lucha** organizado por la **CGT** y las **62 Organizaciones** -durante la presidencia constitucional de Arturo Illia- no sólo se tomaron cientos de fábricas sino que, por primera vez, se retuvo a ejecutivos y capataces en su interior. La radicalización en los métodos de lucha se correspondía, en rigor, con el programa obrero de La Falda, aprobado dos años antes por la central sindical, el cual lejos de ser una plataforma de reivindicaciones inmediatas, delineaba las llaves maestras que debería emplear un gobierno revolucionario. El **apoyo obtenido de las agrupaciones estudiantiles** universitarias (nacionalistas, cristianas y comunistas) marcó el inicio de la superación del divorcio entre clase obrera y sectores medios que había atravesado las décadas precedentes. A esta primera conciliación se añadió otra: el **acercamiento entre cristianismo y marxismo**. Pero ambas se construyeron sobre la fórmula de la radicalización política e ideológica. Esta fórmula de confluencia fue advertida por el sociólogo Alfredo Poviña. En junio de 1964, durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que en las propuestas presentadas a ese organismo colegiado se ha buscado *coincidir el Evangelio con la venerable figura de Carlos Marx* (Tcach y Rodríguez, 2006: 86-87).

Este embrionario proceso de *radicalización policéntrica* tuvo su corolario en el golpe militar del general Onganía en junio de 1966. Su pretensión de eliminar para siempre la

democracia de partidos se asoció a la ilusión corporativa: el reemplazo del parlamento por consejos y juntas consultivas asesoras integradas por civiles que habrían de representar a las *fuerzas vivas de la comunidad*. Se ilegalizaron todos los partidos y se eliminaron las libertades de prensa y asociación. Los centros de estudiantes fueron prohibidos. La dictadura fue legitimada por la Iglesia Católica, cuyo involucramiento en la política nacional había ido *in crescendo* a partir de su protagonismo en la organización del golpe que derrocó a Perón.

El Cordobazo

Toulouse, invierno europeo de 1970: un sociólogo cordobés discípulo de Alain Touraine, Francisco Delich, se esmeraba en terminar de escribir el texto que se convertiría en la obra clásica sobre lo ocurrido unos meses antes en su provincia, *Crisis y protesta social*, publicada en tres oportunidades durante la década de 1970 -en Córdoba, Buenos Aires y México- y después por la propia Universidad Nacional de Córdoba (Delich, 1994). En este estudio se demostraban las peculiaridades del desarrollo industrial cordobés marcado por la inpronta de la industria automotriz, dependiente del capital extranjero (IKA Renault y FIAT) y del centralismo porteño. Intentaba explicar la radicalización de la clase obrera cordobesa y advertía sobre las características del proceso en ciernes:

Se instaure una dialéctica de fuerza, contrafuerza popular, distensión y nueva fuerza por parte del poder; sólo que, la fuerza es cada vez más rigurosa, la respuesta movilizadora más amplia y más radical, la distensión más breve. Es como si la espiral de violencia se agudizara en cada círculo ascendente. Después de mayo del 69 nada fue, ni podía ser igual. (Delich, 1974: 100).

Se trataba de un proletariado joven, que no había vivido la experiencia del peronismo histórico (1946-55), con un alto nivel de instrucción (muchos cursaban estudios en colegios técnicos o en la propia Universidad Tecnológica Nacional), y concentrado geográficamente en los barrios del sur de la ciudad.¹ De este modo, los obreros no solo eran compañeros de trabajo sino también vecinos, forjando así, intensos lazos de solidaridad horizontal que se tradujeron en una formidable capacidad de movilización, superior en clave comparativa, al resto del país (Brennan, 1996: 64). Santiago Pampillon, primera víctima de la dictadura militar, asesinado en Córdoba durante una manifestación en septiembre de 1966, era obrero de la IKA Renault y estudiante de ingeniería en la UNC: la impronta simbólica que adquirió su muerte (en su condición de obrero y estudiante) fue la metáfora más ilustrativa de las características del sujeto social que emergía de la otrora tradicional *Córdoba de las campanas*. A estos factores socio estructurales habría que añadir las particulares condiciones del sindicalismo cordobés, muchas veces desafiante de las conducciones gremiales radicadas en Buenos Aires. Así, el carácter descentralizado de los convenios colectivos en la industria automotriz argentina amplió los márgenes de autonomía del **SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor)**, mientras que el sindicato de la electricidad -**Luz y Fuerza**- al formar parte de una estructura de sesgo federativo poseía un control sobre su presupuesto que le daba cierta inmunidad en relación a las presiones procedentes de Buenos Aires (Brennan-Gordillo, 1994: 55-56). Este factor se articulaba con una matriz pluralista: desde 1957, la CGT cordobesa articulaba en su seno al peronismo con sectores radicales, comunistas e independientes.

En suma, se trataba de una clase obrera joven, culta, bien remunerada en términos comparativos, concentrada geográficamente y protagonista del sector más dinámico y moderno de la economía. En este sentido, el *Cordobazo* no fue un producto del subdesarrollo

1. Me refiero a los barrios en tono a IKA Renault como Santa Isabel, Villa Libertador y Barrio Comercial, y en las cercanías de la FIAT como Ferreyra, Empalme San Lorenzo, Dean Funes.

sino del desarrollo capitalista. No fue tampoco el resultado de la hegemonía peronista en la cultura obrera sino de prácticas articuladoras más amplias que incluían otras vertientes político sindicales.

Es verdad que la defensa del *sábado inglés* (derecho a cobrar por 8 horas la media jornada de los sábados) y la protesta contra las *quitas zonales* (derecho patronal a pagar salarios más bajos en el orden provincial que los fijados en los convenios nacionales) constituyeron las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores. También lo es que esas demandas se encontraron con otras provenientes de las clases medias, como el descontento generado por una leonina ley de alquileres que afectaba a los pequeños comerciantes o el aumento del impuesto inmobiliario. El desasosiego estudiantil encontraba, asimismo, motivos puntuales en la liquidación de la autonomía universitaria y el oscurantismo cultural. Entonces, ¿cuál fue el elemento que permitió unificar y articular la protesta social? Para Ernesto Laclau la respuesta sería sencilla: desde 1955 *la demanda del regreso de Perón a la Argentina se convirtió en el significativo unificador de un campo popular en expansión* (Laclau, 2005: 269). Sin embargo, prácticamente la única consigna que se escuchó en mayo de 1969 fue **Abajo la dictadura**, la dimensión anti-dictatorial fue el eje unificador de la protesta obrera y popular. En este punto cabe destacar la interrelación entre los planos provincial y nacional. Entre 1967-69, el interventor federal en Córdoba designado por el presidente Onganía, Carlos Caballero -ex presidente del Superior Tribunal de Justicia y titular de la materia Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Córdoba-, convirtió a la provincia en un laboratorio de ensayos destinados a liquidar para siempre a los partidos políticos y al Parlamento elegido por sufragio universal y secreto. En su reemplazo proponía una participación tutelada por el Estado cuyos promotores definían como *comunitaria*, basada en células *naturales* de la sociedad como la familia y el municipio, así como en asociaciones intermedias y en sectores religiosos. El nuevo diseño institucional articulaba tres instancias de participación civil controlada por el gobierno militar: **consejos económicos sociales, consejos comunales y comisiones asesoras zonales**. La oposición al ensayo corporativista encontró unidos a la CGT -que calificó en un comunicado al gobernador de ser un *otrora camisa negra*- y a los sectores medios expresados por la Unión Cívica Radical y otras fuerzas políticas (Tcach, 2012: 226-227). En rigor, la primera gran insurrección urbana de la segunda mitad del siglo XX en Argentina no tuvo como eje la proscripción del peronismo, puesto que los propios militares-en su espiral de radicalización- habían reemplazado el antiperonismo heredado de la **Revolución Libertadora** por el antipartidismo que ilegalizaba el conjunto de la actividad política: eran los tiempos de *la política en suspenso* (De Riz, 2000). Por ello, el **Cordobazo** distó de ser -pese a ser protagonizado por sindicatos peronistas en su inmensa mayoría- un lugar de la memoria exaltado o emblemático del movimiento justicialista. Sí, en cambio, por la naciente izquierda revolucionaria que encontrará su plenitud en los años siguientes.

Después del Cordobazo

Lejos de ser una mera protesta en clave liberal democrática, cuyas consecuencias quedaron encerradas en la problemática constitucional y de la vigencia del Estado de Derecho, el **Cordobazo** abrió las compuertas de un torrente revolucionario marcado por el declive de las posturas moderadas o centristas en franjas relevante del movimiento obrero, el estudiantado y las más amplias clases medias. Al son de *los vientos del Cordobazo*, los actores políticos y sociales se redefinieron en un contexto de radicalización que favoreció tanto la irrupción del clasismo en los sindicatos (Ortiz: 2019) y el potenciamiento de la

guerrilla urbana, como el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad estatales y la derecha peronista más violenta.

Ciertamente, esta radicalización policéntrica enlazaba con **tres procesos** que se entrecruzaban para otorgar nuevos sentidos a la crisis de dominación celular. El primero remite al **contexto internacional**, el segundo a la **crisis de la izquierda tradicional** para constituirse en dirección política de la protesta antidictatorial, el tercero a las **dificultades del peronismo** para erigirse como alternativa a un gobierno que había contribuido a legitimar. Cabe examinar esta triada de factores.

En primer término, es necesario destacar que **el contexto internacional suponía dos planos interrelacionados**. Uno remite a los signos iniciales de **agotamiento del período de prosperidad** iniciado tras la segunda guerra mundial, que desembocaría en crisis fiscal del *Estado de Bienestar* y agudos conflictos entre el capital y el trabajo en el mundo desarrollado, perceptibles, por ejemplo, en el mayo francés y el otoño caliente italiano. El otro alude a **valores y representaciones**, que descansaban en la posibilidad de transformar la sociedad: la revolución cubana, la derrota de los franceses en Argelia y de los EEUU en Vietnam alimentaban un imaginario que encendía la voluntad de traspasar los límites de lo ordinario, de lo “normal”, de lo habitualmente posible. Así, en 1968, los tres libros más vendidos en la Argentina eran *Cien años de soledad* (García Márquez), *Mi amigo el Che* (del periodista Ricardo Rojo) y *La Mujer Rota*, de Simone de Beauvoir (Ollier, 1998: 89). Tras la muerte de Ernesto Guevara, *El Diario del Che en Bolivia* adquirirá también importantísima difusión. Circulaban numerosos libros de los cuales se pretendían extraer conclusiones de experiencias transformadoras en otras latitudes: desde las *Actas Tupamaras* al *Libro Rojo* de Mao Tse Tung o *Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo*, de Vo Nguyen Giap.

En Córdoba, la circulación de ideas e imaginarios era facilitada por la escasa distancia social -advertida inicialmente por el sociólogo Francisco Delich- entre estudiantes y obreros de la industria automotriz:

Los estudiantes provienen en gran parte del interior de la provincia y aún de provincias limítrofes, y en general carecen de recursos por lo que desde el punto de vista del consumo están por debajo de un obrero de su edad. Muchos estudiantes deben emplearse en fábrica o vivir en barrios obreros [...] porque no consiguen otra forma mejor de ganarse la vida [...] los obreros de la industria automotor perciben sueldos elevados en relación incluso a los que puede ganar un pequeño comerciante. Además, la industria automotriz requiere en algunos procesos de producción (como matricería) obreros de alta calificación, por lo cual muchos estudian en la Universidad Tecnológica. (Balve, 1973: 54)

En segundo término cabe puntualizar que desde los primeros años sesenta, la crisis del Partido Comunista y el eclipse del Partido Socialista Argentino sentaron las bases de posibilidad para el suministro de cuadros a nuevas agrupaciones de izquierda: desde el maoísta **PCR (Partido Comunista Revolucionario)** hasta las inicialmente filo guevaristas **FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias)** que orientaba Marcos Osatinsky, ex secretario general de PC en la provincia de Tucumán. También fue el caso de **Vanguardia Comunista**, cuyo fundador, Elías Semán, provenía del Partido Socialista Argentino de Vanguardia. En Córdoba, la ruptura del grupo Pasado y Presente en 1963 también se había vinculado a experiencias radicales, en particular, a la del malogrado **Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP)**. Estas y otras historias previas al **Cordobazo** encontraron en el mayo cordobés la confirmación de sus certezas: la posibilidad de poner sobre las cuerdas a la dictadura y al capitalismo a través de la violencia popular. En este sentido, el **Cordobazo** tuvo dos efectos, uno de *confirmación*, otro de *catalización de tendencias* preexis-

tentes. Los elementos de auto-organización para la lucha de calles que culminó con la ocupación de la ciudad por parte de los manifestantes (sobre todo de los gremios líderes, SMATA y LUZ Y FUERZA) -bombas molotov, clavos *miguelito*, ondas, bulones y revólveres en algunos casos- así como la combinación de formas de lucha defensivas (barricadas) con ofensivas (asaltos a comisarías, incendio de organismos oficiales, retención de policías y robo de sus armas en algunos casos), habilitaba una lectura que ponía de relieve los temblores de un cisma mucho más profundo que una protesta en clave liberal democrática. Córdoba confirmaba empíricamente con datos autóctonos, lo que parecía percibirse en el plano mundial. Latía, pues, la génesis de una vigorosa nueva izquierda, convencida que a la violencia reaccionaria de los explotadores había que responder con la violencia revolucionaria de los explotados.

En tercer término, la *radicalización policéntrica* descansaba en las dificultades y contradicciones internas del peronismo. Cabe recordar que Perón había legitimado inicialmente el derrocamiento de Illia, decisión que se tradujo en la destacada presencia de los dos principales referentes del sindicalismo peronista (Vandor y Alonso) en el acto de asunción del general Onganía como presidente de la nación. El dictador había ensayado inicialmente recrear el viejo pacto sindical militar que había intentado el general Lonardi en 1955 (Smulovitz, 1991). Esta inicial conjunción, frustrada a la postre, distó de pasar desapercibida a los sectores más contestatarios de la sociedad argentina.

Los años siguientes al Cordobazo fueron testigos de múltiples signos de radicalización política. En 1970 los sindicatos de la FIAT -correspondientes a las plantas de Concord y Materfer- quedaron en manos de obreros identificados con la izquierda revolucionaria, como Gregorio Flores y Carlos Massera. Ese mismo año se fundó el **Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)** y la naciente organización **Montoneros** secuestró al ex presidente Aramburu en la fecha aniversario del **Cordobazo**. En 1971 un nuevo levantamiento popular en Córdoba fue testigo de la presencia y acción de numerosos grupos revolucionarios, que apelaron al ejercicio de la violencia organizada. En 1972, un obrero del PCR (Partido Comunista Revolucionario) fue elegido secretario general del SMATA en Córdoba y en 1973, Armando Jaime pasó a ejercer la dirección de la CGT clasista en la provincia de Salta. Ese mismo año, fue testigo -al son de la primavera camporista- de las más imponentes movilizaciones orientadas por Montoneros, cuyos organismos de superficie -como la **Juventud Trabajadora Peronista** y el **Movimiento Villero Peronista**- hacían sentir su presencia en los sectores populares. En 1974, la formación de las **Coordinadoras Obreras** en el gran Buenos Aires -percibidas por algunas organizaciones como *embriones de soviets*- ponía de relieve la extensión y profundidad del torrente de radicalización política en el movimiento obrero. Coetáneamente, las agrupaciones estudiantiles reformistas en las universidades cedían su paso a organizaciones revolucionarias. Como contrapartida, el accionar de los grupos parapoliciales y, luego paramilitares, se cobraba numerosas víctimas. El silencio de Perón ante la masacre de Ezeiza -provocada por la derecha peronista- y la organización desde el Ministerio de Bienestar Social de la acción ilegal de las fuerzas de seguridad estatales, ponían de manifiesto, asimismo, el militarismo de los sectores dominantes. Esta espiral de violencia, corolario de una radicalización policéntrica, tuvo como corolario el golpe de Estado en 1976.

Conclusiones

La división del campo político en dos polos, peronismo y antiperonismo, típico del período (1945/55), trocó a partir del fracaso de la experiencia desarrollista en una suerte de pluralismo negativo en el que todas las voces se alzaban al mismo tiempo pero no solo no se escuchaban sino que también tenían capacidad de veto. En el fondo latía una lógica del *dilema del prisionero* (Kvaternik, 1978). Así, esta cultura política marcada por la desconfianza recíproca entre los actores desembocó en un progresivo proceso de radicalización policéntrica que encontró en el **Cordobazo** su punto de inflexión.

1973 pudo ser el año de la des-radicalización. Las elecciones de marzo y de septiembre de ese año, pusieron nuevamente en primer plano a las fuerzas políticas tradicionales, que agruparon la voluntad de la mayoría de los electores: el PJ y la UCR. Inclusive, la irrupción de una coalición de izquierda pacífica -el **Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA)** que agrupaba a comunistas, radicales intransigentes y demócratas cristianos- potenciaba esa posibilidad. No fue así. Ni Perón pudo contener al ala izquierda de su propio movimiento ni el reformismo de izquierda pudo desarmar los ímpetus militaristas de las organizaciones guerrilleras que creían haber derrotado a las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse. El gobierno de Isabel Perón, asimismo, dio rienda suelta al terrorismo parapolicial.

La *radicalización policéntrica* comenzó durante una dictadura, continuó durante el período democrático y terminó con una dictadura que practicó institucionalmente el terrorismo de Estado. El **Cordobazo** había mostrado didácticamente la posibilidad de golpear y, a la postre, derrotar a un gobierno militar, razón por la cual tuvo efectos multiplicadores, dando lugar a nuevos levantamientos populares en diversas partes del país y al nacimiento de una miríada de nuevas agrupaciones sociales con un sesgo radicalizado. En consonancia, el contexto internacional parecía demostrar que el imperialismo era *un tigre de papel*, para usar una expresión de Mao Tse Tung. El propio Perón alentó durante esos años, la organización de las *formaciones especiales*, eufemismo con el que denominaba a las organizaciones armadas peronistas. Y luego con su silencio, la represión ilegal a esas mismas organizaciones, aspecto que se agudizó tras su muerte y la asunción presidencial de su esposa María Estela Martínez. Por otra parte, la caída del gobierno de Salvador Allende en Chile mostró las limitaciones de la vía pacífica al socialismo. En estas circunstancias, el militarismo se afianzó en parte importante de las organizaciones populares, de las instituciones estatales especializadas en la represión y de las clases dominantes. Sus organizaciones representativas, como la **APEGE (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresariales)**, desde la **Sociedad Rural** hasta la **Asociación de Bancos**, se expresaban en un lenguaje aún más duro que el de los propios militares: la solución consistía en el exterminio de la “subversión apátrida”.

A tenor de lo expuesto, se puede colegir la *radicalización policéntrica* traducida en la voluntad de los actores por ejercitar respectivos juegos de suma cero, no se evita con el mero ejercicio de las reglas electorales. Supone también como condición una cultura política que predisponga a sus protagonistas al ejercicio de soluciones de compromiso. Empero, el pluralismo negativo y la inestabilidad política crónica que arrastraba la sociedad argentina desde 1955 distaba de constituir el terreno abonado para el triunfo de formas de hacer política superadoras del dilema del prisionero.

Referencias bibliográficas

- Balvé, B., Muráis, J. M. M., Aufgang, T. B. L., Balvé, B., y Jacoby, R. (1973). "Lucha de calles". *Lucha de clases, Elementos para su análisis* (Córdoba 1971-1969), Buenos Aires, La Rosa Blindada.
- Brennan, J. (1996). *El Cordobazo: las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Brennan, J. P. y Gordillo, M. B. (1994). "Protesta obrera, rebelión popular, insurrección urbana en la Argentina: el Cordobazo". *Estudios: Centro de Estudios Avanzados, UNC*, N° 4, pp. 51-74.
- Cavarozzi, M. (1996). *El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina*. Rosario, Homo Sapiens.
- Delich, F. (1974). *Crisis y protesta social: Córdoba, 1969-1973*. Siglo Veintiuno, Argentina Editores.
- (1994). *Crisis y protesta social: Córdoba 1969*. Editorial CEA-UNC.
- Kvaternik, E. (1978). "Sobre partidos y democracia en la Argentina entre 1955 y 1966". *Desarrollo Económico*, Año 18, N° 71, pp. 409-431.
- Laclau, E. (2012). *La razón populista*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Moreno, J.C. (2005). *La espuma de la cerveza: Córdoba derrotada y recuperada*, El Emporio.
- O'Donnell, G. (1982). *1966-1973 el estado burocrático: triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- Ollier, M.M. (1998). *La creencia y la pasión: Privado, público y político en la izquierda revolucionaria*. Buenos Aires, Ariel.
- Ortiz, L. (2019). *Con los vientos del Cordobazo*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.
- Quiroga, H. (2004). *El tiempo del "proceso": conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario, Fundación Ross.
- Sartori, G. (2012). *Partidos y sistemas de partidos: marco para un análisis*, Madrid, Alianza.
- Sidicaro, R. (1996). "El régimen autoritario de 1976: refundación frustrada y contrarrevolución exitosa". *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*, Rosario, Homo Sapiens.
- Smulovitz, C. (1991). "En busca de la fórmula perdida: Argentina, 1955-1966". *Desarrollo Económico*, pp. 113-124.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento*. Madrid, Alianza.
- Tcach, C. (2006) "Entre la lógica del partisano y el imperio del Gólem: dictadores y guerrilleros en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay". *Argentina 1976-2006*, pp. 123-166.
- (2012). *De la Revolución Libertadora al Cordobazo: Córdoba, el rostro anticipado del país*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- (2017). "Ni laica ni mixta ni curiosidad malsana: la educación en Córdoba entre generales y almirantes (1943-1944)". *Coordenadas: Revista de Historia Local y Regional*, N° 4, pp. 21-35.
- Tcach, C. Potash, R. A. y Rodríguez, C. (2006). *Arturo Illia un sueño breve: el rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966*, Buenos Aires, Edhasa.
- Zanatta, L. (1996). *Del estado liberal a la nación católica: Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Alicia Lissidini
Alicia.lissidini@gmail.com
Universidad Nacional
de San Martín
Argentina

Recibido: 04/02/2020
Aprobado: 03/03/2020

Uruguay: sin déficit democrático y con giro electoral

La persistente identidad partidaria

Resumen

Uruguay ocupa los primeros lugares en América Latina en los rankings referidos a las dimensiones políticas de la democracia. Durante los quince años del gobierno de centro izquierda (2005-2020) no sólo no se denunciaron restricciones en materia de derechos y de libertades -como sí sucedió con otros gobiernos del signo similar en la región-, sino que se avanzó en la democratización e inclusión social y económica del país. En este artículo analizamos las claves de la estabilidad política uruguaya: centralidad de los partidos, identidades partidarias fuertes, parlamento activo, democracia directa y una tendencia a la negociación política y a la búsqueda de acuerdos entre los diversos actores políticos y sociales. En las elecciones de 2019 ganó una coalición de centro-derecha, con un presidente del tradicional y longevo Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. ¿Será el fin de una forma de gobernar? Además, mencionamos los riesgos que enfrenta la democracia ante la pandemia del Coronavirus mundial declarada en 2020 para un gobierno de derecha.

Palabras clave

Déficit Democrático, Identidad Partidaria, Coronavirus.

Abstract

Uruguay occupies the first places in Latin America in the rankings referring to the political dimensions of democracy. During the fifteen years of the center-left government (2005-2020), not only were no restrictions on rights and freedoms denounced -as was the case with other governments of the similar sign in the region- but progress was made in democratization and social and economic inclusion of the country. In this article we analyze the keys to Uruguayan political stability: centrality of the parties, strong party identities, active parliament, direct democracy and a tendency to political negotiation and the search for agreements between the various political and social actors. In the 2019 elections, a center-right coalition won, with a president of the traditional and long-standing National Party, Luis Alberto Lacalle, will this be the end of a form of government? We mention the risks that democracy faces in the face of the global Coronavirus pandemic declared in 2020 for a right-wing government.

Keywords

Democratic Deficit, Party Identity, Coronavirus.

Estabilidad, calidad democrática y reducción de desigualdades

A diferencia de lo que sucede en buena parte de América Latina, Uruguay goza desde su retorno a la democracia en 1985 de una creciente y sostenida consolidación de la democracia. Se distingue de sus vecinos por la estabilidad política: no hubo salidas anticipadas de presidentes por presión social -como en Bolivia, Ecuador y Argentina-, tampoco cuestionamientos graves a gobernantes por parte del Parlamento -como en Paraguay, Brasil y Perú-. Aunque hay descontentos y manifestaciones, no se registraron estallidos sociales violentos -como en Chile y en buena parte de América Latina-. Asimismo, los resultados electorales nunca fueron cuestionados seriamente desde la redemocratización -ni siquiera en el contexto autoritario de 1984- y los cambios de los partidos en el gobierno se han dado sin dramatismo y con colaboración entre los equipos de gobierno saliente y entrante.¹

El índice de democracia elaborado por *The Economist* colocaba en 2019 a Uruguay en el primer lugar en América Latina en la categoría **democracia plena**, seguido por Costa Rica y Chile, únicos tres en ese grupo. El resto de los países latinoamericanos calificaban como **democracias imperfectas**: Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, El Salvador, México, Honduras, Guatemala, Bolivia, en ese orden. Y como **regímenes autoritarios**: Nicaragua, Venezuela y Cuba (*The Economist Intelligence United*, 2020). Si bien Uruguay mejoró su *performance* democrática, ya en 2006 -primera vez que se realizó este índice- era catalogada como **democracia plena**.

Otros índices específicos refuerzan la clasificación de Uruguay en el podio de las democracias latinoamericanas. Entre ellos, el índice de transparencia ubicaba a Uruguay en primer lugar con 71 puntos sobre 100, seguido por Chile con 67 puntos, en 2019.² Al igual que el índice de democracia, registra mejoras, pero ya en 1997 Uruguay estaba bien posicionado en América Latina: en segundo lugar, después de Chile y Costa Rica.³ La percepción sobre los niveles de corrupción política en un país tiene impacto en la confianza

1. Una demostración de la legitimidad del organismo electoral fue que la ciudadanía y los partidos políticos esperaron pacientemente y sin presiones el resultado electoral final del balotaje entre los candidatos Luis Alberto Lacalle de la *coalición multicolor* y Daniel Martínez del Frente Amplio. El recuento final llegó a los pocos días de la elección: 48,8% de los votos para Lacalle, 47,3% para Martínez. El resultado, aunque muy ajustado, no fue cuestionado por nadie.

2. <https://www.transparency.org/cpi2019>

3. https://www.transparency.org/files/content/tool/1997_CPI_EN.pdf

4. <https://www.v-dem.net/en/>

5. <https://freedomhouse.org/>

en las instituciones, la cual se relaciona también con la confianza interpersonal y por lo tanto en la acción colectiva. Respecto a la confianza en las instituciones, LAPOP señalaba que en 2019 Uruguay se encontraba entre los países con mayores niveles de confianza en el Parlamento y mayor apoyo a la democracia en América Latina.

V-Dem⁴ y **Freedom House**⁵ también colocan a Uruguay en los primeros lugares, junto a Chile y a Costa Rica en lo que se refiere a libertades y derechos electorales. Cuando introducimos datos referidos a la desigualdad de ingresos Uruguay se despega del grupo de países con plena democracia. El **índice Gini** era en 2017 de 0,38, mientras que en Chile subía a 0,47 y en Costa Rica a 0,48, de acuerdo con el Banco Mundial (2018). Respecto a la pobreza, si bien la mayoría de los países la redujo en los últimos cinco años, Uruguay encabeza dicho descenso, seguido por Chile (Costa Rica la redujo moderadamente). El informe de la CEPAL de 2018- *Panorama Social de América Latina 2019*-, ubicaba a Uruguay como el país con mejores indicadores referidos a distribución de ingresos, tasa de pobreza e indicadores de protección social.

Si bien Uruguay históricamente estuvo entre los países con menor desigualdad de ingresos en una región -América Latina- caracterizada por la desigualdad, entre 1986 y 1994 la desigualdad permaneció casi incambiada, mientras que se incrementó entre 1994 y 2007 y comenzó a descender entre 2007 y 2009 (Alves *et al.*, 2012). La desigualdad tuvo su punto más bajo en 2013 y fue resultado de la reducción del trabajo informal, el aumento de la ocupación en general (Amarante y Gómez, 2016) y de políticas sociales focalizadas que redujeron la pobreza e indigencia. Uruguay -junto con Chile- es uno de los países que más presupuesto destina al gasto social. A diferencia de Chile, en el caso uruguayo, aunque el *efecto ingreso* tiene el mayor peso, hay un mayor aporte del *efecto distribución* sobre la reducción de la pobreza (Cepal, 2019).

Existen diversas y contradictorias teorías respecto a por qué algunas democracias son más estables que otras (Munk y Wolfson, 2002), también varían las definiciones acerca de qué variables se consideran relevantes para medir la calidad de las democracias y por lo tanto su operacionalización es discutible (Levine y Molina, 2007, Mainwaring y Pérez Liñal, 2008, entre otros). En este artículo nos centramos en analizar las características que contribuyen a explicar la “excepcionalidad” del Uruguay en América Latina, en base a diversas fuentes: índices internacionales, datos estadísticos, encuestas locales, análisis de prensa y bibliografía pertinente.

Democracia y centralidad de los partidos políticos

6. La **Unidad Popular**, el **Partido Ecologista Radical Intransigente** y el **Partido Verde Animalista** no están incluidos en estos acuerdos. Sin embargo, el **Partido Independiente**, que también tiene muy poca votación, sí lo está, por su peso simbólico y su ubicación en el centro político.

7. <https://www.elobservador.com.uy/nota/estos-son-los-34-cargos-que-la-calle-pou-acordo-con-el-frente-amplio-20202212220>

Uruguay cumple con los requisitos básicos de definición *schumpeteriana* de democracia: **los mecanismos de competencia electoral y sus resultados están garantizados**. La Corte Electoral uruguaya es una institución independiente que goza de plena confianza por parte de los partidos y de la enorme mayoría de los ciudadanos. Pero más allá de los requisitos formales hay un elemento que la distingue. Su integración responde a la lógica de participación política uruguaya, en el cual el sistema de partidos cumple un rol central: los cargos de dirección de la Corte son producto de negociaciones políticas entre los partidos con representación política. Tanto la Corte Electoral como los entes descentralizados, los organismos de contralor y las empresas públicas integran su directorio con personas de diferentes sectores de los distintos partidos políticos.⁶ En el gobierno que se inició en 2020 con Luis Alberto Lacalle como presidente, además de los cargos que ocuparon los partidos que integran la coalición gobernante- **Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente**- 34 cargos fueron para el principal partido opositor, es decir para el **Frente Amplio**.⁷

8. Como señalan Pérez-Liñán y Mainwaring, los actores son radicales cuando sus objetivos de política pública están ubicados en uno de los polos del espectro político (v. g., hacia la izquierda o la derecha si el espacio político es unidimensional) y cuando expresan urgencia para alcanzar estos objetivos (en aquellos países donde no representan el statu quo) o defienden esas posiciones de manera intransigente (cuando estas posiciones representan el statu quo). Si bien las preferencias radicales no tienen que ser necesariamente de extrema izquierda o de extrema derecha, su distancia de las preferencias de otros actores relevantes debe ser tal que se genera polarización entre ellos. Se trata de preferencias intensas: los actores radicales no están dispuestos a negociar o a esperar para alcanzar sus objetivos de política pública (2014:145)

9. <https://manini.uy/somos-cabildo-abierto/>

10. Guido Manini Ríos fungió desde 2015 a 2019 como Comandante en Jefe del Ejército. En 2017 fue sancionado por hablar en contra de la reforma de las jubilaciones a los militares aprobada en el Parlamento y luego cesado por sus declaraciones críticas del accionar el Poder Judicial. Fuente: Comunicado de Presidencia <https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacion-noticias/ejercito-ejecutivo-vazquez>.

Esta modalidad de participación de los partidos y sus diversos sectores políticos es una tradición de la democracia uruguaya e incluye al **Frente Amplio**. Este partido nació en 1971 y fue clave para el acuerdo entre los militares en el gobierno y los partidos que condujo a la reapertura democrática a partir de 1984. Las primeras elecciones -luego de 13 años de gobierno militar- marcaron el inicio de la transición y de un pluripartidismo que se afianzó sin que ello afectara el funcionamiento del sistema de partidos y la democratización política. Por el contrario, la participación electoral e institucionalizada de la izquierda contribuyó a la estabilidad y a la democratización del sistema político. Una izquierda democrática que incluyó a ex guerrilleros -**Movimiento de Liberación Nacional (MLN Tupamaros)**- que abandonaron definitivamente cualquier proyecto armado en la década de los noventa (Garcé, 2006), a sectores socialdemócratas y a grupos de izquierda más radical, pero todos ellos con disposición a negociar.

Todas las reformas constitucionales aprobadas en la historia uruguaya son producto de acuerdos entre sectores de diferentes partidos (Lissidini, 2002). Incluso la última reforma electoral de 1996 -como señala Daniel Buquet- si bien fue promovida por los partidos tradicionales, en la negociación y diseño institucional participaron todos los partidos con representación parlamentaria (Buquet, 2007).

La ciudadanía uruguaya es la que en mayor medida apoyaba a la democracia en América Latina en 2018: 76,2%, según LAPOP, mientras que el promedio regional era de 57.7% (Zechmeister y Lupu, 2019). Y como lo analiza la literatura -entre los primeros, Linz y Stepan, 1996- el apoyo a la democracia es un ingrediente fundamental en la legitimidad democrática. Este apoyo ciudadano se condice con una élite política que cree en la democracia como el *único juego posible* y con la ausencia de partidos o sectores antisistema. Como analizan Aníbal Pérez-Liñal y Scott Maingaring (2014), hay dos variables fundamentales en la permanencia o no de la democracia: **si los actores muestran una preferencia por las políticas radicales y si tienen lo que se denomina preferencias normativas por la democracia**.

Si bien en Uruguay existen sectores políticos radicales, estos están dispuestos a negociar o a esperar ganar las elecciones para alcanzar sus objetivos de política pública.⁸ A la derecha se encuentra el grupo político Cabildo Abierto⁹, un partido nuevo liderado por un *outsider*, el ex militar Guido Manini Ríos¹⁰, con vínculos directos con el ejército, defensor del mismo y con posturas contrarias a la agenda de derechos -matrimonio igualitario, aborto, ley integral trans, legalización de la marihuana-, es nacionalista y antiglobalista. Se opone al neoliberalismo, se presenta como un incontaminado por la política y sus mensajes apelan al orden y a la tradición *artiguista*- dentro del cual incluye la protección a los más “débiles” y los que según él han quedado “relegados” de las políticas sociales del Frente Amplio- Si bien es claramente un líder de derecha, su perfil se aleja de personalidades como la del brasileño Bolsonaro o del norteamericano Trump y tal vez lo acercan más a una suerte de peronismo tradicional en versión uruguaya, es decir, más sobria. Es profundamente conservador y al mismo tiempo conecta o intenta conectarse directamente con la ciudadanía -de ahí la referencia a los *cabildos abiertos*. Como señala Sergio Israel (2019) combina varios elementos: es licenciado en Historia, proviene de una familia colorada riverista, opuesta al batllismo, pero admira el pensamiento de Jorge Abelardo Ramos, cuyo ideario de patria grande conoció de la mano del filósofo Alberto Methol Ferré. Guido Manini Ríos se alineó con la logia ultranacionalista **Tenientes de Artigas**, cuyos fundadores, anticomunistas y antimasones, tuvieron un fuerte protagonismo en el golpe de Estado de 1973 (Israel, 2019). U N ELEMENTO Según los datos de Equipos Consultores (2019), la ciudadanía que apoyó a CA era mayoritariamente -61%- de clase baja y media baja, 17% de clase media y 22% de clase alta.

Había más hombres que mujeres y predominaban las edades intermedias -30 a 49 años-. En cuanto a la autoidentificación ideológica de quienes apoyan a Cabildo Abierto, el 49% de los votantes de Cabildo Abierto se consideraba de centro, el 25% de derecha, el 21% de centro derecha, el 4% de centro izquierda y el 1% de izquierda. Respecto a quienes votaron en el 2014 los ahora adherente de CA, el 31% al Partido Nacional, el 18% al Frente Amplio y el 13% al Partido Colorado (El Observador, 2019)¹¹. La autoidentificación se aleja de lo que varios analistas políticos esperaban de los votantes de Cabildo Abierto – es decir, que se ubicaran en la **extrema derecha**- y parece más útil pensar el clivaje desde nacional popular/cosmopolita liberal que izquierda/derecha, como propone Diego Hernández Nilson:

Una parte del problema del FA es la subestimación y desatención de lo popular en favor de un cosmopolitismo universalista y modernizador [...] El FA triunfa en la capital y en los departamentos más ricos, pero pierde votos en los más pobres [...] quien nos comió el hígado no fue la derecha tradicional (los “partidos oligárquicos”), sino Cabildo Abierto, una suerte de Liga Ruralista del siglo XXI, de carácter populista” (Hernández Nilson, 2019).

Otro elemento aglutinante de los militares fue el rechazo a la aprobación de la ley que redujo la cantidad de generales en el ejército.¹²

Desde la izquierda se pueden identificar sectores históricos dentro del Frente Amplio que se han “corrido” más a la izquierda -es el caso del **Partido Socialista** luego que en una elección interna ganó el sector más ortodoxo- o que surgieron como sectores más radicales: el **Movimiento de Participación Popular (MPP)**, el **Partido Comunista** y **Casa Grande**, entre otros. Fuera del Frente Amplio, la **Unión Popular del Uruguay**¹³ también se presenta como *artiguista* y sus propuestas reproducen la vieja agenda de izquierda antimperialista y clasista.

En definitiva, a pesar de la novedad que representa el surgimiento en muy poco tiempo de Cabildo Abierto, la centralidad de los partidos políticos¹⁴, las simpatías políticas e incluso la congruencia ideológica se sostienen en el tiempo. La satisfacción con la democracia es la más alta en América Latina: 59,5%, mientras que el promedio regional es de 39,6% (Lapop, 2019). El análisis empírico de Daniel Buquet y Lucía Selios (2017) da cuenta de un nivel moderado de congruencia ideológica de los votantes y sus partidos: los votantes del Frente Amplio tienden a ser más moderados que sus representantes y al contrario sucede con los partidos tradicionales. Es interesante anotar que justamente uno de los temas que presentaba mayor incongruencia se refiere al tema de cómo enfrentar uno de los grandes problemas del Uruguay, es decir la inseguridad, que se traduce en altos niveles de robo y homicidios por dicha causa. Mientras las élites gobernantes priorizan las garantías individuales, los ciudadanos priorizan el orden, no es casual que esta fue una de las razones del crecimiento de la derecha en Uruguay en las elecciones de 2019. De cualquier manera, los autores muestran que en Uruguay existe congruencia ideológica entre los simpatizantes de los distintos partidos y la ideología de cada uno de los partidos. Quienes votan al FA se consideran de centro-izquierda y quienes votan a los partidos tradicionales se autoidentifican como de centro-derecha (en el análisis de Buquet y Selios no se considera a Cabildo Abierto pues no existía antes de 2019).

En el caso uruguayo no podemos hablar de *déficit democrático*, un fenómeno extendido en el mundo, aunque hay algunos indicadores que deben alertar de posibles cambios, en particular el surgimiento de Cabildo Abierto y el crecimiento del liderazgo de Manini Ríos, un político que proviene de las Fuerzas Armadas. Pippa Norris (2011) entiende que el *déficit democrático* hace referencia centralmente a tres aspectos:

11. <https://www.elobservador.com.uy/nota/de-donde-son-que-nivel-de-ingresos-tienen-y-a-quien-votaban-los-que-apoyan-a-manini-20198721521>

12. <https://www.elobservador.com.uy/nota/senado-aprobo-reforma-de-ley-organica-militar-que-re-corta-cantidad-de-generales-del-ejercito-2019716162440>

13. <https://www.unidadpopular.org.uy/>

14. Dicha centralidad fue analizada por diversos autores, entre ellos Caetano y Rilla (1996), Buquet y Chasquetti (2004), Lissidini (2002), Pousadela (2018).

- ♦ existen ciertas expectativas de la ciudadanía con respecto a la democracia –como sistema político- de generar o hacer algo
- ♦ existe un nivel de satisfacción con respecto a esas expectativas o aspiraciones
- ♦ existe una brecha entre las expectativas de la ciudadanía y la satisfacción del cumplimiento de las expectativas democráticas.

Es decir, las aspiraciones de los ciudadanos se distancian crecientemente de las respuestas de sus gobernantes, partidos y líderes políticos.

En Uruguay, el diagnóstico de la opinión pública sobre los principales problemas del país- inseguridad y economía- estaban fuertemente correlacionado con la pertenencia partidaria. Según la empresa encuestadora **Cifra** (2019) la mitad de los votantes del Frente consideraba que la situación económica del país era buena, mientras que la amplia mayoría de los demás votantes opinaba que era mala. Los más negativos eran quienes pensaban votar al Partido Nacional. Los indecisos tenían un perfil de opiniones más parecido a los votantes de la oposición que a los del oficialismo: 58% veía mal la economía. La congruencia entre los simpatizantes de los distintos partidos y la ideología de cada uno de los partidos era alta: quienes votan al FA se consideraban de centro-izquierda y quienes votaban a los partidos tradicionales se autoidentifican como de centro-derecha.¹⁵

Las demandas de cambio, especialmente frente a la percepción de alta inseguridad, contribuyeron al surgimiento de un partido nuevo -Cabildo Abierto- que canalizó el 11,04% de los votos en octubre de 2019 y contribuyó al descenso de los votos del partido en el gobierno. El Frente Amplio -FA- descendió al 39,01% (en 2014 tuvo 47,81%). El Partido Nacional-PN- recibió 28.62%, también redujo su votación, en 2014 obtuvo el 30,88% y el Partido Colorado -PC- mantuvo su porcentaje: 12,33% en 2019, 12,88% en 2014 (Corte Electoral del Uruguay). Pero más allá de los cambios -menores- los partidos políticos siguen siendo centrales y más importante: se mantiene el lazo que une a los ciudadanos con el sistema de partidos.

Otro indicador de ausencia de *déficit democrático* es la participación electoral. El porcentaje de votación en las elecciones es de más del 90%, aunque vale aclarar que el voto es obligatorio y con sanciones para los menores de 70 años que no concurren. Lo interesante es que tan sólo el 2% vota en blanco o anulado y en las últimas elecciones casi el 80% votó a los partidos tradicionales, es decir Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Los lazos con el sistema de partidos, aunque puede haber “salidas” -y de hecho se registró una importante con la votación a CA en 2019- sigue siendo sólidos, predomina la “lealtad”. Incluso la última reforma electoral (1996) que algunos consideraron una amenaza para los partidos, y en especial para el Frente Amplio no tuvo los efectos temidos y el Frente Amplio logró ganar el balotaje en dos instancias seguidas.¹⁶ En 2004, el FA se volvió el nuevo partido predominante del sistema, como antes lo habían sido los colorados. Pero eso recién se comprobó en 2014, al ganar con mayorías legislativas propias en tres elecciones consecutivas (González, 2014). Las últimas elecciones -2019- redujo la cantidad de parlamentarios del Frente Amplio y prácticamente mantuvo igual la de los partidos Nacional y Colorado. Surge sí un nuevo partido relevante: Cabildo Abierto y hay tres partidos minoritarios: Partido Independiente, Partido de la gente y Partido Ecologista Radical Independiente.

15. www.cifra.com.uy/index.php/2019/10/31/el-perfil-de-los-votantes-de-los-distintos-partidos/

16. Las principales características del sistema electoral son: 1. **Elecciones internas** (o primarias) en todos los partidos, abiertas y simultáneas en el año electoral. Obligatorias para los partidos; los que no se presentan -o no logran una votación mínima-, no pueden competir en las elecciones. Los ciudadanos no están obligados a votar en esta instancia. 2. El **Parlamento** se elige cada cinco años con listas bloqueadas y cerradas el último domingo de octubre; los candidatos votados a presidente y a senadores y diputados nacionales tienen que ser del mismo partido. 3. Los **gobiernos departamentales** se eligen en la primera mitad del año siguiente. 4. La **presidencia** requiere mayoría absoluta. Si en octubre nadie la obtiene, hay segunda vuelta o balotaje entre los dos candidatos más votados.

Canalización de las demandas: parlamento y democracia directa

17. <https://parlamentosite.wordpress.com/30-anos-de-democracia-parlamentaria/>

18. <https://brecha.com.uy/medias-tintas/>

19. Uruguay cuenta con aproximadamente 300.000 LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgénero e Intersexuales). Fuente: *La República*, 13 de julio de 2016.

20. Esta afirmación surge del análisis de los debates parlamentarios disponible en el sitio web www.parlamento.gub.uy.

Un indicador fundamental de la calidad de una democracia es el rol que juega el congreso en un sistema político. Daniel Chasqueti -coordinador del proyecto Programa de Estudios Parlamentarios¹⁷- señala cuatro aspectos que hacen a la importancia del parlamento en Uruguay: *es el hábitat natural de los partidos, es el ámbito donde se toman las grandes decisiones, es el lugar donde el gobierno rinde cuentas al Parlamento y es un ámbito inclusivo donde todas las corrientes tienen lugar* (Chasqueti, 2015). Aunque no hay informes recientes publicados, Chasqueti estima que el 85% de las leyes se aprobó por unanimidad.¹⁸

Además, en los últimos 15 años se aprobó un conjunto de leyes que conformó la llamada **Agenda de Derechos**, una agenda que es referencia mundial para las minorías y que fue producto de una combinación virtuosa entre cuatro elementos:

- ♦ La conformación de nuevos actores sociales o el fortalecimiento de aquellos que tienen larga data: organizaciones feministas, movilizaciones LGBTI+¹⁹, coordinadoras por la legalización del cannabis, organizaciones sindicales, juventudes políticas, organizaciones afrouuguayas, entre otras. Fueron quienes promovieron y se movilaron para dar carácter de ley a las demandas que conforman la agenda.
- ♦ 2. La visibilización y contribución política de un *saber experto* que dio fundamento y contenido a las leyes. Ese conocimiento surgió de las universidades -en particular de la Universidad de la República, pero también de agencias internacionales como el **Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)**, por sus siglas en inglés y de la **Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)**, de los datos del **Instituto Nacional de Estadísticas** y de otros institutos públicos (como la **Junta Nacional de Drogas** y el **Instituto Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes**). Las cifras sobre aborto, educación, tiempo de cuidado y de ocio, vulnerabilidad, pobreza y empleo, fueron constantemente citados en los debates parlamentarios -especialmente en las comisiones- y en la justificación de las leyes.²⁰
- ♦ Un Parlamento conformado por una mayoría de congresistas de la coalición de izquierda (Frente Amplio) que fue receptivo a las demandas sociales y al mismo tiempo buscó, a través del diálogo y la negociación con otros partidos, la aprobación de leyes por unanimidad o con mayorías amplias. Las organizaciones de todo tipo -sindicales y empresariales, feministas y anti abortistas y muchas otras- fueron habitualmente convocadas por las **Comisiones Parlamentarias** para expresar sus opiniones, las cuales se consideraron a la hora de redactar cada ley. También asistió a estas comisiones el saber experto antes mencionado.
- ♦ Un Poder Ejecutivo gobernado por el **Encuentro Progresista-Frente Amplio**, el cual promovió o aceptó las demandas que surgían de la sociedad civil y del *saber experto*. Las modificaciones introducidas en todas las leyes presentadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Parlamento, dan cuenta de esa negociación y de ese diálogo (Cuadro 1).

Es decir, el Parlamento fue una caja de resonancia de iniciativas promovidas por algunas minorías intensas que lograron ser escuchadas por la mayoría de quienes ocupaban el Poder Legislativo, en consonancia -con excepciones- con el Poder Ejecutivo. Buena parte de esas leyes fueron negociadas para lograr mayor aceptación dentro del Parlamento, y por tanto dentro de la sociedad toda.

También existieron iniciativas de parte de otras organizaciones para derogar leyes aprobadas por el Parlamento y para aprobar reformas constitucionales que no fueron consideradas. En esos casos, se puso en marcha el ejercicio de la *democracia directa*, a través de la recolección de firmas para proponer un plebiscito -reforma constitucional- o un

referéndum -para derogar una ley-. Una síntesis se presenta en el Cuadro 2. En términos generales, la democracia directa contribuyó a ampliar la democracia: canalizó por vías formales las demandas e introdujo nuevos temas en la agenda. Aunque los resultados fueron dispares, en su conjunto operaron reduciendo el déficit democrático. La ciudadanía por acción -firmando y votando- u omisión -no dando su firma, ni presentándose a votar- pudo expresar su preferencia. Aunque el mecanismo podría ser mejorado, un análisis histórico del mismo muestra que ha sido beneficioso para la democracia uruguaya (Lissidini, 2019)

Gobierno multicolor: ¿el fin de una forma de gobernar?

El gobierno de Luis Alberto Lacalle (2020-2025) se inició con un desafío inesperado: la pandemia que generó la expansión mundial del Coronavirus. Todavía es prematuro analizar la reacción política y de políticas que promovió en estos días el presidente. En principio sus medidas fueron desordenadas, mal argumentadas y mostraron escaso manejo técnico, también una tentación de concentración en el liderazgo presidencial. Aunque la Constitución le impone barreras importantes al gobierno -es un *régimen semipresidencial o semiparlamentario*- la tentación de usar la mayoría parlamentaria para tomar decisiones sin el apoyo de la oposición, que representa la mitad de la población, sería una ruptura con la tradición democrática del país. En la crisis de 2002 -producto en gran medida de la crisis del 2001 en Argentina- el Frente Amplio jugó un papel clave y constructivo, evitando el estallido social y manteniendo la estabilidad política. Este es un contexto global más difícil, pero Uruguay está en mejores condiciones económicas y sociales que en el pasado y mejor respecto a la mayoría de los países latinoamericanos: menor pobreza, menor desigualdad y una mayor y mejor cobertura en salud pública. El desafío del gobierno actual es promover políticas que se sustenten en un amplio respaldo social y político, que muestren una mejor coordinación entre los diferentes ministerios y que integren las dimensiones sociales, políticas y económicas de la crisis. Lo que se decida puede acelerar la desigualdad económica y social y fragmentar aún más la sociedad o atemperarla, protegiendo a los sectores más vulnerables. También está en juego mantener la calidad de la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos (Lissidini, 2020)

PD. 6 de abril de 2020

En los últimos días, el gobierno encabezado por Luis Alberto Lacalle recibió a delegados del principal partido opositor -Frente Amplio- y entabló diálogos con diversas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el Parlamento aprobó por unanimidad el **Fondo Coronavirus** para cubrir el impacto de la pandemia en Uruguay. Además, creó un impuesto para los sueldos más altos de los cargos políticos, de especial confianza y funcionarios públicos. Este impuesto transitorio no afecta a empleados y funcionarios privados. Explícitamente se declaró en contra de gravar al “capital”, dejando en claro su posicionamiento ideológico.

Cuadro 1. Principales leyes y decretos que amplían derechos en Uruguay (2005-2018)

Ley N° 17.930 Artículo 377° (2005)	Se establece que INMUJERES será el órgano rector de las políticas de género, jerarquizado y con recursos económicos
Ley N° 18.065 (2006)	Reconocimiento del trabajo doméstico y equiparación al resto de los trabajadores privados en materia de derechos y obligaciones. Se consolida la negociación colectiva a partir del reconocimiento del estatus sindical de las trabajadoras domésticas
Ley N° 18.104 (2007)	Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
Ley N° 18.246 (2007)	Unión concubinaria. Reconoce la situación de hecho derivada de la convivencia de dos personas no unidas por matrimonio, cualquiera sea su sexo, identidad u opción sexual.
Ley N° 18.227 (2007)	Ampliación de las Asignaciones Familiares a personas sin trabajo formal.
Ley N° 18.395 (2008)	Flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación común y aumento del cómputo de años para las mujeres con hijos
Ley N° 18.426 (2008)	Derecho a la salud sexual y reproductiva (artículos sobre aborto vetados por el Poder Ejecutivo).
Ley N° 18.566 (2009)	Ampliación del sistema de negociación colectiva. Permite mejorar la situación laboral y legal de los hombres y las mujeres trabajadoras
Ley N° 18.620 (2009)	Derecho a la identidad basada en la decisión de la persona. Derogada por: Ley N° 19.684 de 2018 artículo 24.
Ley N° 18.590 (2009)	Derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y de personas solas, agilización del trámite de adopción.
Decreto N° 09011695 (2009)	Derogación del decreto de 1988 que impedía ingresar a las Fuerzas Armadas a personas con «desviaciones sexuales» (homosexuales).
Ley N° 18.476 (2009)	Inclusión de mujeres en las listas para las elecciones nacionales “ley de cuotas” para las elecciones nacionales de 2014 y departamentales de 2015. Derogada por: Ley N° 19.555 de 2017
Ley N° 18.987 (2012)	Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (aborto)
Ley N° 19.161 (2013)	Derecho a subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada
Ley N° 19.172 (2013)	El Estado asume el control sobre la producción de la marihuana. Se permite el autocultivo y los clubes cannábicos
Ley N° 19.075 (2013)	Derecho al casamiento entre personas del mismo sexo
Ley N° 19.122 (2013)	Normas para favorecer la participación de los afrodescendientes en las áreas educativa y laboral (se establecen cuotas)
Ley N° 19.167 (2013)	Se establecen aprueban diversas técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres, y parejas heterosexuales y homosexuales. Se prohíbe el “alquiler de vientre”.
Ley N° 19.555 (2017)	Se establece la participación equitativa de ambos sexos en la integración de los órganos electivos nacionales, departamentales y de dirección de los partidos políticos (ley de cuotas).
Ley N° 19.691 (2018)	Protección integral de personas con discapacidad. Se aprueba la ley de empleo privado para personas con discapacidad (ampliando la ley 18.691). Se establecen “cuotas” en el mercado laboral.
Ley N° 19.685 (2018)	Promoción de organizaciones con equidad de género -es decir, aquellas que verifiquen la participación de mujeres en la gestión de la organización y del sistema productivo-
Ley 19.643 (2018)	Prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.
Ley N° 19.689 (2018)	Promoción de empleo para jóvenes -18 a 29 años-, incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo.
Ley N° 19.684 (2018)	Protección integral para personas trans, derecho a la identidad de género. Reparación para personas víctimas del régimen no democrático (1973-1984)

Elaboración propia en base a datos del Parlamento uruguayo y revisión de prensa

Cuadro 2. Principales iniciativas y ejercicios de democracia directa en Uruguay (2013- 2019)

Tipo de iniciativa: referéndum (vía rápida o larga) y plebiscito.* Año	Grupos Promotores de la iniciativa y apoyos	Grupos en contra de la iniciativa	Campañas	Resultados y efectos
Referéndum “vía rápida” contra el aborto 2013	Comisión Nacional Pro Derogación de la Despenalización del Aborto, integrado por grupos pro-vida, Vamos Uruguay del Partido Colorado y el Partido Nacional. Apoyaron sectores de la Iglesia Católica.	Organizaciones sociales y políticas promovieron no ir a votar. Las organizaciones feministas fueron las promotoras de la legalización del aborto y por tanto del mantenimiento de la ley	No hubo grandes campañas, salvo en las redes sociales a favor y en contra del referéndum.	No se lograron los votos necesarios para que se convocara a referéndum. No hubo más intentos por derogar la interrupción del embarazo. No se volvió a plantear el tema
Plebiscito, reforma Constitucional Se propone bajar la edad de imputabilidad, entre otras medidas punitivistas 2014	Propuesta impulsada por la Comisión para vivir en paz, integrada por líderes del Partido Nacional especialmente Luis Alberto Lacalle) y Pedro del Partido Colorado, Pedro Bordaberry	Comisión “No a la baja”, integrada por activistas sociales, feministas, académicos, jóvenes de diversos grupos políticos y sociales.	Intensas campañas, debates y de movilización, especialmente por parte de los jóvenes para impedir la baja de la edad de imputabilidad	No logró la adhesión necesaria – mayoría- para su aprobación. Sin embargo, en el Parlamento se votaron leyes punitivistas luego del plebiscito.
Plebiscito, reforma constitucional para derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera 2019	Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece), CAMBADA Comisión de Jubilados y Pensionistas del Uruguay “Un Solo Uruguay”	El gobierno, la central sindical PIT-CNT. La ley fue aprobada con los votos del oficialismo (Frente Amplio)	Escasa campañas a favor de la reforma en redes y en las calles, aunque algunos sectores tanto de izquierda como de derecha insisten en el tema.	No se juntaron las firmas requeridas, aunque tal vez se presenten más adelante. El debate sigue presente.
Referéndum contra la ley de riego “vía lenta” 2019	Organizaciones ambientalistas (Amigos de la Tierra, entre otros); el sindicato de OSE (agua), organizaciones de la sociedad civil, académicos y sectores de izquierda.	Dado que la ley fue aprobada por amplia mayoría (tuvo consenso en la Cámara de Senadores y mayoría en Diputados), pocos sectores políticos apoyaron el referéndum.	La campaña se realizó especialmente a través de la movilización en la calle, debates en ámbitos académicos y activismo en las redes sociales. Pocos medios siguieron el tema	No se derogó la ley, pero se sigue intentando por la vía de declararla inconstitucional. El tema ambiental genera diferencias al interior de la izquierda
Plebiscito, reforma constitucional Se propone un aumento del punitivismo y la creación de una Guardia Nacional integrada por militares 2019	Comisión “vivir sin miedo” integrada por sectores del Partido Nacional (especialmente la Alianza Nacional), liderado por Jorge Larrañaga.	Se está organizando la Comisión contra el plebiscito y comienzan a definirse los diferentes líderes políticos y sociales. Se sumaron a favor sectores del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado	El debate en los medios estuvo presente y la opinión pública fue cambiando (según las encuestas). Los posicionamientos políticos fueron centrales para el voto.	No se aprobó al no alcanzar la mayoría, pero obtuvo un alto apoyo -47%- Sin embargo, el gobierno electo pretende aprobar algunas de esas leyes en el Parlamento (2020)
Referéndum vía rápida, para derogar la Ley Integral Trans 2019	“Todos somos iguales” fue impulsada por el precandidato del PN Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante Pro-Vida) y por el diputado nacionalista Álvaro Dastugue (Esperanza Nacional).	Se opusieron jóvenes del Partido Nacional y organizaciones sociales y políticas, en especial aquellas que promovieron la Ley Integral Trans. Dicha fue votada por la mayoría del parlamento.	La campaña en contra de la ley fue muy acotada a grupos de derecha. Se confirmó la convocatoria a pre-referéndum para 4 de agosto.	No se aprobó la convocatoria a referéndum, obtuvo sólo 9,90% de apoyo. Se dio por cerrado el tema.

Fuente: Elaboración propia en base a la prensa y fuentes parlamentarias

* **Aclaración:** Las firmas que respaldan una propuesta de reforma constitucional se presentan ante la Presidencia de la Asamblea Nacional, mientras que las firmas para la derogación de una ley se presentan directamente en la Corte Electoral.

Referencias bibliográficas

- Amarante, V. y Gómez, M. (2016). “El proceso de formalización en el mercado laboral uruguayo”, *Serie Estudios y Perspectivas - Montevideo*, N° 20. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Buquet, D. (1997). “Reforma Política y Gobernabilidad Democrática en Uruguay: la Reforma Constitucional de 1996”. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, N° 10, pp. 9-24.
- Buquet, D. y Selios, L. (2017). “Political Congruence in Uruguay, 2014”, en Joignant A., Morales M. y Fuentes C. (ed.) *Malaise in Representation in Latin American Countries*. New York: Palgrave - MacMillan.
- Burdin, G. Esponda, F. y Vigorito, A. (2014). *Desigualdad y sectores de altos ingresos en Uruguay: un análisis en base a registros tributarios y encuestas de hogares para el periodo 2009-2011*, serie Documentos de Trabajo, N° 06/2014. Montevideo: Instituto de Economía, Universidad de la República.
- Caetano, G. y Rilla, J. (1992). “Raíces y permanencias de la partidocracia uruguaya”, *Secuencia*, N° 22, enero.
- Chasqueti, D. y Buquet, D. (2004). “La democracia en Uruguay: una partidocracia de consenso”, *Política*, N° 42. Santiago: Universidad de Chile.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019). *Panorama Social de América Latina 2019*. Santiago.
- Demasi, C. (2012). “La partidocracia uruguaya: aportes para la discusión de una hipótesis”. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, Año 3, Vol. 3.
- Garcé, A. (2006). *Donde hubo fuego El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)*. Montevideo: Fin de Siglo.
- González, L. E. (2015). “Uruguay en las dos primeras décadas del siglo XXI: partidos cambiantes, sistema estableLa campaña electoral 2014”, en *Uruguay*. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay - Fundación Konrad Adenauer.
- Hernández Nilson, D. (2019) “¿El pueblo dónde está?” *Semanario Brecha*, 1 de noviembre.
- Israel, S. (2019) “El pensador nacionalista Methol Ferré, un nexo ideológico entre los tupamaros y Manini Ríos” *Semanario Búsqueda*, 12 al 18 de diciembre. Recuperado de <https://www.búsqueda.com.uy/nota/el-pensador-nacionalista-methol-ferre-un-nexo-ideologico-entre-los-tupamaros-y-manini-rios/ls-3102-6dfbe14c1894b51af655>
- Linz, J. y Stepan, A. (1996) *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lissidini, A. (2002) “Uruguay y la centralidad de la política”, en Cavarozzi, M. y Abal Medina J. M. (ed.) *El Asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era liberal*. Rosario: Homo Sapiens.
- (2014). “Paradojas de la participación en América Latina: ¿puede la democracia directa institucionalizar la protesta?”. En Lissidini, Welp y Zovatto (comp.) *Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participación en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre Democracia Directa, Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.
- (2016) “Uruguay: derechos y cambio social. ¿Un país de izquierda? *Revista Nuso* N° 266. Recuperado de <https://nuso.org/articulo/uruguay-derechos-y-cambio-social/>
- (2019) “Ante la sospecha: más democracia”. *La Diaria*, 23 de mayo. Recuperado de <https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/5/ante-la-sospecha-mas-democracia/>
- (2020) “Uruguay: la política debe salir de la cuarentena”. *Agenda Pública, El País*. 23 de marzo. Recuperado de <http://agendapublica.elpais.com/uruguay-la-politica-debe-salir-de-la-cuarentena/>.

- Morlino, L. (2014). *La calidad de las democracias en América Latina*. San José: Informe para IDEA Internacional.
- Pousadela, I. M. (2018). "Participation and Representation in Uruguay: Challenges for Social Mobilization in a Party-Centered Society", en Albala, A. (ed.) *Civil Society and Political Representation in Latin America (2010–2015)*. Springer International Publishing.
- Zechmeister, E. J. y Lupu, N. (ed.) (2019). *Pulse of Democracy*. Nashville: LAPOP.

Stéphanie Alenda
salenda@unab.cl
Universidad Andrés Bello
Chile

Recibido: 11/01/2020
Aprobado: 06/03/2020

Las ambivalencias de la derecha

en la gestión de la Primavera Chilena de 2019-2020*

Resumen

Este texto aborda la gestión del estallido social o *primavera chilena* de parte del gobierno examinando críticamente la existencia en Chile de dos derechas: un ala dura que explicaría las reminiscencias del pasado autoritario cuando el presidente Piñera decretó el estado de emergencia el 19 de octubre de 2019 y un ala blanda, más renovada y moderada. Enmarcando el análisis en la sociología de las crisis políticas desarrollada por Michel Dobry, se muestra más bien, por un lado, la existencia de una derecha unida en la defensa del orden y seguridad y, por otro lado, la existencia de diferentes sensibilidades, a veces cruzadas, unas más garantes del núcleo duro identitario (conservador en el ámbito moral, subsidiario en cuanto al rol atribuido al Estado en la economía) que otras (más liberales y solidarias). Se argumenta que estas sensibilidades, expresadas en particular en el posicionamiento de la coalición a favor o en contra de una nueva Constitución, no reflejan una polarización en torno al clivaje autoritarismo/democracia, sino que son en parte influenciadas por la dinámica de ciertas lógicas de situación que constriñen las percepciones, cálculos y tácticas de los actores.

Palabras clave

Derecha, Primavera Chilena, Democracia, Autoritarismo.

* Una primera versión de este artículo fue publicada en la revista *IdeAs* [on line], N° 15, marzo 2020, bajo el título *Les ambivalences de la droite chilienne dans la gestion de la crise*.

Abstract

This article addresses the management of the Chilean social outbreak or *spring* by the government examining critically the existence in Chile of two rights: hard liners which would explain the reminiscences of the authoritarian past when President Piñera declared the state of emergency on October 19th, 2019 vs. soft liners, more renewed and moderate. Framing the analysis in the sociology of political crises developed by Michel Dobry, it shows rather, on the one hand, the existence of a right with a unified position regarding the defense of public order and security and, on the other hand, the existence of different sensibilities, sometimes crossed, some more protective of the core identity (conservative in the moral field, subsidiary in terms of the role attributed to the State in the economy) than others (more liberal and solidary). It is argued that these sensibilities, expressed in particular in the position of the coalition in favor or against a new Constitution, do not reflect a polarization around authoritarianism/democracy cleavage but are partly influenced by the logics of certain situations that constrain the perceptions, calculations and tactics of the actors.

Keywords

Right, Chilean Spring, Democracy, Authoritarianism.

Introducción

En 2010, Chile elegía democráticamente a su primer presidente de derecha desde 1958, reelecto por un segundo período en 2017. Los inicios del primer gobierno de Sebastián Piñera han sido marcados por su identificación con la idea de una **nueva derecha**, modernizada, *muy alejada de los totalitarismos y de los atropellos a los derechos humanos* (El País, 2010); también capaz de subir los impuestos para financiar la reconstrucción del país luego del terremoto de febrero de 2010. Cuando el 19 de octubre Piñera decretó el estado de emergencia, recibiendo un espaldarazo del líder de la derecha radical, José Antonio Kast¹, la derecha pareció reconectarse con su pasado autoritario. Sin embargo, algunos días después (el 24 de octubre), la invitación del presidente a que vinieran observadores de la ONU y de **Human Rights Watch** volvía a sintonizar con la defensa de los DDHH, un aspecto que marca una suerte de línea divisoria entre la *nueva derecha*² y la más antigua (la **Unión Demócrata Independiente**³ y algunos sectores de **Renovación Nacional**). ¿Cómo interpretar la ambivalencia de estas tomas de posición? ¿Podría explicarse por la existencia de dos derechas, un ala dura y otra moderada, que suelen ser plasmadas en la oposición entre los **halcones**, representantes de los poderes fácticos y garantes del núcleo identitario y las **palomas**, defensores de las instituciones políticas y del proyecto de poder de la derecha (Macari, 2010, Bellolio, 2016)? Para algunos, estas dos alas habrían reaparecido bajo los rasgos del ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dirigente histórico de la UDI y Gonzalo Blumel, su sucesor, miembro de Evópoli y de una nueva generación de dirigentes (Batarce, 2019). Para otros, la gestión de Blumel no lo diferenciaría mucho del ala dura, pues no habría tenido impacto en la reducción de las violaciones a los DDHH (Gaete *et al.*, 2019). ¿Aquellas dos derechas tendrían una incidencia en la manera en que el estallido social o **Primavera Chilena** (Somma *et al.*, 2020) ha sido gestionada por el gobierno?

1. Candidato independiente en la elección presidencial de 2017. Logró el cuarto lugar de la votación, con un 7,9% de los votos, tras una campaña que apuntó al ala más dura y conservadora de la derecha.

2. Con esta categoría nos referimos no sólo a la *nueva derecha* del primer mandato de Sebastián Piñera sino también a **Evópoli**, fundado en 2015 como un proyecto de renovación de la derecha chilena. Para mayores detalles sobre este partido, remitimos a Alenda *et al.* (2020a).

3. La **UDI** se originó en el movimiento conservador *gremial* (1987) cuyos cuadros tuvieron una participación importante en la dictadura de Pinochet (Alenda, 2014). **Renovación Nacional** es fundado en la misma fecha como un partido de centro-derecha, y constituye actualmente el ala moderada de la coalición **Chile Vamos**.

Mostraremos más bien que la dinámica de la crisis, en particular el proceso constitucional, reveló la existencia de diferentes sensibilidades al interior de la derecha que permanece no obstante unida en la defensa del orden, invitando a complejizar la dicotomía entre los **halcones** y las **palomas**.

La vuelta a los principios fundamentales: el orden y la autoridad

4. Remitimos sobre este tema al libro colectivo dirigido por Annie Collovald y Brigitte Gaïti, 2006.

5. Gonzalo Cordero, director de comunicación de la segunda campaña de Piñera, considera que esta frase contribuyó a la estigmatización de la protesta, aunque se explica en que el presidente había sido informado de tentativas de sabotaje de la red de comunicación y del sistema financiero del país. Según Cordero, el problema del control del orden público [...] planteaba un problema de gobernabilidad, un problema de estabilidad del gobierno. Estuvimos a punto de pasar un umbral después del cual el gobierno simplemente ya no existe. Había por lo tanto una necesidad tanto simbólica como material de recuperar el orden público, el control del territorio en el sentido de espacio público (entrevista, 16 de enero de 2019).

6. ¿Cómo interpretar de otra forma la polémica, al inicio del estado de emergencia, sobre la existencia de un centro de tortura en una de las estaciones del metro de Santiago o la de personas detenidas/desaparecidas? Aunque estos rumores no fueron comprobados, han sido relevados por los comentaristas de la actualidad chilena.

7. Alenda *et al.* (2018) muestran sin embargo que la obsesión por esos principios trasciende en Chile la cultura política de derecha.

8. Entrevista a Gonzalo Cordero, 16 de enero 2019.

9. Principio con origen en la Doctrina Social de la Iglesia. Circunscribe la intervención del Estado a las situaciones en las que los particulares o grupos intermedios no cuentan con las competencias adecuadas para bastarse por sí mismos (Alenda *et al.*, 2020b).

Es necesario primero ubicar esta reflexión en un marco general, el de la **sociología de las crisis políticas** (Dobry, 1986), que permite recordar que las coyunturas fluidas son particularmente propicias a la radicalización política, pero también que las rupturas más radicales pueden producirse gradualmente, incluso en configuraciones dominadas en su origen por individuos moderados⁴. Es entonces en la dinámica de las lógicas de situación específica que constriñen las percepciones, cálculos y tácticas de los actores que debemos comprender ciertas decisiones y sus efectos, tomando en cuenta la forma en que éstos no sólo gestionan sino también suscitan y reaccionan a ciertos procesos de movilización política, recurriendo a ciertas **jugadas** que pueden ser definidas como *actos y comportamientos individuales o colectivos que afectan sea las expectativas de los protagonistas de un conflicto en relación al comportamiento de los demás actores, sea lo que Goffman llama su “situación existencial”* (Dobry, 1986: 21). A grandes rasgos, dos momentos pueden ser distinguidos en la gestión de la *Primavera Chilena*: una **fase reactiva inicial**, la más crítica, que sucede al incendio simultáneo de nueve estaciones de metro y condujo al presidente Piñera a decretar el estado de emergencia, y un segundo tiempo en el que el gobierno buscó avanzar en la vía de la **normalización**, sin efectos notorios sobre la disminución de las movilizaciones.

No sólo la crisis ha develado las diferentes posiciones existentes al interior de la coalición de gobierno (volvemos más adelante sobre este punto). Reavivó además, mediante un efecto espejo, ciertos traumas, sin duda asimétricos pero no menos reales, entre una derecha que volvió al discurso del enemigo interno y de la seguridad nacional a través del *estamos en guerra*⁵ del presidente Piñera (20 de octubre de 2019), hipotecando de esta forma la posibilidad de dar una solución política al conflicto; y una izquierda para la cual se reabrió la llaga de las violaciones a los DDHH cometidas en dictadura⁶. La extrema violencia de los acontecimientos interpretada por el gobierno como una voluntad de *destruir* Chile y sus valores de *libertad y democracia* pero también como un riesgo para el Estado si la autodefensa terminase por ser la regla, más que poner en evidencia la influencia de un *ala dura* de la derecha, llevó a su paroxismo los principios constitutivos de su identidad: la defensa del orden y de la autoridad⁷ con, en telón de fondo, la de cierto modelo de desarrollo⁸. En una encuesta aplicada en 2015-2016 (Le Foulon *et al.*, 2020), se pudo comprobar la identificación masiva y transversal al orden de los cuadros dirigentes de la coalición de gobierno. A la pregunta *¿Las protestas sociales deben ser controladas para garantizar el derecho a la libre circulación de las personas?* 84% de la UDI, 83% de RN y 74% de Evópoli habían respondido favorablemente. La encuesta mostraba también la existencia de una derecha que se reconocía mayoritariamente (55,5%) en la máxima política y social de la **subsidiariedad**, principio rector de las políticas neoliberales de fines de los años 70⁹.

Provocando mediante una combinación de elementos críticos de orden decisional e institucional una suerte de “tormenta perfecta”, las medidas tomadas para restablecer el orden se han enfrentado a la crisis del andamiaje institucional del país, en particular el de la institución policial.

Las trabas a la gestión: la crisis de las instituciones

10. Las malversaciones de fondos y abusos de poder de todo tipo han precipitado la debacle de la institución, descabezada de una cuarentena de sus oficiales entre diciembre 2017 y diciembre 2018.

La incapacidad de restablecer el orden se ha visto agravada por la violación masiva a los DDHH -2009 personas han sido heridas entre el 17 de octubre y el 10 de noviembre, según el **Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)**, varios de los cuales han sufrido heridas oculares irreparables-, convirtiendo a Chile en el país donde el Estado ejerce la represión más fuerte en tiempos de conflictos sociales. Este balance debe mucho a la crisis que atraviesan las fuerzas de orden¹⁰, en proceso de reforma y modernización. Todavía considerada por la opinión pública como una de las instituciones más creíbles en 2017, la policía figura hoy entre las más denostadas, 64% de los chilenos estimando que carabineros han violado los DDHH desde octubre de 2019 (CEP, 2019). Pero esta violencia inusitada -el informe de la ONU da cuenta de 2500 carabineros heridos entre el 18 de octubre y 6 de diciembre- puede ser en parte interpretada como una respuesta a la represión y a la criminalización de la protesta. Como muestra la literatura internacional sobre otros conflictos sociales, los protestatarios quienes perciben que la Policía ha hecho un uso indiscriminado de la fuerza en su contra tienden en mayor medida a justificar una respuesta violenta (Maguire *et al.*, 2018). La violencia resulta también de interacciones que se juegan en situaciones particulares en las que reviste un rol central una acción de la policía basada en la comunicación, el respeto por ciertos espacios territoriales, el reconocimiento del rol de las emociones en las explosiones sociales o el hecho de evitar ciertas señales susceptible de escalar el conflicto (Nassauer, 2014). Al revés, la estrategia de contención ejecutada por Carabineros, con una autonomía demasiado grande en relación a la autoridad civil, solo tuvo por efecto ahondar la distancia entre ciudadanos y fuerzas de orden asimiladas al gobierno.

Según la última encuesta del CEP (2019) los chilenos condenan masivamente el uso desproporcionado de la fuerza de parte de Carabineros, al igual que reprueban mayoritariamente el uso que ciertos grupos de manifestantes -la llamada *primera línea* (Claude, 2020)- hacen de la violencia. Este último punto, al mostrar la ineficacia del gobierno en el restablecimiento del orden, ha producido además una desafección de las bases electorales tradicionales de la derecha hacia el gobierno, reflejada en la tasa de aprobación del presidente que cayó al 6% (CEP, 2019). Inscribiéndose en el marco de un régimen presidencial exacerbado, estas percepciones constituyen una traba para la gobernabilidad (Cardenas, 2020). Se suma a ellas el descrédito absoluto del Congreso y de los partidos políticos, lo que contribuye a la baja valorización de los avances en materia de agenda social, eclipsadas por la omnipresencia de la **agenda de orden y seguridad**.

En relación a esta agenda, nada permite entonces concluir la existencia de dos derechas diferenciadas en sus convicciones. La derecha (gobierno, partidos y electorado) parece más bien hacer del restablecimiento del orden público una prioridad. Las diferencias entre los dos ministros del Interior que han gestionado sucesivamente la crisis se resumen solamente en sus edades, afiliaciones partidarias y competencias distintas en materia de gestión y de comunicación. Posteriormente al nombramiento de Blumel como ministro del Interior, fue de hecho anunciado por el presidente Piñera un endurecimiento de las medidas de seguridad mediante la creación de nuevas figuras penales asociadas a los desórdenes públicos (**ley antibarricadas**), la consagración del delito de saqueo y el aumento de las sanciones para los delitos de robo y hurto.

La dinámica de la crisis y el proceso constitucional han revelado no obstante la existencia de diferentes sensibilidades en la derecha, las cuales invitan a complejizar la dicotomía entre los “halcones” y las “palomas”.

Una coalición de centro-derecha entre apertura y repliegue identitario

11. Según Gonzalo Cordero, la derecha tuvo que escoger entre dos alternativas: la firma de este acuerdo o la renuncia del presidente Piñera. Dado que la segunda comportaba más riesgos de inestabilidad política, se optó por la primera (entrevista, 16 de enero de 2019).

12. El **Frente Amplio** es una coalición compuesta de partidos y de movimientos políticos de izquierda y extrema-izquierda.

13. Joaquín Lavín, posible carta presidencial de la UDI y alcalde de una de las comunas más ricas del gran Santiago, Las Condes; el senador Manuel José Ossandón de RN y el presidente de este partido, Mario Desbordes.

14. Varios episodios recientes tuvieron ese efecto, entre los cuales la ovación hecha a los *héroes* de la *primera línea* (manifestantes legitimando el uso de la violencia) durante un **Foro Latinoamericano sobre los DDHH** organizado el 24 de enero de 2020 en el ex Congreso Nacional por un grupo de senadores de la oposición. Fueron invitados a participar los ex presidentes Evo Morales y Rafael Correa, pero también el juez Baltasar Garzón, quien jugó un rol clave en el arresto del general Pinochet.

Las coyunturas de crisis política y de radicalización favorecen el atrincheramiento en un núcleo duro identitario. La fase de **normalización** ha sido también marcada por la firma de un acuerdo transversal por la paz social y la nueva constitución, el 15 de noviembre de 2019, que tuvo por efecto descomprimir el conflicto al responder a la aspiración ciudadana de un nuevo pacto social. Tuvo entonces una repercusión positiva (aunque indirecta, dado que el gobierno se mantuvo al margen de las negociaciones) sobre la gestión de la crisis. Sin embargo, el acuerdo, tomado bajo la presión de la calle¹¹, se deshizo rápidamente a raíz de la presentación de parte de la oposición, a iniciativa del Partido Comunista y del **Frente Amplio**¹², de una serie de acusaciones constitucionales que responsabilizaban a las más altas autoridades del Estado por las violaciones a los DDHH. Estas señales contrarias al compromiso inicial por el restablecimiento del orden, sumadas a las violencias urbanas, terminaron por despertar en la derecha el espectro de la **Unidad Popular**, fortaleciendo la opción del rechazo a una nueva constitución. Para el senador Allamand, uno de los representantes más influyentes de esta opción, el proceso constitucional se convirtió así en una *oportunidad para levantar a la centroderecha que se encuentra alicaída, también para volver a plantearle con fuerza nuestro ideario y que la centroderecha no se acompleje ante la izquierda radical* (Valenzuela, 2020).

Asimismo, la crisis develó la existencia de dos posiciones en la derecha, consideradas ambas como legítimas, vale decir sin efecto polarizante en torno al clivaje autoritarismo/democracia (Muñoz, 2020). La primera, mayoritaria, va en el sentido de las respuestas recogidas en el marco de nuestra encuesta en la que el 79% de la UDI y el 65% de RN se declaraban contrarios al establecimiento de una nueva Constitución, mientras que solo un 39% de Evópoli expresaba su desacuerdo con ese cambio, confirmando la existencia en el conglomerado de una **nueva derecha** claramente disociada de la herencia pinochetista (Alenda *et al.*, 2020b). La segunda, minoritaria, reúne a un grupo importante de cuadros dirigentes -varios de los cuales son alcaldes, quienes ocupan una posición de mayor cercanía con la ciudadanía- pero también ciertas figuras clave de la coalición presentes incluso en las formaciones políticas que se inclinan institucionalmente por el No¹³. Coincide con la oposición sobre otros temas tales como la defensa de una participación igualitaria de las mujeres y de los hombres en la convención constituyente.

Más que la existencia de **halcones** y **palomas**, que se diferenciarían por su relación con las instituciones democráticas, la centro-derecha actual encierra sensibilidades distintas, a veces cruzadas, unas más garantes del núcleo duro identitario (conservador en el ámbito moral, subsidiario en cuanto al rol atribuido al Estado en la economía) que otras (más liberales y solidarias). En función de las *jugadas* realizadas por los diferentes actores del conflicto antes de la celebración del plebiscito, puede esperarse una acentuación de la tendencia a la reacción identitaria¹⁴, al igual que un aumento creciente del rechazo a una nueva Constitución o la victoria de la convención mixta (Retamal, 2020). Este desenlace estaría muy alejado del acuerdo interpartidario del 15 de noviembre por una nueva Constitución.

Referencias bibliográficas

- Alenda, S. (2014). "Les avatars de la 'nouvelle droite' chilienne: la fabrique d'une institution partisane (1967-2010)", *POLITIX - Revue des sciences sociales du politique*, N° 106 (27), pp. 135-161.
- Alenda, S. et al. (2020a). "Evolución Política y la renovación liberal en Chile". *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: FCE.
- (2018). "El estudio de las élites políticas en Chile: figuras y sostenes del orden". *Las élites políticas en el Sur. Un estado de la cuestión de los estudios sobre la Argentina, Brasil y Chile*. Buenos Aires: UNGS.
- (2020b). "Evolución de las sensibilidades políticas: Hacia una nueva centro-derecha en Chile". *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: FCE.
- Batarce, M. C. (2019). "Las renunciaciones que señalan el segundo tiempo del Gobierno", *Pauta*, 18 de diciembre. Recuperado de <https://www.pauta.cl/politica/las-renunciaciones-que-senalan-el-segundo-tiempo-del-gobierno> (consultada el 24 enero de 2020).
- Bellolio, C. (2016). "Halcones y palomas: la derecha frente al proceso Constituyente", *Revista Capital*, 14 de mayo. Recuperado de <https://politicaparaprinicipiantes.com/2016/05/14/halcones-y-palomas-la-derecha-frente-al-proceso-constituyente/> (consultada el 22 enero de 2020).
- Cardenas, R. (2020). "Se buscan los votantes de Piñera: sólo el 18% dice que votó por él en segunda vuelta y mayoría de la derecha lo desaprueba", *La Tercera*, 24 de enero. Recuperado de <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-buscan-los-votantes-de-pinera-solo-18-dice-que-voto-por-el-en-segunda-vuelta-y-mayoria-de-la-derecha-lo-desaprueba/985664/> (consultada el 23 enero de 2020).
- Claude, M. (2020). "Retrato de un clan de la Primera Línea", *Ciper Académico*, 6 de enero. Recuperado de <https://ciperchile.cl/2020/01/06/retrato-de-un-clan-de-la-primera-linea/> (consultada el 23 enero de 2020).
- Collovald, A. y Gaiti, B. (2006). *La démocratie aux extremes. Sur la radicalisation politique*, París: La Dispute.
- Dobry, M. (1986). *Sociologie des crises politiques*. París: Presses de Sciences Po.
- El País (2010). Sebastián Piñera: "Estamos construyendo una nueva derecha", 7 de noviembre. Recuperado de https://elpais.com/diario/2010/11/07/internacional/1289084402_850215.html (consultada el 24 de enero de 2020).
- Encuesta CEP (2019). *Estudio Nacional de Opinión Pública*, N° 84, diciembre.
- Gaete, A. et al. (2019). "60 días de violencia en el Oasis imaginario", *CIPER/Académico*, 19 de diciembre. Recuperado de <https://ciperchile.cl/2019/12/19/60-dias-de-violencia-en-el-oasis-imaginario/> (consultada el 24 de enero de 2020).
- Le Foulon, C. et al. (2020). "Metodología de la encuesta a dirigentes de Chile Vamos". *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: FCE.
- Macari, M. (2010). "Halcones, palomas y la encrucijada dialéctica de la derecha", *El Mostrador*, 8 de abril. Recuperado de <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/04/08/halcones-palomas-y-la-encrucijada-dialectica-de-la-derecha/>.
- Maguire, E. et al. (s/f). "Attitudes towards the Use of Violence against Police among Occupy Wall Street Protesters", *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, pp. 1-17.
- Muñoz, A. (2020). "Stéphanie Alenda, socióloga: no veo que el proceso constituyente lleve a una crisis terminal de Chile Vamos", *La Tercera*, 9 de enero. Recuperado de <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/stephanie-alenda-sociologa-no-veo-proceso-constituyente-lleve-una-crisis-terminal-chile/967229/> (consultada el 23 enero de 2020).

- Nassauer, A. (2015). "Effective crowd policing: empirical insights on avoiding protest violence", *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 38, N° 1, pp. 3-23.
- Retamal, P. (2020). "'Cadem: Baja respaldo al Apruebo' en el plebiscito y hay 'empate técnico' entre convención totalmente electa y fórmula mixta", *La Tercera*, 26 de enero. Recuperado de <https://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-baja-respaldo-al-apruebo-plebiscito-empate-tecnico-convencion-totalmente-electa-formula-mixta/987800/> (consultada el 23 enero de 2020).
- Somma, N. et al. (2020). "No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019-2020", *Social Movement Studies*.
- Valenzuela, P. y Allamand, A. (2020). "Senador de Renovación Nacional: 'Nuestra postura ya no tiene vuelta atrás'", *El Mercurio*, 12 de enero. Recuperado de <https://digital.elmercurio.com/2020/01/12/R/JU3NVR71#zoom=page-width> (consultada el 23 enero de 2020).

**Francisco
Gutiérrez Sanín**
fgutiers@hotmail.com
Universidad Nacional de Colombia
Colombia

Recibido: 03/12/2019
Aprobado: 21/02/2020

Uribe Vélez

¿Demócrata, radical, extremista o todas las anteriores?

Resumen

Este artículo pretende demostrar que la corriente política dominante en Colombia en los últimos tres lustros -el *uribismo*- pertenece a la extrema derecha, y exhibe rasgos a la vez democráticos, radicales y extremistas. A la vez, plantea que ha habido varios *uribismos*, en la medida en que la corriente ha sufrido un proceso de “estrechamiento” y descentramiento que lo ha vuelto más frágil electoralmente y más antiliberal. Pese a ello, el *uribismo* mantiene algunas de sus características fundacionales, que parecen ser compatibles con la democracia colombiana y al mismo tiempo favorecer posiciones extremistas. Todo esto sugiere que hay que reconsiderar la clasificación de las derechas única o principalmente sobre la base de su relación con la democracia.

Palabras clave

Democracia, Uribismo, Política Colombiana.

Abstract

This article strives to demonstrate that the main political trend in Colombia in the last fifteen years or more -the so called *uribismo*- is a rightwing force that combines democratic, radical and extremist characteristics. It shows that the *uribismo* has evolved in time, suffering simultaneously a narrowing of its electoral base and a gradual misalignment of its original coalition, which have made it more fragile electorally and at the same time more antiliberal. However, it argues that the *uribismo* still exhibits its foundational characteristics, that seem compatible with Colombian democracy but at the same time feed very extreme positions. All this suggests that it would be reasonable to reconsider carefully the typologies that classify rightwing parties or movements only or mainly taking into account their relationship with democracy.

Keywords

Democracy, Uribismo, Colombian Politics.

Introducción

El *uribismo* ha sido la corriente política dominante en Colombia en los últimos tres lustros. Este ensayo pretende demostrar que es en efecto muy de derecha, y que comparte rasgos democráticos, radicales y extremistas. Tal combinación, que contribuye a explicar su extraordinario éxito y su ulterior (desde 2019) declive, es esencial a ella, y tiene implicaciones para una mirada comparada. En particular, sostendré que una tipología de fuerzas de derecha basada solamente en su relación con la democracia puede enfrentar serios problemas.

Por *uribismo* entenderé el conjunto de partidos, movimientos, liderazgos, sectores de opinión y votantes que apoyaron de manera explícita a Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente por dos términos consecutivos -2002/2006 y 2006/2010-. El *uribismo* logró construir una base social y electoral enorme. Ganó, por ejemplo, todas las elecciones presidenciales en su primera vuelta (aunque perdió la segunda en 2014) así como el plebiscito sobre el **Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y las FARC** realizado en 2016 -contra las expectativas de promotores, observadores y analistas, casi sin excepción¹. Los porcentajes de apoyo y/o simpatía por Uribe en los sondeos de opinión mientras fue presidente nunca bajaron del 70%, ni siquiera al final, cuando navegaba sobre la cresta de decenas de escándalos gravísimos acumulados y ocho años de desgaste en el poder (López, 2014). Sin embargo, desde el 2019 el *uribismo* ha entrado en un declive: tuvo un mal desempeño en las elecciones regionales, y tanto el presidente que eligió como -más importante aún- su propio caudillo registró pésimamente en los sondeos. A principios de 2019 (El Espectador, 2019) la mitad de los encuestados rechazaba a Uribe, y para diciembre de ese año ya era el político con mayor imagen desfavorable en el país (W Radio, 2019).

Mostraré que, paradójicamente, fue la amplitud de la apelación de Uribe lo que le permitió desarrollar políticas muy radicales. El concepto clave aquí es el de **coalición**: Uribe construyó una muy amplia, que saltaba por encima de muchas fronteras, incluida crucialmente la frontera entre legalidad e ilegalidad. Gracias a ello, se convirtió en el único político que podía hablar y coordinar a las élites a nivel nacional y regional. En un sentido muy profundo, pues, lo que sostenían sus acólitos era cierto: llegó a ser una figura prácticamente irremplazable en la labor de coordinar los factores reales de poder en Colombia y mitigar los brutales problemas de acción colectiva que los habían asolado durante décadas (Mauceri, 2001).

Sin embargo, esta fórmula de éxito generó los problemas que el *uribismo* sufre en la actualidad. Por un lado, precisamente por lo que establece el párrafo anterior, el **caudillismo uribista** no sólo fue vocacional sino también forzoso. Esto dio origen a una sucesión, relacionada con la calidad y fidelidad del personal dirigente e intermedio. Por otro, el equilibrista implicado en la operación de manejar demandas de diferentes sectores que podían ser parcial o totalmente contradictorias fue fracturando gradualmente a la gran coalición uribista. Como en el modelo ferroviario de los partidos, en cada estación -es decir, en cada coyuntura crítica- algunos se apeaban y otros se subían. Sin embargo, las deserciones resultaron a la larga más importantes que los reclutamientos. Por eso, tanto la coalición como la base electoral uribista sufrieron un doble proceso de *estrechamiento* y de *descentramiento*. El *uribismo* tardío se volvió geográficamente más excéntrico -más cercano a las fronteras del país y menos andino- que la versión original. Aquí el dato central es que perdió a Bogotá y, más generalmente, a las grandes ciudades. También perdió a sectores claves de las élites, que fueron abandonando el proyecto a medida que lo empezaron a sentir **extremo** más que **nacional**. Esto probablemente le quitó buena parte de su apelación modernizante y lo empujó más en una dirección antiliberal. Estos problemas de coordinación son típicos de la democracia -y de un movimiento que actúa dentro de ella. El artículo muestra que el *uribismo* es y ha sido, en un sentido específico pero de manera bastante clara, democrático. A la vez, sugiere que es radical e

1. Las elecciones para cuerpos colegiados han tenido una dinámica bastante distinta, pero el tema está más allá de los límites de este artículo.

Radicalismos de derecha

incluso extremista. ¿Es esto contradictorio? Plantearé que no. Uribe simplemente expresa la especificidad del régimen político colombiano: competitividad y pesos y contrapesos genuinos, por una parte, y dinámicas violentas por la otra (Gutiérrez, 2014). Si tengo razón, esto sugiere que necesitamos tipologías mejores y más universalistas para clasificar a las derechas duras del mundo.

El artículo se desarrolla en el siguiente orden. La **primera sección** explora algunos conceptos básicos sobre el significado de *derecha*, *extremo* y *radical*. La **segunda** esboza la trayectoria política de Uribe, que se funde con la de su movimiento. Necesariamente omito una multitud de datos reveladores, concentrándome en los eventos y procesos relevantes para el texto. La **siguiente** se concentra en el programa *uribista*. La **cuarta** describe las coaliciones y base electoral del primer *uribismo*. Esto me lleva a la **siguiente sección**, en donde muestro evidencia que sugeriría que el *uribismo* ha sufrido un estrechamiento de su base social y electoral. Solamente después de este análisis es posible evaluar qué clase de fenómeno político es el *uribismo*. Planteo que es de derecha radical y en un sentido muy claro: **extremista**. En las conclusiones recapitulo y planteo algunas implicaciones para el análisis comparado.

¿Por qué han podido avanzar tantos movimientos de derecha *dura* (tomando esta expresión como un término sombrilla) en el mundo en los últimos años? Quienes han querido contestar esta pregunta han encontrado que tienen que responder antes a otras dos. Primera: ¿en qué consiste el fenómeno? ¿Cómo conceptualizarlo? Segunda: ¿cuál es la evidencia (los observables) que permiten distinguir entre un partido que es de derecha dura y otro que no?

Comencemos por la primera. El grueso de la producción sobre el *uribismo* -magra aún para la magnitud del fenómeno- parece partir del supuesto de que es de **derecha dura**, pese a que sus líderes lo niegan explícitamente. Se trata de una desagradable anomalía: estas cosas deben ser demostradas. Acaso la categoría más usada para estudiar a la derecha dura haya sido la de *populismo* (ver, por ejemplo, Norris e Inglehart, 2016, Laclau, 2005). Pero también se ha hablado de *neofascismo* (Mammone, 2011), *derecha extrema* y *derecha radical*. Por diversas razones, cuya discusión va más allá de los límites de este artículo, no usaré aquí el concepto de *populismo*. Aunque haya algunas razones para hablar de *neofascismo*, diferencias de fondo entre lo que vemos hoy y el fascismo -en particular el espíritu ferozmente anti estatista de buena parte de la derecha contemporánea, en contraste con lo que según Mussolini constituía la esencia del **fascismo**²- me impiden también utilizar esa terminología. El concepto de *autoritarismo competitivo* de Levitzky y Way (2010) es una buena herramienta de análisis, pero como veremos el *uribismo* colombiano no cae claramente dentro de esa categoría.

Esto me lleva a la dicotomía *derecha radical/derecha extrema* basada en la posición frente a la democracia. Los conservadores convencionales estarían firmemente en el terreno democrático. En cambio, *la derecha extrema se caracteriza por el rechazo a la democracia... El término derecha radical, por otra parte, típicamente se usa para describir grupos que critican ciertos aspectos de la democracia liberal pero que no buscan derrocarla* (Eatwill y Goodwir, 2018: 69). Esta dicotomía tiende a volverse estándar en la literatura. Otra manera de atacar el problema, sin embargo, sería identificar algunas características claves de fuerzas de derecha, por ejemplo, rechazo al pluralismo y al universalismo (Rydgren, 2007, Lipset y Raab, 1970) y evaluar qué tanto el partido correspondiente las exhibe. Entre más características de estas tenga, y en mayor grado, más extremo será.

2. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.

Pero esto nos conduce directamente a la segunda pregunta: ¿cómo saber si un partido es de derecha, y entonces radical, extremista o ninguna de las anteriores? Se han probado distintos criterios, pero esta parece ser una pregunta metodológica que en esencia permanece abierta. Como suele suceder, hay casos básicamente indiscutibles (los neonazis alemanes son extremistas, el partido socialdemócrata sueco no) pero otro montón de dudosos (Mudde, 2000). Aquí parecería que nos topamos con una tensión que se encuentra en otros campos. Por un lado, hay criterios clasificatorios que establecen diferencias más o menos nítidas, pero que en cambio son difíciles de traducir a conceptos sólidos. Por ejemplo, Mudde (2000) propone que un partido de derecha radical o extremo sea clasificado por su nombre y por la manera en que los votantes lo ubican en el eje izquierda-derecha. Pero, Rdydgren (2007) ha notado que también en Europa hay partidos que intuitivamente parecen extremistas o radicales pero que se reclaman de centro. De hecho, el fascismo mismo reivindicó en ciertos momentos estar por encima de la fractura izquierda-derecha. Además, los partidos de derecha dura podrían tener razones estratégicas para hacerse pasar por centristas, lo que tendría que incidir en sus preferencias con respecto a su autoidentificación así como en su nombre.

Dicho de otra manera, como los costos de parecer anti democrático aún son grandes, los partidos extremos pueden tener incentivos muy fuertes para presentarse como más centristas de lo que en realidad son. Por otro lado, soluciones más densas -estudio del programa del partido respectivo, de sus principales periódicos, de las principales intervenciones de sus dirigentes-pueden resultar cada vez menos operacionales y poner sobre el tapete complejos problemas metodológicos (lo que dice un dirigente no necesariamente es la voz del partido, hay diversas maneras de interpretar un texto o una declaración, etc.). Algunos de estos problemas no parecen intratables en el contexto colombiano. Por ejemplo, el uribismo es una fuerza claramente caudillista, así que las aserciones de Uribe no se discuten; eso contrasta claramente con el faccionalismo de muchas derechas europeas (o de partidos centristas). Por eso, y contrariamente a lo que pasa en esos casos, no es tan complicado identificar la posición oficial del partido. Más aún, como se verá más abajo, Uribe enunció desde el principio su programa con bastante claridad, y se ha atenido a él a lo largo de los años. Ese programa nunca fue una cortina de humo para confundir a observadores externos, aunque obviamente intentaba legitimar su propia causa.

El contexto: vida, obra y milagros del uribismo

En esta sección esbozo concisamente la trayectoria política de Álvaro Uribe y muestro que desde 2002 hubo varios *uribismos*. Traigo a cuento solamente los procesos y eventos necesarios para el análisis de las siguientes secciones.

Uribe apareció en la política local del departamento de Antioquia a principios de la década de 1980 como joven promesa del **Partido Liberal** (en adelante, **PL**). La década fue el momento estelar de los baronatos departamentales (Gutiérrez, 2007), es decir, de una descentralización de facto, y altamente criminalizada, del PL: los jefes en cada departamento tenían acceso a finanzas propias, a menudo a sus propios proveedores de seguridad (Leal y Dávila, 1991) y además crecientemente ponían más votos que la bandera partidista. El padre de Uribe -político, caballista y ganadero, muy bien conectado con el turbio político liberal antioqueño del momento-fue secuestrado y asesinado por las FARC en 1983.

Uribe *junior*, sin embargo, no se concentró durante la década de 1980 en temas de seguridad. Fue un político más del entonces llamado oficialismo liberal. Se caracterizó eso sí

por su talante fuertemente técnico. Eso le permitió hacer carrera y convertirse en congresista estrella cuando junto con tecnócratas logró sacar adelante lo que sería el ícono de las reformas neoliberales en Colombia, la ley 100 de 1993 (que reformaba el sistema de salud). En 1997 fue elegido gobernador de Antioquia. Fue desde esa posición que Uribe desarrolló su discurso pro-seguridad y construyó una plataforma que lo haría candidato presidencial viable.

Los gobiernos liberales de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998) habían creado en 1994 unas cooperativas de seguridad, las orwellianamente llamadas **Convivir**, que constituyeron mascarones de proa para la expansión y desarrollo de grupos paramilitares a lo largo y ancho del país. Como gobernador de Antioquia (1995-1997) Uribe se convirtió en el defensor a capa y espada de aquellas cooperativas. Su gobernación promovió a esas **Convivir** paramilitarizadas. Uribe también apoyó abiertamente la actividad del general Rito Alejo del Río, quien estaba “pacificando” la región de Urabá de una manera extraordinariamente violenta de la mano de los paramilitares³.

El activismo de Uribe iba en contravía del programa central del nuevo gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), empeñado en alcanzar un acuerdo de paz con las FARC. Pero, a medida que los esfuerzos pacifistas de Pastrana empezaron a hacer agua, en medio de una crisis económica sin precedentes⁴ y de un clima de fin de mundo de violencia generalizada, la política antiguerrilla y pro-seguridad de Uribe comenzó a llamar la atención de numerosos sectores. Cuando se lanzó como candidato presidencial por un movimiento inventado por él -**Primero Colombia**- estaba dentro del margen de error, menos del 2%. Por el contrario, el candidato oficial del partido de Uribe, Horacio Serpa, parecía ser el seguro ganador. Sin embargo, Uribe logró armar una campaña impresionantemente exitosa. Introdujo claras innovaciones en el lenguaje, expresadas también en el espíritu *disidente* (Uribe, 2012) y anti tradicionalista de su discurso y su programa (de hecho, ya ser tan programático era una innovación en el contexto colombiano). Ganó en primera vuelta con 54,5% de los votos.

El primer gobierno de Uribe implicó también varias rupturas con respecto del pasado. Su gobierno fue el primero en al menos 20 años en no poner la paz con las guerrillas en el centro de su agenda política. En cambio, impulsó un proceso de paz con los paramilitares lleno de ambigüedades y de problemas. Impulsó igualmente un proceso de transformación del estado en gran escala. En su programa presidencial de hecho estaba planteado que disminuiría el tamaño del congreso y fortalecería el ejecutivo a costa de los cuerpos colegiados y los organismos de control, y el plebiscito que implementó en 2003⁵ tenía algo de eso.

Al término de su primer gobierno, estaba en el cénit de su poder, con índices de popularidad inverosímiles. Cambió la constitución para hacerse reelegir -solamente lo logró después de que dos congresistas cambiaron sus votos a cambio de prebendas- y ganó en 2006 también en primera vuelta. El país era hegemonícamente uribista. Un buen indicador de la amplitud del apoyo del que gozaba es el siguiente: en la **Encuesta de Legitimidad Institucional** del IEPRI más del 40% de los que se autoidentificaban como muy de izquierda votaron por Uribe en 2002 (y más del 50% de los que se identificaban como de izquierda, Gutiérrez, 2006).

La coalición que respaldaba al presidente era muy igualmente amplia. Como veremos, esto incluía a las fuerzas representadas en el congreso, pero fue mucho más allá. El segundo gobierno de Uribe, sin embargo, enfrentó más dificultades. Estas resultaron de **cuatro fuentes**. En primer lugar, los **escándalos continuos** -asociados tanto a violencia letal como a corrupción masiva- que marcaron el proceso de paz con los paramilitares. El principal de estos escándalos fue el episodio de la *parapolítica* destapado por Claudia

3. El general del Río está condenado judicialmente y ha pedido ser aceptado por el sistema de justicia transicional creado por el acuerdo entre el gobierno y las FARC.

4. En 1999 Colombia tuvo un crecimiento económico negativo por primera vez en décadas.

5. Perdió todos los enunciados salvo uno, pero no porque haya triunfado el No sobre el Sí sino por baja participación.

6. La penetración de los paramilitares en el estado, y en el gobierno de Uribe en particular, fue mucho más allá, e incluyó la toma de la agencia de seguridad directamente dependiente del presidente, el **DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)** (Gutiérrez, 2019).

7. Las estimaciones serias del número fluctúan entre 5 y 10 mil.

8. Cuyo nombre oficial es **Partido de la Unidad Nacional**. El partido fue creado por el propio Santos en 2005.

López (2010) y la Fundación Arco Iris: es decir, la penetración de la política electoral por parte de los paramilitares. La *parapolítica* afectó de manera desmedida a los uribistas por sobre las demás fuerzas políticas (para una sencilla demostración cuantitativa de esto, ver Gutiérrez, 2010)⁶. Uribe salió en respaldo de los congresistas encartados, pidiéndoles de manera célebre *voten [por mí] mientras no estén en la cárcel* (Semana, 12/02/2006). El segundo factor fue la horrorosa práctica de **los llamados falsos positivos**, es decir, el asesinato de jóvenes indefensos de todo el país para presentarlos como bajas en combate tanto de guerrilleros como de paramilitares⁷. Incluso suponiendo que no hay subestimaciones grandes la cantidad de desaparecidos que produjo el episodio fue mayor al de muchas dictaduras latinoamericanas durante toda su existencia. El tercero fue una **segunda intentona para reelegir a Uribe**, cuando el episodio de la compra de votos parlamentarios de la primera reelección aún estaba al rojo vivo. Cambiar reglas de juego críticas en beneficio propio, y además haciendo trampa, fue un plato demasiado fuerte incluso para varios curtidos políticos prácticos. Por último, **los ataques de Uribe** (no sólo retóricos, sino de facto, incluyendo interceptaciones telefónicas ilegales e intimidaciones) a las altas cortes, y en particular a la Corte Suprema de Justicia por haber iniciado el proceso de la parapolítica, fue otra fuente permanente de preocupación. Nada de esto pareció mellar su apoyo popular ni su capacidad de tomar decisiones. Además, para capear esas dificultades, el segundo *uribismo* puso en sordina parte de su discurso antipolítico y se apoyó firmemente en los políticos tradicionales. Estos aceptaron encantados. Muchos de ellos habían llegado a la conclusión de que enfrentarse a Uribe era una carta perdedora y buscaron acomodarse a las nuevas reglas de juego.

Como la Corte Constitucional no avaló la segunda iniciativa reeleccionista, el uribismo quedó enfrentado al problema de la sucesión. El ungido terminó siendo Juan Manuel Santos, pero sólo después de que el preferido de Uribe (Andrés Felipe Arias) perdiera la consulta conservadora y terminara en la cárcel por aún otro escándalo de corrupción. Santos había sido el ministro de defensa de Uribe. Sin embargo, representaba todo lo que Uribe no era y al menos en teoría no quería ser (la *oligarquía bogotana*). Santos ganó las elecciones, aunque claramente muchos uribistas se abstuvieron de apoyarlo.

Lo que siguió ha sido narrado muchas veces: Santos lanzó una suerte de *glasnost* a la colombiana, aceptó la existencia de un conflicto armado en el país (lo que para Uribe era anatema) e inició un proceso de paz con las FARC. Después de un corto período de enfriamiento de las relaciones, Uribe se lanzó a hacerle una oposición salvaje a su antiguo pupilo y a su proceso de paz (la *paz de Santos*).

Este otro *uribismo* tiene **dos diferencias importantes** con respecto de los precedentes. La primera es su **apuesta partidista**. Durante sus dos gobiernos, Uribe había preferido diversificar sus apoyos y hablar con la miríada de fuerzas salidas principalmente de los dos partidos tradicionales (liberal y conservador) que se crearon para apoyarlo. Incluso también frente a la nueva agrupación que supuestamente sería la suya, el llamado **Partido de la U^s**-por Unidad Nacional, pero se sobreentendía que era el de Uribe-. En cambio, en 2013 Uribe creó su propia fuerza, llamada **Puro Centro Democrático** (a la larga dejó caer el **Puro**). La segunda es **el lugar del uribismo en el sistema político**. Ahora era sólo un partido en la oposición, sin mayorías parlamentarias, y con una baja capacidad -como se demostraría una y otra vez- de establecer alianzas con otras fuerzas. Su discurso, en cambio, se tornó extraordinariamente acerbo. Por ejemplo, Santos fue tachado como lacayo del *castro-chavismo* y como *cripto-fariano*, con el alias de *comandante Santiago* (Gómez, 2017).

Con todo y esto, y contra todos los pronósticos, el Centro Democrático ganó incansablemente entre 2010 y 2020 (sobre los éxitos del CD, ver Losada y Liendo, 2016). En 2014 ob-

tuvo la primera vuelta; en 2016 derrotó al gobierno que había lanzado su plebiscito para refrendar democráticamente el Acuerdo Final entre el gobierno y la principal guerrilla colombiana, las FARC. También obtuvo buenos resultados en las elecciones parlamentarias y regionales. En todos estos emprendimientos, el Centro Democrático actuó en esencia solo. Solamente estableció alianzas -que pronto rompió- en la segunda vuelta de 2018, cuando impuso a su candidato Iván Duque, que se enfrentaba al de la izquierda, Gustavo Petro.

El triángulo de confianza

El primer gobierno de Uribe se construyó sobre la base de una gran idea programática. Uribe se hizo reelegir para continuar ese programa, y bajo el argumento de que no podía permitir que el país cayera en manos de fuerzas que lo retrotraeran a los horrores del pasado. Y después el Centro Democrático recogió ese programa, simplemente desarrollando algunos de sus puntos y actualizándolos a la luz de la campaña contra Santos. Como Uribe *repite mucho* -según dice, también repetitivamente, en su autobiografía oficial (2012)-y como el programa se usó continuamente para defender su obra de gobierno, es fácil de caracterizar. Se trata del *triángulo de la confianza* -o, más cotidianamente, *los tres huevitos*- constituido por la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social. La idea central es la siguiente. La seguridad es un bien primordial proveído por el estado. La debilidad de los anteriores gobernantes colombianos los había llevado a ceder completamente a los “terroristas”. Parte de esa debilidad estaba inspirada en la animadversión a las experiencias dictatoriales del resto de América Latina. En contraste, Uribe ofrecía una política de seguridad “democrática”, no dictatorial, al conjunto de los colombianos.

Y aquí viene la clave del asunto: la provisión de seguridad generaría un círculo virtuoso en gran escala. Teniendo seguridad, los empresarios empezarían a invertir (*confianza inversionista*). A la vez, con los recursos provenientes de la inversión empresarial, habría empleo y la posibilidad por parte del estado de desarrollar una política social eficiente y enérgica (*cohesión social*). Uribe decía no obedecer a los dictados de la *cartilla neoliberal*, pues no preconizaba el retraimiento del estado sino más bien su transformación para hacerlo más eficiente y ágil en la respuesta a las demandas ciudadanas. La crítica al *estado derrochón* no sólo sirvió para orientar la reforma al estado mientras Uribe estuvo en la presidencia, sino que después se convirtió en uno de los tópicos de la agria campaña contra Santos.

¿Cómo cambiar al estado para que pudiera convertirse en el impulsor del triángulo de confianza? Una de las principales herramientas para hacerlo fueron los *consejos comunitarios*, en los que Uribe microadministraba la respuesta estatal a las demandas ciudadanas de las regiones. Una vez más, el éxito de los consejos fue enorme. Uribe creó alrededor de experiencias como estas dos categorías centrales. La primera de ellas fue el **estado comunitario**, que se suponía combinaría las modalidades de democracia representativa y participativa a través de una interacción cara a cara entre *comunidad* y Estado (Uribe, 2013). La segunda fue la del **estado de opinión** que, según uno de los ideólogos del uribismo, estaba constituido por un *gobierno en contacto permanente con la ciudadanía* (Rey, 2015). También buscaba abrir mecanismos de participación, *no necesariamente mediados por los partidos, aunque no los excluye* (El Tiempo, 2009). Era aquí donde se cerraba el bucle, pues si el clamor de la ciudadanía era la demanda por la seguridad, solamente un estado basado en el triángulo de confianza podía escucharlas y procesarlas.

Esta es la esencia del programa uribista, que ha tenido pocos cambios a lo largo del tiempo⁹. Aunque la caracterización de esa propuesta como un *pacto hobbesiano* fue relativa-

9. El Centro Democrático agregó otros dos principios: *Estado austero* y *diálogo social*, pero ambos estaban implicados ya en el triángulo de confianza.

mente popular en su momento (ver, por ejemplo, las interesantes reflexiones al respecto de Palou, 2009) en realidad era algo distinto: hacía más énfasis en democracia que en estado, en respuesta a demandas regionales, y en instrumentos modernos de captura de la opinión ciudadana.

Estas ideas estaban claramente orientadas a justificar las aventuras reeleccionistas de Uribe así como sus iniciativas represivas. Aun así, sería un gran error reducir la importancia de aquellas a su valor instrumental. El apoyo masivo y estable que conquistó el uribismo sugiere que hay mucho más. Hay cuatro vías por medio de las cuales la seguridad democrática -como el requisito indispensable para generar el triángulo de confianza-pudo haber contribuido a fortalecer la imagen de Uribe y de su gobierno frente a la opinión. En primer lugar, la promesa de ofrecer seguridad y de hacerlo alrededor de demandas territorialmente fijadas tenía que encantar a algunos de los auditorios duros de Uribe, como las élites rurales paramilitarizadas. En un sistema político altamente clientelista como el colombiano, esos apoyos regionales se traducen no solamente en votos y en toda clase de apoyos. En segundo lugar, el **estado comunitario** y el **de opinión**, como método para relacionarse con la ciudadanía, sí daban señales públicas nuevas. Las visitas de Uribe a territorios a los que nadie -ni siquiera burócratas intermedios- había ido se convertían en fiestas cívicas, en donde destacaba la presencia de lo más granado de la sociedad y el funcionariado local, así como algunos liderazgos. Es verdad que los consejos comunitarios estuvieran puntuados por episodios siniestros (Las Dos Orillas, 2014) que contribuyeran de manera ostensible al culto de la personalidad de Uribe, y que su aparente espontaneidad estuviera gobernada por un guión cuidadosamente preestablecido. Pero a la vez eran un espectáculo inédito en el que los ciudadanos de la *Colombia profunda* le pedían cuentas a la alta burocracia -a veces incluso cobraban esas cuentas-y presenciaban cómo el caudillo regañaba en público a ministros y viceministros y les ordenaba obedecer y/o responder a lo que “decía la gente”. Esta clase de experiencia para muchos fue inolvidable.

El tercer factor es que Uribe logró construir *correspondencias* entre su programa y demandas ciudadanas muy amplias y muy sentidas. Gracias a esas correspondencias su atractivo frente al electorado fue aún más amplio que su coalición. Esto se observa claramente con respecto del tema clave de la seguridad. La violencia -no sólo la relacionada con el conflicto armado-- al final del gobierno de Pastrana se había salido de madre. Los ciudadanos veían a un presidente que finalmente no se arrodillaba ante los delincuentes. Aquí el tema no sólo era la enorme impopularidad de las guerrillas: era que términos como *terrorista* o *delincuente* podían aplicarse fácilmente a diversos contextos. Si Uribe decía estar acabando con los forajidos, cada ciudadano podía pensar en **su** propio forajido a derrotar. Para muchos ciertamente podían ser los guerrilleros. Pero para otros podía ser el atracador o el delincuente, que les robaba el sueldo cuando regresaban a casa después de haberse tomado un par de cervezas. Y eso permitió generar un nuevo clivaje: **ellos** (los bandidos) y **nosotros** (los ciudadanos de bien). En ese clivaje, Uribe estaba con la abrumadora mayoría, y los débiles con el terrorismo eran apenas marginales. Según el dictamen de Uribe: *el país entero se unió contra los terroristas* (2012: 262). Algo similar sucedió con la propuesta de modernización del estado, que implicaba una denuncia a la corrupción y a la *politiquería tradicional*.

Ese programa -cuarto- también le permitió a Uribe desarrollar un nacionalismo de la seguridad tremendamente efectivo en un país desmoralizado por la violencia y el narcotráfico, que había construido, según observación del sociólogo Fernando Cubides (1999), una *comunidad en la culpa*. Parte de las consignas del nacionalismo de seguridad de Uribe probablemente es de inspiración y origen empresarial -el país de repente se inundó de

10. Buena parte de los gestores de esos partidos terminaron en la cárcel.

publicidad proclamando que **Los buenos somos más** -, pero capturó la imaginación de un sector mucho más amplio de la sociedad necesitado de alguna suerte de respiro identitario. Proliferaron entonces los partidos -pero también los restaurantes-con el nombre de **Colombia**¹⁰. El nacionalismo de la seguridad le sirvió también a Uribe para castigar a las Organizaciones no Gubernamentales y a lo que hoy llamaríamos el *establecimiento liberal-globalista*, mostrando con ejemplos concretos -como el del alemán Mauss, expulsado por él por intermediar en los secuestros del ELN-que no aceptaría más injerencias humillantes por parte de extranjeros débiles con el terrorismo-.

Votantes y coaliciones en el momento de gloria

Este programa de Uribe se convertiría un referente para la política nacional. Ningún político tenía posibilidad alguna de disputarle a Uribe la primacía en ese terreno. Uribe había inventado ese programa. Su trayectoria lo encarnaba. Su análisis de las realidades nacionales iba dirigido a explicar por qué sus antecesores -es decir, las fuerzas que competían con él en campaña-siempre habían sido débiles con los terroristas (Uribe, 2012). En 2002, Uribe obtuvo victorias aplastantes en todas las circunscripciones electorales claves, incluyendo a la capital Bogotá, en donde obtuvo más de 50% de los votos. Las correspondencias a las que aludí más arriba pueden haber jugado un papel clave en esto. La seguridad claro era un tema preeminente. Pero también lo eran la propuesta de modernización del estado y el rechazo a la politiquería corrupta.

Junto con su popularidad entre el electorado, Uribe contó con apoyos cruciales. Su *auditorio duro* -como lo dicen sus críticos, paramilitares y él mismo (Behar y Ardila, 2012; Uribe, 2012; Cepeda y Rojas, 2008) -estaba constituido por los grandes ganaderos y la federación respectiva, **FEDEGAN** que respaldó de manera explícita y entusiasta a Uribe. Éste, de hecho, apoyó durante su campaña la propuesta del presidente de la Federación, Visbal, de constituir *milicias nacionales*, algo que se parecía mucho a unas nuevas **Convi- vir**. El apoyo mutuo ha continuado hasta hoy. José Félix Lafaurie -el actual presidente de la Federación-es un destacado líder del Centro Democrático, y su esposa una conocida parlamentaria de ese partido.

Visbal eventualmente fue encarcelado por paramilitarismo (El Tiempo, 2018), lo que no es casual, pues otro apoyo muy fuerte de Uribe fueron los paramilitares mismos (así como ganaderos paramilitarizados). Sobre esto no hay duda razonable posible: los paramilitares hicieron saber por todos los medios posibles que Uribe era su candidato (entre los muchos ejemplos posibles, ver Martínez, 2004 y Montañez *et al.*, 2005). Los rivales de Uribe -incluyendo a la conservadora Noemí Sanín- denunciaron en 2002 que los paramilitares tenían candidato propio (Cardona, 2016). Muchos de los paramilitares se involucraron en sus respectivas regiones en grandes operaciones de apoyo a Uribe -incluyendo fraudes en gran escala- aunque esto no necesariamente determinó los desenlaces (Daza, 2017, Grajales, 2017, Gutiérrez, 2019). A Uribe lo acompañó también el entorno de finqueros y caballistas narcotizados en el que de hecho había pasado su infancia y juventud (Cepeda y Rojas, 2008).

Aquí, como he observado en otra parte (Gutiérrez, 2014), el único contraargumento posible de los uribistas es que se trató de un amor no correspondido; la discusión sobre las evidencias a favor en contra de él va más allá de los límites de este artículo, aunque digo algo sobre el tema en la próxima sección. Pero estas coaliciones plantean **una pregunta**. Solamente ocho años antes un candidato ganador, Ernesto Samper, había destruido su presidencia y su carrera política al aceptar financiación del Cartel de Cali. **¿Por qué Uribe pudo salirse tan fácilmente con la suya?** La respuesta es que, junto con

estos apoyos, logró alinear a su favor un elenco impresionante de **sectores legales claves**. Comencemos con los **Estados Unidos**, para los que el programa *uribista* caía como anillo al dedo: Bush había lanzado, a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, su guerra contra el terrorismo. Ya vimos que los **grandes ganaderos** -un sector muy influyente- constituían su origen y el núcleo duro de su auditorio. Uribe también se hizo del apoyo a **militares condenados** o encartados por violaciones a los derechos humanos (notablemente el general Rito Alejo del Río, actualmente en la cárcel) un puntillo de honor de su campaña. Esto, junto con sus denuncias a las complicidades de las ONG con los terroristas, le ganó el entusiasta aval del establecimiento de seguridad. También fue saludado por numerosos **gremios de la producción**. Algo que es fácil de pasar por alto, pero que es muy importante, es que la **alta tecnocracia** -especialistas renombrados con funciones de gobierno- marchó también de manera entusiasta al paso que marcaba el uribismo temprano. De hecho, cuando se observa el primer gabinete de Uribe es una especie de quién es quién de la alta tecnocracia colombiana, con al menos seis figuras icónicas (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Urbe). Los empresarios también estaban muy bien representados, con tres carteras. Los políticos puros y duros solamente aparecían en dos o tres (incluyendo obviamente el Ministerio del Interior), dependiendo del criterio que se use.

Hay al menos tres razones para que Uribe fuera el hombre de los empresarios y los tecnócratas. Primero, aunque decía apartarse de la *cartilla neoliberal* su énfasis en un estado magro era lo suficientemente claro como para atraer a muchos economistas. Segundo, en su paso por el parlamento Uribe había mostrado una alta capacidad de manejo de temas técnicos, y fue una de las estrellas en el proceso de sacar adelante la **Ley 100** de 1993 que reconfiguró el sistema de salud en Colombia. La **Ley 100** era en 2002 una suerte de biblia del neoliberalismo criollo. Y en el proceso Uribe interactuó en los mejores términos con figuras como Juan Luis Londoño, un uber-tecnócrata neoliberal a quien nombró su ministro de salud. No menos relevante es que en su *Manifiesto Democrático* Uribe incluyó propuestas de modernización del estado junto con severas críticas contra la política tradicional y el congreso, proponiendo la reducción de este último.

A pesar de su tono agrio contra la “subversión” -es decir, la izquierda- y la “politiquería”, Uribe logró alinear al congreso con una combinación de garrote y zanahoria (Osorio, 2012). Contribuyó a eso que el partido conservador lo apoyara desde el principio. También fue clave la creación -o crecimiento- de una panoplia de partidos que irían conformando la *nube uribista* (Acuña y Gutiérrez, 2010). Aunque el Congreso nunca se plegó totalmente a los **ukases** del presidente, como atestigua el hecho de que los votos críticos para obtener la aprobación de la reelección presidencial tuvieran que ser obtenidos a través del soborno, lo cierto es que Uribe contó desde el principio con cómodas mayorías parlamentarias. Contribuyó a esto a que la mayoría de congresistas influidos directamente por los paramilitares estuviera muy mayoritariamente de parte de Uribe.

Aunque esta es solamente una muestra de los respaldos que obtuvo Uribe (pues también a nivel regional fueron variados e importantes) revela bastante bien su extraordinaria amplitud y su gran poder, pero también su carácter heterogéneo. La demanda por seguridad y la promesa de una nueva política habían alineado a ciudadanos hastiados de la corrupción, empresarios, tecnócratas, líderes del sector de seguridad, ganaderos, paramilitares y sectores del narcotráfico, y a los Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. Uribe era el único capaz de hablarles a todos ellos. Es decir, se convirtió en la bisagra capaz de coordinar los factores de poder legales e ilegales y sus mutuas intersecciones, así como de articular sus demandas con las de una amplísima base ciudadana. Vale la pena enfatizar aquí que, como en toda la narrativa de esta sección, no estoy hablando de

dinámicas secretas, o de evidencias indirectas. Todo esto sucedió de manera bastante explícita y clara, muy por encima de la mesa. Que esto fuera así lo captura muy bien la invitación de Uribe a los congresistas encartados en parapolítica que a votar a favor de los proyectos del gobierno mientras no estuvieran en la cárcel.

Estrechamiento y descentramiento¹¹

11. Todos los cálculos de esta sección son propios, usando las cifras de la Registraduría Nacional.

12. El tema del peso de los medios electrónicos de comunicación en los éxitos de Uribe es más complejo, pero tampoco resuelve del todo el rompecabezas de la extraordinaria popularidad del caudillo (ver López, 2014).

Dije arriba que la literatura reportaba que los éxitos del *uribismo* no se pueden atribuir solamente a coerción y fraude, por muchas razones. La más obvia es que los fraudes masivos a favor del uribismo que conocemos tuvieron lugar en la Costa Caribe, una de las pocas regiones de Colombia en las que nunca pudo ganar. En realidad, si se consideran las cifras que obtuvo Uribe tanto en las urnas como en los sondeos de opinión, es claro que el fraude y la violencia hicieron parte de su repertorio pero que no pueden explicar sus éxitos¹². Tampoco se explican por la subordinación ciega de su electorado, una proposición que fue muy popular en su momento (Semana, 2017). Como veremos más abajo, el uribismo no ha sido estable regionalmente; ha conquistado algunos territorios y perdido otros. Esta evidencia no es muy compatible con la intuición de un electorado apoyando robóticamente a su líder.

Es más simple y calza mejor con los hechos la proposición de que la figura y el programa de Uribe resultaron atractivos para sectores muy amplios, que por alguna razón u otra se sintieron cómodos con él. En efecto, la base electoral inicial (la de 2002 y 2006) uribista era muy amplia. Si como vimos el atractivo de la figura de Uribe saltaba por encima de los límites convencionales del espectro político, también estaba ampliamente difundido en el territorio. En 2002, Uribe obtuvo más de 50% de los votos en circunscripciones claves: su departamento natal y las del eje cafetero, en donde probablemente se sumaban factores de autoidentificación regional a simpatías con el programa y el discurso del candidato, un par de departamentos fronterizos con Venezuela, y Bogotá.

Lo que sucedió después de 2010, empero, fue simple y muy importante: el uribismo comenzó a perder las grandes ciudades. Esto incluye a Bogotá, a Cali, y sorprendentemente a la capital de Antioquia, Medellín. Si construimos una medida muy simple -*nivel de uribismo*-, porcentaje de votos obtenidos por Uribe en una circunscripción electoral- el de Medellín se derrumbó de 74% en 2002 a 43% en 2014, aunque en 2018 repuntó otra vez a más del 50%. Pero Medellín es la ciudad natal de Uribe. El *uribismo* de Bogotá, en cambio, cayó dramáticamente de 58% a 27%. Vale la pena recordar que la capital es el gorila electoral del país no sólo por su simple peso demográfico, sino también por ser desde hace años un marcador de tendencias. Lo de Cali fue aún más pronunciado, al pasar de 63% en 2002 al 29% en 2018. La otra ciudad colombiana con más de 1 millón de habitantes, Barranquilla, pasó del 43% en 2002 al 29% en las pasadas elecciones.

El elenco de departamentos muy *uribistas* sufrió también un cambio bastante impresionante. En el 2018, el top 3 estaba monopolizado por departamentos fronterizos con Venezuela (Norte de Santander, Casanare y Arauca), en los que tanto problemas de orden público como la migración del vecino país -para no hablar ya de la animadversión al *castro-chavismo*- seguían constituyendo problemas de primer orden. Desaparecieron esos bastiones del que eran los tres departamentos del eje cafetero, y naturalmente Bogotá, que ahora ocupaba, junto con los departamentos del suroccidente uno de los últimos puestos en lo que respecta a nivel de *uribismo*. La Tabla siguiente muestra que el *uribismo* se “corrió” hacia la frontera con Venezuela, hacia departamentos menos densos demográficamente y con menos centralidad económica. Creo que la tabla es muy elocuente con respecto del estrechamiento y el descentramiento. Con todo lo arbitrario que tiene

13. Cálculos propios usando las cifras poblacionales de https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n.

esta medida, el top 7 *uribista* del 2002 comprendía 19.816.672 habitantes, mientras que el top 7 del 2018 se había encogido a 10.498.896¹³.

Tabla 1. **Siete circunscripciones electorales más uribistas (según porcentaje de voto por candidato uribista en primera vuelta presidencial) 2002 y en 2018. Por departamento, incluyendo a Bogotá**

Circunscripción	Escalafón 2002	Escalafón 2018	% 2002	% 2018
Risaralda	1	18	71,93	41,45
Caldas	2	14	69,31	43,9
Quindío	3	15	67,92	42,85
Antioquia	4	5	67,77	54,58
Meta	5	9	63,37	50,52
Norte de Santander	6	1	61,23	62,03
Bogotá	7	28	58,27	27,34
Casanare	15	2	49,06	61,65
Arauca	11	3	53,37	58,27
Huila	10	4	54,77	54,67
Vichada	29	6	32,58	54,27
Caquetá	14	7	50,14	53,81

Las simpatías por Uribe en los sondeos también disminuyeron considerablemente, aunque muy gradualmente. Si en la década del 2000 estas oscilaban entre 70% y el 80%, en la de 2010 pasaron a estar entre 50% y 60%. Con esto Uribe aún estaba en posición de ganar sin contar con ningún aliado, cosa que casi logró en 2014. Es solamente en 2019 que la posición tanto de Uribe como de la persona que puso en la presidencia sufren un declive dramático, y ahora se ubican entre 20 y 30%¹⁴.

Algo análogo sucedió con las coaliciones. El *uribismo* no ha perdido sus respaldos duros. Eso incluye a los grandes ganaderos, y más generalmente a los gremios de la producción, que jugaron un papel protagónico en el gabinete de Duque en 2018, tanto o más que en el de Uribe en 2002 (Lewin, 2018). Pero otros componentes de la enorme coalición *uribista* fueron desalineándose con el paso del tiempo. En cuanto a los partidos políticos, **Cambio Radical** comenzó a tomar distancia, debido a las pretensiones reeleccionistas de Uribe: el líder del partido, Germán Vargas, también quería una oportunidad. Cuando Santos, ya presidente, lanzó el proceso de paz, se quedó con el grueso de los operadores políticos del **Partido de la U**: muchos nunca regresaron al *uribismo*. Otros partidos de la nube *uribista* sufrieron catástrofes. Por ejemplo, **Colombia Viva** se convirtió en un repositorio de parapolíticos que eventualmente irían a la cárcel. Algo análogo pasó con **Alas Equipo Colombia** y con **Convergencia Ciudadana**: la colaboración con el paramilitarismo los carcomió. Hablando de lo cual: lo que quedaba del paramilitarismo (los especialistas en violencia, no necesariamente las coaliciones regionales que los convocaron y armaron) también empezaron a salir de la órbita *uribista*. Después de un confuso intercambio de acusaciones, Uribe extraditó a un buen número de jefes paramilitares por estar delinquiendo desde la cárcel. Ellos, por su lado, han aducido que Uribe los sacó del país para que no contaran la verdad¹⁵.

14. Naturalmente, es necesario recordar que estas mediciones pueden cambiar de improviso.

15. Salvatore Mancuso, uno de ellos, pronto regresará al país y ha pedido un lugar en la Justicia Especial para la Paz para referir los episodios que la extradición le había impedido contar.

Mientras tanto, la tecnocracia había ido abandonando el barco. Si se comparan los gabinetes del 2002 con el del 2010 se puede notar el contraste: la canciller del 2002 era Carolina Barco, ciudadana colombiana y norteamericana, hija de presidente y con gran familiaridad con el mundo con el que lidiaba. El del 2010 era un oscuro politiquero regional, Fernando Araújo, involucrado en un monumental escándalo de corrupción (https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_Chambac%C3%BA), que sólo pasó a segundo plano cuando fue secuestrado por las FARC. En 2002, el ministro de hacienda era de origen conservador, un sólido tecnócrata que ya había ocupado el cargo en la década de 1980, Roberto Junguito. En 2010 estaba Óscar Iván Zuluaga, un político regional con pasado debatido y pocas credenciales (sería el candidato en 2014; eventualmente se involucraría también en un escándalo de corrupción, este de proporciones continentales, por su supuesta participación en Odebrecht). El ministro de salud de 2002 fue una especie de ícono de la tecnocracia neoliberal: Juan Luis Londoño. Lo reemplazó Diego Palacios, en la actualidad en la cárcel por su involucramiento en la compra de votos parlamentarios para lograr la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006. Hay muchos más ejemplos. Formadores claves de opinión favorables al liberalismo económico pasaron del apoyo a Uribe (entusiasta o prudente) a criticarlo abiertamente y/o a apoyar el proceso de paz (un ejemplo entre muchos es Rudolf Hommes, una suerte de ícono del neoliberalismo nacional, hoy duro y acertado crítico de Uribe). No hablemos ya de Estados Unidos, que bajo la presidencia de Obama tomó una actitud relativamente benévola con respecto al proceso de paz y de hecho aceptó algunas de las tímidas audacias de Santos en el terreno de las drogas. Obviamente, con Trump ha habido un realineamiento.

La combinación de *estrechamiento* y *descentramiento* tanto en términos de base electoral como en términos de coaliciones transformó al **tercer uribismo**, dándole unas características nuevas. A la vez, llegaron nuevos invitados a la fiesta, que garantizaron que, con todo y el estrechamiento, el *uribismo* siguiera siendo una fuerza formidable. **Cuatro ejemplos** bastarán para mostrarlo. El primero son las **audiencias de Twitter**. Aún presidente, Uribe abrió su cuenta en 2009, con un éxito inmediato. En la actualidad tiene casi 5 millones de seguidores. Desde *Twitter*, Uribe ha lanzado algunas de las iniciativas más importantes de su activismo en los últimos años. Pero además, la nueva tecnología le ha permitido hacer realidad su sueño original de *saltarse a los intermediarios*, revelando sus ideas, iniciativas y antipatías a sus seguidores de manera directa.

El segundo ejemplo fundamental, aparentemente en contradicción con el anterior, es la **creación de su partido**. En una época y en un país en los que se repite una y otra vez que los partidos están condenados a desaparecer y ya no funcionan, Uribe mostró una vez más su capacidad de disidente y, yendo contra su práctica de la década anterior, fundó en 2013 el **Centro Democrático** (primero **Puro Centro Democrático**). Durante los ocho años de gobierno santista el partido desarrolló una oposición implacable que desestabilizó el gobierno, y construyó un núcleo básico de cuadros que hoy son protagonistas de la vida pública colombiana.

El tercero es la **convivencia creciente con la política tradicional**. El ejemplo más diciente es el de Andrés Pastrana, quien había sido el blanco preferido de las iras uribistas en 2002. Y el cuarto es la entrada en masa de la derecha religiosa, presente antes pero mucho más alineada e influyente en las últimas etapas; esto incluye a partidos que habían sido resistentes a los encantos uribistas, como el **MIRA**.

Estas nuevas fuerzas y auditorios permitieron al *uribismo* avanzar por dos carriles: el orgánico tradicional y otro más flexible, en el que un tejido social intermedio de apasionados voluntarios (probablemente uno que otro profesional) tomaban de Uribe y de

su círculo inmediato iniciativas, formas de hablar y formas de proceder, y a menudo las transformaban en iniciativas en sus propios municipios. Esta forma de hacer política resultó ser tremendamente intimidante y efectiva, aunque seguramente haya concentrado la apelación del uribismo en personas más agresivas y menos adversas al riesgo (Gutiérrez, en preparación).

El uribismo y la taxonomía de las derechas

Los contraargumentos

Según se vio en la sección sobre literatura, se supone que la *derecha radical* es ambigua frente a la democracia, y la *extrema derecha* antagónica a ella. Pero la relación del uribismo con la democracia no es fácil de interpretar. El uribismo se describe a sí mismo como democrático. De hecho, el término y el concepto están en el centro de su agitación (**Manifiesto, Seguridad y Centro Democráticos**): no son sólo palabras. Vimos ya que aceptó el dictamen de la Corte Constitucional que le impedía presentarse a una nueva reelección en 2010 con aparente estoicismo. No hay ninguna evidencia de que el caudillo haya estado involucrado en intentonas de golpe militar u operaciones análogas. Además, Uribe -en contraste con otros líderes de derecha dura en la historia colombiana- no tenía absolutamente ninguna razón para emprenderla contra la democracia electoral. Como lo dice en su autobiografía (2012) nunca perdió ninguna elección en la que participó como candidato. Eso era cierto entonces y lo sigue siendo ahora. ¿Qué razón tendría para atacar a la democracia, más aún en el contexto internacional en el que se formó, que imputaba costos altos a quien lo hiciera? Además, programáticamente, el uribismo quiere promover el vínculo directo entre caudillo y pueblo.

Pero es necesario notar que los paramilitares colombianos -un grupo homicida como ninguno en el contexto colombiano- tampoco fueron antidemocráticos en este sentido específico, como lo demostré (2019). Su horizonte de imaginación no era un apocalipsis autoritario, ni un golpe de estado, sino la próxima elección. Así que, incluso en el caso extremo de los paramilitares, tampoco nos encontramos con un programa claramente antidemocrático.

Criterios

Pero entonces ¿hasta qué punto Uribe es en realidad *radical*? ¿No corresponde su defensa de la seguridad democrática, por ejemplo, al buen sentido común hobbesiano?

Esta clase de preguntas hay que hacerlas. Esta se puede responder de tres maneras. Primero, Uribe ciertamente no es antidemocrático, pero a lo largo de su carrera ha desarrollado un ideario cada vez más antiliberal. Por ejemplo, desde el principio, tanto él como su movimiento han sido agnósticos, en el mejor de los casos, frente a la alternación en el poder: si alguien llega a la presidencia con un programa distinto es un enemigo o un traidor. No se puede permitir que se abandone la seguridad democrática. El uribismo en el gobierno también ha sido activamente hostil a la separación de poderes. Ciertamente este es en buena parte un tema posicional, pues en la oposición, el uribismo recayó en los motivos liberales clásicos, atacando a Santos por violar la constitución. Pero como se vio más arriba el programa fundacional uribista contenía ataques explícitos a los congresistas. Aquellos señalados como disidentes fueron marcados con fuego como *politiqueros*. Lo mismo sucedió con las altas cortes, señaladas de abrigar *el último coletazo del terrorismo*

cuando comenzó el proceso de la parapolítica. No olvidemos que conceptos como *estado comunitario* y *estado de opinión* tienen inflexiones antiliberales, que trataban de fundar una nueva forma de gobernabilidad sobre la relación directa entre el caudillo y el pueblo. El proceso de *estrechamiento* y *descentramiento* vinculó al uribismo con iglesias cristianas muy conservadoras en términos de regulación de la vida privada, mientras que sacó a buena parte de los tecnócratas del juego, reforzando esas características antiliberales. Por ser democrático pero antiliberal, el *uribismo* podría clasificarse entonces como **radical**. Pero con respecto del segundo criterio es **extremista**: su claro desinterés por (u oposición activa a) los derechos humanos y su disposición a colaborar con actores ilegales para construir y mantener una versión de la provisión de seguridad que admite el homicidio de enemigos y la colaboración activa con criminales en su repertorio. El *uribismo* ha defendido permanentemente la idea de que el Ejército y la Policía deben estar protegidos por una suerte de fuero especial, que los ponga a cubierto de críticas y denuncias. Uribe mismo se especializó en poner a criminales en agencias claves, incluyendo a su jefe de seguridad Mauricio Santoyo y al jefe de la agencia de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (en donde puso a un colaboracionista del Bloque Norte de los paramilitares). Ayudó, cubrió y promovió a decenas de figuras públicas puestas en cuestión por sus vínculos con paramilitares o por violación de los derechos humanos. En este mismo espíritu, atacó a la oposición con un lenguaje incendiario, pero también utilizando toda clase de medios ilegales (a través del DAS paramilitarizado). Su coalición de apoyo básica tuvo fuerte presencia paramilitar. En coyunturas críticas, esto se ha expresado a través de una justificación abierta del homicidio. Cuando salió a relucir el escándalo de los falsos positivos, Uribe comentó escuetamente sobre las víctimas: *no estarían cogiendo café* (El Espectador, 2008b). Después ha vuelto una y otra vez a esta suerte de declaraciones, incluyendo una defensa abierta de las masacres contra las movilizaciones sociales (El Espectador, 2019b). Mientras tanto, algunas de las figuras claves del uribismo se esmeraron en justificar crímenes y asesinatos, así como los *aspectos positivos* del paramilitarismo. Esto incluye a Fernando Londoño Hoyos, ministro de interior en el primer gabinete de Uribe, quien publicara un sentido elogio del líder paramilitar Carlos Castaño después de que este fuera asesinado por sus conmlitones, llamando a resucitar su *elemental pero preciso ideario* (Semana, 2013). Todos sabían que ese “ideario” era el del asesinato en masa y el de la justificación del homicidio de civiles como guerrilleros sin uniforme. En ese contexto, la denuncia de prácticamente todos los opositores del *uribismo* como subversivos o idiotas útiles de la subversión contiene una clara amenaza. Más aún cuando el uribismo ha demostrado que en el gobierno continuamente se sale de la legalidad para hacer cumplir sus propósitos. No es sorprendente, pues, que desde el gobierno el *uribismo* no haya dudado a la hora de imponer costos inenarrables a las poblaciones más vulnerables. Ha promovido incesantemente el acceso a la violencia privada del núcleo duro de su coalición: esa es una de las características claves de la carrera de Uribe, desde el apoyo a las **Convivir** hasta hoy (Blu Radio, 2019). El terrible episodio de los falsos positivos fue el resultado de una política adoptada deliberadamente, y de la idea de que las agencias armadas del estado debían ser intocables. Otros eventos menos sangrientos, pero también impresionantes, como arrestos masivos de líderes sociales en regiones vulnerables y la fumigación im placable con glifosato a cultivos ilícitos -y por lo tanto a los campesinos involucrados en ellos¹⁶, tienen que ser agregados al repertorio *uribista*. Todo esto ha sido posible porque en Colombia no hay una contradicción tan clara entre democracia, estado de derecho y ataques violentos en gran escala contra los civiles. Ese es lado -oscurísimo- de la democracia a la colombiana, la fuente en la cual Uribe abreva.

16. Vale la pena recordar que esta es una política casi única en el mundo, que no se ha podido implementar en otros países igualmente marcados por conflictos prolongados como Afganistán.

En cambio, respecto del estilo político -el tercer criterio-Uribe es un claro innovador en muchos sentidos, incluyendo el lenguaje incendiario y los criterios de verdad, que rompen con algunas convenciones bien establecidas de la política colombiana (Gómez, 2017). El *uribismo* ha lanzado campañas contra periodistas incómodos tachándolos de *violadores de niños* o *aliados del narco*, y a la izquierda en su conjunto de cómplice de la subversión y/o del narco y la inmoralidad. El *uribismo tardío* ha combinado esto con valores propios de la derecha cristiana, lo que lo acerca a la negación de la diversidad que constituye el *corazón operacional del extremismo*, según la afortunada expresión de Lipset y Raab (1970) en su venerable y aún vigente texto.

17. Proveniente de la izquierda política.

Junto con la estigmatización, el lenguaje *uribista* se caracteriza por un **paternalismo conscientemente construido**. Uribe -siguiendo los consejos de uno de sus intelectuales orgánicos, el psiquiatra Luis Carlos Restrepo¹⁷- se presentó como *padre de la nación*. Veo a los colombianos con ojos de padre, declaró. El análisis subyacente (que debemos a Restrepo) es que en Colombia la figura del padre estaba desvalorizada, y se necesitaba un referente para llenar ese vacío. Estigmatización y paternalismo confluyeron con frecuencia, encarnando en poderosos simbolismos (sabemos por declaración propia que Uribe, 2012, entiende con perfecta claridad el poder de los símbolos en política). Esto está ahí desde el primer *uribismo* (Gómez, 2017, Cardona, 2016).

Conclusiones

Hora de recapitular. En este artículo caractericé al *uribismo*, a su programa y a su trayectoria. Lo hice con base en indicadores y evidencias muy simples, pero sin embargo dicientes. Encontré que había varios *uribismos*. Eso aplica tanto a su base electoral y social como a las coaliciones que lo acompañaron. Pese a numerosos e importantes cambios, sin embargo, el núcleo duro de sus auditorios y de su programa ha permanecido. No se pueden separar los éxitos del *uribismo* (tampoco su posterior declive) de su carácter **programático** (un rasgo que refuerza su naturaleza innovadora en el contexto colombiano). Las dos capacidades claves del *uribismo* (apelación muy amplia sobre la base de la provisión de la seguridad y coordinación de los factores claves de poder a distintos niveles territoriales) se retroalimentaron mutuamente en su momento de gloria. Con su base electoral gigantesca, Uribe podía alinear a aquellos sectores que quisieran salirse de la fila. Con el apoyo de toda suerte de élites, Uribe podía producir resultados y fortalecer su base social y electoral. Es decir, el éxito y las características fundacionales del *uribismo* se retroalimentaron durante largo tiempo. Creo que aún estamos lejos de entender las razones subyacentes al proceso de *descentramiento* y *estrechamiento*, y qué tanto tuvieron que ver el proceso de paz y cambios significativos en el sistema político y la sociedad.

Como fuere, lo que hemos visto tiene varias implicaciones. Una es que entender los triunfos del *uribismo* con base en ciertas características psicológicas del conjunto de su electorado probablemente esté condenado al fracaso (aunque quizás una parte militante de la corriente sí tenga algunas especificidades; esto es un tema puramente empírico). Otra es que la trayectoria del movimiento puede contribuir a entender tanto sus éxitos como sus problemas ulteriores. Pero la principal es que insertar al *uribismo* dentro de una tipología de la derecha dura basada en su relación con la democracia no es fácil. El *uribismo*, en efecto, ha sido una corriente política firmemente asentada en la democracia, aunque con **tres dimensiones** que la hacen **no convencional**. Primero, su **fuerte sesgo antiliberal**. El *estrechamiento* y *descentramiento* de su base podría empujarlo cada vez más en esa dirección. Segundo, su **militancia activa contra la defensa de los derechos humanos** de “subversivos”, “terroristas” y poblaciones vulnerables, lo que lo ha

conducido a adoptar en momentos críticos posiciones abiertamente homicidas. Esto y su defensa de la democracia son perfectamente compatibles en un país como Colombia. Tercero, su **estilo político iracundo**, basado en la nueva política de la verdad que es común a muchas nuevas derechas en el mundo.

Estas propiedades sugieren que la relación de la derecha dura con la democracia no parece poder ser la base de una tipología viable por dos razones. Primero, porque existe una gran variedad de democracias en el mundo (Coppedge y Gerring, 2020). El ascenso de la derecha dura es universal, como debería ser la tipología correspondiente. Una corriente que pone en cuestión el derecho básico a la vida no se puede considerar *apenas radical*. Segundo, porque también las derechas europeas actuales pueden combinar posiciones prodemocracia con lógicas de exclusión violenta contra minorías vulnerables (Rydgren, 2007). Quizás un mejor criterio tipológico sería una evaluación de los costos directos impuestos -o propuestos- por cada partido o movimiento sobre sectores específicos de la población.

Es fundamental caracterizar al *uribismo* de manera sistemática y con una perspectiva comparada. Este artículo pretende contribuir a esta tarea, a la espera de mayores refinamientos tanto empíricos como conceptuales.

Referencias bibliográficas

- Acuña, F. y Gutiérrez, F. (2010). "El indefinido nuevo sistema de partidos en Colombia", *Observatorio Latinoamericano*. Buenos Aires.
- Behar, O. y Ardila Behar C. (2012). *El caso Klein. El origen del paramilitarismo en Colombia*. Colombia: Ícono.
- Cardona, L. M. (2016). *La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencia en Colombia (2002-2010)*. Medellín: Universidad Nacional.
- Cepeda, I. y Rojas, J. (2008). *A las puertas del Ubérrimo*. Bogotá Random House Mondadori.
- Coppedge, M. y Gerring, J. (2020). *Varieties of democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cubides, F. (1999). "La Violencia en Colombia junio de 1962: Glosas de un lector de hoy", *Revista Colombiana de Sociología*, Nueva Serie, Vol. IV, N° 1, pp. 43-42.
- Duque, J. (2017). *Las urnas contaminadas. Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana, 1990-2015*. Medellín: La Carreta.
- Eatwell, R. y Goodwir, M. (2018). *National populism. The revolt against liberal democracy*. Inglaterra: Penguin Random House.
- Gómez-Suárez, A. (2017). *El triunfo del No. La paradoja emocional detrás del plebiscito*. Bogotá: Ícono.
- Gutiérrez, F. (2019). *Clientelistic warfare? Paramilitaries and the state in Colombia (1982-2007)*. Oxford: Palgrave.
- (2014). *El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia*. Bogotá: Random House Mondadori.
- (2010). "Reflexiones a propósito de..." en López, C., *Y refundaron la patria...* Bogotá: Random House/Mondadori.
- (2007). *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia*. Bogotá: Norma.
- (2006). "Estrenando sistema de partidos", *Análisis Político*, N° 57, pp. 106-125.
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. Londres: Verso.
- Levitzky, S. y Way, L. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipset, S. y Raab, E. (1970). *The politics of unreason. Right wing extremism in America, 1790-1970*. Nueva York: Harper and Row.
- López, F. (2014). *Las ficciones del poder: patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010)*. Bogotá: IEPRI.
- Losada, R. y Liendo, N. (2016). "El partido Centro Democrático en Colombia: razones de su surgimiento y éxito", *Análisis Político*, N° 87, pp. 41-59.
- Martínez, G. (2004). *Salvatore Mancuso: su vida*. Bogotá: Norma.
- Mammone, A. (2011). "Il british national party e l'ideologia neofascista nell' Europa contemporanea", *Studi Storici*, Año 52, N° 2 (abril-junio), pp. 393-421.
- Mauceri, P. (2001). "Estado, élites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú", *Colombia Internacional*, N° 52, pp. 44-64.
- Montañez, J., Bolívar, J., Sevillano, P. y Báez de la Serna, E. (2005) *Pensamiento social y político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia*. Córdoba: Santa Fe de Ralito.
- Mudde, C. (2000). "The extreme right party family", en Mudde, C. y Ehrlich, A. (ed.) *The ideology of the extreme right*, Manchester University Press.
- Norris, P. e Inglehart, R. (2016). "Trump, Brexit and the Rise of Populism: Economic Have-nots and Cultural Backlash", *Harvard JFK School of Government Faculty Working Papers Series*, agosto, pp. 1-52.

- Osorio, M.C. (2012). *Primer mandato presidencial de Uribe Vélez. Personalismo y carisma*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Rey, J. J. (2015). *El uribismo, un fenómeno político de cuatro dimensiones*, Tesis de grado. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Rydgren, J. (2007). "The Sociology of the Radical Right", *Annual Review of Sociology*, Vol. 33, pp. 241-262.
- Uribe Vélez, A. (2012). *No hay causa perdida*. Bogotá: Penguin.

Prensa y portales web

- Blu Radio* (2019). "Uribe pide al Gobierno flexibilizar permisos especiales de porte de armas", 28/01/2019 <https://www.bluradio.com/nacion/uribe-pide-al-gobierno-flexibilizar-permisos-especiales-de-porte-de-armas-204087-ie5116915>.
- El Espectador* (2019). "Imagen desfavorable de Álvaro Uribe llega por primera vez al 61%: Gallup Poll", 29 de agosto de 2019, <https://www.elespectador.com/noticias/politica/imagen-desfavorable-de-alvaro-uribe-llega-por-primera-vez-al-61-gallup-poll-articulo-878510>.
- El Espectador* (2019b). "La disertación de Uribe sobre las masacres", 07/04/2019 <https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-disertacion-de-uribe-sobre-las-masacres-articulo-849284>.
- El Espectador* (2008). "Uribe dice que desaparecidos de Soacha murieron en combate", 07/10/2008 <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-uribe-dice-desaparecidos-de-soacha-murieron-combates>.
- El Tiempo* (2009). "¿Qué es el Estado de opinión del que habló Álvaro Uribe en su discurso ante el Congreso?", 27 de julio de 2009, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5712361>.
- El Tiempo* (2018). "Visbal, el más alto dirigente gremial condenado por nexos con 'paras'", 20/06/2018 <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/jorge-visbal-martelo-fue-condenado-por-nexos-con-paramilitares-233552>.
- Las Dos Orillas* (2014). "¡Señor presidente, a mí me van a matar!". Los 11 años del asesinato del alcalde de El Roble <https://www.las2orillas.co/los-11-anos-del-asesinato-del-alcalde-de-el-roble/>.
- Lewin, J. E. (2018). "El empresariado: recargado con Duque", *La Silla Vacía*, 16 de julio, <https://lasillavacia.com/el-empresariado-recargado-con-duque-67018>.
- Palou, J. C. (2009). "Hipótesis: ¡Uribe es diferente!", *Semana*, 8 de octubre.
- Revista Semana* (2013). "La polémica columna de Fernando Londoño", 29 de abril, <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-polemica-columna-fernando-londono/341657-3>.
- Revista Semana* (2006). "Les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten", 12 de febrero.
- Revista Semana* (2017). "Lo que digan Uribe o Petro", 19 de agosto, <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-experimento-sobre-la-irracionalidad-de-los-seguidores-de-uribe-y-petro/536884>.
- Revista Semana* (2008). "Crece brecha entre Uribe y Corte Suprema", 5 de septiembre, <https://www.semana.com/on-line/articulo/crece-brecha-entre-uribe-corte-suprema/95022-3>.
- Uribe Vélez, Á. (2013). "Estado comunitario", <https://alvarouribevelez.com.co/contenido-general/estado-comunitario/>.
- W Radio* (2019). "Álvaro Uribe alcanza cifra histórica de impopularidad", <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/alvaro-uribe-alcanza-cifra-historica-de-impopularidad/20191217/nota/3992622.aspx>.

Eduardo Paz Gonzales
epaz@colmex.mx
Universidad Mayor de San Andrés
Bolivia

Recibido: 09/01/2020
Aprobado: 11/02/2020

De golpes y fraudes

Análisis del campo de fuerzas políticas en la Bolivia post Evo Morales

Resumen Bolivia atravesó un período convulsionado el último trimestre de 2019. Las elecciones que dirimirían si Evo Morales era electo para un cuarto mandato quedaron anuladas bajo acusaciones de fraude y abrieron un período *contencioso*. En este artículo se examina, en clave de la construcción y erosión de la hegemonía, los momentos de fortaleza y caída del **Movimiento Al Socialismo (MAS)**, así como se avizora la emergencia en el campo político de nuevos y no tan nuevos actores conservadores. Un conjunto de errores facilitaron la caída del gobierno, aun después de 14 años de administración eficiente del poder. Tanto las narrativas de *golpe de Estado* como la de *fraude* son parte de un reacomodo producido por la pérdida de hegemonía del MAS que abre un periodo nuevo de pugna por la democracia.

Palabras clave Bolivia, Evo Morales, hegemonía, MAS, política.

Abstract Bolivia underwent a convoluted period in the last trimester of 2019. The elections that were supposed to define if Evo Morales would be elected for a fourth term were canceled over accusations of fraud and unleashed a struggle. This paper addresses the moments of strength and weakness of the **Movimiento Al Socialismo** (Movement Towards Socialism) as well as the emergence in the political arena of new and not-so-new conservative leaderships. Mistakes and missteps made the government an easy target, even after 14 years of political power management. Both *fraud* and *coup d'état* narratives that shall be regarded not as explanations on the events and rather part of tactics in a new set of strengths between political actors.

Keywords Bolivia, Evo Morales, hegemony, MAS, politics.

si el fraude ocurre dentro de la hegemonía, el fraude es irrelevante. Si la rebasa, es decir, si trata de reemplazar el efecto de una hegemonía que no tiene, no es verosímil y, en consecuencia, conducirá a hechos aún más graves. Tal es, después de todo, la base teórica de la democracia burguesa. (1983, p. 170)

En su barroca formulación, Zavaleta provee de una clave valiosa para aproximarse a los eventos recientes que azotaron Bolivia desde octubre de 2019. Se trata, en fin, de cómo plantearse el problema de la transición forzosa de Evo Morales y la sucesión de un gobierno de restauración neoliberal. Si bien lo primero que llamará la atención de la cita de Zavaleta es la mención del **fraude**, el acento conceptual se encuentra del lado de la **hegemonía**: los hechos son diversos y su significación podrá remitirse al infinito de las cadenas causales. Pero estos hechos puntuales, golpes o fraudes, existen dentro de un momento del proceso hegemónico, que al final de cuentas es el que les provee el valor de su ocurrencia.

Retomando las consideraciones sobre **hegemonía**, este artículo se propone examinar la situación de las fuerzas políticas en el entorno estatal boliviano atinentes a la caída de Evo Morales, la sucesión en el gobierno de Jeanine Añez y las fuerzas actuantes antes de las elecciones de 2020. En octubre de 2019 se llevaron a cabo elecciones generales que desembocaron en eventos turbulentos: los resultados de las elecciones fueron seriamente cuestionados por observadores internacionales y locales por un conjunto de irregularidades registradas. Asimismo, el electorado opositor a Morales -que se presentaba para un cuarto mandato- evidenció el corte de transmisión del sistema de conteo rápido, lo que inmediatamente los puso en alerta y los llevó a las calles en protesta. Los eventos se precipitaron raudos: la protesta fue creciendo ante un Tribunal Supremo Electoral que se empantanó en su ineptitud y un gobierno central sin respuestas efectivas. La protesta social de sectores medios y urbanos principalmente arrinconó al gobierno mientras los liderazgos de la oposición negociaron con altos mandos militares y policiales los términos de defenestramiento de Evo Morales, como afirmó el mismo líder cívico Luís Fernando Camacho.

Dos narrativas se generaron en un campo político polarizado:

- ♦ la del *fraude* sostuvo que Morales, por los medios que fueran necesarios, incluyendo el fraude, intentaba quedarse en la presidencia.
- ♦ la del *golpe* señaló que los errores del TSE no eran más que eso y que la oposición había armado una *tramoya* para ejecutar un golpe de Estado (camuflados detrás de la idea del fraude) y restituir el poder de las viejas élites políticas y económicas.

Este trabajo, antes de seguir con alguna de las dos narrativas, examina el marco más amplio de los eventos políticos a fin de identificar la fortaleza de las fuerzas políticas, su acción estratégica y sus opciones abiertas de cara al futuro. De tal modo, el argumento general que guía las siguientes páginas es que se quebró la hegemonía que el MAS detentó por una década y el campo político se abrió a formas contenciosas de modo competitivo. Errores del MAS así como la reagrupación de sectores liberales y conservadores han dado nuevo rostro a la política boliviana contemporánea.

El artículo está organizado en **tres secciones**. En la primera se evalúa la **edificación de la hegemonía** del Movimiento al Socialismo tras 14 años de lo que el mismo gobierno denominó *proceso de cambio*. Se hace un recuento rápido de los pilares en los que se levantó la imagen de éxito económico con inclusión social, que llevó a separar a Bolivia de

otros gobiernos rosa de la región, más bien sumidos en contradicciones profundas. En la segunda parte el análisis se concentra en **el discurrir de los eventos recientes** en lo que toca a los hechos que dañaron la hegemonía del MAS desde su propio accionar y en relación con los otros actores. La tercera parte a su vez se concentra en las **características de la derecha** y sus fraccionamientos y contradicciones contemporáneas.

El momento hegemónico

Antes de que Evo Morales asumiera la presidencia del país, Bolivia vivió una profunda crisis estatal (Paz Gonzales, 2016). El inicio del siglo XXI marcó la debacle del orden neoliberal en varias dimensiones: en lo político fue visible que el sistema de partidos y la forma de gobernabilidad instituida -una gobernabilidad producida con pactos entre partidos- ya no podían canalizar las demandas sociales de un modo eficiente. Esencialmente eso quedó desnudado con las movilizaciones de 2001 y 2003 principalmente, conocidas como **guerra del agua y guerra del gas**. Estas movilizaciones, junto a otras más puntuales pero igualmente intensas, mostraron que las organizaciones sociales como los campesinos -y dentro de ellos los productores de coca-, pueblos indígenas, trabajadores manuales y precarizados habían recuperado iniciativa política y la estaban dirigiendo por canales extrainstitucionales. Las protestas y los sistemas de procesamiento vivían un permanente desencuentro y la inestabilidad se había convertido en una marca visible especialmente en la renuncia de presidentes en ese periodo (Banzer en 2001, Sánchez de Lozada en 2003, Mesa en 2005).

Del mismo modo habían problemas en la dimensión económica. Las medidas neoliberales que se aplicaron desde 1985 con el **Decreto Supremo N° 21.060** y luego en una segunda oleada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) no arrojaban resultados favorables. Las empresas estatales fueron privatizadas porque se alegó que eran deficitarias, pero en manos de privados sirvieron para que funcionarios de gobierno abusaran de puertas giratorias para apropiarse de aquellos bienes estatales. Asimismo, sólo algunos años después de privatizadas, algunas de estas empresas se encontraban plagadas de malos manejos y más de un culebrón de casos de corrupción.

Por otra parte, la narrativa de integración cultural aplicada en esos años fue la del **multiculturalismo** como forma de reconocimiento de minorías étnicas. En esa plantilla de acción se suponía que se potenciarían políticas de reconocimiento políticas, económicas y sociales que permitan la incorporación en el *Estado Neoliberal* de entonces. Sin embargo, la demanda étnica en el país aspiraba a algo más que sólo una incorporación: demandaba una transformación del Estado para expresar la voz y propuestas indígenas.

En el vértigo político de esos años distintos **líderes populares** aparecieron en la arena política. Quizás los dos más notables hayan sido **Felipe Quispe** y **Evo Morales**. Quispe, indio aymara, había estado en prisión por ser parte de un grupo armado -el Ejército Guerrillero *Tupac Katari*- y que después de su excarcelación fue elegido secretario ejecutivo de la **Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)**. Quispe, que había quebrado el sentido común neoliberal al revitalizar la idea de *las dos bolivias*, una criollo/mestiza y explotadora, que abusaba de la otra, la Bolivia india y trabajadora, ocupaba la posición más radical en el escenario político de inicios del siglo XXI.

Evo Morales, por su parte, dirigente de los productores de coca del Chapare -trópico cochabambino- encabezaba la lucha en defensa de la hoja de coca en contra de las medidas de erradicación de coca del gobierno, no solo alineado a los Estados Unidos sino asesorado en terreno por la DEA. La posición de Evo Morales, como dirigente sindical de una

lucha que tenía como antagonista a los Estados Unidos, le permitió hacer un ensamblaje de lucha local con una perspectiva antiimperialista, de larga raigambre en la tradición política boliviana. A diferencia de Quispe que se apoyaba en un discurso radical indianista, Morales llegó a ocupar una posición de articulación entre posiciones indianistas, sindicales, izquierdistas, nacionalistas (Stefanoni y Do Alto). Esto, no obstante, sólo pudo desarrollarse en la medida que se sucedían las protestas, las elecciones de 2002 y se incrementaba la conflictividad del campo político. En otro lugar he sostenido con más detalle que mientras Quispe fue el actor que resquebraja la *pax neoliberal*, es Morales quien logra aglutinar fuerzas populares de distintos acentos entre los inconformes del neoliberalismo (Paz Gonzales, 2016).

Articulador de las fuerzas populares, Morales se alzó victorioso en las elecciones de 2005 con un resultado que sorprendió a todos: 53,72% del electorado le dio su voto en un país donde las mayorías electorales eran un fenómeno muy raro. Antes de Morales, en 2002, Sánchez de Lozada se había levantado ganador con 22,5% del apoyo electoral y un acuerdo de cinco fuerzas políticas en el poder legislativo. La fuerza electoral de Morales no fue un episodio aislado: en 2009 y en el marco de una **Nueva Constitución Política del Estado**, Morales fue votado por el 64,22% del electorado, por el 61,36% en 2014. Antes, en 2008, Morales enfrentó un referéndum revocatorio de mandato en la que recibió el apoyo del 67,4% del electorado para continuar en sus funciones (Mayorga y Rodríguez, 2015). El apoyo a Morales fue especialmente arrollador en zonas rurales, periurbanas y populares, llegando en los momentos de mejor proyección a zonas de clase media.

Morales convocó en su primer gobierno a una **Asamblea Constituyente**, la misma que había sido demandada desde inicios de 2000 por sectores populares. En la misma el partido de Morales, el MAS, tuvo amplia mayoría y si bien el proceso fue extremadamente complicado por la oposición férrea, salió adelante. El texto final establece un marco bastante amplio de derechos sociales así como un amplio catálogo de reconocimientos para los indígenas, el carácter *plurinacional* de Bolivia y el horizonte del vivir bien como proyecto. Cuando este nuevo texto constitucional fue puesto a consideración de la población para aprobación, la votación le dio un apoyo del 61,43%. La fuerza electoral de Morales quedó plasmada en una nueva Carta Magna que expresa una proyección de país con fuerte presencia del Estado en garantizar derechos de la población.

A la hora de pedir el voto de la población, Morales se había mostrado sumamente vigoroso por un conjunto de razones que van desde la identificación étnica con el candidato hasta el pragmatismo causado por la estabilidad de las gestiones de Morales en el poder, pasando por la sintonía ideológica y programática. Esta fortaleza electoral, vale decir, no había sido omnímoda: en elecciones regionales, el Movimiento Al Socialismo fue más discreto en su *performance*, teniendo más problemas para elegir gobernadores (especialmente en Santa Cruz, departamento motor de la economía del país) y en alcaldes en las ciudades capitales como la misma Santa Cruz o la sede de gobierno, La Paz.

La fortaleza electoral de Morales va de la mano con un conjunto de **transformaciones materiales** que también se evidenciaron desde su primera gestión. Como señala Paz Rada (2016: 97) es a partir de la nacionalización de los **hidrocarburos** en 2006 que se empieza a transformar la economía del país: mientras en 2005 el valor de las exportaciones en la rama de hidrocarburos alcanzó los US\$1.400 millones, esa cifra asciende a 5.890 millones en 2012. En la **minería** sucede algo semejante al pasar de un valor de exportaciones de US\$350 millones de dólares en 2005 a US\$2.076 millones en 2012. Es la combinación entre una política estatal de recuperación del control de los recursos naturales y condiciones favorables del mercado internacional lo que cambió sustantivamente los ingresos del país y su posibilidad de administrar los excedentes más significativos.

La generación de excedentes fue acompañada en el gobierno de Evo Morales por una fuerte inclinación a la redistribución. Como señala un estudio de Escobar de Pabón *et al.* (2019: 18) *la pobreza por ingreso se redujo significativamente en la última década (de 60% a 38%)*, algo que es corroborado por Pereira (2017: 51) que muestra que la pobreza moderada urbana y rural se redujeron entre 2006 y 2014 de 50,27% a 30,56% y de 76,47% a 57,56% respectivamente. Siguiendo a Pereira, se evidencia una reducción del Índice de Gini, que pasó de 0,59 en 2006 a 0,50 en 2014; en efecto, Bolivia era un país menos desigual. Si bien el gobierno ha procurado, por distintos medios, favorecer la redistribución del ingreso, utilizando transferencias directas así como subvenciones (como el mismo ex vicepresidente García Linera recordó en un programa en la televisión mexicana), un estudio reciente del PNUD (2018) ha enfatizado que la medida más efectiva ha sido el aumento de salarios. Cada año desde 2006, el gobierno de Evo Morales negoció con trabajadores y empresarios el alcance del aumento salarial en función del desempeño de la economía. Estos aumentos beneficiaron directamente a la parte formal de la economía e indirectamente inyectaron dinero en el mercado interno, lo que benefició a los grupos fuera del sector formal.

Esta pujanza se tradujo en transformaciones del consumo. Como ha apuntado Hugo José Suárez (2019: 91) *(entre el 2006 y el 2013 el incremento del valor de ventas y facturaciones en supermercados aumentó 362%, llegando a 438 millones de dólares)*. El mismo Suárez agrega que la facturación en negocios de comida aumentó de US\$67 a US\$416 millones en el periodo ya señalado. En suma, se trató de un momento de bonanza en los mercados internacionales, aprovechado para la reducción de la pobreza, de la desigualdad y que también se expresó en el consumo de la población.

La construcción de la hegemonía del Movimiento Al Socialismo se apoyó, de modo primario, en la relación entre las repetidas victorias electorales y los logros económicos de la gestión. Por supuesto, lo anterior no basta para construir hegemonía, si por hegemonía entendemos el proceso de edificación de un consentimiento generalizado favorable al gobierno. En 14 años de gestión, el gobierno de Evo Morales tuvo distintos antagonistas. Sin embargo excede a los propósitos de este trabajo recapitular los momentos del gobierno de Evo Morales y la amplia literatura sobre los mismos que existe (Schavelzon, 2012, García Linera, 2008, 2010, 2015, 2017, Molina Argandoña *et al.*, 2014, Peñaranda, 2014, Cordero Ponce, 2018, Miranda, 2012, Paz Gonzales, 2015, 2016b, 2017, 2018, Moldiz, 2020).

La aprobación de la **Nueva Constitución Política del Estado** sirvió al gobierno para establecer un terreno de discusión, es decir, si bien no todos los actores convergen ideológicamente con el gobierno, les toca discutir en la arena de la implementación de la Constitución. Esto es lo que William Roseberry había tratado como factor clave de la hegemonía: la producción de un lenguaje de controversia, o bien, que lo que esté en juego en lo político sea en las coordenadas provistas por el gobierno. A la vez, el gobierno mantuvo de modo permanente la vinculación con organizaciones sociales decisivas: la Central Obrera Boliviana, la CSTUCB, los productores de coca del Chapare, además de sectores mineros. De modo más controversial, el gobierno logró que facciones de otras organizaciones como el **Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo** o la **Central Indígena del Oriente Boliviano** se mantuvieran próximas, así como a sectores gremiales, juntas vecinales y transportistas. Si bien esto dio sostenibilidad a un bloque histórico popular, ciertos modos de administrar la política de las organizaciones terminaría por implosionar, como se verá más adelante.

A la vez, el gobierno tuvo que lidiar de modo constante con la presión de gobiernos de otros países, entre ellos Estados Unidos, por supuesto. Para contrarrestar la presión y

la mala prensa, el gobierno actuó en el plano internacional de modo conjunto con otros gobiernos progresistas de la región (en su momento Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Ecuador). De modo interno, la denuncia de la interferencia extranjera sirvió frecuentemente para polarizar el discurso público y separar los sectores afines a la política de Washington de los que apostaban por una construcción soberana del país. De tal modo que el bloque histórico popular encontraba su referente internacional en las iniciativas como UNASUR, ALBA y CELAC, dando consistencia a la política del gobierno y de hecho nutriendo la hegemonía del MAS.

Desgaste y errores del MAS

Vigoroso como se había mostrado en actos electorales, Morales forzó la cuerda hasta romperla. Habiendo salido victorioso de las justas electorales de 2014 con un margen amplio que le daba incluso dos tercios de representación en la Asamblea Legislativa, Morales propuso modificar la Constitución Política del Estado para habilitarlo a un mandato adicional.

De acuerdo a la norma jurídica, Morales había agotado sus opciones de reelección. La primera vez que fue elegido fue al amparo de la antigua Constitución Política del Estado, la misma que impedía la reelección del cargo del presidente de modo continuo, es decir, en el caso de Morales, para el período 2006-2010. Al aprobarse la Constitución de 2009 se llamó a nuevas elecciones, acortando el primer mandato de Morales pero en el entendido de que la elección en el marco de la nueva Constitución contaba como primer mandato. Así fue elegido para el periodo 2010-2014 y posteriormente con las elecciones de 2014 Morales hizo uso del derecho a la reelección para el período 2015-2019. De acuerdo a la norma, hasta ahí iban sus posibilidades de presidir el país.

Sin embargo, confiado del apoyo popular, Morales convocó a un referendun en el que planteó la modificación del artículo 168° de la Constitución, que limita la reelección de autoridad. El resultado fue un duro revés para Morales: el 51,3% de la población votó por no modificar la norma.

Varios elementos convergieron para que la votación se volcará en contra de Morales. De acuerdo a Mayorga y Rodríguez (2016: 85) cinco fueron los ejes de la propaganda contra la modificación:

- ♦ la alternancia como principio esencial de la democracia
- ♦ la necesidad de una nueva generación de líderes
- ♦ la continuidad favorece la constitución de un grupo que no rinde cuentas
- ♦ el referéndum beneficia a dos personas: Evo Morales y Álvaro García Linera
- ♦ la corrupción rampante en el gobierno, visible en los casos del **Fondo Indígena** y en el *affaire* Gabriela Zapata, que enlodó al mismo presidente Morales al evidenciar que había tenido una relación afectiva con quien luego fue *lobbista* privilegiada de empresas chinas en Bolivia.

(Este último punto en particular fue el caballo de batalla antes de la votación, que erosionó el voto por mostrar corrupción de gran escala en la cúpula del Estado.)

Dentro del Movimiento Al Socialismo la derrota fue atribuida a un momento coyuntural y a una sincronización de las fuerzas conservadoras para desprestigiar al gobierno. Se pensó que el desbalance electoral podría ser revertido y para lo mismo habría que recuperar la iniciativa política. Si bien la iniciativa política fue recuperada, la derrota que se había producido con la votación el 21 de febrero de 2016 no sería fácilmente olvi-

dada. Cada 21 de febrero posterior fue recordado como fecha de una victoria opositora y movilizaciones en las calles insistían en que Evo Morales debía retirarse al concluir su mandato.

Morales buscó estrategias legales para habilitarse a un mandato adicional. Finalmente se decantó por pedir una interpretación al Tribunal Constitucional sobre si el artículo 168° de la CPE no coartaba su derecho humano a ser elegido, y la respuesta que obtuvo fue favorable. Sin embargo, el ardid no fue visto con buenos ojos: la oposición simplemente vió en la sentencia constitucional una manipulación más del Poder Judicial desde el Ejecutivo. Más grave aún, ni siquiera dentro de la esfera pro gubernamental se podía defender con mediana sensatez la habilitación como candidato de Evo Morales.

La historia política boliviana sugiere que el acto mismo de las elecciones es maleable según la correlación de fuerzas. Fraudes, amañes, golpes, revueltas y revoluciones son parte del entorno histórico de las elecciones en el país (Cf. Irurizqui, 2019). En algún momento, a pesar de haber declarado que *se iría a su casa si pierde por un voto*, Morales trató de cancelar un acto eleccionario con otro. Sin embargo parece que el actual ciclo democrático iniciado en la década de los 80 ha dejado un sedimento nuevo en la práctica política boliviana: el voto no es superficial, no es un hecho más en la contienda política, sino un legitimador sustantivo. El desafío ha los resultados del 21 de febrero de 2016 socavaron la legitimidad de Morales hacia la elección de 2019 (Stefanoni, 2019).

Morales actuó, y junto con él el resto del MAS, como si suficiente tiempo de preparación y de reactivación del período de campañas pudiera mitigar el efecto del referéndum del 21 de febrero. Pero la oposición se aferró a ese evento e hizo gravitar alrededor de esto su propia campaña electoral. Carlos Mesa, que había sido antes vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y luego presidente de la República, se postuló como candidato y rápidamente se perfiló como el contendiente principal de Evo Morales. Oscar Ortiz, candidato del bloque conservador cruceño se presentó también al primer cargo del país después de varias gestiones como Asambleísta y aspirando a recoger el voto regional; finalmente un conjunto de candidatos de poca proyección completaron a los contendientes.

Para la oposición, la conformación de un frente amplio se había convertido en una obsesión en el plano comunicacional: sin un frente amplio, Morales ganaría aprovechando la dispersión del voto. Sin embargo, en términos prácticos, los intereses en juego era muchos y no siempre compatibles. O dicho de otra manera: de llegar a ocupar el Poder Ejecutivo, un frente amplio debería repartirlo entre demasiados interesados, algo que además preveía el problema de un gobierno inconsistente por falta de un liderazgo reconocido y unificado. Ya en la carrera electoral corrió la consigna del *voto útil*, y eso finalmente benefició a Mesa, que en todas las encuestas era claro segundo, muy lejos de Oscar Ortiz, que fue incluso superado por un candidato sorpresa, Chi Hyun Chung. En el trabajo de Villanueva (2019) puede verificarse que las 47 encuestas de 7 empresas encuestadoras daban al MAS por victorioso en las justas de octubre de 2019 por márgenes comprensiblemente reflejados en la votación del 20 de octubre. La legislación boliviana reconoce como ganador a quien saque 50%+1 de los votos o a quien supere el umbral de 40% con una ventaja de 10 puntos respecto del segundo. Si bien Morales seguía siendo el primer candidato, los márgenes eran muy estrechos. Además de que su negativa a aceptar los resultados del referéndum permitía a la oposición preparar una narrativa de fraude: *Morales no iba a dejar el poder por el voto, ya lo había demostrado*.

Cuando el día de la elección llegaba a su tramo final, con el conteo rápido y el cómputo final en curso, el sistema de conteo rápido fue detenido en 87%, cuando Morales llevaba una ventaja de 7 puntos porcentuales. Ese hecho manchó el acto. A partir de ese momento la narrativa de *fraude* se impuso mientras el Tribunal Supremo Electoral vacilaba en

dar una respuesta coherente y el Poder Ejecutivo trataba de salir a anunciar una nueva victoria. Los antagonistas de Morales se volcaron a las calles decididos y convencidos de que el gobierno haría trampa para quedarse. Morales y sus acólitos no pudieron salir a dar una explicación clara y pronto fueron sobrepasados por las protestas que tomaron las calles. 21 días después de la elección trunca, Morales renunciaba ante protestas en las calles, las fuerzas represivas del Estado en desacato y altos líderes de oposición en negociaciones con representantes de Estados Unidos, Brasil, la Policía y el Ejército.

Dos hipótesis circularon en ese momento de polarización: la hipótesis del **fraude** y la del **golpe** (Moldiz, 2020). La del fraude sostiene que la detención del conteo rápido se vincula con otra evidencia que sugiere modificación de actas de mesas de votación, manipulación de datos en los servidores del TSE, rupturas en la cadena de resguardo de los resultados desde los recintos hasta los tribunales. Esta hipótesis se vio fortalecida por el informe emitido por la Organización de Estados Americanos que concluye que hubo manipulación dolosa en las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, proyecciones estadísticas y otros estudios (Curiel y Williams, 2020) sostienen que el resultado final al que llegó el TSE, con Morales ganando con 47,08% de los votos y 10,54 puntos de diferencia respecto de Mesa, estaba de acuerdo con la tendencia del 80% de las actas reportadas antes del apagón del conteo rápido.

La segunda hipótesis parte del conocimiento de que la narrativa del fraude estaba previamente dispuesta a ser empleada cualquiera sea el resultado de las elecciones, es decir, el desconocimiento de las elecciones estaba planificado. Se alega también que estas movilizaciones estarían financiadas por grupos empresariales, los mismos que habrían contactado a la jerarquía militar y policial para negociar los términos del retiro de su apoyo al gobierno. Esto fue confesado por el mismo Luis Fernando Camacho (La Razón, 28/12/19) en una infidencia registrada en video y cuando ya todo se había consumado.

Más que explicaciones, ambas hipótesis fueron las trincheras de batalla de un país prácticamente dividido en dos. Del lado de quienes sostuvieron que hubo fraude, hay detalles nunca aclarados sobre qué y cuánto se modificó del resultado. Se apoyan, no obstante, de modo efectivo en la pérdida de legitimidad del MAS y en los errores procedimentales del TSE, un efecto práctico de la desinstitucionalización del organismo provocado por el mismo MAS. Del lado de quienes sostienen que hubo golpe hay dos facetas que conviene remarcar. Como señaló Silvia Rivera en el Parlamento de las Mujeres (12/11/19) la hipótesis del golpe exculpa al masismo de todos sus errores y los pone en posición de víctimas sin más. La segunda faceta de la debilidad de la hipótesis del golpe es que tiende un velo sobre el hecho patente de que en las calles el MAS estaba derrotado por la movilización de los electores opositores antes de la perfidia de las fuerzas represivas del Estado.

Visto en retrospectiva, parece fácil comprender la sucesión de los eventos dentro del desgaste de la hegemonía del MAS, pero en términos de experiencia, todo aquello fue muy sorpresivo. Dentro de la cotidianidad, verse inmerso en un momento en el que el país parece al borde de una confrontación violenta entre civiles resultaba abrumante y más de un analista estaba desconcertado sobre qué estaba pasando. El miedo se convirtió en justificativo de decisiones e inclusive conocida la nefasta historia la participación de los militares en golpes de Estado, no fue raro ver alivio en la gente porque alguien se encargaría de evitar que la gente se mate entre sí -alivio que duró poco porque luego los militares protagonizaron las masacres de Senkata y Sacaba en los días sucesivos a la renuncia de Morales.

Tanto la narrativa del *golpe* como la del *fraude* son parte del fenómeno a explicar y entender antes que una disyuntiva de comprensión en sí misma. La falta de credibilidad en el proceso de votación y en la institución misma es resultado de errores de administración

de lo público, por ello la fuerza que tuvo la movilización en la calle, aunque solo fuera en los epicentros urbanos frente a la apatía de las zonas populares. Del mismo modo la propensión de la policía y los militares ha apartarse del orden constitucional es una parte de algo más grande que puede ser considerado como una insurrección conservadora aun cuando el abanico ideológico de los movilizados era más amplio; esto será visto en la siguiente sección. Pero ¿por qué el MAS y el *gobierno de los movimientos sociales* fue tan poco eficiente en las calles? La campaña de 2019 permite bosquejar una respuesta a ello, y es que la agenda de transformación en ese momento estaba agotada.

En los meses de campaña, Evo Morales fue incansable en presentarse ante multitudes a fin de convocarlos a votar por él, así como hubo un despliegue sustantivo en medios de comunicación. Es en el mensaje mismo de campaña que se puede notar el momento de debilidad del gobierno. La campaña tuvo por eslogan **Evo Pueblo, Futuro Seguro**. El contenido de ese **Futuro Seguro** era un llamado a la continuidad: el país tuvo relativa paz social, avances en lo económico y lo redistributivo, un léxico de transformación institucional con la descolonización, las autonomías indígenas, la despatriarcalización, todo en el afán de construir lo plurinacional. Futuro seguro era la invitación a seguir por esa senda, apelando al pragmatismo de los votantes y sin grandes épicas revolucionarias.

La nacionalización de los hidrocarburos había dado oxígeno financiero al *Proceso de cambio* y muchas cosas fueron emprendidas con esos recursos. El gobierno intentó de manera insistente en iniciar un proceso de industrialización que permita superar la dependencia de materias primas, pero la realidad resultó más obstinada y los logros de esta industrialización fueron discretos. Los megaproyectos de represas o carreteras fueron cuestionados como continuación de un modelo de desarrollo extractivista, pero la crítica fue estéril en proponer un cambio de matriz económica realista que esté a la altura de las demandas del mercado interno. En este momento es inevitable proseguir con una discusión que vaya más allá de la retórica ambientalista y se haga cargo tanto del desarrollo como del medio ambiente.

Otro aspecto fundamental radica en el **cambio en la orientación política de las organizaciones sociales**. Por un lado la relación con el Estado en esta forma directa gestionada por Morales favoreció que las organizaciones sociales velaran por sus intereses corporativos y gremiales antes que por un horizonte de transformación estatal. Como han señalado Zegada y Komadina (2014) los representantes legislativos dejaron parte de sus funciones de legislación en favor de convertirse en tramitadores de recursos para proyectos.

Más alarmante aún es que los intereses locales de las organizaciones buscaran más las señales exteriores del desarrollo en lugar de proyectos que materialmente den condiciones de mejor existencia; como era preferir *coliseos* antes que *proyectos de riesgo*. Es decir, con un matiz popular, el Estado siguió siendo en muchos aspectos, objeto de un apropiamiento de recursos. No es la corrupción patrimonial ejercida por un puñado de familias de los años 90, pero sí es un sentido del Estado como *cajero*.

Por otro lado, allí donde el Estado no pudo crear un vínculo con organizaciones sociales, introdujo prácticas de desestabilización de las organizaciones. Valga un ejemplo específico: a inicios de 2020, Alison Spedding (2020) publicó un texto que sintetiza este proceso entre los coccaleros de Yungas, a los cuales la misma Spedding pertenece como productora. Los coccaleros de Yungas, a diferencia de los del Chapare, son de la zona conocida como **tradicional**, por lo tanto difícilmente pueden ser afectados por reconsideraciones de la ley de coca o cualquier otra que afecte el cultivo. Pero, al mismo tiempo, la legislación sobre coca que favorece al Chapare puede ir en desmedro de Yungas en temas de aumento de las áreas legales en Chapare o en temas de comercialización.

Cuando empezó a tratarse la nueva **Ley de Coca** en 2017, los dirigentes de Yungas quisieron reunirse con el Ministro del área, pero este respondió que ya se había reunido con dirigentes de la zona, con **sus** dirigentes. En 2006, como modificación de la Ley N° 1008, se había habilitado la posibilidad de que productores sean autorizados a vender *al detalle*, productores luego conocidos como *carpeteros*, cuando lo normado hasta entonces era que la coca se vendía a asociaciones de detallistas, conocidos como *cocanis*. El hecho es que los productores que supuestamente también son *detallistas*, en realidad son una fracción de clase con vínculos en la comunidad, en donde alguien más se ocupa del cultivo mientras ellos se ausentan para vender la coca; algo que no puede hacer un productor de coca que debe estar cuidando el cultivo de manera intensiva. La ley de 2006 provocó que el sindicato de cocaleros fuera el techo para dos intereses diferentes: una fracción privilegiada *recampesinizada* de carpeteros, el resto campesino con otros intereses sobre la legislación. El gobierno procuró hacerse del control de los sindicatos de Yungas, favoreciendo a la fracción privilegiada, que si bien es minoritaria, duplicó la estructura sindical.

El gobierno había subestimado la unidad y las prácticas políticas yungueñas, conocidas por ser implacables con sus propios dirigentes (Spedding, 2020). Si bien tensiones y conflictos cundieron en la organización política, inclusive golpeada y perseguida por el Ministerio de Gobierno, en el momento de crisis de gobierno, los cocaleros de Yungas en su mayoría había tomado partido por defenestrar al gobierno. Los intentos del gobierno de perforar el sindicato y hacerse de su control más allá de los intereses de los campesinos de base lo convirtieron en un enemigo. La situación de animadversión en contra del gobierno cundió en otras organizaciones de modo semejante a lo que ocurrió en Yungas; en el afán de controlar las organizaciones, el MAS adoptó formas de subordinación y de desestabilización que despertaron más de una aversión en organizaciones de base. El resultado de esta dinámica, que aquí se ejemplifica con un caso, se expresa de modo variable en la geografía del país. Existen sin duda pertrechos sólidos del MAS, inclusive por ahora inexpugnables, como las federaciones del trópico de Cochabamba (los productores de coca de donde salió Evo Morales). Pero sería erróneo creer que ese apoyo es homogéneo dentro del campo popular, más aun en este momento en el que hay reacomodos y las formas corporativistas instauradas con el MAS habilitan negociaciones entre otros líderes políticos con gremios particulares.

Competencia conservadora

El 13 de marzo, el periódico La Razón (2020) de La Paz publicó una nota que es expresiva del clima electoral post Evo. Titulada *En nueve encuestas, Arce y Añez suben, Mesa se estanca y Camacho cae*, la nota sintetiza el trabajo de la Fundación Friedrich Ebert con su agregador de encuestas en la que reúnen, ponderando cobertura y muestra, los resultados de cuatro empresas que levantaron datos hasta ahora. En estos resultados se advierte que el sucesor de Morales, Luis Arce Catacora, punteaba la intención de voto, llegando al 36% del voto válido. Atrás competían Carlos Mesa, principal contendiente de Morales en la elección de 2019, y Jeanine Añez, presidenta transitoria, con 20 puntos cada uno en un empate por el segundo lugar. Atrás y alejado, Luis Fernando Camacho con 12%.

A pesar del descalabro de finales de 2019, el MAS sigue siendo primera fuerza política y no se descarta que pueda alcanzar una victoria en primera vuelta. Es decir, si bien la gran hegemonía *masista* se desgajó, ello no significa que no guarde gran caudal de militancia y simpatizantes. Inclusive, es dado a pensar que la salida de Morales sirve para apaciguar aquellas características de su gobierno que eran más rechazadas. En diciembre de 2019, la empresa **CIESMORI** levantó una encuesta electoral anticipando las

elecciones de 2020. En la misma incluyó una pregunta sobre los **peores defectos y logros del gobierno**. Entre los defectos destacan tres (en una pregunta donde cada encuestado podía marcar varias respuestas): **abuso de poder** (45%), **fraude** (37%) y **corrupción** (35%). En un sentido general, los dos problemas del MAS eran la continuidad incuestionable de Evo Morales. El tema de la corrupción, en cambio, es algo que podría seguir pasándole factura. Entre los logros, destacan que Evo Morales creó bonos (42%), la estabilidad económica (36%) y la nacionalización de los hidrocarburos (24%). Es decir, incluso ido, Evo era reconocido por una buena gestión.

Pero el hecho fundamental de la erosión de su hegemonía sigue patente en el escenario post Evo: el MAS puede perder frente a sus antagonistas, o dicho en otras palabras, estamos frente a una situación de competencia que va a exceder el marco de las elecciones de 2020.

¿Quiénes compiten desde la disidencia al MAS? El primer contendiente es Carlos Mesa, quien sacó 36% de la votación en la elección anulada. Mesa antes fue vicepresidente de Sánchez de Lozada y posteriormente Presidente cuando éste renunció. Conocido periodista e historiador, proveniente de una familia de intelectuales igualmente muy reconocidos y el involucrado en la vida pública desde muy joven. Las encuestas de marzo de 2020 le daban a Carlos Mesa 18,3% en la intención de voto (El Deber, 16/03/2020), muy por debajo de su votación sólo 5 meses atrás.

Carlos Mesa fue candidato insistiendo en la necesidad de un Frente Amplio, sentir compartido por la oposición a Morales, como ya se mencionó. No se logró el Frente Amplio, pero Mesa, como candidato fuerte apeló en su campaña de 2019 al voto útil. En esa justa el tercer candidato era Oscar Ortiz, que no logró despegar en las encuestas. No sin sorpresa, la votación del departamento Santa Cruz favoreció a Carlos Mesa, que sin ser muy aceptado en el oriente, se perfiló como el hombre que podía derrotar a Morales. La misma situación no se replica en 2020. La caída de Morales y los días tumultuosos sirvieron para catapultar otros dos líderes que, justamente, provienen del oriente.

Se trata de **Luis Fernando Camacho** y **Jeanine Añez Chavez**. Ambos provienen de los entornos del empresariado del oriente del país y en principio responden a un fisura producida en el bloque oriental en 2009. En 2008 durante la *toma de instituciones*, una acción de fuerza orientada a lograr la autonomía departamental por la fuerza y recurriendo a grupos paramilitares, el gobierno de Morales logró reponer el orden utilizando fuerza militar. En ese momento, los dos líderes del movimiento autonomista, Rubén Costas y Branko Marincovic tuvieron un *impasse*: mientras el segundo estaba dispuesto a continuar con la toma de instituciones a pesar de los muertos civiles, el primero optó por recular, dada la gravedad de los hechos. Finalmente, Costas se impuso y negoció con el gobierno central. Esa diferencia dividió el bloque de poder cruceño entre los **radicales**, dispuestos a todo, y los **moderados**, que preferían mantenerse dentro de la institucionalidad (Miranda, 2012). En el primer momento, Luis Fernando Camacho estuvo vinculado con el ala radical de la derecha cruceña, mientras que Jeanine Añez se relacionó con una tendencia más moderada. No obstante esa diferencia, las semejanzas ideológicas son notables. Ambos líderes han empleado la fe en Cristo como guía política y no han dudado en publicitarlo. Añez ha sido panelista en eventos de organizaciones como *Con mis hijos no te metas* y en más de una ocasión ha escrito *tuits* polémicos, cuando no racistas (Euronews, 15/11/19). Luis Fernando Camacho, en un cabildo masivo en contra del gobierno, hizo arrodillarse y rezar a los asistentes (La Razón, 8/11/19), ha afirmado, antes de la renuncia de Morales, que devolvería la Biblia al Palacio de Gobierno y, ya en campaña, ha ofrecido un ministerio de la familia (La Prensa, 11/01/20). Ambos candidatos encarnan una propuesta regresiva en lo que a la agenda de derechos sociales se refiere.

En el primer momento de la reorganización del campo político, Luis Fernando Camacho, que había sido protagonista de las protestas que defenestraron a Morales, fue visto con simpatía. Según el agregador de encuestas de la Fundación Friedrich Ebert, en noviembre de 2019 Camacho contaba con una intención de voto de 20%, que no ha hecho más que descender hasta llegar a un 9% según el mismo agregador (Conferencia de Armando Ortuño el 20 de marzo de 2020 en sede FES en La Paz). Mientras tanto Añez, que en un primer momento no se había presentado como candidata, luego se decidió a hacerlo. Partió de 10% en diciembre de 2019 y en marzo estaba en el 22%, prácticamente empatando con Mesa y de hecho recibiendo apoyos originalmente con Camacho y Mesa. Un hecho es decisivo: Añez, estando en función de gobierno, supuestamente de modo transitorio, en realidad ha puesto el aparato público a disposición de su campaña. En apariencia, cualquier candidato que aspire a derrotar al Movimiento Al Socialismo con su nuevo candidato debería hacer algún tipo de propuesta o acercamiento hacia las bases de votación del MAS o de los sectores populares alguna vez cercanos a este partido. Lo que se ha evidenciado en cambio es el recrudescimiento de un tipo de narrativa conservadora con fuertes tonos de discriminación. Esta narrativa se apoya en **tres ideas** que se hicieron circular desde la renuncia de Morales. Estas son las de la **sedición**, el **narcoterrorismo** y el **salvajismo**.

La noción de **sedición** apuntaló el primer momento del gobierno transitorio. Las protestas en las calles en contra del gobierno de Añez, motivadas (de modo superpuesto) por el apoyo al MAS, el rechazo del gobierno transitorio y la reivindicación de la wiphala, emblema indígena que había sido quemado durante las protestas en contra de Morales. El epicentro de estas propuestas estuvo en la ciudad de El Alto, específicamente en los alrededores de la planta de gas de Senkata, desde donde se aprovisiona de hidrocarburos a La Paz. Para garantizar dicha provisión, militares y policías desplegaron operativos para despejar las rutas de acceso y salida de la planta. Allí las fuerzas represivas chocaron contra los manifestantes, matando a diez. Desde el gobierno se justificó la acción represiva porque supuestamente los manifestantes querían tomar y detonar la planta. Así, las acciones de protesta contra el gobierno empezaron a ser catalogadas como sedición, lo que llevó a una criminalización de la protesta y la disidencia con Añez.

El 16 de marzo de 2020, la activista feminista María Galindo entrevistó a Roxana Lizarraga en su programa de radio *La Barricada*. Lizarraga había sido ministra de Comunicación en los primeros meses del mandato transitorio y luego se apartó para candidatear a diputada en el partido de Luis Fernando Camacho. En ese programa, Lizarraga mostró la catadura ética política del régimen, y fundamentalmente mostró el sentido de **sedición** que estaban manejando: *el uso de medios para enfrentar a los pueblos*. Interpelada por Galindo sobre el derecho de la gente a movilizarse, Lizarraga respondió que el problema es que le creen y siguen a Morales, para agregar luego que las personas muertas en Senkata eran parte de grupos subversivos. Lizarraga dibujó así la línea que organiza el sentido de la sedición: *la acción política disidente del gobierno y que merece como respuesta toda la violencia del Estado*.

El otro resorte discursivo de la narrativa es la idea del **narcoterrorismo**. Sobre el Chapare, zona de producción de coca, recae el estigma de ser la zona de provisión de coca al narcotráfico. Si bien los datos bolivianos sobre aumento de producción de coca son discretos y hay discusiones en curso sobre el narcotráfico y su extensión, el gobierno no dudó en reponer la idea del desborde del narcotráfico. Si bien la situación boliviana dista de la de México, Colombia o Brasil, una parte del público boliviano se encontró predispuesta a aceptar que el narcotráfico campea en el país. Con ese arsenal, los pobladores del Chapare, la plaza más fuerte de Morales, ya no son tratados como disidentes políticos, sino como una organización cuyas acciones políticas son defensa del narcotráfico.

Finalmente se encuentra la idea del **salvajismo**. Desde las protestas previas a la renuncia de Morales fue notable que mediáticamente y en redes sociodigitales las protestas anti-morales fueron tratadas como *ciudadanas* mientras que sectores populares en protesta fueron llamados *hordas*. En un país como Bolivia, de larga herencia colonial, la desacreditación de los sectores populares en términos civilizatorios no es una novedad: pasó durante la asamblea constituyente (Defensor del pueblo, 2008), el proceso autonómico (Defensor del pueblo, 2009) y volvió a emerger en la coyuntura de revuelta conservadora. La atribución de incivilidad que se hizo de sectores populares conjuga un campo semántico diverso: son salvajes, ignorantes, no tienen educación, son adoctrinados y manipulados, no respetan, hacen lo que les da la gana, no entienden. Esa caracterización habilita el uso de la fuerza por parte del Estado como forma de corrección y control de la desviación. En el contexto de cuarentena por la pandemia de coronavirus, dos pobladores de un pueblo del valle fueron captados por un teléfono celular cuando fueron interceptados por militares que procedieron a golpearlos. La reacción a la publicación de la noticia, si bien incluye muestras de solidaridad con la población vejada, también contempla un número no menor de celebraciones de la violencia: se entiende que es lo único que puede aleccionar y enderezar a los pobladores de un pueblo. Llamativamente, dado que los golpeados son de un pueblo, se asume que serían proclives al MAS y además se los tilda de salvajes y testarudos, incapaces de comprender el problema de la pandemia. La cuestión del **orden del Estado** ha llegado a plantearse en términos de poblaciones que se constituyen en amenazas. Todo el entramado de la narrativa de la *estigmatización* coadyuva a expulsar la disidencia política de lo pensable e insistir en el carácter amenazante de ciertas poblaciones. Dentro del espectro ideológico, se trata de convertir al actor popular en un sujeto abyecto que asedia la reorganización de la sociedad, que, queda evidenciado, excluye al masismo. En el plano de las elecciones, este discurso es de doble filo: apunta a quitarle carnet de ciudadanía a la política masista y proscribirla. De ser efectiva la estrategia, la gente tendría miedo de votar o ser identificado como masista y estaría en urgencia de votar por alguien más, algo que puede ser efectivo entre el conjunto descontento con el MAS. Pero la estrategia es arriesgada, porque desplegada sin ninguna economía de la violencia, tiene el efecto contrario: cohesionar por miedo a un conjunto que siente la urgencia de detener el acoso político.

Más aún, la narrativa de la *estigmatización* parece haber dañado las posibilidades de Carlos Mesa. Frente a Añez y Camacho, Mesa aparece como un liberal en apariencia más abierto a agendas de derechos. Asimismo, ha reconocido más de una vez los logros del gobierno del MAS. Su crítica ha sido el abuso de poder y la corrupción de los últimos 14 años y había inclusive sugerido la posibilidad de dar continuidad a varias políticas del MAS. La catadura de la gestión de Mesa entre 2003 y 2005 hace sospechar que detrás de su reconocimiento de ciertos logros de Morales se esconde una agenda neoliberal remozada. Sin embargo, pudo en cierto momento ocupar el centro ideológico y recuperar votos del desconcierto masista, así como corporizar el descontento con el MAS. Dada la narrativa del estigma, a Mesa le resultó difícil moverse al centro por el riesgo de perder la votación conservadora que todavía lo tiene como segundo en la intención de voto. El efecto general de todo este contexto es que Mesa queda inclinado hacia la derecha del espectro ideológico.

La fragmentación de este bloque de derechas ha puesto de manifiesto el retorno de una lógica de **saqueo del Estado**. En un primer momento, como parte de un solo bloque, Añez y Camacho negociaron la distribución del Estado Central. Los intereses empresariales que habían aportado a Camacho vieron el momento de ser retribuidos por sus erogaciones y se les entregó la dirección de empresas del Estado. Una vez que Añez y

Camacho proyectan trayectorias separadas, entran en conflicto entre sí. Así es que sale a la luz el desfaldo que se estaba produciendo en la **Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel)**, donde el, en ese momento, nuevo gerente, Elio Montes, empezó a cargar gastos onerosos a la empresa: vuelos privados, hoteles (por sumas millonarias) e indemnizaciones cuantiosas a personal que trabajó brevemente en la empresa (Página siete, 12/02/20). Otro tanto se destapó -y está en curso al escribir este trabajo- con la **Empresa Boliviana de Aviación**.

La ventilación expedita de estos actos de saqueo del Estado obedece a que el grupo favorable a Añez tiene a los camachistas en la mira dada la competencia por el voto. Sin embargo, no han faltado también las acusaciones en contra del gabinete de la presidenta en lo referido a la designación de familiares en altos cargos del Estado. La hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue designada parte del cuerpo diplomático en Miami por cuestiones “humanitarias” (Los Tiempos, 25/12/19).

El voto conservador se encuentra en una encrucijada. Mientras en octubre de 2019 quedó clara cuál era la opción que estaba en competencia con el MAS -Carlos Mesa-, el empate virtual entre Mesa y Añez hace imposible definir cuál es correctamente el *voto útil* de la derecha. El escenario, no obstante, es volátil. Luis Fernando Camacho, que se rezaga día a día, podría recibir presiones para bajarse de la contienda, dejando su voto librado, posiblemente a favor de Añez, por ser ambos del oriente boliviano. Una cosa queda, de todas maneras, clara: la derecha retorna con fuerza electoral aunque sin un programa de gobierno para el país, pero sí la proyección de ocupación del aparato estatal. Si bien hay una parte del electorado en donde ha florecido una sensibilidad neoliberal, sigue siendo notable que los candidatos sólo pueden hablar de medidas neoliberales de modo eufemístico. La gran parte de la población boliviana, beneficiada por las medidas redistributivas del gobierno y que ideológicamente se sitúa dentro de coordenadas nacionalistas potencialmente reaccionaría rechazando candidatos abiertamente neoliberales.

Consideraciones finales

Dentro de lo que se llamó el *ciclo progresista en América Latina*, Bolivia era una de las experiencias más exitosas en un universo variopinto, con aportes valiosos así como imposturas flagrantes. Incluso la crisis del progresismo a nivel continental, que fue de la mano de una reemergencia conservadora, por un momento parecía no tocar a Bolivia. El manejo sensato de la economía al tiempo de dar cumplimiento a medidas de justicia social marcó un derrotero seguido de modo eficiente. Del mismo modo el cuidado, durante la mayor parte del *Proceso de cambio*, de los procesos de la democracia, proveyó legitimidad de modo constante. Ahí la fortaleza de una hegemonía en cierto momento atronadora. Pero la de Bolivia no fue una experiencia inmaculada: resabios atávicos pero también nuevas contradicciones fueron y son problemas que en el futuro deben ser atendidas de modos aun no pergeñados. Dentro de todo lo ocurrido queda claro que no hay sujeto histórico idílico, portador de una organización social post capitalista, sino que la producción de los actores sociales excede los buenos oficios e intenciones de los intelectuales o los dirigentes y en realidad vemos modalidades más o menos carnívoras de capitalismo. A Bolivia le fue bien ejercitando un capitalismo de Estado, pero justamente por lo mismo los tramos a inventar en el marco de proyectos más ambiciosos no son sencillos.

La reemergencia de la derecha no es un fenómeno boliviano, más bien se puede identificar una oleada común a los países del vecindario. No se trata sólo de las figuras rutilantes de la derecha más cruenta, como pueden ser Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados

Unidos. Se trata de la difusión de un sentido común que aborrece el *progresismo* y apuesta, ya no digamos a formas abstractas de liberalismo que se escuda en la meritocracia, sino a formas flagrantes de políticas anti derechos y de corte estamental. En Bolivia, algo de este sentido común ha hecho carne y sus operadores y líderes han sido hábiles para convertir un descontento social en fuerza -aunque no sabemos cuán coyuntural- de restauración conservadora conducida por una minoría efectiva.

Las elecciones planificadas para 2020 son cruciales para los derroteros políticos bolivianos. Se espera, en primera instancia, que pongan fin a un estado de incertidumbre en el que ha quedado el país después de la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. Incertidumbre que se produce en la imposibilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo de proclamar la legitimidad de las urnas, pero tampoco la de las calles. A la vez, las elecciones venideras dirimirán la correlación de fuerzas entre los distintos frentes, por ahora atorados en lo que puedan arrojar las encuestas. Se trata, en fin, de una elección que va a perfilar la *era post Evo*.

Referencias bibliográficas **Artículos y libros**

- Cordero Ponce, S. (2018). *La plurinacionalidad desde abajo. Autogobierno indígena en Bolivia y Ecuador*. La Paz: PNUD.
- Escobar de Pabón, S. et al. (2019). *Desigualdades y pobreza en Bolivia: una perspectiva multi-dimensional*. La Paz: CEDLA.
- García Linera, A. (2008). “Empate catastrófico y punto de bifurcación”, *Crítica y emancipación Revista latinoamericana de Ciencias Sociales*, Año 1, N° 1, junio. Buenos Aires: CLACSO.
- (2010). *La construcción del Estado*. Buenos Aires: IEC-CONADU
- (2015). *Socialismo comunitario: un horizonte de época*. La Paz: Vicepresidencia del Estado.
- (2017). *Geopolítica de la amazonía*. La Paz: Vicepresidencia del Estado.
- Irurozqui, M. (2019). *A bala, piedra y palo*. La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.
- Mayorga, F. y Rodríguez, B. (2016). *Urnas y democracia directa. Balance del referendo constitucional 2016*. La Paz: OEP.
- Miranda, B. (2012). *La mañana después de la guerra*. La Paz: El cuervo.
- Moldiz, H. (2020). *Golpe de Estado en Bolivia*. La Paz: Ocean sur.
- Molina Argandoña, W. et al. (2014). *Lejos del Estado, cerca de la nación. Ser boliviano en el Beni en tiempos del Estado Plurinacional*. Trinidad: PIEB.
- Paz Gonzales, E. (2015). “Discursos nacionalistas y horizontes de igualdad en el Estado boliviano contemporáneo”, en Castillo y Maldonado, *Desigualdades. Tolerancia, legitimación y conflicto en las sociedades latinoamericanas*. Santiago: RIL.
- (2016a). *El telar de las ideas de nación*. Tesis para optar al grado de doctor en ciencias sociales. Ciudad de México: El Colegio de México.
- (2016b). “Enunciación indígena versus ‘nacionalismo étnico’ en la construcción del Estado plurinacional boliviano”, *Revista Versión Estudios de comunicación y política*, N° 37. México: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco.
- (2017). “Intelectuales, discurso y proceso hegemónico”, *Pensamiento al Margen*, N° 6. España.
- (2018). “Jóvenes entre las dictaduras y el proceso de cambio. Modificaciones de la iniciación política en actores de clase media” en Suárez, H. J. (coord.) *¿Todo cambia? Reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia*. Ciudad de México: UNAM.
- Paz Rada, E. (2016). “Inclusión social en el contexto de la economía boliviana: transición del proyecto privatista neoliberal al proyecto nacionalista originario”, en Paz Rada, E. (coord.) *La dinámica de la inclusión social en Bolivia (2001-2012)*. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales.
- Peñaranda, R. (2014). *Control remoto. De cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente*. La Paz.
- Pereira, R. (2017). “Características y evolución de la estructura de la economía nacional en el periodo 2006-2014”, en Paz Arauco, V. (coord.) *Inclusión social en Bolivia: avances y desafíos (2006-2014)*. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales.
- Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (2018). *Movilidad socioeconómica y consumo en Bolivia*. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales.
- Schavelzon, S. (2012). *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia: etnografía de una Asamblea Constituyente*. La Paz: OEP.
- Stefanoni, P. (2019). “¿Qué pasa en Bolivia?”, *Nueva Sociedad edición digital*, octubre. Recuperado de <https://nuso.org/articulo/Bolivia-Evo-Morales-Carlos-Mesa-elecciones/> (18 de marzo de 2020).
- Spedding, A. (2020) *Masucos y vandálicos*. La Paz: Mama Huaco.

- Suárez, H. J. (2019). *La Paz en el torbellino del progreso*. La Paz: 3600 editores.
- Villanueva, A. (2019). *Las encuestas electorales y el principio de la incertidumbre*, Página Siete, 15 de septiembre. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/15/las-encuestas-electorales-el-principio-de-la-incertidumbre-230746.html>.
- Zavaleta, R. (1983). “Autodeterminación y democracia en Bolivia”, en Gonzáles Casanova, P., *No intervención, autodeterminación y democracia en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Zegada, M. T. y Komadina, J. (2014). *El espejo de la sociedad: Poder y representación en Bolivia*. La Paz: Plural.

Noticias en prensa

- El Deber* (2020, 15 de marzo). “Encuesta | Elecciones 2020: el MAS le saca un 15% de ventaja a Carlos Mesa”, recuperado el 19 de marzo de 2020 de https://eldeber.com.bo/169559_encuesta-elecciones-2020-el-mas-le-saca-un-15-de-ventaja-a-carlos-mesa
- Euronews* (2019, 15 de noviembre). “¿Son verdaderos los tuits insultantes con los indígenas de Jeanine Añez?”, recuperado el 18 de marzo de 2020 de <https://es.euronews.com/2019/11/15/bolivia-son-verdaderos-los-tuits-insultantes-con-los-indigenas-de-jeanine-anez>.
- La Prensa* (2020, 18 de enero). “Camacho: Ministerio de familia ayudará a combatir la violencia”, recuperado el 19 de marzo de 2020 de <http://www.laprensa.com.bo/nacional/20200118/camacho-ministerio-de-familia-ayudara-combatir-la-violencia>
- La Razón* (2019, 28 de diciembre) “Camacho revela que su padre ‘cerró’ pacto con policías y militares; Evo dice que eso comprueba el golpe”, recuperado el 19 de marzo de 2020 de http://www.la-razon.com/nacional/camacho-padre-policias-militares-video-evo-golpe-arreglo_o_3284071576.html
- La Razón* (2020, 13 de marzo). “En nueve encuestas, Arce y Añez suben, Mesa se estanca y Camacho cae”, recuperado el 19 de marzo de 2020 de http://www.la-razon.com/nacional/Analisis-nueve_encuestas-Bolivia-Luis_Arce-Jeanine_Anez-Carlos_Mesa-Luis_Camacho_o_3329667027.html.
- Página Siete* (2020, 12 de febrero). “Salida de Elio Montes de Entel devela presunta corrupción y pagos millonarios”, recuperado el 17 de marzo de 2020 de <https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/12/salida-de-elio-montes-de-entel-devela-presunta-corrupcion-pagos-millonarios-246401.html>.

Rafael Archondo
hparlante@hotmail.com
Universidad Iberoamericana
de Puebla
México

Recibido: 16/01/2019
Aprobado: 18/02/2020

¿Fue golpe?

Pulsando el debate sobre la supuesta fascistización de Bolivia

Resumen

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales, presidente de Bolivia durante los últimos 14 años, entregaba su carta de renuncia después de un largo período de protestas iniciado después de las elecciones generales del 20 de octubre, atravesadas por acusaciones de fraude. Dejaba a Bolivia sumida en un vacío de poder que tardó dos días en ser llenado con la conformación de un gobierno transitorio descrita por la prensa como un golpe de Estado a la democracia. ¿Fue un golpe? El presente artículo evalúa minuciosamente las dos argumentaciones, hace un seguimiento de los cambios de gobierno en Bolivia durante los últimos 87 años y cataloga los hechos ocurridos en 2019 desde una perspectiva comparada. El objetivo es tratar de entender si democracia boliviana está en agonía o restablecida y si las tendencias hacia la fascistización del país son una realidad o un mito.

Palabras clave

Fascistización, Bolivia, Evo Morales, Golpe de Estado.

Abstract

In November 10th, 2019, Evo Morales, Bolivian president for the last 14 years, resigned to power after a long period of protests launched after the general elections (October 20th), the target of many fraud accusations. Bolivia was left in a difficult situation of power vacuum, which was filled by a constitutional succession, described by the press as a coup against democracy. It was indeed a coup? Using theory and historical analysis, this article tries to understand what happened in Bolivia and if it is accurate to fear about Bolivian democracy's existence.

Keywords

Fascistization, Bolivia, Evo Morales, Coup D'état.

Introducción

Evo Morales fue presidente de Bolivia durante 13 años y diez meses. Su presidencia es la más larga de toda la historia nacional. Nunca nadie había gobernado el país a lo largo de tanto tiempo.

La estabilidad democrática boliviana no es obra de este hombre ni de sus seguidores. El país vive bajo el arbitrio de la Constitución desde octubre de 1982, cuando los militares entregaron la banda presidencial a Hernán Siles Zuazo, presidente constitucional electo en los comicios de 1980. Evo Morales fue el primer presidente en reivindicar su origen indígena y el primer jefe de Estado de profesión agricultor. Ambas características lo acercan todavía a un importante segmento de la población que había sido excluido de la vida pública hasta la Revolución Nacional de 1952, que implantó la reforma agraria y el voto universal.

Morales, de 60 años, fue candidato a la jefatura del Estado en 2002, 2005, 2009, 2014 y 2019. En tres elecciones (2005, 2009 y 2014) obtuvo la mayoría absoluta de los votos, por lo que resultó reelegido en el mando por dos veces consecutivas. En 2019 aspiraba a su tercera reelección, pero se vio obligado a renunciar a su cargo el 10 de noviembre. Desde entonces vivió como asilado político en México (tres semanas) y se desplazó a la Argentina, su actual sitio de residencia.

Los bolivianos irán a votar nuevamente este 2020. Morales ha decidido no presentarse como candidato y su partido lo ha sustituido por primera vez por otro aspirante, en gran medida, elegido por él desde Buenos Aires. Es la primera vez que el ex presidente no participa de unos comicios en un lapso de más de 20 años: si bien intentó ser candidato al Senado, pero su candidatura fue invalidada por no residir en Bolivia.

En su largo periodo de gobierno, Evo propició la puesta en vigor de una nueva Constitución, la cual, tras haber sido debatida en una Asamblea Constituyente especialmente designada por el voto ciudadano, fue ratificada por la población en el referéndum de 2009. Nunca una Constitución había sido sometida al veredicto popular directo.

En la Constitución, ahora vigente, quedó expresamente prohibida la reelección presidencial en más de una ocasión continua. El artículo 168°, cuya vigencia ha sido ratificada dos veces en las urnas, señala aún hoy lo siguiente: *El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua*. Como se dijo al inicio, Morales ha sido presidente durante casi 14 años.

Eso significa que ya **la postulación de Evo Morales en 2014 era claramente ilegal**. ¿Por qué se llevó adelante? La respuesta es que el Tribunal Constitucional la convalidó argumentando que en 2005, Morales había sido elegido bajo el imperio de la anterior Carta Magna y que las nuevas reglas empezaban a regir sólo desde 2009. De ese modo no se contaba su mandato anterior, a pesar de que la nueva Constitución obligaba a hacerlo de manera explícita. Como evidencia de lo aquí señalado rige la segunda disposición transitoria, en la que se señala aún hoy, que *los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones*. Dichas líneas fueron redactadas de manera expresa en el marco de un gran acuerdo nacional, por el cual la oposición política de entonces aceptaba acudir al referéndum constitucional bajo la promesa de que Evo Morales no sería candidato en 2014. Ese mismo año, Morales gozaba de tal legitimidad que muy pocos plantearon un reclamo. Él mismo reconoció, tiempo más tarde, que había *hecho trampa* al volver a postularse y el incidente al final fue minimizado como una travesura menor. Dicho acto demostró ser parte de una narrativa de largo alcance.

El 21 de febrero de 2016, a un año de haber ganado su tercera elección, Morales promovió un referéndum para cambiar la Constitución. La pregunta planteada al electorado fue

la siguiente:

¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?

Con ello y mediante una respuesta afirmativa, Morales hubiera accedido por última vez a ser candidato presidencial. Sin embargo, más del 50% de los consultados se inclinó por el No. El gobierno sufría un revés electoral tan apretado como inesperado.

En su Congreso Nacional, organizado en diciembre de 2016, el partido de gobierno tomó la determinación de buscar todas las vías legales para hacer posible la postulación de Morales en las elecciones de 2019. Una década en el poder no le eran suficientes. Sin embargo, las posibilidades parecían aún remotas. No solo se erigía en su camino la prohibición expresa de una Constitución que ellos mismos promovieron, sino un veredicto aún más claro en las urnas. Pese a ello, el **Movimiento al Socialismo (MAS)**, partido de Morales, prefería aventurarse a emprender un camino a todas luces defectuoso y contrario a la voluntad ciudadana, con tal de no ingresar en el debate sobre la sucesión del presidente: se había convertido en *Evo-dependiente*.

Así, a fines de 2017, a pedido de varios parlamentarios del oficialismo y cumpliendo las decisiones del Congreso Nacional del MAS, celebrado un año antes, el Tribunal Constitucional de Bolivia lanzó otra sentencia controversial: decidió que el artículo 168° de la Carta Magna debía quedar en suspenso. ¿La razón? Bolivia, país firmante en 1979, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, más conocida como el **Pacto de San José**, reconocía y reconoce el derecho continental a elegir y ser elegido. Por lo tanto, impedir la reelección de cualquier persona en un cargo sería una violación de tal derecho. Al ser parte de una convención internacional, entonces, a decir del Tribunal Constitucional boliviano en 2017, tendría preferencia sobre un artículo doméstico de la Constitución boliviana. Con ese fallo, en contra del criterio del poder constituyente, un grupo de jueces establecía en Bolivia la reelección indefinida para todos los cargos electivos.

En otras palabras, si la Constitución y el voto de los bolivianos atentan contra el derecho humano *a ser elegido*, entonces ambos se cancelan. De ese modo, bajo la figura jurídica de la *aplicación preferente*, Evo Morales pudo ser candidato nuevamente en 2019. Al gozar del control de todos los poderes, su postulación no tropezó con ningún obstáculo. El derecho a ser elegido, regulado y limitado en muchos países anti reeleccionistas de América Latina, como México, se impuso en Bolivia por encima del derecho a elegir, ejercido por el pueblo en febrero de 2016.

Cuando Morales fue inscrito como candidato, el Tribunal Supremo Electoral, cuyos integrantes fueron designados por la mayoría congresal del MAS, no plantearon objeción alguna. Las críticas constantes a su conducta fueron llevando a que tres vocales renuncien a sus funciones, ante lo cual la Asamblea Legislativa procedió de inmediato a designar a sus sustitutos. En 2018, el país se nutrió de protestas ciudadanas, que exigían respeto a la voluntad expresada en febrero de 2016. Todos los candidatos de la oposición levantaron la bandera del respeto a la voluntad popular y expresaron su deseo de participar en las elecciones para resistir la presencia de los candidatos inconstitucionales del MAS.

La peculiar aplicación en Bolivia de la cláusula del **Pacto de San José** sobre el derecho a ser elegido debería abrir camino, en lo sucesivo, de un dictamen claro de la Corte Interamericana, en el que se ratifique que este derecho tiene que ser regulado por las constituciones de cada país como ocurre en la mayoría de las cartas magnas del hemisferio

con contadas excepciones como las de Venezuela, Costa Rica u Honduras. Nadie en las Américas tiene el derecho irrestricto a ser elegido. En todos los casos hay limitaciones de edad, de cantidad de veces en el ejercicio de un cargo o de postulación por parte de una organización partidaria. Los sucesos ocurridos en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, que llevaron a la renuncia de Evo Morales, son ya un hito en la lucha civil contra la reelección indefinida en el Continente.

¿Golpe? Muchos latinoamericanos despertaron a la realidad boliviana cuando Morales presentó su renuncia el 10 de noviembre y aceptó subirse a un avión de la Fuerza Aérea de México para llegar a su destino como asilado político. En muchos medios de comunicación se dijo que el jefe de Estado de raíces indígenas había sido forzado a renunciar por las Fuerzas Armadas. El canciller anfitrión, Marcelo Ebrard, llegó a prometer que México no estaba dispuesto a reconocer a *un gobierno militar en Bolivia*.

Formalmente, la argumentación del gobierno mexicano sonaba impecable. Aún si había renunciado, Evo Morales continuaba siendo el presidente electo por decisión popular asumida en 2014. Su mandato feneció en enero de 2020. Si bien la sugerencia de las Fuerzas Armadas bolivianas de que Evo renunciara es un hecho registrado, lo extraño es que él la haya aceptado de inmediato, pero aquella podría quedar como mera anécdota signada por su deseo de autoconservación o su cobardía. Sabemos que Salvador Allende, por ejemplo, prefirió sumarse a la resistencia en Chile antes que someterse a un poder no constituyente.

Lo extraño en Bolivia es que, tras el despegue del avión militar mexicano de la pista de Chimoré, ni Ebrard ni nadie ha visto surgir allí un gobierno militar. Es más, el mismo general que le sugirió a Evo que renuncie fue destituido de inmediato por el nuevo gobierno transitorio. ¿Dónde está el “golpista”? , podría decirse. Con el paso de las horas, el supuesto “Golpe de Estado” en Bolivia ha tenido un curso, al menos, sorprendente.

La senadora Jeanine Añez, actual presidente, electa en una sesión de la Cámara Alta a la que no asistieron los representantes del partido de Morales, gobierna hoy sin que ninguna de las instituciones democráticas haya sido afectada o interrumpida en su funcionamiento. En menos de una semana, el parlamento boliviano aprobó por unanimidad una convocatoria a elecciones fijadas para 2020. La decisión fue tomada no solo con la aceptación de la bancada del MAS, el partido del ex presidente, sino además con un poder legislativo, cuyas presidencias siguen en manos de dicha sigla política. Se trata de un gran acuerdo nacional tácito en ausencia de Evo Morales. Este hecho no tuvo la misma notoriedad informativa si se la compara con la versión del *Golpe* y sin embargo resulta incluso más relevante.

Los militares, que en los primeros días de la transición se pusieron a las órdenes del nuevo gobierno, no solo se han replegado a sus cuarteles, sino que tienen nuevos comandantes. La policía, que se negó a reprimir las masivas protestas en contra de Morales, sigue siendo la guardiana del orden público. Los movimientos sindicales que en principio salieron a lamentar la renuncia de Evo, han firmado un acuerdo de pacificación con las nuevas autoridades. El ex presidente en el exilio voluntario ha enviado un mensaje navideño elogiando la resistencia al golpe de Estado. ¿Cuál? Ni siquiera su partido se ha colocado en ese rol. Evo Morales parece preso de un delirio cada vez que hace una declaración pública. El país le ha dado la espalda de una forma que hace sólo unos meses era inimaginable, y si bien a muchos les gustaría tenerlo como jefe de campaña, nadie realmente padece por su ausencia.

¿Qué pasó?

¿En serio puede hablarse de un Golpe de Estado en Bolivia? Sólo la falta de rigor y el alineamiento ideológico pueden echar a volar esa hipótesis.

Tras la renuncia de Morales, en Bolivia se presentó un vacío de poder, ocasionado deliberadamente por él y sus seguidores. No solo renunció el presidente, sino todos los potenciales sucesores en la línea constitucional establecida. El artículo 169° de la Constitución es muy claro al respecto:

En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

El 10 de noviembre, las tres personas citadas habían dejado sus funciones por instrucciones de Evo Morales. Dejaron su renuncia con la esperanza de que así, apelando a las emociones, movilizarían a sus partidarios y conseguirían regresar al poder en los hombros de las multitudes. Esa fue su intención evidente: motivar la angustia. Fracasaron.

A su llegada a México, Evo Morales dijo que su carta de renuncia debía ser considerada por el Parlamento, en el que tiene más de dos tercios de los escaños. El pedido fue escuchado varias semanas más tarde. Era la despedida final. Su objetivo desde México era que los congresistas rechacen la dimisión y le pidieran retornar. No sucedió. ¿Por qué? ¿hubo traición, temor o desdén?

Por eso, días después de comenzar su asilo político, declaró que estaba dispuesto a volver a Bolivia *en cualquier momento*. ¿Cómo se explica que sus senadores y sus diputados hayan optado por anular las elecciones del 20 de octubre, convocar a nuevos comicios sin que Morales sea habilitado para postularse como candidato a la Presidencia y que finalmente acepten su renuncia?, ¿qué acto de magia fue capaz de unir a todos los poderes del Estado en contra del presidente que más ha gobernado el país?

Esa es la parte de la ecuación que pocos latinoamericanos han querido o conseguido cerrar. ¿Cómo es posible que un Golpe de Estado no genere un *general golpista*? ¿Cómo es posible que un Golpe de Estado no cancele alguna institución democrática y, por el contrario, produzca una nueva convocatoria inmediata a elecciones gracias al voto de los supuestos *derrocados*?

La respuesta está en nuestro recuento previo. En 2019, Evo Morales violó la Constitución que él mismo impulsó al postularse como candidato por cuarta vez. Esa conducta, desapercibida por la opinión pública internacional, generó una ola de rechazo entre grandes segmentos de la población boliviana, que no solo votaron por Carlos Mesa, el candidato de la oposición, sino que, una vez realizada la elección, no dejaron de protestar ante las evidentes muestras de fraude electoral. Fueron 21 días ininterrumpidos de movilización pacífica.

Evo Morales es un asilado político en México y un refugiado en Argentina, que antes de partir de Bolivia fue favorecido por un escamoteo de la voluntad ciudadana como sólo se había visto en el país en 1950 o 1978. Por esa razón, fue él mismo quien tuvo que optar por pedir la anulación de las elecciones del 20 de octubre a fin de convocar a un nuevo proceso. Cuando dio ese paso el mismo 10 de noviembre por la madrugada, los movilizados ya sólo pedían su renuncia para pacificar el país, demanda asumida por las fuerzas armadas pero también por la **Central Obrera Boliviana (COB)**. Horas más tardes, Morales dejaba el país.

Una vez en México, el ex presidente afirmó que no hubo fraude (entonces ¿por qué pidió la anulación del proceso?). Cuando le recordaron que fue la misión de la OEA la que lo

evidenció, el expresidente dijo que la OEA era parte del *golpe* y que el equipo encargado de la auditoría no había siquiera entregado su informe final. Cuando éste salió a la luz y se probó la existencia de dos servidores ocultos, montados para alterar los resultados, Morales tuvo que cambiar de tema.

Pocos quieren recordar que la auditoría de las elecciones por parte de la OEA fue una idea de Morales y que fue con su gobierno que el organismo multilateral firmó un convenio calificado como *vinculante*. Hoy, los seguidores de Morales dicen que la OEA está al servicio de la *derecha golpista*. Omiten decir que fue Evo quien llevó a la OEA a Bolivia y quien cuando supo de los resultados preliminares de la auditoría, le pidió a los portavoces de Luis Almagro que por favor no la difundan *porque iban a incendiar el país*.

Otra cosa que muchos latinoamericanos no saben es que el gobierno de Evo Morales, debido a su duración, su holgada mayoría y la enorme cantidad de recursos de los que disfrutó en casi 14 años controlaba todas las instituciones nacionales. Debido a que su partido cuenta aún con dos tercios del Congreso, pudo preseleccionar a todos los operadores de Justicia, a todas las ex autoridades electorales y controlar el 90% de los medios de comunicación del país. Ese enorme aparato centralizado de control ha empezado a ser desmontado lentamente. Su capacidad de dominio sobre la sociedad y el Estado hizo posible el fraude electoral de 2019, hecho que ya no debería poder repetirse en 2020.

La controversia sobre el fraude se extendió hasta inicios de 2020 y continuaría hoy si el Coronavirus no hubiera concentrado toda la atención periodística mundial. En dos ocasiones, el **Centro de Investigación sobre Política y Economía (CEPR)**, por sus siglas en inglés) con sede en Washington divulgó reportes rechazando el hecho de que las elecciones bolivianas de 2019 hayan sido fraudulentas. El primer intento fue en diciembre y el segundo en febrero. La segunda vez, el estudio fue firmado por John Curiel y Jack Williams, investigadores de un observatorio del prestigioso MIT. La delegación permanente de México en la OEA destacó ambas investigaciones e intentó usarlas para refutar la auditoría de ese organismo, publicada en diciembre de 2019.

La comparación entre el trabajo de la OEA y el del CEPR es concluyente: el contraste entre recursos y datos juega de manera aplastante a favor del organismo multilateral. La OEA trabajó en Bolivia con plena colaboración de sus autoridades, durante más de un mes y con una treintena de especialistas. El informe de casi cien páginas contiene abundantes indicios de que existió dolo en el manejo de los resultados y que se montó una infraestructura técnica para alimentar la base de datos con información adulterada. Por su parte, el CEPR hace sólo un análisis probabilístico acerca de la posibilidad de que el último tramo del recuento haya cambiado o no la tendencia a organizar o cancelar una segunda vuelta entre los candidatos Morales y Mesa.

Por otra parte, las dudas sobre la credibilidad del CEPR son abrumadoras: sus principales ejecutivos son activistas de los procesos políticos de Venezuela y Bolivia y tiene entre sus colaboradores estables al ex canciller ecuatoriano Guillame Long, quien representó a su país durante el gobierno de Rafael Correa.

En contraste con las denuncias de la ex oposición al MAS, el fraude abarca un número aproximado de 34.000 votos: la cantidad que ayudaba a cancelar la segunda vuelta, en la que un bloque unido hubiera podido derrotar a Evo Morales. Quedan pocas dudas de que el candidato del MAS obtuvo una ventaja importante en 2019, pero insuficiente para evitar el balotaje. La operación organizada mediante dos servidores externos no autorizados maquilló el último tramo del conteo (5%) a fin de forzar una diferencia de diez puntos entre Morales y Mesa. Eso es lo que señala y demuestra el informe de la OEA.

El partido de Evo Morales no va a desaparecer. Sigue siendo, de hecho, una de las fuerzas políticas más fuertes del país. El inexistente “Golpe de Estado”, es decir, la formación de un gobierno transitorio, le ha permitido renovar su liderazgo.

Evo Morales no puede volver a ser candidato a la presidencia por mandato constitucional, ratificado por el voto el 21 de febrero de 2016. Ese es el gran cambio operado en Bolivia en noviembre de 2019 y ese, en los hechos, era el único gran problema del país en relación con el Estado de Derecho. Zanjado el asunto, todo vuelve a la normalidad. Como ya ha reconocido el ex presidente Lula de Brasil, el *pecado* de Evo fue sentirse imprescindible. Podría añadirse otro: haber engañado a la opinión pública internacional con la noticia de un “Golpe de Estado” con el único fin de transformarse en víctima y eludir lo que finalmente es: el beneficiario de unas elecciones sucias.

En pocos meses Bolivia volverá a las urnas y ahí sabremos cuán fuerte y saludable es el partido de Morales sin Morales.

Desde la teoría

¿Hubo Golpe? Hasta aquí solo hemos probado una cosa: Morales y su partido perdieron legitimidad al haber logrado oficializar el desconocimiento de la voluntad popular del 21 de febrero de 2016. Ese hecho desacreditó una gestión gubernamental relativamente exitosa y prolongada. Aunque existen esas y otras razones para pensar que Evo Morales no debía ser candidato en 2019, ello no demuestra la ausencia de un Golpe. Legitimado o no ante la población, su caída bien pudo haber sido un tropiezo para la continuidad democrática. Otras voces hablan incluso del inicio de una *fascistización* del país. Nadie debería quedar indiferente ante semejante hipótesis.

Recurramos a la **teoría clásica del Golpe de Estado**. El rumano Edward Luttwak (1969) y mucho antes, el italiano Curzio Malaparte (1937) son referencias obligadas. Si bien autores más modernos, como Carl Smith o Giorgio Agamben, hubiesen podido contribuir mejor a esta reflexión. La decisión teórica asumida consiste en partir de la definición clásica y parsimoniosa del siglo XX para luego conjugarla con la experiencia histórica boliviana.

¿Cuál podría ser dicha definición *clásica*? Dadas sus inobjectables ventajas, tomemos la de Luttwak (1969): *Golpe de estado consiste en una infiltración en un pequeño, pero decisivo segmento del aparato estatal, el cual es usado luego para desplazar al gobierno del control del resto del Estado*. El recorte es magistral: nos coloca ante un área precisa del análisis, ahorrándonos una serie de circunloquios relacionados con la democracia o la vigencia de la Constitución.

En efecto, un golpe de Estado no necesita de la participación de las *masas*. Es una operación circunscrita a la intimidad del aparato estatal. Se trata de una parte interna que acaba controlando al cuerpo. Dicha fracción *decisiva* puede ser el Ejército o la Policía, una parte de ella o ambas, u otro destacamento de élite de la burocracia con capacidad de fuego. Sin embargo, también podría ser el Congreso, el Poder Judicial o una parte de estos. La consecuencia clara de un Golpe de Estado es el derrocamiento del gobierno, es decir, su aislamiento y desplazamiento final del territorio del Estado.

También es posible que una parte del gobierno *golpee*. En ese caso, el segmento infiltrado es una parcela del Poder Ejecutivo. Esta variante hace algo confusas las derivaciones. Al tratarse de un área no solo del aparato estatal, sino del gubernamental, el Golpe puede dar lugar, como ha ocurrido con frecuencia en Bolivia, a una recomposición interna, que se asimile a la noción de continuidad. Quedémonos entonces con esta noción en dos pasos: infiltración y desplazamiento. Si una fracción de la institucionalidad general del Estado/gobierno produce un cambio claro en la composición del Poder Ejecutivo, estamos hablando de un Golpe.

¿Todo golpe de Estado es una falla de la democracia? Sin duda alguna. Cuando el gobierno es reemplazado mediante un hecho factual indisimulado, estamos hablando de

un factor antidemocrático o al menos a democrático que produce un giro en el sistema de toma de decisiones públicas. Dicho acto vulnera *de facto* el principio nodal de toda democracia: **la producción colectiva de la decisión pública**.

La Historia de Bolivia es rica en este tipo de episodios. Jean Pierre Lavaud (1998) es el sociólogo que mejor ha investigado el fenómeno de la inestabilidad política en el país. En su libro *El Embrollo Boliviano*, Lavaud nos habla de gobiernos que duran horas o días en medio de cuartelazos y contraofensivas. Su espacio de análisis abarca de 1952 a 1982. La hipótesis resulta fructífera para esta indagación: parte de la idea de que en Bolivia predominan las relaciones clientelares y que cada gobierno se asienta en una constelación flexible de diversas fuerzas, que se nutren de espacios de distribución de prebendas. La súbita desaparición, en noviembre de 2019, de grupos de resistencia para contrarrestar el supuesto *golpe de Estado* en Bolivia bien podría ser explicada usando los parámetros de Lavaud.

La Historia contemporánea de Bolivia registra una larga lista de golpes. La enumeración podría comenzar desde el instante en que los militares volvieron a ser gravitantes en la política moderna nacional, lo que equivale a remontarse a la **Guerra del Chaco** (1932-1936). El registro debe iniciarse entonces en 1934, año en el que en pleno conflicto bélico con el Paraguay, el ejército cerca a Daniel Salamanca en Villamontes y lo obliga a renunciar a favor de su vicepresidente. Desde entonces hasta ahora, se habrían producido 16 golpes de Estado. La cifra final depende justamente del esclarecimiento de la controversia en torno a lo ocurrido con Evo Morales en 2019.

Nos hemos atrevido aquí a clasificarlos todos a fin de terminar de dilucidar los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019. Consideramos a continuación tres categorías: golpe clásico, golpe táctico y golpe interno. Las denominaciones son propias de este autor y obedecen a la combinación entre la definición de Luttwak y nuestra revisión de la Historia de Bolivia.

Golpe clásico

Se podría calificar como golpe **clásico** a aquel que reúne todas las condiciones que lo hacen semejante a los operados en Chile (1973) o Argentina (1976). En ambos casos, un gobierno constitucional electo es *barrido* por una operación a cargo de las Fuerzas Armadas. El resultado es, como planteó Luttwak (1969), un cambio de gobierno. Una parte del aparato estatal, la decisiva por tener el monopolio de la fuerza pública, depone a las autoridades electas.

El nuevo gobierno es designado entonces por los militares. De ese modo asumen el mando los generales Augusto Pinochet Ugarte y Jorge Rafael Videla. En Bolivia, los ejemplos de este tipo de Golpe no son, sin embargo, los más frecuentes. La caída de gobiernos electos se dio en los casos de los derrocados José Luis Tejada Sorzano, Enrique Peñaranda y Luis Adolfo Siles Salinas. Los tres fueron despojados del poder por voluntad del ejército y de sus hombres fuertes: Germán Busch, Gualberto Villarroel y Alfredo Ovando Candia. Es muy difícil encontrar un contraste más fuerte que el que separa a un Pinochet de un Busch o a un Videla de un Villarroel. En tal sentido, podría decirse que los derrocamientos de gobiernos electos fueron instrumentados en Bolivia por generales nacionalistas y de izquierda.

El *golpe clásico* generalmente consolida *gobiernos militares duraderos*. Su justificación va acompañada por un manifiesto que alerta sobre los peligros que se habrían conjurado con la deposición del gobierno previo. En tal sentido, se alude a una serie de circunstancias necesarias que deben crearse antes de la vuelta a la normalidad constitucional.

Estos golpes han sido herramienta frecuente en la época de la Guerra Fría, sin embargo, como vemos, en Bolivia la tónica fue opuesta. Así, entre 1934 y 1982, consignamos **siete golpes clásicos**. A los mencionados, deben agregarse la sustitución de Busch (no se consideró al vicepresidente) y la entrega del poder a la Junta Militar presidida por Hugo Ballivián, decidida por Urriolagoitia, y los derrocamientos de Daniel Salamanca y Lidia Gueiler.

Golpe táctico

Aunque este tipo de Golpe se realiza siguiendo los mismos pasos formales que el anterior, su orientación es muy distinta. El nuevo gobierno militar se forma sólo para convocar a nuevas elecciones o para entregar el poder a quienes corresponde, de acuerdo con la Constitución.

Por lo tanto, si después del Golpe nace un gobierno provisional o transitorio, se habrá tratado con seguridad de uno **táctico**, debido a que los que llegan al poder carecen de una estrategia. Se trata solamente de un ajuste necesario o preventivo.

En Bolivia, un golpe que calza a la perfección con esta categoría es el del general David Padilla Arancibia, cuya primera decisión oficial fue convocar a elecciones para 1979. Tras el violento derrocamiento de Villarroel en 1946, el jurista Tomás Monje Molina organizó las elecciones del año siguiente. Su ascenso al poder también se produjo por el desplazamiento violento del gobierno electo, que concluyó en el asesinato del presidente. De manera un tanto audaz, puede decirse también que el reemplazo en la Presidencia de Torrelío por Vildoso correspondió de igual modo a un *golpe táctico*, dirigido a entregar el mando a los civiles en 1982. Por su orientación transitoria, los golpes tácticos se organizan en contra de gobiernos *de facto* que se rehúsan a restablecer las reglas democráticas.

En la Historia de Bolivia de los últimos 87 años se han producido cinco golpes tácticos. A los tres ya señalados, se deben sumar los derrocamientos de Daniel Salamanca en 1934 y de Paz Estenssoro en 1964.

Golpe interno

Nuestro tercer tipo de golpe de Estado es aquel que se organiza contra un gobierno no electo. En muchos casos se trata de una conjura interna dentro de las Fuerzas Armadas, en las que algún General suma los repudios de sus camaradas y provoca su destitución. También se puede dar en contra de un gobierno civil que no ha surgido exactamente de las urnas y tiene un mandato provisional. Dado que el gobierno derribado no cuenta con un aval constitucional o con la legitimidad popular, el trámite de evacuarlo del Palacio no implica generalmente un conflicto. Le llamamos *interno*, porque el movimiento que desplaza al gobierno se produce dentro de los marcos del autoritarismo y no busca una salida.

Ambas opciones aparecen claramente en la Historia de Bolivia. Militares que derrocan militares fueron Juan José Torres, Hugo Banzer, Juan Pereda Asbún y Celso Torrelío Villa. Ninguno de ellos dio un mero paso táctico, sino que aspiró a reemplazar al derribado. Todos ellos quisieron quedarse en el gobierno de forma indefinida. Luego están los militares que derribaron gobiernos civiles no electos por los ciudadanos. Es el caso de Alberto Natusch y de Luis García Meza. Como lo evidencia esta lista, *Golpe interno* hubo en Bolivia en un número de siete.

Esta revisión detallada de los cambios de gobierno en la Historia de Bolivia entre 1934 y 2019 nos deja en el tintero cinco episodios que no encajan en ninguna de las categorías explicadas. Se trata de la salida del gobierno, un año antes, de Hernán Siles Zuazo en 1985, y los derrocamientos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Evo Morales. ¿Qué tienen en común todos estos desplazamientos? La respuesta es que una vez definido el abandono del poder por parte del presidente en funciones, no se conforma un gobierno militar, como sucede en casi todos los casos estudiados, sino uno civil o incluso constitucional.

En este caso, el que podría ser el *segmento infiltrado*, si es que lo hay, cumple una función muy diferente, no es fuerza activa, sino todo lo contrario, pasiva, es decir, se repliega y por tanto, deja al gobierno indefenso, incluso por instrucciones del mismo. Así, otras fuerzas, ajenas al Estado, dirimen el conflicto y se produce una implosión.

El **ejemplo** más estudiado de este tipo de derrumbe es la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tras una movilización de varias semanas por parte de los sindicatos, juntas de vecinos y comunidades agrarias, el gobierno constitucional intentó imponer la fuerza con un saldo de 67 muertos y cientos de heridos. En ese momento, el ejército decidió replegarse, dejando al gobierno a merced de los movilizados. A raíz de esta situación de *colapso fáctico*, el presidente no tuvo otra opción que la huida y la renuncia. De inmediato, el Congreso leyó la carta y administró posesión al vicepresidente Carlos Mesa.

Veamos **otro ejemplo**. El 9 de abril de 1952, una coalición de policías y civiles salió a enfrentar al Ejército en las ciudades de La Paz y Oruro. El objetivo era impulsar un golpe de Estado, organizado por el entonces ministro del Interior, Antonio Seleme Vargas. Tras tres días de combates, las unidades militares se retiraron o entregaron armas.

Los vencedores tomaron el Palacio y asumió la presidencia el líder civil de la insurrección, Hernán Siles Zuazo. Tras posesionar a su gabinete, Siles envió un cable a Buenos Aires para que el candidato ganador de las elecciones de 1950 asumiera la Presidencia. En este caso particular, el *segmento infiltrado* era la policía boliviana, que estaba al mando del ministro del Interior. El Ejército resistió el embate y perdió. Aunque el *golpe* contó con respaldo movilizado de los civiles, es indudable de que, sin la fractura del aparato estatal, el paso no hubiera sido posible. Tras el desplazamiento del presidente Hugo Ballivián, se inició el camino de regreso a la Constitución, la cual, sin embargo, debió esperar cuatro años más hasta la convocatoria de nuevas elecciones en 1956. El propósito original de las acciones era efectivamente *golpear* al gobierno, sin embargo, las acciones salieron pronto de control y se destapó un levantamiento espontáneo.

Analicemos un **tercer ejemplo**. En 2005, el presidente Carlos Mesa tomó la decisión de renunciar. Se produjo entonces en el país un profundo debate acerca de quién debía reemplazarlo. Las presiones sociales del MAS en las calles y carreteras obligaron a que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados renuncien a esa pretensión. Ello permitió que asumiera el cargo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, cuyo breve gobierno tuvo a cargo organizar las próximas elecciones de fin de año. ¿Fue golpe? La clasificación se tensa al máximo. Mesa renuncia porque no está dispuesto a imponer por la fuerza sus ideas y proyectos. Carece además de una mayoría parlamentaria, aunque ha vencido en el referéndum sobre el gas. Estamos otra vez ante un vacío de poder. La fuerza que dirige la salida está en la movilización social que no acepta las dos sucesiones legales que siguen, sino sólo la tercera. Hay desplazamiento, es por la fuerza y los uniformados asumen un papel pasivo. Nadie dijo nunca que Rodríguez Veltzé hubiera llegado a la presidencia mediante un golpe, sin embargo, la necesidad de clasificar todas las acciones estatales de cambio de gobierno nos ha llevado a pensar en ello para luego descartarlo.

Un rasgo común en este tipo de acciones es la **renuncia del derrocado**. Ello allana el camino para quienes se encuentran en la línea de sucesión directa. Dado que la democracia goza de un esquema claro de relevos en casos de emergencia, todas las sucesiones constitucionales aparecen como secuencias legales y legítimas. Dado que todo se produce sin una gran resistencia e incluso bajo el beneplácito de la mayoría de los actores políticos, ha sido prácticamente imposible considerar a los gobiernos resultantes como regímenes *de facto*.

Sin lugar a dudas, la caída de Evo Morales guarda más similitud con los derrocamientos de Hugo Ballivián, Sánchez de Lozada o Mesa que con los incontrovertidos golpes de estado clásicos, tácticos o internos, que ha vivido Bolivia. Esta reflexión nos lleva a imaginar una nueva clasificación que lejos de las nociones de golpe o de mera sucesión constitucional, nos ayude a entender mejor lo sucedido en el país entre octubre y noviembre de 2019.

Los sucesos de 2019

Las elecciones generales de octubre de 2019 se realizaron dentro de los marcos de la legalidad. Aunque la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, el binomio del MAS, era inconstitucional, los pasos dados para su habilitación se habían ceñido a la formalidad procedimental. Lo que encontramos acá es un estado de ilegitimidad, más que de ilegalidad plena. Gruesos sectores de la población boliviana repudiaban públicamente el desconocimiento formal del voto ejercido en 2016. Las movilizaciones en defensa del voto empezaron en diciembre de 2017, cuando el **Tribunal Constitucional** dio luz verde a la postulación de Morales, y alcanzaron su cénit en octubre de 2019.

El domingo 20 de octubre por la noche, el conteo rápido en Bolivia fue interrumpido súbitamente cuando ya había registrado el 82% de los votos. En su último informe de la jornada, el **Tribunal Supremo Electoral (TSE)** había vislumbrado ya la realización de una segunda vuelta, porque la diferencia entre el MAS y **Comunidad Ciudadana (CC)** de Carlos Mesa era de siete puntos, y no de diez.

Al día siguiente, el presidente se proclamó ganador en primera vuelta aunque no había resultados finales. El conteo rápido siguió paralizado. La misión de observación electoral de la OEA planteó de inmediato su reclamo por el corte. Aquella noche los vocales del TSE, con la única excepción de Antonio Costas, instruyeron a la empresa encargada del conteo rápido que lo interrumpieran. No había una sola razón para hacerlo. A fin de garantizar la interrupción, el TSE dispuso un corte de electricidad y provisión de internet a la empresa encargada.

Cuando el conteo se reanudó 22 horas más tarde, los nuevos resultados cancelaron la segunda vuelta. El TSE entregó entonces el acta final consolidando la victoria del MAS en primera vuelta. Casi dos meses más tarde, la auditoría electoral de la OEA encargada por el gobierno de Morales detectaría el funcionamiento de dos servidores no autorizados, con capacidad para ingresar datos al cómputo oficial. También se descubriría que todos los depurados del padrón electoral se mantuvieron dentro de las listas vigentes. Finalmente, una revisión de una muestra de actas por parte de los 33 investigadores de la OEA reveló numerosas irregularidades que dieron lugar a no tener certeza sobre los resultados.

La ola de protestas en todas las ciudades del país estaba activada. Desde la noche del 20 de octubre hasta el 10 de noviembre, Bolivia quedó paralizada. Los bloqueos de los vecinos fueron asfixiando las labores cotidianas. La consigna **Nadie se rinde, nadie se cansa** se escuchó de manera constante. Los cacerolazos fueron el sonido familiar de todas las noches.

Estamos hablando de un fenómeno de masas de corte principalmente juvenil, urbano y femenino: la Policía comenzó a sentir cansancio, los manifestantes intentaron controlar todo brote de racismo, aunque no siempre fue posible. Los principales movilizados eran personas de la llamada clase media, a quienes se fueron sumando sectores sociales desplazados por el gobierno del MAS, como los cocaleros de Los Yungas o los sectores cívicos de Potosí. Hubo áreas de las capitales donde el respaldo a las protestas fue prácticamente unánime. El 8 de noviembre se produjo un motín nacional de la Policía. Los efectivos se encerraron en sus cuarteles, agitaron banderas y respaldaron las protestas ciudadanas. La gente salió a resguardar las instalaciones policiales. Era claro que el gobierno ya no era capaz de contener el enojo de las calles.

En ese contexto, el gobierno aguardó la auditoría de la OEA. En la noche del 9 de noviembre, Evo Morales recibió la información desde Washington de que ésta le sería totalmente desfavorable. Insistió varias veces en hablar con Luis Almagro en persona. El Secretario General estaba en Barbados y descansaba en su hotel. El presidente de Bolivia exigió que la OEA no difundiera su informe preliminar, porque, decía, *va a incendiar* el país. Los funcionarios interamericanos que le respondieron las llamadas le aclararon que no podían hacer nada. Al final, el reporte salió a la luz aquel domingo muy temprano. Entonces Morales convocó a una conferencia de prensa en la base aérea de El Alto. Allí anunció su decisión convocar a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Con ello esperaba desarmar las protestas. De inmediato tomó un vuelo al Chapare, su zona de mayor irradiación, la cuna del MAS. Una vez en el aeropuerto de Chimoré percibió que los militares ya no respondían exactamente a sus órdenes. En vez de disponer del avión presidencial en el aeropuerto civil, lo colocaron en la zona militar. Morales se inquietó. Percibía desde la ventanilla cómo sus seguidores, que lo esperaban, se dirigían hacia él en actitud protectora. Los rumores se esparcieron en tierra fértil. Según su propio testimonio, se enteró de que ofrecían dinero por su captura.

En ese momento, junto a sus más cercanos colaboradores, evaluó las reacciones a su propuesta de anular las elecciones y convocar a otras. Todas eran desfavorables. No solo eso: el comandante de las Fuerzas Armadas le pidió su renuncia y también lo hizo la Central Obrera Boliviana. La intervención del general Williams Kalimán Romero fue cautelosa pero clara. Haciendo uso de sus prerrogativas, sugirió la dimisión a fin de resguardar la paz. A partir de ese momento, Evo Morales invirtió todas sus horas en la obtención de un asilo político. El hombre que coordinaba los contactos diplomáticos era el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández. Se hablaba del Paraguay, pero luego, con más insistencia, de México.

Desde el Chapare, rodeado de dirigentes sindicales del campo, Morales anunció su decisión de renunciar a su cargo. Dijo que lo hacía para evitar que se siguiera agrediendo a los militantes del MAS. Aludió al secuestro de familiares y quema de viviendas. Entre tanto, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaba en Lima. Esperaba la autorización para sobrevolar espacio aéreo boliviano.

Las renuncias del vicepresidente, de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados llegaban en cascada. Los manifestantes que salían a celebrar la caída de Evo, advertían que ya no existían barreras de seguridad que los retuvieran, pero tampoco que los defendieran. Era la implosión del gobierno.

Rápidamente el júbilo se apagó. Los sectores sociales del MAS salieron en estampida a rechazar el desenlace de los acontecimientos. Hasta entonces habían permanecido en silencio. La sociedad boliviana se mantuvo atrincherada a la espera de una resolución.

Es el momento de los **mediadores**: el enviado de Naciones Unidas, los representantes de la Iglesia y la Unión Europea y los embajadores de España y Brasil conformaron un

grupo de tareas. Se movían con pasos austeros por un escenario de mutuas desconfianzas. Según Walter Mur, periodista que acompañó todo el proceso, hubo al menos 30 reuniones entre la inminente renuncia de Evo y la conformación del nuevo gobierno. En representación de los “derrocados” asistieron **varios ministros**: el de **Justicia**, Héctor Arce, el de **Defensa**, Javier Zavaleta, y el de **Gobierno**, Carlos Romero. Luego aparecieron la diputada Susana Rivero, la ex ministra Teresa Morales y la senadora Adriana Salvatierra. Otro ministro muy activo en esos días fue Manuel Canelas de la cartera de Informaciones. El principio la posición del MAS fue negociar que Salvatierra encabezara un gobierno de transición. Luego sólo exigieron la salida segura e inmediata de Evo Morales del país.

Para que ello sucediera, se recurrió a múltiples contactos dentro de las Fuerzas Armadas. El comandante más colaborativo fue el general Jorge Terceros, de la Fuerza Aérea, de quien dependía la logística del nuevo asilado. Evo lo acusaría después de ser *el más golpista*. Lo cierto es que, a pesar de la inexistencia de un gobierno en funciones, las autoridades militares bolivianas autorizaron el ingreso del avión mexicano. En la espera del aterrizaje, Evo recuerda haber pensado en algún momento en seguir gobernando desde allí, incluso de internarse en el monte y resistir. Con su salida del país y su llegada a México después de algunos percances por la falta de autorización de sobrevuelo en el Perú, la transición estaba allanada.

Para entonces, los mediadores gestionaban una salida con la oposición. Estaba claro que nadie del MAS querría hacerse cargo del gobierno. Habían transcurrido ya 24 horas sin que surgiera un gobierno en Bolivia. Se afirmaba que el abogado que vislumbró un curso legal a la emergencia fue Luis Vásquez Villamor, ex alcalde de la ciudad de El Alto y ex senador. Tras revisar algunas sentencias constitucionales, habría encontrado una en la que se convalidaba la ascensión a la Presidencia de Rodríguez Veltzé. En ella se sostiene que, ante la ausencia del presidente, se procede de manera automática a efectuar la sucesión constitucional sin necesidad de ningún trámite o votación congresal. Revisadas las nóminas, quedaba claro que la salida estaba en la directiva del Senado. De pronto salió el nombre de Jeanine Añez, segunda vicepresidenta de la Cámara Alta. Ella se encontraba en el Beni, en la región amazónica del país.

El grupo de mediadores se contactó con ella. Entre tanto, en las reuniones también participaban los representantes de los partidos que compitieron en las elecciones y los portavoces de los comités cívicos y del llamado **Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)**, dirigido por los ex Defensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena. Desde ese escenario se realizó la consulta a Añez. Se le preguntó si estaba dispuesta a presidir un gobierno de transición.

Jeanine Añez es militante del **Movimiento Demócrata Social**, partido encabezado por el gobernador cruceño. Su nombre quedaba en la línea de la sucesión constitucional. El 12 de noviembre ella ya estaba en La Paz organizando su gobierno. Jamás pensó que algo así podría suceder.

El nuevo gobierno se estableció a una velocidad inesperada. De inmediato las Fuerzas Armadas y la Policía se pusieron a sus órdenes. Tras asegurar el control del orden interno, lo cual implicó más de 30 muertos en dos choques que están siendo investigados por la OEA, Añez cambió a todos los comandantes. El hecho llama la atención: ¿Por qué los supuestos autores materiales del golpe terminaron siendo alejados de sus mandos tras la formación del nuevo gobierno? Queda claro que la subordinación de los militares al poder civil no había cesado.

Lo que sí es cierto es que Fernando López Julio, ministro de Defensa del nuevo gobierno, fue sugerido por los comandantes antes de su partida. Del mismo modo, el nuevo

ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, fue propuesto por el **Movimiento Cívico Cruceño**, de especial protagonismo en la crisis. Lo mismo se confirmó sobre el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, una sugerencia de sectores indígenas que se aproximaron a Añez. Lo que detectamos de todos los trascendidos, es que el gobierno de transición se fue montando a partir de una vasta alianza de los segmentos sociales y políticos adversos a Evo Morales. Sin embargo, la principal fuerza dentro del Ejecutivo era el partido de la presidenta. Su gabinete está constituido por ex parlamentarios de esa corriente.

¿Cuál fue la reacción del MAS ante estos acontecimientos? Denunciar el golpe de Estado y esperar. Reunidas las Cámaras con quórum, procedieron a elegir a sus directivos. Tras las renunciaciones de sus presidentes, la bancada del MAS, que suma dos tercios, los reemplazó por Eva Copa en el Senado y Sergio Choque en Diputados. La decisión fue tomada en contra de algunos parlamentarios muy cercanos a Evo Morales, como la renunciante Adriana Salvatierra.

De pronto empezó a suceder lo inesperado: el cuerpo congresal del MAS se independizó del ex presidente y empezó a tomar sus propias decisiones. Lo hizo en coordinación con el nuevo oficialismo. De pronto, asambleístas que durante muchos años habían sido marginados de las decisiones, recuperaron poder y relevancia. En 14 años de gobierno, pero sobre todo desde que en 2009 el MAS sumaba los votos suficientes para controlar todo el aparato estatal, los representantes electos en el poder legislativo se transformaron en meras correas de transmisión del Palacio de Gobierno. Frente a un gobierno débil como el de Añez, esa perspectiva cambió. En un tiempo récord, se convocó a nuevas elecciones y se eligió un nuevo TSE. La fotografía de Añez y Copa, exhibiendo la ley aprobada, ilustra el fin de aquel año complicado. El país parecía entrar en las vías de la reconciliación.

Este *racconto* no puede detenerse sin enunciar **dos elementos perturbadores**, primero, la **candidatura de Jeanine Añez** a la Presidencia y el **arresto o persecución** de varias ex autoridades del gobierno de Morales. El primer hecho vuelve a poner a Bolivia ante la figura tan criticada del *presidente-candidato*, asunto que parecía exclusivo de Evo Morales y que antes de él era una práctica inexistente, con excepciones halladas en un muy adentrado siglo XX. El segundo factor ha llevado a pensar que el MAS está siendo reprimido y que podría competir electoralmente bajo un contexto adverso. Sin embargo, hasta no comprender el proceso complejo de la nueva elección, es aún muy pronto para expresar un sentido determinado.

Conclusiones

Al final de este largo recorrido histórico, esperamos haber demostrado que en 2019 no se produjo ningún golpe de Estado en Bolivia. De los 21 cambios irregulares de gobierno sucedidos entre 1934 y 2019, es decir, de las 21 formaciones de nuevos gobiernos, producidas sin mediación electoral, 17 se dieron por golpe de Estado.

En cambio, la de 2019, así como las de 1952, 2003 y 2005, no guardan similitud con las otras. Los contrastes son muy visibles. Durante los cuatro cambios señalados la iniciativa de ruptura partió de la sociedad. La de 1952 fue calificada como una insurrección popular, que abrió las puertas a la Revolución Nacional. La de 2003 recibió el apelativo de la *Guerra del Gas*. En ambos casos, los presidentes depuestos tuvieron que huir de sus funciones por dos razones básicas, el repudio movilizativo de una parte importante de la población y la incompetencia de las fuerzas armadas para contenerlos.

Algo casi idéntico sucedió en 2019, cuando una movilización de 21 días derivó en un motín policial, orientado a no ejercer la represión, y en una exhortación de los militares a que el presidente renuncie. En 2005, fue la acción sindical organizada la que empujó a las renunciaciones de Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, presidentes de ambas cámaras a

la pretensión de suceder al presidente Carlos Mesa. La debilidad del jefe de estado partió de su decisión de no ordenar la represión violenta de las protestas.

¿Por qué no podemos hablar de golpe? Porque no existió ninguna infiltración de algún segmento del aparato estatal a fin de desplazar al gobierno del control estatal. El gobierno de Evo Morales, al igual que el de Sánchez de Lozada, Mesa o Ballivián, fue desplazado por las movilizaciones callejeras, ante las cuales los militares decidieron izar una bandera blanca.

¿Hubo actividad conspirativa? Sin duda llenar el vacío de poder dejado por presidentes que dimiten implica un grado de coordinación elemental. Los gobiernos de Siles Zuazo (4 días), de Mesa (un año y 8 meses), Rodríguez Veltzé (7 meses) y el de Añez (del 12 de noviembre de 2019 hasta ahora) se formaron para llenar el vacío de poder forjado por la dinámica de los hechos. Todos ellos fueron organizados para construir un puente entre el pasado inmediato y el presente esperado. Sus respectivos derrocados no ofrecieron resistencia alguna y por ello, las masas que los instalaron se dispusieron de inmediato a construir un nuevo orden.

¿Las cuatro fueron sublevaciones? Tampoco corresponde la etiqueta. Si bien sus resortes operativos dependieron de la movilización social callejera, no fue ésta la que dictó los pasos a seguir. Las masas en este caso dirimen, pero no deciden. De hecho, lo que sigue es un *encausamiento institucional de deriva en nuevas elecciones* (Rodríguez Veltzé y Añez) o en la formación de un gobierno acorde con el temperamento social y las reglas básicas de la democracia (Mesa y Siles).

Conviene fusionar estas conclusiones con los señalamientos más recientes meditados dentro del MAS, ahora en la oposición. En su último libro, el ex ministro Hugo Moldiz Mercado (2020) afirma que tras el llamado *golpe de Estado*, que él reafirma sin pruebas, no hubo la resistencia social esperable. **¿Por qué tanta pasividad?** El autor sostiene que en el tiempo en que Evo Morales fue presidente, se abandonó el objetivo de acabar con el capitalismo, se redujo la ambición a sólo trascender el neoliberalismo, pero sobre todo se restringió el funcionamiento colectivo y partidario a la meta de ganar elecciones. Según Moldiz, al mismo tiempo, el protagonismo de las transformaciones fue asumido por la burocracia estatal y ya no por los actores inaugurales del cambio, los campesinos, los obreros y las capas medias empobrecidas. El ex ministro habla del desplazamiento del llamado **Bloque Social Revolucionario** por los funcionarios del Estado, casi todos provenientes de la clase media.

De acuerdo con ese esquema de interpretación, el *golpe* pudo darse porque no hubo *pueblo* que se le ponga al frente. A ello sólo cabe añadir que no hizo falta un golpe, porque fue Evo Morales quien decidió apartarse de escena, generando un vacío de poder, que él consideró la mejor plataforma para imponer su retorno inmediato al mando del país. Dado que el vacío fue llenado burocráticamente, convalidando la teoría de Moldiz, cabe pensar que los funcionarios tanto del MAS como de la entonces oposición entendieron que se abría la posibilidad de anteponer sus intereses concretos. Así, despojados físicamente del presidente, optaron convenientemente por recuperar el control de la administración, antes retaceada por los sindicatos y las comunidades indígenas, convertidas en 14 años de manejo prebendal, en una amorfa clientela electoral.

Concretado este análisis en todas sus fases, cabe concluir señalando que la pretendida *fascistización* de Bolivia no pasa de ser un eslogan adecuado para ciertas narrativas que intentan resucitar los discursos de la Guerra Fría. La movilización social que obligó a Evo Morales a salir del país no fue un movimiento fascista. Su premisa fue siempre la defensa de la voluntad popular y su logro, la vigencia plena de la Constitución. Su horizonte inmediato era la convocatoria a nuevas elecciones, y su credo, la inconveniencia de la reelección indefinida.

Referencias bibliográficas

- Estado Plurinacional de Bolivia (2009). *Constitución Política del Estado*.
- Laserna, R. (2019). *No fue Golpe de Estado*, blog Vientos Nuevos. Recuperado de <https://laserna.wordpress.com/2019/12/01/no-fue-golpe-de-estado/?fbclid=IwAR3PUa3glcorwjZtumAsrtiAwWfYweaVO3gdXSkayBhyxx89oQzpbwBd98>.
- Lavaud, J. P. (1998). *El Embrollo boliviano, Turbulencias sociales y Desplazamientos políticos (1952-1982)*. La Paz: Instituto Francés de Estudios Sociales.
- Luttwak, E. (1968). *Coup d'État, a practical Handbook*. Nueva York: Alfred Knopf.
- Malaparte, C. (1937). *Coup d'État, Technique of Revolution*. Morris productions.
- Morales, E. (2020) 15 de marzo, "Dos Llamadas nos salvaron la Vida", Jorge Delgado y Sergio de la Zerda, Buenos Aires, Argentina (originalmente publicada en La Razón). Recuperado de <https://hurgandoelavispero1.wordpress.com/2020/03/16/evo-dos-llamadas-nos-salvaron-la-vida-por-jorge-delgado-sergio-de-la-zerda-entrevista-exclusiva/>
- Moldiz Mercado, H. (2020). *Golpe de Estado en Bolivia, la Soledad de Evo Morales*. Cuba: Ocean Sur.

Yuri F. Tórrez
yuritorrez@yahoo.es
Universidad Mayor de San Simón

Emma Lazcano
emma.lazcano@gmail.com
Consultora independiente

Bolivia

Recibido: 07/02/2019
Aprobado: 03/03/2020

Evo, no estás solo

El populismo del evismo en Bolivia

Resumen El presente ensayo estriba en estudiar el despliegue político y el repertorio discursivo del *evismo* -término que alude al liderazgo de Evo Morales- como sujeto sociopolítico populista desde su emergencia como movimiento social, a fines de la década de los años ochenta, marcado por una acción de resistencia a las políticas neoliberales, luego su incursión en el campo electoral, entre 1987 y 1995, la consolidación del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político para la soberanía de los pueblos (IPSP) como movimiento político (1995-2006), el gobierno de movimientos sociales (2006-2019) y la réplica al golpe de Estado (2019-2020).

Palabras clave Evo Morales, Bolivia, Populismo, Movimientos Sociales, Organizaciones Sociales, Estado.

Abstrac This essay is to study the political deployment and the discursive repertoire of *evism* -a term that refers to the leadership of Evo Morales- as a populist socio/political subject since its emergence as a social movement, in the late 1980s, marked by an action of resistance to neoliberal policies, then its incursion into the electoral field, between 1987 and 1995, the consolidation of the Movement to Socialism-Political Instrument for the Sovereignty of Peoples (IPSP) as a political movement (1995-2006), the government of social movements (2006-2019) and the rebuttal to the coup (2019-2020).

Keywords Evo Morales, Bolivia, Populism, Social Movements, Social Organization, State.

Introducción

El debate académico/intelectual en torno al populismo en América Latina está plagado de vericuetos reflexivos sobre el liderazgo como un factor decisivo para entender el decurso de los proyectos políticos emancipadores. La nueva presencia de gobiernos progresistas (denominado *el giro a la izquierda*) en el tablero político latinoamericano, a principios del siglo XXI, resituó esa vieja disputa sobre el papel que cumplen los liderazgos para los procesos de transformación política. Efectivamente, la impronta de figuras como Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández (Argentina) y Evo Morales (Bolivia) reflataron aquellas discusiones de los 60 en torno a esos mecanismos de mediación política que establece el líder con el *pueblo* para el trazado de horizontes políticos emancipadores y, por lo tanto, **populistas**. El presente ensayo estriba en estudiar el despliegue político y el repertorio discursivo del *evismo* -término que alude al liderazgo de Evo Morales- como sujeto sociopolítico populista, su emergencia como movimiento social a fines de la década de los 80 (marcada por una resistencia a las políticas neoliberales), su incursión en el campo electoral (entre 1987 y 1995), la consolidación del **Movimiento Al Socialismo/Instrumento Político para la soberanía de los pueblos (IPSP)** como movimiento político (1995-2006), el gobierno de movimientos sociales (2006-2019) y la réplica al golpe de Estado (2019-2020).

A diferencia de los populismos de las anteriores décadas, la emergencia de estos nuevos populismos se da en un contexto marcado por una larga noche neoliberal, afincada en sus políticas de corte estructural y condenando a los países latinoamericanos a una crisis social. En lo político, la crisis de representatividad de las estructuras partidarias, dicho al pasar, justificaron el orden neoliberal que desembocó en una especie de crisis de legitimidad de la propia democracia. Quizás aquí se anudan esos factores estructurales posibilitando la emergencia de un discurso populista enunciado, sobre todo, por sus líderes.

Estos recorridos de los líderes populistas hacia el poder fueron parte del engranaje de los movimientos políticos devenidos en estructuras partidarias. Esa cualidad institucional posibilitó a esos movimientos transitar por los senderos de la competencia electoral. En ese contexto, los líderes condensan expectativas colectivas y enarbolan discursivamente las banderas de la transformación social.

A este tipo de partidos políticos populistas, Alain Touraine (1989: 178) denominaría a la vieja usanza como *partidos nacional-populares*, porque enfatiza el poder central del líder en su capacidad de integrar los diferentes temas en el proyecto político. En su momento, el sociólogo francés destacó la diferenciación de los partidos *nacional-popular* en América Latina (afincados en la figura del líder, expresión de la voluntad política y democrática del *pueblo*) con los partidos de cuño comunista europeos, que expresan una institucionalidad orgánica interna más sólida.

La cuestión del liderazgo político, factor decisivo en los proyectos de emancipación y de la propia democracia, supuso miradas marcadas por un desprecio de parte de las élites intelectuales conservadoras en América Latina. Efectivamente, la cuestión del caudillo fue la fuente permanente de disquisiciones, para decantar en sentencias ilustradas apuntadas a que el *pueblo incivilizado* se deja envilecer por los líderes populistas. Ciertamente, la idea del **caudillismo** recurrió al concepto del *líder carismático* de Max Weber (1964) asociado a un tipo de dominación que, si bien va más allá de las virtudes personales del líder, gracias a las cuales logra esa empatía movilizadora que le permite conducir inapelablemente a las masas. Se advierte en esta disquisición weberiana conceptual, adoptada por las élites intelectuales conservadoras latinoamericanas, que las *masas* sucumben a las maniobras del líder. Obviamente, esa mirada recurrente tenía un

propósito político: menoscabar el potencial emancipador y populista de los proyectos políticos de raigambre *nacional-popular*.

Desde luego, esas ideas tejidas en torno al papel del caudillo seductor para encandilar a la plebe, masas o pueblo, soslayan procesos de mediación que operan en la comunicación establecidas entre el líder y el pueblo. Innegablemente, esa voluntad colectiva se teje, como dice Chantal Mouffe, *a partir de demandas heterogéneas, se necesita una figura que puede representar su unidad y no creo que no puede haber un momento populista sin un liderazgo, eso es evidente* (Mouffe y Errejón 2015: 113). A partir de estas consideraciones se puede esbozar una idea sobre el **populismo carismático**: según Iñigo Errejón (Mouffe y Errejón 2015)

hay que introducir esa discusión de por qué el liderazgo no es una relación de suplantación, sino que es una relación de representación, porque es verdad que el líder expresa, pero para seguir expresando una voluntad colectiva que también sirve como catalizador tiene que incorporar parte de las razones de los representados, y si deja de incorporar, deja de ser, deja de liderar, o sea que siempre es más una relación de representación (p.117).

O como diría Ernesto Laclau (1978) las voluntades políticas tienen esa vocación emancipatoria y el líder (en este caso específico, el líder carismático populista) encarna esa voluntad emancipatoria. No son las masas obnubiladas y manipuladas por el líder, sino, a la inversa: el líder recibe un mandato emergente de la voluntad colectiva.

Esa energía de la voluntad colectiva es una construcción social permanente y está marcada por la disputa política y el antagonismo en un momento conflictivo. Entra en juego, como diría Mouffe, *un doble movimiento, del representado al representante y del representante al representado* (Mouffe y Errejón 2015: 117). Este doble movimiento en los procesos de representación está en el sendero de pensar a la democracia, pero en un sentido diferente a la democracia representativa liberal. Es decir, en una **democracia radical**. Aquí la articulación del líder carismático populista con el *pueblo* produce tensiones y la cuestión precisamente radica en zanjar esas tensiones, ya que allí reposa el potencial político populista. Este recorrido teórico/conceptual sobre el liderazgo populista se erige en un horizonte analítico, a partir de la cual, se abordará el fenómeno del *evismo*.

La irrupción del evismo

Parece una obviedad señalar que el *evismo* deriva de Evo y quizás, allí, una primera conclusión inevitable se asocia al liderazgo político de Evo Morales. El *evismo*, definido por el ex vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, es una **estrategia de poder**, *aunque su núcleo fuerte parta de una persona, el evismo es un hecho colectivo revelado como una práctica política* (2006: 25-26). De esta noción básica se desprende que el *evismo* trasciende al liderazgo de Evo Morales para dar cuenta de esa imbricación entre el líder y el *pueblo* en una amalgama horizontal y no vertical. Morales se convierte en un portador de esa voluntad política emergente de lo *nacional-popular*.

La trayectoria personal y política de Evo Morales le otorga una potencialidad política más arraigada al *pueblo*. Desde luego, su perfil de líder sindical campesino y su vinculación fuerte con los movimientos sociales, particularmente indígena/campesinos, le otorgó a su liderazgo un sustento simbólico significativo, un espejo de lo *nacional-popular*. La lucha de Morales como dirigente de los productores de coca le posibilitó encarnar ese discurso nacionalista y antiimperialista.

La violencia sistemática y naturalizada en el trópico cochabambino, como corolario de las políticas de erradicación en el contexto del ciclo neoliberal, generó una organización sindical articulada en torno a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba,

configurando una relación signada por desencuentros, enfrentamientos, represión y resistencia entre el movimiento cocalero y el Estado boliviano, lo cual, en el transcurso del tiempo, ha posibilitado a este movimiento social erigirse como uno de los baluartes en la lucha social y proyectar un horizonte emancipador incluyente, participativo y democrático.

El discurso de la defensa de la hoja de coca se asoció a la cuestión de la *soberanía*, que le posibilitó al movimiento cocalero irradiarse a nivel nacional. El discurso encerrado en sus demandas meramente corporativas, a partir de la cadena de la equivalencia (mencionada por Laclau) funciona hilvanando una red de discursos que deriva en un vaciamiento del sentido: un **significante vacío** (sin significado) (2002: 6). En el *evismo* operó el *discurso significativo flotante*, porque logró que su discurso **nacionalista** rebasa la cuestión clasista para su interpelación hegemónica.

La condición de indígena de Evo Morales le posibilitó adquirir otro rasgo identitario: el **indígena**. Si bien el movimiento cocalero es esencialmente un movimiento campesino, empero, la capacidad de irradiación discursiva de Morales le posibilitó adentrarse en sus propios orígenes indígenas para enunciar el *discurso de la reivindicación identitaria* y de *los derechos de los indígenas* incorporando el discurso descolonizador en el repertorio ideológico del *evismo*. El *pueblo*, operador discursivo del *evismo*, se ancló en **dos vertientes**: la **nacionalista** y la **indígena** y, por lo tanto, su interpelación *nacional-popular*. La potencialidad del discurso del *evismo* es su cadena de equivalencia: posibilitó que el discurso logre una articulación populista, condensando lo *nacional-popular* a partir de la cual el *evismo* logró definir sus identidades políticas y sus propios antagonistas.

El *evismo* es, más que una alegoría de un liderazgo: el liderazgo de Morales es la construcción de un sujeto político *nacional-popular*. Este sujeto político no emerge por arte de magia o colgado del liderazgo de Morales: es la articulación de varias voluntades que luego proporcionan un marco de sentido a la lucha política, en función de la definición/configuración de los adversarios: los sectores oligárquicos que evitan la germinación de un proyecto estatal/societal desde lo *nacional-popular*.

Quizás aquí se encuentra el potencial populista de estos nuevos sujetos políticos de raigambre *nacional-populista*, a diferencia de los otrora sujetos históricos con una incidencia política significativa. Ese sujeto fue el **movimiento minero** anclado en la **Central Obrera Boliviana (COB)**, decisivo para el despliegue de la acción colectiva y absorbiendo la energía popular. Según René Zavaleta (1988) trazó un *horizonte de visibilidad*: el horizonte socialista revolucionario. El *evismo* trascendió la cuestión clasista del movimiento obrero para convertirse en un sujeto *populista*, sintetizador de lo *nacional-popular*, desplazando a la COB y afianzando la construcción del **Instrumento Político** y disputando su dirección política (García, García y Soliz 2019: 80-81). El *evismo* surgió de las entrañas del movimiento cocalero, luego se articuló a otros sujetos sociales como la **Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos (CSUTCB)**. En el seno de esta matriz organizativa campesina se gestó construyó un brazo político para avanzar al campo electoral. La idea del **Instrumento Político (IP)** cobró fuerza en un contexto marcado por la celebración de los 500 años de resistencia indígena al dominio colonial español. La presencia de los cocaleros en la matriz de los trabajadores campesinos, por la vía de las seis federaciones de cocaleros del trópico cochabambino, posibilitó su correlato en el escenario electoral con la **Asamblea Soberanía de los Pueblos (ASP)**. En 1999 participó en las elecciones, lo que derivó en una ruptura entre las diferentes tendencias sindicales campesinas al interior de la CSUTCB. Esa disputa política interna se zanjó con la hegemonía del movimiento cocalero en base al liderazgo de Evo Morales.

En estas circunstancias, el movimiento cocalero, en alianza con otras fuerzas sociales, buscó los caminos institucionales para participar en el campo electoral. Por la concesión

voluntaria del portador de la sigla partidaria Movimiento Al Socialismo (MAS) se asumió esta identidad partidaria, posteriormente a esta sigla se añadió otra sigla: **Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP)**. Entonces, el MAS-IPSP se constituyó en el dispositivo electoral del *evismo* para arribar democráticamente al poder. El ex vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera (2006), trazó al *evismo*:

es fundamentalmente una estrategia de poder que ha transitado, principalmente, por tres etapas: la resistencia local, en sus inicios, entre 1987 y 1995; la expansión en la búsqueda de alianzas, entre 1995 y 2001; la etapa de consolidación en el poder y de iniciativa ofensiva por llegar al poder, en el período 2001-2006. (p. 25).

Una cuarta etapa del *evismo* fue en función gubernamental, fortalecido por su legitimidad electoral. Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, fue un factor no solo simbólico, sino político. El gobierno de Morales trazó su horizonte de gestión en función a la denominada *Agenda de Octubre*, que posibilitó constitucionalizar lo plurinacional y la nacionalización de los recursos naturales.

La articulación del gobierno de Morales con varias organizaciones sociales se denominó *gobiernos de los movimientos sociales*. Esta denominación desempolvó viejos debates sobre la articulación de los movimientos sociales en la estructura de poder. Morales usó la frase del subcomandante Marcos: **Mandar obedeciendo**. Esta frase trazó el decurso gubernamental del relacionamiento entre Evo Morales y las organizaciones sociales.

García Linera (2006) caracterizó al *evismo*:

El primer componente central del *evismo* es una estrategia de lucha por el poder fundada en los movimientos sociales [...] Un segundo componente central del *evismo* -que lo caracteriza notoriamente- es que el núcleo articulador de esa estrategia es el discurso de la identidad y la presencia indígena. (p. 25)

De esta caracterización se desprende que el *evismo* trasciende más allá del liderazgo de Evo Morales. El *evismo* es un sujeto político, es un *constructo social* configurado en un campo político dado. El *evismo*, por una parte, es una estrategia de poder y, por otro, está referido a la identidad que se la define por dos factores complementarios: el escenario de disputa política y el adversario.

Con relación a la identidad, la misma está atravesada eminentemente por una **mediación discursiva**. Es interesante: el discurso de Morales acentuado en su condición de gobernante es determinar ¿para qué se argumenta? y ¿para quién está dirigido el mensaje? Los discursos de Morales tienen un destinatario claramente explicitado: lo *nacional-popular*, particularmente **los indígenas**. De allí se desprende que los discursos del mandatario boliviano sean *inclusivos*, él se involucra en el **nosotros**: *Evo soy yo* obedece a que *un líder puede ser un “nosotros”, puesto que somos (yo soy en minúscula) el espejo donde él se refleja* (Mayorga 2009: 114). En sus discursos, Morales hiló una lealtad con sus *hermanos* (esta alusión a *hermanos*, a diferencia de *compañeros*, es más fuerte) de los pueblos indígenas, o sea, con sus pares. Y, por lo tanto, *primera vez en la historia boliviana aymaras, quechuas, mojeños, somos presidentes, no solamente Evo es el presidente* (Mensaje presidencial 20/01/2006). A partir de esta estrategia de involucramiento discursivo, Morales logró erigirse en un narrador protagonista: *si habláramos nosotros mismos*, diría.

El *evismo* es un fenómeno político que sirve para la articulación de distintos movimientos sociales: quizás aquí estriba su potencial populista. Al ser un sujeto político en permanente construcción, los discursos del *evismo* van cuajando a diferentes momentos políticos, aunque existe una matriz discursiva que permite diferentes interpelaciones nucleadas en lo *nacional-popular*, como un condensador de múltiples interpelaciones. El

evismo tiene su fuente originaria en el movimiento cocalero, donde el enunciado *soberanía*, asociado a la defensa de la hoja de coca, como símbolo de la defensa de la dignidad nacional ante la afrenta del imperialismo norteamericano. Posteriormente, este discurso nacionalista se reactivó en el decurso de la **Guerra del Gas**: el levantamiento popular de los migrantes rurales devenidos en la población periurbana de la ciudad de El Alto, en 2003, por la persistencia del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile. Esta insistencia hirió la subjetividad nacionalista e hizo aflorar el sentimiento antichileno generado por la pérdida del acceso al mar en la conflagración bélica con el país trasandino en 1879 (también el sentimiento antinorteamericano se puso en evidencia en el conflicto). La movilización precipitó la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y trazó los ejes ordenadores de la **Agenda de Octubre**: nacionalización de los recursos naturales y Asamblea Constitucional para configurar un nuevo Estado. Un hecho llamativo de esta movilización populista que se extendió como un rizoma por doquier: no había un líder visible para las directrices de movilización, fue una auto organización de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, es decir, la democratización de la acción colectiva le proporcionó un potencial populista.

Estos ejes discursivos de la **Guerra del Gas** fueron asimilados por el *evismo* y, junto a la *soberanía* en torno a la defensa de la hoja de coca, se erigieron en una arista importante del discurso del *evismo*, articuladas con el sentimiento antinorteamericano y, por lo tanto, antimperialista. Esto definió una de las identidades del *evismo* e incorporó en su repertorio discursivo la cuestión de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Esta cuestión es clave para la articulación del *evismo* referida a la imbricación social -e inclusive subjetiva- entre el líder y el *pueblo*, entre Morales y los pueblos indígenas de Bolivia. Aquí cumple un papel clave la cuestión de la representación, la **autorrepresentación**, mecanismo articulador de la voluntad colectiva concentrada en el líder que, a la vez, no solo representa a, sino es parte constitutiva de, ese conglomerado identitario indígena. Aquí cabe no solo el sentido político, sino el sentido histórico del *evismo*, ya que el trazado del horizonte del **Estado Plurinacional** salió de las mismas entrañas de las organizaciones indígenas/campesinas. Y más tarde se constitucionaliza la cuestión de la *plurinacionalidad*, que da cuenta de esa diversidad cultural y étnica de Bolivia para superar el **Estado Republicano**, reproducción del orden colonial. De allí, el discurso de la descolonización articulada a plurinacionalidad cobraba un sentido histórico.

El **Estado Plurinacional** es esencialmente un acto fundacional, un nuevo proceso político, y como cualquier proceso de transformación estatal, genera incertidumbre y contradicciones naturales como resultado de los efectos sociopolíticos colaterales emergentes de la propia dinámica constitucional y de la complejidad sociocultural de temporalidades que convergen en la cimentación de este (nuevo) orden estatal. En esta estructuración de imaginarios en el plano simbólico, la figura de Morales como el primer indígena en llegar a la máxima autoridad política de Bolivia y primer presidente del Estado Plurinacional, condensó en su liderazgo político toda esa complejidad histórica que precede a la construcción de este proceso político y, al mismo tiempo, proyectó un universo simbólico donde la presencia del indígena ocupa un lugar central de la discursividad, aunque ese sujeto indígena no es necesariamente homogéneo, como pretende la nueva Carta Magna (al hablar de las *naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos*) sino, por el contrario es diverso y abigarrado. Más allá de la propia imagen del mandatario boliviano como depositario de un *tempo* histórico e inclusive de un *tempo* mítico (Tórrez y Arce 2014, pp. 184-185).

Otro discurso clave articulador del discurso de lo *nacional popular* del *evismo* está referido al discurso antineoliberal surgido en el **ciclo de protestas**. La denominada **Guerra**

de Agua, del año 2000, en la ciudad de Cochabamba, se erigió como epicentro para el despertar del *pueblo*. Esta movilización urbana contra la elevación de las tasas de agua abrió una grieta para la organización/movilización de los sectores periurbanos contra las políticas económicas de cuño neoliberal.

En suma, el *evismo* se asienta en esa matriz discursiva de lo *nacional-popular* que articula a diferentes *significantes flotantes* (Laclau y Mouffe, 2004): el nacionalismo, la reivindicación indígena y el rechazo al neoliberalismo. Aquí radica el potencial populista del *evismo*, que emerge de la lucha colectiva pero necesita encarnarse en la figura de un líder, portador de esa voluntad política: Evo Morales.

La presencia del *evismo* en el campo político boliviano, inicialmente en su forma de movimiento social y luego devenido en movimiento político/electoral, convivió con otras experiencias políticas en América Latina, surgidas por la irrupción de los gobiernos progresistas. Esta modalidad de **movimiento político** atribuido al MAS-IPSP permite poner en la agenda del debate populista la institucionalidad encarnada en el Estado y lo social condensado en la autonomía de la acción colectiva.

Para el caso específico del MAS-IPSP, George Komadina y Celine Gefroy retratan la importancia del control de *la red sindical del movimiento campesino indígena*. Este paso decisivo implicó una ruptura con la “vieja tesis de la izquierda tradicional” que instituyó una frontera de *vanguardia política, el partido, y la organización sindical*” (2007: 15). Desde una mirada sociológica, el Instrumento Político (IP) cumplió el papel de ser un **espejo social**, es decir, en vez de cooptar a la sociedad, subsumirla en su seno. El IP evaporó las articulaciones verticales populistas entre la estructura partidaria y el sindicato para plantear una nueva modalidad populista de relacionamiento: absorbió la acumulación histórica (en relación al tipo de organización y decisión política) que desplazó al ámbito político estrictamente del campo político institucional.

Gestión gubernamental populista del *evismo*

Cuando Morales llegó al poder, esa modalidad de movimiento político que se atribuyó al MAS-IPSP configuró un nuevo relacionamiento del *evismo* con el *pueblo* posibilitando un nuevo escenario de interacción social/política con un soporte simbólico significativo por su efecto eficaz de interpelación que otorgó a la gestión del gobierno de Morales una fluidez populista. La presencia del *evismo* en el control del poder gubernamental, el *gobierno de los movimientos sociales*, puso en la mesa un viejo tema de debate: ¿Se puede hablar de movimiento social cuando se imbrica en el aparato estatal? Con base a la experiencia europea, Alain Touraine (1989) caracterizaba a los *movimientos sociales* por su capacidad de acción colectiva autónoma con relación al Estado.

Según el propio Touraine, al conocer las experiencias populistas, esa imbricación entre los movimientos sociales y el Estado, no solo se da a través de los denominados *partidos populistas*, sino de los *Estados nacional-popular*, donde la presencia de los movimientos sociales ya son parte constitutiva. Esa capacidad de movilización del *evismo* (previa a su presencia en el gobierno) supuso una acción *populista* de enorme envergadura política, una *historicidad* -como la define Touraine (1989)-: la capacidad de la sociedad para producirse a sí misma. El *evismo* encarnó ese potencial populista nacionalista emergente de las luchas sociales en el decurso de la Guerra del Agua y la Guerra del Gas. De esta última se configuró la denominada **Agenda de Octubre**, que se erigió en un *horizonte de visibilidad* (Zavaleta, 1988).

La nacionalización de los recursos naturales y la Asamblea Constituyente fueron las tareas inmediatas encaradas por el gobierno de los movimientos sociales, alrededor de las

cuales se configuró la **Agenda de Octubre**. La **nacionalización** repercutió en el aumento significativo de los ingresos por renta de la venta de gas, en un contexto económico internacional favorable por la subida del precio del petróleo. Estas condiciones económicas fueron un factor decisivo a la hora de encarar políticas públicas para enfrentar decisivamente la pobreza, la injusticia social y la desigualdad social. El enfrentamiento frontal del gobierno de Evo Morales con Washington supuso recrear/fortalecer ese discurso de *soberanía* y *antiimperialista* que se tradujo en la expulsión de la embajada de los Estados Unidos de Bolivia, acusada por intromisión y de propiciar procesos de desestabilización contra el gobierno de Evo Morales (Calloni, 2013).

La instalación de la **Asamblea Constituyente** fue otra de las tareas del *evismo* en funciones gubernamentales. La apertura del cónclave constituyente abrió las contrapuestas para que esa voluntad colectiva de lo *nacional-popular*, especialmente de los movimientos indígenas/campesinos, tenga su correlato. Esa voluntad colectiva indígena buscaba trastocar los cimientos fundamentales de un estado monocultural, considerados como una extensión del Estado colonial, reproductor de privilegios de los sectores criollos/mestizos en desmedro de los indígenas. La propuesta del **Estado Plurinacional** vino de las organizaciones indígenas/campesinas de Bolivia. Quizás aquí radica una *historicidad* populista de los movimientos indígenas/campesinos para trastocar el Estado republicano de corte monocultural. Esta propuesta descolonizadora se constituyó en una energía populista para la reconfiguración estatal.

El *evismo* fue la encarnación de esa voluntad colectiva de los indígenas/campesinos que se plasmó en la Carta Magna. Y no solamente configuró una institucionalidad que reconoce la diversidad cultural y étnica de Bolivia, sino que, a través del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas/campesinos, reparó históricamente esa exclusión del Estado republicano. Esta acción y discurso plurinacional del *evismo* se combinaron con una acción y un discurso nacionalista en torno a la recuperación de los recursos naturales. Entonces, la cuestión indígena, asociada a la descolonización, encontró una *bisagra discursiva* para condensar ese potencial populista del *evismo*.

Evismo en el contexto del Golpe de Estado

El golpe de Estado perpetrado en Bolivia el 10 de noviembre del 2019 no solamente supuso una ruptura democrática, sino una nueva lógica de relacionamiento entre el liderazgo político de Evo Morales y lo *nacional-popular*, específicamente, con los movimientos sociales de raigambre indígena/campesina. La movilización de sectores urbanos en el contexto posterior a las elecciones del 20 de octubre del 2019, en un principio se caracterizó por el discurso de la *segunda vuelta*: se sospechaba que el **Órgano Electoral Plurinacional (OEP)**, en complicidad con el gobierno de Morales, había perpetrado un fraude electoral. Los resultados parciales otorgaban la victoria al MAS-IPSP con un 47%, superando el 40% de la votación, y una diferencia del 10% con respecto al segundo candidato, Carlos Mesa. Requisitos suficientes para esquivar la segunda vuelta, según la **Constitución Política del Estado (CPE)**. Empero, Mesa convocó a vigilar el voto esgrimiendo el discurso de la segunda vuelta, que derivó en la quema de varios órganos electorales. La movilización de los sectores criollos/mestizos urbanos se entiende por una subjetividad instalada en su imaginario sobre el supuesto autoritarismo de Morales por su afán de mantenerse en el poder. Esta subjetividad viene desde el **Referéndum Revocatorio** del 21 de febrero de 2016 a la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para habilitar al presidente y al vicepresidente a ser postulados nuevamente. El

veredicto del mismo negó la posibilidad de ir a Morales a una nueva elección. Empero, por otras vías, especialmente a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, el MAS-IPSP logró habilitar la candidatura de Morales para nuevos comicios.

Esta necesidad de ir a nuevas elecciones por parte de Morales fue leída como la pretensión de eternizarse en el poder. Aunque siguiendo la lógica que establece el *evismo* con sus bases sociales, esa determinación fue legitimada en las organizaciones sociales. El argumento sostenido estribaba en que la presencia de Morales como gobernante era decisiva para asegurar la continuidad del *proceso de cambio*. Aquí radica la relevancia de esa imbricación populista entre el denominado *gobierno de los movimientos sociales* y lo *nacional-popular*. Otra mirada al interior del *evismo* reveló una burocratización de ese vínculo entre Morales y sus bases sociales. Es decir, ese significante vacío **Evo soy yo** presentaba grietas que se reflejaron en la movilización de la campaña del Referéndum Constitucional.

Mientras tanto, en la subjetividad de los sectores urbanos criollos-mestizos se abonó un fuerte rechazo a la candidatura de Morales. Ese sentimiento anti-evista fue decisivo para el montaje de una conspiración que decantó en el golpe de Estado. El discurso del fraude electoral enarbolado por sectores opositores al MAS-IPSP fue *in crescendo* hasta transformarse en el discurso de nuevas elecciones para recalar en el discurso de la renuncia de Morales a la presidencia. Esta cruzada de desestabilización contó con un mitín policial y el pedido de un jefe castrense recomendando a Morales que dimitiera al cargo de presidente de Bolivia. En un ambiente de amedrentamiento y amenazas de grupos articulados a los sectores promotores del golpe del Estado a dirigentes y parlamentarios al MAS-IPSP, Morales se sintió presionado y renunció.

¿Cuál fue el papel desplegado por el *evismo* en el contexto del Golpe de Estado? Inicialmente, en el curso de las movilizaciones, Morales convocó a sendas marchas con el propósito de la articulación del *evismo* para resistir esta acción desestabilizadora. También sirvió para interpelar a los sectores indígenas/campesinos a través del respeto al **voto duro**¹, argumentando que los sectores de oposición intentaban menoscabar ese voto rural, muestra de su desprecio racial a los campesinos/indígenas. Morales recurría a este discurso populista con el afán de vincular esa cuestión libidinal que lo conecta con el *pueblo*. Esa interpelación radicaba en la configuración de una frontera identitaria, a partir de la cual la identificación del enemigo era decisiva. Esa convocatoria para el despliegue movilizador del *evismo* fue parcial y tardía. Las fuerzas desestabilizadoras estaban en curso.

Días posteriores de la consumación del golpe de Estado, en la parca cotidianidad de las calles de las ciudades de La Paz y El Alto, partidarios o simpatizantes del MAS -IPSP, de distinta extracción social, comentaban sus propios balances sobre lo acontecido. Parecía haber una especie de consenso respecto a que la caída de Morales había empezado con el Referéndum Constitucional, en la medida en que, posterior al mismo, no se sometió a los resultados, cuando antes dijo públicamente que lo haría. *Nosotros podemos entender lo que ha hecho el Evo, sabemos que hay que continuar con el proceso, pero estos ciudadanos no lo han entendido y se han dada la vuelta*², decía uno ellos, aludiendo a un previo resquebrajamiento populista del *evismo*, develando el equilibrio inestable que siempre guarda la cadena equivalencial articulada en torno a un significante vacío hegemónico, a través del cual no solo debe responderse a las tensiones internas, sino también a las fuerzas externas que no dejan de presionar.

A los pocos días del golpe de Estado, después de un momento desconcertante, con la asunción de Jeanine Áñez como presidenta de un gobierno transitorio, empezó la movilización del *evismo*, pero con una particularidad: su autonomía con relación al liderazgo de Morales

1. Desde el año 2020, la hegemonía electoral del MAS-IPSP radicó, sobre todo, en la votación que obtuvo en las áreas rurales.

2. Diálogo personal.

-quién viajó a México en calidad de asilado por temor a que lo asesinaran en Bolivia-. La ausencia de Morales abrió nuevas modalidades de articulación del *evismo*.

Con el golpe de Estado, la frontera radical que antes marcaba el nosotros *evista* frente a los “otros” se movió y afectó negativamente en el campo de lo *nacional-popular*. El gobierno transitorio asumió la táctica implacable de atacar la imagen de Morales. O sea, devaluar en extremo el significante **Evo** y, con ello, su capacidad de articulación de lo que le quedaba todavía, algo que no era un simple “resto”.

Entre el motín policial que precedió el anuncio de la renuncia forzada del presidente y la asunción del gobierno de facto, el conglomerado golpista desarrolló distintas manifestaciones de repudio a los símbolos que fueron parte de la impronta indígena del gobierno de Morales y del Estado Plurinacional boliviano instituido en 2009. En contraposición, exaltaron íconos cristianos con una serie de episodios performativos, propagados por los medios televisivos. El día del golpe, líderes cívicos de los departamentos de Santa Cruz y de Potosí ingresaron al Palacio de Gobierno, se pusieron de rodillas, extendieron la bandera boliviana en el suelo y pusieron sobre ella una Biblia; en la puerta del recinto un pastor exaltado declaró que no habría más **Pachamama** (Madre Tierra)³ en el Palacio de Gobierno porque había retornado la Biblia. Dos días después, cuando Áñez se proclamó presidenta de Bolivia, lo hace agarrada de una biblia voluminosa y tiñendo de cristianismo su discurso inaugural, haciendo caso omiso a que Bolivia es un Estado laico.

En medio de la precipitación de estos hechos, a través de los cuales los triunfantes opositores al *evismo* se esforzaban en escenificar las marcas de su diferencia inconciliable con su oponente, uno de los acontecimientos fue el catalizador de la movilización popular que se desató en oposición al golpe de Estado: la quema pública de la *wiphala*⁴ por parte de las turbas golpistas y amotinados, después de ser retirada bruscamente del *frontis* de edificios públicos importantes -empezando por las Casas de Gobierno nacional y departamentales- y ser arrancadas como insignia de los uniformes policiales por parte de sus portadores.

El agravio a la *wiphala* fue un acto extremo, una violencia simbólica que impactó en las pasiones identitarias de quienes se sienten representados por ella, incluso de sectores que habían mantenido una distancia con Morales, pero a pesar de ello no dejaron de comulgar con las causas indígenas y populares. Así lo reflejaba el pronunciamiento inmediato de Felipe Quispe, histórico dirigente campesino aymara sin militancia en el MAS-IPSP: *La wiphala no es del Evo Morales ni del MAS, es nuestro símbolo de los aymaras, quechuas y otras naciones indígenas y originarias. El temblor vendrá desde abajo. Carajo*⁵. Algo similar sucedía con aquellos que, en algún momento, se habían distanciado políticamente de las filas del MAS-IPSP por determinadas desaveniencias, y que durante el curso de las movilizaciones ciudadanas y cívicas que abrieron paso al golpe de Estado, no tomaron partido. Como escribía, Iván Apaza, joven indígena bloguero:

Hasta ayer nos miramos si hacer esto o aquello. No sabíamos si apoyar a Evo Morales y lo que había hecho en su gobierno o lo que representaba él, tampoco sabíamos si apoyar la lucha del otro bando dirigida por líderes racistas y masacradores, y que se vanaglorian de democráticos y antirracistas, pero que, en sus actos queman el símbolo flamígero de la lucha anticolonial: la *Wiphala*, que patean a mujeres de pollera, que escupen su odio discriminatorio en las calles⁶.

En esa coyuntura volátil, con el partido del MAS-IPSP derrotado y la ausencia de iniciativa de los líderes de las organizaciones sociales, prácticamente en la clandestinidad ante la persecución de las instituciones represivas, la *wiphala* devino casi en un significante vacío de lo *nacional-popular*, que auxilió en el anudamiento de su campo equivalencial

3. Puede entenderse como una de las máximas deidades ancestrales en los Andes, cuya veneración en Bolivia es extendida, especialmente, entre la población indígena y urbana popular de las tierras altas.

4. Se trata de una bandera cuadrangular de siete colores, símbolo de la identidad y la reivindicación de los pueblos indígenas en los Andes. En ese sentido, fue reconocida como uno de los símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009 (Art. 6º, CPE).

5. <https://www.bolpress.com/2019/11/11/miles-llegan-a-la-paz-al-grito-de-ahora-si-guerra-civil/>

6. *Ídem*.

residual. Esto activo una auto convocatoria colectiva de resistencia al golpe de Estado, marcando la diferencia rotunda con los autores del golpe de Estado, identificándolo con la como expresión directa y sin mediación de la élite señorial, la *derecha* siempre clasista, racista y contraria a las conquistas del pueblo.

En distintos puntos del país, cientos de personas y sectores populares salieron enarbolando la *wiphala*. Visto el panorama desde la urbe sede de gobierno, al norte, en la populosa ciudad de El Alto, cientos de jóvenes coparon algunas avenidas con la *whipala* en manos, al grito de ***ahora sí, guerra civil***. Mientras tanto, distintas organizaciones campesinas indígenas del altiplano paceño se sumaban a los barrios periurbanos que, superando la inactividad de sus dirigentes empezaron a congregarse, para desplazarse en masa a la Plaza Murillo en los siguientes días. Algo similar sucedía en su extremo sur, donde en los alrededores de la mancha urbana -que concentra la residencia de los sectores económicos privilegiados-, las comunidades aymaras también comenzaron a salir. Simultáneamente lo hacían otros actores, haciendo amagues de incursión a la ciudad. En medio de las efusivas alocuciones de los movilizados, que pedían el desagravio a la *whipala*, también a las mujeres de pollera, brotaban voces arengando otra vez: ***Evo no está solo***.

Inmediatamente constituido el gobierno de facto, precedió a restituir la *whipala* en el frontis del palacio de gobierno y las instituciones públicas, la Policía pidió perdón por ofenderla y volvió a restituirla como insignia de sus uniformes. Asimismo, instalaciones comerciales, transporte público e incluso residencias particulares de la ciudad la izaron en sus puertas y ventanas, como queriendo aplacar la ira de la plebe contra los ultrajes del golpe de Estado, en ese contexto cuyos resultados parecían inciertos aún. El trauma colonial de las ciudades al cerco indio pareció retornar, con un miedo inducido por la conspiración golpista. Fue un buen acicate para reforzar el discurso que la presidenta Áñez posicionó entre sus seguidores, bajo el clivaje: **civilizados**, defensores de la democracia y contrarios al fraude electoral evista, versus **salvajes**, turba violenta manipulada por el **tirano** depuesto. Esto inicialmente sirvió para justificar la brutal represión policial/militar ordenada contra los movilizados, cuyos resultados dejaron un saldo de más de mil detenidos arbitrariamente, cientos de heridos por impacto de bala y, lo más funesto, 36 muertos, entre vecinos de la ciudad de El Alto (**Masacre de Senkhata**) y comunarios de las federaciones del Trópico de Cochabamba, caídos en la población de Sacaba (**Masacre de Huayllani**)⁷.

La “pacificación” del país tuvo que darse a través de una mesa de negociaciones entre el gobierno de facto y los líderes de los movimientos sociales del país, la mayoría expresión de las bases sociales del MAS-IPSP. La misma estableció claramente que el gobierno de Áñez era un gobierno de transición de los próximos tres meses, cuya principal tarea era llamar a elecciones nacionales en un plazo de 30 días, lo que significaba la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019; todos los partidos políticos que pugnaron en esta ocasión podían volver a participar en la nueva contienda, incluido el MAS-IPSP. Sobre esta base, bajo liderazgo de las organizaciones campesinas indígenas que le dieron origen, en el mes de diciembre esta fuerza política realizó, en la localidad de Montero (Santa Cruz), un Congreso con amplia convocatoria, atiborrado de *whipalas*; ocasión en la que Morales fue elegido como su jefe de la campaña electoral que se venía, sin perder su sitial de presidente del MAS-IPSP y de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

De ese modo la *whipala*, como significante identitario y reivindicativo que excede al *evismo*, no dejó de concatenarse con él y contenerlo, contribuyendo a un reflote de la figura del ex mandatario (mermado ya en su capacidad hegemónica desde antes de las eleccio-

7. Cf. Informe Preliminar de la CIDH sobre los hechos ocurridos tras elecciones en octubre de 2019 (11/12/2019).

8. Felipe Quispe: "El MAS ha caído de pie como un gato". Entrevista. *Infórmate Bolivia* 21/01/2020. <https://upload.latest.facebook.com/watch/?v=3933768949981554>.

9. De acuerdo con informes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado boliviano, 2017. https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170206/politica.php?n=318-1-2-millones-de-bolivianos-radican-en-argentina-y-aportan-al-pib.

10. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/17/para-estas-elecciones-el-voto-en-el-exterior-es-el-47-del-pa-dron-desde-que-nacio-es-azul-234625.html>.

11. Personalidades provenientes del mundo urbano que sin tener militancia en el MAS-IPSP, ni ser parte de ninguna organización social afiliada, fueron incorporadas como candidatos o funcionarios gubernamentales. El reparo a los *invitados* supone que, una vez consagrados como autoridades, tiendan a superponerse al partido, a su práctica organizativa y al carácter popular de sus objetivos.

12. Ambos de los acompañantes más constantes de Evo en la conducción del Estado. Arce fue Ministro de Economía y se le atribuye el *milagro económico* que le otorgó al país uno de los mayores índices de crecimiento la región. Choquehuanca fue Ministro de Relaciones Exteriores y se lo reconoce como uno de los ideólogos indianistas del MAS-IPSP, siendo uno de sus fundadores históricos.

nes del 20 de octubre) como un articulador de las bases sociales núcleo del MAS-IPSP o su "voto duro", para empezar; pero, esta vez, sin el aditamento del poder que le otorgaba la silla presidencial del Estado central, para administrar las pulsiones políticas del campo *nacional-popular*. En este contexto, ¿es posible para el *evismo* recobrar su vigor? Por lo menos, Felipe Quispe, dirá que *el MAS ha caído de pie, como el gato*, quedando con heridas que se pueden curar, pero para eso deberá comenzar por *autopurgarse* porque tiene *malos elementos* en sus filas; en su criterio, la estrategia de estigmatización y represión del gobierno de Áñez contra los seguidores de Evo, agravada con las masacres de Senkata y Huayllani, estaban generando la unificación a las organizaciones sociales y poniendo del lado del MAS-IPSP a los sectores campesinos indígenas que no comulgaban con él, *porque el rostro del Evo Morales también es nuestro rostro, quiérase o no*⁸.

Después de que el ex presidente se refugiara en México, a partir de mediados de diciembre del 2019 se asiló en Argentina, país limítrofe con Bolivia y, además, lugar de destino de mayor preferencia para sus emigrantes. Esto último se traduce en el más de un millón de ciudadanos bolivianos residiendo en suelo argentino⁹, quienes en su gran mayoría son proclives electoralmente al MAS-IPS, según los datos de las elecciones nacionales a partir de 2009, año en el que Bolivia implementó el voto en el exterior¹⁰. Instalado en la ciudad de Buenos Aires, Morales comenzó a interactuar con esta colectividad boliviana y a desempeñar su rol de asesor electoral desde el exilio, cuya primera tarea era garantizar la elección interna del binomio presidencial del IP, anulada las posibilidades pare él.

En ausencia física del líder, e intentando mantener aliento, el *evismo* se halló frente al surgimiento de un debate en el seno de varias de organizaciones campesinas, indígenas y populares alineadas al MAS-IPSP, referida a que los candidatos debían ser elegidos desde abajo, mediante los tradicionales mecanismos de deliberación colectiva e, incluso, en función al desempeño demostrado durante la resistencia al golpe de Estado. Esto implicaba dejar de lado el apadrinar y nominar a *invitados*¹¹ como táctica oportunista, que en el pasado reciente permitió ganar votos y aumentar la hegemonía del MAS-IPSP pero en muchos casos resultó contraproducente. En realidad, era una crítica desde abajo a las prácticas de intermediación de los dirigentes sociales y del mismo *evismo* que, desde su afianzamiento al mando del Estado, tendieron a tomar decisiones políticas en función a un pragmatismo eficiente que, en muchos casos, desoyó y hasta contradijo las resoluciones orgánicas de la militancia. Esta forma de hacer política había menoscabado la democracia comunitaria en la toma de decisiones y la lógica de *las bases son las que mandan* que dieron origen al MAS-IPSP como **Instrumento Político** de las organizaciones campesinas, indígenas y populares del país. Desde la óptica interpretativa de Laclau, emergía así la cuestión que la hegemonía conlleva, en el sentido de que la representación particular que logra anudar lo hegemónico, lo hace no sin perder, en ello, algo o mucho de su especificidad, factor que tiene sus propias consecuencias, por las cuales la estrategia populista para hacer política encuentra sus propios desafíos o, más bien, sus límites (Sanz, 2015).

En medio de las tensiones y otras disputas de liderazgo por suceder a Evo electoralmente, las organizaciones sociales del MAS-IPSP negociaron internamente y pudieron nominar a sus precandidatos. Luego, sus representantes se trasladaron hasta la ciudad de Buenos, llevando el mandato de sus bases. El 19 de enero de 2020, en un **Ampliado** presidido por Evo consensuaron la composición del binomio: **Luis Arce (presidente) y David Choquehuanca (vicepresidente)**¹². Los resultados contribuyeron significativamente a ahuyentar entre los suyos el fantasma de la división del MAS-IPSP, además de disipar la duda sobre la pérdida o no de la influencia de Evo ante sus bases.

En Bolivia la noticia produjo reacciones entre propios y extraños. Los partidos de derecha y el gobierno de facto insistieron en que el binomio elegido fue una designación impuesta por Morales. En el seno del MAS-IPSP hubo declaraciones de disconformidad por parte de dirigentes sociales pero también algunos silencios inquietantes, como en el altiplano aymara, por ejemplo, donde hubieran preferido una fórmula inversa del binomio. Pocos días después, las organizaciones del núcleo duro del MAS-IPSP, aglutinadas en el llamado **Pacto de Unidad**, se manifestaron en respaldo pleno al consenso logrado en Buenos Aires, con lo cual, prácticamente, terminaron de alinear al resto de militantes y simpatizantes en esa dirección. Después de todo, luego de haber *sobrevivido* a la humillación y represión al golpe de Estado, ahora eran *más masistas que ayer*, como declaraba un joven orador durante un nutrido Cabildo periurbano, en la ciudad de Cochabamba. Así, para los detractores del ex mandatario, las que eran las señales de un proceso hacia el quiebre fatídico del MAS-IPSP, resultaron en una álgida dinámica de recuperación de su potencial populista democratizador, con un intento de reacomodo de las energías del *evismo*, que no deja de jugar sus posibilidades.

13. Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió inhabilitar esta candidatura, por incumplimiento de requisitos.

14. En su momento, Evo aludió públicamente a Adrónico como uno de sus posibles herederos, de cara a la renovación del MAS-IPSP.

Lo dicho explica la postulación de Evo como primer senador por el departamento de Cochabamba en las elecciones venideras¹³ y la emergencia como líder del joven Adrónico Rodríguez, segundo representante -después de Morales- de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quien ha quedado como candidato a la tercera senaduría por el departamento cochabambino, después de que fuera preseleccionado por distintas organizaciones como candidato presidencial. Se puede sostener que Rodríguez es una apuesta del *evismo* al interior del mismo MAS-IPSP, una especie de prolongación del liderazgo de Morales¹⁴ y extensión de su capacidad de convocatoria, que tuvo efecto en el contexto del golpe de Estado. Inmediatamente consumado este, en ausencia de Morales y de otra voz de referencia de la cúpula masista, el joven líder tuvo un papel importante en la articulación de la resistencia y la contención de las bases ante un posible desbande. Pero su papel no está al margen del rol estratégico que, ahora mismo, está desempeñando su organización matriz como el punto de enlace del MAS-IPSP -al menos de su voto duro-, enviando a sus representantes (incluido en muchos casos Rodríguez) a distintos lugares del país para participar en las asambleas de las organizaciones sociales en pro de la unidad del *instrumento político*.

O sea, la esencia del *evismo* no radica simplemente en Morales: trasciende su liderazgo. Aquí está la paradoja de la denominación de *evismo*. Una muestra fue la acción colectiva de las organizaciones sociales de El Alto en el curso de la resistencia popular al ejercicio autoritario del gobierno de Áñez. Esta movilización reveló que tiene su propia lógica organizativa territorial, su propia subjetividad y, por lo tanto, su propia narrativa movilizadora, independiente del MAS y de las directrices del propio Evo Morales. Por lo tanto, esta acción colectiva está enclavada en una memoria de larga y corta duración (vgr. *Guerra del Gas*) de resistencia popular. En lo político, esta movilización logró parar la “mano dura” del gobierno de Áñez. En lo simbólico, consiguió reivindicar a la *whipala*, no solamente como símbolo nacional ante una arremetida inicial de sectores conservadores, sino como un ícono de la identidad de los pueblos indígenas fue otro factor para reconfigurar la identidad y definir nuevamente al adversario.

El analista político Jorge Richter (2020) sostiene que, posterior al acuerdo de pacificación del país, Bolivia ha ingresado a un terreno de tranquilidad, pero no ha logrado aún la paz. La polarización radical las dos fuerzas encontradas sigue estando presente, sin encontrar una resolución¹⁵. El significativo en disputa es **democracia**, ahora bajo la antípoda discursiva: **golpe de Estado** versus **fraude electoral**, respecto a lo qué sucedió en Bolivia en octubre y noviembre de 2019. El discurso del golpe de Estado lo personifi-

15. Foro regional político *Hacia el 3 de mayo del 2020*. Cochabamba, 14 de febrero de 2020.

16. Áñez ha sido nominada por su partido político (*Demócratas*) como su candidata a la presidencia del Estado, e irá a las elecciones acompañada del empresario y político Samuel Doria Medina, con quien han formado la alianza electoral *Juntos*.

17. Véase como ejemplo la intervención de David Choquehuanca en Sacaba (Cochabamba), 11/02/2020. www.twitter.com/kawsachuncoca/status/1227234194365075457.

ca fundamentalmente el MAS-IPSP e indica que Bolivia vivió un golpe de Estado, cívico-militar-policial, producto de una previa conspiración de la derecha nacional e internacional, que finalmente derrocó a Morales para instalar un gobierno inconstitucional, orientado a restaurar el orden republicano/neoliberal contra las conquistas del pueblo. En contraposición, el discurso de fraude electoral está copado por la **presidenta/candidata** Áñez¹⁶ y todas las organizaciones políticas que, además del MAS-IPSP, también pugnarán en las elecciones nacionales; sostiene que la renuncia de Morales y de su régimen dictatorial fue el triunfo de una movilización ciudadana espontánea, exacerbada por el fraude electoral cometido para prorrogarse en el poder, que pudo dar solución al vacío que dejó el ex mandatario, en la conducción del Estado, mediante una sucesión constitucional. Puede decirse que, a pesar del cambio de posiciones de los actores respecto al control del Estado, continua vigente el clivaje *democracia versus dictadura* que logró instalar la oposición a Morales después del Referendo del 21 febrero de 2016.

Este factor prolonga, entonces, la batalla política que el MAS-IPSP debe seguir librando, durante el proceso preelectoral, respecto a la afirmación de que, sobre la base de su voto duro y abierto a mayor agregación, es la fuerza política genuina para presentar los intereses, el bienestar y la identidad del país, en una radical oposición al enemigo que tiene en frente. La campaña electoral, iniciada formalmente en febrero de 2020, muestra al binomio Luis Arce/David Choquehuanca ante amplias concentraciones populares, por distintas regiones de Bolivia, con un discurso que alude a que los indígenas no son una minoría, mucho menos reducida al área rural, sino que constituyen la gran mayoría nacional, presente en todos los escenarios y segmentos sociales de las ciudades y el campo, trabajando para el país¹⁷; en estas concentraciones las *wiphalas* ondean y no falta la voz de Morales -a través de un celular puesto al micrófono de la palestra- que saluda a la masa y alienta a los candidatos.

A partir de la salida “obligada” de la presidencia de Morales se empezó a tejer la (hipó) tesis del declive del *evismo* o del *post evismo*. Esas suposiciones son muy precipitadas y epidérmicas, e ignoran los trasfondos organizativos y comunitarios que sostienen a este fenómeno populista: el *evismo*. La explicación recurrente de que el *caudillismo desmedido* de Morales condujo a él y a su partido a la deriva política, es una mirada epidérmica sobre este fenómeno político, que no logra entrever la complejidad sociopolítica del *evismo*. El MAS-IPSP no es una estructura partidaria convencional, es un entramado de estructuras sociales imbricada en redes ampliadas de organizaciones indígena/campesinas en el área rural y en espacios periurbanos; es el instrumento articulador de las distintas lógicas sindicales e indígenas/campesinas donde se afina el sentido político del *evismo*. Efectivamente, el ex presidente boliviano encarna todo ese potencial populista de lo *nacional-popular* en Bolivia. Ese liderazgo de Morales luego del golpe de Estado ha continuado, aunque con modalidades diferentes que han recreado al *evismo* como sujeto histórico. Aquí estriba la vigencia de lo *nacional-popular* reflejado en estas nuevas movilizaciones resignificando, esta vez, al propio *evismo*. Quizás, ese potencial populista del *evismo* anclado en el liderazgo de Morales continúa galvanizando simbólicamente a los partidarios incluso en el exilio del expresidente boliviano en Buenos Aires. En una manifestación organizada por el MAS-IPSP, al escucharlo a la distancia a Evo Morales, la multitud vitoreó: **¡Evo, no estás solo!**

Referencias bibliográficas

- Calloni, S. (2013). *Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia*. Buenos Aires: Punto de Encuentro.
- García Linera, Á. (2006). *El evismo: lo nacional-popular en acción*. Buenos Aires: CLACSO.
- García Yapur, F. (2018). “Devenir estatal de lo campesino indígena”, *La Razón*, 10 de octubre.
- Komadina, J. y Geffroy, C. (2007). *El poder del movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e identidad del MAS en Cochabamba*. La Paz: PIEB.
- Laclau, E. (1978). *Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo*. México: Siglo XXI.
- (2002). *Catacresis y metáfora en la construcción de la identidad colectiva*, Conferencia dictada en Buenos Aires, 18 de julio.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (2004). *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: FCE.
- Mayorga, F. (2003). *Antinomias: el azaroso camino de la reforma política*. Cochabamba: CESU.
- Morales, E. (2006). “Discurso de posesión del presidente constitucional de la República, Evo Morales”, *Revista Relaciones Internacionales*, N° 30, Segmento Digital, primer semestre. Instituto de Relaciones Internacionales (IRI).
- Mouffe, C. y Errejón, I. (2015). *Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la democracia*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Sanz, L. (2015). *La influencia de Laclau y Mouffe en Podemos: hegemonía sin revolución*. Recuperado de <http://sinpermiso.info/textos/la-influencia-de-laclau-y-mouffe-enpodemos-hegemonia-sin-revolucion>.
- Torrez, Y. y Arce, C. (2014). *Construcción simbólica del Estado Plurinacional de Bolivia. Imaginarios políticos, discursos, rituales y celebraciones*. La Paz: PIEB.
- Touraine, A. (1989). *América Latina. Política y sociedad*. Madrid: Espasa.
- Zavaleta, R. (1988). *Clases sociales y conocimiento*. La Paz: Los Amigos del Libro.

Artículos Libres

Rafael Plancarte Escobar
shakespeare.x@hotmail.com
Universidad Autónoma
de Querétaro
México

Recibido: 06/11/2019
Aprobado: 07/02/2020

Autodefensas y teoría de juegos: explicando el levantamiento en Tierra Caliente

Resumen Durante 2013 y 2014 emergieron grupos de autodefensa en diferentes municipios de Michoacán. Este trabajo reconstruye, a partir de teoría de juegos, la interacción entre la sociedad michoacana de Tierra Caliente y los grupos del narcotráfico que dominaron la región en diferentes períodos -Los Valencia, Los Zetas, La Familia, Los Caballeros templarios-. La historia de esta interacción es dividida en tres procesos históricos, cada uno caracterizado por una lógica situacional diferente. El cambio de preferencias, producto del cambio de lógica situacional, explica en última instancia el surgimiento de los grupos de autodefensas.

Palabras clave Autodefensas, Cambio de Preferencias, Equilibrio de Nash, Narcotráfico, Tierra Caliente.

Abstract During 2013 and 2014, self-defense groups emerged in a number of municipalities of the state of Michoacán, Mexico. Through the use of game theory, this paper reconstructs the interaction between Michoacán's society of Tierra Caliente and the drug trafficking groups -Los Valencia, Los Zetas, La Familia, Los Caballeros Templarios- that dominated the region. The history of this interaction is divided into three historical processes, each characterized by a different situational logic. The change in preferences, which is a product of the change in situational logic, ultimately explains the emergence of the self-defence groups.

Introducción

¿Por qué surgieron las autodefensas de Michoacán en Tierra Caliente? Los **grupos de autodefensa michoacanos (AD)** de 2013-2014 son un fenómeno de acción colectiva que surge en el contexto de la violencia del narcotráfico. La violencia en Michoacán ha sido en parte resultado de las estrategias del ex presidente Felipe Calderón desde 2007, retomadas posteriormente por el ex presidente Enrique Peña (2012-2018) (Gil, 2014b: 8-9). La violencia también es producto de los diversos conflictos y desacuerdos entre grupos y cárteles por apropiarse de la región. En las causas de origen de las AD convergen motivaciones diferentes y hasta contrapuestas, pero los altos niveles de violencia social y el tipo de interacción con los grupos del narcotráfico son condiciones sin las cuales no se entiende su proceso de evolución. Este fenómeno de acción colectiva no es del todo novedoso, pero no fue hasta 2013 que el problema de las AD adquirió de nuevo notabilidad, gracias al impacto mediático que generó (en parte por el manejo de sus líderes) así como por la magnitud de los enfrentamientos.

Sólo un estudio comparado (Ragin, 1987, Rihoux y Ragin, 2009) por estados y municipios permitiría esclarecer qué conjunto configuracional de condiciones es necesario y/o suficiente para explicar la aparición de este fenómeno. Este trabajo tiene objetivos más acotados: pretende ofrecer una narrativa analítica (Bates, Greif, Levi, Rosenthal y Weingast, 2000) del caso de las AD de Tierra Caliente, Michoacán, surgidas en 2013 y 2014, a partir de un enfoque interpretativo-causal que reconstruye el surgimiento de este proceso de acción colectiva a través de la teoría de juegos. Nos centramos en algunos de los actores del conflicto, sus motivaciones, preferencias, y equilibrios generados. El argumento principal va en el sentido de que el surgimiento de las AD obedece a un cambio en la interacción entre la sociedad michoacana y los grupos del narcotráfico, es decir, al cambio de preferencias. Este cambio es producto tanto de choques externos como de cambios endógenos. Se plantea que los métodos cualitativos, como los estudios de caso, pueden tomar una modalidad explicativa (y no sólo interpretativa) a través de la teoría de juegos, el rastreo de procesos y las narrativas analíticas.

Estado del arte

La sociología política ha estado casi ausente en lo que se ha escrito sobre las AD michoacanas de 2013-2014. La mayor parte son estudios de caso, principalmente ensayos, y trabajos descriptivos que se centran en aspectos históricos, contextuales y generales del fenómeno, o que retoman el tema como parte de una discusión más amplia, como Moriconi (2013: 115-121), quien desde el pensamiento complejo aborda las AD en su condición de víctimas/cómplices. Algunos breves ensayos describen varias causas de origen (García y Lajous, 2014), los conflictos internos de las AD y los problemas asociados a su legalización (Maldonado, 2014b, Ríos, 2014), los desafíos y contradicciones del conflicto de las AD (Maldonado, 2014a) o las estrategias del Gobierno Federal de intervención en Michoacán en 2014 (Maldonado, 2015). Entre los estudios de caso más representativos resaltan los de Hernández (2014), Rivera (2014), Fuentes (2015), Fuentes y Paleta (2015), Enrique Guerra (2015), Pérez (2015), Rodríguez (2015), Fazio (2016), Althaus y Dudley (2014), Gledhill, (2017) y el informe de la CNDH (2015), trabajos que permiten una buena aproximación general y contextual al conflicto. Mención especial merece el trabajo de Edgar Guerra (2017) que desde la sociología política y la teoría sistémica analiza la toma de decisiones y el proceso organizativo e institucional de las AD de Tepalcatepec. Además, los trabajos de Fuentes (2015), Fuentes y Paleta (2015), Guerra (2017), y el informe de la CNDH (2015), son algunos de los pocos trabajos que han realizado etnografía y entrevistas a pobladores.

Algunos artículos y trabajos monográficos han aventurado hipótesis sobre las causas del surgimiento que de una u otra manera apuntan al dominio y excesos de **Los Caballeros Templarios (LCT)**. Estas hipótesis van desde control de la producción agrícola por parte de LCT (García y Lajous, 2014), el tipo de violencia de los LCT (Pérez, 2015), los altos niveles de abusos (Guerra, 2015, Rodríguez, 2015), la ausencia del Estado y el aumento de las actividades delictivas de LCT (Althaus y Dudley, 2014), el aumento significativo de los secuestros, homicidios, violaciones y extorsiones en Michoacán en comparación con años anteriores (CNDH, 2015: 179-182), el sobrepaso del umbral de tolerancia de la sociedad michoacana (Rivera, 2014), hasta la ruptura con el equilibrio previo entre comunidades y grupos del crimen a partir de los excesos de LCT (Fuentes, 2015, Fuentes y Paleta, 2015). Varios trabajos hacen énfasis en que las violaciones a mujeres fueron el factor determinante en la decisión de rebelarse (CNDH, 2015; Fuentes, 2015; Fuentes y Paleta, 2015; Mireles, 2017). A estas causas hay que añadir el robo y explotación ilegal de recursos naturales de comunidades indígenas para el caso de las policías comunitarias, como las de Cherán y Los Reyes (Fuentes y Paleta, 2015), así como en diversos municipios de La Costa (Guillén y Torres, 2014). Gledhill (2013), aunque no diferencia entre AD y *policías comunitarias*, se enfoca en los casos de Ostula y Cherán y argumenta que la causa de su surgimiento reside en la impregnación del crimen en un estado debilitado por el modelo neoliberal. Finalmente, el trabajo de Philipps (2016), quizá el único trabajo cuantitativo, hace un esfuerzo desde la estadística por explicar el surgimiento de las AD de 2013 en 13 estados, incluyendo Michoacán, y asume que la variable principal es la desigualdad y un mecanismo de privación relativa.

Marco Teórico

Hacer una historia analítica de las AD michoacanas pasa por fraccionar este fenómeno en sus componentes procesuales en el sentido de Geddes (2003). Así, siguiendo a esta autora (2003: 40), la **teoría de juegos** permite la reconstrucción de diferentes subprocesos que son parte de una pregunta mayor: cómo se dio la interacción entre los actores clave del proceso de emergencia de las AD michoacanas. Se utiliza **teoría de juegos estática** pero cada juego es acompañado de su versión secuencial. Dos conceptos son suficientes para este marco: *estrategia dominante* y *equilibrio de Nash*. Aquí, una *estrategia dominante*, siguiendo a Aguiar, Barragán y Lara (2008: 209), se entiende como lo mejor que puede hacer cada actor con respecto a la decisión del otro u otros jugadores, y por *equilibrio de Nash*, como afirma Colomer, una situación social en la que *ningún actor tiene incentivos para alterar su decisión mediante un cambio unilateral de su estrategia* (2009: 435). Los equilibrios, al ser el resultado de diferentes elecciones, no siempre reflejan situaciones benéficas, ya que dependen de las preferencias de los actores involucrados, quienes pueden tener deseos y estrategias muy diferentes, y generarse malos resultados para un jugador o para todos. Además, el cambio de preferencias se puede deber a diferentes motivos y razones, pero dada la complejidad del caso, se muestran sólo las razones más importantes para esto.

Metodología

Este artículo utiliza una estrategia metodológica de corte **cualitativo**. Las *narrativas analíticas* son un enfoque que representa bien las alternativas que McKeown (1999) considera para hacer estudios cualitativos con anhelos explicativos. Este enfoque, como lo dicen Bates *et al.* (2000), trata de conciliar la generalidad pretendida por la elección ra-

cional con los objetivos de los estudios de caso: la **profundidad**, la **interpretación** y la **reconstrucción de historias**. Para las narrativas analíticas la realidad social es un rompecabezas fragmentado que a primera vista es difuso y complejo, pero que puede ser reconstruido analíticamente a través de explicaciones parsimoniosas. Para Bates *et al.* (2000: 697) esta forma de ordenar rompecabezas pretende enlazar un acontecimiento que parece único con los métodos analíticos de las ciencias sociales, de tal suerte que lo descriptivo e ideográfico son sólo un primer paso y no un fin en sí. Se sigue en este trabajo la tradición que autores como Josep Colomer (1998) iniciaron para el estudio de los procesos políticos desde los modelos de teoría de juegos. El *proceso de construcción* de modelos para esta narrativa analítica fue el siguiente: primero, se **identificó la lógica situacional** en la que se vieron envueltos los actores de este conflicto en forma de procesos o episodios políticos. Después se **identificaron los actores** involucrados en cada lógica situacional. El siguiente paso fue **identificar las posibilidades de acción** permitidas por la lógica situacional. Después se **reconstruyeron las estrategias** de los actores. Con el análisis ideográfico y periodístico se **generaron las preferencias** para cada actor. Una vez que se identificaron las preferencias de los dos actores involucrados se pasó a la **generación de un modelo** (juego) que permita entender esa situación. El trabajo es novedoso en dos sentidos. En primer lugar, es uno de los trabajos pioneros en abordar el surgimiento de las AD desde las herramientas de la sociología política. En segundo lugar, es el primer esfuerzo por reconstruir una parte de la historia de este conflicto desde la narrativa analítica.

Contradicciones estructurales y narcotráfico en Michoacán

No es evidente cuál fue el mecanismo que desencadenó esta lucha entre cárteles a nivel nacional, pero es claro que la intervención del Gobierno Federal, la pérdida de pactos y el débil tejido social deben tomarse en cuenta. Esta lucha se caracteriza, como sostiene Williams, por ser una *competencia intensiva por el control territorial ha estado acompañada por lo que se podría catalogar como una carrera armamentista interorganizacional, en la que los cárteles buscan aumentar su habilidad para imponer la fuerza* (2010: 24). Desde el inicio de esta guerra las preferencias de los grupos del crimen organizado frente al estado (de desafío) y frente a la sociedad, muestran una tendencia a la no cooperación, a la que podemos entender como implementación sistemática de la violencia. En el lenguaje de la cooperación/no cooperación, este actor muestra preferencias totalmente no cooperativas que se verían de la siguiente manera:

Tabla 1. **Preferencias del narcotráfico (en 1)**

Narcotráfico	Otros grupos y sociedad	Valores
NC	C	4
NC	NC	3
C	C	2
C	NC	1

Fuente: elaboración propia

Estas preferencias pueden llevar a un juego muy conflictivo que representa una situación peor que la del *Dilema del Prisionero* o el *Juego del Gallina*. **Los Zetas** fueron los prime-

ros en llevar a los demás actores a esta lógica. Una consecuencia de esto es que controlar el clima de violencia pasa por tratar de evitar este tipo de preferencias transformándolas en otras diferentes, incluso a las del **Dilema del Prisionero**, pues en este juego existe la posibilidad de llegar a una situación de paz (el *Óptimo de Pareto*).

Para A. Schedler (2015: 171-174), si bien ningún Estado moderno logra monopolizar totalmente la violencia, el estado mexicano, actor que otrora tuvo la capacidad de lograr equilibrios sociales de tranquilidad, es hoy un estado débil, colonizado parcialmente por la criminalidad, represivo, e indiferente. La **desigualdad**, un proceso que para el informe de Oxfam (2015) y autores como Piketty (2014) es de tendencia global, es otra clave para entender la agudización de estos desafíos institucionales. Muchos de los actores que conformaron AD son presa de la marginación, las relaciones de poder y la imposición de los intereses del narcotráfico. Habría, además, siguiendo a Phillips (2016), un efecto de **privación relativa** en las comunidades donde aparecieron AD.

Como lo ha descrito Maldonado (2012: 7-8), la crisis de seguridad está relacionada con los ajustes estructurales y con la reconfiguración de las relaciones sociales y económicas a partir de la lógica neoliberal. Según este autor (2012: 15-16), en la década de los 80s la crisis financiera de la región latinoamericana y particularmente en México fortaleció al crimen organizado a través de la pobreza y el desempleo. Sin embargo, debido a la estabilidad social, por mucho tiempo el tema del narcotráfico no fue relevante para la agenda pública nacional. Una vez que inició la llamada *guerra contra el narcotráfico* en 2007, Michoacán ha sido uno de los escenarios más violentos.

Michoacán es un estado fuertemente religioso que durante el conflicto de la **guerra cristera** ocurrida entre 1926 y 1929 suministró casi 12.000 partidarios (Gil, 2015: 136). Sus zonas históricamente *ingobernables* se conforman por Tierra Caliente, La Costa y la Sierra Madre del Sur (Maldonado, 2012). Las tres fueron crisoles de AD en este conflicto y habría que sumarle la región de la Meseta Purépecha en donde hay fuerte presencia indígena. La Tierra Caliente ha sido siempre una región desatendida en donde se han refugiado rebeldes y delincuentes (Gil, 2015: 54) y desde hace décadas es gobernada por el crimen organizado. Algo similar ocurre con la Sierra Sur y la Costa, regiones ricas en recursos naturales donde imperan los *narcopueblos* y una economía de la droga de la cual mestizos e indígenas son parte (Gil, 2015: 57-58). Según el CONEVAL (2012: 43), para 2012 -previo al surgimiento de las AD- 54,4% de la población tenía algún tipo de pobreza y de acuerdo al PNUD (2015: 6), para 2012 el IDH en Michoacán era de 0,700, uno de los más bajos del país. En el momento el que surgieron las AD, Michoacán era el segundo productor nacional de limones y el primero en aguacates (Althaus y Dudley, 2014: 4).

Como dice Rivera (2014: 5) Michoacán ha sido un estado en el que históricamente se ha cultivado marihuana y amapola, pues ha representado una opción en un contexto caracterizado por la pobreza, y esto ha reforzado los vínculos entre sociedad y narco. Ante la ausencia de otras oportunidades, el narcotráfico ha representado la posibilidad de ascenso social (Maldonado, 2012: 16). Desde 1940 los negocios ilegales fueron tolerados por la sociedad michoacana y por un estado que, como dice Rivera, promovió durante décadas *el statu quo de paz en la ilegalidad* (2014: 5). Durante años, el crimen organizado se implantó en las redes institucionales de Michoacán. Parafraseando a Rivera (2014: 4) muchos gobiernos municipales estuvieron coludidos con **La Familia** y posteriormente con LCT a través del pago de cuotas, la inserción de funcionarios en puestos gubernamentales vinculados al crimen, y a través de la misma complicidad. Para 2013, según Gil (2013a: 9) el 70% de los municipios de Michoacán estaban tomados por LCT, mientras que el otro 30% se repartía entre **La Familia Michoacana** y el **Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)**.

Historia de la relación entre sociedad michoacana y narcotráfico

La historia de los cárteles michoacanos puede ser dividida en **cinco períodos** según un informe de la PGR retomado por la periodista Anabel Hernández. Según Hernández (2013: 8) en la **primera etapa** Carlos Rosales Mendoza, *El Tísico*, reunió a los grupos del crimen organizado y la **segunda etapa** comenzó con la alianza de Cornelio Valencia del *Cártel de Los Valencia* (o *Cártel del Milenio*). La **tercera etapa** inició en 2002 con la disociación de Carlos Rosales de *Los Valencia* y su coalición con el Osiel Cárdenas (del *Cártel del Golfo*), alianza que buscaba expulsar al *Cártel del Milenio* de la región, formando *La Empresa* (Hernández, 2013: 8). Debido a la ventaja organizativa de *Los Zetas*, el *Cártel de Los Valencia* fue fácilmente derrotado (Rodríguez, 2015: 24). Con el arresto de Carlos Rosales en 2003 comenzó la **cuarta etapa**, y en 2006, en conflicto con el *Cártel del Golfo* (ahora grupo contrario), *La Empresa* se transformó en *La Familia* (Hernández, 2013: 8). Siguiendo a Althaus y Dudley (2014: 17-18), aunque no era una organización guerrillera, *La Familia* se valía de un discurso ideológico con el que se hacían ver como los protectores de las comunidades. La **quinta etapa** comenzó con el supuesto deceso en combate de Nazario Moreno (2009) y para 2011 hicieron su aparición LCT, siguiendo también una retórica religiosa y disputándole la región a *La Familia* (Hernández, 2013: 8-9).

Entender la relación entre la sociedad michoacana y el narco pasa por plantearla como un problema de cooperación o de la ausencia de ésta. Como ha dicho Schedler (2015: 123) al igual que las guerrillas, los grupos del crimen organizado instauran diferentes tipos de pactos sociales con la población (aunque muchas veces pueden prescindir de ese apoyo), y la colaboración o conflicto que se establece depende del tipo de interacción generada, y de qué tanto necesiten de la sociedad. Estos equilibrios sociales pueden cambiar con el tiempo y están sujetos al tipo de preferencias, motivaciones, pagos y choques externos. A diferencia de los gobiernos y funcionarios, la sociedad es un grupo con mayores dimensiones, con la potencialidad de realizar acciones colectivas como lo demostraron las AD. Pero hay que entender por qué las AD tardaron tanto en decidirse enfrentar a LCT, cuáles son los motivos detrás de esto y cómo fue la interacción estratégica entre estos dos actores colectivos. Si bien el fortalecimiento de *La Familia* y posteriormente LCT no se explica sin la pasividad y colaboración de todos los órdenes de gobierno, tampoco se explica sin la pasividad y colaboración de la sociedad michoacana. La aparición de las AD michoacanas es en parte una consecuencia de la complicidad de la sociedad con el narco, ya que, como afirma Moriconi *los narcos se pudieron consolidar porque la sociedad los aceptó en su seno* (2013: 121).

Como lo ha dicho Fuentes (2015: 72) durante décadas el narco estableció redes económicas a través de actividades principalmente ilícitas, y se fortaleció el desarrollo económico de Michoacán, el empleo y un equilibrio social sustentado en códigos de honor y legitimidad. Siguiendo a Maldonado (2012: 13-14) la zona de Tierra Caliente se ha caracterizado históricamente por la simbiosis entre la cultura regional ranchera y la identidad del narco. Incluso, en Tepalcatepec, el narcotráfico ha tenido más legitimidad que los políticos (Pérez, 2001: 132) pero esto aplica igualmente para otras zonas de Tierra Caliente y Michoacán. El crimen organizado ha desarrollado actividades propias del Estado, normalizando la relación entre la sociedad y el narcotráfico, pues, siguiendo a Pérez, *la presencia de organizaciones de narcotraficantes en la región michoacana es continua, y estas han sabido aprovechar los citados déficits para ofrecer una imagen de arraigo en la comunidad e, incluso, un perfil vigilante* (2015: 168).

Podemos interpretar que, históricamente, la sociedad michoacana, particularmente los pobladores de Tierra Caliente, ha tenido dos opciones frente al crimen organizado: elegir entre la **pasividad (P)** y la **no cooperación (NC)**. La **pasividad** puede significar muchas cosas: va desde la tolerancia y permisibilidad hasta la complicidad de la sociedad

con el narcotráfico. La **no cooperación**, de igual manera, va desde la denuncia institucional hasta el desafío y el encaramiento directo a través de la conformación de AD. La **pasividad** trae beneficios directos a la sociedad, de corto plazo, al permitirle estabilidad y paz en la no violencia, y al darle también réditos económicos a quienes cooperan con el sistema económico impuesto por el narcotráfico. La **no cooperación** conlleva enfrentarse a los grupos delictivos, así como tener una mayor preocupación por el largo plazo y el bienestar colectivo. Por su parte, puede interpretarse que el crimen organizado, frente a la sociedad, podía optar entre una actitud de **convivencia (C)** o una actitud de **ataque (A)**. La opción de **convivencia** busca tener a una sociedad que no se oponga al negocio de las drogas y que incluso pueda ser premiada por su colaboración y pasividad. También puede ser entendida como una posición de respeto al nivel de tolerancia social. La posición de **ataque** conlleva una opción amenazante hacia la sociedad, sobre todo si ésta busca colaborar con las autoridades. Dependiendo el contexto, esta posición le puede permitir tener ingresos extras, al incluir en su repertorio de actividades la **extorsión**, el **secuestro** y el **cobro de piso**, pero el costo que le genera es la posible pérdida de tolerancia y pasividad de la sociedad.

El cártel de Los Valencia

El *Cártel de Los Valencia*, formado probablemente en los 70 (Gil, 2015) tuvo su auge en los 80 (Gil, 2015, Rodríguez, 2015) y fue en su momento el grupo delictivo más poderoso de Michoacán hasta entrada la década del 2000 (Maldonado, 2012: 28) y particularmente de Tierra Caliente. Fue un grupo creado por familias oriundas que se fortaleció gracias a la exportación de marihuana y cocaína en alianza con otros cárteles como el de Sinaloa (Maldonado, 2012: 24). En su época más importante, el *Cártel de Los Valencia* tuvo acuerdos con los demás grupos criminales del país para el envío de cocaína a Estados Unidos (Gil, 2015: 77). Este cártel gozó de protección gubernamental, realizó inversiones, financió campañas e incursionó en diversos negocios (Maldonado, 2012: 24-25). Durante varios años pasó inadvertido (Gil, 2015: 76, Fernández, 2001: 173, Valdés, 2016: 263) y fueron una muestra de la *Pax Narca* que imperaba (Gil, 2015: 77). Así los describe Maldonado (2012: 23):

Eran aceptados como buenos intermediarios y eran gente de respeto, como cualquier persona con honor, disciplina y trabajo. Los jóvenes hijos aprendieron de sus padres el arte de comprar y vender, sabiendo lo que la gente demandaba para sus necesidades laborales o suntuarias.

A diferencia de *Los Zetas*, *La Familia* y *LCT*, *Los Valencia* no se desarrollaron en un contexto caracterizado por la lucha entre cárteles y operaron en relativa tranquilidad. Los Valencia *habían mantenido un bajo perfil y mucha discreción en sus negocios y en su vida pública. Pasaban como aguacateros y rancheros. Pero en realidad se trataba del grupo que más droga introducía a territorio estadounidense* (Gil, 2015: 76). Hasta 1990, el Gobierno Federal no tuvo conocimiento de su existencia, según Valdés (2016: 262). No eran ostentosos y buscaban *no entrar en conflicto con el resto de las organizaciones para no “calentar” la plaza* (Valdés, 2016: 263). De ser cierto esto, se habrían gestado las condiciones necesarias para una interacción pacífica entre sociedad y narco. Desde los 80 y 90 eran conocidos los casos de secuestro y extorsión en Michoacán, a ricos y pobres, como un medio de obtener ganancias en *tiempos difíciles* para el narco (Gil, 2015: 69), pero puede asumirse que el umbral de tolerancia social no había sido sobrepasado. En nuestro modelo analítico, este umbral de tolerancia se rompe cuando los grupos del narco utilizan otros tipos de violencia (principalmente la sexual) y comienzan a implementar el cobro de piso

y la intervención en el aparato productivo. No existe información que muestre que *Los Valencia* utilizaba un sistema de violencia y extorsión igual al que *Los Zetas*, *La Familia* y LCT implementaron años después contra la sociedad, aunque sí usaron la violencia contra otros cárteles (Maldonado, 2012, p. 29; Gil, 2015, p. 79).

Su modelo de interacción con la sociedad estaba pues más cercano a uno de *legitimidad social* que de *explotación*, siguiendo la dicotomía de Schedler (2015: 124). En este cártel se mantenían aún códigos de honor y la búsqueda de pactos sociales. Por ejemplo, según Valdés: *La buena voluntad y la disposición de Los Valencia de llevar la fiesta en paz con todos los grupos del narcotráfico no sirvió de nada frente al ánimo expansionista de Los Zetas* (2016: 265). Si frente a otros grupos criminales mostraban disposición a cooperar, es evidente que su relación con la sociedad no podía basarse en la agresión. No tenían incentivos para excederse pues su motivación económica estaba matizada por códigos de honor, pactos, y la estabilidad económica. A su vez, la sociedad aceptaba sus reglas y era a veces parte de esa lógica. Este equilibrio social sería después alterado por *Los Zetas*. Es importante recalcar las raíces locales de este grupo delictivo ya que posteriormente tanto La Familia como LCT trataron de ganarse a los pobladores a través de un discurso en el que se resaltaba que su condición michoacana era una garantía de que no violentarían a la población, lo cual resultó falso, pero creó una expectativa razonable para la definición de estrategias de la sociedad.

Así relata Rivera (2014: 5-6) la estabilidad michoacana antes del conflicto entre *Los Valencia* y *Los Zetas*:

Durante cuatro décadas esas actividades se desarrollaron con relativa tranquilidad [...] toleradas por las autoridades, mediante sobornos, y aceptadas por buena parte de los habitantes locales, que veían en los cultivos de droga una fuente de derrama económica directa o indirecta. [...] A partir de 2002 o 2003 muchos michoacanos empezaron a dejar de ver al narcotráfico como un fenómeno cercano pero inocuo; en adelante, la delincuencia organizada estaría asociada a tiroteos, amenazas, pago forzado de cuotas, secuestros y, en no pocos casos, a ejecuciones de personas que nada tenían que ver con la delincuencia, salvo como víctimas.

1. Para facilitar la lectura de las tablas de preferencias, cada opción de cada actor se acompaña de las letras **(c)** o **(nc)** para hacer un paralelismo entre las preferencias de cada actor y el uso estándar en teoría de juegos de la dicotomía cooperar/no cooperar.

Tabla 2. Preferencias de la sociedad y el narcotráfico, era de Los Valencia¹

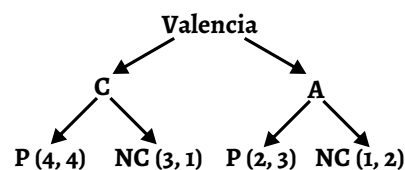
	Sociedad	Valencia	Pagos
Sociedad	P (c)	C (c)	4
	NC (nc)	C (c)	3
	P (c)	A (nc)	2
	NC (nc)	A (nc)	1
	Sociedad	Valencia	
Valencia	P (c)	C (c)	4
	P (c)	A (nc)	3
	NC (nc)	A (nc)	2
	NC (nc)	C (c)	1
Fuente: elaboración propia			

La motivación de la sociedad (en 1) es cortoplacista y busca la pasividad social. Lo primero que prefiere es optar por la pasividad mientras que el narcotráfico también busca una actitud de convivencia. La principal motivación de la sociedad es la estabilidad y

cree que la mejor manera de lograr esto es a través de la **pasividad**. De no ser posible lo primero, la sociedad desea que el narcotráfico se mantenga en su posición de convivencia y no la ataque, mientras la sociedad opta por una actitud de **no cooperación**. Como se dijo, el *Cártel de Los Valencia* no se conoció por su exceso de métodos violentos contra la sociedad de ahí que cabe asumir esto como segunda preferencia. En tercer lugar, de no ser posible ninguna actitud de **convivencia**, y al ser inexorable tener que tratar con un narcotráfico agresivo, la sociedad prefiere mantenerse en la **pasividad**, bajo cierta ilusión de que una actitud no defensiva pueda coadyuvar a regresar a la situación de paz. Lo último que prefiere la sociedad es una situación de conflicto en donde tanto ésta como narcotráfico optan por su estrategia de enfrentamiento. Sus preferencias están muy orientadas a que, a través de la pasividad, se recupere la paz social.

Como todo grupo delictivo, la motivación de *Los Valencia* es fuertemente económica, pero está matizada por algunos códigos de honor y por el respeto al umbral de tolerancia social. Además, este cártel no operaba en un contexto de competencia exacerbada con otros grupos. Por eso en este modelo narcotráfico prefiere, en primer lugar, también una situación de **convivencia** mientras interactúa con una sociedad pasiva. En segundo lugar, opta por su estrategia de **ataque** mientras la sociedad se mantiene pasiva y/o cooperativa. Mantener esto en segundo lugar refleja bien que aun cuando prefiere en primer lugar la **cooperación** mutua, su naturaleza instrumental (ganancia económica) sigue estando presente. En tercer lugar, se mantiene en su posición de ataque independientemente de lo que haga sociedad, que en este caso opta por actitud no cooperativa. Lo último que prefiere narcotráfico es una actitud de convivencia mientras se enfrenta a una sociedad no cooperativa, pues esto sería una especie de *tonto del juego*. Esas preferencias corresponden principalmente al período de dominio de Los Valencia, aproximadamente de los 70 al 2000. Los siguientes juegos representan esta interacción. El primer juego es *secuencial*, pues es claro que quien tiene el privilegio de la primera movida, son los grupos del narcotráfico, en donde la Sociedad simplemente reacciona ante las estrategias del narco.

Figura 1. Juego entre sociedad (1) y Los Valencia (2)



Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Juego estático entre sociedad (en 1) y narcotráfico (en 2)

	C	A
P	4,4	2,3
NC	3,1	1,2

Fuente: elaboración propia

2. Nótese cómo (3, 1) no es equilibrio porque sociedad puede optar por P (4). (1, 2) tampoco lo es ya que sociedad puede optar por P (2). Finalmente, (2, 3) tampoco lo es ya que narcotráfico puede optar por C (4). Esta misma lógica debe seguirse para los juegos posteriores.

El resultado de esta interacción es de estabilidad y respeto al umbral de tolerancia social, mostrada en el único equilibrio de Nash del juego estático en (4, 4)². Por su parte, la sociedad tiene estrategia dominante en **pasividad**. Nótese que, frente a cualquier decisión del narcotráfico, la sociedad está mejor si opta por la pasividad, lo cual muestra su fuerte motivación hacia una situación de estabilidad y paz. El narcotráfico no tiene estrategia dominante, lo que significa que no está dispuesto a no atacar a una sociedad que no coopera. Finalmente, sabe que si opta por **ataque** la sociedad buscará **pasividad**, y tendrá un resultado muy decente (3), sin embargo prefiere el mejor resultado que le da (4) en la situación de convivencia.

Según Astorga y Shirk (2010: 16) desde el 2000, la competencia y violencia entre cárteles se desató gracias a la ya mencionada apertura democrática, pero también a factores como la reorganización de las agencias policiacas iniciada a principios de los 80s, y la intervención gubernamental. De acuerdo a Maldonado (2012: 28), el conflicto entre cárteles que marcó el alza a la violencia en Michoacán se dio cuando Joaquín Guzmán, líder del *Cártel de Sinaloa*, decidió contenderle a Osiel Cárdenas del *Cártel del Golfo* la plaza de Tamaulipas con ayuda del cártel de *Los Valencia*. El *Cártel del Golfo* buscó apropiarse de la región michoacana a través de *Los Zetas* (Rivera, 2014: 6) y desde 2001 fue fuerte la pugna entre *Los Zetas* y *Los Valencia* (Maldonado, 2012: 28-29). El cártel de *Los Valencia* comenzó a perder fuerza en el año 2000 y con la captura de uno de sus líderes más importantes en 2003, terminó su dominio (Gil, 2015: 83-86). Pero *Los Zetas* son sólo el reflejo del cambio de motivaciones en el crimen organizado y de una dinámica de fuerte competencia donde se impone la ganancia económica a costa de la legitimidad social. En esta guerra, el secuestro, la extorsión y el cobro de piso han sido fuentes alternativas de ingreso.

Cambio de preferencias y creencias erradas sobre la paz: *Los Zetas*, La Familia y LCT

En palabras de Astorga y Shirk (2010: 7), aunque la competencia entre cárteles siempre ha existido, anteriormente no operaban en una escala como la actual, no eran desafiados por el Estado y no utilizaban un nivel de violencia tan alto. Con el arribo de *Los Zetas* en 2001 la violencia se elevó entre grupos del crimen y hacia a la sociedad (Moriconi, 2013: 118). La siguiente cita del periodista Gil (2015: 82) narra así el arribo de *Los Zetas*: *lo que antes parecía inaudito ahora era una realidad: grandes y muy bien organizadas bandas de narcotraficantes se habían declarado la guerra, disputándose la Tierra Caliente*. Durante cinco años se impuso la implacable ley del más fuerte y violento propia de los mercados ilegales (Valdés, 2016: 266), y proliferó la extorsión hacia productores y todo tipo de negocios, aumentando el resentimiento social (Valdés, 2016: 267). A diferencia de *Los Valencia*, el dominio de *Los Zetas* cubría todos los negocios ilícitos y se valían del terror y la agresión directa contra la población a través del secuestro, el cobro de piso y la extorsión (Rivera, 2014: 6, Rodríguez, 2015: 24). Con el arribo de *Los Zetas* comenzó a normalizarse el cobro de seguridad (Fuentes, 2015: 73) y un modelo depredador de la sociedad (Valdés, 2016: 260). Siguiendo a Williams (2010: 25), *Los Zetas* fueron los pioneros en la innovación y sistematización de nuevos métodos de violencia, lo cual sería después reproducido por otros grupos del crimen organizado.

Un mecanismo que explica el cambio de preferencias en los cárteles hacia posiciones más violentas es el **choque externo** derivado de las transformaciones sociales y económicas promovidas por la dinámica neoliberal (Fuentes, 2015: 70; Maldonado, 2012: 15-17). Esta dinámica ofreció la oportunidad a los cárteles mexicanos de diversificar sus actividades criminales (Fuentes, 2015: 70). Además, en los últimos años los ajustes neoliberales afectaron la producción agrícola y la estabilidad de las élites michoacanas, situación

de la que sacaron provecho los grupos del crimen (Maldonado, 2012, p. 17). Los Zetas (y posteriormente La Familia y LCT) representan este cambio hacia motivaciones más instrumentales que pretenden la ganancia a costa de la convivencia o de legitimidad social. Schedler (2015, p. 54), siguiendo la distinción de Collier y Hoeffler entre agravios y avaricia (2004, pp. 564-565), ha dilucidado la diferencia entre violencia *política* y violencia *criminal*: mientras la primera obedece al agravio y a la percepción moral de injusticias, la segunda, que le corresponde a los grupos del crimen organizado, está guiada por la avaricia y los intereses de corto plazo. Para Schedler, el conflicto del narcotráfico en México se asemeja a una guerra civil, pero a diferencia de las clásicas guerras civiles en las que el componente ideológico y motivos políticos tienen relevancia, las motivaciones del crimen organizado se orientan principalmente a obtener ganancias económicas (Schedler, 2015: 54-55). La guerra contra el narcotráfico, la dinámica neoliberal, y la lucha entre grupos delictivos llevaron a *Los Zetas* a encontrar en la sociedad otra fuente de financiamiento.

La cooperación de la sociedad durante el reinado de *Los Valencia* no era impuesta, pero esto cambió con el arribo de *Los Zetas*. Las estructuras de interacción jerárquicas (Millán, 2015: 270), como las imperantes con *Los Zetas*, *La Familia* y LCT, hacían difícil la cooperación voluntaria y ésta se tenía que dar a partir de incentivos selectivos negativos. Sin embargo, un modelo jerárquico de convivencia social no puede generar equilibrios de cooperación de larga duración. Frente al cartel de Los Valencia la sociedad era pasiva, pero frente a Los Zetas, la sociedad además de pasiva era temerosa. Así, un segundo momento en esta interacción sería uno previo al surgimiento de las ADs. En esta situación se da el cambio radical de preferencias ya se discutido más arriba. Este cambio no es escalonado, debido a que es un actor totalmente distinto.

Tabla 4. Preferencias de Los Zetas, La Familia, LCT (en 2)

Sociedad	Grupos del narco	Preferencias
P	A	4
NC	A	3
P	C	2
NC	C	1
Fuente: elaboración propia		

Entre el 2005 y 2006 las ejecuciones en Michoacán aumentaron un 75% (Gil, 2015: 87). *La Familia Michoacana*, surgida en 2006, fue producto del rompimiento con *Los Zetas*, y su principal objetivo anunciado fue en el de desterrar a *Los Zetas* (Rivera, 2014: 6) y terminar sus agresiones contra la sociedad (Althaus y Dudley, 2014: 6). En 2006 *La Familia* hizo público un desplegado donde decía que *La Familia está integrada “por trabajadores de la región Tierra Caliente organizados por la necesidad de terminar con la opresión, la humillación a la que han estado sometidos por la gente que siempre ha detentado el poder”* (Valdés, 2016:267) haciendo alusión a *Los Zetas*. Un aproximado de ejecuciones de los dos cárteles entre 2006 y 2011 es de **4.927** (Gil, 2015: 90). Como se sabe, el rasgo más característico de este grupo fue su discurso religioso. Este grupo, y posteriormente LCT, vendieron bien en un inicio la idea de que su conflicto era contra quienes agredían a la sociedad, y ofrecieron protección a los civiles a cambio de su aceptación y pasividad (Moriconi, 2013: 118-119), con lo cual ganaron adherentes y legitimidad. La habilidad tanto de *La Familia* como de

LCT para penetrar en el gobierno municipal y estatal fue una de las causas que propiciaron su dispersión y fortaleza en Michoacán (Guerra, 2015: 15), pero también demostraron una importante capacidad de organización social y de crear redes de capital social negativo. En algún momento llegaron a dominar alrededor del 70% de los municipios y controlaron la política y economía de una gran parte del estado (Gil, 2015: 111-112). Según Rivera (2014: 7), su aceptación se sustentaba en las amenazas, pero su intención de expulsar a Los Zetas también tuvo resonancia, además de que se valían de incentivos y recompensas a quienes colaboraban con ellos, ya que contaban con el apoyo de algunos sectores, por ejemplo, taxistas y comerciantes informales (Rivera, 2014: 11). También, para Moriconi (2013: 119-120) la lucha entre los grupos por el control del negocio hizo que varios criminales emigraran de la región y *La Familia* tuvo que encontrar una fuente de explotación en el pago de impuestos y cuotas a civiles.

Es de suponer que la sociedad creía que sólo grupos externos como *Los Zetas* podrían tomar una posición de ataque frente a la sociedad. Por eso algunos sectores de la sociedad michoacana le dieron su apoyo a *La Familia*, pues *los vieron como libertadores al haber expulsado a los Zetas, pero pronto el grupo comenzó a utilizar los mismos métodos sobre la población civil* (Rodríguez, 2015: 25). Se entiende así la constante actitud pasiva por parte de la sociedad pues se interpreta que con el regreso de grupos michoacanos se esperaba un retorno a la situación anterior, en donde si bien existía violencia, la interacción con el narcotráfico era de otro tipo. El arribo de *La Familia* pudo ser esta señal. La apuesta por la **pasividad** por parte de la sociedad sería entonces producto de la expectativa de regresar al período de paz anterior, donde existía un modelo de **cooperación** entre narco y sociedad.

La intervención federal de 2009 desembocó en una espiral de violencia entre las fuerzas del orden y *La Familia*, logrando la detención de numerosos miembros, a lo que seguiría después un rompimiento organizacional en 2011, dando origen a LCT (Rivera, 2014: 8), quienes continuaron con su actitud hostil hacia la sociedad y con su discurso religioso. Algunas narraciones afirman que LCT implementaron un modelo más explotador que el de *La Familia*. Esto explicaría por qué las AD no surgieron durante el periodo en que reinó *La Familia*. Por ejemplo, un AD de avanzada edad narra y hace la comparativa:

Mire, La Familia, sí hacían sus tarugadas ellos, de mandar lo que ellos hacían, mota y todo lo que hacían, pero no perjudicaban a la gente, una. Dos, ellos a la gente trabajadora los dejaban con su trabajo, les daban trabajo a unos, y a otros no, y así. Pero tampoco nosotros no nos metíamos con ellos. Y estas gentes cuando anduvieron aquí, que cayeron aquí, mandaron una avioneta [...] a que tirara volantes aquí, y allí fue donde nosotros la regamos porque los dejamos que se ampliaran aquí, y empezaron ahí que no iban a hacer nada [...] pero nomás empezaron a engancharse, a engancharse, y cómo andamos ahorita (VANGUARDIA MX, 2014).

LCT continuaron con el dominio a las estructuras políticas del estado. Incluso impusieron a la población su propio sistema de justicia con el objetivo de establecer cuotas (La Saga, 2014). Al igual que hizo *La Familia*, al principio su promesa iba en el sentido de velar por la población, y no realizar extorsiones ni secuestros (Moriconi, 2013: 118-119). Pero como ha afirmado Schedler (2015: 124), el tipo de interacción con la sociedad que rápidamente implementaron LCT se fundaba, al igual que hicieron *Los Zetas*, en la opresión total. Al igual que *Los Zetas* y *La Familia*, LCT exigieron el pago de impuestos, el cobro de piso y operaron la extorsión y el secuestro, *sin embargo, el propio éxito del sistema templario de explotación le condujo a su límite. La depredación creció más allá del umbral que podía tolerar la población sometida* (Rivera, 2014: 11). Para el ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy, LCT rompieron los equilibrios del pasado en los que la agresión se daba

principalmente entre grupos del narcotráfico (Gil, 2014c: 15). Así es narrado por el periodista José Gil (2013a: 9):

Pobladores de Tierra Caliente relatan que hace un par de años los pistoleros de Los Caballeros Templarios llegaron a prometerles que los cuidarían de la inseguridad que padecen desde hace 12 años, cuando se apoderó de la región La Familia Michoacana [...] A cambio les pedirían una cuota. La mayoría de los habitantes aceptó, sin saber que pronto sus pertenencias serían robadas, y sus familias, víctimas de la violencia.

Tabla 5. Preferencias de la sociedad y narcotráfico (Zetas, Familia y LCT)

	Sociedad	Narcotráfico	Pagos
Sociedad	P (c)	C (c)	4
	NC (nc)	C (c)	3
	P (c)	A (nc)	2
	NC (nc)	A (nc)	1
	Sociedad	Narcotráfico	
Narcotráfico	P (c)	A (nc)	4
	NC (nc)	A (nc)	3
	P (c)	C (c)	2
	NC (nc)	C (c)	1

Fuente: elaboración propia

La tabla de arriba muestra, a diferencia de las preferencias anteriores, que ahora el narcotráfico prefiere en primer lugar optar por su estrategia de **ataque**, lo cual es mejor teniendo a una sociedad sumisa. En segundo lugar, si no es posible lo primero, se mantiene en su posición de ataque independientemente de lo que haga la sociedad, que, en este caso, prefiere no cooperar. En tercer lugar, prefiere una situación social en la que ambos buscan la paz y la estabilidad, lo cual, como se recordará, era la primera preferencia en la ordenación anterior. Finalmente, lo último que prefiere el narcotráfico es una actitud de convivencia mientras que la sociedad no es cooperativa. Anteriormente (preferencias de *Los Valencia*) narcotráfico tenía en segundo lugar una preferencia por el ataque y en primer lugar prefería que ambos actores buscaran la convivencia. En cambio, las nuevas preferencias son de conflicto y agresividad. Cualquier tipo de código de honor desapareció en su motivación, y en cambio, es claro el papel que ahora juega el interés económico. Las preferencias de la sociedad se mantienen estables.

Figura 2. Juego entre sociedad (1) y narco (2)

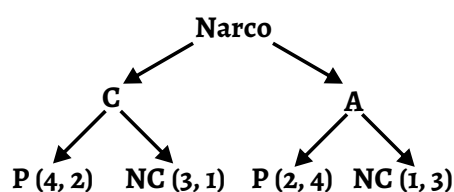


Tabla 6. Juego estático entre sociedad (en 1) y narcotráfico (en 2)

	C	A
P	4,2	2,4
NC	3,1	1,3

Fuente: elaboración propia

Existe un sólo equilibrio en (2, 4) producto de que la sociedad se mantuviera en **pasividad** y el narco en **ataque**. En las otras tres situaciones al menos uno de los dos jugadores sale perdiendo si realiza un movimiento en solitario. Nótese en el *juego secuencial* cómo la sociedad tiene el peor pago de enfrentarse al narco (1, 3) por lo cual prefiere optar por pasividad. El resultado es una interacción que representa la situación que la población de Tierra Caliente tuvo que soportar por mucho tiempo antes de decidirse a levantarse en armas. La sociedad temía optar por NC debido a los altos costos de enfrentarse, primero a *Los Zetas*, y después a LCT. Pueden ser mencionadas algunas citas que muestren estos costos y el miedo que imperaba. Un AD de Buenavista narra su experiencia al inicio del levantamiento:

Pues había alrededor de algunas 30 personas nada más. Ya después fueron sumándose más personas, a la lucha. Porque realmente pues toda la gente tenía miedo de salir a apoyarlos. Y no era justo que ellos nos estuvieran protegiendo de los Templarios, y luego otras personas durmiendo muy a gusto en sus casas. No. Teníamos que salir a luchar todos juntos (VANGUARDIA MX, 2014).

Un AD de Antúnez, Parácuaro, narra cómo el temor obligaba a la sociedad michoacana a ser pasivos y tratar de convivir:

Pues uno sabe, pues, porque de todos modos convivía uno con ellos. De cierta manera convive uno con ellos porque de aquí son los caballeros, o de aquí eran los jefes, y pues sí, lo invitaban a uno a una fiesta, pues, convive uno con ellos. Y muchas veces por el temor, trataba uno de convivir [...] para sentirse que está uno, con ellos, pues (Revista Siempre!, 2014).

Este tipo de narraciones son constantes en los múltiples vídeos que aparecen en la plataforma de *YouTube* sobre el tema. Como se ha dicho, es de suponer que la sociedad creyó la promesa de no atacar por parte de *La Familia* y LCT, y esperaba regresar a la situación anterior de paz, tolerancia y convivencia mutua, donde sociedad optaba por pasividad y narcotráfico por convivencia.

Puede interpretarse que la sociedad esperaba que dicho equilibrio de cooperación fuera producto de lo que denominaremos como *sombra del pasado*, como un mecanismo paralelo a la bien conocida *sombra del futuro* de Robert Axelrod (1986) que, como se sabe, es una de las soluciones clásicas a un *Dilema del Prisionero*. Esta sombra del pasado implicaba la esperanza racional de regresar a un escenario del pasado caracterizado por la convivencia entre narcotráfico y sociedad, en donde el umbral de tolerancia social no estaba sobrepasado, tal como se dio en la época de *Los Valencia*. Si bien es cierto que frente a *Los Zetas* es imposible pensar que pudo darse una situación así (pues frente a un actor como el de *Los Zetas* no puede haber ningún juego), sí cabe para *La Familia* y LCT, ya que justo por ser grupos con raíces locales, y algunos de sus miembros haber pertenecido anteriormente a *Los Valencia*, la sociedad tenía una predisposición a mantenerse pasiva. Al respecto, Rivera (2014: 6) narra que:

Los métodos brutales de los Zetas perturbaron radicalmente la forma tradicional de relación de la sociedad local de Michoacán con el narcotráfico. Sus aliados michoacanos, con arraigo en los poblados y relacionados personalmente con mucha gente, veían cundir el miedo y el descontento por la violencia de los Zetas, y decidieron romper con estos.

Las creencias erróneas pueden llevar a los individuos a mantenerse en situaciones que en realidad son muy costosas. Como hemos visto, Sociedad tuvo la creencia errónea de que LCT no rebasarían el umbral de tolerancia social. Lo que esto muestra es que los equilibrios en los que se establecen los individuos no siempre reflejan una situación positiva. La sociedad en realidad esperaba que el narco regresara a la situación anterior, por lo cual tuvo que *soportar* estar en (2, 4), con la expectativa de que el narcotráfico cambiara de nuevo de preferencias, y pasara de su actitud agresiva a una de convivencia. Sin olvidar por supuesto, que este comportamiento es producto también del miedo a un enfrentamiento. El miedo hacía racional el no enfrentamiento.

Tercer momento: el levantamiento

Al percatarse de que el narco no cambiaría de preferencias, y que la situación (4, 2) no representaba una opción racional en las preferencias del narco, la sociedad entonces se vio obligada a cambiar de estrategia, es decir, al darse cuenta de que sería imposible regresar a la situación anterior, y que la paz se daría sólo a partir de un proceso de **conflicto**. En ese sentido, las AD tuvieron un fuerte carácter de reacción. Esto hace que sus objetivos puedan verse como cortoplacistas, pues no buscaban atacar el problema del tráfico ilegal de las drogas (Althaus y Dudley, 2014: 17). De ahí que sea plausible pensar que puedan mostrar pasividad ante otros grupos criminales (Althaus y Dudley, 2014: 17), como en realidad ha ocurrido después de 2015.

Diversas narraciones muestran que la decisión de levantarse contra LCT fue una estrategia a la que se vieron obligados. Por ejemplo, un AD de Los Reyes narra sus motivos para enfrentarse a LCT:

la gente lo estaba pidiendo, la gente de Los Reyes, ya que eran muchos los secuestros, abusos y violaciones que hacían, más las cuotas que cobraban, más toda la gente que obligaban a trabajar [...] ni ando en esto porque me guste, ando por necesidad, y de querer vengar a mi familia, más que nada, de verlos caer y de acabar con esta organización, ya que es muy sangrienta y le hace mucho mal a todos (autodefensa mich, 2014).

Un turista que para abril de 2014 ha decidido regresar a las playas de Ostula dice:

Es un orgullo lo que esta gente está haciendo por sus familias, porque no les queda de otra, pues, ni siquiera es una decisión de que sí, no, sino, o le entras o le entras, porque o te vas de tu tierra o te quedas y luchas, ¿no? (Tequio Audiovisual, s/f).

Un líder AD narra en enero de 2014 en un mitin frente a decenas de personas de algún municipio de Tierra Caliente cómo se vio obligado a tomar las armas: *Somos gente de trabajo, yo no soy gente de armas, la necesidad me hizo ponerme esta grupera como de macho* (autodefensas mich, 2014). Pero el objetivo ya no era regresar a una situación de convivencia, sino expulsar al narco a como diera lugar. Haciendo referencia a los intereses de quienes participaron en las AD y cómo cambiaron estos motivos, Mireles dijo en noviembre de 2013:

Nada más pretendíamos defender nuestras vidas y las de nuestras familias, obviamente proteger nuestros intereses y nuestra productividad al 100%. Pero ya levantados en armas

pues de una vez queremos eliminar al crimen organizado en Michoacán. (...) El pueblo que quiera despertar y levantarse está en todo su derecho. La misma Constitución en su artículo 10 lo dice bien claro: cualquier pueblo que no tenga la seguridad y la protección de las instituciones que para ello fueron hechas puede armarse en legítima defensa de sus derechos, de su propiedad, de su vida (Gil, 2013b: 9).

A partir de ese momento se hizo necesario, además, exigir el apoyo por parte del Gobierno Federal. Esto representó una disyuntiva para la sociedad, pues sabían que, una vez iniciado un proceso de conflicto, no llevarlo a sus últimas consecuencias sería muy costoso. Ante una decisión así es comprensible entender por qué tardaron tanto en levantarse. Además, el papel de los iniciadores es importante para entender el inicio de este proceso. De estos iniciadores fue José Manuel Mireles la cara más visible, aunque por supuesto hay muchos líderes anónimos tanto en Tierra Caliente como en las demás regiones. Mireles es un líder social con una importante trayectoria en las organizaciones de la sociedad civil, redes que aprovechó para coordinar el levantamiento junto a ganaderos, productores, comerciantes y pobladores (Mireles, 2017: 149-152).

Las violaciones a mujeres fueron un factor importante para terminar con la pasividad social (Moriconi, 2013, García y Lajous, 2014, CNDH, 2015). Esto muestra la aparición de códigos de honor encarnados en la defensa de la integridad de las mujeres transgredidas y raptadas por el crimen organizado (Gil, 2014d, p. 36; Gil, 2015, p. 274), pues *fue lo que más llamó la atención de la opinión pública* (Gil, 2015: 275). Este cambio en el tipo de violencia ejercida por los LCT es una constante en las narraciones de los protagonistas de esta historia. Rafael García Zamora (PRD), presidente municipal de Coalcomán (2011-2014), y el único de los tres presidentes municipales de los primeros tres municipios donde surgieron AD (Coalcomán, Buenavista y Tepalcatepec) que no renunció, narra cómo de no haber cambiado el tipo de violencia la sociedad pudo haber tolerado a LCT:

Nosotros estábamos pagando las cuotas y todo hubiera quedado en eso, pero comenzaron a meterse con las familias, con las mujeres: las obligaban a tener relaciones con ellos; si no mataban a sus papás[...] Por eso la gente dijo ya basta, esto se trata de dignidad (Gil, 2013a: 9).

Fue también importante el paso del cobro de impuestos y la extorsión al control de la producción agrícola, particularmente de los limones (García y Lajous, 2014, Guerra, 2015, La saga, 2014). En su recuento sobre las causas generales del surgimiento de las ADs, el informe de la CNDH dice que *sufrieron afectaciones económicas porque la ‘delincuencia organizada’ intervenía en cuestiones tan básicas como el precio de productos de alimentación y subsistencia* (2015: 13). Así lo dicen García y Lajous (2014):

Coincidentemente, los dos municipios en los que se organizaron los primeros grupos de autodefensa, como han narrado sus propios líderes, fueron Buenavista y Tepalcatepec, los cuales eran primero y sexto lugar en producción de limón en el estado en 2012. Después, las autodefensas se extendieron a otros municipios limoneros como Aguililla, Múgica, Parícu y finalmente Apatzingán.

El mismo sistema basado en la explotación hacia la población generó que integrantes de LCT abandonaran sus filas para unirse a las AD (Grillonautas2, 2013). Algunos AD habían sido previamente obligados a trabajar para LCT y la irrupción de las AD fue la oportunidad que esperaban (Tequio Audiovisual, s/f; autodefensa mich, 2014). El cambio de preferencias es también producto de emociones como la venganza, la ira, el odio, la necesidad de justicia. Por eso puede decirse que el miedo a enfrentarse a LCT fue contrarrestado con otras emociones. Por ejemplo, un AD apodado *el Gavilán* dice: “Estamos

jodidos, pero con ánimo, con valor, cabrón, para chingar a esos cabrones que andan agrediendo (autodefensa mich, 2014). Una vez recuperado Ostula, en 2014, un AD narra con la voz entrecortada por el llanto, en una asamblea popular:

pues la verdad no tengo palabras yo para explicarme, porque yo siento un nudo en mi corazón, ustedes saben por qué, me han quitado a mis dos hijos, qué digo a mi brazo derecho [...] Yo vengo con esa fuerza y con ese espíritu [...] Soy un comunero, soy un indígena, y me duele, que los grandes caciques se burlen de nuestra raza compañeros, no es justo [...] y les prometo que yo soy una de las personas que voy a dar mi frente por ustedes para que ustedes vivan en paz (autodefensa mich, 2014).

Existen también varias versiones que dan cuenta del apoyo oculto inicial de actores gubernamentales en el surgimiento de las AD de Tierra Caliente (Guerra, 2015, Gil, 2014a, Gil, 2015, Pérez, 2015, Fazio, 2016, Gledhill, 2017). Si esto último fuera fundamental para entender el levantamiento de las AD, quiere decir que muchos otros poblados y municipios se mantuvieron en el equilibrio de (2, 4) del segundo juego hasta que los iniciadores los alentaron a hacer lo mismo entre 2013 y 2014. Los cambios de equilibrio son, así, producto de diferentes causas. En conjunto, el rompimiento del umbral de tolerancia y el apoyo oculto del Gobierno Federal explicarían el surgimiento de las AD. Fue además relevante la organización clandestina. Según el informe de la CNDH, al entrevistar a uno de los líderes de las AD de La Ruana, el levantamiento se estuvo planeando desde por lo menos tres años antes (2015, p. 142). Algunos grupos habían incluso escondido sus armas y esperaban el momento para confrontar a LCT (Tequio Audiovisual, s/f). El hecho de que hayan aparecido el mismo día las AD de La Ruana y de Tepalcatepec no fue fortuito pues se habrían tejido planes secretamente entre ambos municipios (La saga, 2014). Mireles afirmó también que desde por lo menos dos años antes se planeaba el levantamiento de las AD, tanto en Tepalcatepec como en La Ruana y Buenavista (en estos dos con el impulso de Hipólito Mora) (Mireles, 2017, pp. 150-152).

3. Siguiendo lo dicho más arriba, en el lenguaje de la **cooperación/no cooperación**, ahora las preferencias de ambos actores son totalmente no cooperativas.

Tabla 7. Preferencias de la sociedad y el narcotráfico³

	Sociedad	Narcotráfico	Pagos
Sociedad	NC (nc)	C (c)	4
	NC (nc)	A (nc)	3
	P (c)	C (c)	2
	P (c)	A (nc)	1
	Sociedad	Narcotráfico	
Narcotráfico	P (c)	A (nc)	4
	NC (nc)	A (nc)	3
	P (c)	C (c)	2
	NC (nc)	C (c)	1
Fuente: elaboración propia			

Las nuevas preferencias de la sociedad son ahora también de **conflicto**. (**NC, C**) que estaba en segundo lugar ahora está en primer lugar. **Y (P, C)** que estaba en primer lugar ahora ocupa la tercera posición. Ahora la sociedad prefiere en primer lugar una postura **no pasiva** y de **desafío**, aunque por supuesto que siempre es mejor si el narcotráfico no

es tan agresivo y opta por **(C)**. En segundo lugar, prefiere mantenerse en su posición de **no cooperación** independientemente de lo que haga el narcotráfico, quien en ese caso opta por su estrategia de ataque. En tercer lugar, prefiere una situación en la que ambos buscan **convivir**. Lo último que prefiere la sociedad ahora es mantenerse en su posición de **pasividad** mientras que el narco opta por ser **agresivo**. El resultado de estas ordenaciones muestra un juego de conflicto muy interesante.

Figura 3. Juego entre sociedad (1) y narco (2)

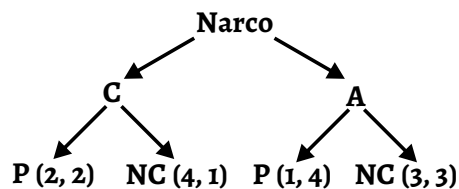


Tabla 8. Juego estático entre sociedad (en 1) y narcotráfico (en 2)

	C	A
P	2,2	1,4
NC	4,1	3,3

Fuente: elaboración propia

El juego parece tener la estructura de un *Dilema del Prisionero*, pero no lo es. Es un juego de *conflicto puro* con un *único equilibrio de Nash* en (3, 3). Nótese cómo la situación de (2, 2) no representa, a diferencia del *Dilema del Prisionero*, un equilibrio. Ambos actores tienen **estrategia dominante**: NC para la sociedad, y en A para narcotráfico. El juego representa el enfrentamiento total dado entre los dos actores colectivos a partir de febrero de 2013. Nótese en el juego secuencial cómo ahora mantenerse en la pasividad era muy costoso para la sociedad (1, 4).

Conclusión

Durante 2013 y 2014 brotaron en diversos poblados y municipios de Michoacán grupos de AD. A diferencia de otros fenómenos de acción colectiva y movimientos sociales, las AD no surgen por alguna estructura de oportunidad política. Son más bien producto del cambio de preferencias -producto a su vez del cambio de lógica situacional-, el apoyo gubernamental y la organización colectiva. La secuencia de juegos aquí mostrados sirve para entender, por un lado, el papel que la racionalidad tuvo en este proceso, y por el otro, cómo se dio el proceso de cambio de preferencias en este conjunto de interacciones. Para las AD que se conformaron después de febrero de 2013 también podría servir este análisis, pero habría que decir que la decisión de pasar de la pasividad a la no cooperación estuvo previamente influida por las AD de Tierra Caliente. Así, existe también un proceso de masa crítica, de contagio. Además, quizá muchos individuos y grupos no tenían como primera preferencia la pasividad, como en el primer juego, sino preferencias de conflicto ante cualquier decisión del narco, pero debido a los altos costos de enfrentar

al narco de forma aislada, ocultaban sus preferencias, y no fue hasta que se conformó una gran cantidad de individuos y grupos que decidieron levantarse en armas. Para bien o para mal toda observación lleva una carga teórica (Hanson, 1977). Los criterios teóricos estimularon en este trabajo que la orientación estuviera en la búsqueda de equilibrios y estrategias, lo cual tiene ventajas y desventajas. Tiene la ventaja de darnos una pauta sobre las parcelas de la realidad estudiadas desde el lenguaje de la racionalidad. Tiene la desventaja de que otros temas y mecanismos teóricos fueron dejados de lado, por ejemplo, sus aspectos organizativos, los recursos puestos en operación, por mencionar sólo algunas dimensiones que deben ser exploradas en investigaciones sucesivas.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, F., Barragán, J. y Lara, N. (coord.) (2008). *Economía, Sociedad y Teoría de juegos*. Madrid: McGraw-Hill.
- Althaus, D. y Dudley, S. (2014). "Mexico's Security Dilemma: Michoacán's Militias". *InSight Crime. Investigation and Analysis of Organized Crime*. Recuperado de https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/MichSelfDefense_Althaus_Dudley.pdf.
- Astorga, L. y Shirk, D. A. (2010). "Drug Trafficking Organizations and Counter-Drug Strategies in the US-Mexican Context". *Working Paper Series on U.S.-Mexico Security Cooperation*. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Mexico Institute, University of San Diego. Trans-Border Institute. Recuperado de <https://escholarship.org/uc/item/8j647429>
- Autodefensa mich [autodefensa mich] (2014, abril 8). *La Vida de Autodefensas - Documental* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Ihb6d1GfTQk&t=6544s>.
- Axelrod, R. (1986). *La evolución de la cooperación. El dilema del prisionero y la teoría de juegos*. Madrid: Alianza.
- Bates, R. H., Greif, A., Levi, M., Rosenthal, J. y Weingast, B. R. (2000). The analytic narrative project. *American Political Science Review*, N° 94, pp. 696-702.
- Collier, P. y Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers*, N° 56, pp. 563-595. Recuperado de <https://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/CollierHoeffler.pdf>.
- Colomer, J. (1998). *La transición a la democracia: el modelo español*. España: Anagrama.
- (2009). *Ciencia de la política*. España: Ariel.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2015). *Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto*. México: CNDH. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_gruposautodefensa.pdf.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012). *Informe de pobreza en México, 2012*. México: CONEVAL. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
- Fazio, C. (2016). *Estado de emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto*. D.F., México: Penguin Random House.
- Fernández, J. (2001). *El otro poder. Las redes del narcotráfico, la política y la violencia en México*. México: Nuevo Siglo Aguilar.
- Fuentes, A. (2015). "Narcotráfico y autodefensa comunitaria en 'Tierra Caliente', Michoacán, México", *CienciaUAT*, N° 10, pp. 68-82. Recuperado de <http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/issue/view/54>.
- Fuentes, A. y Paleta, G. (2015). "Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán, México". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, N° 53, pp. 171-186.
- García, O. y Lajous, A. (2014). ¿Por qué tardaron tanto en levantarse las autodefensas? *Nexos*, 22 de mayo. Recuperado de <https://redaccion.nexos.com.mx/?p=6272>.
- Geddes, B. (2003). *Paradigms and Social Castles. Theory Building and Research Design in Comparative Politics*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Gil, J. (2013a). "Peña Nieto, tras los pasos de Calderón", *Proceso*, N° 1908, 26 de mayo, pp. 6-10.
- (2013b). "Sólo el pueblo puede defender al pueblo", *Proceso*, N° 1934, 24 de noviembre, pp. 6-10.
- (2014a). "La Segunda Guerra de Michoacán", *Proceso*, N° 1941, 12 de enero, pp. 6-10.
- (2014b). "Las víctimas de Michoacán: el recuento imposible", *Proceso*, N° 1944, 2 de febrero, pp. 8-12.

- (2014c). “Los templarios son miles... difícilmente los acabarán”, *Proceso*, N° 1945, 9 de febrero, pp. 14-16.
- (2014d). “Vamos a Morelia... no tenemos prisa”, *Proceso*, N° 1948, pp. 34-36.
- (2015). *Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto*. México: Ediciones Proceso.
- Gledhill, J. (2013). “Límites de la autonomía y autodefensa indígena: experiencias mexicanas”. *OXÍMORA. Revista Internacional de Ética y Política*, N° 2, pp. 1-21. Recuperado de <http://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/6291>.
- (2017). *La cara oculta de la inseguridad en México*. México: Paidós.
- Guerra, E. (2015). “Las autodefensas de Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo y neocaciquismo”. *Política y cultura*, N° 44, pp. 7-31. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26743130002>.
- Guerra, E. (2017). “Organización armada. El proceso de toma de decisiones de los grupos de autodefensa tepalcatepenses”. *Estudios Sociológicos*, XXXVI, N° 106, pp. 99-123.
- Guillén, A. y Torres, R. (2014). “La violencia, también por las minas y la madera”. *Proceso*, N° 1946, 16 de febrero, pp. 17-19.
- Hanson, N. R. (1977). *Patrones de descubrimiento. Observación y explicación*. Madrid: Alianza.
- Hernández, A. (2013). “Quiénes y cómo gobiernan realmente en Michoacán”, *Proceso*, N° 1931, 3 de noviembre, pp. 6-10.
- Hernández, L. (2014). *Hermanos en armas. La hora de las policías comunitarias y las autodefensas*. México: Para Leer en Libertad A.C.
- La Saga [La Saga] (2014). *La Entrevista Por Adela 16 Enero 2014 Hipólito Mora Fundador De Autodefensas Michoacán* [Archivo de video] 14 de enero. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=1WWE6OBpnsE>.
- Maldonado, S. (2012). “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán”. *Revista Mexicana de Sociología*, N° 74, pp. 5-39. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32123132001>.
- (2014a). “Michoacán y las autodefensas: ¿Cómo llegamos aquí?” *Nexos*, 14 de enero. Recuperado de <https://redaccion.nexos.com.mx/?p=6011>.
- (2014b). “El futuro de las autodefensas michoacanas”. *Nexos*, 3 de abril. Recuperado de <https://www.nexos.com.mx/?p=20214>.
- (2015). “Lecciones de Michoacán sobre Jalisco y Guerrero”. *Nexos*, 12 de junio. Recuperado de <https://redaccion.nexos.com.mx/?p=7095>.
- McKeown, T. J. (1999). “Case Studies and the Statistical Worldview: Review of King, Keohane, and Verba’s Designing social inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research”, *International Organization*, N° 53, pp. 161-190.
- Millán, R. (2015). “Capital social: su papel en los dilemas de cooperación y la coordinación de acciones”, *Estudios Sociológicos*, XXXIII, N° 98, pp. 259-283.
- Mireles, J. M. (2017). *Todos somos autodefensas. El despertar de un pueblo dormido*. México: Penguin Random House.
- Moriconi, M. (2013). *Ser violento. Los orígenes de la inseguridad y la víctima-cómplice*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Noticias hoy [noticias hoy] (2013). *Testimonio de un pistolero de Los Caballeros Templarios* [Archivo de video], 22 de agosto. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Rry-coTon3JQ>.
- Oxford Committee for Famine Relief México (2015). *Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político*. México: OXFAM. Recuperado de http://trazandoelrumbo.iberomex.mx/wpcontent/uploads/2015/08/desigualdadextrema_informe.pdf.

- Pérez, L. N. (2001). "Gente, agua, cultivos y desarrollo desigual en el Valle de Tepalcatepec: imágenes, recuerdos y la 'memoria históricamente instruida'". *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, XXII, N° 87, pp. 111-155. Recuperado de <http://www.redalyc.org/html/137/13708705/>.
- Pérez, J. (2015). "Autodefensas michoacanas, variante regional de la 'guerra al narcotráfico' en México". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, N° 110, pp. 165-187. Recuperado de <https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/view/299154/388455>.
- Phillips, B. J. (2016). "Inequality and the Emergence of Vigilante Organizations: The Case of Mexican Autodefensas". *Comparative Political Studies*, N° 50, pp. 1358-1389.
- Piketty, T. (2014). *El capital en el siglo XXI*. México: FCE.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (2015). *Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas*, México 2015. PNUD. Recuperado de http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
- Ragin, C. C. (1987). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley, University of California Press.
- Revista Siempre! [Revista Siempre!] (2014). *Juan Sin Miedo Autodefensa de Antúnez* [Archivo de video] 1 de febrero. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ftze19HmS5Y>.
- Ríos, V. (2014). "Autodefensas: El riesgo de no aplicar la ley". *Nexos*, 1 de abril. Recuperado de <https://www.nexos.com.mx/?p=20018>.
- Rivera, J. (2014). "Crimen organizado y autodefensas en México: el caso de Michoacán". *Friedrich-Ebert-Stiftung*, pp. 1-16. Recuperado de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10845.pdf>.
- Rodríguez, O. D. (2015). "El limbo democrático: Estado de Derecho, crimen organizado y paramilitarismo en México". *Politai: Revista de Ciencia Política*, N° 11, pp. 15-32. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/14659>.
- Rihoux, B. y Ragin, C. C. (ed.) (2009). *Configurational Comparative Methods. Qualitative Comparative Analysis and Related Techniques*. Estados Unidos: Sage.
- Schedler, A. (2015). *En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada*. México: CIDE.
- Tapias, N. [Tequio Audiovisual] (2016). *Soy Autodefensa: Viaje por una rebelión Armada* [Archivo de video]. Recuperado de <https://bombozila.com/es/soy-autodefensa-viaje-por-una-rebelion-armada-mexico/>.
- Valdés, G. (2016). *Historia del narcotráfico en México*. México, Penguin Random House.
- VANGUARDIA MX [VANGUARDIA MX] (2014). *Michoacán: Por qué surgen las autodefensas* [Archivo de video] 27 de enero. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=hC9-s2H_ZXs.
- Williams, P. (2010). "El crimen organizado y la violencia en México: una perspectiva comparativa". *ISTOR Revista de Historia Internacional*, XI, N° 42, pp. 15-40. Recuperado de <http://www.istor.cide.edu/revistaNo42.html>.

Reseñas

Luis Arizmendi
arizmendi_luis@hotmail.com
Instituto Politécnico Nacional
México

Recibido: 06/11/2019

Aprobado: 07/02/2020

Democracia y opinión pública. El desafío político de la modernidad,

de Rubén de Jesús Ibarra Reyes y Elizabeth Amador Márquez

Democracia y opinión pública. El desafío político de la modernidad, escrito por Rubén de Jesús Ibarra Reyes y Elizabeth Amador Márquez, publicado en 2018 en coedición por la prolífica Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Editorial Ítaca, constituye, sin duda, una obra por demás pertinente que llega a enriquecer el debate político en México y América Latina en un tiempo crucial de transición.

El primer mérito de este libro reside en la adecuada definición de su objeto de estudio: no sólo se evalúa la relación entre democracia y opinión pública, sino que se evalúa en el marco de los desafíos de la modernidad. Al lanzar una mirada panorámica podría afirmarse que son tres los grandes desafíos históricos del mundo moderno:

- ◆ el desafío de la modernidad en el capitalismo
- ◆ el desafío de la mundialización en el capitalismo
- ◆ el desafío de la democracia en la modernidad.

Por principio, debe insistirse en que *capitalismo* y *modernidad* no son sinónimos. Mientras *modernidad* es un término que designa una época fundada por la invención de la tecnología automatizada como fuerza civilizatoria que redefine profundamente el sistema económico y el mundo humano de la vida; *capitalismo* es un término que designa una configuración histórica esquizoide de la modernidad, es decir, una configuración que inaugura el progreso continuo o ininterrumpido de la técnica planetaria, pero no como fundamento del progreso social o el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida para todos, sino como un arma al servicio del apuntalamiento incesante y cada vez más amenazador del poder planetario y de la acumulación del capital. El desafío de la modernidad a contrapelo del capitalismo, en consecuencia, reside en inventar una

nueva modernidad: un progreso ecologista y libertario del desarrollo tecnológico para ponerlo al servicio del mejoramiento de la vida de la sociedad global.

De modo paralelo, mientras *mundialización* es un término que designa la fundación de la sociedad planetaria con una profunda convocatoria pluriétnica y multicultural, que contiene la posibilidad de una socialización inédita en la historia de las civilizaciones; *capitalismo* es un concepto que designa la fundación de la economía mundial mediante un proceso esquizoide que, al mismo tiempo, establece la cohesión de la sociedad global y la descohesión mediante la imposición de un sistema de Estados basado en el ejercicio implacable de las relaciones de poder Norte/Sur. El desafío de la mundialización, por tanto, reside en fundar una mundialización alternativa, no sólo una modernidad alternativa, al servicio de la convivencia pacífica y el enriquecimiento sociohistórico incondicional e ilimitado de las más diversas identidades étnicas y culturales.

En este marco, **democracia** -esto es, *dêmos*, el pueblo, como una autoridad política efectiva, como un *kratos* real- constituye una forma política distintiva de la modernidad. En la historia de las sociedades de clase, ninguna sociedad antagónica premoderna, requirió de la democracia como forma general de administración de la lucha de clases. Los esclavos en la Antigüedad grecorromana eran, en expresión de Cicerón, un *instrumentum vocale*. Los siervos en el Medioevo no participaban en votaciones jamás para definir reyes o monarquías. Igual, los esclavos en el despotismo asiático. El capitalismo, justo porque vuelve a poner la ciudad como centro del sistema económico y lo hace, además, conjuntando enormes conglomerados demográficos en un solo espacio urbano, requiere imprescindiblemente de votaciones para rotar gobernantes como un modo de asegurar marginar al “pueblo” de intervenir en la toma de decisiones. La democracia, en este sentido, sí es una forma histórico-política distintiva de la modernidad capitalista.

Bolívar Echeverría descifró como nadie su **bidimensionalidad** constitutiva. Demostró que, en la medida en que la democracia gira en torno a un desdoblamiento ineludible entre representantes y representados, una podría clasificarse como su **dimensión metafórica**, es decir como una dimensión en la que siempre es posible que los representantes no sean la voz del pueblo y que por tanto actúen al margen o incluso autoritariamente en contra de él. De modo que, frente y contra a esa dimensión metafórica, existe otra **dimensión** que cabe llamar **metonímica**, en la que se juega la integración de un lazo orgánico y real entre representantes y representados, de suerte que éstos sí expresan la soberanía de aquellos, que se organiza desde abajo mediante diversas formas de auto-organización política o autogestiva.

En la historia del capitalismo éste siempre intenta absorber, mutilar o cercenar la dimensión metonímica de la democracia bajo el poder de su dimensión metafórica, que hace así de la democracia un simulacro o, peor aún, una fuerza funcional a votaciones a favor del Estado autoritario o de excepción.

El surgimiento de las redes sociales abrió un marco de acción inédito para desbordar el funcionamiento regular de los *massmedia* como Cuarto Poder. Por primera vez, la sociedad civil pudo empezar a rebasar a los grandes poderes fácticos de las corporaciones mediáticas. Que con la comunicación-mundo establecieron el principio *desinformatsia* bajo la forma despertar con CNN, ir a dormir con MTV, o al revés.

Sin embargo, la opinión pública, un ente difuso antes sólo creado por los *massmedia*, al ser enriquecida por las redes sociales gracias a internet, ya es objeto de un gran sabotaje. En el que Facebook va por delante como un Gran Hermano Global muy superior a todo lo que vislumbró Orwell. En pleno siglo XXI, se ha convertido en el universo por excelencia de las *fake news* mundializadas.

La democracia como desafío de la modernidad, en consecuencia, convoca a asumir el reto de autoproducir una cultura política crítica y fundamentada de contracorriente, capaz de enfrentar la actual y amenazante tendencia a Estado de excepción, reinventado un uso impugnador de las tecnologías de la comunicación-mundo desde el desarrollo de formas autogestivas que abran camino al ejercicio de una democracia genuina libertaria y preparatoria de un mejor porvenir.

Datos bibliográficos

Ibarra Reyes, R.J. y Amador Márquez, E. (2019). *Democracia y opinión pública. El desafío político de la modernidad*. México: itaca editorial.

Erika Carcaño
erikacarcano@ugto.mx
Universidad de Guanajuato
México

Recibido: 06/11/2019
Aprobado: 07/02/2020

De la protesta a la propuesta. 50 años imaginando y construyendo el futuro

de David Barkin

El libro *De la protesta a la propuesta. 50 años imaginando y construyendo el futuro*, escrito por David Barkin, es una obra compuesta por una colección de artículos escritos por el autor en los últimos cincuenta años, en ellos muestra su visión crítica sobre el desarrollo, centra su atención en México y analiza los proyectos de desarrollo implementados durante el último siglo. Pone especial énfasis a la cuestión ecológica y a las alternativas que surgen desde “abajo”, desde los pueblos. Destaca asimismo la importancia que tienen los procesos autonómicos para construir mundos post-capitalistas.

La obra está agrupada en cuatro grandes apartados:

- ◆ *Una visión crítica del desarrollo capitalista*
- ◆ *El desarrollo regional: Espejo de un desarrollo distorsionado*
- ◆ *Propuestas y estrategias*
- ◆ *Resistencias y alternativas.*

El primer apartado, *Una visión crítica del desarrollo capitalista*, está compuesto por cinco capítulos, los cuales abordan el proceso de desarrollo en México tomando como punto de partida el **Milagro Mexicano** (1935-1965). El autor ofrece un análisis detallado de los resultados que trajo consigo la política del *desarrollo estabilizador*, tanto en el sistema educativo, así como en la estructura productiva. Analiza el papel que jugaron la clase empresarial y política para dar impulso al modelo neoliberal, así como las consecuencias de las reformas estructurales que se implementaron. Finalmente aborda las respuestas de los actores oficiales al cambio climático, señalando que las acciones llevadas a cabo no afectan el modelo de consumo, pero en cambio siguen exacerbando la problemática ambiental y social.

En el segundo apartado, *El desarrollo regional: Espejo de un desarrollo distorsionado*, el autor plasma una reflexión crítica en torno a la transformación espacial de la actividad productiva en aras de la acumulación y de la integración nacional. En este apartado, el autor hace énfasis en que la búsqueda por el crecimiento económico y el continuo proceso de acumulación de capital han traído consigo deterioro en los ecosistemas y en la calidad de vida de la población, además del control de los recursos naturales por parte de los poderes fácticos. Describe y analiza de forma aguda tres estudios de caso: la zona de hibernación de la **Mariposa Monarca** en Michoacán, el caso de los comuneros en las Chimalapas y el caso de la gestión del agua en México. Estos tres casos tienen en común que han sido impulsados bajo la pretendida idea de “progreso” dejando de lado la participación de la población y generando conflictos que hasta la fecha, las comunidades de esas regiones siguen enfrentando.

En el tercer apartado, *Propuestas y estrategias*, David Barkin divide su análisis en dos partes: *diagnósticos críticos* y *estrategias esperanzadoras*. El autor hace un análisis del sector rural. Parte de la experiencia cubana en la década de los sesenta y setenta y la estrategia de desarrollo implementada expandiendo la producción agrícola y el complejo agroindustrial. Analiza el papel de la administración central, así como las repercusiones que trajo consigo el abandono de otros sectores de la economía. Posteriormente, aborda las transformaciones del sector rural en México desde la globalización neoliberal y cómo estos espacios rurales han servido como vías para la puesta en marcha de estrategias para la incorporación en el mercado competitivo, buscando el incremento de la eficiencia y la productividad. Asimismo, pone de manifiesto que pese a los embates que padece el sector rural, existen respuestas y propuestas de grupos campesinos a través de dinámicas que tienen que ver con la autogestión de sus recursos naturales, la pluriactividad que llevan a cabo, la diversificación productiva y su continua lucha por la autonomía. Examina las estrategias llevadas a cabo por las comunidades, por ejemplo a través del proyecto de *carne de puerco lite* llevado a cabo por comunidades indígenas de Michoacán, México, en colaboración con la academia. Otro ejemplo que nos presenta David Barkin son las luchas de las comunidades campesinas rurales que llevan a cabo el manejo forestal comunitario sin instituciones estatales de por medio.

El cuarto apartado a su vez está dividido en dos temas: “*Resistencias alternativas. La capacidad de resistir*” y “*Resistencias alternativas. Imaginar y construir el futuro*”. En este apartado el autor muestra diversos casos tales como: iniciativas de rehabilitación ecosistémica, protección y mejoramiento de recursos hídricos, así como de iniciativas de educación para la conservación. En el análisis que lleva a cabo, resalta la importancia de la organización colectiva y la movilización de la sociedad para despertar conciencia, proteger sus recursos naturales y fortalecer los procesos organizativos comunitarios. Es incisivo al referirse a la economía convencional y las herramientas que tiene para abordar los problemas ambientales, proponiendo repensar la educación económica para la conservación. Destaca la contribución que ha hecho el enfoque heterodoxo dentro de la economía ecológica, dotando de elementos teóricos y metodológicos que nos permiten tener una comprensión más holística e incluyente en el análisis de los fenómenos socio ambientales.

A lo largo de la obra podemos apreciar la trayectoria y experiencia del autor como investigador, académico y activista. En cada uno de los apartados, resultan fascinantes los relatos que nos comparte David Barkin de las experiencias adquiridas fruto del acercamiento que tuvo con grandes personajes de la política (por ejemplo: el general Lázaro Cárdenas) y la economía (Paul Baran, Celso Furtado, James Tobin, entre otros.) lo que nos permite apreciar su sensibilidad y a la vez su rigurosa mirada crítica ante la realidad

social, desde que era estudiante de posgrado en Yale University, hasta su quehacer como académico e investigador, así como en su acompañamiento con las comunidades indígenas campesinas en sus luchas y propuestas para construir alternativas de bienestar comunitario y autonómico frente al sistema capitalista.

Sin duda, el libro brinda la posibilidad a aquellos lectores interesados en temas de desarrollo, sustentabilidad y respuestas comunitarias de encontrar en esta obra una colección de rigurosos análisis críticos que nos invitan a cuestionar y repensar otras formas de futuros posibles.

Datos bibliográficos

Barkin, D. (2018), *De la protesta a la propuesta. 50 años imaginando y construyendo el futuro*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Siglo XXI Editores.

Eduardo Luis Espinosa

i_a_e_l@hotmail.com

Universidad Autónoma

Metropolitana

México

Recibido: 06/11/2019

Aprobado: 07/02/2020

Rituales y ritmos. Una genealogía del significado musical en el Pacífico negro colombiano

de Michel Birenbaum Quintero

Estamos ante un libro virtuoso, que representa un aporte a los estudios afrolatinoamericanos. Explora esa combinación de luchas de derechos que se rehace de continuo en la construcción de la identidad negra, de la negritud, y de la musicalidad (ambas emparejadas- en el contexto del Pacífico Sur de Colombia, donde florece la música del *currulao*). Este libro del Profesor Michel Birenbaum Quintero (2019: 1)

examina este tipo de retroalimentación, interferencia y superposición entre las experiencias de diverso tipo con la música del *currulao* local –experiencias rituales, folklóricas, de música popular, creadoras de identidad y de recursos políticos- entre los habitantes negros de la costa del Pacífico sur de Colombia.

[examines this kind of feedback, interference, and overlap between the various experiences of local *currulao* music -as ritual, folklore, popular music, identity-make, and political resource- among the black inhabitants of Colombia's southern Pacific coast.]

El Pacífico Sur de Colombia o simplemente el **Pacífico colombiano** (como aquí a veces le llamamos para simplificar), es región que ha vivido acciones despojo de tierras, depredación del medio ambiente, pauperización social y violencia, fenómenos que han afectado notablemente a la población afrodescendiente que allí habita, la cual ha sido tratada como gente invisible dentro de la formación social colombiana. La cultura, y con ella el reconocimiento y construcción de la identidad afrodescendiente al mismo tiempo que la musicalidad ha impulsado han sido instrumentos para abogar por una mejora frente a tantos problemas. Sobre todo han promovido a que desde la nación colombiana se le dé una significación a esa región; que se incluya a los afrocolombianos de esa parte del país en el marco del multiculturalismo nacional. Desde aquí se ha logrado impulsar prácticas de la negritud para la afirmación económica, social y cultural con la corres-

pondiente garantía de derechos. En especial, a partir de la aprobación de la Ley 70, que garantiza la propiedad colectiva sobre la tierra para las comunidades negras, a ellas ya se les percibe a escala nacional como un grupo étnico a la vez que como un significativo segmento político.

La indagación del profesor Birenbaum Quintero nos muestra que la cultura no es una esencia o algo primordial. Múltiples experiencias que pueden definir un fenómeno cultural, de tal modo que su acercamiento a la música del currulao y en general a todo el mundo sonoro afrocolombiano ha requerido una flexibilidad metodológica. Su trabajo en etnomusicología ha combinado la aproximación histórica con la aproximación etnográfica. El entendimiento del estudio del fenómeno musical desde su producción hasta sus densas interpretaciones por parte de los sujetos que participan de la recepción y de la vida social de ese mundo de sonidos y poéticas. De igual modo esa indagación incorpora el conocimiento detallado de la geografía y el medio ambiente de la región investigada. El trabajo de campo es un extenso repertorio de interacciones con sujetos y ambientes de las esferas del sonido, el etnólogo está inmerso, involucrado, aprendiendo de los demás. Pero en su escritura antropológica va y viene desde esa inmersión hasta el delicado trabajo con las fuentes y la documentación del pasado, para, en una aproximación etnohistórica ir a la búsqueda de génesis de la negritud tan movable como la musicalidad. Esa combinación tan sutil y profunda de los enfoques también lleva a decir que estamos ante una obra virtuosa.

Estructura del libro

El libro inicia con una **Introducción** y consta de **cinco capítulos**. Los tres primeros contienen sus respectivas conclusiones. Al final aparecen unas conclusiones generales. Pero volviendo a las primeras páginas, nos encontramos en las seis hojas de los agradecimientos con un autor envuelto en profundos lazos de camaradería con la gente que lo recibió en Colombia y en los territorios del Pacífico. Él tiene una alta valoración de los músicos con los que realizó su trabajo de campo: *Quiero destacar a algunos de los músicos que fueron mis maestros principales y que continúan con mi crecimiento como músico y académico* [I want to single out some of the musicians who were my primary teachers and who continue to my growth as a musician and an academic alike] (p. xii). Al mismo tiempo a él se le ve componiendo su libro en el tejido de sus colegas, músicos y académicos –muchos de ellos conocedores de la música negra.

Después de los agradecimientos aparece el URL que la editorial ofrece con materiales para el lector: *El sitio incluye fotos, audio, video y recursos complementarios organizados para corresponder con los capítulos del libro* [The site includes photos, audio, video, and supplemental resources organized to correspond with the book's chapters] (p. xv).

Al final del libro, después de un generoso índice analítico (**Index**) están las referencias de las obras de otros autores con las que el autor sostuvo diálogos de crecimiento del conocimiento sobre la sociedad y la cultura afrodescendiente en el Hemisferio Occidental y en Colombia en especial.

Desarrollo

El **primer capítulo** del libro es *Las poéticas sonoras del Pacífico Negro del Sur* [The Sounded Poetics of the Black Southern Pacific]. Está ordenado de manera sincrónica. En sus 34 páginas, nosotros quedamos inmersos en un mundo de sonidos, poéticas sonoras y repertorios de prácticas musicales características de las culturas africanas en América, particularmente de la región del Pacífico colombiano. Ellas son modalidades rítmicas que han evolucionado históricamente, para formar parte de las movilizaciones de los afrodescendientes en sus luchas por sus libertades y derechos desde la sociedad esclavista hasta el presente. Por eso los capítulos siguientes se ordenan en una línea cronológica.

El **segundo capítulo**, *La música en las minas: cosmopolitas negros y práctica musical en el Pacífico sur en la época colonial* [Music in mines: Black Cosmopolitans and Musical Practice in the Colonial Southern Pacific] explora la poca información que puede arrojar el registro histórico acerca de una época anterior a 1871 (fin de la esclavitud en Colombia). Nos pone ante el friso de los variados sujetos de las prácticas musicales en la región estudiada. Se trata de un período donde no se habían construido las ideologías raciales y musicales que enmarcan la comprensión moderna de la musicalidad negra que se estableció en las Américas. Ese momento histórico el autor lo valora como muy importante para vislumbrar el pasado y el futuro de las narrativas de autenticidad negra del actual movimiento afrocolombiano en la luchas por sus derechos en la región.

En el tercer capítulo, *Modernidades y no modernidades en el la música negra del Pacífico* [Modernities and Nonmodernities in Black Pacific Music], a propósito de la cuestión de los orígenes, el autor, desde que anuncia esa parte de su obra, propone que es mejor replantear la pregunta de *cómo la música del Pacífico sur llegó a ser entendida como “negra”* (p. 22). Cree que es mejor colocar la musicalidad en el proceso mismo de consolidación de las nociones de negritud en la región. Esa posición permite entender la música inscrita en una condición étnica que no es estática y esencial. Más bien, se empezó a forjar en las interacciones sociales y las relaciones institucionales entre el siglo XIX y el siglo XX. Esas interacciones y relaciones han sido dinámicas y movibles. Se cuentan en esa sociogénesis la iglesia católica y las clases medias negras. Se trata de un proceso definido en relación con la modernidad, proceso en el que se genera la música popular y la música tradicional. La modernidad ha modelado la negritud y la musicalidad de manera relativa y dinámica, del mismo modo en que los actores negocian y contestan respecto a sus afiliaciones micropolíticas -un punto de tensión para los individuos al verse envueltos en el diario suceder del movimiento regional afrocolombiano-.

En el **cuarto capítulo**, *Raza, región, representatividad y el paradigma del folklore* [Race, Region, Representativity, and the Folklore Paradigm], entramos a un fenómeno que empieza a suceder a mediados del siglo XX, la entrada de las prácticas musicales del Pacífico negro en los paradigmas del folklore. Ese proceso ha sucedido de entonces a acá con el concurso de tendencias muy paradójicas. Son aquellas que van desde la unidad cultural de la nación, y que hacen invisible el legado afrodescendiente y sus problemáticas sociales en las tierras que dan al Pacífico. Hasta esas otras tendencias en las que concurre la capacidad de innovación local que exalta al terruño como parte sobresaliente en el país y en ese paisaje ensalza a la negritud como un patrimonio popular. Ese sentido exaltado constituye una perspectiva desde donde se quiere adquirir el potencial cívico necesario para hacer de la región un espacio para el reconocimiento de los afrodecendientes y su protección del flagelo de la violencia.

El **quinto capítulo**, *Entre la legibilidad y la alteridad: la música negra y la construcción de sí mismo en la era de la etnodiversidad* [Between Legibility and Alterity: Black Music and Self-Ma-

king in the Age of Ethnodiversity] nos coloca en las tres últimas décadas. Tal como ha sucedido en otros lugares de afrolatinoamérica, la música tradicional con un fuerte anclaje regional se ha revalorado en los contextos del accenso de los afrodescendientes a una democracia participativa para hacer valer sus derechos. En las tierras allende al Pacífico sur de Colombia, la música tradicional se le ha convertido en un factor clave de la identidad (dígase de la diferencia cultural) que mueve la movilización social afrocolombiana en esa área donde hay reivindicaciones de visibilidad, tierra y paz ubicadas entre las conquistas y las aspiraciones.

Los sujetos artísticos de la negritud, los activistas y los intelectuales han tenido la habilidad de desplegar una simbología que persuade de una identidad negra en Colombia. Esa simbología se ha afirmado con la ejecución continuada y organizada de prácticas culturales negras, una interpretación de la negritud en la que ha estado inscrita la musicalidad. Símbolo y práctica han sido persuasivos de una diferencia cultural negra, fragmentada en el contexto posterior al multiculturalismo constitucional declarado en 1991. Se abre, desde entonces, un multiculturalismo de estilo neoliberal, en el que se ramifican proyectos y programa diferentes en torno a la economía, el bienestar social, la actividad comunitaria y la gestión de gobierno.

Conclusiones

Se concluye que raza, espacio y música se les debe tomar en dos ejes. Uno el de la estabilidad que propicia el proceso que siguen de manera unificada la negritud y la musicalidad en formas y prácticas que reducen la complejidad y que parecen tener una continuidad ilimitada. Sin embargo, ese equilibrio se rompe en condiciones políticas y sociales -como las que se propiciaron después de 1991- para dar paso a la transformación. Se trata de un segundo eje que en la historia conlleva a la diversidad y la improvisación, trayendo otras reificaciones.

Datos bibliográficos

Birenbaum Quintero, M. (2019). *Rites, Rights & Rhythms. A Genealogy of Musical Meaning in Colombia's Black Pacific*. Nueva York: Oxford University Press.